

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR
SEDE ECUADOR

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO
MENCIÓN DERECHO TRIBUTARIO

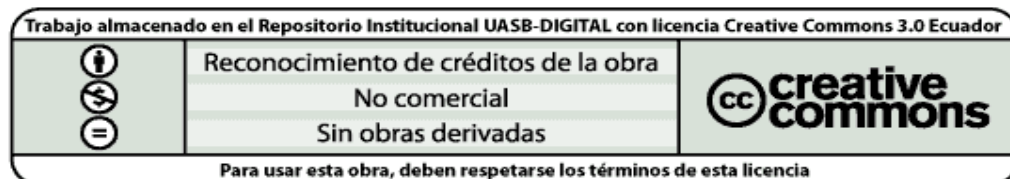
TEMA:

**"DE LOS PROYECTOS DE LEY ECONÓMICO URGENTE Y LA
MATERIA TRIBUTARIA EN EL ECUADOR"**

MARIA FERNANDA RACINES CORREDORES

QUITO-ECUADOR

2013



CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN DE TESIS

Yo, María Fernanda Racines Corredores, autora de la tesis intitulada ***"DE LOS PROYECTOS DE LEY ECONÓMICO URGENTE Y LA MATERIA TRIBUTARIA EN EL ECUADOR"*** mediante el presente documento dejo constancia de que la obra es de mi exclusiva autoría y producción, que la he elaborado para cumplir con uno de los requisitos previos para la obtención del título de magister en derecho mención derecho tributario en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

1. Cedo a la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, durante 36 meses a partir de mi graduación, pudiendo por lo tanto la Universidad, utilizar y usar esta obra por cualquier medio conocido o por conocer, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. Esta autorización incluye la reproducción total o parcial en los formatos virtual, electrónico, digital, óptico, como usos en red local y en internet.
2. Declaro que en caso de presentarse cualquier reclamación de parte de terceros respecto de los derechos de autor/a de la obra antes referida, yo asumiré toda responsabilidad frente a terceros y a la Universidad.
3. En esta fecha entrego a la Secretaría General, el ejemplar respectivo y sus anexos en formato impreso y digital o electrónico.

Fecha.

Firma:

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLIVAR

SEDE ECUADOR

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO

MENCIÓN DERECHO TRIBUTARIO

TEMA:

**"DE LOS PROYECTOS DE LEY ECONÓMICO URGENTE Y LA
MATERIA TRIBUTARIA EN EL ECUADOR"**

MARÍA FERNANDA RACINES CORREDORES

TUTORA:

DRA. EDDY DE LA GUERRA

QUITO-ECUADOR

2013

RESUMEN

Este trabajo investigativo a permitido a partir del análisis de las diversas posiciones de la doctrina representada por diferentes autores así como luego del breve recorrido realizado a través de la normativa histórica de nuestro país clarificar los principios de *reserva de ley*, de *legalidad* y su papel en la formación de las normas tributarias conforme a como han sido plasmados en el transcurrir de los años. Dentro de este recorrido histórico estudiar el proceso legislativo para la elaboración de las normas tanto aquellas calificadas con el carácter económico urgente como aquellas que no. Así también analizar como han sido y son concebidos y tramitados ambos tipos de proyectos de ley y la manera como fue y es utilizada la figura del decreto-ley por parte de quienes han ostentado la Presidencia de la República.

Con la finalidad de realizar una valoración de cómo ha evolucionado la calificación de urgencia en materia económica de proyectos de ley, en especial aquellos que en su contenido han estipulado regulaciones de carácter tributario y por cuanto nuestra legislación y academia no brinda mayores aportes sobre el tema, hemos acudido a autores españoles quienes nos han contribuido con la experiencia de su país sobre el estado de crisis, la extrafiscalidad y la delegación legislativa que en nuestra legislación se asimila a la urgencia y a los decretos-ley. Aterrizando lo investigado y aprendido en un análisis de los proyectos de ley calificados como económicos urgentes en los últimos años enfatizando en: Ley Reformativa a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno y Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado ambas con un contenido tributario y promulgadas mediante la figura de decreto-ley. Con la finalidad de determinar si para su creación se observaron los principios de reserva ley y de legalidad, así como con el trámite constitucional establecido para la vigencia de las leyes.

AGRADECIMIENTO

A quienes con su enseñar en las aulas fueron verdaderos maestros y maestras generosos
con sus conocimientos.

Al interés, contribución y apoyo permanente de Eddy de la Guerra.

A mis padres por darme las herramientas necesarias para conseguir mis sueños.

A mi esposo por su comprensión y apoyo.

A Dios por la bendición y responsabilidad a mí encomendada.

TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO I	8
NOCIONES INTRODUCTORIAS	8
1. Antecedentes	8
2. Análisis doctrinario	11
2.1. Definición y análisis de ley	11
3. Principio Democrático.....	15
4. Principio de reserva de ley	20
4.1. En el ámbito constitucional	22
4.2. En el ámbito tributario.....	23
5. Principio de legalidad.-	27
5.1. En el ámbito constitucional	30
5.2. En el ámbito tributario.....	32
6. Semejanzas y diferencias entre el principio de legalidad y de reserva de ley	34
6.1. Semejanzas.....	34
6.2. Diferencias	35
7. Conclusiones preliminares sobre los principios de reserva de ley y de legalidad.....	37
8. Vigencia, validez y jerarquía de las normas	40
9. Definición y análisis de decreto-ley	44
9.1. Importancia jerárquica del decreto-ley en el sistema de fuentes ecuatoriano	47
CAPÍTULO II	52
HISTORIA DE LOS PROYECTOS URGENTES	52
1. Breve Reseña Histórica	52
1.1. El decreto- ley en la Constitución de 1929.....	53
1.2. El decreto- ley en la Constitución de 1945.....	53
1.3. El decreto- ley en la Constitución de 1946.....	54
1.4. El decreto- ley en la Constitución de 1961.....	55
1.5. El decreto- ley en la Constitución de 1967.....	56
1.6. El decreto- ley en la Constitución de 1979.....	57
1.7. El decreto- ley en la Constitución de 1984.....	57
1.8. El decreto- ley en la Constitución de 1993.....	58
1.9. El decreto- ley en la Constitución de 1996.....	59

1.10.	El decreto- ley en la Constitución de 1998.....	60
1.11.	El decreto-ley en la Constitución del 2008	63
1.12.	Tratamiento de los proyectos urgentes en materia económica en el Reglamento Interno de la Función Legislativa	65
1.13.	Tratamiento de los proyectos urgentes en materia económica en el Mandato Constituyente No. 23.....	73
2.	Cuadro histórico de los proyectos de ley calificados con el carácter económico urgente en materia tributaria	80
3.	Breve repaso histórico de los proyectos de ley calificados con el carácter económico urgente en materia tributaria	82
4.	Estadísticas en los últimos dos años.....	91
CAPÍTULO III		95
PROCESO LEGISLATIVO.....		95
1.	Proyectos de ley en materia tributaria	96
2.	Trámite legislativo para la creación de normas	98
2.1.	Presentación y calificación de los proyectos de ley.-	103
2.2.	Informe para primer debate.-.....	108
2.3.	Informe para segundo debate.-	110
3.	Promulgación y publicación.....	112
4.	Trámite legislativo para proyectos calificados como económico urgente.....	114
4.1.	Primer debate	115
4.2.	Segundo debate	116
5.	Análisis de la naturaleza de los proyectos económicos urgentes	120
5.1.	Naturaleza económica de la materia tributaria	121
5.2.	La urgencia en materia tributaria	125
6.	Análisis de proyectos de ley promulgados como decreto-ley (régimen tributario interno)	130
7.	Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado	131
7.1.	Carácter económico de este proyecto.....	131
7.2.	La “urgencia” motivaciones de este proyecto	133
7.3.	Legitimidad del trámite y su aprobación.....	135
8.	Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno ..	138
8.1.	Carácter económico de este proyecto.....	138
8.2.	La “urgencia” motivaciones de este proyecto	138
8.3.	Legitimidad del trámite y su aprobación.....	140
9.	La extrafiscalidad como justificación de los proyectos económicos urgentes con contenido tributario.....	142

CONCLUSIONES	146
RECOMENDACIÓN.....	151
BIBLIOGRAFÍA.....	152
ANEXOS	156

CAPÍTULO I

NOCIONES INTRODUCTORIAS

Previo al análisis del tema que nos refiere el presente trabajo investigativo considero necesario enfocar los aspectos relacionados con el mismo, tales como la jerarquía de la ley dentro de las fuentes del derecho de la familia Romana-Germánica a la que pertenece nuestro sistema legal de acuerdo a criterios como el de René David¹, y establecer definiciones sobre los principios indispensables en la creación de normas entre ellos el principio de reserva de ley, de legalidad y democrático así como el poder tributario del Estado para instituir tributos, pasando por conceptos de varios autores destacados sobre *la ley*, su validez y vigencia. Profundizando en el análisis del *decreto ley* y su jerarquía dentro del sistema de fuentes del derecho ecuatoriano.

1. Antecedentes

Colocando como punto de partida el artículo 425 de la Constitución de la República, en el cual se establece a la misma Constitución como jerárquicamente superior, se puede denotar que el fundamento de nuestro derecho es la norma escrita e incluso las fuentes de menor jerarquía también se encuentran establecidas previamente de forma tangible con lo que se puede concluir que el derecho ecuatoriano es prioritariamente escrito y pertenece a la familia germánico-romana a pesar del desarrollo constante de otras fuentes del derecho como la jurisprudencia y el derecho indígena.

Conclusión fundamentada en lo manifestado por René David quien sostiene que “pareció triunfar en los países de la familia romano germánica la teoría positivista, para la

¹ Su concepción y la fuente exacta será citada más adelante.

cual la Ley debe ser la fuente exclusiva del Derecho”² adicionando que en nuestro país el derecho está materializado en normas, las que serán aplicables conforme al orden jerárquico establecido en el artículo 425 de la Constitución siempre que no contravengan las disposiciones constitucionales de acuerdo al artículo 424.

En la familia Romano-Germánica el sistema de fuentes está compuesto por: la ley, la costumbre, la doctrina y los principios superiores del derecho, conforme a una división efectuada por René David y citada en su obra, *Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos*.

Empecemos hablando sobre la ley; la cual es más que lo manifestado en nuestro artículo primero del Código Civil: “Una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Son leyes las normas generalmente obligatorias de interés común.”³ Se puede apreciar que se hace referencia a puntos esenciales como: a quién debe representar, quién la emite, es decir el legislador elegido por el soberano, forma en que debe ser expresada (por escrito y de manera previa) así como también la facultad de contener disposiciones que regulen la conducta de quienes integran la sociedad; por cuanto ésta es una definición adecuada para una norma legal, pero limitada doctrinariamente. Es menester buscar una definición más amplia, la cual nos permitirá clarificar de mejor manera lo que es la ley.

El mismo René David afirma que: “Las disposiciones de Derecho escrito que emanan del poder legislativo o de la Administración y que los juristas deberán interpretarla y aplicar, a fin de hallar la solución justa que corresponde a cada situación, se nos presentan en los países de la familia romano-germánica en un orden jerárquico”⁴ En esta definición se realiza una división de quienes puede emanar las normas, tanto del poder legislativo

²David René, *Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos*, Madrid, Biblioteca Jurídica Aguilar, 1969, p.80

³ El Inciso final fuera agregado en la codificación del Código Civil, (CODIFICACION 2005 – 010 R.O. 46-S, del 24-IV-2005) Constitución 1998.

⁴David René, *Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos*, p. 84

como de la Administración, entendida ésta conforme al artículo 141 de la Constitución de la República como responsabilidad de la Presidenta o Presidente de la República⁵. Hay que señalar que los anteriores son poderes de elección popular, es decir es el soberano quien los nombra para que los represente, mas no ambos son escogidos para legislar. En cuanto a la aplicación e interpretación no se encuentra establecida en nuestra legislación esa facultad de manera restrictiva para los juristas, sino se divide de acuerdo al numeral 6 del artículo 120 de la Constitución; el interpretar las leyes con carácter generalmente obligatorio es una atribución de la Asamblea Nacional⁶, adicionalmente en materia constitucional y de tratados de derechos humanos la Corte Constitucional⁷ es una instancia de interpretación. De las instituciones mencionadas, tan sólo en la última sus integrantes son estrictamente juristas pues de acuerdo a nuestra Constitución dentro los requisitos para ser Asambleísta no se establece ningún título o nivel académico⁸, mucho menos un perfil dentro de la rama del derecho, quienes aplican las normas son los jueces de acuerdo al artículo 172 de la Constitución pues son quienes administrarán justicia, a pesar de no estar entre sus competencias el interpretar las leyes al aplicarlas las interpretan de una manera no obligatoria.

⁵ Constitución de la República. Art. 141.- La Presidenta o Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe del Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública. La Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas

⁶“La voluntad popular encabezada por los legítimos representantes de los ciudadanos, dará pleno avance al ordenamiento superior” Carlos Felipe, Aroca Lara, *Principio de reserva de ley en materia tributaria: análisis normativo y jurisprudencial*, Universidad Externado de Colombia, 2005, pp.25.

⁷ Constitución de la República. Art. 436.- La Corte Constitucional ejercerá, además de las que le confiera la ley, las siguientes atribuciones:

1. Ser la máxima instancia de interpretación de la Constitución, de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano, a través de sus dictámenes y sentencias. Sus decisiones tendrán carácter vinculante [...]

⁸ Constitución de la República Art. 119.- Para ser asambleísta se requerirá tener nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido dieciocho años de edad al momento de la inscripción de la candidatura y estar en goce de los derechos políticos.

2. Análisis doctrinario

En el análisis doctrinario es conveniente partir desde la concepción misma de la definición de los términos decreto-ley y ley, desde el punto de vista de varios autores para con ese conocimiento poder abordar el capítulo final.

2.1. Definición y análisis de ley

Para Javier Hervada:

“Buscar la tutela y la providencia del Estado para nuestros asuntos particulares es hacer dejación de nuestra condición de personas libres, abogando por un colectivismo que despersonaliza. Las leyes, como el Estado y el gobierno, están para conseguir el bienestar general, la felicidad común o, si se prefiere, las condiciones sociales necesarias y convenientes para que los ciudadanos obtengan su desarrollo personal.”⁹

Desde la perspectiva del realismo jurídico la ley tiene un ámbito general, no busca satisfacer las necesidades de cada individuo de manera particular pues de esa forma no habría ley suficiente, más bien lo que se pretende es regular la conducta de modo general, apropiándose de las condiciones necesarias para que se desarrolle un conglomerado, así quien progresa es el grupo en su totalidad. Siendo esta una definición lógica y apegada a lo que ocurre en el mundo actual, es decir la existencia de leyes generales para regular conductas, cuando quienes conforman la sociedad actúan de acuerdo a los parámetros establecidos, sin transgredir las normas, se da pie a que la sociedad desarrolle de mejor manera en ámbitos comerciales, productivos y económicos.

Para René David:

“Las disposiciones de nuestras leyes no son mandatos caprichosos del soberano que deben ser ejecutadas literalmente, sino que nuestros códigos, comparables a compendios doctrinales, son en

⁹Javier Hervada, *¿Qué es el derecho?*, La moderna respuesta del realismo jurídico, Ediciones Universidad de Navarra S.A. 2da. Edición, España, 2008, p.139.

muchas ocasiones especies de cuadros en cuyo interior los juristas ejercen una actividad creadora en busca de soluciones justas”¹⁰.

Las leyes en nuestro país son emitidas por la Asamblea Nacional en ejercicio de sus atribuciones consagradas en la Constitución de la República, en ellas se puede observar la intención del legislador por solucionar conductas o problemas que aquejan a la sociedad, mismos que no siempre encuentran una solución con la sola emisión de la norma.

Para Javier Hervada:

“La ley regula y ordena relaciones entre hombre; es, pues una regla social o norma de la vida en sociedad [...] no se trata, simplemente, de una regla de conducta, cuyo incumplimiento produzca un rechazo social. [...] Una cosa es *el deber* propiamente dicho y otra la *conveniencia* de actuar conforme a las pautas de conducta habitualmente aceptadas en un medio social.”¹¹

En base a lo citado podemos recalcar que las normas y leyes que nos rigen guardan armonía con las normas de conducta instauradas a través de la costumbre teniendo como represalia a su no acatamiento el rechazo social, acción que permitía el mantenimiento de la armonía dentro del entorno social.

“El estado debe expedir las leyes que rijan la conducta entre los particulares, entre los particulares y el Estado y la actuación del Estado mismo”¹² Sergio de la Garza hace referencia a la competencia del Estado para expedir normas y la finalidad de las mismas en pro de la regulación de conductas, destacándose su concepción de que, el Estado no solo tiene la atribución de emitir leyes sino, que tiene el deber de hacerlo.

Para Ricardo Lobo Torres: “el Poder Ejecutivo asume mayor participación en la concretización de la normativa frente a la modificación del contorno de los principios de la

¹⁰David René, *Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos*, p. 81

¹¹Javier Hervada, *¿Qué es el derecho?*, pp. 112 y 114.

¹² Sergio de la Garza, *Derecho Financiero Mexicano*, Editorial Porrúa, México, 2006, p.207.

legalidad y de la tipicidad”¹³ Esta aseveración nos permite reconocer que dentro de lo que se entiende por ley, y el proceso para su creación se están produciendo modificaciones, tal es el caso de lo establecido en nuestra Constitución de la República en cuanto al otorgamiento al poder ejecutivo de facultades de “colegislador”¹⁴ y en casos extremos como el de los proyectos calificados como urgentes en materia económica, incluso la facultad de legislar mediante decreto-ley¹⁵, modificándose de esta manera lo que se entendía doctrinariamente desde sus inicios por principio de legalidad.

El mismo autor señala que para los alemanes el “principio del dominio de la Ley” otorga una preeminencia a la ley, al señalar “que la Ley formal ocupa el lugar superior en el ordenamiento infraconstitucional, limitado y vinculado a los actos de la Administración y el Poder Judicial” denominado como el subprincipio del primado de la Ley.¹⁶ Conforme lo previsto en el artículo 425 de la Constitución de la República, la ley ocupa el tercer lugar en el sistema jerarquizado de fuentes del derecho nacional, por encima de ella se encuentra los convenios y tratados internacionales y la Constitución que es la fuente primaria y de directa aplicación, sin embargo esta última para muchos autores debido a su contenido y manera de expedir es considerada una norma escrita con carácter de ley suprema, misma que rige el ordenamiento legal inferior con base a lo enunciado se podría decir que en nuestro país también se ha establecido el primado de la ley.

La creación de una norma debe cumplir ciertos requisitos y pasar por un proceso tanto para su presentación como proyecto de ley, como para su aprobación en la Asamblea Nacional y posterior sanción presidencial en lo que se refiere a las leyes en sentido formal

¹³ Ricardo Lobo Torres, *Legalidad Tributaria y Armonía entre los poderes del Estado* en Estudios de derecho tributario constitucional e internacional, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2005, p. 255.

¹⁴ Constitución de la República-Artículo 147 numeral 11.- “Participar con iniciativa legislativa en el proceso de formación de las leyes.”

¹⁵ Constitución de la República-Artículo 140 inciso final: “Cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la Presidenta o Presidente de la República lo promulgará como decreto-ley y ordenará su publicación en el Registro Oficial [...]”

¹⁶ Parafraseando a Ricardo Lobo Torres, *Legalidad Tributaria y Armonía entre los poderes del Estado*, p. 255

dentro de las funciones del Estado en nuestro país tenemos a la Función Legislativa, sus atribuciones se detallan en el capítulo segundo de la Constitución de la República así también quien la ejerce, quienes pueden integrarla, división de su conformación organizacional, el procedimiento legislativo y más pormenores. De las principales atribuciones de la Asamblea Nacional podemos citar el ser quien ejerce la Función Legislativa, lo que conlleva a la facultad de emitir codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio, es decir es quien crea las leyes, sin embargo la iniciativa entendida como la potestad de presentar proyectos de ley, no es sólo de quienes conforman la Asamblea pues la misma Constitución en el artículo 134¹⁷ establece que otras funciones y entidades del Estado como: el Presidente de la República, los ciudadanos en número determinado, la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, entre otras, pueden tener iniciativa para la presentación de proyectos de ley.

La Constitución se refiere desde el artículo 132 hasta el artículo 140 al procedimiento legislativo, que abarca la presentación de un proyecto de ley, el trámite que deberá seguirse para su calificación, tratamiento, debate y posterior aprobación se evidencian claramente plasmados principios doctrinarios como el de reserva de ley y de legalidad.

Para autores como Pérez de Ayala “el principio de legalidad, el principio de reserva de ley significa que determinadas materias o aspectos jurídicos han de ser regulados por

¹⁷ Constitución de la República, Art. 134.- La iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde:

1. A las asambleístas y los asambleístas, con el apoyo de una bancada legislativa o de al menos el cinco por ciento de los miembros de la Asamblea Nacional.
2. A la Presidenta o Presidente de la República.
3. A las otras funciones del Estado en los ámbitos de su competencia.
4. A la Corte Constitucional, Procuraduría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública en las materias que les corresponda de acuerdo con sus atribuciones.
5. A las ciudadanas y los ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos y a las organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de por lo menos el cero punto veinticinco por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral nacional.
6. Quienes presenten proyectos de ley de acuerdo con estas disposiciones podrán participar en su debate, personalmente o por medio de sus delegados.

una ley formal.”¹⁸ Es decir concuerda con el artículo 132 de la Constitución de la República respecto a que ciertos temas deben ser regulados mediante ley, señalando de manera expresa las materias (principio de reserva de ley) y el proceso que se requerirá cumplir al expedir una ley así como el órgano competente también se encuentra regulado de manera constitucional (principio de legalidad), existe una simbiosis entre ambos principios que, con conceptos de otros autores se podrá explicar de manera clara. Señalando como antecedente el principio democrático que por ser el fundamento para la conformación del órgano legislativo es primordial empezar con su estudio.

3. Principio Democrático

Para abordar con mayor precisión lo que se considera como principio democrático, es conveniente realizar un breve recorrido por lo que es la democracia, y que mejor instrumento para hacerlo que: la Declaración universal sobre la democracia, en la cual se establece:

“La democracia es un ideal universalmente reconocido y un objetivo basado en valores comunes compartidos por los pueblos que componen la comunidad mundial, cualesquiera sean sus diferencias culturales, políticas, sociales y económicas. Así pues es un derecho fundamental del ciudadano, que debe ejercer en condiciones de libertad, igualdad, transparencia y responsabilidad, con el debido respeto a la pluralidad de opiniones y en interés de la comunidad.”¹⁹

Entendiéndose a la democracia en su deber ser como el triunfo de los valores del conglomerado sin distingo de sus diferencias en pro del ejercicio de derechos y el goce del

¹⁸ Pérez de Ayala, en su obra *Derecho Tributario*, Edit. Derecho Financiero, 1968, pag.79, Precisa que la doctrina moderna distingue dentro del principio de reserva de ley dos modalidades: a) En primer lugar, la modalidad de reserva de acto legislativo primario, que consiste en que se exige ley, no para regular en su totalidad los elementos fundamentales del tributo, sino tan sólo para crearlo. b) Existe después el principio de reserva de ley propiamente dicho, para regular toda una materia determinada. Citado por Ignacio Blanco Ramos, *Derecho Tributario parte general y legislación española*, Editorial Ariel, México, 1976, pp.32.

¹⁹ Unión Interparlamentaria, *Democracia: Principios y Realización*, Ginebra-Suiza, 1998, p. IV.

respeto a las particularidades. Con la finalidad de enriquecer la concepción citada, es menester mencionar la “Carta de París para una Nueva Europa” la cual contiene algunos elementos constitutivos de ésta, contemplados de manera clara en:

“Derechos humanos, democracia e imperio de la ley

Nos comprometemos a construir, consolidar y fortalecer la democracia como único sistema de gobierno de nuestros países. Para ello respetaremos los siguientes principios:

[...] El gobierno democrático se basa en la voluntad del pueblo, expresada regularmente por medio de elecciones libres y justas. En la base de la democracia se halla el respeto a la persona humana y al imperio de la ley. [...]La democracia, con su carácter representativo y pluralista, incluye la responsabilidad hacia los electores y la obligación de las autoridades públicas de cumplir la ley [...]”²⁰

Como es de notar ya se hace referencia a los mecanismos que se deben utilizar para conseguir el establecimiento de una democracia entre ellos es de resaltar el respeto a la ley y la representatividad. Ambos elementos son de vital importancia para éste trabajo investigativo, empezaremos hablando de la representatividad como la señaló John Adams al referirse a ella: “La asamblea debería ser, en miniatura, el retrato exacto del pueblo entero. Debería pensar, sentir, razonar y actuar como él”²¹ Lo cual acarrea como lógica que un conglomerado elegirá a legisladores con quienes se crean o sientan identificados, para a través de ellos estar plenamente representados sus intereses, bajo esta forma de entender el principio, el órgano legislativo no se encuentra compuesto por los juristas más capaces o los profesionales más destacados en diferentes ramas, sino por una o un representante de cada una de las partes de los diversos sectores políticos, económicos, culturales y sociales de la que está conformado un determinado Estado. Otra forma de entender el principio de representatividad, es la representación virtual, siendo ésta en la que, quienes son elegidos

²⁰ Unión Interparlamentaria, *Democracia: Principios y Realización*, Ginebra-Suiza, 1998, p. 10.

²¹ Dominique Schnapper, *La democracia providencial- Ensayo sobre la igualdad contemporánea*, HomoSapiens Ediciones, Santa Fe-Argentina, 2004, p. 179.

no son el espejo del elector sino los que a su criterio son los más capaces y aptos para efectuar los cambios necesarios para el bienestar del conglomerado.²²

Para José Ruiz Valero la democracia es:

“Un conjunto de reglas y procedimientos que promueven y garantizan la más amplia participación ciudadana con carácter igualitario, en la toma de decisiones colectivas con las que intentan resolver demandas y conflictos sociales. [...]”²³

Se recalca que la democracia debe estar acompañada de un papel activo de la ciudadanía, como ya se mencionó en las concepciones anteriores, y ésta participación tendrá que ser igualitaria en pro del avance de la sociedad y quienes la conforman.

Para finalizar esta especie de introducción es importante señalar los principios básicos de la democracia que “son dos: el pueblo tiene derecho a una influencia controladora sobre las decisiones públicas y quienes las adoptan, y el pueblo debe ser tratado con respeto y dignidad iguales en el contexto de tales decisiones. Podemos denominarlos de forma resumida los principios del control popular e igualdad política, respectivamente.”²⁴ El primero de los principios es ejercido mediante la elección tanto de Presidente como de legisladores pues son ellos quienes adoptan decisiones públicas; el segundo principio de la democracia está dado en función de la igualdad, entendida en la actualidad en todos sus ámbitos tanto de índole racial, económico como de género.

El principio democrático “forma parte de nuestro patrimonio cultural irrenunciable el valor sagrado de la libertad, y ha logrado por fortuna el constitucionalismo moderno

²² Parafraseando a Dominique Schnapper, *La democracia providencial- Ensayo sobre la igualdad contemporánea*, p. 179.

²³ José Ruiz Valerio, Estado de derecho: el principio democrático vs. El control jurisdiccional en América Latina, en Pedro Torres Estrada, comp., *Neoconstitucionalismo y Estado de Derecho*, Editorial Limusa, México, 2006, p. 187.

²⁴ Unión Interparlamentaria, *Democracia: Principios y Realización*, p. 23.

establecer sofisticados y útiles mecanismos en su defensa”²⁵. El porqué del valor histórico de éste principio esta dado en función que, para su presencia se requirió de un régimen democrático y como es de conocimiento general la democracia no se pudo establecer de un momento a otro, así tampoco el derecho al sufragio que es considerada la máxima expresión de la soberanía popular lo que ocasionó que existan tensiones entre el principio monárquico y el principio democrático en especial en Europa, donde para llegar a lo que hoy conocemos como su forma de gobierno hubo de por medio confrontaciones.²⁶

El principio democrático, “da fundamento doctrinario a la interpretación constitucional y establece las bases de una sólida constitucionalidad [...] lo cual constituye un parámetro orientador en cuanto a la labor interpretativa del juez constitucional, facilitando así, su tarea de precisar el sentido constitucionalmente adecuado a las palabras pero eso sí con límites.”²⁷ Basados en ésta definición este principio es el soporte para que los jueces constitucionales puedan interpretar el texto constitucional, a su vez es el principio general del ordenamiento jurídico que en nuestra Constitución está establecido de manera expresa en el artículo 427²⁸ tiene límites y requerimientos, entre ellos que “la interpretación constitucional requiere argumentación y motivaciones jurídicas, concretización conforme al ordenamiento y no sustitución del legislador” o a su vez la “existencia de una verdadera teoría de la constitución; y respeto al límite infranqueable dado por el principio democrático”²⁹. Con lo cual podemos entender que el principio democrático tiene relación

²⁵ Pedro de Vega García, Mundialización y derecho constitucional: la crisis del principio democrático en el constitucionalismo actual, en Miguel Carbonell y Rodolfo Vázquez, comp., *Estado Constitucional y Globalización*, Editorial Porrúa, México, 2001, p.196.

²⁶ Parafraseando ibídem, pp. 201 y 202.

²⁷ Sebastián González Andrade, Interpretando las palabras constitucionales y su límite en el principio democrático en *Perspectivas Constitucionales*, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador, 2011, p.11.

²⁸ **Art. 427.-** Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente, y de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional.

²⁹ Sebastián González Andrade, Interpretando las palabras constitucionales y su límite en el principio democrático en *Perspectivas Constitucionales*, p.12.

con la democracia, y en especial con una de sus formas de expresión, la voluntad del pueblo de elegir a quienes elaborarán las leyes, así como también a quienes a su nombre construyeron la Constitución misma que sirve de base para el resto de cuerpos normativos, y que en el caso de no estar clara algunas de sus disposiciones debe ser sometida a un control lo que “no implica desconocer la voluntad general y su soberanía sino, por el contrario, maximizarla, ya que esto implica ratificar la superioridad de la constitución, es decir, el documento que con mayor fuerza materializa la soberanía popular.”³⁰ Por cuanto lo que se pretenderá con la interpretación es clarificar el deseo del mandante que no puede ser plasmado en la constitución de la manera deseada por parte de los legisladores constituyentes, dicho en otras palabras: “el principio democrático asegura una verdadera tarea interpretativa, encaminada a respetar el contenido material del principio constitucional interpretado³¹” y es “la autoridad del pueblo frente a la autoridad del gobernante.”³²

Respecto de lo señalado sobre el principio democrático a parte de su clara relación con la instauración, significado y fundamento de la democracia es importante recalcar que su presencia en un Estado democrático es importante y necesaria, sin perder de vista la necesidad de regular su ámbito de acción en lo referente a la interpretación de la Constitución que debe estar establecida de manera clara con la finalidad de evitar excesos y para lograr clarificar el verdadero sentido de los principios en ella plasmados por parte de los representantes del soberano.

³⁰ José Ruiz Valerio, Estado de derecho: el principio democrático vs. El control jurisdiccional en América Latina, en Pedro Torres Estrada, comp., *Neoconstitucionalismo y Estado de Derecho*, p. 205.

³¹ Sebastián González Andrade, *Interpretando las palabras constitucionales y su límite en el principio democrático en Perspectivas Constitucionales*, p.16.

³² Pedro de Vega García, Mundialización y derecho constitucional: la crisis del principio democrático en el constitucionalismo actual, en Miguel Carbonell y Rodolfo Vázquez, comp., *Estado Constitucional y Globalización*, p. 203.

En el ámbito tributario en base a lo señalado se podría acotar que el principio democrático está dado en función de la manera en la que está establecida en la Constitución la creación e imposición de tributos en el artículo 301, al referirse que debe efectuarse mediante acto normativo de órgano competente y por iniciativa de la función ejecutiva, ésta vendría a ser la regla general del principio democrático en materia tributaria, sin embargo el artículo 140 de la misma Constitución establece una salvedad, no de manera específica para la creación de tributos más sí para la creación de normas que a la postre son el instrumento mediante el cual se efectúa y por ende es aplicable dicha excepción, que consagra que el ejecutivo mediante decreto-ley tiene la facultad de legislar en el caso concreto que el órgano legislativo en el plazo de 30 días no hubiese aprobado, modificado o negado un proyecto de ley calificado por quien ejerza la presidencia de la República como urgente en materia económica. Es decir con esta salvedad se deja la puerta abierta para que se pueda imponer o derogar un tributo mediante un decreto-ley sancionado por órgano distinto a la Asamblea Nacional como se establece en el artículo 301, sin embargo no inconstitucional por estar así determinado en el artículo 140, por ende no atentaría contra el principio democrático al estar expresamente establecida la salvedad en la Constitución aplicándose al tenor literal de lo en ella determinado sin atentar contra la voluntad del constituyente.

4. Principio de reserva de ley

Para autores como Carlos Felipe Aroca:

“Las reservas de ley son mandatos constitucionales expresos, por medio de los cuales se establece que la regulación de cierto ámbito esencial de la vida en comunidad, o de la realidad social, ésta en cabeza exclusiva del órgano colegiado encargado de producir las leyes-entiéndase leyes de carácter formal [...] surgieron para evitar que algunas materias de cardinal importancia fueran manejadas por

el poder ejecutivo, por los funcionarios de la administración-o, en su momento, por la autoridad monárquica [...]”³³

Se puede entender que el principio de reserva de ley se encuentra consagrado en las constituciones de cada Estado, con la finalidad de evitar que los otros poderes puedan legislar, no sólo por la división de funciones, o atribuciones de cada función, lo cual no cabe duda, sino por procurar que las leyes contengan aportes de todos los sectores y que su aplicación no perjudique segmentos sociales, quien mejor para hacer lo descrito que el poder legislativo puesto que en él, se conjugan diferentes tendencias e ideologías y representa a variados segmentos sociales. A lo que se suma la voluntad de quienes votaron por ellos para que sean estos quienes elaboren las leyes.

Carlos Felipe Aroca en otras palabras:

“podríamos decir que bajo el principio democrático representativo estaríamos hablando de una reserva del Parlamento o del Congreso, ya que lo que se hace es ordenar al cuerpo legislativo que regule con leyes formales una determinada materia o área, de esta manera se evita toda posibilidad que dichos asuntos sean regulados por norma diferente a la legal; en concreto, se proscribe la facultad administrativa de regular determinada materia.”³⁴

Más adelante el mismo autor expresa que: “la cláusula de reserva de ley atiende al desarrollo del principio de división de poderes unido a la necesidad de que el derecho, además de ser legal sea legítimo, es allí donde se conjugan en una especie de simbiosis ambos principios. (legalidad y reserva de ley)” Con lo que se puede ratificar que el principio de reserva de ley viene dado en función de materias específicas y debe ser ejercido por el órgano legislativo. Quizá un poco redundante pero con un aspecto adicional de exclusividad encontramos el siguiente concepto: “La cláusula de reserva de ley identifica constitucionalmente asuntos que deben ser de exclusiva competencia del

³³ Carlos Felipe, Aroca Lara, *Principio de reserva de ley en materia tributaria: análisis normativo y jurisprudencial*, Universidad Externado de Colombia, 2005, pp.16.

³⁴ *Ibíd.*, p.17.

legislador ordinario y frente a los cuales le está prohibido conceder facultades extraordinarias.”³⁵

En este mismo sentido Pérez de Ayala señala que: “el fundamento moderno del principio es la teoría de la división de poderes, según la cual el establecimiento en la ley del tributo, ha de hacerlo, naturalmente, el Poder Legislativo (4). Al ejecutivo, como su nombre indica, solo corresponde ejecutar lo que la ley dice [...]” La nota al pie desarrolla de manera más profunda lo enunciado manifestando que: “Bien es verdad que la conexión de los principios de reserva de ley tributaria y de legalidad administrativa con la doctrina de la división de poderes ha de entenderse hoy muy matizada y mucho más flexible que en la filosofía política que surge de las ideas de LOCKE y MONTESQUIEU. Vid., *supra*, lección 2ª y las conclusiones que allí se establecen acerca de la moderna atenuación, pero esencial validez, de la conexión entre la división de poderes y los principio citados.”³⁶

Tanto el principio de legalidad como el de reserva de ley en el establecimiento de tributos según el autor tienen relación con la división de poderes, pues es el legislativo quien emite la norma y el ejecutivo a través de la administración tributaria realiza el recaudo, siempre que se conserve esta división y no pretenda uno u otro ir más allá de lo que sus facultades lo permiten.

4.1. En el ámbito constitucional

Luego de haber analizado definiciones de varios autores en relación al principio de reserva de ley es necesario cotejarlo con nuestra legislación por ello es preciso realizar un breve análisis de, cómo estaba establecido este principio en la Constitución expedida en el

³⁵ *Ibíd*em, p.20.

³⁶ José Luis Pérez de Ayala y Eusebio González, *Curso de Derecho Tributario*, tomo II, 6.ª edición, Editorial de financiero, Madrid-España, 1991, p.55.

año 1998 y como está contemplado en la Constitución del 2008 con la finalidad de poder determinar su evolución.

Constitución Política de la República del Ecuador 1998

“Art. 141.- Se requerirá de la expedición de una ley para las materias siguientes:

[...]

3.- Crear, modificar o suprimir tributos, sin perjuicio de las atribuciones que la Constitución confiere a los organismos del régimen seccional autónomo.”

Nuestra Constitución de 1998 consagraba la necesidad de una ley para la regulación de temas tributarios, concordantemente con el principio de reserva de ley.

Constitución de la República 2008

“Art. 132.- La Asamblea Nacional aprobará como leyes las normas generales de interés común. Las atribuciones de la Asamblea Nacional que no requieran de la expedición de una ley se ejercerán a través de acuerdos o resoluciones. Se requerirá de ley en los siguientes casos:

[...]

3. Crear, modificar o suprimir tributos, sin menoscabo de las atribuciones que la Constitución confiere a los gobiernos autónomos descentralizados.”

En la Constitución del 2008, se señala que el cuerpo colegiado que deberá emitir las leyes es la Asamblea Nacional (legalidad), y concuerda con la Constitución de 1998 en que es necesario de una ley para la creación, modificación o supresión de tributos, imponiéndose de esta manera constitucionalmente el principio de reserva de ley en el ámbito tributario.

4.2. En el ámbito tributario

La potestad del Estado de imponer tributos a los particulares se podría decir que data desde siempre, no tiene un nacimiento preciso a no ser que de manera general se mencione al nacimiento de la propiedad privada y estatal cuando el hombre se vuelve

sedentario, por cuanto en la historia constan relatos como que, en las guerras los perdedores debían pagar tributos a los vencedores, ya mas adelante de la historia los súbditos pagaban tributos a la corona, y con los montos recaudados se solventaban los gastos de las guerras y de la vida de los monarcas. También en la época del latifundio se debía pagar para poder cultivar las tierras, similitud a lo largo de las diferentes etapas de nuestra civilización. En tiempos actuales los tributos aun se utilizan para solventar los gastos que debe hacer el Estado, claro está que el destino de lo recaudado ya no es para guerras sino más bien para la construcción o dotación de servicios básicos, educación, salud, seguridad, solventar el gasto estatal tanto en salarios a funcionarios públicos como en bonos, carreteras entre otros.

Para Ruiz Almendral Violeta:

“El principio de reserva de ley es un principio tradicional en materia tributaria, cuyo origen se remonta al propio nacimiento del tributo como instrumento de financiación de las cargas públicas. La clásica máxima del parlamentarismo inglés *no taxation with out representation* constituye la garantía fundamental de la autoimposición que, si bien con distinto significado en sus orígenes, prevalece hasta nuestros días”³⁷

Es correcto resaltar la similitud de criterios de la autora con el contenido de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, citada anteriormente, respecto al principio de reserva de ley; pues ambos criterios concuerdan en que, la reserva de ley es una autoimposición establecida en el texto constitucional en nuestro caso que, garantiza la limitación para el nacimiento del tributo protegiendo los derechos de los contribuyentes.

La misma autora manifiesta que “las reservas de ley son las regulaciones de cierto ámbito esencial de la vida en comunidad, o de la realidad social, está en cabeza exclusiva del órgano colegiado encargado de producir las leyes-entiéndase leyes de carácter formal

³⁷ Violeta Ruiz Almendral, *Finanzas Públicas y Constitución*, Corporación Editorial Nacional, Quito, 2004, p.126.

[...]”.³⁸ Concluyéndose de lo citado que por la importancia de determinadas materias el poder legislativo en nuestro caso la Asamblea Nacional debe emitir leyes para regular las materias establecidas en el artículo 132³⁹ de la Constitución de la República, por ejemplo para tipificar infracciones, crear tributos, regular el ejercicio de los derechos y garantías entre otros.

José Vicente Troya al referirse a la ley y al principio de legalidad expresa que dentro de éste se encuentra “el principio de reserva de ley que exige, de modo general, de tal instrumento, para la creación, supresión y modificación de tributos y para la modulación de sus elementos esenciales.”⁴⁰ Con lo que podemos concluir que la reserva de ley es utilizada como instrumento legal acordado para regular temas determinados entre éstos los tributos, precisamente para evitar que mediante otros actos normativos de menor jerarquía sea implantada una carga tributaria excesiva a los contribuyentes. De manera concordante se pronunció nuestro Tribunal Constitucional, en sentencia (STC-19-1987) “la reserva de ley se configura como una garantía de autoimposición de la comunidad sobre sí misma y, en última instancia, como una garantía de la libertad patrimonial y personal del ciudadano.”

En cuanto a la forma en que actualmente está establecido éste principio en lo que a proyectos de ley calificados como urgentes en materia económica se refiere, es decir a la posibilidad de que sean promulgados vía decreto-ley para José Vicente Troya:

“Se constata una tendencia a flexibilizar el principio de reserva de ley mediante la concesión al ejecutivo de la potestad tributaria”⁴¹. [...] Cabe aseverar que gran parte de la legislación tributaria de

³⁸ Carlos Felipe Aroca Lara, *Principio de reserva de ley en materia tributaria: análisis normativo y jurisprudencial*, p.16.

³⁹ Ver Constitución de la República, Art. 132.

⁴⁰ [José Vicente Troya, Control de las leyes tributarias y los efectos de su declaración de validez, 2006, en http://uasb.edu.ec/bitstream/10644/1508/1/RF-06-TC-Troya.pdf](http://uasb.edu.ec/bitstream/10644/1508/1/RF-06-TC-Troya.pdf) - 14-08-2012

⁴¹ Ramón Valdés Costa, *Curso de Derecho Tributario*, Tercera Edición. TEMIS, Bogotá, 2001, p. 249 y siguientes. Citado por José Vicente Troya, en su ensayo “Las fuentes del derecho tributario en Ecuador, según la Constitución de 2008” p.9.

entonces, en forma por demás amplia y generosa, fue expedida a través de decretos leyes de emergencia y que en muy pocos casos fueron revocados o modificados por el Congreso. Los decretos económicos urgentes que puede expedir el Presidente de la República a la presente, tienen una naturaleza diferente, rigen ante la falta de acción de la Asamblea.^{42,}

Con lo que se refuerza la teoría que el decreto-ley no es más que la facultad de legislar del ejecutivo a falta de cumplimiento del plazo otorgado al órgano legislativo, sin necesidad que con ello se violente el principio de reserva de ley, entre otros aspectos por tener en el orden jerárquico del sistema de fuentes de nuestro país como se verá más adelante, la misma jerarquía.

Código Tributario

Adentrándonos en la materia de estudio del presente trabajo investigativo, es oportuno señalar como se encuentra establecido en la norma tributaria este principio:

“Artículo 4 Reserva de Ley.- Las leyes tributarias determinarán el objeto imponible, los sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecerla, las exenciones y deducciones; los reclamos y demás materias reservadas a la ley que deban concederse conforme a este Código.”

Es decir el Código Tributario guarda armonía con la Constitución al señalar que la creación de un tributo se debe efectuar por medio de ley sin embargo, el primero profundiza al indicar los elementos esenciales que debe contener un artículo para crear un tributo. A diferencia de la Constitución hace mención a las exenciones, que vendría a ser la dispensa legal del pago de la obligación tributaria; deducciones que son aquellos gastos restados de la base imponible en el momento de calcular el monto a pagar de un tributo, en cuanto a los recursos referidos en el artículo 4 de la norma tributaria se podría decir que están ubicados dentro del numeral primero del artículo 132 de la Constitución de la República al ser el acceso a la justicia parte de las garantías constitucionales.

⁴² José Vicente Troya, ensayo sobre “Las fuentes del derecho tributario en Ecuador, según la Constitución de 2008” p.9

Adicionalmente en la redacción del artículo 4 del Código Tributario se establece que la cuantía del tributo debe determinarse por ley lo que evita un eventual abuso por parte de la Administración Tributaria en el caso de querer aumentar el monto del recaudo, proporcionando así garantías de imparcialidad y representación popular en la formación de la norma.

Particularidades que son exigidas no sólo por nuestra legislación, sino por el derecho español por ejemplo:

“En nuestro Derecho para poder exigir un tributo, se requiere que previamente haya sido creado dicho tributo por una ley y, adicionalmente, que en ésta sean definidos al menos, el hecho imponible y los sujetos activo y pasivo del tributo en cuestión, siendo suficiente, respecto al resto de elementos formales (formales o de carácter cuantitativo), que la ley precise los criterios fundamentales y los límites necesarios para evitar, de un lado, toda posible discrecionalidad de la Administración al regular los citados elementos, y favorecer, de otro, la exacta determinación de la prestación impuesta al sujeto pasivo (sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de noviembre 1981).”⁴³

En base a lo citado, se resalta la razón de ser del artículo 4 de nuestro Código Tributario, pues al detallar los elementos que debe el artículo que estando contenido en una ley cree tributos se evita el escenario señalado en lo transcrito, es decir un posible abuso de la Administración Tributaria, que en el caso más extremo ocasionaría atentar contra principios como la propiedad privada o la no confiscación.

5. Principio de legalidad.-

Para Ricardo Lobo Torres “la legalidad tributaria no se encuentra solitaria entre los principios constitucionales, ni siquiera vive en permanente colisión con otros principios,

⁴³ Eusebio González y Ernesto Lejeune, *Derecho Tributario*, 3ª edición, Plaza Universitaria Ediciones, Salmaca-España, 2003, p.47

sino que se coloca en un juego de ponderación con la capacidad contributiva y con otros principios vinculados a la justicia, como el costo y beneficio y la solidaridad del grupo.”⁴⁴

El principio de legalidad en materia tributaria, puede estar presente de manera concomitante con otros principios que se relacionan con el mismo tales como el principio de capacidad contributiva, o la no confiscatoriedad; por cuanto el principio de legalidad al igual que el resto de principios de carácter constitucional por sí solo no puede existir, pues para su cumplimiento se requiere de la presencia de otros principios, mismos que se entienden contenidos en él, por ejemplo: el principio de proporcionalidad, igualdad, generalidad entre otros. Como se verá a continuación el principio de legalidad conlleva el cumplimiento de requisitos varios, entre ellos la inclusión y respeto de principios básicos del derecho tributario establecidos en nuestra legislación constitucional.

Carlos Felipe Aroca Lara manifiesta que el papel del principio de reserva de ley, está dado en función de:

“Su posición central en la configuración del Estado de derecho como principio rector del ejercicio del poder y del uso de las facultades, tanto para legislar-definir lo permitido y lo prohibido-como para establecer las sanciones y las condiciones de su imposición, hacen del **principio de legalidad** una institución jurídica compleja conforme a la variedad de asuntos que adquieren relevancia jurídica y a la multiplicidad de formas de control que genera la institucionalidad.”⁴⁵

En el país hasta el 2008 el marco constitucional reconocía al Ecuador como un Estado de derecho a partir de la aprobación de la Constitución vigente supera este concepto y lo amplía a un “Estado de Derechos y Justicia” lo que implica que la normativa constitucional no solamente declara los derechos sustanciales de los ecuatorianos sino que implica que los derechos puedan ser ejercidos directamente por los ciudadanos sin requerir

⁴⁴Ricardo Lobo Torres, *Legalidad Tributaria y Armonía entre los poderes del Estado* en Estudios de derecho tributario constitucional e internacional, p. 249.

⁴⁵ Carlos Felipe Aroca Lara, *Principio de reserva de ley en materia tributaria: análisis normativo y jurisprudencial*, p.19. (El énfasis es añadido)

de formalidades y con el imperio de la justicia. Dicho en otras palabras: nuestro Estado Constitucional de Derechos y Justicia no deja de ser Estado de Derecho, presidido por la norma fundamental, incondicional y suprema.⁴⁶ Es decir el principio de legalidad en un Estado de derecho es utilizado para que tanto las facultades como las atribuciones de cada una de las funciones del Estado sean ejercidas con base a parámetros de control, distribución de potestades, procedimientos preestablecidos, en un marco de respeto de la división y distribuciones de funciones otorgada a cada uno dentro de la organización estatal.

Para Carlos Felipe Aroca:

“La consagración constitucional del principio de legalidad se relaciona con dos aspectos básicos y fundamentales del Estado de derecho: el primero está determinado por el principio de división de poderes, en el que el legislador ostenta la condición de representante de la sociedad como foro político al que concurren las diferentes fuerzas sociales para el debate y definición de las leyes que han de regir a la comunidad. Y el otro, define con claridad la relación que existe entre el individuo y el Estado, al prescribir que el uso del poder de coerción será legítimo, solamente si está previamente autorizado por la ley. Nadie podrá ser juzgado sino según las leyes preexistentes sobre el acto que se le imputa.”⁴⁷

En esta definición el autor ya desarrolla la premisa de que el Estado regula el accionar de la sociedad mediante normas que son implantadas con la finalidad de evitar conductas que dentro de una convivencia puedan afectar la armonía colectiva, siempre que se establezca con anticipación y mediante ley lo que no está permitido y el castigo que se impondrá en el caso de cometer algunas de las acciones u omisiones detalladas en los cuerpos legales.

El principio de legalidad es entendido de muchas maneras de acuerdo a la materia de la cual se esté tratando, por ejemplo la rama penal establece como un principio: *Nulla*

⁴⁶ César Montaña Galarza, *El deber de pagar tributos y los principios de legalidad y de reserva de ley en la Constitución del Ecuador de 2008*. <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/3130/1/05-TC-Monta%c3%b1o.pdf>, 25-04-2013.

⁴⁷ Carlos Felipe Aroca Lara. *Principio de Reserva de ley en materia tributaria: Análisis normativo y jurisprudencial*, p. 19

poena sine lege, que es una frase latina, que significa "No hay pena sin ley", utilizada para expresar que no puede sancionarse una conducta si ley no la califica como delito. Una premisa más desarrollada dentro del mismo derecho penal es: *nullum crimen sine previa lege poenale scripta et stricta* (no hay delito sin previa ley penal escrita y estricta) mediante el cual se establece como la única fuente directa, inmediata y suficiente la ley es decir la materia penal es normada conforme al principio de reserva de ley.

Finamente podemos decir que desde un punto de vista formal el principio de legalidad atribuye al parlamento la instauración de tributos.

Para Sacha Calmo Navarro Coelho:

“Los principios jurídicos de la legalidad, formal o material (tipicidad), anterioridad e irretroactividad de la ley tributaria, encuentran justificación sencilla y derivan directamente de la experiencia de los pueblos:

- a) El principio de legalidad significa que la tributación no debe ser decidida por el jefe del gobierno, sino por los representantes del pueblo, libremente elegidos para hacer leyes claras; [...],⁴⁸

De lo citado es digno de resaltar como un aporte nuevo bajo la concepción de Navarro Coelho que la ley no debe ser resuelta es decir implementada por decisión de una sola persona, pues para ello son escogidos los legisladores de manera voluntaria por el soberano.

5.1. En el ámbito constitucional

Luego de analizar diferentes concepciones del principio de legalidad es menester contrastar el principio dentro de nuestra realidad y para esto es conveniente realizar un pequeño ejercicio de memoria en cuanto a la Constitución vigente en 1998 y la

⁴⁸ Sacha Calmo Navarro Coelho, *Principio de la Legalidad. El objeto de la Tutela* en Estudios de derecho tributario constitucional e internacional, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2005, p. 344.

Constitución del 2008 con la finalidad de poder determinar cómo ha estado establecido este principio en cada una.

Constitución Política de la República 1998

“Art. 130.- El Congreso Nacional tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

[...]

6. Establecer, modificar o suprimir, mediante ley, impuestos, tasas u otros ingresos públicos, excepto las tasas y contribuciones especiales que corresponda crear a los organismos del régimen seccional autónomo.”

El principio de legalidad se encontraba plasmado en esta Constitución al determinar que el ámbito tributario deberá ser regulado mediante ley y ésta debe ser emitida por el Congreso Nacional, órgano competente en aquel tiempo para ese menester.

Constitución de la República 2008

Art.120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las que determine la ley: 7. Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados.

La Constitución actual guarda armonía con el principio de reserva de ley al establecer la necesidad que mediante ley se regulen los principales aspectos tributarios del país y adicionalmente designar como órgano competente para emitir normas a la Asamblea Nacional, organismo que para ello cuenta con un proceso y trámite propio de formación, aprobación y correspondiente emisión de una ley.

5.2. En el ámbito tributario

En el campo del derecho tributario el principio de legalidad para algunos autores se expresa en el aforismo *nullum tributum sine lege* (no hay tributo sin ley) sin embargo en contraposición el doctor José Vicente Troya señala: “El principio de legalidad se ha atenuado y dulcificado. Ya no cabe, sin matizaciones, sostener el apotegma clásico de que no hay tributo sin Ley. A lo más lo que se puede sustentar es que no hay impuesto sin ley. Los gobiernos provinciales y cantonales del régimen seccional autónomo, premunidos de la autorización constitucional, mediante ordenanza, están en la facultad de crear, modificar o suprimir tasas y contribuciones especiales de mejoras.”⁴⁹ Pues si bien es cierto el ejecutivo tiene la iniciativa de presentar proyectos de ley, a la Asamblea Nacional en el cual conste la modificación, creación o extinción de tributos, la regularización de las tarifas se hace mediante ordenanza que es como ejerce su potestad legislativa el gobierno autónomo descentralizado siempre y cuando el impuesto exista dentro del ordenamiento jurídico vigente, entiéndase mediante ley, y se especifique dentro de la ley que los gobiernos autónomos descentralizados podrán modificarlos mediante ordenanzas. Es decir se establece una modificación al aforismo *nullum tributum sine lege* pues si bien es cierto se requiere de ley para la fijación de un impuesto de nivel nacional, para la modificación de una tasa que es considerada como un tributo basta con una ordenanza es decir el aforismo se aplicaría de manera parcial en cuanto a los tributos no porque se deje de necesitar un ley para crear tributos provinciales o cantonales sino porque para derogarlos o modificarlos basta una ordenanza, y al constar este particular dentro de la Constitución no se atentaría contra el principio de legalidad o de reservar de ley al emitir ordenanzas de este tipo.

⁴⁹José Vicente Troya, *Control de las leyes tributarias y los efectos de su declaración de validez*, 2006, en <http://uasb.edu.ec/bitstream/10644/1508/1/RF-06-TC-Troya.pdf>, 14-08-2012

Para recalcar que el principio de legalidad esta dado en función del procedimiento que se debe cumplir para la emisión de una norma y quien debe emitirla a continuación nos valdremos de los señalado por Mauricio Plazas Vega “el principio de legalidad en materia constitucional impositiva está relacionado con el estudio de las reglas formales para el establecimiento de los tributos”⁵⁰ Es decir conforme a lo determinado por nuestra Constitución el principio de legalidad vendría dado en función del cumplimiento de quién tiene la iniciativa de presentar un proyecto de ley en el cual se creen, modifiquen o extingan tributos (función ejecutiva), el cumplimiento del proceso legislativo para su creación (Asamblea Nacional) y posterior promulgación.

A manera de conclusión podernos señalar que el principio de legalidad, antes que una limitación, es un modo de cómo se ha de ejercer la *potestad tributaria*.⁵¹ Este principio se encuentra incluido en la legislación interna en el siguiente cuerpo legal:

Código Tributario:

Adentrándonos más en la materia de estudio del presente trabajo investigativo, es oportuno citar la norma tributaria.

“Artículo 19 Exigibilidad.- la obligación tributaria es exigible a partir de la fecha que la ley señale para el efecto [...]”

“Artículo 15.- Concepto.- obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes [...] al verificarse el hecho generador previsto por la ley. “

⁵⁰ A decir de Mauricio Plazas Vega, *Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario*, Bogotá, Temis S.A., 2000, pp.611 ss, según el principio de legalidad los tributos se han de originar en la ley, como expresión de la voluntad soberana; según el principio de justicia en la imposición, el contexto impositivo debe ser orientado por una concepción de justicia distributiva, y no simplemente sinalagmática o conmutativa. Cfr. José V. Troya Jaramillo, “El nuevo derecho constitucional tributario ecuatoriano”, en *Estudios en Memoria sw Ramón Valdés Costa*, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1999, P.450. Citado por César Montaña Galarza en su ensayo *El deber de pagar tributos y los principios de legalidad y e reserva de ley en la Constitución del Ecuador de 2008*. pp.9

⁵¹ José Vicente Troya, *Control de las leyes tributarias y los efectos de su declaración de validez*, 2006, en <http://uasb.edu.ec/bitstream/10644/1508/1/RF-06-TC-Troya.pdf>

“Artículo 82.- Presunción del acto administrativo.- los actos administrativos tributarios gozaran de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad y están llamados a cumplirse; pero serán ejecutivos, desde que se encuentren firmes o se hallen ejecutoriados [...]”

De los variados criterios que hemos citados, podemos darnos cuenta que no siempre es muy clara la diferencia entre ambos principios, es más hay a quienes les parece que son iguales, sin embargo también existen criterios que nos han clarificado con sus definiciones en las cuales especifican y detallan las características de cada uno de los principios, lo que nos brinda un aporte valioso para poder distinguir un principio del otro, por esto es necesario puntualizar en las características de cada uno y así determinar sus diferencias y semejanzas.

6. Semejanzas y diferencias entre el principio de legalidad y de reserva de ley

Después de haber analizado ambos principios y darnos cuenta que pueden ser muy similares en algunos aspectos e incluso coexistir conforme a la definición dada por algunos autores, es de vital importancia señalar de manera puntual cuáles son sus aspectos en común y cuáles son las características que los diferencian, de esta manera clarificar cualquier duda en el lector.

6.1.Semejanzas

Ambos sin estar establecidos dentro del artículo 300 de la Constitución de la República como principios que rigen el régimen tributario son mencionados en otros artículos de la Constitución y se constituyen en principios fundamentales para la expedición, derogación o modificación de tributos. Buena parte de su esquematización se

encuentra desarrollada en el artículo 301, en la primera idea u oración el principio de legalidad y en la siguiente el principio de reserva de ley. (Ambos dentro del mismo inciso)

“Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos.

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.

Art. 301.- Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley.”

El ejercicio de ambos principios deben ser desempeñados por la Asamblea Nacional, al ser el órgano competente legalmente para crear leyes,[...] la comunidad actúa en la producción de leyes a través de los órganos que, según cada sistema constitucional, tienen atribuida su representación política ⁵²[...] con la particularidad que al ser un proyecto de ley donde se crean, modifican o extinguen tributos, debe ser presentado por iniciativa del ejecutivo (Art. 300 CRE), la función legislativa es quien debe emitir la norma misma que conforme al artículo 4 del Código Tributario debe contener elementos esenciales de un tributo tales como “objeto imponible, los sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecerla, las exenciones y deducciones”.

6.2.Diferencias

Establecer diferencias entre ambos principios es una tarea que no deja muchos frutos para muestra lo citado por Carlos Felipe Aroca “la cláusula de reserva de ley atiende

⁵² Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, *Curso de Derecho Administrativo*, Tomo 1, Duodécima edición, Madrid, Civitas Ediciones S.L., 2004, p.115.

al desarrollo del principio de división de poderes unido a la necesidad de que el derecho, además de ser legal sea legítimo”.⁵³

Es decir la reserva de ley es un principio respecto del cual se puede concluir que, en el tratamiento de materias determinadas previamente en la Constitución se requiere de ley y el principio de legalidad marca los parámetros que deben cumplirse en la creación de una ley; en el primero incluirían las siguientes materias: regular el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales; tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes; crear, modificar o suprimir tributos, sin menoscabo de las atribuciones que la Constitución confiere a los gobiernos autónomos descentralizados; atribuir deberes, responsabilidades y competencias a los gobiernos autónomos descentralizados; modificar la división político-administrativa del país⁵⁴, excepto en lo relativo a las parroquias; otorgar a los organismos públicos de control y regulación la facultad de expedir normas de carácter general en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales.

En el segundo, el procedimiento o la autoridad competente, recordemos que el principio de legalidad no es sólo para leyes sino también para normas de menor jerarquía como decretos, ordenanzas, reglamentos, acuerdos, entre otros. Por ejemplo dentro de las atribuciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (como recordatorio conforme al artículo 238 de la Constitución lo constituyen “las juntas rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los concejos provinciales y los consejos regionales”) de acuerdo al artículo 240 de la Constitución: “Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales[...]”. Concordantemente el numeral 5 del artículo 264 de la Constitución señala las

⁵³ Carlos Felipe Aroca Lara, *Principio de reserva de ley en materia tributaria: análisis normativo y jurisprudencial*, p.19

⁵⁴ Numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 132 de la Constitución de la República

competencias exclusivas de los gobiernos municipales: “Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras.” Así también las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. (Principio de legalidad- órgano competente)

Es decir que en nuestro país la potestad tributaria de creación la pueden ejercer tanto la Asamblea Nacional como los GADs, la primera mediante ley y los segundos mediante Ordenanza, pero siempre será necesario un acto normativo de órgano competente en concordancia con lo establecido en el artículo 301 de la Constitución de la República que señala: “Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. [...] principio de legalidad.

[...] Sólo por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar, y extinguir las tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley.” [...] principio de reserva de ley.

7. Conclusiones preliminares sobre los principios de reserva de ley y de legalidad

Estos principios se conjugan y confunden en ocasiones dentro de la misma Constitución y legislación secundaria. Sin embargo no hay que perder de vista que fundamentalmente el principio de legalidad trata del órgano competente y proceso de creación de la norma y principio de reserva abarca lo referente a cuando se requiere de ley. En el ámbito tributario podría decirse que se requiere de ley para crear, modificar o suprimir tributos conforme al artículo 301 de la Constitución con la salvedad del artículo 140 en el cual se establece la posibilidad de la creación de una norma mediante decreto-ley. Los principios de reserva de ley y legalidad son concomitantes pues es necesario de

ambos para la regulación de tributos, entendiéndose como regulación la creación, modificación o derogación, la expedición de normas de carácter tributario conforme lo establece la Constitución; a la vez es necesario que esta norma cumpla con el proceso legislativo para su creación es decir el proyecto de ley sea de iniciativa del ejecutivo, emanada de la Asamblea Nacional , sancionada por quien ejerza la presidencia de la República y promulgada a través del Registro Oficial.

Salvo las tasas y contribuciones⁵⁵ que como ya se mencionó deben emanar del Consejo Cantonal, publicarse en el Registro Oficial mediante la figura de ordenanza en las que se fijará el procedimiento del cobro de los tributos establecidos por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD como de competencia municipal. Sin embargo conforme lo señala César Montaña:

“En este nivel de ordenanzas funcionaría como una verdadera ley, y de alguna manera dejaría de ser solamente de naturaleza reglamentaria de los tributos municipales establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.”⁵⁶

Es decir los tributos a pesar de ser creados por ley (COOTAD) se reformarían por medio de ordenanza, contradiciendo lo establecido en el artículo 301 en su primera parte (solo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos) amparándose en lo establecido en el mismo artículo 301 en su segunda parte (Solo por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones) pero yendo más allá pues el artículo citado faculta a los gobiernos municipales en lo que a tasas y contribuciones se refiere al igual que el artículo 264

⁵⁵ “**Artículo 264.-** Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: [...] 5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras.”

⁵⁶ César Montaña Galarza, *El deber de pagar tributos y los principios de legalidad y de reserva de ley en la Constitución del Ecuador de 2008*. <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/3130/1/05-TC-Monta%C3%B1o.pdf>. 25-04-2013.

numeral 5 de la Constitución, en ninguno de los artículos del texto constitucional se establece potestad en el ámbito de impuestos.

José Suing “sobre el tema, resulta esclarecedora la conclusión 6 de las VII Jornadas Ecuatorianas de Derecho Tributario:

“La rigidez de la reserva de ley, que aparece como absoluta, en la práctica por el imperio de la propia Constitución y las leyes tributarias generales o especiales, se ha ido relativizando, para posibilitar que las instituciones se adecuen a las nuevas realidades que surgen en la dinámica del proceso económico, político y social y en particular, de la creciente necesidad de incrementar la efectividad en la recaudación de los medios que hagan posible el cumplimiento de sus fines específicos. Tributos como es el caso de tasas y contribuciones especiales de mejoras, peajes, tarifas, surgen de normas secundarias denominadas ordenanzas.””⁵⁷

En lo que a proyectos urgentes en materia económica se refiere (que contengan reformas tributarias) el principio de legalidad estaría presente al cumplirse con el procedimiento legislativo previsto para la formación de leyes, con la única modificación en cuanto a los plazos establecidos para cada etapa; es decir cumplir con los 30 días plazo, otorgados en el mencionado artículo para la aprobación del proyecto de ley, este debe ser enviado al ejecutivo para que lo sancione u objete dentro de los mismos plazos fijados para el resto de proyectos de ley, en el caso que el ejecutivo lo sancione, se publicaría como ley en el Registro Oficial y entraría a regir como ley de la República concordantemente a lo establecido por el principio de reserva de ley en cuanto al requerimiento de ley para la creación, derogación o reforma de tributos. Sin embargo el artículo 140 de la Constitución determina que si dentro de los 30 días plazo la Asamblea Nacional no aprueba, reforma o niega el proyecto calificado como de urgencia en materia económica es el ejecutivo quien debe promulgarlo con la figura de decreto-ley, conteniendo esta disposición el enunciado

⁵⁷ José Suing Nagua, *Descentralización y Gobiernos Autónomos*, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2010, p.142

del trámite, el órgano competente para emitirlo y la figura legal para hacerlo es decir el principio de legalidad para este caso e incluso la excepción del principio de reserva de ley, al decirse que debe promulgarse como decreto-ley pues como se lo analizará más adelante el decreto-ley en cuanto a los efectos que produce se asimila a una ley.

8. Vigencia, validez y jerarquía de las normas

Jerarquía de las normas

Este trabajo investigativo ha abordado temas como ley y decreto-ley por la importancia de estos dos términos dentro de la tarea de investigación sobre los proyectos calificados como urgentes en materia económica y por cuanto constitucionalmente éstos pueden entrar en vigencia mediante dos modalidades es necesario establecer lo que se entiende como jerarquía de las normas, así como también el lugar de cada uno dentro de ésta.

René David en su obra *Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos* postula que “en la cúspide de esta pirámide jerárquica encontramos las constituciones o leyes constitucionales. Los países de la familia romano-germánica cuentan todos con constituciones escritas a cuyas disposiciones se reconoce un prestigio especial [...]”⁵⁸ lo citado permite reconfirmar que nuestro país pertenece a la familia germánico-romana por cuanto en el artículo 424 de la Constitución se establece que: “La Constitución es la norma suprema y que prevalece sobre el resto de normas del ordenamiento jurídico[...]”, lo que concuerda con lo manifestado por René David, en cuanto a la importancia de algunas constituciones está dada en el control constitucional que a través de ella se puede realizar de las leyes restantes⁵⁹, criterio concordante con el inciso segundo del artículo 425 de la

⁵⁸David René, *Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos*, p. 84.

⁵⁹Parafraseando a David René, *Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos*, p. 84.

Constitución de la República que por su importancia se transcribe a continuación: “En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior.” Es decir si el conflicto es entre una norma ordinaria y un reglamento prevalecerá la norma ordinaria por ser dentro del orden jerárquico conforme al artículo 425 de la Constitución superior.

La ley, en general, afirmaba Montesquieu, es la razón humana en cuanto se aplica a todos los pueblos de la tierra; y las leyes civiles y políticas de cada nación no deben de ser otra cosa sino casos particulares en que se aplica la misma razón humana.⁶⁰ Hemos citado esta definición pues no trata solo de lo que es una ley sino lo que esta debe contemplar particular que determina su importancia en el orden jerárquico.

Constitución de 1998:

“Art. 272.- “La Constitución prevalece sobre cualquier otra norma legal. Las disposiciones de leyes orgánicas y ordinarias, decretos - leyes, decretos, estatutos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y otros actos de los poderes públicos, deberán mantener conformidad con sus disposiciones y no tendrán valor si, de algún modo, estuvieren en contradicción con ella o alteraren sus prescripciones. Si hubiere conflicto entre normas de distinta jerarquía, las cortes, tribunales, jueces y autoridades administrativas lo resolverán, mediante la aplicación de la norma jerárquicamente superior.”

El artículo citado es similar a lo establecido en la actual Constitución en el artículo 424 donde consta la consagración de la Constitución como norma suprema la cual prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico; con la diferencia que el artículo 425 es más explícito en lo que a su redacción se refiere al orden jerárquico, es decir lo constante en el artículo 272 de la Constitución de 1998, en la Constitución actual está establecido en los artículos 424 y 425.

⁶⁰Citado por José Ovalle Favela, “Artículo 16”, en *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada y concordada*, t. I, México, Porrúa, 2000, p. 182.

Para que las normas establecidas en el artículo 425 de la Constitución de la República nazcan a la vida jurídica de nuestro país, deben ser publicadas en el Registro Oficial, por cuando desde su publicación se entenderán conocidas por todos además que su desconocimiento no exime a persona alguna. Para la doctrina:

“[...] el ordenamiento, como expresión sistemática de la voluntad soberana dirigida a regular la convivencia social y establecer sanciones a cargo de quienes lo incumplan, es clara manifestación de lo jurídico. Y la dimensión fáctica o sociológica, no solo porque la realidad imperante debe servir de referencia y de contexto para la interpretación del derecho, sino porque su vigencia y sentido adquieren verdadera entidad si es eficaz, si las normas que lo integran son acordes con el contexto social y, en esa misma medida, son aplicadas y acatadas de manera plena.”⁶¹

Es decir una norma requiere de validez, eficacia y vigencia, analizaremos uno a uno estos elementos.

La *eficacia* que para Robert Alexy es la sociología de la validez⁶² es la obediencia a las normas de quienes conforman una sociedad y cuáles son los motivos y conocimientos para hacerlo así como las sanciones frente a la desobediencia. “Así, una norma que es obedecida en el 80% de todas las situaciones de aplicación y se aplica sanción en el 95% de los casos de desobediencia tiene un muy alto grado de eficacia. En cambio, es muy reducido el grado de eficacia de una norma que sólo es obedecida en el 5% de sus situaciones de aplicación y sólo se aplica sanción en el 3% de los casos de desobediencia.”⁶³ Quizá son extremos los casos citados sin embargo lo que debe ser tomado en cuenta es que, cuando una norma es aplicada sin ser sancionada su desobediencia o viceversa, su eficacia social vendría dada en función de una investigación social ya más a fondo. Y para hacerla se requiere de tres elementos que vamos a enunciar sin profundizar en ellos por cuanto no es materia de esta investigación: 1.- La validez social es un asunto de grado. 2.- Es cognoscible recurriendo a dos criterios: el de la

⁶¹ Mauricio A. Plazas Vega, *Del realismo al realismo jurídico*, Monografías jurídicas, Editorial Témesis, Bogotá, 1998, pp. 127 y 128.

⁶² Ver Robert Alexy, *El concepto y la validez del derecho*, Editorial Gedisa, España, 1997, p.87.

⁶³ *Ibíd.*, p. 87.

obediencia y el de la aplicación de la sanción en caso de desobediencia. 3.- La aplicación de la sanción en caso de desobediencia incluye el ejercicio de la coacción física, es decir, de la coacción estatalmente organizada en los sistemas jurídicos desarrollados.⁶⁴

La *validez* de una norma viene dada en función de su eficacia, y para esto no requiere siempre estar establecida en una ley ya que a través de la costumbre puedo también haberse consagrado como norma de conducta en un conglomerado por haberse justificado a través del pasar del tiempo su existencia moral, siendo este un concepto positivista de validez jurídica; en contra posición existen criterios que dicen “una norma vale *jurídicamente* cuando es dictada por el órgano competente, de acuerdo con el procedimiento previsto y no lesiona un derecho de rango superior; dicho brevemente: cuando es dictada conforme al ordenamiento”⁶⁵

La *vigencia* de la ley de acuerdo al Código Civil artículo 6.- “La ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial y por ende será obligatoria y se entenderá conocida de todos desde entonces.” Los efectos que ésta contenga regirán desde su publicación el Registro Oficial⁶⁶ y en casos excepcionales en el término en que se establezca dentro del texto, dejan de regir o pierden su vigencia cuando son derogadas. La derogación puede ser total o parcial, expresa o tácita. Es expresa cuando la nueva ley manifiesta claramente que deroga la antigua, es tácita si la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior, pero quedarían vigentes las disposiciones que no están en pugna (a pesar de versar sobre la misma materia).

⁶⁴ Ver Robert Alexy, *El concepto y la validez del derecho*, p. 88.

⁶⁵ *Ibíd*em, p. 89.

⁶⁶ Ver: Código Civil, Art. 5.- La ley no obliga sino en virtud de su promulgación por el Presidente de la República. La promulgación de las leyes y decretos deberá hacerse en el Registro Oficial, y la fecha de promulgación será, para los efectos legales de ella, la fecha de dicho registro.

Por cuanto los efectos del contenido de una ley rigen desde su promulgación y correspondiente publicación en el Registro Oficial, de acuerdo a nuestra legislación es conveniente tratar de manera breve sus definiciones, mismas que serán abordadas de manera más profunda en otro capítulo por cuanto son parte del proceso de creación de la norma.

9. Definición y análisis de decreto-ley

Violeta Ruiz Almendral en su obra Finanzas Públicas y Constitución, manifiesta que “el decreto-Ley es una norma con rango de Ley que tiene carácter de urgencia, de manera que solo podrá ser aprobado: “*en casos de extraordinaria y urgente necesidad*”⁶⁷ La autora de éste criterio nos habla de necesidad es decir que, para la emisión de una norma como decreto-ley las circunstancias no sólo deben ser especiales sino extraordinarias así la regulación de la conducta no sea emitida por ley sino por un cuerpo legal jerárquicamente inferior, sin embargo debido a “sus particularidades, tiene rango de ley”⁶⁸ es decir sus efectos son iguales a los de una ley.

Para Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández:

“Se entiende por Decreto-Ley *toda norma con rango de Ley que emana, por vía de excepción, de un órgano que no tiene el poder legislativo, concretamente del Gobierno o Consejo de Ministros. [...] las explicaciones o justificaciones que se han dado de ellos han sido muy diversas. Así, por ejemplo, se ha invocado la tesis del estado de necesidad, según la cual en casos de necesidad en virtud del principio de *salus publica suprema lex* esto se entiende que el bien jurídico más débil (la conservación del orden normal de competencias legislativas) debe ceder ante el bien jurídico mas fuerte (la conservación del orden jurídico y social, que, en ocasiones, no permite esperar a que se tramite y apruebe un Ley).*”⁶⁹

⁶⁷ Violeta Ruiz Almendral, *Finanzas Públicas y Constitución*, Corporación Editorial Nacional, Quito, 2004, p.135.

⁶⁸ *Ibíd.*, p.135.

⁶⁹ Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, *Curso de Derecho Administrativo*, Tomo 1, Duodécima edición, Madrid, Civitas Ediciones S.L., 2004, p.144.

Esta definición nos ayuda a encasillar de mejor manera en que momento de la vida de una sociedad con un orden de competencias legislativas debe por el estado de necesidad prevalecer el bien social dentro del orden jurídico siempre y cuando apremie el tiempo en comparación de un trámite normal, en pro de soluciones eficientes.

Para García de Enterría dentro del derecho civil existe otra tesis *negotiorum-gestio*:

“De acuerdo a la cual habría que entender que el Gobierno, en casos de urgencia, asume el papel, respecto del Parlamento, de gestor de negocios y asuntos ajenos, o bien a la delegación tácita, según la cual habrá que suponer, que tratándose de asuntos urgentes no cabe la demora, el Parlamento delega de manera tácita y permanente su propia competencia legislativa en el Gobierno.”⁷⁰

Lo que refuerza la concepción que los decretos-ley deben ser empleados en casos de estricta necesidad, y que su utilización desde una perspectiva civilista es vista como una delegación del poder legislativo hacia el poder ejecutivo en forma tácita.

En otras legislaciones como la colombiana se los conoce a los decretos-ley como Decretos Legislativos mismos que:

“No son más que aquellas situaciones particularmente anormales que, por su relevancia y urgencia, no permiten ser atendidas por el órgano legislativo a través del procedimiento tradicional, ya que la situación es tan crítica que amerita una actuación ágil y concreta. Los Estados de Excepción están regulados por nuestra Constitución Política en los artículos 212 a 215, y son tres: el Estado de Guerra Exterior, el Estado de Conmoción Interior y el Estado de Emergencia que puede ser económico, social o ecológico”⁷¹ [...]

En nuestro país el designar a un proyecto de ley como urgente en materia económica es una facultad del Presidente de la República, estableciéndose como condición en la Constitución de la República en el artículo 140 que para poder enviar más de un proyecto de ley con calificación de urgente a la Asamblea Nacional debe haberse declarado

⁷⁰ Ibídem, p.144.

⁷¹ Aroca Lara Carlos Felipe, *Principio de reserva de ley en materia tributaria: análisis normativo y jurisprudencial*, p.14, 16.

previamente estado de excepción, conforme lo determina el artículo 164 de mismo cuerpo legal.⁷²

Según Carlos Felipe Aroca:

“Aquellas situaciones excepcionales plasmadas dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que permiten a la rama ejecutiva del poder público, en cabeza del Presidente de la República, emitir normas jurídicas con el valor de una ley en sentido formal, con todo el respaldo que le corresponde, dándoles de esta manera la fuerza vinculante necesaria para derogar, sustituir o modificar preceptos legales proferidos por el órgano legislativo natural. Estas situaciones excepcionales las encontramos en los llamados decretos legislativos; también conocidos como decretos-ley [...]”⁷³.

La legislación ecuatoriana establece la facultad del Presidente de la República para emitir decretos-ley en los casos que dentro del plazo 30 días la Asamblea Nacional no apruebe, modifique o niegue los proyectos de ley remitidos con el carácter de económico urgente. (Inciso final Artículo 140 de la Constitución) Para que el Presidente pueda enviar el proyecto de ley con carácter de urgente en materia económica a la Asamblea Nacional requiere un pronunciamiento previo del Ministerio de Finanzas, como es lógico al ser la cartera de Estado relacionada con el tema económico, este pronunciamiento se lo emite a través de un Dictamen, conforme el artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas determina:

El ente rector del Sistema Nacional de Finanzas Públicas, como ente estratégico para el país y su desarrollo, tiene las siguientes atribuciones y deberes, que serán cumplidos por el Ministro (a) a cargo de las finanzas públicas: “15.- Dictaminar en forma previa, obligatoria y vinculante sobre todo proyecto de ley, decreto, acuerdo, resolución, o cualquier otro instrumento legal o administrativo que tenga impacto en los recursos públicos o que genere obligaciones no contempladas en los presupuestos del Sector Público no Financiero, [...]. Las leyes a las que hace referencia este numeral

⁷² Constitución de la República: “Art. 164.- La Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado.”

El estado de excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. El decreto que establezca el estado de excepción contendrá la determinación de la causal y su motivación, ámbito territorial de aplicación, el periodo de duración, las medidas que deberán aplicarse, los derechos que podrán suspenderse o limitarse y las notificaciones que correspondan de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales.

⁷³ Carlos Felipe Aroca Lara, *Principio de reserva de ley en materia tributaria: análisis normativo y jurisprudencial*, p.14.

serán únicamente las que provengan de la iniciativa del Ejecutivo en cuyo caso el dictamen previo tendrá lugar antes del envío del proyecto de ley a la Asamblea Nacional.”⁷⁴

9.1. Importancia jerárquica del decreto-ley en el sistema de fuentes

ecuatoriano

El decreto-ley tiene relación con varios aspectos ya tratados, en especial con el principio de reserva de ley pues se entiende que determinados aspectos de la regulación de la sociedad deben ser establecidos mediante ley, conforme a lo que dispone la Constitución de la República, sin embargo a pesar de ello para casos excepcional se otorga una delegación legislativa la cual “consiste en la autorización que hace el Congreso al Presidente de la República para que este expedida por decreto ejecutivo normas sobre materia reservadas a la Ley”⁷⁵ Delegación expresada de manera textual en la Constitución vigente en el inciso final del artículo 140.

En la Constitución de 1998 en el artículo 272 en relación a la jerarquía del decreto-ley se establecía lo siguiente:

“La Constitución prevalece sobre cualquier otra norma legal. Las disposiciones de leyes orgánicas y ordinarias, decretos-leyes, decretos, estatutos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y otros actos del poder público, deberán mantener conformidad con sus disposiciones y no tendrán valor si, de algún modo, estuvieren en contradicción con ella o alteren sus prescripciones.”

Se menciona de forma expresa a los decretos-ley, y se los ubica en un rango inferior a las leyes ordinarias, pero distinto de los decretos en general que son los emitidos por el órgano ejecutivo a manera de actos administrativos.

Esta diferenciación no existe en la actual Constitución, por cuanto el artículo 425 que trata sobre el orden jerárquico de aplicación de las normas menciona a los decretos de

⁷⁴ Numeral 15 del artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

⁷⁵ Roberto Viciano Pastor, *El sistema de fuentes del derecho en la Constitución Política de la República del Ecuador en La estructura constitucional del Estado ecuatoriano*, Corporación Editora Nacional, Ecuador, 2004, p.81.

manera general sin ningún tipo de distinción. Siendo esta una omisión que se presta a la generación de controversias sobre la jerarquía que tiene el decreto-ley al dejar en un relativo limbo su posición dentro de la categoría de las normas, escenario que se agrava con el entrar en vigencia de cuerpos legales al amparo de esta figura jurídica y constitucional, sin embargo pasada por alto en el artículo en mención.

Empero se puede colegir que los decretos ley no pueden estar incluidos en la clasificación por cuanto “se trata de la adopción por el Gobierno, sin habilitación previa y a causa de una situación de emergencia, de una decisión con contenido material reservado a la ley”⁷⁶ es decir son emitidos excepcionalmente y se diferencian de los decretos en general por sus particularidades tanto para su emisión como por los efectos que estos producen una vez promulgados sin olvidar las materias que puede regular su contenido.

Los proyectos de ley calificados como urgentes en materia económica que no fuesen tramitados en la Asamblea Nacional dentro del plazo establecido por el artículo 140 de la Constitución deberán ser promulgados como decreto-ley, que en la práctica ocasionarían los mismos efectos de una ley, y tan solo cambiaría su título, a pesar que la Constitución establece que el ejecutivo deberá promulgar el proyecto de ley,⁷⁷ este lo debe hacer a través de un decreto-ley, puesto que es el instrumento legal a él otorgado para legislar, sin que con esto se pueda suponer que tendría una jerarquía inferior a la de una ley aprobada por la Asamblea Nacional. Pese a que el artículo 425 de la Constitución que establece el orden jerárquico de aplicación de las normas coloca en séptimo lugar a los decretos, nada se dice de los decretos-ley que a la postre es la forma en que ordena la Constitución sea emitido un proyecto de ley no aprobado por la Asamblea Nacional en el

⁷⁶ Ibídem, p.83.

⁷⁷ César Montaña Galarza en entrevista sobre “De los Proyectos de Ley Económico Urgente y la Materia Tributaria en el Ecuador” Pregunta No. 3: considera que: ¿Conforme a su criterio en qué lugar dentro del sistema jerárquico de fuentes del derecho de acuerdo a la Constitución vigente se encuentra el Decreto-Ley? Una vez publicada en Registro Oficial rige como Ley ordinaria con la naturaleza y elementos propios de las leyes ordinarias. Realizada el 28-01-2013.

tiempo establecido cuando este hubiere tenido la calificación de urgente en materia económica, esta vendría a ser la condición previa para que pueda ser emitido un decreto-ley, es decir: “en caso de **omisión legislativa** respecto del plazo máximo de tramitación, el Código Político prevé una consecuencia jurídica: la publicación del cuerpo normativo bajo la figura de **decreto ley**.”⁷⁸ Recordando siempre que “el acatamiento estricto de los límites procedimentales es una condición necesaria e imprescindible para el ejercicio de la delegación legislativa en la emergencia. *Sólo de ese modo se cumple con una ficción de delegación en que los habilita* la facultad de legislar sobre lo excepcional [...]”⁷⁹

Para la doctrina española los decretos-ley deben cumplir estrictos límites establecidos por su propio ordenamiento legal, entre ellos:

- 1.- Que exista una situación que pueda calificarse como de «extraordinaria y urgente necesidad»,
- 2.- Que en ningún caso se afecte al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, al de los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados [...],
- 3.- Que las normas así creadas, sean inmediatamente sometidas a debate y votación en el Congreso de los Diputados, el cual ha de pronunciarse sobre su convalidación o derogación.⁸⁰

Dentro de los preceptos establecidos por esta doctrina y legislación podemos deducir que se ha procurado abarcar los posibles escenarios adicionalmente se ha establecido dos condiciones para que sea emitido un decreto-ley, una anterior y una posterior, la condición previa es que el tema que trate no se encuentre en contraposición con derechos e instituciones básicas dentro del derecho español, y la condición posterior es que el decreto-ley sea validado posteriormente por el Congreso de Diputados. Estas condiciones en nuestra legislación no están establecidas.

⁷⁸ Rafael Oyarte Martínez, *Curso de Derecho Constitucional*, tomo II, La Función Legislativa, Andrade & Asociados-Fondo Editorial, Ecuador, 2005, p. 115.

⁷⁹ Alberto Ricardo Dalla Vía, *Emergencia Constitucional y Control de la Delegación Legislativa en Defensa de la Constitución- Garantismo y Controles*. Ediar Sociedad Anónima Editora, Buenos Aires-Argentina, 2003, p. 1070.

⁸⁰ Ver: Gaspar Ariño, *Economía y Estado- Crisis y reforma del sector público*, p. 391

En cuanto al tratamiento posterior por el órgano legislativo del proyecto de ley aprobado como decreto-ley el inciso final del artículo 140 de la Constitución a la letra expresa: “[...] La Asamblea Nacional podrá en cualquier momento modificarla o derogarla, con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución”. De lo señalado hay que rescatar dos aspectos fundamentales el primero que, si bien es cierto no tiene relación directa con el tema abordado en este numeral si lo tiene con el trabajo investigativo general, puesto que está redactado en femenino, es decir habla sobre la posibilidad de derogar o modificar una ley más no un decreto-ley pues de ser ese el caso debería estar redactado en masculino, es decir luego de ser promulgado un proyecto de ley como decreto-ley por no haber cumplido los plazos establecidos en la Constitución, este se convierte en una ley de la República. El segundo punto es que al establecer la Constitución que: “la Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución” se deja un vacío por cuanto se pasa por alto el caso de aquellos proyectos calificados como económicos urgentes que contienen la creación o derogación de tributos, proyecto de ley que conforme a la misma Constitución tiene que ser de iniciativa del ejecutivo, es decir se produce una especie de candado constitucional por cuanto es poco probable que quien ejerza la función ejecutiva envíe un proyecto de ley a la Asamblea Nacional que derogue o modifique un proyecto anterior que haya sido calificado como urgente en materia económica y que por diversas razones no se lo haya tramitado en los 30 días plazo, razón por la cual ejerció la potestad de promulgarlo como decreto-ley.

Ya se ha dado este caso en el proyecto de Ley de Derogación de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, presentado por el Asambleísta Abdalá Bucaram Pulley, ley que fue promulgada como decreto-ley, el proyecto fue calificado por el CAL, sin embargo en el informe para primer debate se

sugirió el archivo por parte de la Comisión a cargo de su trámite fundamentándose en que al contener la derogación de tributos debió ser de iniciativa de la Presidencia de la República y no de un Asambleísta con apoyo de una bancada como fue presentado. Es decir estamos frente a un escenario en que no se podría derogar o modificar un decreto-ley que contenga la creación, modificación o derogación de tributos salvo que cambie la política de gobierno de quien ejerza la presidencia o se termine su mandato.

CAPÍTULO II

HISTORIA DE LOS PROYECTOS URGENTES

Por cuanto en el capítulo anterior ya abordamos contenidos necesarios en la introducción del tema central de nuestro trabajo investigativo, en éste capítulo trataremos sobre los proyectos de ley calificados como urgentes en materia económica en el país a lo largo de la historia, gracias a la información recabada se podrá determinar cuando fueron contemplados por primera vez en nuestro sistema constitucional y en el devenir de las diferentes constituciones y normas de menor jerarquía que han regulado el particular, adicionalmente determinar en qué Constitución por primera vez fueron establecidos los proyectos de ley urgentes en materia económica, sus particularidades en cuanto a los requisitos para su calificación, tiempo para tramitarlo y modificaciones a las que fueron sujetos en las siguientes constituciones. Para finalizar con la elaboración de cuadros que resuman la emisión de decretos-ley con contenido tributario en años anteriores y en el período del actual gobierno.

1. Breve Reseña Histórica

Para poder determinar cómo ha sido utilizada la facultad de calificar proyectos urgentes en materia económica por los diferentes Presidentes de la República, en los casos en que era potestad del ejecutivo darles este carácter, es un aspecto que requiere de nuestro estudio para esto nos valdremos de los textos constitucionales que han establecido mediante uno u otro artículo requisitos o procedimiento para su emisión y trámite en el órgano legislativo.

1.1. El decreto- ley en la Constitución de 1929

En nuestra legislación los decretos-ley surgieron en la Constitución de 1929 (expedida mediante Registro Oficial N° 138 el 26 de marzo, en la presidencia de Isidro Ayora), donde se determinó que las leyes podrían tener calificación de urgente por ambas cámaras y por ende ser tratadas rápidamente en el Congreso Nacional (actualmente Asamblea Nacional), cuya calificación y motivos para la misma no podía ser juzgada por el Poder Ejecutivo, a la letra el artículo:

“Artículo 62.- El proyecto de Ley o Decreto que fuere aprobado por ambas Cámaras o por el Congreso Pleno, en su caso, se enviará al Poder Ejecutivo para que lo sancione. Si lo sancionare, lo mandará promulgar y ejecutar; mas si lo objetare, lo devolverá con sus observaciones, dentro de diez días, a la Cámara de origen. Los proyectos que en ambas Cámaras hubieren pasado como urgentes, serán, dentro de cinco días, sancionados u objetados por el Poder Ejecutivo, el que no podrá juzgar los motivos de la urgencia.”

Es decir la función legislativa declaraba la urgencia de un proyecto de ley a diferencia de lo que sucede en la actualidad que quien la declara es el poder ejecutivo, así tampoco se establece el motivo de urgencia o la rama dentro de la cual debe circunscribirse para ser calificado como urgente; existe un factor común con la Constitución actual, que es que, la otra función estatal no puede inmiscuirse en las razones de por qué ha sido declarada la urgencia, tan sólo debe darle trámite.

1.2. El decreto- ley en la Constitución de 1945

La Constitución promulgada mediante Registro Oficial N° 228 del 06 de marzo de 1945, en el gobierno de José María Velasco Ibarra disponía lo siguiente:

“Artículo 53.- Son atribuciones y deberes de la Comisión Legislativa Permanente:
[...] 2. Dictar, cuando no esté reunido el Congreso, en casos de urgencia, de acuerdo con el Presidente de la República y previo informe de la Comisión Nacional de Economía, decretos-leyes de carácter económico, los cuales podrán ser revocados por simple resolución del Congreso; [...]”

Al respecto León Roldós Aguilera, comentó:

“Obsérvese que la Constitución de 1945 no asignaba al Presidente de la República la facultad de expedir decretos emergentes o urgentes, sino que le otorgaba a la Comisión Legislativa Permanente compuesta por representantes de varios organismos y en la que no tenía mayoría el Ejecutivo; y que, por tanto, significaba la concurrencia de las dos funciones del Estado, Ejecutiva y Legislativa, más representantes de la Corte Suprema de Justicia, de los patronos y de los trabajadores.”⁸¹

Es decir que en esta Constitución se traslada la facultad de expedir decretos urgentes a la función legislativa concretamente a la comisión correspondiente siempre y cuando no se encuentre reunido el Congreso precisamente por el tema de urgente, manteniéndose en el “artículo 38.-El proyecto de ley o decreto que fuere aprobado por el Congreso, se enviará al Presidente de la República para que lo sancione. [...] Los proyectos urgentes serán sancionados dentro de tres días.” Que en el artículo 62 de la Constitución de 1929 constaba pero con un plazo mayor de 5 días, sin embargo a final de cuentas se establece en ambas constituciones un plazo menor en relación con otros proyectos de ley para que el Presidente los sancione.

1.3. El decreto- ley en la Constitución de 1946

La Constitución de 1946 fue expedida mediante Registro Oficial N°. 773 el 31 de diciembre de 1946, en el artículo 80 cambio el procedimiento para la expedición de decreto-ley de emergencia, atribuyéndole al Ejecutivo la facultad y agregó además como característica que los proyectos urgentes deben ser en materia económica, característica importante por ser la primera vez que en el ámbito constitucional se establece la materia a la que deberán referirse los proyectos urgentes, además la intervención del Consejo Nacional de Economía, mediante la necesidad de la emisión de un dictamen, requisito

⁸¹León Roldós Aguilera, *El abuso del poder*, Editorial el Conejo, Quito-Ecuador, 1986, p.13

necesario para que exista fuerza de ley caso contrario el ejecutivo debía fundamentar las razones de expedir el decreto sin el dictamen.

A continuación el texto íntegro:

“Artículo 80.- Para dictar Decretos-Leyes de Emergencia en el orden económico, el Presidente de la República acudirá al Consejo Nacional de Economía para que este Organismo indique las medidas que deban adoptarse a fin de normalizar la situación, o para que dictamine sobre las que el Ejecutivo propusiere.

El Ejecutivo no podrá dictar medidas legales de emergencia de carácter económico, sin previa consulta al Consejo Nacional de Economía.

Dichos Decretos deberán ser promulgados con el respectivo Informe del Consejo Nacional de Economía, requisito sin el cual no tendrán fuerza de ley.

El Presidente de la República estará obligado a dar cuenta al Congreso de esta clase de Decretos, indicando las razones que hubiere tenido para expedirlos cuando el dictamen del Consejo Nacional de Economía hubiere sido desfavorable.”⁸²

1.4. El decreto- ley en la Constitución de 1961

Lo establecido en la Constitución de 1946, no rigió por mucho tiempo pues en la Constitución publicada mediante Suplemento del Registro Oficial N° 356 del 06 de noviembre de 1961 se realizó una reforma, que a la letra decía:

“Artículo 83.- Para dictar Decretos-Leyes de emergencia en el orden económico, el Presidente de la República, acudirá al Consejo Nacional de Economía a fin de que este organismo indique las medidas que deben adoptarse e informar sobre los proyectos que el Presidente de la República le sometiere a consideración.

El Presidente de la República no podrá dictar medidas legales de carácter económico, sino previo el dictamen favorable del Consejo Nacional de Economía

Tales Decretos deberán ser promulgados juntamente con el informe respectivo del Consejo Nacional de Economía, requisito sin el cual no tendrán fuerza de Ley.

El Presidente de la República está obligado a dar cuentas al Congreso sobre esta clase de decretos”

Este papel activo (dictamen) de una autoridad equivalente en sus funciones a las ejercidas ahora por el Ministerio de Finanzas guarda gran armonía con el actual numeral 15 del artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Con una diferencia jerárquica pues en 1960 constaba en la Constitución y en la actualidad en un

⁸² Constitución de 1946

Código de carácter orgánico, además se establecía la necesaria presencia del informe y en caso de no ser publicado con el decreto no hubiese tenido fuerza de ley.

1.5. El decreto- ley en la Constitución de 1967

La siguiente Constitución fue expedida mediante Registro Oficial N° 133 del 25 de mayo de 1967.

“posiblemente la experiencia negativa de una legislación económica que se había dado al margen del Congreso Nacional muchas veces en función de intereses personales de grupos, usando y abusando de la facultad del Ejecutivo, llevó a que los legisladores de la Asamblea Constituyente supriman esa facultad en la Carta Política de 1967. Más aún, que se vuelvan exigentes en el tratamiento legislativo, al extremo que, mientras se le da a la Comisión Legislativa Permanente la facultad para legislar en receso del Congreso pleno, se le priva expresamente de la posibilidad de legislar en materia tributaria (art. 148, relacionado con el art. 141), de modo que solo el Congreso, dividido en Cámaras, en períodos ordinarios o extraordinarios, podía dictar leyes tributarias.”⁸³

Con la finalidad de hacer más entendible lo señalado por Roldós Aguilera nos permitimos transcribir los artículos en mención:

“Artículo 141.- Atribuciones de la Comisión Legislativa Permanente.

Son atribuciones de la Comisión Legislativa Permanente:

1. Dictar, en receso del Congreso Nacional, las leyes o decretos cuya expedición no esté a él reservada;
2. Elaborar proyectos de interpretación o de reforma de la Constitución;
3. Elaborar proyectos de la Ley de Elecciones y de leyes tributarias, y someterlos a consideración del Congreso; [...] “

“Artículo 148.- Proyectos de ley reservados al Congreso.

Los proyectos de ley a que se refieren los ordinales 2.º y 3.º del Artículo 141 y el de Presupuesto del Estado, están reservados al Congreso; dichos proyectos pasarán a la Comisión respectiva y, con el informe de ella, a la Cámara de Diputados para el curso establecido en esta Constitución.”

Es decir que dentro de las atribuciones de la Comisión Legislativa Permanente se encontraba la expedición de decretos así como la elaboración de leyes tributarias, sin embargo se les calificó como reservados a ese tipo de proyectos con la finalidad de que sea la Cámara de Diputados quien los conozca luego del trámite previo correspondiente.

⁸³León Roldós Aguilera, *El abuso del poder*, p.15

1.6. El decreto- ley en la Constitución de 1979

Posteriormente en el año de 1978 fue aprobada una nueva Constitución que entró en vigencia en 1979 publicada mediante Registro Oficial N° 800 del 27 de marzo de 1979, dentro de la cual no existía un trámite especial para los proyectos de ley emergentes por tanto la posibilidad de que se emitan decretos-leyes también fue suprimida y todos los proyectos indistintamente de su importancia o urgencia debían ser aprobados por el trámite normal.

1.7. El decreto- ley en la Constitución de 1984

Fue publicada mediante Registro Oficial N° 569 del 01 de septiembre de 1983 y las reformas en cuanto al decreto-ley entraron en vigencia a partir del 10 de agosto de 1984 según la disposición transitoria primera. A criterio de León Roldós Aguilera “la experiencia de 1979 a 1983 llevó a que el Ejecutivo y la Comisión Especial de Reformas a la Constitución, que fue integrada por la Cámara Nacional de Representantes, lleguen a proponer la posibilidad de expedir decretos-leyes urgentes en materia económica, reforma constitucional que aparece en el último inciso del artículo 65”⁸⁴

“Artículo 65.- La iniciativa para la expedición de las leyes corresponde a los legisladores, al Congreso Nacional, a las Comisiones Legislativas, al Presidente de la República, a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Fiscal y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

[...]

Si un proyecto de ley en materia económica fuere presentado por el Presidente de la República y calificado por él de urgente, el Congreso Nacional, o en su receso el plenario de las Comisiones Legislativas, deberá aprobarlo, reformarlo o negarlo, dentro de un plazo de quince días; si no lo hiciere, el Presidente de la República podrá promulgarlo como Decreto-Ley en el Registro Oficial y entrará en vigencia hasta que el Congreso Nacional lo reforme o derogue. La reforma recibirá el mismo trámite que para la formación de la ley prevista en el artículo 67 de esta Constitución. La derogatoria se hará en la misma forma, pero el Presidente de la República no podrá objetarla.”

⁸⁴León Roldós Aguilera, *El abuso del poder*, p.19

Se destaca en lo transcrito que por primera vez se establece que la calificación de urgente debe ser en materia económica, aspecto que las anteriores constituciones no contemplaban, otra característica para este tipo de proyectos de ley que nace en esta Constitución es el establecimiento del trámite para la derogación del proyecto de ley, el mismo que debe ser el ordinario, sin embargo se limita la facultad de objeción del Presidente de la República, pues se establece que no podrá objetar un proyecto que tenga como fin la derogación de una ley que haya sido calificada en su formación legislativa con el carácter de urgente en materia económica. Como podemos darnos cuenta éste artículo tiene mucha similitud con el articulado que actualmente rige a los proyectos de ley calificados como económicos urgentes pues en el texto actual se conserva que la calificación de urgente debe ser para la materia económica, y no se establece tramite especial para derogar el decreto-ley promulgado bajo esta modalidad, sin embargo en la Constitución actual no se conserva la imposibilidad de objetar el proyecto de ley.

1.8. El decreto- ley en la Constitución de 1993

En la Constitución Política de 1978, Segunda Codificación (1993), publicada mediante Ley No. 25. R.O. No. 183 de 05 de Mayo de 1993. Los decretos-ley se regían por el siguiente articulado:

“Art. 66.- [...] Si un proyecto de ley en materia económica fuere presentado por el Presidente de la República y calificado por el de urgente, el Congreso Nacional o, en su receso, el Plenario de las Comisiones Legislativas, deberá aprobarlo, reformarlo o negarlo dentro de un plazo de quince días; si no lo hiciere, el Presidente de la República podrá promulgarlo como Decreto - Ley en el Registro Oficial y entrará en vigencia hasta que el Congreso Nacional lo reforme o derogue. La reforma recibirá el mismo trámite previsto en el artículo 68 de esta Constitución para la formación de la Ley. La derogatoria se hará en la misma forma, pero el Presidente de la República no podrá objetarla.”

Respecto de éste artículo podemos colegir que se conservan las características establecidas en el artículo 65 de la Constitución de 1984, tanto en plazo, calificación, tratamiento, así como para su promulgación en caso de derogación.

1.9. El decreto- ley en la Constitución de 1996

La codificación a la Constitución fue publicada en el R.O. 969 del 18 de junio de 1996 y en relación a los decretos- ley establecía:

“Art. 88.- La iniciativa para la expedición de las leyes corresponde a los legisladores, al Presidente de la República y a la Corte Suprema de Justicia.

Reconócese la iniciativa popular para reformar la Constitución y para la reforma y expedición de leyes. El ejercicio de este derecho lo regulará la Ley.

Si el Presidente de la República o la Corte Suprema presentaren un proyecto de ley, tendrán el derecho para intervenir en su debate, sin voto, por sí o mediante delegación.

Si un proyecto de Ley en materia económica fuere presentado por el Presidente de la República y calificado por él de urgente, el Congreso Nacional o, en su receso el Plenario de las Comisiones Legislativas, deberá aprobarlo, reformarlo o negarlo dentro de un término de quince días. Si no lo hiciere, el Presidente de la República podrá promulgarlo como Decreto Ley, en el Registro Oficial y entrará en vigencia hasta que el Congreso Nacional lo reforme o derogue. La reforma recibirá el mismo trámite previsto en el artículo 91 de esta Constitución para la formación de la Ley. La derogatoria se hará en la misma forma, pero el Presidente de la República no podrá objetarla.

No se podrá presentar más de un proyecto urgente mientras esté tratándose otro, sin perjuicio de las facultades determinadas en el literal ñ) del artículo anterior.

Si estuviese reunido el Congreso en Período Extraordinario que no lo incluya en su temario, no correrá el término para el tratamiento de un proyecto de Ley en materia económica calificado de urgente, que presente el Presidente de la República.”

Sobre la base del artículo transcrito concluimos que se produce un cambio en relación a lo establecido en la Constitución de 1993, por cuanto se amplió el tiempo otorgado al órgano legislativo para tramitar proyectos de ley calificados como urgentes en materia económica de 15 días plazo a 15 días término, siendo esta una diferencia importante entre ambos textos constitucionales, pues brindaba la posibilidad de tratar el proyecto de ley con menor premura.

Otro cambio importante introducido en ésta Constitución y que se conserva hasta la actualidad es la limitación de enviar a la vez un solo proyecto de ley calificado como

urgente en materia económica, limitación establecida por primera vez, seguramente fundamentada en la experiencia dejada por el gobierno del ingeniero León Febres Cordero.

1.10. El decreto- ley en la Constitución de 1998

La Constitución Política de la República del Ecuador de 1998 fue publicada en el R.O. 001 del 11 de agosto de 1998 y en sobre los decretos- leyes consagraba:

“Artículo 155.- El Presidente de la República podrá enviar al Congreso Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. En este caso, el Congreso deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos, dentro de un plazo máximo de treinta días, contados a partir de su recepción.

El trámite para la presentación, discusión y aprobación de estos proyectos será el ordinario, excepto en cuanto a los plazos anteriormente establecidos.

Mientras se discute un proyecto calificado de urgente, el Presidente de la República no podrá enviar otro, salvo que se haya decretado el estado de emergencia. “

“Artículo 156.- Si el Congreso no aprobare, modificare o negare el proyecto en el plazo señalado en el artículo anterior, el Presidente de la República lo promulgará como decreto-ley en el Registro Oficial. El Congreso Nacional podrá, en cualquier tiempo, modificarlo o derogarlo, siguiendo el trámite ordinario previsto en la Constitución.”

Se puede notar que entre las constituciones de 1996 y 1998 se produjeron algunos cambios como la diferencia en el tiempo para que el Congreso trate el proyecto de ley pues en la de 1996 es de 15 días término y en la 1998 es de 30 días plazo que a la postre es mayor. En ambos textos constitucionales la potestad de calificar el proyecto como urgente, por decirlo de una manera general, es del ejecutivo y se le faculta al Congreso a derogar el decreto-ley si así lo considerare, mediante vía ordinaria. Con la particularidad que en la Constitución de 1996 se restringía la facultad del Presidente de la República de objetar la derogación, aspecto no contemplado en la Constitución 1998.

El inciso final del artículo 155 de la Constitución de 1998 es nuevo en relación con la Constitución de 1996, pero bastante similar con la parte final del inciso segundo del artículo 140 de la Constitución de 2008, con la diferencia que en la de 1998 se habla de

“estado de emergencia” y en la del 2008 de “estado de excepción”⁸⁵ sin embargo ambos estados hay sido establecido como la salvedad de la restricción que el ejecutivo envíe al legislativo a la vez más de un proyecto de ley con la calificación de urgentes. Sobre el estado de excepción y el estado de emergencia:

Constitución 1998

Estado de emergencia

“Art. 180.- El Presidente de la República decretará el estado de emergencia, en todo el territorio nacional o en una parte de él, en caso de inminente agresión externa, guerra internacional, grave conmoción interna o catástrofes naturales. El estado de emergencia podrá afectar a todas las actividades de la sociedad o algunas de ellas.”

“Art. 181.- Declarado el estado de emergencia, el Presidente de la República podrá asumir las siguientes atribuciones o algunas de ellas: 1. Decretar la recaudación anticipada de impuestos y más contribuciones. [...]”

“Art. 182.- El Presidente de la República notificará la declaración del estado de emergencia al Congreso Nacional, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la publicación del decreto correspondiente. Si las circunstancias lo justificaren, el Congreso Nacional podrá revocar el decreto en cualquier tiempo. El decreto de estado de emergencia tendrá vigencia hasta por un plazo máximo de sesenta días. Si las causas que lo motivaron persistieren, podrá ser renovado, lo que será notificado al Congreso Nacional. Cuando las causas que motivaron el estado de emergencia hayan desaparecido, el Presidente de la República decretará su terminación y, con el informe respectivo, notificará inmediatamente al Congreso Nacional.”

Constitución 2008

Estado de excepción

“Art. 164.- La Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado. El estado de excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. El decreto que establezca el estado de excepción contendrá la determinación de la causal y su motivación, ámbito territorial de aplicación, el periodo de duración, las medidas que

⁸⁵ Miguel Alejandro López Olvera, *Garantías en los Estados de Emergencia*, revista Foro No. 13, Universidad Andina Simón Bolívar- Ecuador, Corporación Editora Nacional, Quito, 2010.
<http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2894/1/06-L%c3%b3pez.pdf>

Cabe aclarar que dentro de la doctrina internacional se conoce al estado de emergencia como los siguientes nombres: “estados de excepción”, “estado de sitio”, “estado de urgencia”, “estado de alarma”, “estado de prevención”, estado de guerra interna”, “suspensión de garantías”, “ley marcial”, “poderes de crisis”, “poderes especiales”, “toque de queda”, etcétera; sin embargo, en este trabajo utilizaremos la expresión “situación de emergencia”, por su uso generalizado dentro de las normas federales que regulan dichas situaciones.

deberán aplicarse, los derechos que podrán suspenderse o limitarse y las notificaciones que correspondan de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales.”

“Art. 165.- Durante el estado de excepción la Presidenta o Presidente de la República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información, en los términos que señala la Constitución. Declarado el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la República podrá:

1. Decretar la recaudación anticipada de tributos.

[...]”

“Art. 166.- La Presidenta o Presidente de la República notificará la declaración del estado de excepción a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional y a los organismos internacionales que corresponda dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la firma del decreto correspondiente. Si las circunstancias lo justifican, la Asamblea Nacional podrá revocar el decreto en cualquier tiempo, sin perjuicio del pronunciamiento que sobre su constitucionalidad pueda realizar la Corte Constitucional. El decreto de estado de excepción tendrá vigencia hasta un plazo máximo de sesenta días. Si las causas que lo motivaron persisten podrá renovarse hasta por treinta días más, lo cual deberá notificarse. Si el Presidente no renueva el decreto de estado de excepción o no lo notifica, éste se entenderá caducado. Cuando las causas que motivaron el estado de excepción desaparezcan, la Presidenta o Presidente de la República decretará su terminación y lo notificará inmediatamente con el informe correspondiente. Las servidoras y servidores públicos serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción.”

De la concepción detallada en cada Constitución podemos señalar que ambos estados deberán ser declarados por quien ejerza la Presidencia de la República por motivos como desastres naturales o guerras, sin embargo existen unas cuantas diferencias que a continuación se detallan:

En la Constitución de 2008 una de las causas para decretar el estado de excepción es la calamidad pública aspecto no contemplado en la Constitución de 1998 al hablar de estado de emergencia. A pesar que conflicto armado y guerra podrían considerarse como sinónimos, en la Constitución vigente se contempla ha este último hecho como causal para decretar el estado de excepción sea que se produzca en el ámbito internacional o nacional, escenario que es diferente en la Constitución derogada (1998) donde la guerra internacional es motivo de una declaración de estado de emergencia, mas no se menciona nada sobre la guerra interna misma que no necesariamente está inmersa en la causal de:

grave conmoción interna, contemplada de manera exacta en ambos articulados constitucionales.

Es necesario recalcar que para algunos doctrinarios como Leandro Despouy⁸⁶ se conoce al estado de emergencia con los siguientes nombres: “estado de excepción”, “estado de sitio”, “estado de urgencia”, “estado de alarma”, “estado de prevención”, “estado de guerra interna”, “suspensión de garantías”, “ley marcial”, “poderes de crisis”, “poderes especiales”, “toque de queda”, etcétera. Con lo que podemos concluir que, con la Constitución del 2008 lo que se hizo es cambiar el término usado, que a la larga contemplaría efectos similares salvo las particularidades ya señaladas que podrían deberse a la evolución del criterio del legislador constitucional.

Empero existe una coincidencia innegable en cuanto a la excepción expresa contemplada en ambas constituciones sobre la facultad de quien ejerza la Presidencia de la República de enviar más de un proyecto de ley calificado con el carácter de económico urgente, esto es siempre que de por medio exista una situación que altere el desenvolvimiento normal del Estado.

1.11. El decreto-ley en la Constitución del 2008

En la actual Constitución como en su predecesora se consagra como facultad exclusiva de quien ejerciera la Presidencia de la República la iniciativa para la presentación de proyectos de ley que regulen el ámbito tributario (artículo 301), en cuanto a los proyectos calificados de urgentes en materia económica se dispone lo siguiente:

⁸⁶”Leandro Despouy, *Los derechos humanos y los estados de excepción*, México, UNAM-IIIJ, 1999. Citado por Miguel Alejandro López Olvera en su ensayo sobre” *Garantías en los estados de emergencia* en: <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2894/1/06-L%c3%b3pez.pdf>. 30-10-2012

“Art. 140.- La Presidenta o Presidente de la República podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. La Asamblea deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro de un plazo máximo de treinta días a partir de su recepción.

El trámite para la presentación, discusión y aprobación de estos proyectos será el ordinario, excepto en cuanto a los plazos anteriormente establecidos. Mientras se discuta un proyecto calificado de urgente, la Presidenta o Presidente de la República no podrá enviar otro, salvo que se haya decretado el estado de excepción.

Cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la Presidenta o Presidente de la República lo promulgará como decreto-ley y ordenará su publicación en el Registro Oficial. La Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla, con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución.”

Con relación al artículo transcrito podemos concluir que el mismo es fruto de la evolución que a través de los años las diferentes constituciones que ha tenido nuestro país han ido aportando, desde lo relacionado con la materia que deberá contener un proyecto de ley para que pueda ser calificado como urgente, pasando por la limitación de enviar un solo proyecto a la vez, hasta llegar al plazo otorgado al poder legislativo para su tratamiento. No con esto se pretende afirmar que lo contemplado en el artículo citado es lo óptimo o un producto final que no pueda ser sujeto a mejoras, ya que no contempla parámetros necesarios como el delimitar que puede ser urgente y que no, o que se requiere para aseverar la urgencia de la expedición de un proyecto de ley, como una especie de requisitos, con la finalidad de evitar la abierta discrecionalidad otorgada al ejecutivo para la calificación. Al decir que no es un producto final y que aún es susceptible de mejoras nos referimos también a la limitación para tramitar la derogación de una ley que hubiese sido expedida con la calificación previa de urgente en materia económica, en el caso de contener la derogación, creación o modificación de tributos, aspecto ya analizado en líneas anteriores.

Del análisis histórico que se ha realizado sobre el proceso legislativo para tratar proyectos calificados como urgentes podemos concluir que si bien es cierto han existido diferentes constituciones en todas en las que se han contemplado los decretos-ley concuerdan en que los proyectos de ley calificados como urgentes deben tener un igual

procedimiento del resto de proyectos en lo referente a las etapas, diferenciándose en el tiempo para su tratamiento pues se establece un plazo menor para el procedimiento y aprobación en el órgano legislativo con la finalidad de ser concordantes al concepto de urgencia en su aprobación.

Por cuanto se requiere de norma jerárquicamente inferior a la Constitución para desarrollar el proceso de creación de leyes establecido constitucionalmente así como para regular el correcto desempeño de la función legislativa, en el transcurso de los años en que se ha contemplado la posibilidad de emisión de decretos-ley han existido algunos cuerpos legales encargados de éste menester, por ello es conveniente hacer un breve análisis mientras recorremos sus aspectos más relevantes.

1.12. Tratamiento de los proyectos urgentes en materia económica en el Reglamento Interno de la Función Legislativa

El cual fuera acogido por el Congreso Nacional, luego de haber sido objetado totalmente por el ejecutivo en noviembre de 1979, armonizándolo con la Codificación de la Constitución Política en el Registro Oficial 569 de 01 de septiembre de 1983 y actualizado con las reformas que fue objeto el 17 de septiembre de 1990. Departamento de Publicaciones del Congreso Nacional (1997). Es adecuado no dejar de lado el hecho que el Reglamento Interno fue “adoptado por el Congreso Nacional con el texto del Proyecto de Ley Orgánica aprobado por el Congreso Nacional y fuera objetado totalmente por el Ejecutivo en noviembre de 1979.”⁸⁷

Una de las principales características de este Reglamento es que entró en vigencia como tal debido a que, la pretensión del Congreso para que sea una ley, no fue aprobada

⁸⁷ Texto constante como antecedente en la publicación del Reglamento Interno de la Función Legislativa impreso en conjunto con la Constitución Política de la República de 1998 y la Ley Orgánica de la Función Legislativa con las reformas de 1996.

por el Presidente de ese entonces, abogado Jaime Roldós Aguilera, por esto debió utilizarse como Reglamento Interno mismo que fuera derogado de forma expresa casi treinta años después por la Disposición Derogatoria Tercera de la Ley S/N (R.O. 642-S, 27-VII-2009),⁸⁸ sin embargo, se podría considerar que a pesar que en el texto del Mandato Constituyente No. 23 no se derogaba expresamente el Reglamento Interno de la Función Legislativa, al ser su contenido contrario a dicho Mandato lo deroga tácitamente.

El capítulo primero trata: “De los proyectos y actos legislativos” el artículo 89 del Reglamento Interno de la Función Legislativa, con el que comienza este capítulo se refiere a la iniciativa, en síntesis no establece mayor cosa más bien se constriñe a lo que pueda establecer la Constitución, he ahí quizá una justificación del porqué tan extensa su vigencia, algo similar ocurre con el artículo 90 el cual trata del trámite a darse a un proyecto de ley. Remitiéndonos a la Constitución Política de la República (1998) que a lo largo del capítulo V del título VI se refiere a:

Artículo 141, se requerirá de Ley para las siguiente materias, tiene una gran similitud con el artículo 132 de la Constitución vigente, sus numerales son bastante parecidos con cambios de forma mas no de fondo como es el caso del numeral tercero, que en ambas constituciones se refiere a la creación , modificación o supresión de tributos, en el texto de la Constitución de 1998 se expresa: “sin perjuicio de las atribuciones que la Constitución confiere a los organismos del régimen seccional autónomo” a diferencia de la Constitución del 2008 que a la letra dice: “sin menoscabo de las atribuciones que la Constitución confiere a los gobiernos autónomos descentralizados” a la postre ambos articulados dicen los mismo en cuanto al numeral tercero sin embargo se utiliza palabras sinónimas: “menoscabo” “sin perjuicio” y al referirse a los Gobiernos Autónomos Descentralizados se establece el nombre conforme a la denominación vigente a la fecha.

⁸⁸ Fecha en la que fuera publicada la Ley Orgánica de la Función Legislativa

En lo concerniente a la iniciativa, la Constitución de 1998 en los artículos 144, 145 y 146 se refieren a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución de 2008:

“Art. 144.- La iniciativa para la presentación de un proyecto de ley corresponde:

1. A los diputados, con el apoyo de un bloque legislativo o de diez legisladores.
2. Al Presidente de la República.
3. A la Corte Suprema de Justicia.
4. A la Comisión de Legislación y Codificación.”

“Art. 145.- El Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral, el Contralor General del Estado, el Procurador General del Estado, el Ministro Fiscal General, el Defensor del Pueblo y los superintendentes, tendrán facultad para presentar proyectos de ley en las materias que correspondan a sus atribuciones específicas.”

“Art. 146.- Podrán presentar proyectos de ley, un número de personas en goce de los derechos políticos, equivalente a la cuarta parte del uno por ciento de aquellas inscritas en el padrón electoral. Se reconocerá el derecho de los movimientos sociales de carácter nacional, a ejercer la iniciativa de presentar proyectos de ley. La ley regulará el ejercicio de este derecho. Mediante estos procedimientos no podrán presentarse proyectos de ley en materia penal ni en otras cuya iniciativa corresponda exclusivamente al Presidente de la República.”⁸⁹

A excepción de la iniciativa de la Comisión de Legislación y Codificación establecida en la Constitución de 1998 que no consta en la Constitución de 2008 y los nombres de las instituciones públicas que han sido reformadas los artículos en general guardan armonía entre sí, por ejemplo la Constitución derogada para la presentación de un proyecto de ley desde la ciudadanía mencionaba que se requerirá de la cuarta parte del uno por ciento de aquellas inscritas en el padrón electoral y la Constitución vigente establece que es necesario el cero punto veinte y cinco por ciento, a la postre ambas denominaciones tienen el mismo equivalente matemáticamente hablando. Sin embargo el último inciso del artículo 146 de la Constitución Política establece una excepción en lo que respecta a la iniciativa ciudadana pues mediante ésta no se podrá presentar proyectos de ley en materia penal, excepción que no consta en la Constitución vigente, así también la excepción de aquellos proyectos que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República que si

⁸⁹ No se transcribe el artículo 134 de la Constitución de la República pues ya fue citado y analizado al referirnos al trámite legislativo para la creación de normas.

consta actualmente en la Constitución como es el caso de los proyectos de reformen, creen o supriman tributos.

El artículo 149 de la Constitución de 1998 a la letra dice.-“Quienes presenten un proyecto de ley de conformidad con estas disposiciones, podrán participar en su debate, personalmente o por medio de un delegado que para el caso acrediten. Cuando el proyecto sea presentado por la ciudadanía, se señalarán los nombres de dos personas para participar en los debates.” Lo señalado tiene concordancia con la participación ciudadana establecida en el numeral 6 del artículo 134 de la Constitución de 2008, sin embargo en ella no se restringe la participación a dos personas, más bien la redacción deja abierta la posibilidad de intervenir personalmente o por medio de sus delegados, sin establecerse un límite en cuanto al número.

Respecto al trámite que se le dará al proyecto de ley consta en el artículo 150 de la Constitución de la Política de la República, ocho días para que sea distribuido el mismo a los diputados, y veinte días para que sea recibido por la Comisión Especializada, por cuanto la Constitución vigente no menciona nada sobre lo dicho nos remitiremos a la Ley Orgánica de Función Legislativa vigente la cual en el artículo 57 determina que la distribución debe ser de manera inmediata, se debe tomar en cuenta que los medios informáticos en la actualidad permiten que mediante un correo electrónico se notifique con el texto del proyecto de ley a todos quienes integran la Asamblea Nacional en un tiempo record.

En la ley vigente la calificación de los proyectos de ley está a cargo del Consejo de Administración Legislativa quien deberá constatar que el proyecto de ley cumpla con los requisitos de la Constitución así como también mediante el informe de la Unidad de Técnica Legislativa se puede definir la conveniencia del proyecto así como si cumple con los requisitos establecidos en la Constitución de la República de acuerdo a lo señalado

anteriormente, a diferencia de lo que establecía el artículo 92 del Reglamento Interno de la Función Legislativa: “Los informe de las comisiones especializadas permanentes se referirán obligatoriamente tanto a la constitucionalidad como a la conveniencia de los proyectos de leyes, decretos o asuntos sometidos a su estudio [...]” El artículo que se refiere a los informes que, en la ley vigente se dice en síntesis que el informe contendrá las observaciones recibidas que juzguen necesarias introducir similar al inciso final del artículo 92 del Reglamento, sin embargo en ninguna parte del texto vigente se refiere a que el informe deberá contener y mucho menos obligatoriamente una referencia respecto de la constitucionalidad y aún menos sobre la conveniencia pues se entiende que ese particular ya fue analizado a través de la calificación previa del Consejo de Administración Legislativa, de esta manera la comisión puede concentrarse en la elaboración del informe en sí, aprovechando recursos humanos y tiempo para el proyecto de ley, su articulado y su socialización. Así tampoco dentro de sus facultades consta la de conocer algo diferente a los proyectos de ley como si es mencionado en el reglamento al expresar que los informes de las comisiones pueden referirse a: “decretos o asuntos sometidos a su estudio”.

En cuanto al trámite del proyecto de ley en el seno de la Comisión Especializada la Constitución Política de la República establecía la posibilidad de que: “ante la Comisión podrán acudir con sus puntos de vista, las organizaciones y los ciudadanos que tengan interés en la aprobación de la ley, o que consideren que sus derechos pueden ser afectados por su expedición”⁹⁰ considerándose esta participación ciudadana en la formación de la norma, similar a la constante en la parte final del artículo 57 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa vigente.

La elaboración de los informes no tenía un plazo determinado, el artículo 151 de la Constitución Política establecía que la presentación del informe para segundo debate se lo hará “dentro del plazo establecido por la ley” sin embargo en la Ley Orgánica de la

⁹⁰ Inciso final artículo 150 Constitución Política de la República del Ecuador

Función Legislativa publicada mediante suplemento del Registro Oficial No. 862 del 28 de enero de 1992 misma que estuvo vigente a la vez que el Reglamento Interno de la Función Legislativa no se establecen plazos para la elaboración de los informes y más bien se remite a lo establecido en el mencionado Reglamento.

El Reglamento Interno de la Función Legislativa en el artículo 93 establecía: “El Presidente ordenará que se imprima y entregue a los legisladores el informe de la Comisión respectiva y las observaciones que, posterior al informe, se hubieren formulado, por escrito, con anticipación de por lo menos 24 horas, a la sesión en que deban ser tratados los proyectos en primero o en segundo debate.” La norma actual no dispone “imprima y entregue” los informes sino ordena su “distribución” (inciso segundo del artículo 60) pues como ya se menciona antes, es más factible hacer uso de medios electrónicos. Adicionalmente en las funciones de la o el Secretario General de la Asamblea Nacional se establece en el numeral 9 del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que deberá: “poner en conocimiento de las y los asambleístas el orden del día de la sesión de Pleno, previa aprobación de la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación y acompañando los documentos respectivos” cuando se dice los documentos respectivos debe entenderse aquellos sobre los cuales versa el orden del día, es decir si se menciona en el punto tres que se va debatir el informe para primer debate de un determinado proyecto de ley, este debe ser adjuntado en la convocatoria. En cambio el Reglamento menciona el plazo de 24 horas por lo menos de anticipación a la sesión para enviar la convocatoria. Como nos podemos dar cuenta en el artículo 93 del Reglamento Interno se menciona tanto al informe para primer debate como para segundo debate, temas que se encuentran en diferentes artículos (60-61) en la Ley vigente.

Sin embargo de lo cual la Constitución Política (1998) en el artículo 152 señalaba que para la aprobación, modificación o negación de un proyecto de ley se requiere del voto de la mayoría de los diputados presentes.

En lo que respecta a las observaciones que pueden ser formuladas por los miembros del legislativo se establecía en el inciso 4 del artículo 97 del Reglamento Interno un accionar distinto al procedimiento actual, por ello se lo transcribe a continuación: “una vez que esté listo el informe deberá ser distribuido a todos los legisladores quienes tendrán 5 días hábiles para presentar observaciones por escrito, las cuales se adicionarán al informe para primer debate, en el que preferentemente podrán intervenir los legisladores que hubieren expresado su opinión por escrito.” Lo citado no ocurre en la actualidad pues cuando el informe para primer debate es aprobado por la Comisión, el texto del mismo es debatido por el Pleno de la Asamblea Nacional, éste no es modificado independientemente de lo oportunas que puedan ser las observaciones de los otros legisladores, sus sugerencias son adoptadas en el momento de la elaboración del informe para segundo debate en el caso de contar con la aprobación de los comisionados.

En lo que respecta a observaciones existe otra disposición en el Reglamento Interno de la Función Legislativa agregado con la reforma del 19 de agosto de 1998, mediante la cual se incorporó el siguiente artículo innumerado a continuación del artículo 97:

“Para el segundo debate se requerirá un nuevo informe de la Comisión, con las observaciones que se hayan recogido en el primer debate y en el texto legal respectivo, pero el tiempo posterior al informe para las observaciones de los legisladores. Las observaciones podrán ser: al informe, al texto de la ley o consistir en impugnaciones específicas a artículos determinados.”

Es decir se reitera que se debe elaborar un segundo informe para que sea debatido por el Pleno del Congreso, a la vez se establece que tipos de observaciones se pueden realizar de una manera específica, diferente a lo establecido en la LOFL en lo que respecta a observaciones: “las y los asambleístas presentarán sus observaciones por escrito en el

transcurso de la misma sesión o hasta tres días después de concluida la sesión.”⁹¹ Es decirse imponen plazos en la ley actual para la presentación de observaciones mas no se limitan o mejor dicho se deja abierto el enfoque o la temática que pueden tener las mismas.

En cuanto a la posibilidad del archivo de los proyectos de ley los artículos 60 y 61 en su inciso final hablan de la posibilidad de “**archivar** un proyecto de ley” en cambio el artículo 94 del Reglamento Interno dice: “Si la mayoría de los miembros de la Comisión, emiten informe desfavorable, el proyecto será **desechado**, salvo que, en el caso de haber informe de minoría, el Congreso decida conocerlo, mediante resolución tomada por mayoría absoluta de los concurrentes.” El énfasis es añadido. Como podemos concluir la terminología ha cambiado para referirse a un proyecto de ley que conforme a los criterios de la mayoría de integrantes de la Comisión Especializada no reúne los requisitos para convertirse en una ley, sea por el contenido del mismo, por el tema, la problemática que aborda o por encontrarse ya establecidas sus regulaciones en otros cuerpos legales.

En el caso de que sea aprobado el proyecto de ley en segundo debate con la votación requerida conforme a la Constitución como se señaló anteriormente, éste deberá ser enviado al Presidente de la República para que lo sancione u objete conforme al artículo 153 de la Constitución Política. En el mencionado artículo se establece el plazo de diez días para que sea promulgado en el Registro Oficial en el caso de no haber objeciones, plazo que es ampliado a treinta días en la Constitución de la República en el inciso final de su artículo 137. En el caso que la objeción sea parcial en ambas constituciones se establece el plazo de treinta días para que el órgano legislativo lo examine, así como también que junto con la objeción parcial se deberá acompañar un texto alternativo por parte del ejecutivo.

⁹¹ Parte final del inciso segundo del artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

1.13. Tratamiento de los proyectos urgentes en materia económica en el Mandato Constituyente No. 23

Antes de tratar éste Mandato, es adecuado repasar el Mandato Constituyente N°1, publicado mediante Suplemento N° 223 del 30 de noviembre de 2007, que en el artículo segundo estableció las atribuciones de la Asamblea Constituyente y la forma de ejercerlas, esto es expidiendo: “mandatos constituyentes, leyes, acuerdos, resoluciones y las demás decisiones que adopte en uso de sus atribuciones” es importante también citar el orden jerárquico que se le dio a las mismas dentro del Mandato: “Las decisiones de la Asamblea Constituyente son jerárquicamente superiores a cualquier otra norma del orden jurídico y de obligatorio cumplimiento para todas las personas naturales, jurídicas y demás poderes públicos sin excepción alguna. Ninguna decisión de la Asamblea Constituyente será susceptible de control o impugnación por parte de alguno de los poderes constituidos.”

Sobre la base de lo señalado podemos concluir que el Mandato Constituyente N° 23 que vamos a analizar tenía el carácter jerárquico de una ley y por consiguiente era obligatorio su cumplimiento dentro del órgano legislativo en el proceso de creación de normas. Este rigió antes de la expedición de la Ley Orgánica de la Función Legislativa con la expedición de la Constitución de 2008 cuando fue conformada la Comisión Legislativa y de Fiscalización.

El Mandato Constituyente N° 23 fue expedido en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 458 de 31 de octubre de 2008, tuvo una Fe de Erratas publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 466 del 13 de noviembre de 2008⁹², en este mandato

⁹² La Fe de Erratas, fue publicada “por un error mecanográfico, al texto del Mandato 23” en la parte de certificación concretamente en la fecha pues en el Registro Oficial N. 458 del viernes 31 de octubre de 2008 constaba: “CERTIFICO que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Secretaría de la Asamblea Constituyente. Quito, 24 de octubre del 2008.” Y en el Registro Oficial No. 466 del jueves 13 de noviembre de 2008 consta: “CERTIFICO que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Secretaría de la Asamblea Constituyente. Quito, 25 de octubre del 2008.” Es decir la Fe de Erratas fue para corregir la fecha de la certificación y cambiar de 24 a 25 de octubre del 2008.

se establecieron las disposiciones para la Comisión Legislativa y de Fiscalización conforme al artículo 17 del Régimen de Transición de la Constitución de la República del Ecuador:

"La Asamblea Constituyente se reunirá cinco días después de proclamados los resultados del referéndum aprobatorio para conformar la Comisión Legislativa y de Fiscalización procurando mantener la proporcionalidad política que tuvo el plenario de la Asamblea Constituyente. Esta Comisión Legislativa y de Fiscalización cumplirá las funciones de la Asamblea Nacional previstas en la Constitución, hasta que se elijan y posesionen los Asambleístas, conforme lo establecido en este Régimen de Transición.";

Quienes se regían por este mandato eran los 76 asambleístas de diferentes partidos y movimiento políticos en procura de conservar “la proporcionalidad política que tuvo el plenario de la Asamblea Constituyente”⁹³ quienes resultaron electos por parte del pleno de la Asamblea. En este mandato ya constaba el CAL como órgano de la Comisión Legislativa y de Fiscalización; así también se preveía la conformación de comisiones y que éstas sean presididas por una o un Asambleísta.

En cuanto al proceso legislativo, el capítulo cuarto del Mandato Constituyente No. 23 tenía como nombre “Del trámite de elaboración de las leyes”, dentro del cual constaban artículos con los siguientes epígrafes: De la iniciativa; De la presentación de los proyectos de ley; Calificación de los proyectos de ley; Del tratamiento del proyecto de ley; Informes de las Comisiones Especializadas; Inclusión del informe para primer debate en el orden del día; Del Segundo Debate; De la remisión del proyecto de ley al Presidente de la República; De la objeción al proyecto de ley.

Los epígrafes que trataban sobre la iniciativa para la presentación de los proyectos de ley estaban abordados de manera casi idéntica en ambos cuerpos legales, entiéndase Mandato 23 y Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el primero en el artículo 22 y en el segundo en el artículo 54, la diferencia en la redacción se la encuentra en el último

⁹³ Inciso segundo artículo 17 Régimen de Transición- Constitución de la República

párrafo, pues en la ley se agregó luego de la participación en el debate de quienes hayan presentado proyectos con iniciativa ciudadana, que esta debe ser: “previa solicitud y autorización de la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional”. Autorización que no consta como necesaria en el Mandato.

En cuanto a la presentación del proyecto de ley se refieren los artículos 23 y 55 del mandato y de la ley respectivamente. (por cuanto ya anteriormente se citó de manera textual el articulado se obvia hacerlo nuevamente). En ambos textos la redacción es la misma en sus partes medulares, para hacer más entendible los cambios tan minúsculos podemos citar que se remplace la palabra “distribuya” por “difunda” en cuanto a lo que tiene que ver la acción de hacer público el proyecto de ley.

En ese mismo orden podemos encontrar al epígrafe “calificación de los proyectos de ley” en el cual tanto en el mandato como en la ley se le otorga la potestad de calificación al Consejo de Administración Legislativa, a la vez se guarda concordancia con los requisitos que establece la Constitución de la República que deberá contener un proyecto de ley para su calificación. Con una modificación en la ley, pues se agrega: “El Consejo de Administración Legislativa, en un plazo máximo de setenta días, contestará motivadamente a los proponentes del proyecto de ley, la resolución que se ha tomado respecto del trámite de su propuesta.” Acción para la cual no consta un plazo en el Mandato 23.

Los informes que deberán ser presentados por las comisiones se encuentran estipulados en los artículos 26 del Mandato 23 y 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En este epígrafe sí existe cambios notables entre ambos textos: en el plazo para presentar el informe a partir de la fecha de inicio del tratamiento del proyecto de ley, por cuanto en el mandato se establecían veinte días como plazo y en la Ley cuarenta y cinco. Así también se aumenta el plazo para la socialización, en el mandato se dice: “un

plazo no menor a los diez primeros días” y en la ley “un tiempo no menor a los quince primeros días”. Otro plazo que se ve acrecentado es el de tiempo mínimo para la presentación del informe, en el mandato se hablaba de diez días y en la ley se establece quince días, lo cual está relacionado con el aumento del plazo para la presentación del informe. También es modificado el plazo máximo de concesión de prórroga, en el mandato se estipulaba que cinco días y en la ley se establece veinte días. Proporcionándose de esta manera un mayor plazo para el tratamiento de los proyectos en la ley vigente, lo que no necesariamente garantiza un mejor nivel en la formación de una ley, más si mayor tiempo para socializar el proyecto, recibir observaciones, analizarlo, y debatirlo lo que si garantiza un proceso más detallado, minucioso y quizá como consecuencia realidades recolectadas plasmadas de mejor manera.

El epígrafe de “inclusión del informe para primer debate en el orden del día” tiene diferencias sustanciales entre lo que consta en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y lo que establece el Mandato 23. Ambos se desarrollan de manera igual en cuanto a la entrega del informe al Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, así como también la distribución que del mismo se deberá realizar entre los asambleístas. Sin embargo en el mandato consta que: “Concluido el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contado desde la distribución de los informes, el Presidente o la Presidenta de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, deberá incluirlo en el orden del día, para primer debate en un plazo máximo de siete días” este plazo para que sea incluido en el orden del día de las sesiones del pleno de la Asamblea Nacional la realización del debate del informe presentado por la Comisión no consta en la actual Ley Orgánica de la Función Legislativa ya que es facultativo de la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, sobre esto pueden darse algunas elucubraciones que van desde el colapso de la agenda legislativa que se podría haber presentado con la fijación de un plazo para inclusión del debate de un determinado

proyecto de ley en el orden del día hasta que lo que se pudo pretender es, no tener un plazo establecido para así poder fijar la agenda del pleno de la Asamblea conforme a la voluntad política de quien ejerza la Presidencia. Sin embargo con esa afirmación se estaría dejando de lado lo valioso de la discrecionalidad como facultad de la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional para priorizar el debate de proyectos de ley que tengan mayor transcendía por su impacto en la sociedad. Otro punto que se contempla en el artículo 59 de la ley es que para resolver el archivo del proyecto de ley es necesaria que exista la voluntad de la mayoría absoluta del pleno de la Asamblea Nacional, aspecto que no consta en el texto del artículo equivalente en el mandato.

En lo que tiene que ver con la elaboración del informe para segundo debate las diferencias se ven plasmadas en los textos de: artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en el Mandato 23 en el artículo 28. Ambos artículos empiezan con disposiciones similares en cuanto a la inclusión de las observaciones realizadas al informe para primer debate; sin embargo las cosas cambian de manera semejante a los casos citados anteriormente, es decir en cuanto a plazos se refiere, pues el mandato establecía siete días para que la comisión presente el informe para el segundo debate y la posibilidad de solicitar una prórroga por siete días más, es decir un total de catorce días máximo. Empero la ley establece cuarenta y cinco días para la presentación del informe así como también la posibilidad de presentar la solicitud de prórroga misma que deberá ser aprobada y el tiempo concedido será fijado por quien ejerza la Presidencia de la Asamblea Nacional, proporcionando de esta manera la ley vigente un tiempo más largo para la elaboración del informe en comparación al mandato.

El plazo para que la Presidenta o el Presidente de la Asamblea incluya el debate del segundo informe elaborado por la comisión en el orden del día del pleno de la Asamblea Nacional consta en el Mandato 23 y es de cuarenta y ocho horas subsiguientes a la

distribución del informe a los asambleístas, sin embargo este plazo no consta en la Ley Orgánica de la Función Legislativa vigente como ya se mencionó al tratarse del primer debate. En cuanto a que el informe deberá ser aprobado en una sola sesión son concordantes tanto el mandato como la ley, sin embargo en lo que tiene que ver con las formas de votación para aprobar el informe si difieren, pues en el texto del mandato se establecía que la votación debía realizarse al texto completo del artículo y de manera excepcional, es decir cuando no ha sido aprobado por mayoría absoluta la votación se realizaría artículo por artículo. A diferencia de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dentro de la cual se establece la posibilidad de que los asambleístas puedan mocionar que la aprobación se la realice por el texto integro, capítulos, secciones o artículos. Entre otras diferencias podemos citar la posibilidad de archivar un proyecto de ley que no consta en el mandato más si en la ley, sin embargo de lo enunciado no se menciona la votación requerida para el archivo, sobre entendiéndose que es la misma que se requiere para archivar el proyecto de ley durante el primer debate.⁹⁴

En el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se mejora la utilización del lenguaje, como se diría en técnica legislativa se sustituye la utilización de un lenguaje discriminador y se establece: “De la remisión del proyecto de ley a la Presidenta o Presidente de la República” ya que en el mandato se decía “De la remisión del proyecto de ley al Presidente de la República”, si bien esto pudo darse por cuanto al ser una norma para un período corto en el cual se sabía de antemano que quien ostentaba el poder ejecutivo era un hombre, en términos de técnica legislativa no se debería redactar de esa manera un cuerpo legal. En cuanto al contenido del articulado en sí existe una diferencia en relación a plazos, en el mandato como ya hemos visto quizá como un patrón común se fijaba “el día hábil siguiente” para que quien presida la Comisión Legislativa y de Fiscalización remita el proyecto de ley aprobado, y en la ley se establece: “como tiempo

⁹⁴ Inciso final artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa

máximo, a los dos días hábiles siguientes”; sin embargo guardan armonía en cuanto al plazo de treinta días para remitir el proyecto al Registro Oficial haya o no objeciones. El artículo en mención de la Ley Orgánica de la Función Legislativa contiene un inciso a continuación de lo citado que a la letra dispone: “Los proyectos de ley que aprueben, modifiquen o deroguen la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez aprobados en segundo debate por el pleno, serán enviados directamente al Registro Oficial para su publicación.”⁹⁵

El siguiente epígrafe trata sobre la “Objeción al proyecto de ley”, ambos textos de los artículos 30 y 64 tanto del Mandato 23 como de la Ley Orgánica de la Función Legislativa son concordantes con la Constitución de la República, si bien en el mandato se determinaba que se estaría a lo establecido en la Constitución (artículo 138) y en la ley se repite el texto de la Constitución, en la práctica son concordantes entre sí.

En lo que al trámite de los proyectos urgentes en materia económica se refiere este Mandato lo establecido en el último inciso de su artículo 26 no varía mucho de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa vigente, es decir determinar 10 días para que se entreguen los informes para primer debate mismos que contendrán las observaciones que se hayan efectuado al proyecto, así también se fijan 5 días plazo para la socialización del proyecto y la asistencia a la Comisión de la ciudadanía que tenga interés,

⁹⁵ **Quito, 7 de Marzo 2012.** El Pleno de la Corte Constitucional para el período de Transición, presidido por el Dr. Patricio Pazmiño Freire, conoció y resolvió la demanda de inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presentada por el Presidente de la República del Ecuador. Los jueces constitucionales aceptaron la demanda de inconstitucionalidad y declararon la inconstitucionalidad, por el fondo del contenido del inciso segundo del artículo 63 de dicha Ley, que señala: "Los proyectos de ley que aprueben, modifiquen o deroguen la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez aprobados en segundo debate por el Pleno, serán enviados directamente al Registro Oficial para su publicación", por contravenir expresamente las disposiciones contenidas en los artículos 137, inciso tercero, 138, 139 y 147 numerales 11 y 12, de la Constitución de la República del Ecuador y dejaron sin efecto las medidas cautelares, a partir de la publicación de la presente sentencia. Es decir la aprobación de las reformas efectuadas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa deben ser sancionadas por el ejecutivo, en un claro debilitamiento del principio de separación de funciones. http://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=580:pleno-de-la-corte-constitucional-se-pronuncio-respecto-a-la-demanda-de-inconstitucionalidad-del-inciso-segundo-del-articulo-63-de-la-ley-organica-de-la-funcion-legislativa&catid=38:boletines-cce-2012. 18-10-2012

por último se prohíbe de la misma manera que en la LOFL el emitir informe antes de cumplidos 5 días.

El artículo 28 del mandato trata sobre el segundo debate y el inciso séptimo establecía el plazo de 48 horas para que la comisión recoja las observaciones realizadas por los asambleístas en el primer debate en el Pleno, recordemos que la ley vigente en el artículo 62 establece un plazo mayor (4 días).

2. Cuadro histórico de los proyectos de ley calificados con el carácter económico urgente en materia tributaria

En nuestro país existieron gobiernos elegidos de manera constitucional y democrática como gobiernos que ascendieron al poder mediante argucias antidemocráticas que, utilizaron el decreto-ley como una manera de gobernar legislando conforme a sus necesidades políticas y económicas. En palabras de Javier Hervada: “El gobierno que cae en el vicio de gobernar para la utilidad privada de quienes gobiernan o de grupos de particulares, ejerce ilegítimamente sus funciones; es un gobierno ilegítimo con *ilegitimidad de ejercicio*. Asimismo las leyes que tienen ese vicio son leyes injustas. Éste es un criterio fundamental para valorar la legitimidad de los régimen políticos y de los gobiernos”⁹⁶

A continuación mediante un cuadro explicativo señalaremos que impuestos se crearon, modificaron o extinguieron mediante decreto-ley así como el año en que fueron emitidos y quien ostentaba la Presidencia:

⁹⁶Javier Hervada, *¿Qué es el derecho?*, La moderna respuesta del realismo jurídico, Ediciones Universidad de Navarra S.A. 2da. Edición, España, 2008, p.137.

GOBIERNO	FECHA	No. R.O.	ENTIDAD	DECRETO No.	IMPUESTO	ANEXO Nro.
José María Velasco Ibarra	04/02/1946	500	Ejecutivo	374	Exención a importaciones del pago de impuesto “Dragado Río Guayas” y timbre para “Sanidad Escolar”	1
Junta Militar de Gobierno	26/02/1964	190	Ejecutivo	329	Ley de Impuesto a la Renta	2
José María Velasco Ibarra	08/09/1971	305	Ejecutivo	1283	Codificación de la Ley de Impuesto a la Renta	3
Consejo Supremo de Gobierno	21/10/1977	448	Ejecutivo	1880	Ley de Impuesto a las Bebidas Gaseosas	4
Consejo Supremo de Gobierno	26/07/1978	636	Ejecutivo	2660	Cálculo, liquidación y cobro del Impuesto a la Cerveza	5
Consejo Supremo de Gobierno	02/04/1979	804	Ejecutivo	3373	Ley del Sistema Impositivo al consumo selectivo de cigarrillos	6
León Febres Cordero	22/08/1985	225	Legislativo	06	Ley de Minería	7
León Febres Cordero	27/08/1985	258	Legislativo	15	Impuestos a los timbres del 5 por mil	8
León Febres Cordero	29/05/1986	446	Legislativo	24	Reformas a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley Tributaria para la contratación de prestación de servicios en la exploración de hidrocarburos	9
León Febres Cordero	29/05/1986	446	Legislativo	26	Ley de Fomento Artesanal	10

León Febres Cordero	29/09/1986	532	Legislativo	29	Ley de fijación de sueldos y salarios mínimos vitales y elevación de sueldos y salarios de los trabajadores del sector privado y de los servidores públicos y de medidas tributarias para su financiamiento	11
---------------------	------------	-----	-------------	----	---	----

Investigadora: María Fernanda Racines.
Matriz de elaboración propia a partir de información recopilada en el archivo de la Asamblea Nacional.
Nota metodológica: Ver anexos conforme datos de la tabla.

Respecto a lo señalado podemos concluir que mediante la figura de decreto-ley se han creado o modificado impuestos que hasta la fecha rigen tales como el impuesto a la renta o el impuesto a los licores así como determinadas exenciones al pago del impuesto a las importaciones, como es obvio suponer con las modificaciones que han sido necesarias con el devenir de los años.

3. Breve repaso histórico de los proyectos de ley calificados con el carácter económico urgente en materia tributaria

A lo largo de la vida democrática de nuestro país como ya se señaló en el primer capítulo han existido algunos gobernantes con variadas maneras de ejercer política tributaria, unos se han valido de los impuestos para poder generar un mayor ingreso al presupuesto del Estado, estos impuestos han sido implantados mediante leyes que han pasado por el trámite ordinario para su aprobación y otras han requerido de un trámite sumarisimo dentro del proceso legislativo debido a su calificación como urgentes; de éste último caso vamos hablar. Abordando aquellos en que quien ejercía la Presidencia de la

República hacía uso de esta facultad otorgada al ejecutivo en unas constituciones y al legislativo en otras (en el caso de tener mayoría) para poder presentar proyectos con el carácter de urgente e materia económica (término actual) y realizar reformas tributarias.

Por ello nace la pregunta fundamental ¿Cuál es el deber ser de los proyectos calificados como económico urgentes? Para ello recurrimos a León Roldós quien afirma:

“El proyecto de ley económica debe ser conocido por un cuerpo legislativo antes de entrar en vigencia, para evitar el autoritarismo. Ese conocimiento implicaría un plazo corto desde que se presenta el proyecto, con la **obligatoriedad que se le dé un tratamiento prioritario** al proyecto si es calificado urgente, calificación que debe ser propuesta por el Ejecutivo y aceptada como decisión previa por el cuerpo legislativo. Igualmente debe precalificarse el carácter económico del proyecto [...]”⁹⁷

Con lo señalado Roldós, nos muestra la conveniencia que, la calificación de un proyecto como urgente no dependa solo de una función del Estado sino se encuentre repartida entre el ejecutivo y el legislativo. No únicamente por constituirse en un doble filtro, más bien ser un mecanismo que evita la consolidación de la voluntad de quien ostenta el poder ejecutivo, pues si este dicta las leyes y a la vez es quien las hace cumplir o las ejecuta, las leyes podrían ser utilizadas como una forma de persecución o represalia a determinados sectores no afines al gobierno de turno.

Adicionalmente si para que un proyecto de ley sea tramitado como urgente requiere del análisis y pronunciamiento de dos diferentes funciones del Estado de cierta manera se lograría evitar que un tema que no sea urgente o no sea económico sea tratado como tal, siendo este el deber ser del proceso descrito no necesariamente la realidad.

Con lo enunciado es apropiado empezar analizando los proyectos de ley presentados en el gobierno de León Febres Cordero, por cuanto en su mandato ingresaron a la vida normativa muchas reformas legales a través de la figura de decretos-leyes, actuar

⁹⁷ León Roldós Aguilera, *El abuso del poder-Los decretos-leyes económicos urgentes aprobados por el gobierno del Ing. León Febres Cordero*, p.20

que fue muy reprochado por sus detractores⁹⁸. Hasta la fecha de terminada la obra de León Roldós, existían 26 decretos ley promulgados y en vigencia durante el gobierno de León Febres Cordero. Para julio del 2010 según datos proporcionados por la Unidad de Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional existían 168 decretos en vigencia entre ellos se encuentran decretos: Supremos, Legislativos, y, Ley de Emergencia. Por la relación con nuestro trabajo investigativo vamos a analizar el decreto-ley No.06, publicado en el Registro Oficial No. 255 del 22 de agosto de 1985 que trata sobre la **Ley de Minería**.

Dentro de los considerandos no hizo mención a la urgencia de la expedición de la ley, tan solo se la calificó como indispensable el “ajustar las necesidades del sector minero con los avances tecnológicos y la realidad económica actual y los requerimientos de la sociedad ecuatoriana” después del limitado contenido de los considerandos que a ciencia cierta no clarifica la urgencia de la expedición del proyecto de ley, se pasa a las disposiciones fundamentales, es decir ya al proyecto de ley en sí. Del contenido del proyecto de ley, llama la atención las reformas tributarias establecidas en éste, en los artículos 47,48 y 55, por cuanto se establecía que la actividad minera pagaría tan solo sobre el cálculo del 50% de la base imponible, es decir el otro 50% se encontraba exento por el plazo de 5 años desde la fecha de inicio de producción, posterior a este plazo tributaría de manera normal. Así también para el cálculo del impuesto a la renta de personas naturales no se tomaba en cuenta el impuesto progresivo a la renta global sino se tributaría sobre las utilidades gravables correspondientes, a la vez se fijó el impuesto único del 5% a las rentas de capital y de concurso del trabajo y el 10% para las rentas de capital puro. Adicionalmente el artículo 55 establecía una deducción en el impuesto a la renta a personas naturales o jurídicas que inviertan en empresas mineras.

⁹⁸ Los decretos-leyes de urgencia tienen normas con dedicatoria; son favorables al autoritarismo y la arbitrariedad; y pueden favorecer a la deshonestidad. Las excepciones-que las hay-tienden principalmente a favorecer una mejor estructura del sector público, creando las condiciones para modernizar situaciones y procedimientos. León Roldós Aguilera, *El abuso del poder-Los decretos-leyes económicos urgentes aprobados por el gobierno del Ing. León Febres Cordero*, Editorial El Conejo, Ecuador, 1986, pp.55-56.

Particularidad que sin querer abordar los temas de fondo de los artículos señalados, concuerdan con la modalidad del actual gobierno de incluir temas de índole tributaria en proyectos económicos urgentes.

Conforme ya se trato y solo a manera de recuento, en el gobierno de León Febres Cordero, la Constitución vigente a la fecha establecía en el artículo 65 que:

“si un proyecto de ley en materia económica fuere presentado por el Presidente de la República y calificado por él de urgente, el Congreso Nacional, o en su receso, el Plenario de las Comisiones Legislativas, deberá aprobarlo, reformarlo o negarlo, dentro de un plazo de quince días; si no lo hiciere, el Presidente de la República podrá promulgarlo como Decreto-Ley en el Registro Oficial y entrará en vigencia hasta que el Congreso Nacional lo reforme o derogue [...]”

De la lectura de la obra de León Roldós, podemos concluir que el accionar por lo regular del Presidente Febres Cordero era, enviar los proyectos de ley, durante el período que hoy se conoce como vacancia legislativa, para que sea necesario convocar a un período extraordinario y así dentro del temario se incluyera el proyecto urgente. Es importante para hacer notar al lector el proceder de quien ejercía la Presidencia de la República de ese entonces ayudarnos de la siguiente cita:

“El presidente de la República-desde el 31 de julio de 1985 hasta el 7de agosto de 1985, remitió al Congreso 15 proyectos de decretos leyes urgentes, habiendo el Plenario de las Comisiones Legislativas negado 14 de estos proyectos en su sesión del 8 de agosto de 1985, en la que solo se aprobó en primera el proyecto de reforma a la Ley de licitaciones y Concurso de Ofertas, que fuera negado en segunda discusión, también por el Plenario de las Comisiones Legislativas, en sesión de 9 de agosto de dicho año. No obstante tales proyectos, a excepción del reformatorio a la Ley de Administración Financiera y Control y el de la Ley Tributaria a los Fletes Marítimos, fueron publicados en los Registros Oficiales del 19, 22, 26 y 27 de agosto de 1985, promulgados por el presidente de la República a pesar de la negativa del Congreso Nacional.⁹⁹”

⁹⁹ León Roldós Aguilera, *El abuso del poder-Los decretos-leyes económicos urgentes aprobados por el gobierno del Ing. León Febres Cordero*, p.36.

Que en breves palabras se traduciría a: “El proyecto de ley económica debe ser conocido por un cuerpo legislativo antes de entrar en vigencia, para evitar el autoritarismo”¹⁰⁰

Como podemos evidenciar no sólo que los proyectos enviados por el ejecutivo al entonces Congreso Nacional no tenían mayor relación con el ámbito económico, tampoco poseían dentro de su contenido un tema que pueda considerarse urgente el que sea aprobado por el órgano legislativo, eso dejando a un lado que el tiempo otorgado en ese entonces para el trámite era de tan sólo quince días plazo, es decir la mitad del tiempo que posee en la actualidad la Comisión Especializada del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control para tratar proyectos de ley, conforme veremos más adelante con casos concretos, ese tiempo en ocasiones resulta bastante corto. Sin embargo lo que más llama la atención de lo citado es el actuar del entonces Presidente de la República que sin importar la negativa del Congreso Nacional haya dispuesto sean publicados en el Registro Oficial los proyectos de ley, bajo el argumento, que el órgano legislativo había dejado de funcionar válidamente desde el 23 de julio de 1985, por cuanto el entonces Presidente del Congreso habría clausurado de forma inconstitucional el período extraordinario de sesiones.¹⁰¹ Con lo anotado podemos manifestar que en el accionar descrito se ha omitido el cumplimiento de algunos principios constitucionales y tributarios, para que los decretos-leyes promulgados puedan ser considerados una norma jurídica o una norma legal. Tal como lo define José Juan Ferreiro Lapatza: “una regla de conducta que la comunidad política hace suya y a la que, en consecuencia, presta su propia fuerza coercitiva. Una comunidad hace suya, como norma jurídica, una determinada regla de conducta cuando

¹⁰⁰ Ibídem, p.20.

¹⁰¹ Parafraseando a: León Roldós Aguilera, *El abuso del poder-Los decretos-leyes económicos urgentes aprobados por el gobierno del Ing. León Febres Cordero*, p.36.

ésta se exterioriza a través de una de las fuentes que la propia comunidad reconoce como cauces o modo de producción del Derecho: ley, reglamento, costumbre, etcétera.”¹⁰²

En el caso que nos ocupa y retomando el tema de la representatividad y la división de poderes, por ende de las facultades a cada uno determinadas, podemos manifestar que estos decretos-leyes estarían investidos de una coerción dada por el mismo órgano, es decir quién emite la norma y quien vela por su cumplimiento es el ejecutivo, en ningún momento estarían estas supuestas normas avaladas por la comunidad pues el órgano del que fue emanada no fue elegido para cumplir esa función, debido a que dentro de la democracia participativa y representativa de nuestro país es el poder legislativo el llamado a legislar, así también conforme a la definición dada por Ferreiro Lapatza, para que la comunidad haga suya la norma esta debe estar exteriorizada a través de una de las fuentes por ella reconocida, y para el efecto de los tributos la figura a utilizarse dentro del sistema de fuentes que rige nuestro país debía haber sido la ley no el decreto-ley.

Quizá podamos profundizar sobre los decretos-ley conforme al ejemplo citado y retomar la inquietud enunciada en el primer capítulo cuando hablábamos sobre la validez de la norma y nos formulamos la siguiente pregunta: ¿en el caso de los decretos-ley con qué tipo de validez son expedidos? Partamos de la definición dada por el mismo Ferreiro Lapatza: “el juicio sobre la validez del Derecho es, pues, un juicio de hecho, sobre su observancia real en el seno de una colectividad. El juicio sobre la legitimidad de una norma o de un ordenamiento es como se señalo un juicio de valor que se basa en el apoyo real que a esa norma prestan los miembros de esa comunidad y que valoran tanto más una norma cuanto más apoyo recibe.”¹⁰³ Así como León Roldós manifestó su desacuerdo con la forma en que fueron promulgadas las reformas a los cuerpos legales y las nuevas leyes; cuando el gobierno actual con el antecedente que dentro de la Asamblea no se aprobó un determinado

¹⁰² José Juan Ferreiro Lapatza, *Instituciones de Derecho Financiero*, Editorial –Marcial Pons, Madrid, 2010, p.31.

¹⁰³ Ibídem, p.32.

proyecto de ley en el tiempo establecido y el mismo fue promulgado por el Ejecutivo como decreto-ley, recibió de parte de varios sectores su oposición y desacuerdo, adicionalmente críticas y comentarios respecto a su inconstitucionalidad e invalidez, (objeto de análisis más adelante) podemos decir que estas normas reciben su observancia en el seno de la comunidad gracias a que la administración tributaria como órgano coercitivo vela y trabaja por su cumplimiento obteniendo de los contribuyentes un acatamiento so pena del cobro de multas o intereses por su no pago.

En lo que respecta al ámbito histórico de los decretos-ley, existen varios casos, con la finalidad de no tornar pesada la lectura señalaremos algunos ejemplos de cómo ha sido distorsionada la calificación de urgencia por los diferentes gobiernos de turno, con el siguiente caso: la **Ley de Exoneración de Impuestos a la Importación de Transporte Urbano de Pasajeros**, misma que fuera promulgada como decreto ley No. 03, mediante Registro Oficial No. 941 el 05 de mayo de 1992 en el mandato de Rodrigo Borja. Este proyecto de ley fue calificado como urgente en materia económica, dentro del plazo establecido por la Constitución vigente a la fecha, no fue aprobado, reformado o negado ni por el Congreso ni por el Plenario de las Comisiones Legislativas y al amparo de lo dispuesto en el artículo 65 de la Constitución antes ya transcrito el Presidente de la República dispuso su publicación como decreto-ley.

En sus considerandos fundamenta su razón a la falta de renovación de vehículos de pasajeros debido al alto costo de estos y como consecuencia se habrían ocasionados gravísimos problemas en el transporte masivo ente ellos el déficit de unidades de transporte urbano. Por la importancia de uno de los considerandos se lo transcribe de manera textual:

“Ante la necesidad de dar una respuesta a este problema, el Gobierno Nacional cree conveniente que el proyecto adjunto a esta exposición de motivos se convierta en Ley de la República, a fin de

exonerar a las importaciones de vehículos de transporte masivo urbano de las **cargas tributarias** que pesan sobre ellos [...]”¹⁰⁴

Como podemos darnos cuenta al no existir una norma que regule los parámetros para calificar de urgente a un proyecto de ley, o que limite lo que se puede considerar como “económico”, la potestad del ejecutivo es manejada de una manera antojadiza y quizá política. Adicionalmente se deja de tomar en cuenta que “en toda democracia moderna el derecho de instituir el poder viene reservado al Parlamento. En dicha previsión se asienta el convencimiento de que el derecho tributario está fundado sobre el *dictum* del legislador.”¹⁰⁵ Sin embargo el mismo autor establece una salvedad: “Esta primacía del Parlamento en materia tributaria es compatible con la autorización para dictar actos con fuerza de ley (*Rechtsverordnungen, decretilegislativi, statuoryinstrument, decrets-loi, règlements*) conferida por el Parlamento al ejecutivo”¹⁰⁶ Entonces el derecho debe normarse mediante ley y esta por principio de legalidad incluso debe ser emitida por el órgano legislativo, siempre y cuando no estemos hablando de la salvedad que en nuestro caso establece la Constitución para que sea el poder ejecutivo quien emita actos (decreto-ley) con la fuerza de ley, concordantemente con el numeral 11 del artículo 147 de la Constitución de la República que determina dentro de las atribuciones y deberes de quien ejerza el poder ejecutivo: “Participar con iniciativa legislativa en el proceso de formación de las leyes.”

El último punto a analizar es el considerando citado de forma textual, por cuanto de su simple lectura se puede desprender que el proyecto de ley contiene reformas tributarias, es decir tiene carácter económico y tributario, cabe recordar que conforme a la Constitución un proyecto de ley no debe tratar más de una materia, adicionalmente el texto

¹⁰⁴Decreto Ley No. 03, Registro Oficial No. 941 el 05 de mayo de 1992. Mandato de Rodrigo Borja. (El énfasis es añadido)

¹⁰⁵ Christoph Trzaskalik, *Disposiciones Administrativas y Derecho Tributario en Tratado de Derecho Tributario*, tomo primero, editorial Temis, Bogotá-Colombia, 2001, p.684.

¹⁰⁶Ibídem p.684.

del proyecto abarca temas de importación y derechos arancelarios, es decir ya serían tres temas lo que dentro de un mismo cuerpo legal se pretendan regular, sin embargo conforman un todo y guardan una relación simbiótica para efectos de lograr la adquisición de nuevas unidades para el transporte urbano.

Luego de lo señalado es apropiado analizar dentro del sistema de fuentes, que en su función principal se encuentra: el reconocer las normas validas dentro del sistema y determinar la posición de cada norma dentro del conjunto¹⁰⁷ de los proyectos de ley que no han sido aprobados por la Asamblea Nacional y que su promulgación fue realizada vía decreto-ley.

Para Gaspar Ariño, existe una excepción al principio de división de poderes, la que está dada en función de momentos, razones y circunstancias de urgencia y necesidad por las cuales el Gobierno “debe asumir funciones y entrar en unos campos que están *reservados al Parlamento*.”¹⁰⁸

Dentro de la historia en especial de tradición anglosajona y francesa estos momentos están identificados claramente y se dividían en tres:

- 1.- Las Cámaras no estaban reunidas ni se les podía reunir
- 2.- Existía una autorización o delegación expresa de éstas, para un caso concreto, y;
- 3.- Existía una situación de emergencia máxima: estados de guerra, de excepción o sitio.¹⁰⁹

A continuación es procedente efectuar un análisis pequeño de cada una de las causales, la primera causal estaría acorde a nuestra realidad por cuanto conforme lo determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el caso de que la Asamblea Nacional se encuentre en receso legislativo el Presidente de ésta, podrá realizar una

¹⁰⁷ Parafraseando a José Juan Ferreiro Lapatza, *Instituciones de Derecho Financiero*, pp. 34-35.

¹⁰⁸ Parafraseando a Gaspar Ariño, *Economía y Estado- Crisis y reforma del sector público*, pp. 389, 390.

¹⁰⁹ División realizada en la obra de Gaspar Ariño, *Economía y Estado- Crisis y reforma del sector público*, p. 391.

convocatoria extraordinaria (como se dio en el caso del proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, en que el receso legislativo fue suspendido para que la comisión pertinente pueda avocar conocimiento e iniciar el trámite respectivo).

La segunda causal que trata sobre la delegación o autorización podemos decir que en el caso de nuestro país, vendría a ser el decreto-ley, dictado siempre y cuando la Asamblea Nacional no cumpla en el plazo de treinta días otorgados para que apruebe, niegue o modifique los proyectos de ley calificados con el carácter económico urgente, es decir la mencionada delegación esta señala en la Constitución.

La causal tercera que trata sobre la existencia de una situación de emergencia máxima, estado de guerra, excepción o sitio, desde una óptica que busque a todas luces una relación se podría decir que esta dada en función de la “emergencia económica” calificada por el gobernante de turno motivo por el cual debe remitir un proyecto de ley al órgano legislativo con la intención de con éste controlar, corregir o solucionar la mencionada emergencia.

Si bien hemos señalado que el dictaminar leyes y normas desde el poder ejecutivo con fuerza de ley es una excepción a la división de los poderes conforme ha cambiado la ideología de gobernantes y gobernados esta afirmación también ha sido modificada y gracias al Estado Social, prestador de servicios y redistribución de riqueza ha dejado o de ser algo absolutamente excepcional y se ha impuesto especialmente para el tratamiento de materias económico-financieras, en los últimos cincuenta años en toda Europa.¹¹⁰

4. Estadísticas en los últimos dos años

Luego de haber realizado un breve estudio a lo largo de la vida de nuestra nación sobre cómo fue utilizado el decreto-ley en otros gobiernos tanto democráticos como dictatoriales,

¹¹⁰ Parafraseando a Gaspar Ariño, *Economía y Estado- Crisis y reforma del sector público*, pp. 390, 391.

es oportuno analizar cómo se ha utilizado esta figura normativa en los recientes años, que mejor forma para hacerlo que mediante un cuadro que nos permita condensar los datos más relevantes, es decir que materias se han legislado a través del decreto-ley, así como determinar la tendencia del gobierno actual para calificar como urgente en materia económica ciertos temas.

PROYECTOS DE LEY CALIFICADOS COMO ECONÓMICOS URGENTES

NOMBRE	INICIO	R.O.	DECRETO LEY	LEY
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones	20/10/2010	Suplemento R.O. No. 351 29/12/2010		X
Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno	25/6/2010	Suplemento R.O. 244 27/7/2010	X	
Código de Planificación y Finanzas Públicas	16/9/2010	Segundo Suplemento R.O. No. 306 22/10/2010		X
Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado	30/8/2011	Suplemento R.O. No. 555 13/10/2011		X
Ley de Economía Popular y Solidaria	18/3/2011	R.O. 444 10/05/2011		X
Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado	24/10/2011	Suplemento R.O. No. 583 24/11/2011	X	
Ley para la Regulación de los Créditos para la Vivienda	9/4/2012	Segundo Suplemento R.O. No. 732 26/06/2012		X
Ley para la Defensa de los Derechos Laborales.	3/7/2012	Segundo Suplemento R.O. No. 797 26/09/2012		X
Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social	26/10/2012	Suplemento R.O. No. 847 10/12/2012		X

Investigadora: María Fernanda Racines.

Sobre la base de lo señalado podemos aseverar que el órgano legislativo en la mayoría de casos ha cumplido con el plazo señalado en la Constitución de la República para tratar y aprobar los proyectos calificados como urgentes en materia económica, tanto así que tan sólo dos proyectos de ley han tenido que ser publicados mediante decreto-ley.

En cuanto al ejercicio de la facultad de otorgar la calificación de económico urgente a los proyectos de ley, ésta ha sido utilizada de diferentes maneras que varían conforme quien este al mando de la función ejecutiva.

“De no haber la razón del bien común, la finalidad de las leyes se subvertiría de modo que las leyes dirigidas a satisfacer intereses particulares serían injustas”¹¹¹

Citamos esta frase para culminar este comentario por cuanto hay que recordar que es necesario que las normas que se emiten tengan un fin general y no particular; y es fácil darse cuenta que han existido gobiernos como el de León Febres Cordero, en los cuales el uso de la facultad de calificar como urgentes los proyectos de ley, era usado con frecuencia, sin embargo no todos fueron publicados sin el tratamiento y la correspondiente aprobación por lo menos de una de las partes del cuerpo legislativo llamado a ejercer esa facultad (Plenario de las Comisiones Legislativas). Para realizar reformas tributarias que aumenten los ingresos a las arcas fiscales, es decir generen una mayor contribución por parte del obligado, así como para incentivar ciertos sectores de la economía.

En la actualidad el gobierno ha utilizado la facultad de enviar proyectos con carácter económico urgente a la Asamblea Nacional, para diversos proyectos de ley, de los cuales no todos tendrían un carácter económico ni urgente, sin embargo en la exposición de motivos se ha mencionado que se los emite por tener su contenido impacto en

¹¹¹Javier Hervada, *¿Qué es el derecho?*, La moderna respuesta del realismo jurídico, p.138.

determinada conducta social o comercial que afecta la economía del país, sea para corregirla o incentivarla. Argumento que será motivo de análisis en el capítulo tercero.

De los nueve proyectos de ley citados, tan sólo dos han nacido a la vida jurídica, es decir han sido publicados como decretos-ley, estos son: Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno, en el 2010 (publicada mediante Suplemento del Registro Oficial N° 244 del 27 de julio de 2010)y Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado en el 2011(publicada mediante Suplemento del Registro Oficial N° 583 del 24 de noviembre de 2011), cabe aclarar que esto se debe más, a la posición mayoritaria afín al gobierno que se encuentra en la Asamblea Nacional mediante la cual se logra la aprobación de los informe en el tiempo establecido por la Ley Orgánica de la Función Legislativa y los votos necesarios para aprobar el informe para segundo debate, que a una eficacia en la formación de la norma. Sin con esto desmerecer el trabajo que pueda hacer la Comisión a cargo, sino más bien al corto tiempo proporcionado para su tratamiento.

CAPÍTULO III

PROCESO LEGISLATIVO

En el presente capítulo analizaremos el actual proceso de creación de una norma, tanto de manera general es decir para todo tipo de proyecto de ley (leyes ordinarias, leyes orgánicas) como para la expedición de leyes que contengan impuestos o a su vez los modifiquen o deroguen (artículo 135 de la CRE), hasta llegar a aquellos que tienen la particularidad de haber sido calificados por el o la titular de la función ejecutiva como de urgencia en materia económica (artículo 140 de la CRE), con la finalidad de poder determinar sus diferencias y semejanzas. De esta manera analizar la acertada o no calificación, es apropiado previamente conocer a fondo los conceptos de urgencia en la doctrina y en otras legislaciones, este último aspecto en especial por cuanto en nuestra academia y la Corte Constitucional poco han dicho o escrito sobre los proyectos de urgencia en materia económica.

Es apropiado determinar el aspecto económico y tributario de este tipo de proyectos de ley distinguiendo uno de otro de ser el caso, pasando por el análisis del cumplimiento con lo establecido en la Constitución respecto a “que los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia”, determinar si existe alguna alteración en cuanto al producto final en el caso del procedimiento para los proyectos urgentes. Para esto nos valdremos de los diferentes proyectos remitidos a la Asamblea Nacional por la función ejecutiva en los últimos años con esa calificación, poniendo un énfasis especial en los proyectos de ley que han entrado en vigencia como decreto-ley y que dentro de la temática de su contenido traten sobre reformas tributarias.

1. Proyectos de ley en materia tributaria

Si bien es cierto, la potestad tributaria está dada en función de que el Estado mediante el órgano legislativo establezca tributos y recaude los mismos de los habitantes que lo conforman en nuestro caso mediante la Administración Tributaria para que estos recursos sean revertidos a su favor a manera de obra pública, acceso a servicios básicos, salud, educación entre otros.

De acuerdo a Francisco de la Garza, la potestad tributaria es:

“La facultad del Estado por virtud de la cual puede imponer a los particulares la obligación de aportar una parte de su riqueza para el ejercicio de las atribuciones que le están encomendadas”¹¹² Creándose así una relación jurídica tributaria entre el Estado y quien paga el tributo que es más bien “el vínculo jurídico entre el Estado y el contribuyente es una *relación jurídica y no una relación de poder*”¹¹³

Los tributos deben ser recaudados por el Estado a través de la administración tributaria. La recaudación debe estar dada en función de los recursos que tiene cada individuo, es decir su capacidad contributiva con la finalidad de evitar convertir al Estado en confiscador, sobre este último elemento Dino Jarach define a la capacidad contributiva como:

“Una apreciación de la riqueza de los contribuyentes y de su aptitud para contribuir a los recursos del Estado. Este concepto implica dos elementos constitutivos: la existencia de una riqueza o manifestación de riqueza, en el aspecto objetivo y una evaluación de los gobernantes en ejercicio del poder fiscal, de la correspondiente idoneidad para contribuir al erario público.”¹¹⁴

Es decir la emisión de leyes que contengan tributos, debe estar basada en la potestad del Estado de solicitar al conglomerado, aporte con parte de su riqueza para

¹¹² Sergio Francisco de la Garza, Derecho Financiero Mexicano, Editorial Porrúa, México, 2006, p. 207.

¹¹³ Ramón Valdés Costa, *Curso de Derecho Tributario*, Depalma-Temis-Marcial Pons, Santa Fe- Colombia, 1996, p.295.

¹¹⁴ Boletín del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario, No.11, pp.5.

otorgar bienes y servicios, tomando en cuenta siempre la capacidad contributiva de los obligados. De ahí la importancia que las leyes que contengan la creación, modificación, o extinción de tributos para su aprobación dependan de un órgano colegiado (Congreso, Parlamento, Asamblea) y no de un solo individuo que establezca tributos con la finalidad de generar ingresos para obras que a pesar de ser importantes no estaban presupuestadas o los fondos destinados a las mismas fueron ocupados en gastos innecesarios, en el peor de los escenarios las obras sean parte de una demagogia política.

La vía que algunos gobiernos han utilizado para crear tributos sin necesidad del órgano legislativo ha sido variada y dada en función de la permisibilidad de la Constitución que regía en su mandato, por esto es de destacar que en la Constitución de 1978 que entró en vigencia en 1979, el último inciso del artículo 65 expresaba la primera limitación a la “urgencia” pues se le encasilla a “proyecto de ley en materia económica” fue la primera vez que se lo hizo y las constituciones siguientes (1993-1996-1998-2008) han conservado este cambio que es una forma de limitar en teoría el área de urgencia, pues la urgencia debía ser en temas de carácter económico dentro del proyecto de ley.

Entre los principales proyectos de ley que reformaron o crearon tributos desde los primeros años de democracia de nuestro país se señala el siguiente caso que incluso fue conocido por la Corte Suprema de Justicia citado por el Dr. José Vicente Troya en su ensayo “Control de las leyes tributarias y los efectos de su declaración de validez”. Caso 126-2001 reconoce la inconstitucionalidad del incremento del IVA del 12 al 15%. Para lograr ese incremento el Presidente de la República remitió al Congreso un decreto urgente, el cual fue negado en esta parte. Posteriormente, el Presidente objetó el pronunciamiento del Legislativo y al hacerlo redujo el incremento del IVA del 12 al 140/0, modificación que en su criterio, no fue rechazada en tiempo oportuno. La

inconstitucionalidad se refiere al oficio enviado por el Presidente, aduciendo tal falta de rechazo, con el cual no se remedia la violación del principio de reserva de ley. Es de advertir que se conoce como decreto ley, que tiene valor de ley, aquél decreto urgente remitido por el Ejecutivo al Congreso que comienza a regir cuando no existe pronunciamiento dentro de treinta días.¹¹⁵

2. Trámite legislativo para la creación de normas

El inicio del proceso de creación de una norma en nuestro país se da con la presentación del proyecto de ley ante el órgano legislativo, dando cumplimiento previo de ciertos requisitos que van desde la iniciativa hasta su contenido, a continuación desglosamos cada uno:

De acuerdo a la Constitución de la República quienes pueden tener iniciativa es decir quiénes pueden presentar proyectos de ley son:

“Art. 134.- La iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde:

1. A las asambleístas y los asambleístas, con el apoyo de una bancada legislativa o de al menos el cinco por ciento de los miembros de la Asamblea Nacional.
2. A la Presidenta o Presidente de la República.
3. A las otras funciones del Estado en los ámbitos de su competencia.
4. A la Corte Constitucional, Procuraduría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública en las materias que les corresponda de acuerdo con sus atribuciones.
5. A las ciudadanas y los ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos y a las organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de por lo menos el cero punto veinticinco por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral nacional.
6. Quienes presenten proyectos de ley de acuerdo con estas disposiciones podrán participar en su debate, personalmente o por medio de sus delegados.”

El numeral primero es concordante con la facultad de legislar que tienen los asambleístas¹¹⁶.

¹¹⁵ José Vicente Troya, *Control de las leyes tributarias y los efectos de su declaración de validez*, 2006, en <http://uasb.edu.ec/bitstream/10644/1508/1/RF-06-TC-Troya.pdf>, 14-08-2012

¹¹⁶ Numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la República.

El segundo numeral está acorde el numeral 11 del artículo 147 de la Constitución de la República que trata sobre las atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República que textualmente dice: “Participar con iniciativa legislativa en el proceso de formación de las leyes”

El numeral tercero y cuarto son similares ya que mencionan a las diferentes instituciones y funciones del Estado, las cuales dentro de sus competencias y atribuciones podrán presentar proyectos de ley. En otras palabras tienen la facultad de presentar ante la Asamblea Nacional proyectos de ley de acuerdo a las facultades, atribuciones y competencias determinadas por la Constitución para que las ejerzan, respetando de esta manera no sólo la separación de funciones sino conservando una lógica básica, para citar un ejemplo: quien mejor que la Contraloría General del Estado para presentar un proyecto de ley que reforma el proceso de control a entidades estatales, no sólo por ser el ente encargado de esa actividad sino también por ser quien al estar día a día con las leyes que regulan el control y el procedimiento del mismo pueden determinar con mayor precisión las falencias o fortalezas en un cuerpo legal así como también sugerir soluciones más adecuadas en procura de mejoramiento.

El numeral quinto del artículo 134 de la Constitución hace referencia al respaldo del 0.25% del padrón electoral para las organizaciones en general que deseen presentar un proyecto de ley. Concordante con el artículo 103¹¹⁷ de la misma Constitución que a la letra dice:

“Art. 103.- La iniciativa popular normativa se ejercerá para proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la Función Legislativa o cualquier otro órgano con competencia normativa. Deberá contar con el respaldo de un número no inferior al cero punto veinte y cinco por ciento de las personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción correspondiente.”

¹¹⁷ Concordante con el Art. 193 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia que a la letra dice: La iniciativa popular normativa se ejercerá para proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la Asamblea Nacional o ante cualquier otro órgano con competencia normativa. Deberá contar con el respaldo de un número no inferior al cero punto veinte y cinco por ciento de las personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción correspondiente.

El numeral sexto del artículo 134 de la Constitución no establece quienes tienen la iniciativa para presentar los proyectos de ley, sino más bien se fija una norma en la que se determina la manera en que deberán ser tomados en cuenta los grupos, entidades, instituciones o funciones del Estado que presenten los proyectos. La Ley Orgánica de la Función Legislativa en el artículo 66 también hace mención a esta iniciativa en el primer inciso, sin embargo señala ciertos puntos sobre plazos y veto, por su importancia se lo transcribe a continuación:

“[...] Quienes propongan la iniciativa popular participarán, mediante representantes, en el debate del proyecto en el órgano correspondiente, que tendrá un plazo de ciento ochenta días para tratar la propuesta; si no lo hace, la propuesta entrará en vigencia.

Cuando se trate de un proyecto de ley, la Presidente o Presidente de la República podrá enmendar el proyecto pero no vetarlo totalmente.

[...]La Asamblea Nacional implementará un sistema de recepción de propuestas o proyectos de ley presentados en forma individual por las y los ciudadanos, que pondrá a conocimiento de las y los Asambleístas a través de su red interna de comunicación, para que estos puedan analizarlos y, de ser el caso, acogerlos y apoyarlos.”

El cómo ha sido utilizada la iniciativa ciudadana constante en la Constitución de la República se ve reflejada en el siguiente cuadro estadístico donde consta el nombre de los proyectos de ley así como también en qué estado se encuentra actualmente su trámite.

PROYECTO DE LEY	FECHA DE PRESENTACIÓN	ESTADO ACTUAL
Ley Orgánica de Tierras y Territorios	23-marzo-2012	Calificado por el CAL
Reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe	23-marzo-2012	Calificado por el CAL
Ley Orgánica de la Legalización de Tierras a favor de los Posesionarios, Moradores y Copropietarios de los Fraccionamientos no Autorizados en el Distrito	18-enero-2012	Presentado

Metropolitano de Quito		
Ley de Creación de la Universidad Estatal Regional Kasama	23-septiembre-2010	Presentado
Ley Reformatoria a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.- 396 del 7 de agosto de 2008	29-octubre-2008	Publicado en R.O. No.415 del 29 de marzo de 2011
Ley de la Contaduría General del Estado	19-octubre-2009	Presentado

Investigadora: María Fernanda Racines.

Matriz de elaboración propia a partir de información recopilada en el archivo de la Asamblea Nacional.

Con lo citado se puede concluir que muy poco se utiliza dicha potestad a tal punto que en los años 2008, 2009 y 2010 solo se presentó un proyecto de ley por año e incluso en el año 2011 no se presentó ningún proyecto de ley de iniciativa ciudadana. Sin embargo dentro del primer trimestre del 2012 se presentaron tres proyectos de ley es decir en el año 2012 hubo una mayor iniciativa ciudadana en la elaboración de normas. (En lo que va del 2013 no se ha presentado ningún proyecto de ley de iniciativa ciudadana.) Sin embargo uno de los proyectos citados “Ley Reformatoria a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial” ya ha podido ser aprobado por la Asamblea Nacional, sancionado por el Presidente de la República y se encuentra en vigencia.

Hemos decidido seguir el orden de ideas establecido en la Constitución, por ello el siguiente artículo motivo de análisis es el artículo 135 mediante el cual se limita la facultad de presentar proyectos de ley de carácter tributario y económico así como de división político administrativa al Presidente o Presidenta de la República.

“Art. 135.- Sólo la Presidenta o Presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división político administrativa del país.”

Con esta disposición consagrada en la norma máxima de nuestra legislación se produce una condición en relación a quién puede presentar proyectos de ley que contengan reformas o regulaciones tributarias, designando a la o el titular de la Función Ejecutiva de manera excluyente para ejercer la iniciativa en la presentación y por ende elaboración de este tipo de proyectos de ley, siendo esta condición parte del principio doctrinario de legalidad al conformar los requisitos que deben cumplirse para la emisión de una ley de carácter tributario, misma que debe posteriormente seguir el trámite dispuesto en el mismo cuerpo legal al interior de la Función Legislativa para ser aprobada por sus integrantes, acto seguido y de ser el caso recibir la sanción por parte del ejecutivo dentro del plazo de 30 días conforme lo dispone el artículo 137 de la misma Constitución para que esta nueva norma sea publicada en el Registro Oficial.

Sin la intención de alargarnos o desviarnos del tema central, es importante dar a conocer a los lectores que en el artículo 301 de la Constitución de la República se menciona que: “Solo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos [...]” facultad que de acuerdo al proceso legislativo establecido en la misma Constitución le corresponde a la o el Presidente de la República, pues lo que le concierne a la Asamblea Nacional es aprobar, archivar o derogar los proyectos de ley. Es aquí donde cabe la pregunta: ¿Cuál fue la intención de las y los legisladores de Montecristi en cuanto a este artículo? Acaso se pretendía establecer la obligatoriedad para la creación de leyes de carácter tributario de la aprobación de la Asamblea Nacional o quizá lo que se deseaba era establecer como obligatoria la sanción de parte de quien ejerza la Presidencia de la República. Interrogante que conforme a las normas vigentes puede ser absuelta por la Corte Constitucional siendo ésta la alternativa más rápida, ya que una reforma

Constitucional amerita un trámite más largo que debe estar acorde al artículo 441 de la Constitución de la República.

2.1. Presentación y calificación de los proyectos de ley.-

El contenido de los proyectos de ley también es un requisito, debiendo contener exposición de motivos, articulado, disposiciones derogatorias de cuerpos legales o articulados que por estar en contradicción con la nueva ley deban ser eliminados de la vida legislativa.

“Art. 136.- Los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y serán presentados a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional con la suficiente exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían. Si el proyecto no reúne estos requisitos no se tramitará.”

Concordantemente el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece:

“Art. 56.- **CALIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY.-** El Consejo de Administración Legislativa calificará los proyectos de ley remitidos por la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional y verificará que cumpla, con los siguientes requisitos:

- 1.- Que se refiera a una sola materia;
- 2.- Que contenga exposición de motivos y articulados; y,
- 3.- Que cumpla los requisitos que la Constitución de la República y esta Ley establecen sobre la iniciativa legislativa.

Si el proyecto no reúne los requisitos antes detallados no se calificará.

Si el proyecto de ley es calificado, el Consejo de Administración Legislativa establecerá la prioridad para el tratamiento del mismo y la Comisión especializada que lo tramitará.

El Secretario General del Consejo de Administración Legislativa inmediatamente remitirá a la Presidenta o Presidente de la comisión especializada, junto con el proyecto de ley, la resolución en la que conste la fecha de inicio de tratamiento del mismo.

El Consejo de Administración Legislativa, en un plazo máximo de setenta días, contestará motivadamente a los proponentes del proyecto de ley, la resolución que se ha tomado respecto del trámite de su propuesta.”

Como es de notar, la LOFL desarrolla no sólo cual debe ser el contenido de los proyectos de ley sino que establece el proceso a darse de manera interna y por supuesto el

tiempo para hacerlo. Con la finalidad de que todo el contenido del artículo citado sea claro, es conveniente explicar que es el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y por quienes está conformado. De acuerdo al artículo 6 numeral tercero de la LOFL el CAL es uno de los órganos de la Asamblea Nacional, en el artículo 13 del mismo cuerpo legal se dice que es el “*máximo órgano de administración legislativa*”, el cual estará integrado por quienes ejerzan la Presidencia y las dos Vicepresidencias de la Asamblea Nacional y cuatro vocales, cabe recalcar que éstos conforme al artículo 10 serán elegidos de entre asambleístas pertenecientes a diferentes bancadas legislativas.

Para continuar con el tratamiento del proceso legislativo en cuanto a la creación de normas, nos basaremos en el orden establecido en el capítulo V *Procedimiento Legislativo*, que en su sección I, denominada: *Trámite de aprobación de Leyes Ordinarias y de Urgencia en Materia Económica*, que en su primer artículo (52) reproduce lo establecido en el artículo 132 de la Constitución de la República sobre qué casos requieren de una resolución y cuáles de una ley, enumerando las mismas seis circunstancias. El artículo 53 LOFL tiene una similitud con el artículo 133 de la CRE constando como la única variante en su texto la parte final, donde se agrega: “*Las leyes ordinarias se aprobarán con la mayoría absoluta de las y los miembros de la Asamblea Nacional.*”(Artículo 53 LOFL)

El artículo 54 de la LOFL y el artículo 134 de la Constitución de la República son iguales en su contenido, lo que varía es la técnica legislativa utilizada en su redacción, por cuanto en la Constitución constan seis numerales en los que se detallan los casos en que es necesaria la expedición de una norma y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa el numeral sexto constante en la Constitución figura como inciso final.

El artículo 55 de la LOFL a la letra dice:

“Art. 55.- **De la presentación del proyecto.**- Los proyectos de ley serán presentados a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, quien ordenará a la Secretaría General de la Asamblea Nacional distribuya el proyecto a todas las y los asambleístas, difunda públicamente su contenido en

el portal Web oficial de la Asamblea Nacional, se difunda públicamente su extracto y remita el proyecto al Consejo de Administración Legislativa.”

El trámite de un proyecto de ley empieza dentro del órgano legislativo precisamente con la presentación e ingreso a través de gestión documental del proyecto de ley, unidad que está a cargo de la Secretaría General de la Asamblea Nacional conforme al literal n) del artículo 14 y artículo 16 del Reglamento Orgánico Funcional de la Asamblea Nacional. Posteriormente mediante correo electrónico la Secretaría General envía el proyecto de ley ingresado (en archivo pdf) a todos quienes conforman la Asamblea Nacional (listadogeneral¹¹⁸) así como también es publicado el archivo del proyecto en la página: <http://www.asambleanacional.gob.ec>. El proyecto de ley es remitido al CAL para que lo califique conforme al artículo 56 de la LOFL y al 135 CR, este debe referirse a una sola materia (éste aspecto en lo que proyectos con el carácter urgente en materia económica se refiere será analizado más adelante), contener exposición de motivos y articulado así como expresar de forma clara los artículos que serían derogados con la expedición del nuevo cuerpo legal.

En el caso que el proyecto de ley cumpla con todos los requisitos deberá ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa, dicha calificación se la realiza mediante resolución a la cual es acompañada un informe de la Unidad de Técnica Legislativa¹¹⁹ a la vez se deberá establecer si el proyecto de ley cumple o no con los

¹¹⁸Se mantiene unidos ambos términos, corresponde al nombre del grupo de contactos (dentro del correo institucional) en el cual se encuentran incluidos todos los correos electrónicos de quienes trabajan en la Asamblea Nacional.

¹¹⁹ Reglamento Orgánico Funcional de la Asamblea Nacional, **Artículo 18.- Atribuciones.-** Son atribuciones de la Unidad de Técnica Legislativa las siguientes:

a.- Elaborar informes no vinculantes para conocimiento de los asambleístas, dentro de las comisiones especializadas y el Pleno de la Asamblea Nacional, para cada uno de los debates, dentro del proceso de aprobación de Las leyes. [...]

Ley Orgánica de la Función Legislativa “**Art. 30.- Unidad de Técnica Legislativa.-** Se crea la Unidad de Técnica Legislativa con el objeto de acompañar el proceso de creación de la norma y proveer a las comisiones especializadas y al Pleno de la Asamblea de un informe no vinculante sobre los siguientes temas:

1.- Normas legales vigentes que se verían afectadas o deberían derogarse o reformarse con la aprobación de la norma propuesta;

requisitos del artículo 56 de la LOFL, la constatación que en el sistema de registro de trámites de leyes del portal web de la Asamblea Nacional no constan proyectos de ley, calificados por Consejo de Administración Legislativa, que se encuentren relacionados con la propuesta legislativa, así como la sugerencia de la Comisión Especializada Permanente u Ocasional para tramitarlo.

El Consejo de Administración Legislativa, en un plazo máximo de treinta días, contestará motivadamente a los proponentes del proyecto de ley con la resolución que se ha tomado respecto del trámite de su propuesta de proyecto de ley a través de un memorando suscrito por el Secretario General del CAL (conforme al numeral 12 del artículo 19 de la LOFL¹²⁰) teniendo como remitente la Presidenta o Presidente de la comisión correspondiente, junto con el proyecto de ley, la resolución contendrá una parte considerativa y una parte resolutive, con tres artículos por lo general, en el primer artículo se hará constar el nombre del proyecto de ley, la o el Asambleísta proponente y la constancia que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 56 de la LOFL. En el artículo segundo se mencionará qué comisión es la competente para conocerlo y tramitarlo; en el caso de que el proyecto tenga relación con algún otro proyecto de ley que ya esté en conocimiento de la comisión y de creerlo conveniente el CAL, se hará constar el nombre

2.-Lenguaje utilizado en la norma y revisión de lenguaje no discriminatorio;
3.-Impacto de género de las normas sugeridas; y,
4.-Estimación del costo que podría provocar la implementación de la norma. Quienes integren esta comisión multidisciplinaria serán profesionales hombres y mujeres, altamente calificados para el tratamiento de estos temas.”

A pesar que en el articulado de las normas citadas no consta la facultad de emitir un informe respecto de los proyectos de Ley antes de ser calificados. Mediante **Memorando No. SAN-2010-1392 de 01 de octubre de 2010** suscrito por el doctor Francisco Vergara quien ejerciera el cargo de Secretario General de la Asamblea Nacional en el año 2010, dio a conocer a la Unidad de Técnica Legislativa la Resolución del Consejo de Administración Legislativa que en su parte pertinente dice:

“Artículo 1.- Disponer a la Unidad de Técnica Legislativa que, a partir de la fecha de suscripción de esta Resolución, y previo a la calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa, elabore un informe no vinculante que determine si los proyectos de ley entregados formalmente a la Asamblea Nacional cumplen o no con los requisitos señalados en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa [...]”.

¹²⁰ LOFL- Art. 19 #12 [...] Distribuir el trabajo a las comisiones especializadas, de conformidad con las resoluciones adoptadas por el CAL [...]”.

del proyecto de ley con el cual deberá ser unificado. En el artículo tercero se expresará la fecha de inicio de trámite del proyecto de ley.

Una vez que la Comisión es notificada con la resolución del CAL, debe poner en conocimiento de todas y todos quienes integran la Asamblea Nacional, así como de la ciudadanía (artículo 57 LOFL). Se considera que dentro de los primeros quince días del plazo otorgado por el CAL en la calificación sean recibidos en la Comisión quienes tengan interés en la expedición del proyecto de ley¹²¹ con la finalidad que expongan sus argumentos (artículo 58 LOFL) si embargo como el tiempo de quince días es en ocasiones corto lo que se hace es recibir en Comisión General en el pleno de la Comisión que esté tratando el proyecto de ley a las organizaciones que han presentados observaciones de mayor transcendencia para la formación del proyecto, claro está siempre y cuando las entidades privadas o públicas que soliciten ser recibidas sean un número lo bastante grande como para no poder recibirlos a todos.

De acuerdo con Pablo Arturo Vásquez:

“[...] La Comisión competente dentro de los plazos establecidos en la Ley, promoverá la participación efectiva de la ciudadanía en la formación de las leyes a través de los mecanismos tecnológicos y físicos para la recepción de sugerencias y observaciones, a través de foros de consulta (blogs), mesas itinerantes a cualquier lugar del territorio nacional, talleres, foros, encuentros ciudadanos, comisiones generales. Los aportes recibidos por parte de los diferentes sectores, organizaciones o personas se procesarán y deberán citarse en el respectivo informe.”¹²²

Pablo Vásquez desarrolla lo manifestado en el artículo 26 del Reglamento de las Comisiones Especializadas, Permanentes y Ocasionales, aduciendo que la Comisión podrá valerse de todos los elementos que se encuentren a su disposición sean estos tecnológicos o físicos para la recepción de sugerencias y observaciones del mayor número de integrantes

¹²¹Concordante con el artículo 137 inciso segundo de la Constitución de la República: “Las ciudadanas y los ciudadanos que tengan interés en la aprobación del proyecto de ley, o que consideren que sus derechos puedan ser afectados por su expedición, podrán acudir ante la comisión y exponer sus argumentos.”

¹²²Pablo Arturo Vásquez Méndez, *Manual Práctico de Técnica Legislativa*, Quito, primera edición, 2012, p. 149.

de la colectividad que se vea involucrada en los ámbitos de un proyecto de ley; esta socialización constará en la redacción del informe que será puesto en conocimiento de los asambleístas miembros de la comisión, conforme al artículo 28 del Reglamento de las Comisiones Especializadas, Permanentes y Ocasionales, artículo que será materia de análisis más adelante.

2.2. Informe para primer debate.-

Se entiende que la Comisión luego de nutrirse con las observaciones verbales y escritas de los diferentes actores que tienen alguna relación con el proyecto de ley tanto del sector público como del privado, que cuentan con conocimientos bastante claros sobre la necesidad del proyecto, su contenido, sus errores así como sus fortalezas. Con estos insumos ya está en capacidad, luego de sistematizar las observaciones, de elaborar el informe¹²³ para poner en conocimiento del pleno de la Comisión, este borrador deberá ser analizado, debatido y aprobado por los comisionados dentro del plazo máximo de cuarenta y cinco días¹²⁴ (artículo 58 LOFL) a partir de la recepción del proyecto de ley. Cabe recalcar que la aprobación del informe para primer debate deberá ser adoptada por la mayoría absoluta de sus integrantes, en el caso de las comisiones con once integrantes se entiende por mayoría absoluta seis asambleístas y en el caso de las comisiones con nueve integrantes la mayoría absoluta será cinco, de existir un empate al momento de tomar una

¹²³ Conforme al Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales en su artículo 12 numerales 4 y 5 se establece que son funciones de los asesores de las comisiones: [...] 4.- Analizar y sistematizar las observaciones o propuestas de sus miembros, de otros asambleístas, de la ciudadanía, de organizaciones sociales y de todas aquellas personas naturales o jurídicas detalladas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa; 5.- Aportar en la elaboración de los informes de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales; [...]

¹²⁴ Conforme al artículo 58 inciso final de la LOFL se podrá pedir una prórroga para la presentación del informe la misma que no podrá ser superior a veinte días.

decisión se adoptará la que hubiese sido votada por quien esté ejerciendo la Presidencia de la Comisión.¹²⁵

Una vez analizado y debatido el proyecto de ley en el seno de la Comisión éste será puesto en conocimiento de la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, para el efecto deberá cumplir con los requisitos esenciales establecidos en el artículo 28 del Reglamento de las Comisiones Especializadas, Permanentes y Ocasionales, entre los que se puede mencionar:

- Antecedentes dentro de los cuales deberá constar un detalle de la sistematización de las observaciones realizadas por los asambleístas y los ciudadanos que participaron en las diferentes sesiones, foros, enlaces con casas legislativas y comisiones generales efectuadas por el pleno de la Comisión.
- Un detalle de la socialización del proyecto de ley que fuera realizado por la Comisión a cargo.
- En el caso de que la resolución sea la reformulación del articulado del proyecto se deberá acompañar el texto propuesto así como también la resolución, sea ésta de aprobación del informe para primer debate o la sugerencia de archivo del proyecto de ley.¹²⁶

Luego de la elaboración y entrega del informe para primer debate éste será distribuido vía correo institucional a los integrantes de la Asamblea Nacional por parte de Secretaría General, quienes podrán emitir sus observaciones al respecto incluso tres días después de concluida la sesión en la que fuera debatido el informe en el seno de la Asamblea. Observaciones que deberán ser tomadas en cuenta según su pertinencia en la elaboración del informe para segundo debate. Si el escenario fuera la sugerencia del archivo del proyecto de ley, el pleno de la Asamblea Nacional podrá resolver el archivo con la mayoría absoluta de sus integrantes, es decir con 63 votos por cuanto son 124 asambleístas en la actualidad.

¹²⁵ Ver Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanente y Ocasionales, artículo 15.

¹²⁶ Ver artículo 28 Reglamento de las Comisiones Especializadas, Permanentes y Ocasionales

2.3. Informe para segundo debate.-

En la elaboración del informe para segundo debate la Comisión tiene también un plazo de 45 días, (artículo 61 LOFL) contados a partir de la terminación de la sesión en la que se debatió el informe para primer debate, durante este tiempo deberá incorporar las observaciones de los asambleístas tanto las que se hayan formulado por escrito como las que durante la sesión en que se debatió el informe para primer debate fueran expresadas por los legisladores de manera oral en el momento de su intervención misma que tiene una duración máxima de diez minutos en la primera intervención y de cinco minutos en la segunda intervención conforme el artículo 130 de la LOFL.

El informe para segundo debate deberá reunir los requisitos del artículo 28 del Reglamento de las Comisiones Especializadas, Permanentes y Ocasionales que ya fue sujeto de análisis al momento de tratar sobre la elaboración del informe para primer debate. El informe que es puesto en consideración de los miembros de la Asamblea Nacional una vez aprobado por la comisión es entregado a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional quien a través de Secretaría General dispondrá que se ponga en conocimiento del resto de miembros de la Asamblea Nacional.

La sesión en la que se llevará a cabo el debate del segundo informe deberá ser convocada adjuntando el informe a ser debatido conforme lo dispone el numeral 9 del artículo 20 de la LOFL, por parte de la Secretaría General. El debate del segundo informe de un proyecto de ley debe ser realizado en una sola sesión (inciso penúltimo artículo 61 LOFL), el inicio del tratamiento del punto del Orden del Día en que se va a debatir un informe comienza con la intervención del Asambleísta ponente del informe, el cual fuera designado previamente y hecho constar dentro del informe, para esa intervención dispone de quince minutos (inciso cuarto Artículo 130 LOFL).

Constitución de la Republica:

“Art. 137.- El proyecto de ley será sometido a dos debates. [...]”

Todo proyecto de ley debe ser debatiendo por dos ocasiones en el seno de la Asamblea Nacional.

Luego de la intervención de los asambleístas que se hayan inscrito para participar en el debate se procederá a la aprobación del informe, ésta se podrá realizar de cinco formas distintas: por texto integro, títulos, capítulos, secciones, artículos. Durante la votación se pueden suscitar dos escenarios, el primero: la aprobación del proyecto de ley para lo cual se requerirá del voto afirmativo de la mayoría absoluta de sus integrantes lo que equivale con el actual número de asambleístas a sesenta y tres votos (incisos finales Artículo 53 LOFL). El segundo escenario: la aprobación de la sugerencia de archivo del proyecto de ley resuelto por la comisión, (inciso final artículo 61 LOFL) para el efecto es necesaria la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional (inciso final Artículo 60 LOFL).

Constitución de la República:

“Art. 137.- [...] Aprobado el proyecto de ley, la Asamblea lo enviará a la Presidenta o Presidente de la República para que lo sancione u objete de forma fundamentada. Sancionado el proyecto de ley o de no haber objeciones dentro del plazo de treinta días posteriores a su recepción por parte de la Presidenta o Presidente de la República, se promulgará la ley, y se publicará en el Registro Oficial.

Art. 138.- Si la Presidenta o Presidente de la República objeta totalmente el proyecto de ley, la Asamblea podrá volver a considerarlo solamente después de un año contado a partir de la fecha de la objeción. Transcurrido este plazo, la Asamblea podrá ratificarlo en un solo debate, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, y lo enviará inmediatamente al Registro Oficial para su publicación.

Si la objeción fuera parcial, la Presidenta o Presidente de la República presentará un texto alternativo, que no podrá incluir materias no contempladas en el proyecto; igual restricción observará la Asamblea Nacional en la aprobación de las modificaciones sugeridas.

La Asamblea examinará la objeción parcial dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de su entrega y podrá, en un solo debate, allanarse a ella y enmendar el proyecto con el voto favorable de la mayoría de asistentes a la sesión. También podrá ratificar el proyecto inicialmente aprobado, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros.

En ambos casos, la Asamblea enviará la ley al Registro Oficial para su publicación. Si la Asamblea no considera la objeción en el plazo señalado, se entenderá que se ha allanado a ésta y la Presidenta

o Presidente de la República dispondrá la promulgación de la ley y su publicación en el Registro Oficial.

Si la objeción fuera también por inconstitucionalidad, se resolverá primero la objeción por inconstitucionalidad. “

El inciso citado del artículo 137 y el contenido íntegro del artículo 138 de la Constitución de la República son concordantes con el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

3. Promulgación y publicación

Los actos de promulgación y publicación de una norma legal son parte del procedimiento legislativo y son necesarios para que una ley empiece a regir y se pueda entender conocida por todos conforme reza nuestro Código Civil.

Para Piedad García:

“Para que se integren en el ordenamiento jurídico, las leyes deben haber sido debidamente aprobadas conforme al procedimiento establecido y haber sido objeto de promulgación y publicación”¹²⁷

Empecemos tratando la promulgación, para Javier Hervada: “Las leyes se instituyen-esto es, comienzan a ser leyes o reglas obligatorias-cuando se *promulgan*; de ahí que el acto fundamental en el proceso de nacimiento de una ley sea la *promulgación*¹²⁸, con lo que se puede entender que a su criterio la promulgación es el nacimiento a la vida jurídica de una norma por consiguiente en los casos en que lo promulgado sea una derogación vendría a ser la muerte de la norma de la vida jurídica.

¹²⁷ Piedad García Escudero Márquez, *Manual de Técnica Legislativa*, Editorial Aranzadi S.A., España, 2011, p. 199.

¹²⁸ Javier Hervada, *¿Qué es el derecho?*, La moderna respuesta del realismo jurídico, p.152.

En cambio se entiende por publicación aquel “acto destinado a dar a conocer oficialmente la existencia y contenido de las leyes”¹²⁹ en nuestro país se lo realiza a través del Registro Oficial, y este es un requisito fundamental para su vigencia conforme lo determina el artículo 6 del Código Civil¹³⁰ concordantemente con el inciso final del artículo 137 de la Constitución de la República, sobre esta afirmación se puede citar una excepción que se producía en los Mandatos Constituyentes, pues en ellos se señalaba en la disposición final que: “este Mandato entrará en vigencia inmediatamente, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial”¹³¹ no hay que olvidar que estos mandatos eran emitidos cuando aún no estaba vigente la Constitución actual sino regía la Constitución Política de 1998.

Para Eduardo García de Enterría: “La promulgación, es decir, la proclamación de la ley y el mandato de su observancia como tal, es, pues, un acto del propio Monarca [...], en tanto que la publicación, esto es, el acto consistente en hacer público el contenido de la ley, es simplemente ordenada por él y realizada por el Ejecutivo”¹³². A pesar que en nuestro país no estamos frente a un régimen monárquico sino democrático, el efecto de ambos actos es similar, pues con la promulgación se dispone el acatamiento de la norma y con la publicación se publicita el contenido de la ley por disposición del órgano legislativo en unos casos y del ejecutivo en los casos de excepción en cuanto a leyes o por norma general en lo que a cuerpos de menor jerarquía se refiere.

¹²⁹ Piedad García Escudero Márquez, *Manual de Técnica Legislativa*, p. 202.

¹³⁰ “Artículo 6.- La ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial y por ende será obligatoria y se entenderá conocida de todos desde entonces. Podrá sin embargo designarse un plazo especial para su vigencia a partir de su promulgación.”

¹³¹ Mandato Constituyente N°1, Mandato Constituyente N°3, Mandato N° 23.

¹³² Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, *Curso de Derecho Administrativo*, p.121.

4. Trámite legislativo para proyectos calificados como económico urgente

Nuestra Constitución de la República vigente determina que el Presidente de la República es quién podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados con el carácter económico urgente, ésta deberá tramitarlo en treinta días máximo y en el caso de no cumplir con este plazo quien ejerza la Presidencia podrá promulgarlo como decreto-ley en el Registro Oficial.

“Art. 140.- La Presidenta o Presidente de la República podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. La Asamblea deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro de un plazo máximo de treinta días a partir de su recepción. El trámite para la presentación, discusión y aprobación de estos proyectos será el ordinario, excepto en cuanto a los plazos anteriormente establecidos. Mientras se discuta un proyecto calificado de urgente, la Presidenta o Presidente de la República no podrá enviar otro, salvo que se haya decretado el estado de excepción. Cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la Presidenta o Presidente de la República lo promulgará como decreto-ley y ordenará su publicación en el Registro Oficial. La Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla, con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución.”

Concordantemente la Ley Orgánica de la Función Legislativa ha previsto para estos proyectos de ley en el artículo 59 lo siguiente:

“Primer debate para proyectos de urgencia en materia económica.- Para el caso de los proyectos de ley, calificados por la Presidenta o Presidente de la República de urgencia en materia económica, las comisiones especializadas dentro del plazo de diez días, contado a partir de la fecha de inicio del tratamiento del proyecto de ley, presentarán a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, sus informes con las observaciones que juzguen necesarias introducir. Dentro del referido plazo, se deberá considerar un plazo no menor a los cinco primeros días, para que las ciudadanas y los ciudadanos que tengan interés en la aprobación del proyecto de ley, o que consideren que sus derechos puedan ser afectados por su expedición, puedan acudir ante la Comisión especializada y exponer sus argumentos. En ningún caso, la Comisión especializada podrá emitir su informe en un plazo menor a cinco días.”

Es decir las etapas del proceso legislativo de creación de la norma se mantienen los que cambian son los plazos establecidos para cada una como consecuencia de la fijación de treinta días plazos para su tratamiento determinados por la Constitución.

Es importante recalcar que a pesar de tener una diferencia grande en cuanto a la extensión de los plazos sigue dándose el trámite normal, pues la Ley Orgánica de la Función Legislativa no contempla ningún proceso diferente al ordinario. Es decir se deben realizar las mismas etapas de socialización, análisis, elaboración de informe, debate y aprobación en un tiempo menor. Podría considerarse quizá una falencia de la Ley Orgánica de la Función Legislativa pues debería suprimirse ciertos aspectos del proceso con la finalidad de brindar más tiempo para el debate y análisis de los proyectos sin embargo es la misma Constitución la que en el artículo 140 establece esta especie de candado, al determinar que el trámite será el ordinario y que lo que cambiaría serían los plazos, es decir el legislador lo único que pudo regular mediante la LOFL es la duración de cada etapa del proceso legislativo en los casos de los proyectos calificados como urgentes en materia económica.

4.1. Primer debate

Se ha previsto un procedimiento sumarisimo para la elaboración de los proyectos de ley que hayan sido calificados como urgentes en materia económica, reduciéndose de 45 días que es el tiempo para que sea presentando el informe por las comisiones especiales en casos de proyectos de ley ordinarios a 10 días; otro ejemplo claro de lo acontecido es que se prevé un tiempo no menor a 15 días en el trámite de proyectos sin la calificación de económicos urgentes para que, quienes tengan interés en la aprobación de un proyecto de ley acudan a la comisión con la finalidad de exponer sus argumentos, el plazo para esta misma actividad o etapa dentro del proceso legislativo de los proyectos urgentes es reducido a la tercera parte (5 días).

El razonamiento que cabe hacerse es: ¿los plazos concedidos para casos de proyectos de urgencia en materia económica son suficientes para la realización eficiente de la labor encargada?, por cuanto solamente en el proceso de selección de las entidades involucradas, el socializar con ellas el texto del proyecto de ley y recibir sus aportes pueden tornarse escasos los 15 días señalados en el artículo 58 de LOFL para el resto de proyectos de ley. Los desaciertos de forma que pueden resaltarse se cometen en los informes elaborados e incluso en algunos casos ya en el texto aprobado por el pleno de la Asamblea Nacional y enviados al ejecutivo; son errores que si se hubiese tenido más tiempo para la elaboración del informe o para una lectura más profunda tanto de los miembros de la comisión como del resto de asambleístas se hubiesen corregido, se han dado casos en que estas equivocaciones son observadas por el Presidente de la República quien objeta parcialmente el proyecto de ley, para que puedan ser corregidas, sin embargo hay otros errores que no pudieron ser depurados en ese filtro y fueron publicados en el Registro Oficial, motivo por el cual a los pocos meses de haber sido publicada una ley ya es presentado un proyecto de ley para reformar determinada disposición o artículo.

4.2. Segundo debate

“Art. 62.- Segundo debate para proyectos de urgencia en materia económica.- Para el caso de los proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica por el Presidente de la República, la Comisión especializada analizará y recogerá las observaciones al proyecto de ley, efectuadas por los asambleístas en el primer debate del Pleno.

Transcurrido el plazo de cuatro días, contado a partir del cierre de la sesión del Pleno, la Comisión especializada deberá presentar a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional el informe para segundo debate, al que deberá adjuntarse la sistematización de todas las observaciones presentadas.

La Presidenta o Presidente, recibido el informe para segundo debate, ordenará por Secretaría de la Asamblea Nacional, la distribución del informe a las y los asambleístas. Concluido el plazo de cuarenta y ocho horas, contado desde la distribución de los informes, la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, lo incluirá en el orden del día del Pleno para segundo debate, en el que se aprobará, modificará o negará el proyecto de ley.

El segundo debate se desarrollará en una sola sesión. Se podrá mocionar la aprobación del texto íntegro de la ley, o por títulos, capítulos, secciones o artículos. Asimismo, por decisión del Pleno de la Asamblea Nacional, se podrá archivar un proyecto de ley. Cuando en el plazo de 30 días, la Asamblea Nacional no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la Presidenta o Presidente de la República lo

promulgará como decreto ley y ordenará su publicación en el Registro Oficial. La Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla, con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución.”

Como podemos darnos cuenta de la simple lectura del artículo, se reduce el plazo que tiene la comisión para aprobar el informe para segundo debate del proyecto de ley calificado como económico urgente de 45 días a 4 días, tiempo incluso menor el establecido para la elaboración del informe para primer debate. Además se fija un plazo de 48 horas para que sea incluido en el orden del día el segundo debate, recordemos que en el texto de la ley vigente no se fijan plazos para que los informes sean incluidos en el orden del día, esa condición tan sólo hemos podido observar conforme al trabajo investigativo realizado, en el Mandato Constituyente No. 23 en el que se fijan plazos para ser agregados los debates en el orden del día.

Se conserva las características del segundo debate en cuanto al resto de proyectos de ley, puesto que el debate se debe realizar en una sola sesión y que su aprobación se puede efectuar de cinco maneras distintas, particular que ya fue analizado líneas atrás. Cabe recalcar que en estos proyectos de ley también se puede por decisión del Pleno de la Asamblea Nacional archivar el proyecto de ley sea en el primer debate o en el segundo.

El inciso final del artículo 62 de la LOFL es una repetición exacta del inciso final del artículo 140 de la Constitución de la República y que ha sido motivo de crítica y análisis por cuanto a pesar de estar constando en la Constitución hay quienes consideran que es contradictorio a otros artículos del mismo cuerpo legal como el artículo 132 que trata sobre los casos en que se requerirá de ley y menciona en su numeral tercero: para “crear, modificar o suprimir tributos” por ello se podría considerar inapropiado e inconstitucional que mediante un decreto-ley se legisle un tema que está establecido constitucionalmente debe ser regulado por ley, conforme al principio de legalidad tributaria.

Doctrinarios como Pérez de Ayala y Eusebio González manifiestan:

“En su concepción más restringida y propia, el principio de legalidad tributaria exige que sólo pueden ser impuestos por el Estado sacrificios patrimoniales a sus súbditos mediante ley, esto es, mediante aquella fórmula jurídica, que por expresión de una voluntad soberana (legítimamente constituida, en otro caso no sería jurídica) manifestada en la forma solemne establecida, tiene la virtud de obligar (la fuerza de ley), al tiempo que permite, en su caso, la apertura de los mecanismos revisores previstos ante la Jurisdicción.”¹³³

Constriniéndonos al evento de ser publicado vía decreto-ley un proyecto que contenga reformas a tributos o los cree, conforme a lo citado por estos autores, el sacrificio realizado por los contribuyentes para pagar tributos sólo se constituiría de manera legítima sí, se establece mediante la voluntad soberana entendiéndose esta última, como aquella delegada a los legisladores, quienes fueron electos para realizar la mencionada función, no así quien ejerza la Presidencia de la República quien fue electo para gobernar y en determinados casos colegislar.

“La regla clásica *delagatapotestas non delegari* fue enunciada en el párrafo 141 del Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil de John Locke en los siguientes términos: *El poder legislativo no puede transferir a otras manos el poder de hacer las leyes, ya que este poder lo tiene únicamente por delegación del pueblo. Es el pueblo el único que puede señalar cuál ha de ser la forma de gobierno de la comunidad política, y eso lo hace al instituir el poder legislativo, y señalar en qué manos debe estar. Una vez que el pueblo ha dicho: nos sometemos a lo que resuelvan tales o cuales personas y a ser gobernados por leyes hechas por tales formas, nadie puede tratar ya de imponer sus leyes, y sí únicamente por aquellas promulgas por quienes ese pueblo ha autorizado y elegido para semejante misión.*”¹³⁴

Para autores como Esmein y Linares Quintana el no respeto a lo manifestado traería como consecuencia la vulneración de la división de poderes y del rol principal del poder legislativo.¹³⁵ Aseveración que por la realidad jurídica de nuestro país, no calza a la perfección, por cuanto si bien es cierto el poder legislativo es elegido por el conglomerado

¹³³ José Luis Pérez de Ayala y Eusebio González, *Curso de Derecho Tributario*, p. 30.

¹³⁴ Alberto Ricardo Dalla Vía, *Emergencia Constitucional y Control de la Delegación Legislativa en Defensa de la Constitución...*, pp.1065 y 1066

¹³⁵ Parafraseando a Alberto Ricardo Dalla Vía, *Emergencia Constitucional y Control de la Delegación Legislativa en Defensa de la Constitución...*, p. 1066

para elaborar y aprobar leyes, es ese mismo poder ciudadano quien aprueba la Constitución y en ella se establece la excepción a la regla y de manera expresa es el pueblo quien delega y autoriza a quien ejerza la Presidencia de la República para legislar en determinados casos, es decir no delega el órgano legislativo como el caso citado.

A pesar de lo señalado se podría afirmar que los proyectos calificados como económicos urgentes que no pudieron ser aprobados por la Asamblea Nacional dentro de los 30 días plazo y nacieron a la vida como decretos-ley conforme al orden jerárquico de la aplicación de las normas, son jerárquicamente iguales a la ley con base a lo analizado en el primer capítulo.

Es importante tener en cuenta lo mencionado por Violeta Ruiz: “El Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente que una inadecuada técnica legislativa puede suponer una infracción de la seguridad jurídica, por lo que se constituye en un límite implícito a las leyes de presupuestos (SSTC 65/1990 y 76/1992)”¹³⁶

Por su parte José Osvaldo Cásas sostiene que:

“La seguridad jurídica requiere no solo de una adecuada técnica legislativa al momento de redactar una norma sino también de un ejercicio adecuado de la potestad tributaria normativa, entendida “como el atributo consustancial de todo Estado de instituir, de modo unilateral (a través de los órganos a los cuales se les ha asignado constitucionalmente la prerrogativa, en cuanto a depositarios de la voluntad popular), prestaciones patrimoniales coactivas a títulos de impuestos, tasas y contribuciones especiales [...]”¹³⁷”.

Lo manifestado por Casás, nos da una pauta sobre el deber ser de las normas, para que las mismas no atenten contra la seguridad jurídica, es decir que éstas sean emitidas desde el órgano que constitucionalmente está facultado para hacerlo por ser parte de sus atribuciones y adicionalmente haber sido elegido para cumplir con la función de crear y reformar normas.

¹³⁶ Violeta Ruiz Almendral, *Finanzas Públicas y Constitución*, p.136.

¹³⁷ José Osvaldo Casás, *La codificación tributaria como instrumento de seguridad jurídica* en Estudios de derecho tributario constitucional e internacional, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2005, p. 173.

Debido a la premura con la que son tratados los proyectos de ley calificados de urgentes en materia económica la técnica legislativa utilizada no es la más adecuada y el caso se agrava cuando el texto que entra en vigencia es el enviado por el ejecutivo sin que haya existido previamente un análisis, corrección o modificaciones (por causa de no haber aprobado el proyecto de ley la Asamblea Nacional en el plazo establecido), entrando en vigencia decretos-ley con errores de fácil detección.

Para concluir podemos señalar que la Constitución de la República merma los tiempos en cuanto al trámite dentro de la Asamblea Nacional de un proyecto de ley calificado como urgente en materia económica por motivos de la urgencia y necesidad de aprobación del proyecto de ley, este aparente apuro termina al momento de ser enviado el proyecto al ejecutivo para que lo sancione u objete, pues no se disminuye el plazo de 30 días establecido en el inciso final del artículo 137 de la CRE.

5. Análisis de la naturaleza de los proyectos económicos urgentes

Sin pasar por alto lo señalado por Rafael Oyarte:

“Para que un proyecto de ley sea tramitado por la vía de la urgencia, se deben presentar, de manera simultánea y unívoca, las siguientes condiciones: 1) que el proyecto sea iniciado por el Presidente de la República; 2) que verse sobre materia económica; y, 3) que sea calificado de urgente por parte de Primer Mandatario”,¹³⁸

Es adecuado analizar los elementos necesarios para determinar la existencia de la urgencia en materia tributaria así como la naturaleza económica en la materia tributaria. Destacando la falencia existente en nuestra legislación al no realizarse un estudio o análisis previo sobre las incidencias que puede tener la vigencia de una ley con contenido económico, aspecto contemplado en la legislación española donde se debe acompañar una memoria

¹³⁸ Rafael Oyarte Martínez, *Curso de Derecho Constitucional*, p. 112.

económica a los anteproyectos de ley, misma que es diferente de la memoria general con el objetivo de poder tener una estimación del coste a que dará lugar la aplicación de la nueva norma.¹³⁹

5.1.Naturaleza económica de la materia tributaria

Debido a que la legislación ecuatoriana no establece una definición de lo que debe ser considerado como económico urgente ni mucho menos fijan límites o parámetros dentro de los cuales puedan estar o no inmiscuidas ciertas materias es importante hacer uso de la doctrina con la finalidad de llenar este vacío y así poder absolver el epígrafe que a manera de cuestionamiento se ha establecido.

Para uno de los economistas más destacados Lionel Charles Robbins, “La economía es la ciencia que analiza el comportamiento humano como la relación entre unos fines dados y medios escasos que tienen usos alternativos.” Es decir para este autor la economía es considerada como el medio en que los seres humanos buscan satisfacer sus diferentes necesidades mediante recursos limitados.

“Conviene distinguir entre los fines y las metas. En el proceso combinado de la producción y el intercambio, un conjunto de recursos distribuidos entre los individuos se transforma en un conjunto de bienes económicos que se distribuyen entre los agentes participantes. Desde luego, ambas distribuciones no son necesariamente iguales. Definamos a los bienes económicos como los fines. Entonces podremos emplear la palabra meta para describir las motivaciones fundamentales de los varios agentes económicos.”¹⁴⁰

Entonces podríamos decir que la economía es la ciencia que estudia el comportamiento dado en la sociedad, en relación a la manera en que se usa los diferentes medios puestos a su alcance, de conformidad a la meta fijada para alcanzar determinados bienes económicos o fines.

¹³⁹ Ver: Piedad García Escudero Márquez, *Manual de Técnica Legislativa*, p. 57.

¹⁴⁰ C.E. Ferguson, *Teoría Microeconómica*, Fondo de Cultura Económica, México, 1969, p.10.

Sin embargo la línea divisoria entre la economía y las demás ciencias sociales deja abierta una puerta para que en estos proyectos de ley se aborden temas que a simple vista no deberían ser considerados económicos, por esto es conveniente analizar a profundidad esa línea divisoria y así determinar el porqué. Para esto nos apoyaremos en la doctrina económica.

Al hablar sobre las relaciones de la economía con otras ciencias Ferguson señala:

“En un sentido amplio, la ciencia social es el estudio de la totalidad del comportamiento social del hombre. Pero esa totalidad es tan extensa que ningún estudioso podría aspirar a obtener conocimientos profundos sobre todos los aspectos de tal comportamiento. Como señalo Smith hace mucho tiempo, la división del trabajo tiende a aumentar la producción física total; de igual manera, la división del trabajo académico tiende a aumentar nuestro conocimiento total de la acción social humana. Pero la división en comportamientos de un conjunto social no se obtiene con la misma facilidad que la división de trabajos en una línea de ensamble, y tampoco se congelan las líneas divisorias una vez que se las determina. Las varias áreas de estudio se relacionan entre sí, y es solo gracias a decisiones más o menos arbitrarias como se divide la materia de la ciencia social entre varias especialidades.”¹⁴¹

Lo citado concuerda con la teoría que, las ciencias sociales siempre están relacionadas unas con otras en una especie de convivencia pacífica en dependencia mutua.

Dicho en otras palabras:

“Es útil pensar que la economía tiene un *área central* como base, mas extensiones distantes en los dominios asociados más frecuentemente con otras disciplinas. El área central de la economía es un rango limitado de la actividad humana: aquel caracterizado por una *conducta racional* de parte de los individuos, al interactuar el uno con el otro a través de un mecanismo social particular, el mercado.”¹⁴²

Si hablamos de la economía como aquella ciencia que permite a quienes la practican convertirse en aquel científico que: “está preparado para hacer predicciones sobre las consecuencias sociales de las preferencias que se tienen”¹⁴³ y que usa estas teorías sobre los resultados de determinadas medidas en la sociedad para causar efectos deseados o

¹⁴¹ Ibídem, p.11.

¹⁴² Jack Hirshleifer, *Teoría de Precios y sus Aplicaciones*, Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A. México, 1985, p.8

¹⁴³ Ibídem, p.9

regular conductas no deseadas. Cabe formularnos como pregunta central, si pueden ser utilizados los impuestos como mecanismo para lograr ese fin, al respecto: “el modo de proceder del economista lo inclina a suponer que generalmente las preferencias son bastante *estables*, constituyendo solo raramente el elemento dinámico en los cambios sociales. Si se fija un impuesto al licor, su análisis supone casi automáticamente que el deseo de beber tiene la misma intensidad-sólo que el impuesto hace más caro solazarse en ese deseo. Para el economista esto representa un posible punto ciego y se recomienda precaución científica. Tómese el caso de licor: sin ningún cambio en los impuestos, la campaña de temperancia del padre Mateo, en Irlanda alrededor de 1850, redujo el consumo de bebidas alcohólicas de 12,000,000 a 5,000,000 de galones al año. [...]”¹⁴⁴ Con lo que a nuestra pregunta se le podría dar como respuesta que si bien es cierto la creación de un impuesto no es el único mecanismo para reformar conductas de la sociedad es una manera de lograrlo.

No solo Hirshleifer es partidario de esta teoría, existen otros autores que concuerdan con la misma y expresan: “la política fiscal supone la fuente de ingresos públicos por excelencia pero también tiene la virtud de influir, afectando las fuentes de capacidad económica (el gasto, la renta y el patrimonio), en la conducta de las personas y de contribuir de modo bastante efectivo a desarrollar los objetivos económicos y sociales del Estado.”¹⁴⁵ Esta teoría sobre el uso de los tributos como forma o mecanismo de intervenir en la economía con la finalidad de corregir o conseguir cambios en el accionar de quienes la conforman nos lleva a pensar que no es precisamente traída de los cabellos la afirmación sostenida por los gobernantes de turno que han utilizado la facultad de calificar proyectos de ley como económico urgente para regular conductas en la sociedad mediante

¹⁴⁴ Jack Hirshleifer, *Teoría de Precios y sus Aplicaciones*, pp.9-10.

¹⁴⁵ Francisco Álvarez Arroyo, *Reflexiones sobre la intervención de la norma financiera en la economía y la sociedad: fines fiscales y extrafiscales de los tributos* en *Del Derecho de Hacienda Pública al Derecho Tributario- Estudios en honor a Andrea Amatucci*, volumen II, Editorial Temis, Bogotá-Napoli, 2011, p. 281.

la implantación o reforma de tributos dentro del contenido del proyecto mismo, esto dejando de lado el deber de los ciudadanos de contribuir con el gasto público.

Es decir el tributo implantado mediante estos proyectos de ley tendría dos finalidades la primera y obvia a gran distancia la de recaudar fondos para el Estado es decir “el derecho de los poderes públicos a utilizar los tributos para conseguir los objetivos de política económica o social [...]”¹⁴⁶ y la segunda procurar con la instauración de un tributo la modificación de una conducta determinada, como en el ejemplo citado la disminución del consumo del alcohol.

Esto no es nuevo y tampoco sucede solo en nuestro país tal como lo señala Francisco Álvarez, “[los fines extrafiscales de los tributos son, probablemente, consustanciales al propio tributo, una herramienta que el legislador ha utilizado en todo momento y en todo lugar para la consecución de los fines del Estado.”¹⁴⁷ Recordemos que de acuerdo a nuestra Constitución el ejecutivo es considerado como colegislador (numeral 11 artículo 147) y por ende es quien remite los proyectos con contenido tributario al órgano legislativo.

Varona Alabern, citado por Francisco Álvarez en *Reflexiones sobre la intervención de la norma financiera en la economía y la sociedad: fines fiscales y extrafiscales de los tributos* afirma que: “no existe inconveniente en que esta función recaudatoria se combine con un propósito extrafiscal, que persiga otros fines de interés común amparados en la Constitución, tales como proteger la naturaleza (finalidad ecológica), redistribuir la renta, evitar la especulación de la vivienda, etc.”¹⁴⁸ Con lo manifestado el proyecto Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, se lo podría considerar como un tributo con un propósito extrafiscal de proteger el ambiente, política estatal consagrada en nuestra Constitución en el numeral sexto del artículo 83 que de manera

¹⁴⁶ Ibídem, p. 287.

¹⁴⁷ Ibídem, p.288.

¹⁴⁸ Ibídem, p.288.

textual consagra: Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.

5.2. La urgencia en materia tributaria

Urgencia, se entiende por urgencia aquella necesidad inminente, misma que debe ser satisfecha en el menor tiempo posible debido a su trascendental importancia y primordial requerimiento de solución.

Al unir la definición de los términos que conforman “económico urgente” podemos decir que son aquellos temas que tratan sobre la manera o mecanismo en que se van a distribuir los recursos con los que cuenta un Estado para satisfacer alguna necesidad que de manera primordial requiere atención y solución.

Es decir los proyectos de ley en su deber ser, tendrían que abordar temas relacionados con las formas de producción, la administración de los recursos, comercialización, entre otras, para satisfacer necesidades que por alguna razón no hayan sido consideradas dentro del presupuesto anual del Estado y que por su importancia no podrían esperar al trámite ordinario para ser satisfechas.

Para poder definir la urgencia de la expedición de una ley de una manera más profunda es importante hablar de conceptos desarrollados por la doctrina como es el de la “necesidad” por cuanto es consustancial al concepto de urgencia, sobre esta se dice que es la “respuesta a situaciones extraordinarias a las que no cabe atender con los procedimientos ordinarios.”¹⁴⁹ Debido a esa imperiosidad se debe legislar de una manera anómala, sin embargo para autores como Gaspar Ariño¹⁵⁰ de no existir este presupuesto la presencia del decreto-ley habrá de considerarse ilícito. Es decir que en nuestro país al no existir las

¹⁴⁹ Gaspar Ariño, *Economía y Estado- Crisis y reforma del sector público*, Editorial Marcial Pons, Madrid, 1993, p. 392

¹⁵⁰ *Ibíd.*, p.392.

condiciones (a pesar de éstas no encontrarse establecidas en la norma) necesarias para que un proyecto de ley sea calificado como urgente en materia económica su calificación sería ilícita.

Al respecto César Montaña considera que:

“Los proyectos de Ley calificados como urgentes en materia económica pueden abarcar la materia tributaria aparentemente por la estructura de la Constitución ecuatoriana puesto que, lo tributario es concomitante con lo fiscal en el marco del Título Sexto del Capítulo Cuarto que trata de soberanía económica, política fiscal y régimen tributario, que se entiende en la doctrina como lo esencial de la Constitución económica.”¹⁵¹

Criterio que es concurrente con el esgrimido por Gaspar Ariño para quien “la potestad legislativa de urgencia se puede utilizar en plena *normalidad institucional*. No es preciso tampoco que haya una declaración previa a la necesidad de utilizar el decreto-ley.”¹⁵² Ese es el caso de nuestro país, la emergencia económica requerida (bajo criterio de quien gobierna) no es necesaria que sea considerada como una situación de catástrofe, guerra civil, conmoción social o algún otro calificativo que se parezca; es suficiente que bajo la concepción de quien ejerza la función ejecutiva exista una necesidad imperante de crear o incluir en una norma determinado tema, sector o situación, para que sea parte de un proyecto de ley económico urgente y en el caso de éste no ser aprobado (por la Asamblea Nacional) dentro del plazo señalado sea emitido como un decreto-ley.

Retomando el análisis sobre la urgencia, quizá uno de los criterios más adecuados para definir “necesidad” que es el término equivalente utilizado en otras legislaciones, sea el dado por el Tribunal Constitucional español en su sentencia 6/1983 de fecha 04 de febrero:

¹⁵¹ César Montaña Galarza, entrevista sobre “De los Proyectos de Ley Económico Urgente y la Materia Tributaria en el Ecuador” Pregunta No. 1: ¿Conforme a su criterio, los proyectos de Ley calificados como urgentes en materia económica pueden abarcar la materia tributaria? Realizada el 28-01-2013.

¹⁵² Gaspar Ariño, *Economía y Estado- Crisis y reforma del sector público*, p. 393.

“[...] respecto a situaciones concretas de los objetivos gubernamentales, que, por *razones difíciles de prever* requieren una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes”

Con lo que se puede concluir que para el Tribunal, este procedimiento sumarísimo para la expedición de una norma tiene su fundamento en situaciones especiales que no fueron tomadas en cuenta con anterioridad y es prioritaria su solución por razones de gobierno. En la definición dada cabe como ejemplo el proyecto de Ley para la Regulación de los Créditos para la Vivienda, tramitado con el carácter de económico urgente por la Asamblea Nacional, al haber sido otorgada esa calificación por el ejecutivo, este proyecto cumplía los presupuestos mencionados, es decir tenía un contenido extrafiscal mismo que debido al surgimiento de manera súbita de la necesidad no pudo ser contemplado con anterioridad en el presupuesto general del Estado y por ende era necesaria una norma inmediata que regule el derecho a la vivienda.

En relación a la falta de una norma que determine que puede ser considerado urgente en materia económica y que no, hemos buscado en otros países cual es el tratamiento dado y encontramos una situación similar a España: “al no haber ningún requisito formal previo, es el propio Gobierno quien aprecia por sí mismo si existe o no la necesidad urgente y extraordinaria, y lo hace en el mismo acto de debatir si dicta o no el Decreto-Ley, sujeto luego al examen del Congreso de los Diputados en el obligado trámite de convalidación”¹⁵³ es aquí donde es vuelve más marcada la diferencia entre nuestra legislación y la española, si bien es cierto no se contempla en nuestra Constitución la facultad del órgano legislativo de convalidar lo promulgado por el ejecutivo vía decreto-ley, tampoco se le faculta a éste emitir un decreto-ley sin que con antelación exista una falta de cumplimiento previo del plazo otorgado al legislativo para tratar un proyecto de

¹⁵³ *Ibíd*em, p.393.

ley, guardando armonía ambas legislaciones en lo que respecta a la falta de requisito formal previo para determinar la urgencia.

Para concluir este análisis, existen variados argumentos sobre la constitucionalidad o no de los decretos-ley emitidos so pena del no cumplimiento del plazo establecido en la Constitución para que sean tramitados los proyectos de ley por la Asamblea Nacional, sin embargo “muy pocos decretos-leyes se impugnan por vicio de necesidad o urgencia”¹⁵⁴ cosa semejante ocurre en el Ecuador, a pesar de existir inconformidad por los temas abordados por los proyectos calificados como económicos urgentes, aún no existe una demanda de inconstitucionalidad, por ende la Corte Constitucional no se ha pronunciado.

Es menester citar dos conclusiones a las que llega Gaspar Ariño luego de su análisis sobre el decreto-ley:

- 1.- El Decreto-ley, decreto de necesidad y urgencia, decreto de seguridad o como se lo quiera llamar, constituye hoy un instrumento legítimo que se ha demostrado necesario para hacer frente a los problemas de ordenación socio-económica que tiene asumidos los gobiernos en el Estado moderno. La experiencia de más de medio siglo así parece acreditarlo.
- 2.- Es mejor tener prevista constitucionalmente esta institución, con los límites y controles que se juzguen adecuados, que acudir a ella, apoyados en una vaga fundamentación (como el estado de necesidad) o por gobiernos de hecho que suspenden el régimen constitucional ante situaciones de emergencia en las que se pone de manifiesto la incapacidad de las asambleas legislativas.¹⁵⁵

A pesar de que la legislación española y la ecuatoriana como ya se ha anotado tienen diferencias bien establecidas, las conclusiones dadas por el autor calzan de manera adecuada con nuestra realidad, por cuanto en verdad el decreto-ley es un mecanismo constitucionalmente permitido en el caso específico de los proyectos de ley calificados como económicos urgentes, que ha servido a los diferentes gobiernos como una herramienta para poder hacer frente a problemas de índole socio-económico.

Sin embargo se presenta un grave problema, el cual causa inconformidad en sectores políticos y de la academia al no estar regulada la definición de urgencia

¹⁵⁴ Ibídem, p.396.

¹⁵⁵ Ibídem, pp. 409,410.

económica dentro de la misma Constitución,¹⁵⁶ lo que se presta a la discrecionalidad de quien ejerza el poder ejecutivo, amparado en el estado de bienestar, entendido éste como el aumento del gasto público en proporción del producto interno bruto y el gasto social en proporción al gasto público.¹⁵⁷ Con fundamento en políticas keynesianas a través de las cuales se logra: “el crecimiento económico y la mejora de las condiciones de vida de las capas sociales más necesitadas de la población.”¹⁵⁸

Es decir, el Estado se ampara en la búsqueda del otorgamiento de un estado de bienestar a su población para calificar como económico urgente un proyecto de ley mediante el cual a su entender pueda proporcionar a su población tres ideas fundamentales: “Seguridad Social-Seguridad en el mantenimiento de los ingresos y seguridad en las prestaciones médicas-Oportunidades de educación y alivio de la pobreza”¹⁵⁹ quizá no sea una simple casualidad que esas sean la base las políticas públicas de los gobiernos y dentro de la exposición de motivos de los proyectos de ley calificados como económicos urgentes se ponga de manifiesto la intención del gobernante de crear un Estado de Bienestar. Con base en todo lo citado podemos resumir que si bien es cierto los proyectos calificados como urgentes en materia económica no tienen una regulación dentro de nuestra legislación sobre qué temas pueden ser o no ser considerados como económicos urgentes, un parámetro a utilizarse es la extrafiscalidad por su relación con la creación de tributos para atender temas de índole social que forman parte de la política pública de los estados.

¹⁵⁶ Entrevista realizada a César Montaña (28-01-2013) Pregunta No. 2: ¿Qué parámetros debería seguirse para la calificación de los proyectos de Ley como urgentes? Que no se afecte el buen vivir, las garantías, los derechos, el Plan Nacional de Desarrollo, que no atente contra los principios constitucionales del Ecuador. Lo criticable es que esos parámetros los pone por ahora una sola persona que viene a ser quien ejerce la Presidencia de la República.

¹⁵⁷ Parafraseando: Carlos Berzosa, *Pros y contras del Estado del Bienestar en Crisis económica y retroceso del Estado de Bienestar*, Editorial Tecnos, Madrid, 1996, p.259.

¹⁵⁸ Carlos Berzosa, *Pros y contras del Estado del Bienestar en Crisis económica y retroceso del Estado de Bienestar*, Editorial Tecnos, Madrid, 1996, p.259.

¹⁵⁹ *Ibíd*em, p. 260

6. Análisis de proyectos de ley promulgados como decreto-ley (régimen tributario interno)

Corresponde ahora hacer un análisis sobre los proyectos de ley calificados como económico urgentes en los últimos años, el trámite que recibieron en la Asamblea Nacional, su forma de expedición y finalmente un análisis de la pertinencia de su calificación como urgente y como económico.

Primero trataremos de los proyectos de ley calificados como urgentes en materia económica que entraron en vigencia como leyes, es decir fueron emitidas por la Asamblea Nacional. Entre los principales podemos mencionar el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Ley para la Regulación de los Créditos para la Vivienda, entre otros.¹⁶⁰

Los proyectos de ley mencionados, para ser aprobados en el pleno de la Asamblea Nacional, requirieron como al efecto se dio, la emisión de un primer informe mismo que debió ser aprobado dentro del seno de la Comisión y posteriormente debatido en el pleno de la Asamblea Nacional, en el que debe constar, la socialización realizada, las observaciones efectuadas tanto por los asambleístas como por las entidades y organismos públicos y privados que hubiesen tenido algún interés en el proyecto. Procedimiento semejante pero con un tiempo menor tuvo que haberse previsto para la elaboración y aprobación del informe para segundo debate, el cual fue conocido por el pleno de la Asamblea Nacional donde posteriormente al debate es necesaria la aprobación de los integrantes de la misma, para a continuación del trámite descrito en síntesis, sea remitido al ejecutivo con la finalidad de que éste lo objete o sancione.

¹⁶⁰Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado; Ley de Economía Popular y Solidaria; Código de Planificación y Finanzas Públicas; Ley para la Regulación de los Créditos para la Vivienda; Ley para la Defensa de los Derechos Laborales; Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social.

En páginas anteriores se realizó un análisis de los proyectos de ley que en los diferentes gobiernos han sido promulgados como decreto-ley por el órgano ejecutivo, corresponde a continuación efectuar un estudio de los proyectos aprobados con esa misma figura en los últimos años, constriñéndonos aquellos que contengan reformas de carácter tributario en su texto, por ser el tema que ocupa el presente trabajo investigativo.

7. Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado

7.1. Carácter económico de este proyecto

Aparentemente no se debió dar esa calificación pues el proyecto no tiene mayor relación con el ámbito económico tributario sino más bien con el ámbito ambiental. Recordemos que el artículo 135 de la Constitución de la República de manera taxativa y excluyente afirma que solamente es competencia de la Presidencia de la República presentar proyectos que reformen, creen o modifiquen impuestos en el mismo sentido el artículo 301 de la Constitución determina que solo por iniciativa de la Función Ejecutiva se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Hasta aquí podemos decir que efectivamente se dio cumplimiento con los artículos citados por cuanto fue el titular de la Función Ejecutiva quien presentó el proyecto de ley mismo que contenía en sus textos reformas tributarias. El artículo 140 de la Constitución de la República faculta al Presidente de la República el calificar un proyecto de ley como económico urgente, cabe recalcar que en ningún momento se establece que dicha calificación podrá ser refutada por órgano alguno, así como tampoco se determina los casos en que se podrá o no otorgar ésta calificación, mucho menos los requisitos necesarios o temas en los que cabe. Por ende el discutir la calificación es un tema que ni siquiera a la propia Asamblea Nacional la Constitución vigente faculta, puesto la misma lo que se establece es la competencia de la

Asamblea como órgano para conocer y tratar el proyecto de ley; pudiendo considerarse como un vacío legal.

Como ya se ha dicho el carácter económico de un proyecto de ley puede darse en función de los efectos que con el mismo se pretende obtener en la sociedad, esto dejando de lado que toda aplicación de una norma produce efectos en el conglomerado, retomando el análisis el proyecto de Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, éste tiene relación con el ámbito económico pues como ya se ha señalado todo tributo tiene injerencia en el accionar de la economía de un Estado sea incentivando conductas o castigándolas. Al contener este proyecto de ley, medidas con las cuales se pretende reducir la contaminación, reformar la conducta de la sociedad ejemplo: preferir las gaseosas o las aguas minerales en envase de plástico antes que en envase de vidrio. Conducta o predilección que se pretende modificar mediante el aumento del costo de la bebida conforme al envase a escoger, procurando de esta manera que el deber ser de la aplicación de esta reforma consiga calar en el usuario y su inclinación cambie en pro de un ahorro que ocasione como efecto colateral el disminuir la producción de envases de plástico y por ende de futuro material que contamine el ambiente.

Otras de las medidas contempladas en el proyecto de ley que tiene fines económicos por cuanto su recaudo aumenta los ingresos a las arcas fiscales y su implementación en teoría busca modificar conductas, es la creación del impuesto ambiental a la contaminación vehicular dentro del cual se establece como hecho generador¹⁶¹ la contaminación ambiental producida por los vehículos motorizados de transporte terrestre, impuesto que causó algunas críticas por la forma establecida para calcularlo ya que hay quienes consideran que el tipo de cilindraje no es precisamente el mejor, ni el más eficaz

¹⁶¹ “El artículo 13.- Agréguese a continuación del Título Tercero correspondiente a “*Impuestos a los Consumos Especiales*” de la Ley de Régimen Tributario Interno, el siguiente Título: [...] Artículo Xxx.- Hecho generador.- El hecho generador de este impuesto es la contaminación ambiental producida por los vehículos motorizados de transporte terrestre.”

método para determinar la contaminación, puesto que no se toma en cuenta factores como el rodaje que vendría a ser el verdadero hecho generador, algo bastante discutible por lo complejo que sería dar un seguimiento a que vehículos pasan estacionados y cuales circulan con más frecuencia, siendo el kilometraje un factor no muy creíble por ser perfectamente modificable en la actualidad por los vastos sistemas mecánicos e informáticos que alteran las verdaderas cifras.

7.2. La “urgencia” motivaciones de este proyecto

Es importante señalar y analizar el contenido de la exposición de motivos para determinar las justificaciones de quien presenta el proyecto de ley y así determinar si existió la necesidad imperiosa de la que se trato en el capítulo anterior al hablar sobre la urgencia; en este proyecto el ejecutivo menciona ámbitos ambientales tales como la necesidad de minimizar y mitigar los impactos negativos al ambiente de los procesos de producción. Así también se abordan temas importantes como la responsabilidad ambiental, la creación de hábitos amigables con el ambiente; para conseguir estos fines se busca la creación de incentivos a través del proyecto de ley. Se expresa el descontento del gobierno central de a pesar de constar dentro de sus competencias el establecer políticas públicas, sean los Gobiernos Seccionales Autónomos quienes decidan sobre los proyectos de inversión social por cuanto las leyes que regulan el sector hidrocarburífero y los recursos naturales establecen que serán ellos quienes reciban las utilidades generadas por las actividades hidrocarburíferas y mineras.

Se menciona adicionalmente que como todo proceso productivo independientemente de su tamaño produce contaminación, es imperioso adecuar la legislación de manera que sea posible minimizar o reducir los impactos negativos en el

ambiente como una manera incluso de crear en los ciudadanos una responsabilidad ambiental. A la vez se menciona que la reforma normativa es un mecanismo para motivar la implementación de hábitos de consumo más amigables con el ambiente o conductas ecológicas sociales y económicas responsables. Adecuando los derechos y obligaciones que en este sentido fueron consagrados en la Constitución de la República¹⁶² con la normativa de menor jerarquía.

La tal urgencia o estado de conmoción inminente que deba ser solucionado, no existió en nuestro país al momento de ser calificado el proyecto de ley como urgente en materia económica, pues si bien es cierto Ecuador no tiene cifras bajas en relación a la contaminación ambiental, sin embargo tampoco el escenario es crítico y por ende el requerir de una intervención urgente mediante un ley es una afirmación por lo menos exagerada, tomando en cuenta que si era menester una norma que regule conductas inadecuadas con el ambiente o la creación de incentivos para mejorar la actuación de la ciudadanía el proyecto de ley podía ser aprobado por vía “ordinaria”¹⁶³ siendo necesario para ello unos meses más.

Para concluir se puede mencionar que la parte final de la exposición de motivos presentan un resumen de la razón de ser de las reformas tributarias que contiene el proyecto de ley.

En cuanto al proyecto en sí, con su entrada en vigencia se reformó los siguientes cuerpos legales:

Ley de Régimen Tributario Interno,

Ley Reformativa para la Equidad Tributaria del Ecuador,

¹⁶² Numeral 6, “artículo 83.- Deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos [...] Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. [...]”

¹⁶³ Se usa comillas en la palabra ordinario, por cuanto se aclaró que dentro del procedimiento legislativo no existen varios tipos de trámites para la aprobación de una Ley, existe solo un procedimiento y por excepción se reducen los plazos para los proyectos calificados como económicos urgentes.

Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas,
Código de Procedimiento Civil,
Ley de Hidrocarburos; y,
Ley de Minería

Por cuanto no es el objetivo del presente trabajo entrar a detallar el contenido del articulado de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, culminaremos este análisis con el procedimiento efectivamente llevado a cabo en el órgano legislativo.

7.3. Legitimidad del trámite y su aprobación

Fue presentado en la Asamblea Nacional con la calificación de urgente en materia económica por el Presidente de la República, remitido a la Asamblea Nacional el 24 de octubre de 2011, en sesión del Consejo de Administración Legislativa, el mismo día se calificó el proyecto de ley, para esto se contó con el oficio No.UTL-2011-129 suscrito por el doctor Lincoln Larrea quien forma parte de la Unidad de Técnica Legislativa, conforme se detallo en el capítulo segundo al tratar sobre el proceso legislativo, este informe tiene el carácter de no vinculante. Dentro del mismo se hizo un análisis corto sobre el cumplimiento del contenido del proyecto de ley en relación a los requisitos establecidos en el artículo 136 de la Constitución y en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), en el informe se mencionó que el proyecto se refiere a una sola materia.

Con fecha 24 de octubre de 2011, el Secretario del Consejo de Administración Legislativa notificó con la Resolución tomada por dicho organismo a la Comisión Especializada del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control para que inicie el trámite. La Comisión luego de avocar conocimiento de la Resolución conforme

manda la LOFL realizó algunas sesiones en una de ellas se recibió a representantes del Servicio de Rentas Internas quienes resumieron el contenido del proyecto de ley así como también la importancia de su aprobación.

Es de destacar que sobre este proyecto de ley no se emitió informe alguno, conforme consta en la certificación emitida por el Secretario Relator de la Comisión Especializada del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, misma que fuera adjuntada al oficio remitido por el Secretario General de la Asamblea Nacional al Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República, dentro de la cual se certificó que no se instaló sesión alguna para tratar el informe de primer debate sea este de mayoría o de minoría en relación al proyecto en mención, así como tampoco para el tratamiento del informe para segundo debate. Es necesaria una aclaración en este punto. La sesión de la Comisión en la que se tenía previsto analizar, debatir y aprobar el primer informe no pudo ser instalada a falta de quórum, es decir conforme al artículo 15 del Reglamento de Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales¹⁶⁴ no estaban presentes al momento en que el Secretario Relator de la Comisión constato el quórum los seis asambleístas que se requerían para poder instalar la sesión. Sin embargo de acuerdo a las grabaciones de video de la sala de sesiones de la comisión, si se encontraban presentes asambleístas en número suficiente para instalar la sesión sin embargo salieron de las instalaciones de la comisión en el momento en que se procedía a constatar el quórum.

Otro dato importante y que es menester recordar, es la Sesión No. 136 del Pleno de la Asamblea Nacional convocada para el viernes 11 de noviembre de 2011 y que después del intento de algunos legisladores, se aprobó el modificar el Orden del Día para incluir el siguiente punto: “Análisis y Resolución sobre situación actual y futura del Proyecto de Ley

¹⁶⁴ Para la instalación (quórum) del pleno de la comisión especializada permanente y ocasional se requiere la presencia de la mayoría absoluta de sus integrantes. [...] Si la comisión está integrada por un número impar de asambleístas, por ejemplo si son 11 asambleístas la mayoría absoluta será 6. [...]

de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado.” Punto que fue tratado en la continuación de la Sesión No.136 efectuada el jueves 17 de noviembre de 2011 a las 15h30, sin embargo luego de un debate de varias horas la moción del Asambleísta Guilmar Gutiérrez sobre negar el proyecto Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, no fue aprobada por cuanto obtuvo tan sólo 53 (cincuenta y tres) votos.

Sobre esto último es conveniente realizar un análisis, si bien es cierto existe un vacío en la LOFL por cuanto no se establece la votación requerida para la negación de un proyecto de ley, sí especifica que es necesaria la mayoría absoluta de sus miembros para archivarlo,¹⁶⁵ haciendo la analogía que el archivo y la negación de un proyecto de ley causan iguales efectos se dedujo de manera arbitraria y hasta inconstitucional que se requería de mayoría absoluta para poder negar el proyecto de ley a pesar de haber estado presentes 100 asambleístas y por ende con los 53 votos que obtuvo la moción de negación del proyecto se alcanzó una mayoría, simple no absoluta.

Con base a lo actuado por la Asamblea la Presidencia de la República envió al Registro Oficial el proyecto de ley para que sea promulgado como decreto-ley.

Con todos estos antecedentes el proyecto Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado fue promulgado como decreto-ley en el Registro Oficial No. 583 del 24 de noviembre de 2011, justo al cumplirse treinta días de haber sido remitido a la Asamblea Nacional conforme el artículo 140 de la Constitución de la República, lo que en teoría nos llevaría a concluir que se cumplió el trámite previsto en el artículo antes citado para su entrada en vigencia.

¹⁶⁵ Inciso final del artículo 60 de LOFL

8. Ley Reformativa a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno

8.1. Carácter económico de este proyecto

El carácter económico de la reforma a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno está dado en función de lo que se pretendía recaudar con la implementación de las normas y reformas a las normas, pues se buscaba como se mencionó en la exposición de motivos, “un marco jurídico e institucional que acorde a la nueva Constitución de la República, permita un mayor control y participación del Estado ecuatoriano” en los beneficios económicos en función de la explotación de petróleo.

Las arcas estatales también se verían beneficiadas por cuanto se estableció la imposición del impuesto a la renta con una tarifa única y mínima del 25%. Ingreso que como es de sobra notar produciría un mayor ingreso al presupuesto del Estado por concepto de la actividad petrolera; lo que a la postre trajo consigo mayor capacidad estatal para solventar las necesidades de los ciudadanos. Sean estas vistas como el pagar sueldos a burócratas o invertir en gasto público, en la práctica se ocasionaron efectos económicos en la sociedad con la vigencia de esta reforma normativa.

8.2. La “urgencia” motivaciones de este proyecto

Al igual que en el proyecto de Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado se puede encontrar tanto en la exposición de motivos como en los considerandos que el fundamento para emitir la reforma estaba dado en función de la necesidad de adecuar la normativa existente a la nueva Constitución, un patrón común a partir de la expedición de la misma.

Recordemos que parte de la declaración de urgencia de un proyecto de ley en su deber ser, tendría que suscitarse en función de una situación excepcional que se produzca en la nación, en términos de algunos doctrinarios escenario conocido como estado de excepción mismo que presenta “notas comunes como apartamientos temporarios de reglas jurídicas, la emergencia encuentra fundamento dentro de los límites de la propia Constitución”¹⁶⁶ este apartarse de las reglas jurídicas podría estar dado en función de la especie de rompimiento del principio de reserva de ley al emitirse regulaciones para una materia determinada mediante un decreto-ley (entendido como excepción a éste principio), conforme a la Constitución(Art. 140 Constitución de la República), es decir a los límites en ella impuestos.

La necesidad imperiosa que es una de las formas de entender a la urgencia, en este caso concreto vendría dada en función del recaudo, es decir, entre más tiempo transcurría en emitirse la norma (entiéndase como las reformas planteadas por el proyecto de ley) el Estado no percibía ingresos, a esto se suma las disposiciones concretas de la Constitución como el establecer que el Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no sea inferior a los de la empresa que los explota¹⁶⁷, no hay que perder de vista los tiempos, la Constitución fue publicada en octubre de 2008, esta reforma fue planteada (presentada a la Asamblea Nacional) en junio de 2010, es decir más de año y medio después, quizá haya criterios que amparados en los términos imperiosa e inmediata consideren que la reforma podría haber sido tramitada de manera ordinaria sin necesidad de calificarla como económica urgente, en contraposición el ejecutivo planteó como argumento que no se podía esperar más para dar cumplimiento a lo consagrado en la Constitución.

¹⁶⁶ Alberto Ricardo Dalla Vía, *Emergencia Constitucional y Control de la Delegación Legislativa en Defensa de la Constitución...*, p. 1064.

¹⁶⁷ Artículo 408 de la Constitución de la República.

Ambas posturas son respetables y aceptables, preferimos aquella en la que el proyecto de ley debía tramitarse por la vía ordinaria por decirlo así, por cuanto a pesar que el país haya requerido de norma para aumentar el recaudo por concepto de la explotación de hidrocarburos se tuvo tiempo suficiente entre el 2008 y el 2010 para preparar un proyecto de ley y presentarlo sin necesidad de la calificación de urgente en materia económica, calificación que a la postre no permitió en este caso concreto que sean incluidas reformas propuestas durante el trámite legislativo por los miembros de la Asamblea Nacional

Aquí una acotación, conforme al Registro Oficial N. 244 de fecha 27 de julio de 2010, en el sumario consta la publicación de la ley, dentro del epígrafe de Función Ejecutiva, sin embargo el título no es decreto-ley como en el caso de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, sino que dice: “Ley” pese a lo cual de la lectura del oficio enviado por el Presidente en funciones al Director del Registro Oficial se colige que la disposición era promulgarlo como decreto-ley, a pesar que este puede ser un error sin malicia alguna, no está por demás anotarlo.

8.3. Legitimidad del trámite y su aprobación

Este proyecto de ley fue remitido a la Asamblea Nacional el 25 de junio de 2010, por la Presidencia de la República con el carácter de económico urgente, del mismo que con fecha 08 de julio de 2010 fue emitido informe para primer debate por parte de la Comisión Especializa del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, este fue conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional en sesión del 19 de julio de 2010. Posterior a las observaciones que recibiera en el Pleno de la Asamblea regreso a la Comisión para que sea elaborado el informe para segundo debate conforme al

procedimiento legislativo descrito. En la sesión del 21 de julio de 2010 fue analizado, debatido y aprobado el informe para segundo debate el cual contó con siete votos a favor (recordemos que la comisión está conformada por once asambleístas y para tomar decisiones se requería de la mayoría absoluta, en el presente caso son seis votos).

A pesar de haberse aprobado el informe para segundo debate un día miércoles, el mismo no fue puesto en el Orden del Día sino hasta cuatro días después, es decir se convocó a la Sesión No. 51 del Pleno de la Asamblea Nacional, para el domingo 24 de julio de 2010, día en el cual se terminaba el plazo de treinta días otorgados según el procedimiento establecido para este tipo de proyectos de ley por la Constitución de la República, adicionalmente la hora establecida para la sesión era las 19h45, quizá estos particulares fueron en cierta forma los motivos por los cuales no se pudo contar con el quórum necesario para poder instalar la sesión.

Con estos antecedentes, el 26 de julio del 2010 el Secretario General de la Asamblea Nacional de ese entonces, doctor Francisco Vergara certificó en su oficio No. SAN-2010-526, que hasta esa fecha “no existe pronunciamiento alguno respecto del referido proyecto de ley.” Fundamento suficiente para que el titular de la Función Ejecutiva envíe al Director del Registro Oficial un oficio mediante el cual dispuso la promulgación del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno como decreto-ley dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 140 de la Constitución de la República.

Para concluir queremos acotar que la Constitución de la República consagra el trámite a darse en el supuesto que no se cumpla con el plazo de treinta días por ella establecidos para que la Asamblea Nacional apruebe, niegue o modifique el proyecto, pues a manera de condición determina que el proyecto de ley será promulgado como decreto-ley

de ser este el caso. Es decir que la actuación descrita por parte del órgano ejecutivo en ambos proyectos de ley anteriormente citados, cumpliría con lo consagrado por la Constitución y en ningún momento se estaría atentando contra el principio de legalidad.

9. La extrafiscalidad como justificación de los proyectos económicos urgentes con contenido tributario

Es conveniente enfatizar que conforme a la Constitución de la República, dentro de las facultades y competencias de la Asamblea Nacional no se encuentra establecida la de poder cuestionar la calificación de urgente en materia económica otorgada a un proyecto de ley por el Ejecutivo, su facultad radica en dar el tratamiento establecido en el artículo 140 de la Constitución, y conforme al artículo 136 del mismo cuerpo legal es decir determinar si cumple los requisitos ahí detallados, de estos el más discutido es el que el proyecto de ley debe tratar de una sola materia conforme al análisis ya realizado podemos concluir que a pesar de que el contenido del proyecto de ley aborde reformas tributarias, este no deja de ser económico por cuanto la relación de ambas ciencias sociales es bastante simbiótica,¹⁶⁸ así como también mediante la implantación de tributos se pretende corregir conductas económicas y sociales de un conglomerado y por último mediante estas se lograrían alcanzar fines extrafiscales en la sociedad a implementarse. Como en nuestra legislación nada se ha dicho sobre estos fines, nos vemos en la necesidad de recurrir a la doctrina española donde se ha tratado sobre ellos, adicionalmente se los ha podido reducir a una enumeración, a continuación se transcribe la mencionada lista:

¹⁶⁸ Artículo 116 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial No. 52 de 22 de octubre de 2009. Facultades de la Corte Constitucional: 1.- Todas las disposiciones de una ley se referirán a una sola materia, por lo que debe existir entre todas ellas una conexidad clara, específica, estrecha, necesaria y evidente, de carácter temático, teleológico o sistemático. [...]

- “Protección de la familia.
- Progreso social y económico.
- Redistribución de la renta.
- Pleno empleo.
- Formación profesional.
- Seguridad e higiene en el trabajo.
- Asistencia y prestaciones sociales.
- Derechos de los trabajadores.
- Protección de la salud.
- Educación sanitaria, física y deportiva.
- Acceso a la cultura.
- Ciencia e investigación científica.
- Protección del medio ambiente.
- Patrimonio histórico, cultural y artístico.
- Derecho a una vivienda digna.
- Participación de la juventud en el desarrollo.
- Protección de los discapacitados
- Servicios sociales a la tercera edad.
- Defensa de los consumidores y usuarios.
- Desarrollo de organizaciones profesionales.”¹⁶⁹

Como podemos evidenciar en España a diferencia de nuestro país se encuentran establecidos parámetros para determinar la extrafiscalidad, independientemente de lo acertada o no que pueda ser esta clasificación, por la inclusión de la “participación de la juventud en el desarrollo” y otros aciertos como el “derecho de los trabajadores” y “protección a la salud”. Sin embargo basados en el análisis realizado sobre la relación existente entre la economía, los tributos y las normas, los fines extrafiscales son parte indiscutible de las características de todo proyecto de ley calificado como urgente en materia económica; la doctrina española cuenta con parámetros para clasificar los fines extrafiscales de una norma que a la larga son un detonante importantísimo para determinar qué temas pueden abarcar el contenido de un proyecto de ley “económico”.

Por esto es conveniente realizar una analogía entre el cuadro elaborado en el capítulo segundo en relación a los nueve proyectos de ley calificados como económicos

¹⁶⁹ Gaspar Ariño, *Economía y Estado- Crisis y reforma del sector público*, p.289.

urgentes en los últimos años con la lista citada y así determinar cuántos de los proyectos de ley tienen un contenido extrafiscal:

NOMBRE	CONTENIDO EXTRAFISCAL
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones	Progreso social y económico
Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado	Defensa de los consumidores y usuarios
Ley de Economía Popular y Solidaria	Progreso social y económico
Ley Reformativa a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno	Redistribución de la renta
Código de Planificación y Finanzas Públicas	Progreso social y económico
Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado	Protección del medio ambiente
Ley para la Regulación de los Créditos para la Vivienda	Derecho a una vivienda digna
Ley para la Defensa de los Derechos Laborales.	Derecho de los trabajadores
Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social	Progreso social y económico

Investigadora: María Fernanda Racines.

Matriz de elaboración propia a partir de información recopilada en la biblioteca de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Nota metodológica: Ver anexos conforme datos de la tabla.

Con la comparación realizada podemos determinar que los proyectos de ley calificados como urgentes en materia económica en los últimos años en nuestro país, cumplen con los fines de extrafiscalidad señalados por la doctrina española, es decir pueden ser considerados como temas contenidos en un proyecto de ley económico. Con lo que no se pretende justificar la calificación de urgencia, pues ese punto abarca otros parámetros, más si el incluirlos como temas susceptibles de ser incluidos en la materia económica.

Habiendo analizado temas como los principios de legalidad, de reserva de ley y democrático, la jerarquía de la ley y del decreto dentro en el Capítulo 1; considerando la reseña histórica de los proyectos urgentes en materia económica desde el ámbito constitucional hasta las normas de menor jerarquía que regían su tratamiento así como los cuadros que permitieron resumir su utilización en los diferentes gobiernos en el Capítulo II; el ejercicio analítico en este Capítulo III ha permitido conocer el proceso legislativo de la creación de las normas tributarias y en especial de los proyectos calificados con el carácter de económico urgente, analizar distintas visiones doctrinarias de lo tributario como urgente, la urgencia relacionada a la extrafiscalidad, sobre el elemento social lo que ha permitido analizar cada proyecto en forma particularizada clarificando al lector que el problema central no es el trámite del proyecto, sino como es utilizada la calificación de urgencia en materia económica de los proyectos de ley. Lo que me ha permitido llegar a las conclusiones que presento a continuación:

CONCLUSIONES

Las conclusiones objeto de esta investigación se presentan de forma directa y clara, de tal manera que el lector pueda comprender que no se trata del resultado de una crítica a un sistema, ni mucho menos a una norma en particular o a una técnica legislativa específica, puesto que el objeto de investigación va más allá de la retórica y de la dogmática jurídica, puesto que se adentró en el verdadero problema de investigación actual y pertinente para el nuevo paradigma constitucional y sus efectos en el régimen tributario vigente, de tal forma que se ha logrado concluir que:

1.- Sobre los principios de reserva de ley y legalidad, con base a lo analizado podemos concluir que en los proyectos calificados como urgentes en materia económica no son violentados, por cuando la misma Constitución de la República determina un trámite especial para su tratamiento y promulgación (principio de legalidad), así como también la salvedad de que su emisión sea mediante decreto-ley cuando el órgano legislativo no haya aprobado, negado o modificado en el plazo de 30 días el proyecto de ley (principio de reserva de ley).

2.- Por cuanto un proyecto de ley urgente en materia económica puede contener la creación, modificación o derogación de un tributo y conforme al artículo 140 de la Constitución de la República este tipo de proyectos de ley pueden ser emitidos por órgano distinto a la Asamblea Nacional, se crea una salvedad constitucional que permite que no se atente contra la voluntad del constituyente y por ende contra el principio democrático al promulgarse la ley por disposición del ejecutivo.

3.- A lo largo de este trabajo se ha podido desvirtuar la idea errónea de que lo tributario no es económico con base a criterios de diferentes autores relevantes tanto de la economía como del derecho, determinándose que la economía es una ciencia social, misma que para lograr su cometido mantiene relación simbiótica con otras ciencias entre ellas el derecho, apoyándose en ésta para mediante la creación o derogación de tributos procurar corregir o incentivar ciertas conductas del conglomerado. Ocasionado que un proyecto de ley con reformas tributarias a simple vista y sin un análisis previo se considere que abarca más de una materia, por cuanto el impacto económico que se pretende dar con su creación es la modificación conductas de la sociedad en distintos ámbitos sin por esto ser inconstitucional.

4.- El ámbito social ha generado mucha controversia en los últimos tiempos, quizá ha contribuido el que nos encontremos en un Estado garantista dentro del cual la extrafiscalidad juega una papel preponderante para alcanzar los fines anhelados. Es así que conforme a la comparación realizada en el capítulo final, se determinó que los proyectos de ley calificados como urgentes en materia económica en los últimos años poseían en su contenido temática relacionada con parámetros de la extrafiscalidad identificados por la doctrina española.

5.- La calificación de urgente en materia económica de un proyecto de ley ha sido utilizada de manera antojadiza y un tanto política durante la vida de nuestra nación, siendo adoptada como una forma de gobernar determinados temas que por la vía “ordinaria” o no podrían ser aprobados o requerirían de más tiempo. Estableciéndose la urgencia como el factor más manipulable por el poder ejecutivo en la calificación de los proyectos de ley conforme lo hemos podido aprender de los ejemplos analizados. Contribuyendo a lo manifestado el

hecho que la calificación no pueda ser susceptible de comprobación, revisión o algún tipo de control por parte de otra entidad estatal o función del Estado como podría ser la Asamblea Nacional al momento que el Consejo de Administración Legislativa califica el proyecto de ley, sin embargo para poderse realizar este control es necesaria una reforma a la Constitución de la República.

6.- Del análisis realizado en referencia a la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno podemos determinar que sí bien es cierto las motivaciones que llevaron al ejecutivo para calificar al proyecto de ley como urgente no son tan imperiosas como se pretende sostener, su relación con el ámbito económico sí existe ya que el aumento del recaudo de tributos trae consigo inminentes consecuencias en el presupuesto estatal. Sin embargo para su calificación debió contemplarse ambos aspectos y al no cumplir uno de ellos a cabalidad no debería haberse producido la calificación de urgente en materia económica.

7.- La Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado en su contenido abarca materias como derecho tributario, derecho ambiental, su vigencia busca reformar conductas y causar repercusiones económicas razón por la cual fue objeto de críticas sobre su constitucionalidad al aparentemente con su vigencia no cumplirse con el requisito de tratar sobre una materia, sin embargo como ya se analizó la materia económica no es aislada y se sirve de otras ramas de las ciencias sociales incluido el derecho para modificar las conductas en la sociedad, en el caso que nos ocupa a través de la creación de tributos se pretendió disminuir la contaminación ambiental. La calificación de urgencia de la emisión de esta ley también fue causa de debate por parte de legisladores, catedráticos y profesionales del derecho sin embargo la Constitución de la República no establece dentro

de las atribuciones de la Asamblea Nacional la potestad de pronunciarse sobre la pertinencia o no de la calificación dada a un proyecto de ley por el ejecutivo, por ende se estaría arrogando funciones que no le competen al pronunciarse en ese sentido, teniendo que sujetar su accionar al primer inciso del artículo 140 de la Constitución que manda a la Asamblea negar, modificar o aprobar en el plazo máximo de treinta días un proyecto de ley calificado como urgente en materia económica.

8.- En lo que respecta al plazo otorgado por la Constitución de la República para el tratamiento a los proyectos calificados como urgentes en materia económica, trae consigo la reducción de los días designados para cada etapa dentro del proceso legislativo, sin que por ello necesariamente se pase por alto alguna fase. Más si trayendo consigo la disminución de la calidad de la ley publicada, pues se tiene menos tiempo para poder socializar, debatir, incluir observaciones y pulir el texto a aprobarse.

9.- De todos los proyectos analizados hemos podido percibir que existe como factor común un desacuerdo por la forma en que se produce la calificación de urgente en materia económica, que está dada no en función de quien tiene la potestad de hacerlo, sino en el vacío legal que existe para efectuar la mencionada calificación, pues lo establecido en la Constitución de la República es bastante general y no brinda límites pudiendo en un escenario extremo permitir el establecimiento de normas que atenten contra derechos establecidos constitucionalmente. Pese a ello no hay por parte de la Corte Constitucional un pronunciamiento al respecto a pesar de ser ésta la competente para resolver las acciones de inconstitucionalidad en contra de los decretos leyes de urgencia económica¹⁷⁰ así como

¹⁷⁰ Ver: literal c), numeral 1., artículo 75 de Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional

tampoco se encuentra tramitando ninguna consulta sobre este particular. Lo que no le exime de la responsabilidad constitucional que tiene de pronunciarse sobre el tema.

RECOMENDACIÓN

Vistas las conclusiones cabe recomendar:

Es de suma importancia la vigencia de parámetros que permitan encasillar los temas que pueden ser tratados como económicos urgentes y el establecimiento de requisitos para determinar la urgencia de un proyecto de ley, por cuanto no existen. En nuestra legislación actual, el organismo llamado constitucionalmente para llenar este vacío es la Corte Constitucional conforme lo consagra el artículo 429 de la Constitución de la República, en el cual se la designa como el máximo organismo de control e interpretación constitucional. Por ello sería adecuado a través de una reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establecer mecanismos de vigilancia y control que permitan verificar que los proyectos de ley que se presenten con esta calidad cumplan realmente con los parámetros constitucionales (urgencia en materia económica) apoyándonos para ello en la doctrina, debiendo realizarse este control antes de ser presentados en la Asamblea Nacional pues un control posterior no contribuiría, en el caso de contener tributos pues conforme al artículo 301 de la Constitución la derogación de la ley o decreto-ley debe ser mediante un proyecto de ley de iniciativa de la Presidencia de la República.

Caso contrario al no existir regulación y al recaer esta facultad en una sola persona, quien si bien es cierto es la máxima autoridad de un Estado y fue escogida por la mayoría de la sociedad lo que en teoría nos llevaría a pensar que su ideología y accionar político está acorde con los deseos de la ciudadanía, pueden cambiar, es decir mandante y mandatarios pueden dejar de coincidir y el primero utilizar de manera inescrupulosa la atribución a él otorgada.

BIBLIOGRAFÍA

- Alexy, Robert, *El concepto y la validez del derecho*, Editorial Gedisa, España, 1997.
- Álvarez Arroyo, Francisco, *Reflexiones sobre la intervención de la norma financiera en la economía y la sociedad: fines fiscales y extrafiscales de los tributos en Del Derecho de Hacienda Pública al Derecho Tributario- Estudios en honor a Andrea Amatucci*, volumen II, Editorial Temis, Bogotá-Napoli, 2011.
- Ariño, Gaspar, *Economía y Estado- Crisis y reforma del sector público*, Editorial Marcial Pons, Madrid, 1993.
- Aroca Lara, Carlos Felipe, *Principio de reserva de ley en materia tributaria: análisis normativo y jurisprudencial*, Colombia, Universidad Externado de Colombia, 2005.
- Casás, José Osvaldo, *La codificación tributaria como instrumento de seguridad jurídica en Estudios de derecho tributario constitucional e internacional*, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2005.
- Dalla Vía, Alberto Ricardo, *Emergencia Constitucional y Control de la Delegación Legislativa en Defensa de la Constitución- Garantismo y Controles*. Ediar Sociedad Anónima Editora, Buenos Aires-Argentina, 2003.
- David, René, *Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos*, Madrid, Biblioteca Jurídica Aguilar, 1969.
- De La Garza, Sergio Francisco, *Derecho Financiero Mexicano*, Editorial Porrúa, México, 2006.
- De Vega García, Pedro, *Mundialización y derecho constitucional: la crisis del principio democrático en el constitucionalismo actual*, en Miguel Carbonell y Rodolfo Vázquez, comp., *Estado Constitucional y Globalización*, Editorial Porrúa, México, 2001.
- Ferguson, C.E., *Teoría Microeconómica*, Fondo de Cultura Económica, México, 1969.
- Ferreiro Lapatza, José Juan, *Instituciones de Derecho Financiero*, Editorial –Marcial Pons, Madrid, 2010.

- García De Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón, *Curso de Derecho Administrativo*, Tomo 1, Duodécima edición, Madrid, Civitas Ediciones S.L.
- García Escudero, Márquez Piedad, *Manual de Técnica Legislativa*, Editorial Aranzadi S.A., España, 2011.
- González Andrade, Sebastián, *Interpretando las palabras constitucionales y su límite en el principio democrático en Perspectivas Constitucionales*, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador, 2011.
- González, Eusebio y Lejeune, Ernesto, *Derecho Tributario*, 3ª edición, Plaza Universitaria Ediciones, Salmaca-España, 2003.
- Hervada, Javier, *¿Qué es el derecho?, La moderna respuesta del realismo jurídico*, Ediciones Universidad de Navarra S.A. 2da. Edición, España, 2008.
- Hirshleifer, Jack, *Teoría de Precios y sus Aplicaciones*, Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A. México, 1985.
- Lobo Torres , Ricardo, *Legalidad Tributaria y Armonía entre los poderes del Estado en Estudios de derecho tributario constitucional e internacional*, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2005.
- Montaño Galárza, César, entrevista sobre “*De los Proyectos de Ley Económico Urgente y la Materia Tributaria en el Ecuador*” realizada en Quito, el 28-01-2013.
- Montaño Galarza, César, *El deber de pagar tributos y los principios de legalidad y de reserva de ley en la Constitución del Ecuador de 2008*.
<http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/3130/1/05-TC-Monta%c3%b1o.pdf>. 25-04-2013.
- Pérez De Ayala, José Luis y González, Eusebio, *Curso de Derecho Tributario*, tomo II, 6.ª edición, Editorial de financiero, Madrid-España, 1991.

- Plazas Vega, Mauricio A., *Del realismo al realismo jurídico*, Monografías jurídicas, Editorial Témesis, Bogotá, 1998.
- Roldós Aguilera, León, *El abuso del poder-Los decretos-leyes económicos urgentes aprobados por el gobierno del Ing. León Febres Cordero*, Editorial El Conejo, Ecuador, 1986.
- Ruiz Almendral, Violeta, *Finanzas Públicas y Constitución*, Corporación Editorial Nacional, Quito, 2004.
- Ruiz Valerio, José, *Estado de derecho: el principio democrático vs. El control jurisdiccional en América Latina*, en Pedro Torres Estrada, comp., *Neoconstitucionalismo y Estado de Derecho*, Editorial Limusa, México, 2006.
- Oyarte Martínez, Rafael, *Curso de Derecho Constitucional*, tomo II, *La Función Legislativa*, Andrade & Asociados-Fondo Editorial, Ecuador, 2005.
- Schnapper, Dominique, *La democracia providencial- Ensayo sobre la igualdad contemporánea*, HomoSapiens Ediciones, Santa Fe-Argentina, 2004.
- Suing Nagua, José, *Descentralización y Gobiernos Autónomos*, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2010.
- Troya, José Vicente, ensayo sobre “*Las fuentes del derecho tributario en Ecuador, según la Constitución de 2008*”.
- Trzaskalik, Christoph, *Disposiciones Administrativas y Derecho Tributario en Tratado de Derecho Tributario*, tomo primero, editorial Temis, Bogotá-Colombia, 2001.
- Unión Interparlamentaria, *Democracia: Principios y Realización*, Ginebra-Suiza, 1998.
- Valdés Costa, Ramón, *Curso de Derecho Tributario*, Depalma-Temis-Marcial Pons, Santa Fe-Colombia, 1996.
- Vásquez Méndez, Pablo Arturo, *Manual Práctico de Técnica Legislativa*, primera edición, 2012.

Viciano Pastor, Roberto, *El sistema de fuentes del derecho en la Constitución Política de la República del Ecuador en La estructura constitucional del Estado ecuatoriano*, Corporación Editora Nacional, Ecuador, 2004.

NORMATIVA

Constitución de la República 2008

Constituciones del Ecuador años: 1929, 1945, 1946, 1960, 1967, 1979, 1993, 1996 y 1998

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

Código Civil del Ecuador

Ley Orgánica de la Función Legislativa

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional

Mandato Constituyente N.- 23

Reglamento Interno de la Función Legislativa

SENTENCIAS

Tribunal Constitucional ecuatoriano sentencia (STC-19-1987)

Tribunal Constitucional ecuatoriano sentencias (SSTC 65/1990 y 76/1992)

PÁGINAS DE INTERNET

[Troya José Vicente, Control de las leyes tributarias y los efectos de su declaración de validez, 2006, en http://uasb.edu.ec/bitstream/10644/1508/1/RF-06-TC-Troya.pdf](http://uasb.edu.ec/bitstream/10644/1508/1/RF-06-TC-Troya.pdf) - 14-08-2012

http://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=580:pleno-de-la-corte-constitucional-se-pronuncio-respecto-a-la-demanda-de-inconstitucionalidad-del-inciso-segundo-del-articulo-63-de-la-ley-organica-de-la-funcion-legislativa&catid=38:boletines-cce-2012. 18-10-2012.

ANEXOS

1. Exención a importaciones del pago de impuesto “Dragado Río Guayas” y timbre para “Sanidad Escolar”- R.O. Nro. 500
2. Ley de Impuesto a la Renta- R.O. Nro. 190
3. Codificación de la Ley de Impuesto a la Renta- R.O. Nro.- 305
4. Ley de Impuesto a las Bebidas Gaseosas- R.O. Nro. 448
5. Cálculo, liquidación y cobro del Impuesto a la Cerveza- R.O. Nro. 636
6. Ley del Sistema Impositivo al consumo selectivo de cigarrillos- R.O. Nro. 804
7. Ley de Minería- R.O. Nro. 225
8. Impuestos a los timbres del 5 por mil- R.O. Nro. 258
9. Reformas a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley Tributaria para la contratación de prestación de servicios en la exploración de hidrocarburos –R.O. Nro. 446
10. Ley de Fomento Artesanal–R.O. Nro. 446
11. Ley de fijación de sueldos y salarios mínimos vitales y elevación de sueldos y salarios de los trabajadores del sector privado y de los servidores públicos y de medidas tributarias para su financiamiento- R.O. Nro. 532.
12. Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno- Suplemento R.O. 244 del 27/7/2010
13. Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado- Suplemento R.O. No. 583 del 24/11/2011

ANEXO

1

REGISTRO OFICIAL

Administración del Sr. Dr. Dn. José María Velasco Ibarra,
Presidente Constitucional de la República

AÑO II — QUITO, LUNES 4 DE FEBRERO DE 1946 — NUMERO 500

Director:
Dr. CRISTOBAL SERRANO E.

TARIFA DE SUSCRIPCIONES:

INTERIOR:

Anual	\$ 30,00
Semestre	" 15,00
Trimestre	" 8,00
Número suelto	" 0,20

EXTERIOR:

Anual	\$ 45,00
-------------	----------

SUMARIO

Dcto.

- | | | | | |
|------|--|------|---|------|
| 1479 | Concédese nueva pensión de Retiro Militar al Teniente Coronel Carlos H. Granizo R. | 4158 | Rehabilitarse en el goce de la pensión de Retiro Militar al Teniente de Comisariato Alfonso G. Andrade Ll. | 4161 |
| 1480 | Concédese pensión de Retiro Militar al Mayor de Sanidad Militar, doctor Silvio Sánchez Garcés | 4158 | Pase de pensionistas de las Fuerzas Armadas | 4162 |
| 1481 | Concédese pensión de Retiro Militar al ex-Soldado Teodoro León | 4159 | Colócase en Disponibilidad a varios Oficiales de las Fuerzas Armadas | 4162 |
| 1482 | Concédese nueva pensión de Retiro Militar al ex-Sargento Abraham Moreano | 4159 | Cancelaciones de empleados civiles del Ministerio de Defensa Nacional | 4162 |
| 1483 | Concédese pensión de Retiro Militar al Cabo José Rafael Ubillús S. | 4159 | Fíjase gratificación para los Oficiales de las Fuerzas Armadas que prestan servicios en las vías de penetración a la Región Oriental | 4163 |
| 1484 | Concédese pensión de Retiro Militar al Sargento Segundo Francisco Coloma Pérez | 4159 | Colócase en Disponibilidad al Subteniente de Comisariato Luis A Carrillo Rueda | 4163 |
| 1485 | Concédese nueva pensión de Retiro Militar por Invalidez en forma definitiva, al ex-Suboficial Pedro Alonso Alvarado | 4160 | Autorízase al señor Jorge Salcedo Vargas para que pueda vender la lancha de su propiedad denominada "Pichincha" | 4163 |
| 1534 | Colócase en Disponibilidad a varios Oficiales de las Fuerzas Armadas | 4160 | Autorízase al señor Jorge Salcedo Vargas para que pueda vender la lancha de su propiedad denominada "Ana Pilar" | 4163 |
| 1539 | Reformas y adiciones al "Reglamento de Uniformes para el Ejército" | 4160 | Concédese pensión de Retiro Militar al Capitán Enrique Olmedo Guillermo Cabrera Córdova | 4164 |
| 1540 | Autorízase al señor Pedro Carvache para que pueda vender la lancha de su propiedad denominada "Marina" | 4161 | Concédese pensión de Retiro Militar al Subteniente Carlos Perex Bone | 4164 |
| 1541 | Autorízase al señor Misael Lucas González para que pueda vender la lancha de su propiedad denominada "Angelita" | 4161 | Concédese pensión de Retiro Militar al ex-Sargento 1º Pedro Manuel Prieur | 4164 |
| 1542 | Autorízase al señor Guillermo Beltrán para que pueda vender la lancha de su propiedad denominada "Georbel" | 4161 | Concédese pensión de Retiro Militar al ex-Sargento Benjamín Villarreal | 4165 |
| | | 4160 | Concédese pensión de Retiro Militar al Cabo Luis Felipe Ruano Ayala | 4165 |
| | | 4160 | Concédese pensión de Montepío Militar a hijos ilegítimos del Teniente de Carabineros García | 4165 |
| | | 4160 | Concédese nueva pensión de Retiro Militar al Mayor José Enrique Balda Hoyos | 4166 |
| | | 4160 | Concédese nueva pensión de Retiro Militar al ex-Sargento Francisco Elías Rivera Idrovo | 4166 |
| | | 4160 | Concédese nueva pensión de Retiro Militar al Teniente Coronel de Carabineros Julio César Samaniego Bucheli | 4166 |
| | | 4161 | Niéguase al Capitán Alfredo Jaramillo el aumento de pensión que solicita | 4167 |

1602	Dase de baja del personal en Disponibilidad al Mayor de Ingenieros Oswaldo Chiriboga Dávalos	4167
1603	Cancelaciones de pensiones de Retiro y Montepío Militar	4167
1604	Cancelaciones de empleados civiles del Ministerio de Defensa Nacional	4168
1605	Disposiciones militares, referentes a Oficiales comprendidos en el Decreto Ejecutivo N° 1319 de 14 de agosto	4168
1606	Pase del Subteniente en Disponibilidad Absalón R. Albuja	4168
1607	Nómbrese al Coronel Carlos A. Pinto Díaz, Jefe del Estado Mayor General del Ejército	4168
81	Destínase sumas de dinero para varios objetos	4169

ACUERDOS:

374	Aclaración a las disposiciones de creaciones de impuestos de los Decretos Legislativo y Ejecutivo de 23 de agosto de 1945, N° 551 de 27 de julio de 1944	4169
Marcas de Fábrica.		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

N° 1479

JOSE MARIA VELASCO IBARRA,

Presidente Constitucional de la República,

En uso de la atribución que le concede el numeral 22 del Art. 65 de la Constitución vigente; y vistos la sentencia dictada por la Junta Calificadora de Servicios,

Decreta:

Art. 1°—Con fecha 21 de julio del presente año, concédese nueva pensión de Retiro Militar al señor Teniente Coronel Carlos H. Granizo R., con la asignación mensual de quinientos veinte y siete sucres, ochenta centavos, equivalente al 2,90% de \$ 650,00, sueldo de su grado a la fecha de la baja; por haber comprobado un tiempo de 28 años, 7 meses y 14 días de servicio activo y efectivo, inclusive abonos, y haber cumplido con todas las demás formalidades legales; quedando cancelada, en consecuencia, la pensión mensual de cuatrocientos ochenta y cuatro sucres, setenta y cinco centavos, que disfrutaba en la actualidad. Tal concesión se hace con arreglo a los artículos 1°, 2°, 9° (caso 6°), 51, 63, 80, 81 y 114 (con sus reformas) de la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas, y de conformidad con los Decretos números 180, promulgado el 10 de julio de 1944, 548, de 9 de abril del año que decurre, y 696, de 8 de abril de 1942.

Art. 2°—El pago de la pensión señalada en este Decreto se aplicará a la correspondiente partida del Presupuesto General del Estado (Pensiones del Estado).

Art. 3°—Fijase esta Capital para residencia del expresado Oficial Superior, donde pasará sus Revisitas de Comisario.

Art. 4°—Encárgase la ejecución del presente Decreto a los señores Ministros de Defensa Nacional y del Tesoro.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 11 de setiembre de 1945.—(f.) J. M. VELASCO IBARRA.—El Ministro de Defensa Nacional,—(f.) Coronel Carlos Manchano C.—El Ministro del Tesoro,—(f.) Enrique Arizaga Toral.—Es copia.—El Subsecretario de Defensa, (f.) Mayor Alberto Mittmann S.

N° 1480

JOSE MARIA VELASCO IBARRA,

Presidente Constitucional de la República,

En uso de la atribución que le concede el numeral 22 del Art. 65 de la Constitución vigente; y vistos la sentencia dictada por la Junta Calificadora de Servicios,

Decreta:

Art. 1°—Con fecha 28 de agosto del presente año, concédese pensión de Retiro Militar al señor Mayor de Sanidad Militar, doctor Silvio Sánchez Garcés, con la asignación mensual de novecientos sesenta y cuatro sucres, cuarenta centavos, equivalente al 2,90% del sueldo que percibió a la fecha de la baja por haber comprobado un tiempo de 28 años, 7 meses y 4 días de servicio activo y efectivo, inclusive servicios civiles y abono por la septima clase de invalidez, y haber cumplido con todas las demás formalidades legales. Esta concesión se hace con arreglo a lo que disponen los artículos 1°, 2°, 9° (caso 6°), 21, 26 (caso 7°), 31 (letra a), 63, 80, 81, 110 y 114 (con sus reformas) de la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas.

Art. 2°—El pago de la pensión señalada en este Decreto se aplicará a la correspondiente partida del Presupuesto General del Estado (Pensiones del Estado).

Art. 3°—Fijase esta Capital para residencia del expresado Oficial Superior, donde pasará sus Revisitas de Comisario.

Art. 4°—Encárgase la ejecución del presente Decreto a los señores Ministros de Defensa Nacional y del Tesoro.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 11 de setiembre de 1945.—(f.) J. M. VELASCO IBARRA.—El Ministro de Defensa Nacional,—(f.) Coronel Carlos Manchano C.—El Ministro del Tesoro,—(f.) Enrique Arizaga Toral.—Es copia.—El Subsecretario de Defensa,—(f.) Mayor Alberto Mittmann S.

N° 1481

JOSE MARIA VELASCO IBARRA,

Presidente Constitucional de la República,

En uso de la atribución que le concede el numeral 22 del Art. 65 de la Constitución vigente; y vistos la sentencia dictada por la Junta Calificadora de Servicios,

Ejército, el mismo que, por consiguiente, dejará de constar de Director del Servicio Geográfico Militar.

Art. 2º—El señor Ministro de Defensa Nacional, queda encargado de la ejecución del presente Decreto.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 1º de octubre de 1945.—(f.) J. M. VELASCO IBARRA.—El Ministro de Defensa Nacional.—(f.) Coronel Carlos Mancheno C.—Es copia.—El Subsecretario de Defensa.—(f.) Mayor Alberto Mittmann S.

Art. 2º—De la ejecución del presente Decreto, encárgase al al Ministro del Tesoro.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 26 de Enero de 1946.

(f.) J. M. VELASCO IBARRA.

El Ministro del Tesoro,

(f.) E. Arizaga Toral.

Es copia.—El Subsecretario del Tesoro,

(f.) J. M. Avilés M.

MINISTERIO DEL TESORO

Nº 81

JOSE MARIA VELASCO IBARRA,

Presidente Constitucional de la República,

Decreta:

Art. 1º—Con aplicación a la partida Nº 10.013 "Imprevistos Generales" del vigente Presupuesto del Estado, asignase las siguientes cantidades para los objetos que se determinan a continuación:

A: señor Eduardo Ledesma de Jarrón, Delegado del Touring Club del Ecuador al Congreso de Touring y Automóvil Club que se reúne en Montevideo

Al señor Oswaldo González Cabrera, Delegado del Ministerio de Educación al Curso de Verano de la Universidad de Santiago de Chile, como ayuda de viaje

A la Delegación de Estudiantes Ecuatorianos al Congreso Interamericano que va a reunirse en Lima

Al doctor Arsenio Torres como ayuda de viaje a La Habana, como Delegado a la Semana de Estudios Sociales

Para pagar al doctor Eduardo Cuervo, representante del señor José A. Serricchio, por valor de nueve páginas de pergamino en la obra: "Naciones Unidas - Homenaje Póstumo al Presidente Roosevelt", contratadas por el Gobierno del Ecuador

A la señorita Argentina Mora y Rivera, para que pueda efectuar su viaje de regreso al país desde Chile, a donde fué en uso de una beca, US . .

Al Dr. Adolfo Loza de Riobamba, como ayuda del Gobierno para que pueda trasladarse al exterior a someterse a un tratamiento médico US . .

5.000,00

6.000,00

5.000,00

20.000,00

200,00

1.000,00

ACUERDOS:

Nº 374

EL MINISTRO DEL TESORO,

Considerando:

Que en los Decretos Legislativo de 23 de agosto de 1945 y Ejecutivo Nº 551, de 27 de julio de 1944, por los que se establecen el impuesto "Dragado Río Guayas" y el timbre para "Sanidad Escolar", respectivamente, puede dar lugar a que se apliquen a importaciones de Gobierno o a las diversas Dependencias u Organismos de él; y

Que, a fin de evitar cualquier duda sobre la aplicación de dicho impuesto y timbre, se hace indispensable detallar las importaciones que deben conceptuarse exentas de ellos, en concordancia con lo establecido en el Art. 367 de la Ley Orgánica de Aduanas:

Acuerda:

Art. 1º—Aclarar que las importaciones efectuadas por el Cuerpo Diplomático y Consular, las de Gobierno, de las Municipalidades, Cajas del Instituto de Previsión Social, Instituciones de Derecho Público, Ferrocarriles del Estado, así como las de determinados artículos hechos por las Compañías Mineras que según los contratos celebrados con el Gobierno gozan de liberación de derechos e impuestos y las de las Empresas que tienen contratos de protección industrial, de acuerdo con las estipulaciones de los mismos, se hallan exentas del pago del timbre para "Sanidad Escolar" e impuesto "Dragado Río Guayas"; para lo cual este Ministerio hará constar tales exoneraciones en los respectivos Acuerdos de liberación, en cada caso.

Comuníquese.—Quito, a 17 de diciembre de 1945.

(f.) E. Arizaga Toral.

El Subsecretario del Tesoro,

(f.) J. M. Avilés M.

Es copia.—El Subsecretario del Tesoro,

(f.) J. M. Avilés M.

ANEXO

2

.....

REGISTRO OFICIAL

EL ECUADOR HA SIDO, ES Y SERA PAIS AMAZONICO

ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

Administración de la Junta Militar de Gobierno,

AÑO I. — QUITO, MIERCOLES 26 DE FEBRERO DE 1964 — NUMERO 190

Director:

Dr. MIGUEL ANGEL ARBOLEDA NARANJO

Teléfono N° 12564

Tiraje: 5.000 ejemplares— Valor: 1,00

TARIFA DE SUBSCRIPCIONES

Anual	\$ 100,00
Semestral	55,00
Al Exterior	120,00
Número suelto	0,50

SUMARIO :

Dcto.	Págs.
JUNTA MILITAR DE GOBIERNO	
Decretos Supremos:	
329 LEY DE IMPUESTO A LA RENTA	27
Resolución:	
519 Concédese autorización provisional para constituir la Compañía Anónima "Industrias Viníficas C. A."	27
Acuerdo:	
596 Fijase cupos para la importación de aceites crudos	28

N° 329

LA JUNTA MILITAR DE GOBIERNO,

En uso de las facultades de que se halla investida,

Decreta:

La siguiente

LEY DE IMPUESTO A LA RENTA

CAPITULO I.

DEL IMPUESTO

Las ganancias ocasionales se gravan conforme a las disposiciones respectivas de esta Ley.

Art. 2.— La presente Ley establece un impuesto progresivo a la renta global de las personas naturales; y un impuesto proporcional sobre determinados grupos de rentas, así como sobre las utilidades no distribuidas de las empresas.

CAPITULO II

DE LAS RENTAS GRAVADAS

Art. 3.— Se considera renta, para los propósitos de esta Ley, los ingresos en dinero, especies o servicios que obtenga una persona, natural o jurídica, anual o periódicamente, del ejercicio de una actividad económica.

Art. 4.— Para los efectos que contempla esta Ley, las rentas se clasifican en los siguientes

- a) Rentas derivadas del trabajo en relación de dependencia;
- b) Rentas del trabajo o de la actividad profesional sin relación de dependencia;
- c) Rentas provenientes del trabajo con el concurso del capital;
- d) Rentas del capital puro sin el concurso del trabajo; y,
- e) Utilidades no distribuidas de las empresas de capital.

Art. 5.— Se tendrán como rentas provenientes del trabajo en relación de dependencia, las que obtengan los funcionarios, empleados y trabajadores, en virtud de nombramiento o de contrato de trabajo, expreso o tácito, como remuneración de su trabajo ordinario o extraordinario, incluyendo recompensas, gratificaciones y otras remuneraciones adicionales, por servicios que se presten en el Ecuador o fuera de él, y que sean abonadas por cuerpos gubernativos nacionales o extranjeros, por empresas domiciliadas o establecidas en el país o fuera de él.

Art. 6.— Están comprendidas en el grupo de rentas del trabajo de la actividad profesional sin relación de dependencia, todas las demás rentas que provengan exclusivamente del trabajo de

tistas, veterinarios, arquitectos, economistas, auditores, contadores, fotógrafos, etc., y las rentas de los comisionistas, agentes y representantes, siempre que éstos operen sin capital o con un capital inferior a cien mil sures.

Art. 7.— Corresponden al grupo de rentas provenientes del trabajo con el concurso del capital, las rentas de los negocios de carácter comercial, industrial o agrícola, incluyendo las rentas de miembros de sociedades de personas, de hecho o de derecho; utilidades de comerciantes, industriales, agricultores, propietarios de casas, arrendatarios y subarrendatarios de predios rurales, de minas y de otras explotaciones de inmuebles, etc., y, en general, todas las rentas que provengan del trabajo y del capital de los causantes y que no deben considerarse entre las rentas de capital puro o del trabajo profesional, según las disposiciones de esta Ley o de su Reglamento.

Las rentas que obtengan los propietarios de inmuebles urbanos o rurales, sin el concurso del trabajo, excepción hecha de las sociedades de capital dedicadas exclusivamente a la explotación de inmuebles, se considerarán en este grupo sólo para los efectos de la aplicación de la tasa proporcional.

Art. 8.— Están comprendidas en el grupo de rentas del capital puro sin el concurso del trabajo, en general, todas las rentas que provengan exclusivamente del capital sin el concurso de trabajo de los causantes, como: intereses de préstamos, de depósitos y de otras colocaciones o empleos de capital, intereses de refundaciones hereditarias; intereses sobre negocios a plazos; cuentas individuales de los socios en sociedades de capital o de personas; dividendos de acciones; intereses de inversiones de capital en el exterior; no exonerados por esta Ley; utilidades de arrendadores y subarrendadores de predios rurales y subarrendadores de predios urbanos, de minas u otros bienes muebles o inmuebles; regalías que perciban personas naturales o jurídicas por el uso que concedan de patentes, marcas o inventos que hayan adquirido.

Art. 9.— Pertenecen al grupo de utilidades no distribuidas de las empresas de capital, las que se destinen a reservas, a aumentos de capital o a cualquier otro fin semejante.

CAPITULO III

DE LAS RENTAS DE FUENTE ECUATORIANA

Art. 10.— Se consideran rentas de fuente ecuatoriana las que provengan:

a) Del trabajo en relación de dependencia, como:

1.— Las remuneraciones percibidas por trabajos realizados en el Ecuador por ecuatorianos o extranjeros residentes, pagadas por instituciones nacionales de derecho público o por instituciones de derecho privado, con finalidad social o pública, o por personas naturales o jurídicas de

derecho privado, nacionales o extranjeras, que tengan actividades económicas en el Ecuador;

2.— Las remuneraciones de ecuatorianos o extranjeros residentes en el Ecuador al servicio de organismos internacionales o de organismos y gobiernos extranjeros;

3.— Las remuneraciones percibidas por ecuatorianos o extranjeros que se hallen en el exterior, al servicio permanente del Gobierno o de organismos o empresas nacionales, o de empresas extranjeras con domicilio en el Ecuador;

4.— Las remuneraciones percibidas por ecuatorianos o extranjeros por trabajos ocasionales, realizados en el exterior y pagados por organismos públicos nacionales o por empresas con domicilio en el Ecuador; y,

5.— Las remuneraciones percibidas por extranjeros que se encontraren ocasionalmente en el Ecuador al servicio de empresas extranjeras, cuando permanezcan más de seis meses en el país.

b) Del trabajo o de la actividad profesional sin relación de dependencia, como:

1.— Los honorarios y remuneraciones pagados a profesionales ecuatorianos por cuerpos, nacionales o extranjeros, o por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país.

2.— Las remuneraciones de profesionales nacionales o extranjeros y de empresas que presten servicios a instituciones nacionales de derecho público o a instituciones de derecho privado con finalidad social o pública, empresas nacionales o establecimientos permanentes de empresas extranjeras, se sujetarán a las siguientes normas:

Primera: Si los servicios hubieren sido prestados en el Ecuador por personas nacionales, se considerará de fuente ecuatoriana el total de la cantidad pagada o acreditada; y si lo hubieren sido por extranjeros, se computará el impuesto sobre el sesenta por ciento (60%) de la cantidad total pagada o acreditada independientemente del tiempo de permanencia en el país; y,

Segunda: Si los servicios profesionales hubieren sido prestados en el exterior por personas naturales, se causará el impuesto sobre el ochenta por ciento (80%) de la remuneración percibida; si lo hubieren sido por personas jurídicas, se causará el impuesto sobre el sesenta por ciento (60%) de dicha remuneración;

c) Del trabajo con el concurso del capital, relativas a negocios de carácter comercial, industrial, agrícola o minera, realizadas en territorio ecuatoriano;

d) Del capital puro sin el concurso del trabajo, comprendiéndose en este grupo las de capitales, bienes o derechos situados, colocados o utilizados en el Ecuador, como:

1.— Las inversiones de dinero en el país, mediante préstamos, hipotecarios o no, emisión de bonos o cédulas hipotecarias, siempre que las mismas se hayan efectuado en el Ecuador, prescindiendo del lugar de emisión de los títulos o

de la situación de la empresa emisora y de la ubicación de los inmuebles a los que afectan las garantías reales dadas en esos préstamos o en la emisión de los títulos fiduciarios;

2.— Las utilidades de sociedades nacionales de capital prescindiendo del domicilio y nacionalidad de los accionistas. Esta misma norma se aplicará a las compañías extranjeras que operen en el país; y,

3.— Las utilidades que obtengan los establecimientos de dependencia extranjera que operen en el país y que sean remitidos al exterior; y,

e) Las utilidades no distribuidas de las empresas de capital producidas en el país.

Art. 11.— Igualmente, serán rentas de fuente ecuatoriana las que obtengan establecimientos permanentes de empresas extranjeras situadas en el país, por sus operaciones y actividades en el Ecuador.

Para los efectos tributarios, se considerarán establecimientos permanentes: casas matrices, sucursales, agencias, oficinas, almacenes de depósito, minas y pozos de petróleo, plantaciones, bosques, fábricas, talleres, estudios, consultorios y otros locales de carácter productivo permanente, en los que se realicen negocios por cuenta de la empresa extranjera.

En el Reglamento se determinará la condición del establecimiento permanente, o su inexistencia en los casos especiales y conforme a las normas que se hubieren aprobado en las relaciones internacionales, en las que se hubiere tratado de esta materia, y de acuerdo con el criterio de la fuente señalado en esta Ley.

Art. 12.— También se considerarán rentas de fuente ecuatoriana las que obtengan empresas de transportes o comunicaciones establecidas en el país, o establecimientos permanentes de empresas extranjeras, conforme a la definición que consta en el artículo precedente.

Cuando no se pudiese establecer la utilidad realizada en el país por los métodos normales contables, la Dirección General de Rentas celebrará acuerdos de vigencia temporal, para establecer la renta de fuente ecuatoriana, mediante cualquiera de los sistemas que se puedan emplear para este objeto; y, de no haberse celebrado el acuerdo, la Dirección determinará la renta de fuente ecuatoriana conforme a las reglas técnicas aplicables.

Art. 13.— Igualmente se considerarán rentas de fuente ecuatoriana las que provengan de la exportación de productos naturales ecuatorianos, que efectúen las empresas extranjeras por medio de agentes especiales, comisionistas, sucursales, filiales y otros establecimientos permanentes.

Se tendrá como renta de fuente ecuatoriana la diferencia entre el precio efectivo de colocación al por mayor vigente en el mercado de destino, y el de compra de los productos en el país, más los gastos que motiva la exportación, transporte y colocación de los productos, y, en general, los gastos necesarios para obtener la renta.

Cuando la operación de la compra en el país se efectúe por medio de un establecimiento permanente de la empresa extranjera, la persona o personas bajo cuya dirección se encuentre dicho establecimiento, deberán llevar en el país la contabilidad de los costos de la operación, inclusive hasta la venta al por mayor en el mercado de destino, y de los ingresos brutos de tales ventas. Las declaraciones se presentarán de conformidad con lo que dispone la presente Ley para las empresas radicadas en el país.

Cuando se opere por medio de intermediarios, cuya gestión termina en el embarque, éstos deberán llevar la contabilidad que establezca los costos de operación en el Ecuador hasta el embarque y la propia de su negocio, por separado.

Las personas y los intermediarios que se mencionan en los dos incisos anteriores deberán obtener de la respectiva empresa extranjera, los datos necesarios para determinar los ingresos por ventas de los productos importados del Ecuador y de los gastos imputables a ellas, y serán tenidos como sus representantes para todos los efectos tributarios, con responsabilidad personal y solidaria.

Cuando no sea posible establecer la renta de fuente ecuatoriana por información contable, según lo dispuesto en este artículo, o hubiere, a juicio de la Dirección General de Rentas, presunciones de no corresponder a la realidad del negocio en cualquiera de sus aspectos, se tendrá como utilidad el cincuenta por ciento (50%) de la diferencia entre el precio CIF efectivo de los productos exportados y el precio de venta al por mayor en los mercados de destino, y como renta imponible de fuente ecuatoriana, el sesenta por ciento (60%) de dicha utilidad.

Cuando se trate de exportaciones a países que no concedan crédito tributario por el impuesto pagado en el Ecuador, probada esta circunstancia, el Director General de Rentas reducirá el impuesto hasta un cincuenta por ciento (50%), según las condiciones del caso.

Las determinaciones de rentas de fuente ecuatoriana consideradas en este artículo podrán también efectuarse previa consulta o acuerdo con las autoridades tributarias del otro país interesado.

Art. 14.— Cuando se trate de exportación de bananos, el Banco Central del Ecuador retendrá el ochenta por ciento (80%) de los impuestos que establece esta Ley, sobre la utilidad presuntiva por racimo de banano exportado, según los coeficientes establecidos por el Ministerio de Finanzas, de acuerdo con los lugares de destino y la regulación que se considera en el artículo que antecede para los países que no conceden crédito tributario. Esos coeficientes se aplicarán por el Banco Central, mientras el Ministerio de Finanzas no lo notifique con los nuevos coeficientes que fijare posteriormente, de oficio o en virtud de solicitud documentada de los interesados.

Los contribuyentes que hubieren obtenido una

utilidad inferior a la que se hubiere determinado presuntivamente para el cobro del impuesto, podrán formular sus reclamaciones dentro del plazo de prescripción de un año que establezca, para el ejercicio de este derecho, la presente Ley.

La determinación de la renta imponible se hará de conformidad con el artículo anterior.

Si hubiere diferencia favorable al contribuyente, la Dirección General de Rentas emitirá la correspondiente Nota de Crédito, la misma que será recibida por el Banco Central en pago del impuesto de que trata este artículo.

Art. 15.— Los casos pendientes respecto de rentas de exportación, se ceñirán a los dos artículos precedentes.

Art. 16.— Las empresas de seguros establecidas en el país, así como las extranjeras que operen en el Ecuador por medio de establecimientos permanentes, incluyendo las operaciones que se ejecuten por medio de agentes, deberán impuesto sobre las utilidades que obtengan de esas operaciones. Cuando no se pudiese establecer las utilidades que obtengan los establecimientos permanentes de empresas extranjeras, por falta de una contabilidad adecuada; la Dirección General de Rentas, tomando en cuenta las condiciones especiales de la actividad desarrollada en el País, así como las utilidades que obtienen las empresas similares cuya utilidad conozca, previo informe de la Superintendencia de Bancos, fijará coeficientes de utilidad neta.

El impuesto que corresponda satisfacer en el caso de cesión o reaseguros contratados con empresas que no tengan establecimientos permanentes en el Ecuador, será retenido y pagado por el cedente o reasegurado, sobre la utilidad neta tarifaria, que se establecerá siguiendo igual procedimiento al indicado en el inciso anterior, la misma que no excederá del dos por ciento (2%) del importe neto de las primas.

Art. 17.— Cuando las empresas productoras o distribuidoras de cintas cinematográficas tengan en el país un establecimiento permanente o agente autorizado, éstos estarán obligados a presentar las declaraciones de renta, a retener el impuesto que se cause conforme a esta Ley y a pagarlo en las respectivas Jefaturas Provinciales de Recaudaciones. Los dueños o empresarios de teatros serán responsables, en iguales términos, cuando remesen o acrediten directamente a las casas productoras o distribuidoras la parte del ingreso que les corresponda.

La utilidad de fuente ecuatoriana se computará en la siguiente forma: del ingreso que corresponda a dichas casas se deducirá el treinta y cinco por ciento (35%) por concepto de costos de producción. Además, se deducirán los gastos que soporten esas casas por publicidad, comisiones, gastos de oficina y demás gastos que no deban los dueños de los teatros a los empresarios. El saldo se considerará utilidad de fuente ecuatoriana y sobre él se pagará el impuesto establecido para sociedades extranjeras de capital.

Cuando los alquileres de películas fueren entregados directamente a las casas productoras, serán responsables del impuesto los propietarios o arrendatarios de teatros, como agentes de retención; y en los casos en que dichos alquileres fueren entregados a los agentes de las casas productoras, éstos estarán obligados a presentar las respectivas declaraciones y a pagar los impuestos correspondientes, tanto por la renta de las casas que representan, como por las comisiones que ellos perciban.

Se presumirá de derecho que la utilidad neta de fuente ecuatoriana no es inferior al quince por ciento (15%) del ingreso bruto cuando tengan establecimiento fijo, y del veinte por ciento (20%), en los casos en que dichas empresas no tengan representantes o agentes en el país.

CAPITULO IV

DE LA IMPUTACION DE LOS INGRESOS Y EGRESOS AL AÑO FISCAL

Art. 18.— En el Reglamento se determinará todo lo relativo al cierre de operaciones de un ejercicio; ejercicios que se inicien avanzado el año; sistemas de imputación, conforme a los principios del origen del crédito o de su pago; intereses ganados, devengados o percibidos, y todo lo demás que sea conveniente regular para la correcta aplicación e imputación de los ingresos o las rentas y los gastos respectivos, al ejercicio fiscal.

Mientras se dicte el Reglamento que se menciona en el inciso anterior, continuarán aplicándose las regulaciones legales o reglamentarias que sobre estos asuntos existan.

CAPITULO V

DE LAS RENTAS DE CONYUGES

Art. 19.— Cada cónyuge declarará separadamente las rentas que hubiere percibido.

La rebaja general será de diez mil sueres para cada cónyuge. Las rebajas por cargas de familia se aplicarán al cónyuge que las hubiere soportado, pero no habrá rebaja alguna para el otro cónyuge.

La tasa del impuesto aplicable a la renta de cada uno de ellos, será la efectiva que correspondiere a la suma de las rentas netas imponibles de ambos cónyuges.

En caso de separación conyugal judicialmente autorizada, no regirán los tres incisos anteriores y se aplicarán las reglas generales, considerándose como rentas separadas.

CAPITULO VI

DE LAS SUCESIONES, CESACION DE NEGOCIOS Y SOCIEDADES EN LIQUIDACION

Art. 20.— Las rentas que correspondan a los bienes de una sucesión se computarán y liqui-

darán, sin la rebaja general, como si el causante viviese y fuese suya la obligación tributaria, hasta que se perfeccione la partición total de los bienes.

Art. 21.— En el caso de terminación de actividades productivas de carácter individual, se presentará una declaración a la Dirección General de Rentas, estableciendo la renta obtenida hasta la fecha de la cesación, con los documentos que, conforme a la Ley, deben acompañarse. Esta obligación registrará si el contribuyente hubiere cesado en todas sus actividades; de lo contrario, la declaración susodicha la presentará en la fecha que corresponda a la de los otros negocios o actividades que ejerza, y en cuanto a la terminada, se limitará a dar aviso, para los efectos del caso.

Art. 22.— Cuando una sociedad vaya a liquidarse, se comunicará a la Dirección General de Rentas este hecho, a fin de que de las instrucciones del caso en lo que a la obligación tributaria se refiere; y, mientras se produzca la distribución de los bienes, las sociedades seguirán sujetas a las disposiciones generales de la presente Ley, pudiéndose aplicar lo dispuesto en los artículos anteriores, en lo que fuere del caso, para imputación de la renta.

La facultad que tiene la Dirección General de Rentas para fiscalizar los resultados de los cinco años anteriores, se ejercerá aún para el caso de disolución de sociedades de capital, y si se estableciere que se han ocultado utilidades y que éstas se han distribuido entre los socios, éstos serán responsables por el impuesto correspondiente en proporción al valor de las acciones que tenían en la sociedad, adeucando esta obligación tributaria exceda del valor de dichas acciones.

CAPITULO VII

DE LAS RENTAS DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA URBANA

Art. 23.— Las rentas provenientes de la propiedad urbana arrendada o subarrendada se establecerán de conformidad con los respectivos contratos, si fueren escritos, o a base de las autorizaciones otorgadas por la oficina municipal de inquilinato y de otras pruebas satisfactorias que presenten los contribuyentes.

Art. 24.— Se presumirá que las casas habitadas por sus propios dueños, cuyo avalúo comercial sea superior a cien mil sucres, producen una renta-servicio bruta equivalente al seis por ciento (6%) de dicho avalúo. Para determinar la renta neta gravable se deducirán los elementos que se consideran en el Art. 45, además de las otras deducciones permitidas por la ley.

CAPITULO VIII

DE LOS DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS

Art. 25.— Se entenderá por dividendo, para los efectos de esta Ley, toda ganancia o beneficio

pagado, acreditado o distribuido por una sociedad a sus accionistas, ya se realice el pago en dinero o en especie, sea que se tome para ello utilidades sociales del ejercicio respectivo, sea que se distribuyan reservas u otros fondos de utilidades pretéritas, así se hubiere pagado impuesto sobre esas reservas o fondos; pero en este último caso se deducirán los impuestos pagados.

Los dividendos - acciones, esto es, las acciones que se emitan y repartan a los accionistas tomando de reservas que hubieren pagado impuestos en virtud de esta Ley, o de reservas de capital no gravables, no deberán impuestos por concepto de la reliquidación, según lo dispuesto en el inciso primero de este artículo. Esta exención no beneficiará a las acciones que adquiriera la misma empresa.

Art. 26.— En los documentos que contengan contratos de mutuo, sea cual fuere su nombre, incluyéndose las letras de cambio que se giren por operaciones distintas del giro comercial ordinario en los que no se estipule intereses o el pacto sea inferior al máximo convencional permitido de acuerdo con la Ley, se computará este interés, a menos que se justifiquen, ante el Director General de Rentas, razones especiales y extraordinarias, como las de consanguinidad directa u otras que merezcan ser tomadas en cuenta, a juicio de dicho Director.

Art. 27.— Deben inscribirse en las oficinas de Registro de la Propiedad o en las Jefaturas Provinciales de Recaudaciones, todos los contratos o documentos que causen impuestos de timbres o a la renta, como mutuos, depósitos, prendas y letras de cambio o pagarés a la orden.

En el Reglamento respectivo se contemplarán los plazos para efectuar las inscripciones y las multas que se impondrán por falta o tardanza de las mismas, de conformidad con estas normas básicas:

a) Las multas por falta de inscripción o inscripción tardía se graduarán de conformidad con la mora en la inscripción y el plazo o vencimiento de la obligación;

b) La multa será de un mínimo de dos por ciento (2%) y de un máximo de diez por ciento (10%), según el principio contemplado en la norma que precede; y,

c) La falta de inscripción de documentos que formen parte de bienes sucesorios, dará lugar a una multa del tres por ciento (3%), la misma que se considerará deuda de la sucesión.

Las inscripciones no causarán derecho ni impuesto alguno.

CAPITULO IX

DE LAS RENTAS DEL COMERCIO, LA INDUSTRIA, LA AGRICULTURA Y OTRAS ACTIVIDADES

Art. 28.— Cuando la actividad profesional u otra actividad lucrativa de trabajo personal se complemente con una explotación comercial, o

cuando los profesionales operen con instalaciones de capital, que no sean las que se pueden considerar como normales e indispensables de la respectiva profesión, como sanatorios, clínicas y otros establecimientos análogos, y no se lleve contabilidad separada que determine los ingresos propios de la actividad profesional personal, el resultado global se considerará como renta del trabajo con el concurso del capital.

Art. 29.— Las rentas que obtengan las sociedades de personas, y, en general, las sociedades que no tengan su capital dividido en acciones, se considerarán como si se hubieren distribuido totalmente entre sus miembros; por tanto, se añadirá a la parte de la renta percibida por cada socio la que le corresponda en la porción de la renta social que se haya reservado, de conformidad con las obligaciones contractuales y la proporción que en la renta social tenga derecho.

En el Reglamento se determinará la manera de efectuar esa distribución respecto de las utilidades reservadas y de otras remuneraciones y participaciones a las que tengan derecho los socios.

Art. 30.— Los sueldos que se asignen a los propietarios de negocios individuales, comerciales o industriales, así como a sus cónyuges o hijos menores, se sumarán a los resultados del negocio. En cuanto a los sueldos que se señalen a socios y gerentes de sociedades de capital o de personas, se estará a lo dispuesto por el literal c) del Art. 43.

Art. 31.— Se presumirá, para efectos de liquidación de los impuestos establecido en la Ley, que la utilidad neta o renta de quienes ejecutan actividades agrícolas es la siguiente:

- a) Tres por ciento (3%) sobre el avalúo comercial municipal, para el caso del propietario que explota personalmente su predio;
- b) Cuatro por ciento (4%) cuando el propietario arrienda su propiedad;
- c) Tres por ciento (3%) para el caso del arrendatario; y,
- d) Dos por ciento (2%) para el caso del subarrendador o subarrendatario.

Art. 32.— Cuando en las empresas de construcciones no se llevare contabilidad adecuada o la llevada no estuviere de acuerdo con las instrucciones que haya impartido la Dirección General de Rentas, regirán las siguientes normas para establecer la utilidad neta del negocio:

- a) Se estimará que la utilidad neta es del ocho por ciento (8%) del valor que haya costado la obra, cuando el contrato es de simple administración;
- b) En los contratos por precio global y financiación parcial o total, del contratista o empresario, se estimará en el ocho por ciento (8%) la utilidad neta, coeficiente que se fijará sobre el precio por el cual se haya contratado la obra.

Cuando se hubiere contratado la obra por un precio y en realidad hubiere alcanzado un cos-

to superior, se aplicará lo dispuesto en el literal que precede, si hubiere mayor utilidad neta.

Art. 33.— En las actividades comerciales e industriales cuyos resultados no puedan establecerse anualmente, por corresponder su producción a un ciclo de realización de utilidades no determinado, como en obras de construcción, de urbanización y obras semejantes, se tratará el caso considerándolo como de utilidades diferidas.

El Director General de Rentas dará autorización para que se presenten declaraciones especiales, así como las demás instrucciones que estimare necesarias, de acuerdo con el Reglamento especial que se formulará para contemplar y resolver esta situación.

Art. 34.— En los negocios de ventas a plazos, cuyos pagos deban efectuarse dentro de períodos mayores de un año, la Dirección General de Rentas, previa solicitud en la que se establezca claramente la situación del negocio, facultará que las utilidades liquidadas en un ejercicio se consideren y declaren como utilidades correspondientes al año en que se devenguen o perciban.

CAPITULO X

DE LAS RENTAS DE LAS PROFESIONES LIBERALES Y OTRAS ACTIVIDADES LUCRATIVAS

Art. 35.— Salvo prueba en contrario, se presumirá que la renta que obtienen los profesionales en sus actividades no es inferior a las siguientes cantidades:

- a) Dos veces la cantidad correspondiente al valor locativo anual de las casas o departamentos que habiten, sean arrendadas o de su propiedad, cuando los profesionales tengan menos de tres años en el ejercicio de su profesión;
- b) Tres veces el valor antes indicado, si el tiempo del ejercicio profesional es de más de tres años y menos de seis;
- c) Cuatro veces la mencionada cantidad, cuando el tiempo de ejercicio profesional es de más de seis años y menos de diez; y,
- d) Cinco veces la base señalada anteriormente, cuando el tiempo del ejercicio profesional exceda de diez años.

El valor locativo será igual al seis por ciento (6%) del avalúo comercial de las casas o departamentos o, en su defecto, el setenta por ciento (70%) del valor que se hubiere señalado para el respectivo arrendamiento en las oficinas de inquilinato.

Cuando los profesionales alegaren que sus rentas efectivas no hubieran alcanzado los niveles antes señalados, podrán presentar las siguientes pruebas: una cuenta de ingresos y egresos aceptada por la Dirección General de Rentas; la demostración de haber percibido otras rentas por actividades económicas o fruto de capitales invertidos, que justifiquen su nivel de vida que se presume en este artículo; la interrup-

ción en el ejercicio profesional por más de un año; la disminución de la actividad profesional por edad o enfermedad; y otras pruebas igualmente admisibles.

Para establecer directamente la renta profesional o admitir, total o parcialmente, las pruebas que presenten los causantes que alegaren que su renta es inferior a los niveles establecidos en este artículo, se tendrá en cuenta toda clase de informaciones que estén al alcance de la Dirección General de Rentas, siempre que sean pertinentes; y se aplicarán, cuando sea del caso, las estimaciones presuntivas y los demás métodos de estimación indirecta que se consideren en el Art. 98, especialmente la determinada en el literal g), para el caso del enriquecimiento injustificado.

CAPITULO XI

DE LAS GANANCIAS OCASIONALES Y GANANCIAS DE CAPITAL

Art. 36.— Las utilidades provenientes de cualquier actividad económica realizada en territorio nacional, en forma ocasional, causarán impuesto de conformidad con las disposiciones generales de esta Ley y las especiales de este Capítulo.

Si el contribuyente no tuviere otra renta de fuente nacional, se considerará, para los efectos impositivos, como renta anual, la obtenida ocasionalmente en el año, sea cual fuere el período de duración de la actividad en ese lapso.

Se incluirán entre las ganancias ocasionales las realizadas en territorio nacional por profesionales, artistas, deportistas, empresarios, etc., extranjeros; así como las obtenidas por nacionales o extranjeros en la compraventa ocasional de efectos de comercio.

• Sin perjuicio de la aplicación de las normas generales que se señalan para la depuración del ingreso bruto, en el Reglamento se contemplarán las especiales para la mencionada depuración, en los casos previstos en el inciso precedente.

Art. 37.— Se considerarán ganancias de capital las que provengan de compraventa o transferencia ocasional de inmuebles, maquinarias, equipos o instalaciones industriales, valores fiduciarios, colecciones artísticas, muebles y otros bienes.

Art. 38.— Como norma general, las utilidades obtenidas por la compraventa o transferencia de los bienes especificados en el artículo anterior, se determinarán por la diferencia entre sus precios de costo y el de compraventa o transferencia; en cuanto a inmuebles, se pagarán los impuestos determinados en esta Ley sobre una base reducida en un cinco por ciento (5%) por cada año o fracción de año mayor de seis meses, transcurridos desde la fecha de adquisición y la de venta o transferencia.

Las ganancias por compraventa o transferencia de los activos fijos sujetos al régimen de depreciación de las empresas comerciales, industriales o de servicios, se determinará por la diferencia entre el precio de compra o transferencia y el valor depreciado del activo señalado, y tributarán únicamente sobre el cincuenta por ciento (50%) de esa diferencia.

Art. 39.— Para la liquidación de las ganancias ocasionales de capital se aplicarán las siguientes reglas:

a) Las ganancias de capital en la compraventa o transferencias de inmuebles que no deban considerarse en el giro ordinario de los negocios, de conformidad con el Art. 62, tributarán de acuerdo con las reglas generales; y,

b) En los negocios de urbanización se considerará costo del inmueble su valor de mercado a la fecha de iniciación de esa actividad, debiendo tributarse sobre las ganancias de capital. El Ministerio de Finanzas, para la correcta aplicación del impuesto, dictará normas especiales, teniendo en cuenta las reducciones y atenuaciones que han de aceptarse en las diferencias de precios de los activos de capital, en razón de la depreciación de la moneda y las contribuciones especiales pagadas por el beneficio que originen obras públicas municipales o estatales.

CAPITULO XII

DE LAS EXENCIONES

Art. 40.— Estarán exentas del impuesto establecido por esta Ley:

a) Las rentas que obtengan el Estado, los Consejos Provinciales, los Municipios y las demás Instituciones de derecho público; así como las de derecho privado, con finalidad social o pública, según la Constitución o las leyes;

b) La parte de la renta que corresponda a los organismos mencionados en el literal anterior, en las empresas constituidas con capitales de ellos y de particulares;

c) Las dietas y viáticos de los legisladores, y los viáticos que se conceden a funcionarios y empleados públicos en comisión de servicio, hasta la cantidad de cinco mil sueres mensuales;

d) Los gastos de residencia y representación que perciban el Presidente y Vicepresidente de la República, los legisladores, el Presidente de la Corte Suprema, los Ministros de Estado;

e) Los gastos de residencia y representación de otros funcionarios, así como de los presidentes y gerentes de sociedades de capital o de personas hasta el treinta por ciento (30%) del sueldo básico y no más de treinta mil sueres anuales;

f) Las pensiones alimenticias que se deben por ley, las indemnizaciones por riesgos del trabajo, el fondo de reserva, los beneficios que concede el Seguro Social, los montepíos, las cesantías, los beneficios que perciban los miembros de la Fuerza Pública por iguales o análogos con-

ceptos, y las jubilaciones. Esta exoneración no amparará a la parte de una pensión jubilar que exceda de la cuantía que deba concederse conforme al Código del Trabajo o a la Ley del Seguro Social Obligatorio;

g) Las cantidades que se asignen presupuestariamente a los funcionarios y empleados públicos por los siguientes beneficios sociales: el pago de los aportes personales o individuales para el Seguro Social; los aguinaldos de Navidad; las asignaciones para gastos de educación, hasta el valor de un sueldo mensual; las pensiones civiles y militares que pague el Estado. No se considerarán como beneficios sociales, si no como complemento de la remuneración de dichos funcionarios y empleados, las cantidades que se añadan al sueldo base por cualquier otro concepto que no sea de los que se especifica anteriormente;

h) Las remuneraciones percibidas en el desempeño de sus funciones por los embajadores, ministros y otros agentes diplomáticos o consulares y demás representantes oficiales de países extranjeros acreditados en el Ecuador, inclusive misiones de asistencia técnica, de acuerdo con los convenios celebrados;

i) Las remuneraciones percibidas en el desempeño de sus funciones por los funcionarios y empleados extranjeros de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos y de sus Organismos;

j) Las rentas de inmuebles de propiedad de Estados extranjeros, así como otras rentas que provengan de inversiones o actividades económicas de esos Estados, siempre que se conceda tratamiento recíproco al Estado ecuatoriano en dichos países;

k) Las remuneraciones de los expertos extranjeros contratados por el Gobierno del Ecuador;

l) Las rentas de las cámaras de agricultura, industria o comercio;

m) Los intereses percibidos por depósitos y ahorros bancarios hasta el monto de tres mil sucres por año fiscal y por persona, así como los intereses percibidos por depósitos en las asociaciones mutualistas de crédito para la vivienda;

n) Los intereses de los bonos y otras obligaciones emitidas por el Gobierno Nacional, los Consejos Provinciales, los Municipios, las Asociaciones o consorcios de Consejos Provinciales o Consejos Cantonales, las Juntas de Asistencia Social, la Junta de Beneficencia de Guayaquil, y las instituciones de derecho público legalmente autorizadas.

Los intereses de cédulas calificadas que estuvieren en circulación a la fecha de vigencia de la presente Ley.

En cuanto a las cédulas calificadas que se emitieren a partir de la vigencia de la presente Ley, se estará a lo dispuesto por el inciso segundo del Art. 64.

o) Los intereses y comisiones de los préstamos que otorguen el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Internacional de Recon-

strucción y Fomento, la Agencia para el Desarrollo Internacional, en operaciones con entidades oficiales ecuatorianas, así como en préstamos a empresas que tengan como actividad la industria fabril o manufacturera, la explotación agrícola, la minera, el transporte, la producción de energía eléctrica, los servicios de teléfonos, telecomunicaciones y otras actividades que considere esenciales para el desarrollo económico la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica, y así lo declare;

fi) Los intereses y comisiones de los préstamos que otorguen las empresas consideradas en el inciso anterior u otros organismos de crédito sin establecimiento permanente en el país, así como los que conceden inversionistas particulares extranjeros, siempre que el interés que cobren en sus operaciones no exceda del seis por ciento (6%) anual y demuestren que han presentado declaración del impuesto ante la autoridad tributaria del país de origen del capital prestado.

Cuando en las operaciones consideradas en el inciso anterior, se cobre un interés mayor del seis por ciento (6%) anual, sobre el exceso de dicho seis por ciento (6%) se pagará como impuesto definitivo el treinta por ciento (30%), cuando los prestamistas sean personas naturales, o el veinte por ciento (20%) cuando se trate de personas jurídicas;

o) Las rentas que obtengan las sociedades mutualistas y los beneficios que proporcionen a sus asociados. No estarán comprendidos en esta exención las utilidades que repartan a los socios en la fracción que exceda de cinco mil sucres anuales;

p) Las utilidades que obtengan las cooperativas cuyos estatutos hubieren sido aprobados por la Función Ejecutiva, siempre que no se distribuyan a sus miembros, y no excedan del nivel que determinará el Ministerio de Finanzas, atendiendo a su naturaleza y al número de afiliados. El impuesto se causará sobre el exceso;

q) Las rentas que perciban las instituciones religiosas por los servicios o funciones del culto;

r) Las rentas percibidas por instituciones de educación pública o de asistencia o beneficencia social de carácter particular, siempre que fueren personas jurídicas con estatutos aprobados por la Función Ejecutiva. También amparará esta exoneración a las instituciones de investigación científica, a las de carácter literario y a las deportivas, siempre que así se declare en los estatutos aprobados por la Función Ejecutiva o estuvieren liberadas de impuestos por leyes especiales.

Esta exoneración no se extenderá a las utilidades que obtengan los directores o empresarios de escuelas o colegios particulares o de otras de las instituciones mencionadas en el inciso anterior, ni a las utilidades que se distribuyan a los miembros de sociedades que se hayan constituido para la prestación de estos servicios;

- s) Las becas para estudios dentro o fuera del país;
- t) Las asignaciones adicionales que perciban los trabajadores en las empresas que, por mandato legal, deban distribuir los patronos como participación de dichos trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta la cantidad de cinco mil sucres anuales, así como el décimo tercer sueldo;
- u) Las utilidades provenientes de explotaciones agrícolas que se reinviertan en forestación o reforestación;
- x) Las rentas provenientes exclusivamente de la explotación agrícola en las Provincias Orientales y Galápagos;
- y) Las rentas presuntivas de las casas habitadas por sus dueños cuyo avalúo comercial municipal no exceda de cien mil sucres; y,
- z) Las rentas presuntivas de la explotación agrícola que corresponda a sus propietarios, en predios rurales cuyo avalúo comercial no exceda de trescientos mil sucres.

CAPITULO XIII

DE LAS DEDUCCIONES GENERALES

Art. 41.— De conformidad con lo dispuesto en el Art. 58 de esta Ley y sin perjuicio de las deducciones especiales que en ella se contemplan para determinada renta, serán deducibles del ingreso bruto los siguientes gastos, cuya enumeración no es taxativa:

- a) Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro de un negocio, así como los gastos originados por la constitución, renovación o cancelación de las mismas;
- b) Las contribuciones que soporte la actividad generadora de la respectiva renta, que no sean las que se contemplan en el literal d) del Art. 43 de esta Ley;
- c) Las primas de seguros que se hubieren pagado cuando cubran riesgos sobre bienes que producen rentas;
- d) Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos que afecten económicamente a los bienes de la respectiva actividad generadora de la renta, en la parte que no fuere cubierta por indemnización o seguro;
- e) Los gastos de viaje, en la parte que sea motivada por necesidades o conveniencia del negocio y de acuerdo con las normas que se contemplan en el Reglamento;
- f) Las depreciaciones normales, conforme a la naturaleza de los bienes respectivos y la duración normal de su vida útil, de conformidad con las normas que se establezcan en el Reglamento, y, en su defecto, de acuerdo con las que acepta la técnica contable, así como las depreciaciones especiales por renovación anticipada u obsolescencia y las que correspondan por amortización acelerada, o las que se efectúen, conforme a los costos de revalorización, reposición u otras situaciones análogas.

En el Reglamento especial sobre esta materia se determinará todo lo relativo a la aplicación de este literal;

- g) La amortización anual de las pérdidas dentro del ejercicio financiero y que se efectúen de conformidad con lo previsto en el Art. 59; y,
- h) Los demás gastos que se deban o puedan ocasionarse de conformidad con lo previsto en el Art. 60.

Art. 42.— Para la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior se tendrán en cuenta las siguientes normas:

- a) Para deducir las depreciaciones especiales anticipadas y otras que no estén expresamente consideradas en la Ley o su Reglamento, se requerirá la solicitud previa ante el Director General de Rentas, y su autorización, o su ratificación, si no se hubiere presentado solicitud;
- b) Las multas que se impongan por hechos fraudulentos en materia fiscal, según lo establecido en el Art. 116, no se deducirán como gastos, en tratándose de impuestos que es permitido deducir;
- c) Hasta cuando el Ministerio de Finanzas establezca tablas de coeficientes de amortización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, el coeficiente normal de depreciación anual de las inmovilizaciones de activos, excepto inmuebles, no podrá exceder del diez por ciento (10%). La depreciación de los edificios se computará de conformidad con los coeficientes normales que se consideran en la técnica contable, de acuerdo con la naturaleza y función de estos edificios y el tiempo de vida útil que en esta técnica se admiten. Tales coeficientes varían del dos (2%) al cinco por ciento (5%), según la naturaleza de la construcción, sin perjuicio de coeficientes que podrán considerarse para construcciones cuya vida útil sea inferior a veinte años.

Los coeficientes se aplicarán únicamente sobre el valor de las construcciones; en tal virtud, tratándose de construcciones corrientes, si no se llegare a establecer el valor de los terrenos se aplicará el setenta y cinco por ciento (75%) del respectivo coeficiente, sobre el valor total del inmueble;

- d) En toda actividad que opere con bienes sujetos a depreciación es obligatorio efectuar esta depreciación anualmente, conforme se determina en esta Ley, y en su Reglamento, y la Dirección General de Rentas advertirá esta obligación cuando, con motivo de las fiscalizaciones se notare su falta. De acuerdo con la naturaleza de cada caso, notificará para que se la complete, sea dentro del periodo normal de la depreciación, o sea en el complementario que se concederá para este efecto.

Art. 43.— No serán deducibles como gastos los siguientes:

- a) Las cantidades retiradas por el contribuyente como asignaciones o gastos personales de él o de los miembros de su familia;
- b) Los intereses pagados por deudas contraídas para fines extraños al respectivo negocio.

Para que se conceda la deducción de tales intereses se deberá indicar, en el cómputo de la renta global, su causa legal, la cuantía de los intereses pagados y los nombres de las personas a las que se les hubiere hecho el pago. Tampoco serán deducibles los intereses que se paguen o acrediten por cuentas personales o deudas del dueño de la empresa;

c) Las remuneraciones o sueldos que se paguen al cónyuge e hijos menores de los contribuyentes, así como las que se abonen a los hijos mayores y hermanos, en la parte que exceda de la que usualmente se pague por servicios similares, atenta la importancia de la empresa y la de los servicios realmente prestados. En este último caso, se considerará renta gravable del trabajador la que se determine o acepte como normal y la diferencia se sumará a la renta del empresario.

En cuanto a los sueldos que se asignen a presidentes, gerentes, administradores y otros funcionarios similares de sociedades de capital, sean o no socios de las mismas, se aceptará su deducción como gasto general, pero la parte que exceda de la que se considere normal, atenta la naturaleza e importancia del respectivo negocio o empresa, y los usos del mercado, se tendrá como renta del capital del beneficiario;

d) El impuesto que establece esta Ley, con sus recargos, intereses de mora y multas, los impuestos, tasas o derechos que se causen para adquirir bienes o derechos, como los de alcabala y herencias, legados y donaciones; los impuestos de plusvalía; los impuestos sobre ganancias ocasionales, y los impuestos especiales que afecten a solares y terrenos no edificados;

e) Las reservas de capital que, conforme a su sentido técnico contable, se destinan a aumento de capital o robustecimiento financiero de la empresa, incluyéndose todas las que no correspondan a la depreciación real, o excedan su nivel o no hayan sido autorizadas por la Dirección General de Rentas, cuando no sean expresamente permitidas por la Ley o el Reglamento;

f) Las pérdidas en bienes que no estén en producción ni se hallen sujetos al impuesto a la renta, como colecciones artísticas, joyas, y otros bienes similares, de lujo o recreo personal; y,

g) Los donativos, asignaciones y otras liberalidades, en dinero o en especie, que constituyan empleos de la renta no exonerados expresamente en esta Ley, o cuya deducción no esté permitida por el Art. 43 de la misma.

CAPITULO XIV

DE LAS DEDUCCIONES ESPECIALES PARA LAS RENTAS DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Art. 44.—En los casos en que se efectúe la determinación de la renta de la propiedad rural a base de la contabilidad que llevare el causante, se deducirán todos los gastos normales de producción, incluyendo los de conservación y mantenimiento de los edificios. Tales gastos se justifi-

ficarán con los respectivos comprobantes, y si faltaren o no fueren suficientes, la Dirección General de Rentas establecerá coeficientes normales de deducción por los respectivos gastos, de conformidad con los datos que obtenga y la correlación de los mismos determinada por muestreo.

Se deducirán también los impuestos a la propiedad rural pagados por el respectivo año, incluyéndose los tributos adicionales y las contribuciones especiales.

La estimación presuntiva de la renta, conforme a lo dispuesto en el Art. 98 de esta Ley, se efectuará sobre la base del avalúo comercial del o de los predios de una persona, previa deducción de trescientos mil sucres, y el valor de los saldos de los préstamos hipotecarios invertidos exclusivamente en la mejora o explotación agrícola de los mismos.

En los casos de inconformidad con los avalúos comerciales catastrales, se podrá efectuar nuevos avalúos a criterio de la administración, o a petición de los interesados, exclusivamente para los efectos de esta Ley, los mismos que se harán conocer al respectivo Municipio.

Art. 45.—Serán deducibles de los ingresos brutos de la propiedad urbana:

a) Los intereses de deudas contraídas para la adquisición, construcción o conservación de la propiedad, de conformidad con las normas que se establezcan en el Reglamento;

b) Las primas de seguros por riesgos que afecten a la propiedad;

c) La amortización que se permita en los reglamentos, la misma que se computará únicamente sobre el valor de las edificaciones;

d) Los gastos de mantenimiento, que se fijen en el cinco por mil del avalúo comercial del respectivo predio. No se podrá aceptar deducciones adicionales sino por gastos extraordinarios de mantenimiento o reparación, motivados por fuerza mayor, accidente u otro hecho extraordinario, siguiendo las normas del Art. 59, de conformidad con su cuantía;

e) Los demás gastos generales de gestión, cuando se trate de negocios de arrendamiento como empresa; y,

f) Los impuestos a la propiedad urbana, pagados por el respectivo año, incluyéndose los tributos adicionales y las contribuciones especiales, excepto el impuesto predial, por el cual se concede crédito tributario, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 74 de esta Ley.

CAPITULO XV

DE LAS DEDUCCIONES ESPECIALES PARA LAS RENTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS

Art. 46.— Cuando el beneficiario de regalías por la explotación o aprovechamiento de ciertos bienes mobiliarios o derechos ha invertido una cantidad de dinero para su adquisición y tales bienes o derechos se deprecien o desaparezcan

con el tiempo, podrá deducirse del ingreso que se percibiére por dicha utilización una cuota equivalente a la depreciación anual, por el tiempo de duración de tales bienes o derechos, o un veinte por ciento (20%) del monto de las regalías, hasta cubrir el mencionado valor. No habrá lugar a dicha deducción si la duración de los bienes o derechos fuere indefinida.

Art. 47.— De las sumas que se perciban como rentas ciertas o vitalicias, contratadas en instituciones de crédito o con personas particulares, se deducirá la cuota que, matemáticamente, corresponda al consumo del capital pagado como precio de tales rentas.

CAPITULO XVI

DE LAS DEDUCCIONES ESPECIALES PARA LAS RENTAS DEL COMERCIO, LA INDUSTRIA, LA AGRICULTURA Y OTRAS ACTIVIDADES

Art. 48.— Además de las deducciones generales contempladas en el Art. 41 de esta Ley, se podrán deducir los siguientes rubros en los negocios comerciales, industriales, agrícolas y otras actividades:

a) Los créditos incobrables, siempre que se acumularen en cuentas especiales de reservas de avaluación, de las que se eliminarán definitivamente con débito a la reserva y crédito al activo correspondiente, siempre que hayan figurado en la contabilidad durante dos años, los que no pasen de cinco mil sucres, y durante tres años, los de cuantía mayor. Para estos efectos, se acompañará una petición con justificaciones al Director General de Rentas, en la que se indicará la razón por la cual no se ha podido hacer efectivo el crédito. En el Reglamento se señalarán las condiciones para la aceptación de esta solicitud, cuando no se acompañe prueba de la incobrabilidad del crédito. No se aceptará la petición si pareciere que el motivo por el que no se hayan cobrado los créditos es la liberalidad del acreedor. Cuando la justificación no sea satisfactoria, el Director podrá exigir la entrega del respectivo documento, endosado al Jefe Provincial de Recaudaciones correspondiente, quien podrá exigir su pago como si se tratara de un crédito fiscal, en beneficio del Fondo de Operación del Tesoro;

b) Los gastos de organización y de experimentación, de conformidad con lo previsto en el inciso final del Art. 60.

c) Las comisiones y otros gastos que se paguen en el exterior, sea por necesidad de la actividad desarrollada en el Ecuador, sea por su extensión en el extranjero, como ocurre con las rentas de exportación, conforme a las regulaciones que contiene esta Ley y las que establezca el Reglamento para su control;

d) Los honorarios por servicios profesionales que deban prestarse en el exterior, atenta la naturaleza del negocio, y en las condiciones que se indican en la regla segunda del literal b) del Art. 10;

e) Los beneficios sociales, las indemnizaciones y otras erogaciones impuestas por el Código del Trabajo u otras leyes de carácter social; las contribuciones en favor de los trabajadores, para finalidades de asistencia médica o sanitaria, ayuda escolar o cultural, entrenamiento profesional, subsidios a asociaciones deportivas o culturales y otros gastos de asistencia, o bienestar en favor de los mismos;

f) Las asignaciones, donativos y subvenciones que otorgaren las empresas comerciales, industriales, agrícolas y de otras actividades, a Instituciones dedicadas exclusivamente a beneficio social o público y legalmente organizadas;

g) Las becas para estudios otorgadas en favor de empleados o trabajadores que no fueren hijos o cónyuge del contribuyente;

h) Las sumas que las empresas de seguros y otras de análoga función destinen a formar reservas matemáticas u otras dedicadas a cubrir riesgos en curso y otros similares, de conformidad con las normas establecidas por la Superintendencia de Bancos; e,

i) 12% de las utilidades líquidas de las empresas amparadas por las leyes de fomento y protección industrial.

Art. 49.— Los gastos de exploración, los costos de adquisición y otros semejantes que se hagan para la explotación de una mina, incluyéndose minas y otras explotaciones semejantes, se amortizarán en el tiempo que dure la explotación minera conforme a los métodos usuales en esta materia y de acuerdo con las normas que señale el Reglamento.

Se deducirán, igualmente, las regalías que se paguen al Estado sobre la producción bruta.

Art. 50.— Las industrias manufactureras, fabriles, hoteleras, mineras y, en general, todas las empresas que empleen equipos mecánicos y que no estuvieren amparadas por la Ley de Fomento Industrial, gozarán de la deducción especial del treinta por ciento (30%) sobre las cantidades invertidas en la renovación y mejoramiento de la planta industrial, mediante la adquisición de maquinaria o equipos nuevos o la construcción de instalaciones. La deducción en cada año por este concepto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) de la utilidad neta de ese lapso; pero el saldo no deducido se considerará como "cargo diferido", y, en tal virtud, imputable a ejercicios futuros.

CAPITULO XVII

DE LAS DEDUCCIONES ESPECIALES PARA LAS RENTAS DE PROFESIONALES, AGENTES DE SEGUROS, COMISIONISTAS, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, OBREROS Y ARTESANOS

Art. 51.— A falta de información contable, se considerará que los gastos deducibles, de los ingresos de profesionales, de agentes de seguros y otros agentes o comisionistas independientes, representan el veinte por ciento (20%) de dichos ingresos.

Art. 52.—Los funcionarios, empleados y obreros, públicos y privados, tendrán derecho a deducir del valor bruto de sus remuneraciones las contribuciones personales al Seguro Social.

Art. 53.—Los artesanos, por su parte, y mientras estén excluidos de los beneficios del Seguro Social, tendrán derecho a una rebaja de catorce mil sucres anuales.

CAPITULO XVIII

DEDUCCION ESPECIAL PARA PERSONAS NATURALES

Art. 54.—Además de las rebajas contempladas en otras disposiciones de esta Ley, las personas naturales causantes tendrán derecho para deducir el cincuenta por ciento (50%) de los honorarios que hubieren pagado a profesionales sujetos al pago del Impuesto a la Renta en el Ecuador, debiéndose, en tal caso, indicar fecha y monto de los honorarios pagados y los nombres de los profesionales que los hubieren recibido.

CAPITULO XIX

DE LA REBAJA GENERAL Y DE LAS DEDUCCIONES POR CARGAS DE FAMILIA

Art. 55.—Toda persona natural, para el cálculo de la base imponible del impuesto progresivo, gozará de una rebaja general de diez mil sucres sobre la renta global. Igual rebaja se aplicará, por una sola vez, a la renta o suma de rentas sujetas al impuesto proporcional en la forma establecida en el inciso segundo del ordinal segundo del Art. 57.

Art. 56.—Además de la rebaja general considerada en el artículo anterior, se reconocerán las siguientes deducciones por cargas familiares:

PRIMERA.—Cinco mil sucres para el casado que mantenga a su cónyuge. Los viudos y separados sólo tendrán derecho a la rebaja general;

SEGUNDA.—El divorciado o el separado de su cónyuge que deba pasarle una pensión tendrá derecho a una rebaja igual a dicha pensión, rebaja que no podrá exceder de cinco mil sucres; y,

TERCERA.—Dos mil sucres por cada una de las siguientes personas:

- a) Ascendientes por consanguinidad;
- b) Descendientes menores de edad, del contribuyente o de su cónyuge;
- c) Descendientes mayores de edad, incapacitados para el trabajo;
- d) Menores de edad, cuya guarda o mantenimiento esté a cargo del contribuyente, por disposición judicial o administrativa, colocación familiar u otra razón;
- e) Desde el quinto hijo habrá una rebaja adicional de un mil sucres.

Las rebajas por personas a cargo contempladas en la deducción tercera, se concederán únicamente cuando dichas personas vivieren a cargo del causante, por no poder subvenir por sí

mismas a sus necesidades y estar incapacitadas para el trabajo, cuando no se tratase de menores de edad. Si las personas a cargo del contribuyente tuvieran rentas inferiores a las rebajas correspondientes, se reconocerá la deducción únicamente por la diferencia.

En la forma establecida en el Art 57, las deducciones por cargas familiares se aplicarán a la renta global, para el cómputo de la base imponible del impuesto progresivo. Estas mismas deducciones se aplicarán a la renta o suma de rentas sujetas al impuesto proporcional.

Las rebajas para los miembros del servicio diplomático o consular, que se hallaren ejerciendo en el exterior, se computarán en sucres según lo dispuesto en éste y en el anterior artículo. La deducción será de diez veces la suma que resultare de dicho cómputo para las rentas del trabajo, sin llegar en ningún caso a sobrepasar la renta percibida por sus servicios diplomáticos o consulares. Las demás rentas de capital o de propiedades que los diplomáticos o cónsules puedan tener, estarán sujetas a las normas generales.

Los extranjeros no residentes tendrán derecho a deducir el remanente de las rebajas general y familiares no consideradas en su país, cuando demuestren que, conforme a sus leyes, gozan de rebajas inferiores en igualdad de condición tributaria a menos que no debieren impuestos en el país por la renta gravable en el Ecuador.

CAPITULO XX

DE LA RENTA IMPONIBLE

Art. 57.—Para determinar la renta imponible con el impuesto progresivo, se procederá como sigue:

1º—Se considerará como ingreso neto de la persona, la renta o la suma de las rentas de cada grupo, previas las deducciones generales y especiales correspondientes;

2º—De la renta neta personal así establecida, se deducirá la rebaja general de diez mil sucres y las rebajas por cargas familiares. La diferencia será la renta imponible.

Para determinar la renta imponible sujeta al impuesto proporcional, se procederá como a continuación se indica:

a) Cuando se tratase de una sola renta sujeta al impuesto proporcional, se aplicarán a ella la rebaja general y las por cargas de familia;

b) Cuando concurrieren varias rentas sujetas al impuesto proporcional, las rebajas general y por cargas familiares se las considerará como cien y se las distribuirá entre las diversas rentas de cada grupo en la misma proporción que éstas tienen dentro del total de rentas sujetas al impuesto proporcional. Las diferencias parciales constituirán la renta imponible de cada grupo.

Art. 58.— Los gastos cuya deducción permite

esta Ley serán, en general, los que se efectúen para obtener, mantener y conservar las rentas gravadas por ella.

Los egresos que no constituyeren ni significaren un costo de producción o mantenimiento de la renta, esto es, que no se hubieren efectuado para esa finalidad, sino que constituyeren un empleo del ingreso, no serán deducibles sino en los casos y en la medida que permite esta ley.

Cuando los gastos se realizaren para obtener las rentas gravadas por esta Ley, así como para la obtención de las rentas que están libres de impuesto, la deducción de los gastos del ingreso que da lugar a tributo se hará en proporción aritmética a los correspondientes ingresos, si no se justificare otra forma de prorrateo.

Art. 59.— Los contribuyentes, sean personas naturales o jurídicas, que tuvieran una sola actividad y que hayan sufrido pérdidas en un ejercicio financiero, podrán arrastrarla a los ejercicios siguientes y amortizarla en cinco años, a razón de veinte por ciento (20%) anual, siempre que no destinaren para ello más del cincuenta por ciento (50%) de las utilidades que se obtuvieren en el año respectivo; pero podrán hacerlo en tiempo inferior, asignando para ello no más del veinticinco por ciento (25%) de la utilidad anual. Dentro de estos límites, la amortización de esas pérdidas podrá efectuarse en mayor número de años, cuando la magnitud de las utilidades anuales así lo exigiere.

El mismo sistema se seguirá respecto de actividades de personas naturales o de sociedades que no sean de capital, cuando tengan pérdidas en una actividad y obtengan utilidades en actividades de otro grupo diverso, según la clasificación del Art. 4. Las Sociedades de Capital, que tuvieran varias actividades o diversos establecimientos de una misma actividad, podrán efectuar la compensación de la pérdida que sufran en una actividad o establecimiento en un balance consolidado de resultados, y, en este caso, no podrán efectuar en los años futuros ninguna deducción por concepto de arrastre de la pérdida ya compensada.

Los contribuyentes que sufrieren pérdidas en una actividad de un grupo y obtuvieren utilidad en otras actividades del mismo grupo, podrán solicitar a la Dirección General de Rentas que se les permita efectuar la compensación que se considera en el inciso anterior, cuando en la actividad en que ha aparecido la pérdida no se esperen utilidades suficientes en el ejercicio o ejercicios siguientes. En tal caso, realizada la compensación, no habrá lugar a arrastre de pérdidas en la actividad que las comportó.

Art. 60.—Respecto de los bienes que producen rentas, las pérdidas motivadas por casos fortuitos o de fuerza mayor, como tempestades, incendios, terremotos, naufragios y otros accidentes, no cubiertos por un seguro, se amortizarán en las mismas condiciones establecidas en el artículo anterior. En el caso de que hubiere seguro, sólo se podrá amortizar el saldo no pa-

gado por el seguro.

Para establecer el saldo amortizable respecto de inmuebles, se deducirá el valor de los terrenos, y respecto de estos bienes, así como de los muebles, se restarán las reservas que se hubieren acumulado por depreciaciones.

Los gastos de organización o de experimentación se podrán amortizar, según su importancia y proporción con el activo de la empresa, en cinco años, a razón del veinte por ciento (20%) anual, o en diez años, a razón del diez por ciento (10%) anual, o, en su caso, en el tiempo que se prevea como duración de la empresa. En el Reglamento se determinarán las condiciones para la elección de uno de estos métodos. Las empresas mineras podrán acogerse a lo que dispone el Art. 49.

Art. 61.—Cuando los bienes dados en pago o introducidos en el país no tengan precio cierto en moneda ecuatoriana, por no haber sido valorados en el momento de su introducción al país, o por otra razón, se procederá en alguna de las siguientes formas:

a) Si tuvieran cotización conocida en moneda extranjera, se computará su precio en moneda ecuatoriana, de acuerdo con la cotización vigente del cambio libre y su costo se establecerá como si los bienes se hubieran importado al Ecuador; y, si su precio en moneda extranjera fuere incierto, se tomará en cuenta su cotización normal en el mercado ecuatoriano.

b) Si no fuere aplicable ninguno de estos dos métodos, la Dirección General de Rentas determinará el valor estimativo, de acuerdo con la naturaleza y estado de depreciación.

Art. 62.—Las ganancias o pérdidas en la enajenación o transferencia de bienes se considerarán como renta de utilidad gravable, las primeras; y las segundas, deducibles o compensables en los siguientes casos:

a) Cuando una persona o empresa tuviere como actividad habitual la compraventa y la venta o enajenación forzosa, incluyéndose el negocio de construcciones; y,

b) Cuando la enajenación de los bienes, muebles o inmuebles, se efectuare por empresas de seguros o de capitalización.

En los demás casos se los tendrá como ganancias ocasionales de capital sujetas a las disposiciones especiales pertinentes.

Las susodichas utilidades se imputarán al año en que se haya efectuado la enajenación o al grupo de rentas al que correspondiere la actividad de que se trata.

Art. 63.—La utilidad o pérdida en el negocio de inmuebles y de otras inmovilizaciones de activos sujetos a depreciación, se computará sumando al precio de venta el valor acumulado de las reservas para depreciaciones efectuadas contablemente y restando el precio de adquisición y de las mejoras efectuadas, así como otros elementos deducibles que se contemplen en el Reglamento o se compruebe por los contribuyentes.

CAPITULO XXI

DEL IMPUESTO PROGRESIVO SOBRE LA RENTA GLOBAL

Art. 64.— Para liquidar el impuesto progresivo sobre la renta personal global se determinará la base imponible de conformidad con las disposiciones de esta Ley y se aplicará la siguiente tabla:

Fracción Básica	Exceso hasta	Imp. sobre la fracción básica	Imp. sobre la fracción exed.
\$ —	10.000	\$ —	10%
" 10.000	20.000	" 1.000	14%
" 20.000	50.000	" 2.400	18%
" 50.000	100.000	" 7.800	22%
" 100.000	150.000	" 18.800	26%
" 150.000	200.000	" 31.800	30%
" 200.000	500.000	" 46.800	34%
" 500.000	1.000.000	" 148.800	38%
" 1.000.000	en adelante	" 338.800	42%

Los intereses de las cédulas hipotecarias no formarán parte de la Renta global y, por consiguiente, no pagarán el impuesto progresivo, quedando sujetos únicamente al impuesto proporcional del 10% sobre su monto, en caso de que las rebajas general y por cargas familiares hubieren sido aplicadas íntegramente a la renta global. En caso contrario, el impuesto recaerá sobre el monto de los intereses menos las rebajas no aplicadas. Las instituciones que paguen los intereses de dichas cédulas actuarán como Agentes de Retención.

Las sociedades constituidas en el exterior pagarán sobre las utilidades de fuente ecuatoriana, que obtengan en el país por medio de un establecimiento permanente o por otro medio, la misma tarifa establecida en el inciso anterior, sobre la parte de las referidas utilidades que se capitalicen como reservas. Sobre la parte de las utilidades que no se capitalicen en el Ecuador o no se distribuyan a accionistas en el país, la tarifa del impuesto será del treinta y cinco por ciento (35%).

CAPITULO XXII

DEL IMPUESTO GLOBAL SOBRE DETERMINADOS GRUPOS DE RENTAS

Art. 65.— Además del impuesto progresivo a la renta personal global las rentas que no se originen en el trabajo en relación de dependencia pagarán un impuesto proporcional de acuerdo con las siguientes tarifas:

- a) Rentas del trabajo profesional, dos por ciento (2%);
- b) Rentas del trabajo con el concurso del capital, seis por ciento (6%); y,
- c) Rentas del capital sin el concurso del trabajo, veinte por ciento (20%).

En todos estos tres casos se determinará la renta imponible, según lo establecido en el Art. 57 de esta Ley.

CAPITULO XXIII

DE LAS TARIFAS PARA LAS RENTAS DE SOCIEDADES DE CAPITAL

Art. 66.— Las sociedades de capital, constituidas en el Ecuador, pagarán el treinta por ciento (30%) sobre las utilidades no distribuidas. Esta regla comprende también a las utilidades no distribuidas de las acciones de las sociedades en comandita.

Art. 67.— Las sociedades anónimas y otras de capital, que distribuyen dividendos a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, residentes o no en el país, retendrán y pagarán provisionalmente el impuesto, de conformidad con las siguientes normas, sin perjuicio de lo que se determina en los incisos finales de este artículo y en el Art. 73 de esta Ley:

- a) Sobre dividendos de acciones nominativas, veinte por ciento (20%);
- b) Sobre dividendos de acciones al portador distribuidos a accionistas nacionales, residentes o no en el país, y a accionistas extranjeros residentes en el Ecuador, cuarenta por ciento (40%);
- c) Sobre dividendos de acciones nominativas o al portador acreditados o remitidos a accionistas extranjeros residentes en el exterior, excluyendo el impuesto que sobre tales acciones correspondiere pagar, de conformidad con la Ley de Impuesto a las Herencias, Legados y Donaciones, del que quedan libres estas acciones, treinta y cinco por ciento (35%).

Cuando se envíen o acrediten dividendos a personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes o no en el Ecuador, tanto el Fisco como el contribuyente, tendrán derecho para que se efectúe una reliquidación del impuesto, conforme a las siguientes normas:

- 1ª— Si la tasa efectiva que correspondiere al total de las rentas obtenidas en el Ecuador, resultare superior a la aplicada sobre los dividen-

dos individuales, remesados o acreditados, se aplicará dicha tasa, debiéndose cobrar la diferencia que resultare en favor del Fisco; y,

2ª.— Si sobre el total de rentas de fuente ecuatoriana resultare una tasa inferior a la que se hubiere aplicado, se reliquidará el tributo de acuerdo con la tasa más baja y, de oficio o a petición de parte, se procederá a reintegrar las diferencias que resultaren en favor de los contribuyentes, pudiéndose acreditar dichas diferencias a la respectiva sociedad.

Art. 68.— Los dividendos que perciban sociedades de capital constituidas en el Ecuador, así como los percibidos por establecimientos permanentes de sociedades extranjerías, se incluirán en la determinación de la utilidad neta de fuente ecuatoriana; pero del impuesto que resultare se descontará el que hubiere sido retenido por la sociedad que pagó esos dividendos.

Art. 69.— Las utilidades que obtuvieren en el país sociedades extranjerías de capital y que se enviaren a sus matrices u oficinas principales, así como las que se remitieran a los Estados Unidos de América u otros países dentro del concepto de filiales, no se considerarán dividendos para los efectos tributarios en el Ecuador, sino que pagarán únicamente el tributo que correspondiere a las utilidades no reinvertidas en el mismo, según lo que establece el Art. 66.

CAPITULO XXIV

DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES REGIONALES PARA LA COMISION DE TRANSITO DEL GUAYAS Y PARA EL CENTRO DE REHABILITACION DE MANABI

Art. 70.— Las rentas originadas en la Provincia del Guayas, sean de personas naturales o de sociedades de capital o de personas, para financiamiento de la Comisión de Tránsito del Guayas, pagarán el impuesto adicional del cinco por ciento (5%) sobre el impuesto a la Renta que se causare conforme a las disposiciones de la presente Ley.

Art. 71.— Los contribuyentes de la provincia de Manabí, sujetos al recargo sobre el Impuesto a la Renta, para el Centro de Rehabilitación de dicha provincia, pagarán el ocho por ciento (8%) sobre el Impuesto a la Renta que se causare de acuerdo a las disposiciones de esta Ley.

Art. 72.— Las sociedades anónimas y otras de capital por acciones establecidas en las provincias del Guayas o Manabí, que distribuyan dividendos a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjerías, residentes o no en el país, retendrán y pagarán provisionalmente los Arts. 70 y 71 sobre dichos dividendos. Los contribuyentes tendrán derecho para que se efectúen las reliquidaciones correspondientes.

CAPITULO XXV

DE LOS CREDITOS TRIBUTARIOS

Art. 73. De los impuestos que debiere una per-

sona sobre su renta personal se deducirán los tributos que se hayan retenido en la fuente de conformidad con esta Ley.

Para conceder el crédito que se considera en el inciso anterior, respecto de dividendos de acciones al portador, cuando deban satisfacer el cuarenta por ciento (40%) por retención en la fuente, será preciso que los correspondientes accionistas presenten al Director General de Rentas una solicitud, en la que se indicará los valores que correspondan a acciones al portador, la fecha y el monto de las retenciones.

Art. 74.— Del impuesto total que corresponda a un contribuyente por su renta o rentas, entre las cuales se hubiere considerado la proveniente de la propiedad urbana habitada por él, se deducirá el setenta por ciento (70%) del impuesto predial urbano que beneficia a los municipios de la República.

Art. 75.— En los casos contemplados en el Art. 10, numerales 2), 3) y 4), se reconocerá como crédito el impuesto pagado en otro país, de acuerdo con los certificados conferidos por la respectiva autoridad tributaria.

Art. 76.— Cuando se trate de utilidades de fuente extranjera que no deban impuesto conforme al principio de la fuente o de rentas exentas de tributo se concederá el crédito tributario del caso, conforme a las normas que se establezcan en el Reglamento.

Art. 77.— Si se tratare de dividendos distribuidos por empresas extranjerías a sociedades de capital constituidas en el Ecuador, tomándolos de utilidades que no son de fuente nacional, el crédito tributario se efectuará conforme al sistema que en el otro país se aplique para rentas de fuente ecuatoriana que se hallen sujetas a tributación en dicho país, sin que en ningún caso el crédito pueda superar a la cuantía del impuesto que en el Ecuador correspondiere a esos dividendos.

CAPITULO XXVI

DE LA CONTABILIDAD

Art. 78.— Como principio general se deberá llevar contabilidad por el sistema de partida doble para registrar el movimiento económico y determinar los resultados imputables al respectivo año fiscal.

Estarán sujetas a esta obligación las empresas comerciales e industriales que operen con un capital mayor de cincuenta mil sucres o vendan más de doscientos mil sucres anuales; así como las agrícolas cuando los respectivos predios rurales tengan un avalúo superior a dos millones de sucres. Las demás empresas deberán llevar por lo menos cuentas de los respectivos egresos e ingresos.

Art. 79.— Los inventarios se harán al costo, conforme a los principios generales que en esta materia acepta la contabilidad y dentro de las

normas que se establezcan en el Reglamento.

Los castigos, aumentos de precios y otras regulaciones, conforme a la realidad del mercado o a las necesidades del negocio, no podrán realizarse sino con la autorización expresa de la Dirección General de Rentas y previa la demostración o justificación de la necesidad y conveniencia de esas regulaciones. Fuera de estos casos, la constitución de reservas para contingencias o fluctuaciones de precios, se considerarán como reservas sujetas al pago del respectivo impuesto.

Art. 80.— La contabilización de las diferencias de cambio en operaciones efectuadas en moneda extranjera deberá realizarse siguiendo un sistema uniforme. En la cuenta de resultados se anotarán las diferencias de cambio realmente producidas; pero si se refieren a inversiones de bienes de capital se imputarán a su respectivo costo.

CAPITULO XXVII

DE LA DECLARACION DE RENTAS Y DETERMINACION DEL IMPUESTO

Art. 81.— Todos los sujetos de obligación, sea propia o ajena, considerados en el Capítulo XXX, están obligados a presentar, ante la Jefatura Provincial de Recaudaciones de la provincia donde tengan su domicilio y en los plazos correspondientes, una declaración sobre todas y cada una de sus rentas. Las declaraciones deberán hacerse en los formularios respectivos. Los sujetos de obligación propia indicarán, en la misma declaración, todos los bienes y deudas que tuvieran, con los datos que prescribe el Reglamento. El Ministerio de Finanzas podrá publicar los nombres de los causantes, los impuestos y las rentas declaradas.

También estarán obligadas a presentar declaraciones las personas responsables o no del impuesto a las que la Dirección General de Rentas impusiere esta obligación, en la forma que se establezca en la correspondiente notificación.

Los agentes de retención de sueldos, salarios y demás remuneraciones presentarán también una declaración anual sobre el monto total de pagos efectuados e impuestos retenidos a cada sujeto de obligación.

Art. 82.— La declaración hará responsable al declarante y, en su caso, al contador y al auditor del negocio o empresa, de la exactitud y veracidad de los datos que contenga, y se considerará definitiva si en el plazo de seis meses, contados desde el día siguiente al de su presentación, no se enmendaren esos datos. Los errores de cálculo o de hecho podrán enmendarse en cualquier momento.

Para que las enmiendas formuladas sobre los datos contables que no sean errores de cálculo, liberen de responsabilidad, deberán efectuarse dentro del plazo ya mencionado y antes de que

se haya iniciado la fiscalización correspondiente.

Art. 83.— Los administradores de 1^{as} sociedades de personas, en nombre colectivo o en comandita simple, deberán presentar una declaración acerca de las utilidades sociales que correspondan a cada socio, de conformidad con el contrato, verbal o escrito, y las disposiciones de esta Ley, y retendrán los correspondientes impuestos. Estas declaraciones no liberarán a los socios de la obligación de presentar las suyas, dispongan o no de otras rentas gravadas por la presente Ley.

Art. 84.— Están libres de la obligación de declarar su renta los empleados y demás trabajadores en relación de dependencia que tengan una sola renta sujeta a impuesto, así como los contribuyentes domiciliados en el exterior que no tengan representantes en el país, por las rentas que están sujetas a retención.

Cuando los empleados y demás trabajadores antes mencionados tengan otras rentas que deban impuesto, estarán obligados a presentar las declaraciones de todas las percibidas.

Art. 85.— Las declaraciones deberán contener todos los datos solicitados en los respectivos formularios, de manera que si un declarante no empleare uno de esos formularios, deberá proporcionar todas las informaciones que en ellos se pidan. Para tal efecto, la Dirección General de Rentas deberá proveer a las jefaturas provinciales de recaudaciones de suficientes cantidades de dichos formularios.

Art. 86.— Las declaraciones anuales que establezcan las utilidades obtenidas en un año deberán presentarse hasta el treinta y uno de marzo del año siguiente, o dentro de los tres meses siguientes al del cierre del ejercicio anual, cuando su fecha sea distinta del treinta y uno de diciembre.

Las declaraciones de los agentes de retención de impuestos sobre la renta del trabajo en relación de dependencia, deberán formularse semestralmente, sin perjuicio de la declaración mensual provisional de que habla el literal e) del Art. 106. La declaración por el primer semestre se presentará en el mes de julio de cada año, y la segunda declaración semestral deberá presentarse hasta el treinta y uno de enero del año siguiente, y contendrá la reliquidación por todo el año anterior.

Las declaraciones de las sociedades de capital que repartieren dividendos conforme a balances semestrales, deberán presentarse semestralmente, en el mes siguiente al de la orden del reparto, sin perjuicio de la reliquidación anual.

En los demás casos de retención del impuesto, la declaración deberá presentarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en la que se efectuó o debió efectuarse la retención, salvo los casos en los que, conforme al Reglamento, la retención del impuesto se ha de considerar anual sobre la suma de los pagos o imputaciones mensuales de las rentas.

Art. 87.— Cuando la Dirección General de Rentas lo juzgue necesario podrá exigir declaraciones especiales a los propios contribuyentes y a otros responsables o a terceros, sobre sus respectivas rentas o patrimonios, o en relación con las rentas de otras personas, en cuyas operaciones o transacciones hubieren intervenido. También podrá exigir datos relativos a cuentas y operaciones bancarias.

Art. 88.— El Subsecretario de Rentas podrá, en casos especiales o por motivos justificados, conceder prórrogas de dichos plazos de hasta sesenta días para contribuyentes domiciliados en el Ecuador y de hasta noventa días cuando se deba esperar el envío de documentos del exterior. Para la concesión de tales prórrogas deberá justificarse que se han pagado los anticipos correspondientes al año de la declaración, a menos que se invocare pérdida en el ejercicio; pero si después se comprobare que no ha existido la pérdida invocada, se aplicará la sanción correspondiente a esta falta.

CAPITULO XXVIII

DE LA FISCALIZACION

Art. 89.— Dentro del plazo señalado por el Art. 131 de esta Ley, la Dirección General de Rentas podrá verificar las declaraciones presentadas u ordenar que se efectúen fiscalizaciones a base de la contabilidad y de los documentos de los contribuyentes, responsables y terceros.

Para este efecto, dichos contribuyentes, responsables y terceros, deberán llevar la contabilidad de su negocio en la forma que se establece en esta Ley y en la que se prescribe en el Reglamento. En dicho Reglamento y en instrucciones especiales, se indicarán los documentos, libros y registros que han de llevarse respecto de las operaciones propias y de las que se relacionan con terceros, los comprobantes que han de respaldar los asientos contables, el tiempo que esa documentación se ha de conservar, y que ha de ser por los plazos que se señalan para la caducidad en el mencionado Art. 131.

La fe que merezcan esos asientos estará en función del valor justificativo de dichos comprobantes, así como de la época en que se hubieren registrado dichos asientos. Cuando los impugne la fiscalización, la impugnación deberá ser razonada y, en tal caso, la justificación corresponderá al contribuyente, responsable o tercero.

Art. 90.— El Director General de Rentas podrá investigar y verificar en cualquier tiempo y por los medios a su alcance, el cumplimiento de la Ley, de su Reglamento y de las instrucciones impartidas, así como la situación tributaria de un presunto contribuyente; pero la facultad para establecer la obligación tributaria

a base de esa forma no podrá ejercerse sino dentro del plazo que para ello considera esta Ley.

En el desempeño de esta función, la Dirección queda expresamente facultada para:

a) Notificar al firmante de una declaración de renta, o al presunto contribuyente o responsable, o a terceros, que, a su juicio, tengan conocimiento de las negociaciones u operaciones de aquellos, para que comparezcan a la Dirección o a las oficinas provinciales que se les indique, dentro del plazo que se fijará en atención al lugar de su domicilio, para que contesten, verbalmente o por escrito, a las preguntas o requerimientos que se les hiciera sobre ingresos y egresos, ventas y, en general, sobre las actividades y hechos que se consideren vinculados o adecuados para el establecimiento de la utilidad, verificación de las declaraciones y formulación de las estimaciones de oficio;

b) Exigir a los deudores directos o a los responsables del impuesto o a terceros la presentación de los comprobantes y documentos justificativos para la determinación de la renta; y,

c) Inspeccionar y analizar libros principales y auxiliares de contabilidad, inventarios, registros, anotaciones, correspondencia, cuentas bancarias y demás documentos pertinentes del contribuyente, de los responsables y terceros, incluyendo los bancos y otras entidades públicas o privadas, que puedan servir de prueba o dar instrucción respecto de las negociaciones u operaciones que se consideren relacionadas con los datos que contengan o deban contener las declaraciones.

Art. 91.— Cuando las personas notificadas respondan verbalmente a los requerimientos previstos en el literal a) del artículo anterior, o cuando se examinen libros, comprobantes y demás documentos que se mencionan en los literales b) y c), se harán constar en acta dichas declaraciones verbales; también se harán constar en la misma la existencia y contenido de los documentos exhibidos. Estas actas, que extenderán los funcionarios o empleados que reciban la declaración, servirán, tanto para la verificación de las declaraciones y establecimiento de las utilidades realmente obtenidas, como para la determinación de oficio de las mismas; sin embargo, el causante podrá impugnar la veracidad o acierto de tales actas, acompañando prueba debidamente actuada.

Art. 92.— El Director General de Rentas o los funcionarios o empleados autorizados al efecto, podrán solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, cuando encontraren inconvenientes o resistencias para el desempeño de sus funciones o ese auxilio fuere necesario para la comparecencia de las personas conminadas a hacerlo. Dicho concurso se prestará obligatoriamente.

Art. 93.— Los resultados de una fiscalización o de una determinación de oficio, que se haga mediante una acta de fiscalización o por reso-

lución de la Dirección General de Rentas, deberán notificarse a los interesados, para que puedan hacer los reclamos que contempla esta Ley.

Art. 94.— El Director General de Rentas, por sí o por medio de funcionarios o empleados autorizados, podrá exigir a los contribuyentes, responsables o terceros, incluyendo bancos u otros organismos públicos o privados, en el orden nacional, funcional o seccional, y en la forma que establezca el Reglamento, informes y datos que fueren necesarios para su labor de verificación o localización de contribuyentes, sea respecto de sus rentas o patrimonios propios, sea de los que administraren y que, en alguna forma, estén relacionados con las rentas de los contribuyentes.

También podrá pedir a los personeros o funcionarios de los consejos provinciales y concejos municipales, jefes y tenientes políticos, tesoreros municipales, jueces cantonales y cualesquiera otros funcionarios, informaciones sobre rentas de personas que residan en sus respectivas jurisdicciones o de bienes situados en las mismas.

Los notarios y los registradores de la propiedad comunicarán a la Dirección General de Rentas los datos contenidos en documentos que se protocolicen u otorguen ante ellos, o que se presenten para su registro, en los formularios que se les enviará a este propósito y en la forma y fechas que se les indique.

Tales informaciones serán de carácter reservado, y los funcionarios que hicieren conocer a particulares no autorizados serán destituidos de sus cargos, sin perjuicio de las sanciones establecidas en otras leyes.

CAPITULO XXIX

DE LA DETERMINACION DE OFICIO

Art. 95.— El impuesto que no llegare a establecerse a base de las declaraciones, será determinado de oficio, por la Dirección General de Rentas:

a) Cuando habiendo presentado una persona su declaración se negare a presentar las informaciones y los comprobantes que se le pidieren, dentro del plazo que se le señalare y que no será inferior a treinta días;

b) Cuando al realizar la verificación se comprobare que la declaración es inexacta o que contiene datos que no están respaldados por los comprobantes necesarios, o que los respectivos ingresos o egresos parezcan dudosos;

c) Cuando el declarante no llevare contabilidad adecuada, o la que lleva parezca dudosa por los resultados a que conduzca por debajo del rendimiento normal de la actividad económica respectiva, conforme a los resultados obtenidos por otras actividades de igual naturaleza, ejercidas en igualdad de condiciones, y

no se dé una justificación aceptable para explicar esta situación;

d) Cuando una persona no hubiere presentado la declaración dentro de los plazos señalados para ello y, notificada personalmente o por medio de la prensa, para que cumpla esta obligación, bajo prevención de que se procederá a una determinación de oficio, tampoco hubiere presentado la declaración; y,

e) Cuando el acrecimiento patrimonial en un período determinado o el nivel de vida que llevare el contribuyente no guardaren relación con las utilidades declaradas por ese período, y no se justificaren aceptablemente las causas o fuentes de los hechos mencionados.

Art. 96.— Las determinaciones expresadas serán de dos clases: directas o presuntivas, y se las notificará como se indica en el Art. 93.

Art. 97.— La determinación directa se hará a base de la propia contabilidad de la empresa y de los datos, documentos e informaciones que proporcionen los responsables o terceras personas, siempre que con esas fuentes de información directa sea posible llegar a conclusiones más o menos exactas sobre las rentas del contribuyente.

Art. 98.— Cuando no sea posible proceder a la determinación directa, se realizará la presuntiva, que se fundará en los hechos, indicios, circunstancias y demás elementos de juicio que, por su vinculación normal con las utilidades, permiten presumirlas más o menos directamente, en cada caso particular.

Además de la información directa que se hubiere podido obtener, contablemente o en otra forma, se considerarán los siguientes elementos de juicio:

a) El capital invertido en la explotación o actividad económica;

b) El volumen de las transacciones o de las ventas en un año y el coeficiente o coeficientes ponderados de utilidad bruta sobre el costo contable;

c) Las utilidades obtenidas por la propia empresa en años anteriores, así como las que obtengan empresas en igual o análoga situación, por la naturaleza del negocio o la actividad, económica, lugar de su ejercicio, capital empleado, etc;

d) Los gastos generales de la empresa y el personal de trabajadores a sus órdenes;

e) El alquiler de los locales empleados por la empresa;

f) El nivel de vida del contribuyente y sus gastos particulares;

g) El enriquecimiento que haya obtenido en un período de tiempo; y,

h) Cualesquiera otros elementos de juicio que obtuviera la Dirección General de Rentas relacionados con el nivel probable de rentabilidad del contribuyente.

Art. 99.— Ejecutoriada una resolución que establezca una determinación de oficio, sólo podrá modificarse por errores de cálculo, dentro de los respectivos plazos de caducidad o prescripción.

Art. 100.— Cuando la determinación presuntiva de oficio no pueda efectuarse de acuerdo con los criterios mencionados en el Art. 98 y tratándose de rentas del capital y el trabajo o del capital puro, el Director General de Rentas podrá fijar hasta un quince por ciento (15%) del capital propio y ajeno utilizados en el negocio o del monto de ingresos brutos, según el caso, como utilidad neta obtenida por la respectiva empresa en el ejercicio anual.

CAPITULO XXX

DE LOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO

Art. 101.— Serán deudores del impuesto por obligación propia todas las personas que deban la contribución como causantes directos de la misma, por ser titulares del derecho o dueños o beneficiarios de la respectiva materia imponible. Las personas a quienes la Ley da esta condición estarán obligadas a pagar el impuesto en el lugar y dentro de los plazos señalados por la Ley o el Reglamento, personalmente o por medio de sus representantes, en cuanto se produzcan los hechos generadores de la obligación tributaria, de conformidad con las disposiciones de esta Ley.

Art. 102.— Serán contribuyentes, en la medida y en las condiciones que se establecen en la presente Ley:

- a) Las personas naturales y las jurídicas;
- b) Las compañías anónimas y, en comandita por acciones, establecidas en el país, así como las sociedades constituidas en el extranjero, sea cual fuere su constitución o denominación, que tengan en el país un establecimiento permanente u obtengan renta de fuente ecuatoriana;
- c) Las sucesiones indivisas;
- d) Las cooperativas y comunidades que obtengan rentas gravadas por esta Ley, cuando por razones de su constitución, y de acuerdo con sus estatutos, no deban o puedan ser atribuidas a sus comuneros, cofrades o socios; y,
- e) Las personas que ejerzan la patria potestad, por las rentas que provengan del peculio adventicio ordinario o de las que tuvieren derecho en virtud de las disposiciones del Código Civil.

Art. 103.— Serán solidariamente responsables del pago del impuesto por deuda ajena, en las condiciones que establece esta Ley y las que determina el Reglamento, y sin perjuicio de las sanciones que correspondan a las infracciones u omisiones cometidas:

- a) Los representantes legales de menores o interdictos;
- b) Los administradores de bienes ajenos y

los que actuaron como tales en el período en que se originó la obligación tributaria;

c) Los administradores de las entidades mencionadas en los literales b) y d) del artículo anterior;

d) Los síndicos y liquidadores de concursos de acreedores y de quiebras, y los encargados de las sociedades en liquidación;

e) Los albaceas con tenencia de bienes, o el administrador común de bienes; y, a falta de éstos, el cónyuge sobreviviente y los herederos, con sujeción a lo que disponen el Art. 20 y el inciso final del Art. 104, y los partícipes de cosa singular;

f) Las personas y los intermediarios que operen en la exportación de productos naturales ecuatorianos, conforme a lo previsto en los Arts. 13 y 14; y,

g) Los agentes de retención, entendiéndose por tales las personas que están obligadas, entre otras cosas, a retener el impuesto, por disposiciones de esta Ley, sus reglamentos o por determinación del Director General de Rentas.

Las personas mencionadas en este artículo también deberán cumplir por cuenta de los directamente obligados, los deberes que esta Ley y sus reglamentos les impongan para la verificación, determinación y pago del impuesto.

Art. 104.— También responderán solidariamente con los deudores directos u otros responsables por el pago del impuesto que se haya causado, las siguientes personas, igualmente sin perjuicio de las sanciones que correspondan a las infracciones u omisiones cometidas:

a) Los notarios, registradores de la propiedad y demás funcionarios que hayan dejado de cumplir oportunamente las providencias para la determinación o el pago del impuesto a la renta, establecidas por ésta u otras leyes; y,

b) Los sujetos por obligación real que se mencionan en el artículo siguiente.

En el caso de rentas de bienes sucesorios, la obligación tributaria será solidaria e indivisible y se hará efectiva en los bienes de la sucesión.

Art. 105.— Serán sujetos de obligación por responsabilidad real los adquirentes, por cualquier título, de bienes raíces, de negocios comerciales o industriales, incluyendo las sociedades que sustituyan a otras haciéndose cargo del activo y pasivo, en todo o en parte; así como los asignatarios a título universal.

Los adquirentes de predios rurales o urbanos responderán por los impuestos que afectan a dichas propiedades, correspondientes al año calendario en que hubieren efectuado la adquisición.

Si esos bienes pertenecieren a una sucesión, los adquirentes responderán también por el impuesto que afecte a los mismos, conforme a lo que establece la Ley de Impuesto a las Herencias, Legados y Donaciones.

Los adquirentes de negocios comerciales o industriales serán responsables solidariamente

con los dueños anteriores por el pago de los impuestos que afecten a dichos negocios, sólo por el año en el que se efectúe la negociación, sustitución o sucesión, en el caso de que se diere aviso de la transferencia de dominio a la Dirección General de Rentas en el plazo de treinta días de haberse realizado el traspaso; de no hacerlo, serán responsables por los impuestos que se adeuden por los tres años inmediatos anteriores.

CAPITULO XXXI

DEL PAGO DEL IMPUESTO

Art. 106.— los contribuyentes y responsables del impuesto deberán efectuar el pago de acuerdo con las siguientes normas:

a) En el año de mil novecientos sesenta y cuatro hasta el treinta y uno de marzo o sesenta días después del cierre del ejercicio financiero por impuestos no sujetos al año natural, se deberá presentar la declaración correspondiente al ejercicio económico anterior, de conformidad con las regulaciones contempladas en la Ley anterior vigente, acompañando a esa declaración el saldo adeudado por impuestos, o reclamando la respectiva nota de crédito en caso de pago excesivo.

Sobre la base de los resultados que los contribuyentes declararen por el ejercicio de mil novecientos sesenta y tres o de la última declaración o acta de fiscalización para contribuyentes que no hubieren declarado, la Dirección General de Rentas emitirá títulos de crédito por el ochenta por ciento (80%) del impuesto que se cause de conformidad con las disposiciones de la presente Ley, el mismo que se pagará de acuerdo a las siguientes normas:

Cuarenta por ciento (40%) hasta el treinta de junio;

Veinte por ciento (20%) hasta el treinta y uno de agosto; y,

Veinte por ciento (20%) hasta el treinta y uno de octubre.

Los contribuyentes no sujetos al año natural pagarán los dividendos primero, segundo y tercero antes de los ciento veinte, ciento ochenta y doscientos cuarenta días posteriores a la fecha del cierre del ejercicio financiero, respectivamente.

b) Respecto de los pagos por ejercicios posteriores a mil novecientos sesenta y cuatro, a la declaración que deba presentar el contribuyente dentro del primer trimestre del año siguiente al declarado, se acompañará el saldo que se adeudare con los resultados obtenidos en el ejercicio anterior a aquel en que se hiciera la declaración. En el propio año en que se hace la declaración se cobrará el ochenta por ciento (80%) en concepto de anticipos, en la misma forma que se indica en el literal anterior.

Cuando de conformidad con los resultados del primer semestre de un ejercicio o por otra razón debidamente comprobada, estimare el contribuyente que los resultados del ejercicio han de ser negativos o claramente inferiores al del año base en más de un cincuenta por ciento (50%) podrá solicitar que se le exima del pago de los respectivos dividendos, en todo o en parte, según se presuman los resultados efectivos en el ejercicio. El Subsecretario de Rentas resolverá la petición, pudiéndose apelar ante el Ministro de Finanzas contra lo que resolviere el Subsecretario; pero de la resolución del Ministro no habrá recurso alguno.

Cuando un ejercicio se cierre con déficit el pago anticipado por el siguiente año se hará en la misma forma que se establece para empresas que inicien sus actividades, sea cual fuere su naturaleza;

c) Los contribuyentes que inicien sus actividades con posterior a la vigencia de esta Ley, pagarán en el año de su iniciación el ochenta por ciento (80%) de los impuestos correspondientes a la renta estimada para el ejercicio de acuerdo con las regulaciones establecidas en el literal a) de este artículo, debiendo procederse para tal objeto en la siguiente forma:

Cuando se tratare de rentas fijas, como intereses, arrendamientos u otras semejantes, el impuesto se computará sobre el monto que correspondiera al ejercicio corriente; y

Cuando se tratare de rentas de actividades cuyos resultados no se pudiere conocer sino al final del ejercicio, dentro de los treinta días siguientes al primer semestre del mismo, se deberá presentar una declaración provisional de resultados por los seis primeros meses y sobre dichos resultados se computarán los impuestos correspondientes al ejercicio completo.

Cuando se produzca un cambio en las actividades de un negocio, el contribuyente podrá solicitar al Director General de Rentas que se le considere como iniciación de actividades;

d) Los contribuyentes que cesen en sus actividades deberán comunicar este hecho a la Dirección General de Rentas, para que se suspenda la emisión de los títulos de crédito respectivos; y,

e) Los impuestos retenidos por agentes de retención deberán ser entregados por los mismos en las jefaturas provinciales de recaudaciones, en el mes siguiente al de dicha retención, junto con una declaración global y provisional. La regulación definitiva se hará en la declaración del ejercicio económico que debe presentarse conforme a lo dispuesto en esta Ley.

Art. 107.— Si la cantidad pagada resultare superior a la realmente debida, la Dirección General de Rentas emitirá una nota de crédito por el saldo que tuviere a su favor el contribuyente.

Si el contribuyente no debiere impuesto a la

renta, previo aviso al Director General de Rentas, podrá endosar la nota de crédito a terceros, quienes podrán pagar con ella exclusivamente el impuesto a la renta que adeudaren.

Art. 108.— Si se reconociere el pago excesivo y el consiguiente derecho a reintegro, por resolución del Subsecretario de Rentas, o del Ministro de Finanzas o por fallo del Tribunal Fiscal, en su caso, y, de otro lado, el contribuyente estuviere adeudando impuestos, se efectuará una compensación entre lo que tuviere derecho a recibir por el reintegro y el impuesto a la renta que adeudare al Fisco.

El Subsecretario de Rentas ordenará tal compensación, de oficio o a petición de parte, sin necesidad de emitir notas de crédito, debiendo la Dirección General de Rentas, mantener un registro detallado de dichas compensaciones.

Art. 109.— El Director General de Rentas dará aviso al Contralor General de la Nación, para efectos de control, de las resoluciones que se hubieren dictado acerca de notas de crédito o compensaciones, acompañando copias de las mismas y duplicado de las notas de crédito que hubiere emitido.

CAPITULO XXXII

DE LOS INTERESES MORATORIOS

Art. 110.— La falta de pago del impuesto o de sus dividendos dentro de los plazos señalados para ello, causará un interés de mora, el cual, al máximo convencional permitido de acuerdo con la Ley.

Cuando se establezcan diferencias de impuesto, con motivo de verificaciones efectuadas por la Dirección General de Rentas, por errores de hecho, de cálculo o de derecho, se computarán los intereses de mora sobre la diferencia del impuesto que se glosare a partir de la fecha en que se debió pagar.

Cuando se tratare de diferencia establecida en una fiscalización o verificación por cuestiones de derecho susceptibles de discusión o esclarecimiento, los intereses de mora se computarán desde la fecha en que se debió pagar esa diferencia, si se confirmare en la resolución que ponga término a la controversia.

Cuando en el proceso de una reclamación se dictare resolución que ponga fin a la controversia, después de doce meses contados desde la fecha de presentación de la reclamación, no se causarán intereses por mora por el tiempo que exceda de los susodichos doce meses.

Art. 111.— Los intereses de mora se devengarán sin perjuicio de las sanciones.

CAPITULO XXXIII

DE LAS SANCIONES PARA LOS CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES DEL IMPUESTO

Art. 112.— Cuando una persona obligada a presentar una declaración de renta no lo hiciere

dentro del plazo señalado, sobre el impuesto que se liquide a base de la declaración tardía o sobre el que resulte conforme a la estimación de oficio, en su caso, se causará la multa del dos por ciento (2%) mensual, que se computará desde la fecha en que fue exigible el tributo hasta la de presentación de la declaración o de motivación de la estimación de oficio.

En ningún caso el monto de las sanciones excederá del cincuenta por ciento (50%) del impuesto que se hubiere causado; la pena mínima será de cien sucres.

Art. 113.— Cuando no se causare impuesto, la falta de la declaración, obligada por la Ley o requerida por el Director General de Rentas, dará lugar a una multa de cien a dos mil sucres, según la importancia y naturaleza de la actividad de que se trate.

Art. 114.— Los contribuyentes o demás responsables del impuesto, que hubieren sido requeridos para que acompañen a la declaración los documentos que deben presentarse, según lo que dispone la Ley o sus reglamentos, y no lo hicieren, serán sancionados con una multa de cien a mil sucres; pudiéndose repetir dicho requerimiento periódicamente, treinta días después del vencimiento del plazo señalado para ello, con sanción que irá elevándose en ciento por ciento sobre la últimamente impuesta.

Art. 115.— La negativa u oposición inmotivada al cumplimiento de las órdenes de inspección que se dicten, se castigará con el doble de las multas que contempla el artículo anterior.

En caso de reincidencia, además de las penas contempladas anteriormente, el Director General de Rentas sancionará con la suspensión de los permisos de importación y la cancelación de las matrículas de comercio o industria.

Art. 116.— Se considerarán actos de defraudación toda afirmación, simulación, ocultación u otros procedimientos que se efectúen con el propósito de evadir o facilitar la evasión del impuesto, o respecto de los cuales no se demuestre aceptablemente la falta de intención dolosa. Se considerarán, por lo tanto y salvo la mencionada prueba o demostración, que se ha incurrido en acto intencional de defraudación, en los siguientes casos:

a) Cuando existiere contradicción entre los libros de contabilidad y otros registros o antecedentes, o con los datos correlativos de la declaración;

b) cuando se hubiere empleado algún sistema de contabilidad o imputación prohibido por la Ley o los reglamentos;

c) Cuando en la declaración de la renta se hubieren excluido resultados de otras actividades que constituyan una unidad económica en el respectivo negocio;

d) Cuando se presentaren informaciones inexactas o adulteradas respecto de ventas, compras, existencias o valoración de inventarios, o

cualquier otro factor relacionado con la renta de que se trate; y,

e) Cuando el contribuyente o responsable llevara los libros de contabilidad que prescriban la Ley o los reglamentos, con datos falsos a sabiendas, o en forma tal que induzca a error, de mala fe o con intención dolosa.

Art. 117.— Cuando el declarante enmendare los errores o inexactitudes que contenga una declaración, dentro del plazo de seis meses señalados en el Art. 82, habrá lugar a una sanción equivalente al uno por ciento (1%) mensual del impuesto que por tales errores se hubiere dejado de pagar, hasta el mes en que se rectificare el error, a menos que se demostrare dolo.

Art. 118.— Cuando no se hubiere efectuado la corrección de que trata el artículo anterior, las sanciones por mera inexactitud y la que corresponda a un acto de defraudación, se graduarán en la siguiente forma:

a) Si se justificare satisfactoriamente la falta de intención dolosa, se aplicará una multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) del impuesto que se habría evadido de no conocerse esos hechos;

b) La multa será del ciento por ciento (100%) del impuesto que se haya tratado de evadir, cuando la justificación de los errores o inexactitudes o de los otros actos que se consideran en el Art. 118 no fuera plena, cuando pudieran aceptarse parcialmente, o cuando existan ciertas atenuaciones; y,

c) La multa será del trescientos por ciento (300%) del impuesto, cuando no hubiere justificación aceptable.

Art. 119.— Los agentes de retención que no realizaren el pago del impuesto que deben retener en el tiempo determinado en esta Ley, incurrirán en una multa de veinte a cien sucres por cada omisión en dicho pago. La multa será de cien a mil sucres, según la gravedad de la falta, cuando incurran en alguna de las siguientes: Demora en el pago de las retenciones mensuales por más de tres meses; pago o entrega de las cantidades retenidas en inferior cuantía de las que realmente se han efectuado; incumplimiento de las otras obligaciones inherentes a su cargo establecidas en esta Ley, o en los reglamentos cuando no se haya contemplado específicamente en aquélla.

En tratándose de sueldos, salarios y otras remuneraciones, la falta de pago del impuesto causará un recargo mensual del dos por ciento (2%) sobre el valor del impuesto que debió pagarse; recargo que se computará desde el mes siguiente a aquél en que debió efectuarse el pago. Este recargo no excederá del ciento por ciento (100%) del impuesto respectivo, y no se aplicará cuando el agente de retención justifique la demora en la provisión de los fondos para el pago de sueldos, salarios y otras remuneraciones.

Art. 120.— Los auditores, contadores y otros profesionales autorizados y, en su caso, los peritos que autoricen inventarios, balances, estados de pérdidas y ganancias, dictámenes, informes u otros documentos de análoga importancia, falsos, serán sancionados por el Director General de Rentas con una multa de cien a mil sucres y suspensión en el ejercicio profesional por tres meses. La reincidencia dará lugar a la suspensión en el ejercicio profesional por un año y a la inhabilidad para ejercer la profesión en las oficinas públicas. Todo esto, sin perjuicio de otras penas que consideren el Código de Comercio, el Código Penal y la Ley de Contadores.

Art. 121.— El quebrantamiento de otras disposiciones de la Ley o de sus reglamentos no previsto en los artículos anteriores, en cuanto puedan conducir a disminución del impuesto a cobrar o a dificultar la verificación de las declaraciones o la determinación de oficio, serán sancionados con una multa de cien a mil sucres, según su gravedad.

Art. 122.— Las sanciones que consideran los artículos anteriores serán impuestas por el Director General de Rentas, con motivo de una fiscalización o determinación de oficio, obligatoriamente y de acuerdo con la gravedad de la falta.

CAPITULO XXXIV

DE LAS SANCIONES PARA LAS PERSONAS O ENTIDADES QUE TIENEN LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR INFORMES

Art. 123.— Las personas o entidades a quienes el Director General de Rentas hubiere exigido informe obligatorio de acuerdo con lo previsto en el Art. 94 y que no lo presentaren en la forma y en el plazo que para ello se establezca en el Reglamento o se indique en la comunicación que para tal efecto enviare el Director, incurrirán en una multa de cien a cinco mil sucres, que impondrá el Director de acuerdo con la naturaleza e importancia de la actividad de que se trate. La multa será del doble cuando en los informes se dieran datos falsos, sin perjuicio de las penas que establece el Código Penal para estas infracciones.

Art. 124.— Los funcionarios que no enviaren los informes previstos en el Art. 94, serán sancionados con una multa de cien a mil sucres, según la importancia de las informaciones que se omitieren y la reincidencia en la falta.

CAPITULO XXXV

DE LAS SANCIONES PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA SUBSECRETARIA DE RENTAS

Art. 125.— Los funcionarios y empleados de la Subsecretaría de Rentas que en el desempeño de sus cargos incurrieren en las infracciones consideradas en el Título III del Libro II del

Código Penal, serán sancionados con un multa de quinientos a veinte mil sueres, aparte de las penas que establece dicho Código. Además, los funcionarios y empleados que incurrieren en las susodichas faltas, serán cancelados de inmediato.

Art. 126.— El incumplimiento o negligencia en el desempeño de las obligaciones que imponen a dichos funcionarios o empleados esta Ley o sus Reglamentos, además de las penas disciplinarias a que haya lugar, serán sancionados con una multa de cien a mil sueres.

Art. 127.— Los jefes provinciales de recaudaciones que, transcurridos tres meses a contarse de la fecha de promulgación de esta Ley o de la fecha de posesión de su cargo, en su caso, no iniciaren el procedimiento de la coactiva por los créditos pendientes, serán privados de sus sueldos hasta que pongan al día las tramitaciones.

Esta sanción es independiente de las que se consideran anteriormente.

Art. 128.— Las sanciones contempladas en este Capítulo serán impuestas por el Ministro de Finanzas, de oficio o a petición del Subsecretario de Rentas, de acuerdo con la gravedad de la falta y también en relación con la remuneración que perciban los sancionados.

CAPITULO XXXVI

DE LAS SANCIONES PARA LOS CÓMPlices, ENCUBRIDORES Y REINCIDENTES

Art. 129.— Las sanciones para los cómplices y encubridores en las infracciones a la presente Ley o sus reglamentos, serán graduadas de conformidad con el criterio que señala el Código Penal en el Capítulo I, del Título II, del Libro I, sobre la base de las que correspondan a los autores principales.

Art. 130.— Salvo disposiciones expresas de esta Ley al respecto, las penas económicas para los autores, cómplices y encubridores se elevarán, en caso de reincidencia, al doble de la anteriormente impuesta.

CAPITULO XXXVII

DE LA CADUCIDAD

Art. 131.— Caducará en el plazo de cinco años el derecho del Fisco para la fiscalización o verificación de las declaraciones que, respecto del impuesto, formulen los contribuyentes y demás responsables o terceros, así como para la determinación de oficio de las rentas respectivas.

El plazo se extenderá a siete años cuando no se hubiere presentado ninguna declaración de las correspondientes actividades económicas.

El derecho del Fisco para verificar o enmendar una acta de fiscalización, caducará en el plazo de un año contado desde la fecha de la notificación respectiva.

El derecho para establecer las infracciones a la presente Ley o a sus Reglamentos y sancionadas, caducará en los mismos plazos que se señalan en los dos primeros incisos de este artículo.

Art. 132.— El cómputo de los plazos que se señalan en los incisos primero y segundo del artículo anterior, se hará desde el primero de abril del año en que se debió presentar la declaración; y si el pago del impuesto no debió hacerse mediante declaración, desde la fecha en que fue exigible.

Tratándose de infracciones, el cómputo de los plazos se hará desde la fecha en que se las cometió y, si no fuere posible determinarla, desde el primero de abril del año correspondiente.

CAPITULO XXXVIII

DE LA PRESCRIPCION

Art. 133.— La acción para el cobro de los créditos fiscales prescribe en el plazo de diez años contados desde el primero de enero del año en el que se originó la obligación.

Esta prescripción se interrumpe con la citación del auto de coactiva, o por el reconocimiento expreso o tácito, de la obligación por parte del obligado.

Art. 134.— La reclamación contra el Fisco por pago indebido prescribirá en el plazo de tres años contados desde la fecha en que se efectuó el pago. El plazo de esta prescripción se interrumpe con las reclamaciones administrativas que se formulan para obtener el respectivo reintegro. La reclamación por pago indebido, sólo podrá proponerse con sujeción a lo establecido en el Capítulo "De las Reclamaciones".

CAPITULO XXXIX

DE LAS RECLAMACIONES

Art. 135.— Los contribuyentes o demás responsables de la obligación tributaria o los terceros a quienes se les notifique con los resultados de una fiscalización o determinación de oficio, imposición de multas o sanciones, o cualquier otra providencia que comporte obligación en el orden tributario, podrán formular una reclamación debidamente razonada, dentro del plazo de treinta días, a contarse desde el día siguiente al de la notificación. Con la reclamación se presentarán las pruebas del caso, o se las ofrecerá presentar oportunamente, dentro del plazo que el Subsecretario de Rentas señalará al efecto.

Art. 136.— Una vez recibida la reclamación en la Oficina del Subsecretario de Rentas, éste mandará que se notifique la recepción y, de oficio o a petición de parte, podrá conceder un plazo para la presentación de pruebas. En el mismo decreto designará el abogado que debe intervenir por los intereses fiscales.

Expirado este plazo, el Subsecretario de Rentas pedirá informes a la Dirección General de Rentas y, si lo estimare conveniente, a otras oficinas.

Formado así el proceso, el Subsecretario de Rentas expedirá su resolución dentro del plazo de sesenta días a contarse desde la notificación de la recepción de la solicitud inicial al que se sumará el que hubiere concedido para la presentación de pruebas.

La resolución se notificará al reclamante.

Art. 137.— Si el Subsecretario de Rentas no dictare su resolución dentro del plazo señalado para ello, se entenderá negada tácitamente la reclamación.

Art. 138.— Las resoluciones favorables para los contribuyentes, que representen una disminución de más de diez mil sures, respecto del tributo contemplado en las glosas o estimaciones de oficio, se elevarán en consulta al Ministro de Finanzas.

Si en el plazo de cuarenta días de elevada la consulta, no fuere absuelta, se entenderá confirmada la resolución del Subsecretario de Rentas.

Art. 139.— El Ministro de Finanzas podrá celebrar arreglos con los contribuyentes acerca de la obligación tributaria, en lo concerniente a plazos y cuotas para el pago.

Art. 140.— Dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución del Subsecretario de Rentas o del Ministro de Finanzas o de proferidas las denegaciones tácitas, el reclamante podrá apelar para ante el Tribunal Fiscal.

Interpuesto el recurso dentro del plazo legal, el proceso de la reclamación se elevará al Tribunal, agregando los antecedentes de la fiscalización, determinación de oficio, imposición de multas o sanciones o de la providencia base de la reclamación.

El Tribunal Fiscal resolverá por los méritos del proceso. Sin embargo, podrá ordenar, de oficio, las diligencias que creyere necesarias para establecer algún punto controvertido.

Art. 141.— Ejecutoriada la fijación del impuesto, o la resolución del Subsecretario de Rentas, del Ministro de Finanzas o del Tribunal Fiscal, en su caso, se expedirá el respectivo título de crédito, y se exigirá su cobro por la vía coactiva, que no tendrá más excepciones que las previstas en el Art. 71 del Código Fiscal, y sólo en el caso de que el coactivado no hubiere intervenido en el trámite administrativo.

Art. 142.— Las exoneraciones o reducciones de penas se concederán únicamente en las resoluciones que se dicten sobre las reclamaciones de los sancionados; pero, el Ministro de Finanzas podrá reducir las multas mediante convenio.

Art. 143.— En ningún caso las multas podrán rebajarse en más del cincuenta por ciento (50%), ni en términos tales que se reduzcan a menos del mínimo establecido, según el caso.

Art. 144.— En las reclamaciones se aplicarán timbres únicamente en los escritos que presenten el reclamante; por tanto, no llevarán timbres los instrumentos informativos o probatorios.

CAPITULO XL

DE LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO

Art. 145.— El Ministerio de Finanzas, por intermedio de la Subsecretaría de Rentas, y de las dependencias respectivas, tendrá a su cargo la aplicación de la presente Ley.

Art. 146.— El Director General de Rentas tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

a) Planificar, dirigir y vigilar el trabajo de los funcionarios y empleados de la Dirección;

b) Expedir los títulos de crédito, una vez cumplido el procedimiento que establece esta Ley;

c) Cuidar especialmente la parte técnico-financiera en la defensa de los intereses fiscales;

d) Impartir instrucciones para los contribuyentes y responsables del impuesto, así como para los terceros que conforme a esta Ley deban presentar declaraciones o informaciones.

Dichas instrucciones versarán especialmente, sobre las siguientes materias: Indices, coeficientes o promedios que sirvan de base para la estimación de oficio de la renta o de la utilidad imponible; así como para el control y modificación de las declaraciones de los contribuyentes, siempre que no estén fijados expresamente por la Ley;

Registro de los contribuyentes y responsables del pago del impuesto;

Forma de las declaraciones que deban presentarse, de acuerdo con esta Ley;

Lugar y forma de pago del impuesto y abonos a cuenta del mismo;

Fiscalización de las declaraciones que presentaren los contribuyentes, examen de la contabilidad que llevaren e intervención de los agentes de retención;

Sistemas de contabilidad, libros y anotaciones que deben llevar los contribuyentes y responsables del impuesto, o los terceros, en su caso;

Otros deberes de los contribuyentes, responsables y terceros, en general, y especialmente con motivo de los requerimientos que se les hicieren con el objeto de realizar una verificación o cualquier otra intervención para el éxito de los procedimientos tendientes a la mejor aplicación del impuesto;

e) Llevar la estadística del impuesto a la renta, especialmente en todo lo relativo al rendimiento de los impuestos progresivo a la renta global, proporcionales y adicionales; impuestos pagados por sociedades de capital y por las personas naturales y otros contribuyentes; frecuencia de las rentas conforme a una adecuada y comprensiva clasificación; valor de las rebajas general y por cargas de familia; ingresos brutos y

netos; materia imponible y, en general, todo lo que fuere aprovechable para una correcta información sobre la materia;

f) Organizar el trabajo y la información que conduzcan a una clasificación ordenada de las actividades económicas y a la determinación de coeficientes normales de productividad neta y bruta, en función de capital empleado y del monto bruto de las ventas;

g) Compilar las leyes y reglamentos relativos a este impuesto, así como la jurisprudencia establecida, y llevar todo esto a conocimiento de sus dependencias y de los contribuyentes;

h) Someter a consideración del Ministro de Finanzas recomendaciones para la provisión de los cargos técnicos;

i) Solicitar al Ministro de Finanzas la destitución de empleados, así como la aplicación de sanciones que deban ser impuestas por el Ministro;

j) Sugerir al Ministro de Finanzas las reformas que estime necesarias para la aplicación de la presente Ley, así como las modificaciones a los Reglamentos; y,

k) Los demás deberes y atribuciones que le corresponden en virtud de otras disposiciones.

Art. 147.— El Director General de Recaudaciones tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

a) Planificar, dirigir y vigilar el trabajo de los funcionarios y empleados de la Dirección a su cargo;

b) Expedir las órdenes de cobro de los títulos de crédito emitidos por la Dirección General de Rentas;

c) Efectuar las gestiones para el cobro de los mismos;

d) Vigilar la marcha de los procesos coactivos;

e) En general, procurar el oportuno y cabal pago del tributo; y,

f) Los demás que le correspondan en virtud de otras disposiciones.

Art. 148.— Las Jefaturas Provinciales de Recaudaciones recibirán el pago del impuesto en sus respectivas jurisdicciones, y efectuarán las demás diligencias relativas a la recepción y tramitación de las declaraciones determinadas en esta Ley o en el Reglamento, y las especiales que exija la Dirección General de Recaudaciones, debiendo limitar su iniciativa a dar instrucciones y a sugerir las enmiendas que creyere oportunas, pero no rechazarán las declaraciones que reciban principalmente cuando los contribuyentes asuman la responsabilidad de sus actos y no acepten tales enmiendas.

Art. 149.— La Oficina Nacional de Personal formulará un reglamento que será sometido a la aprobación del Ministro de Finanzas, en el que se harán constar los requisitos mínimos de capacidad para llenar los cargos de fiscalizadores, revisores, liquidadores, contadores y más perso-

nal de la Dirección General de Rentas y de la de Recaudaciones.

La Contraloría General de la Nación se abstendrá de inscribir los nombramientos en los que no constare expresamente haberse cumplido los requisitos indicados en el mencionado Reglamento.

Art. 150.— Los Directores Generales de Rentas y Recaudaciones, sus representantes, delegados o agentes, jefes provinciales de recaudaciones y demás funcionarios y empleados de las Direcciones o de sus dependencias, no podrán divulgar o dar información alguna relativa a la fuente y cuantía de la renta, pérdidas, gastos y cualesquiera otros datos que figuren en las declaraciones, libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de la contabilidad o documentación que hubiere sido examinada oficialmente, salvo lo dispuesto en el Art. 81.

Las prohibiciones y limitaciones precedentes no obstan para que las autoridades judiciales o administrativas competentes examinen las declaraciones de los contribuyentes y toda documentación oficial sobre la materia, en cuanto fuere necesario para la tramitación de las reclamaciones propuestas por los propios contribuyentes, o para el establecimiento de la obligación tributaria de los causantes y responsables del impuesto. Tales prohibiciones y limitaciones tampoco obstarán para los estudios y publicaciones estadísticas de carácter general, ni para la elaboración de índices y coeficientes de rentabilidad por grupos de actividades a la que se refiere el Art. 146; ni para el cumplimiento de las providencias que dictare el Tribunal Fiscal pidiendo el envío de los expedientes formados en la sustanciación de las reclamaciones administrativas, los mismos que han de estar cuidadosamente ordenados, con la respectiva numeración en cada foja.

CAPITULO XLI

DISPOSICIONES ESPECIALES

Art. 151.— Cuando en virtud de denuncia de extraños a la administración se hubiera cobrado impuestos superiores a los declarados, el denunciante tendrá derecho al cincuenta por ciento (50%) de la diferencia.

Art. 152.— En convenios que celebren el Estado, los municipios y otros organismos libres de impuestos, con particulares, no se podrán considerar otras exenciones del impuesto que las que contempla esta Ley. La Dirección General de Rentas no admitirá las exenciones que estuvieren en contra de este artículo, y exigirá el pago del tributo al sujeto directo de la obligación, a menos que la institución contratante pague el valor del impuesto.

Art. 153.— Autorízase a la Función Ejecutiva para que, en los convenios generales o especiales que celebre con gobiernos extranjeros para

evitar la doble imposición internacional y la evasión fiscal, reduzca las tarifas del impuesto que considera esta Ley, o el impuesto que conforme a ella resultare, o bien, para llegar a cualquier otro criterio o distribución equitativa de la carga tributaria, en todos los casos en los cuales el principio de la fuente no se base en indiscutible criterio aprobado en las reuniones internacionales que se hayan celebrado para este efecto, como intereses de préstamos de inversionistas extranjeros, rentas de empresas de transporte, de empresas de seguros, de la exportación de productos naturales y de otros negocios análogos.

Autorízase igualmente a la Función Ejecutiva para que, en casos de conveniencia nacional, para el ejercicio de una actividad económica conceda un régimen transitorio a empresas extranjeras domiciliadas en países que no concedan crédito tributario, total o parcialmente por el impuesto pagado en el país de la fuente de la renta, en el caso que se otorgue una reducción de hasta el cincuenta por ciento (50%) del impuesto que establece esta Ley. Para obtener esta concesión será indispensable que se presente un certificado auténtico de la correspondiente autoridad tributaria del país del domicilio, en el que conste que la empresa debe impuesto, total o parcial, por las utilidades de fuente ecuatoriana y que no se otorga crédito tributario por el impuesto pagado en el Ecuador, o se indique la magnitud del crédito si se lo otorga parcialmente.

Art. 154.— Se deberá obtener de las respectivas jefaturas provinciales de recaudaciones certificados de haber declarado y no deber impuesto a la renta en los siguientes casos:

- a) Para la concesión de visas de pasaportes para salir del país;
- b) Para la concesión de permisos de importación y exportación;
- c) Para la celebración de contratos de ejecución de obras o de aprovisionamiento, con el Gobierno, otras entidades públicas o instituciones de finalidad social o pública;
- d) Para la constitución de sociedades;
- e) Para la cancelación de garantías dadas en seguridad de préstamos u otras inversiones;
- f) Para la protocolización de escrituras, actos o expedientes relativos a la liquidación de sociedades;
- g) Para la concesión de matrículas de comercio; y,
- h) Para el registro de nombramientos de empleados públicos; pero si el designado debiere impuesto a la renta bastará para que se efectúe el registro, una orden del Contralor General de la Nación al Oficial Pagador respectivo, a pedido del interesado, para que descuente el valor del impuesto adeudado en doce mensualidades.

Los notarios y demás funcionarios públicos que deban actuar en los actos y diligencias que se

acaban de mencionar, que no cumplieren la obligación de exigir el certificado de que se trata, serán sancionados con multa de cien a cincuenta mil sucres.

Art. 155.— El producto del impuesto establecido por la presente Ley ingresará a la cuenta "Impuesto sobre la Renta" que el Banco Central mantendrá para el objeto, y de la cual, mensualmente, deberá transferir a las respectivas partidas presupuestarias, a la cuenta de los participantes enumerados a continuación, la doceava parte de las siguientes cantidades:

Veinte y cuatro millones de sucres (\$ 24'000.000) a la cuenta "Fondos para la Defensa Nacional".

Seis millones quinientos mil sucres (\$ 6'500.000) a la cuenta "A los actuales participantes de los fondos de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del cinco de agosto de mil novecientos cuarenta y nueve".

Ochocientos mil sucres (\$ 800.000) a la cuenta "Fondos para la Liga Ecuatoriana Antituberculosa".

Diez millones de sucres (\$ 10'000.000) a la cuenta "Fondos para las Universidades de la República".

El remanente de la distribución antedicha deberá ser transferida a la cuenta "Fondos de Operación del Tesoro".

De la asignación otorgada a las Universidades de la República, la cantidad de seis millones seiscientos mil sucres (\$ 6'7000.000), que sustituye a la participación establecida en el Decreto Legislativo de 29 de octubre de 1957, publicado en el Registro Oficial N° 725, de 26 de enero de 1959, y al recargo del diez por ciento (10%) sobre el impuesto líquido a la renta establecido por el Art. 9° del Decreto Legislativo de 5 de noviembre de 1958, publicado en el Registro Oficial N° 680, del 1° de diciembre del mismo año, se distribuirá de la siguiente manera:

Doscientos mil sucres (\$ 200.000) para la Universidad Católica de Guayaquil, y la diferencia conforme a los porcentajes que se indican a continuación:

Veinte y dos por ciento (22%) para la Universidad Central del Ecuador;

Veinte y dos por ciento (22%) para la Universidad de Guayaquil;

Diez y siete por ciento (17%) para la Universidad de Cuenca;

Catorce por ciento (14%) para la Universidad de Loja;

Once por ciento (11%) para la Universidad Técnica de Manabí;

Cinco por ciento (5%) para la Escuela Politécnica de Quito;

Cinco por ciento (5%) para la Escuela Politécnica de Guayaquil; y,

Cuatro por ciento (4%) para la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

El valor restante de tres millones trescientos mil sucres (\$ 3'300.000) correspondiente a la asignación de las Universidades de la República,

se distribuirá de acuerdo con el número de alumnos matriculados en cada uno de los Establecimientos y, en igual proporción, se distribuirá el incremento de un millón de sucres (\$ 1'000.000) anuales que obligatoriamente se hará constar a partir del año de mil novecientos sesenta y cuatro, para las Universidades existentes y las que en el futuro se crearen.

Los impuestos establecidos en los Arts. 70 y 71 de esta Ley, se depositarán directamente en las Cuentas "Comisión de Tránsito del Guayas" y "Centro de Rehabilitación de Manabí", respectivamente.

Art. 156.— Esta Ley entrará en vigencia desde su publicación en el Registro Oficial y sus disposiciones se aplicarán para la liquidación de los impuestos sobre las rentas obtenidas en mil novecientos sesenta y tres, excepto el caso en el que un contribuyente hubiere satisfecho la obligación tributaria total relativa a dicho año de mil novecientos sesenta y tres (1963).

Los intereses de cédulas hipotecarias serán considerados a partir de mil novecientos sesenta y cuatro (1964).

Art. 157.— El impuesto establecido a cargo de los empleados de embajadas, consulados y organismos internacionales empezará a pagarse desde enero de mil novecientos sesenta y cuatro (1964) de conformidad con las disposiciones de esta Ley, debiéndose considerar la deducción por concepto de aportes, estén o no afiliados al Seguro Social Ecuatoriano.

Para estos efectos, el Director General de Rentas notificará a los mencionados organismos la necesidad de que se efectúe la retención del tributo y de que se designe a la persona que ha de actuar como agente de retención del impuesto, debiéndose comunicar este particular al mencionado funcionario.

Art. 158.— Las declaraciones anuales sobre utilidades obtenidas que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 86 de esta Ley, deben presentarse hasta el treinta y uno de marzo, podrán presentarse en el presente año hasta el treinta de abril, respecto a las utilidades obtenidas en 1963.

De igual manera, la reliquidación anual que deben presentar hasta el treinta y uno de enero de cada año los agentes de retención de impuestos sobre la renta del trabajo en relación de dependencia, de acuerdo a lo establecido en el mismo Art. 86 citado, podrán presentarse en el presente año, hasta el treinta y uno de marzo, respecto a los impuestos retenidos durante 1963.

Art. 159.— Deróganse: La Ley de Impuesto a la Renta expedida el treinta y uno de julio de mil novecientos sesenta y dos, publicada en el Registro Oficial N° 222, de dos de agosto de mil novecientos sesenta y dos; todas las Leyes y Decretos en la parte que hubieren creado gravámenes adicionales a la renta o recargos sobre el impuesto principal que afecte a la misma; todas las disposiciones legales o reglamentarias que consideren otras exenciones que las previstas en la presente Ley; las exoneraciones del impuesto

a la renta previstas en las Leyes de Fomento Industrial, que quedan sustituidas en la letra 1) del Art. 48; las disposiciones legales o reglamentarias que otorguen una participación en el producto del impuesto a la renta distinta a la que en esta Ley se considera; y, todas las disposiciones que estén en pugna con la presente Ley.

Art. 160.— El Ministro de Finanzas expedirá el Reglamento General y los Especiales relativos a esta Ley.

Art. 161.— Encárgase de la ejecución de la presente Ley al Ministro de Finanzas.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 20 de Febrero de 1964.

f.) Ramón Castro Jijón, Contralmirante.— f.) Luis Cabrera Sevilla, General de División.— f.) Marcos Gándara Enríquez, General de División.— f.) Guillermo Freile Posso, Coronel de E. M. de Ave.— f.) Ing. Jack Bermeo, Ministro de Finanzas.

N° 519

EL MINISTRO DE FOMENTO,

Considerando:

Que el señor Rafael A. Lasso Meneses, ha elevado a este Ministerio una solicitud tendiente a conseguir los beneficios señalados en el Numeral 15 de la Ley de Fomento Industrial, para la constitución de la Compañía Anónima que se denominará "Industrias Vinílicas C. A."; que la nueva Empresa funcionará en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, con un capital probable de dos millones de sucres (\$ 2'000.000,00) y tendrá por objeto el establecimiento de una planta productora de baldosas y otros artículos conexos para pisos y construcciones diversas, generalmente conocidas como vinil, lo que conviene al desarrollo industrial del país; y,

En uso de la facultad que le concede el Art. 36 de la citada Ley de Fomento Industrial, publicada en el Registro Oficial N° 228 del 9 de agosto de 1962, reformada mediante Decreto Ley de Emergencia N° 25 del 23 de mayo de 1963 y por Decreto Supremo N° 348 del 28 de agosto del mismo año,

Resuelve:

Art. 1º.— Conceder Autorización Provisional al señor Rafael A. Lasso Meneses, para la constitución de la Compañía Anónima que bajo la denominación de "Industrias Vinílicas C. A.", formará en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, con un capital probable de dos millones de sucres y que tendrá por objeto el establecimiento de una planta productora de baldosas y otros artículos conexos para pisos y construcciones diversas, generalmente conocidas como de vinil.

ANEXO

3

REGISTRO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

EL ECUADOR HA SIDO, ES Y SERA PAIS AMAZONICO

Administración del Excmo. Sr. Dr. Dn. José María Velasco Ibarra,
Presidente de la República

AÑO II — QUITO, MIERCOLES 8 DE SEPTIEMBRE DE 1971 — NUMERO 305

Director:
SALVADOR CAZAR CADENA
Teléfono: N° 212564

CAPITULO I
Del Impuesto

Tiraje: 5.300 ejemplares.— Valor s/ 2,00
Edición de 32 páginas

Suscripción anual ... s/ 175,00

SUMARIO:

Dcto.

DECRETOS SUPREMOS:

1283	CODIFICACION DE LA LEY DE IMPUESTO A LA RENTA	1
1059	Pensiones de retiro militar	20
970	Colócase en disponibilidad a varios Oficiales del Ejército	30
1077	Promuévese al grado superior a varios Oficiales del Ejército	31
1102	Pensiones de montepío policial	32

N° 1283

JOSE MARIA VELASCO IBARRA,
Presidente de la República,

Considerando:

Que, con posterioridad a la expedición del Decreto Supremo 329, publicado en el Registro Oficial 190 de 26 de febrero de 1964, se han efectuado múltiples reformas a la Ley de Impuesto a la Renta;

Que es necesario disponer de un instrumento legal tributario de fácil manejo tanto para la administración fiscal como para los contribuyentes; y,

En uso de las atribuciones de que se halla investido,

EXPIDE:

La siguiente codificación de la Ley de Impuesto a la Renta.

Art. 1°— Objeto del Impuesto.— Esta Ley establece el impuesto sobre la renta anual que obtengan en el Ecuador las personas naturales o jurídicas, sean nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, y las que se perciban del exterior y se hallen contempladas en esta misma Ley.

Las ganancias ocasionales se gravan conforme a las disposiciones respectivas de esta Ley.

Art. 2°— Clases de Impuestos.— La presente Ley establece un impuesto progresivo a la renta global de las personas naturales; y un impuesto proporcional sobre determinados grupos de rentas, así como sobre las utilidades no distribuidas de las empresas.

CAPITULO II De las rentas gravadas

Art. 3°— Concepto de Renta.— Se considera renta, para los propósitos de esta Ley, los ingresos en dinero, especies o servicios que obtenga una persona, natural o jurídica, anual o periódicamente, del ejercicio de una actividad económica.

Art. 4°— Clases de Rentas.— Para los efectos que contempla esta Ley, las rentas se clasifican en los siguientes grupos:

- Rentas derivadas del trabajo en relación de dependencia;
- Rentas del trabajo o de la actividad profesional sin relación de dependencia;
- Rentas provenientes del trabajo con el concurso del capital;
- Rentas del capital puro sin el concurso del trabajo; y,
- Utilidades no distribuidas de las empresas de capital.

Art. 5°— Rentas derivadas del trabajo en relación de dependencia.— Se tendrán como rentas provenientes del trabajo en relación de dependencia, las que obtengan los funcionarios, empleados y trabajadores, en virtud de nombramiento o contrato de trabajo, expreso o tácito, como remuneración de su trabajo ordinario o extraordinario, incluyéndose recompensas, gratificaciones y otras remuneraciones adicionales.

por servicios que se presten en el Ecuador o fuera de él, y que sean abonados por cuerpos gubernativos nacionales o extranjeros, por empresas domiciliadas o establecidas en el país o fuera de él.

Art. 6º— Rentas del trabajo o de la actividad profesional sin relación de dependencia.— Están comprendidas en el grupo de rentas del trabajo de la actividad profesional sin relación de dependencia, todas las demás rentas que provengan exclusivamente del trabajo de los causantes autónomos, como: las utilidades de los socios industriales en las sociedades de personas, de hecho o de derecho; las que obtengan los autores o inventores como regalías por el uso de patentes, marcas o inventos; los honorarios de médicos, abogados, ingenieros, dentistas, veterinarios, arquitectos, economistas, auditores, contadores, fotógrafos, etc., y las rentas de los comisionistas, agentes y representantes, siempre que estos operen sin capital o con un capital inferior a Cien mil sucres.

Art. 7º— Rentas provenientes del trabajo con el concurso del capital.— Corresponden al grupo de rentas provenientes del trabajo con el concurso del capital, las rentas de los negocios de carácter comercial, industrial o agrícola, incluyendo las rentas de miembros de sociedades de personas de hecho o de derecho; utilidades de comerciantes, industriales, agricultores, propietarios de casas, arrendatarios, subarrendatarios de predios rurales, de minas y otras explotaciones de inmuebles, etc.; y las rentas de todo el capital de los causantes y que no deben considerarse entre las rentas de capital puro o del trabajo profesional, según las disposiciones de esta Ley, o de su Reglamento.

Las rentas que obtengan los propietarios de inmuebles urbanos, sin el concurso del trabajo, excepto la hecha de las sociedades de capital dedicadas exclusivamente a la explotación de inmuebles, se considerarán en este grupo sólo para los efectos de la aplicación de la tasa proporcional.

Art. 8º— Rentas del capital puro sin el concurso del trabajo.— Están comprendidas en el grupo de rentas de capital puro sin el concurso del trabajo, en general, todas las rentas que provengan exclusivamente del capital sin el concurso del trabajo de los causantes como: intereses de préstamos, de depósitos y de otras colocaciones o empleos de capital, intereses de refundiciones hereditarias; intereses sobre negocios a plazos; cuentas individuales de los socios en sociedades de capital o de personas; dividendos de acciones, intereses de inversiones de capital en el exterior, no exonerados por esta Ley; utilidades de arrendadores y subarrendadores de predios rurales y subarrendadores de predios urbanos, de minas u otros bienes muebles o inmuebles; regalías que perciban personas naturales o jurídicas por el uso que concedan de patentes, marcas o inventos que hayan adquirido.

Art. 9º— Utilidades no distribuidas de las empresas de capitales.— Pertenecen al grupo de utilida-

des no distribuidas de las empresas de capital, las que se destinen a reservas, a aumentos de capital o a cualquier otro fin semejante.

CAPITULO III

De las rentas de fuente ecuatoriana

Art. 10.— Se consideran rentas de fuente ecuatoriana las que provengan:

a) DEL TRABAJO EN RELACION DE DEPENDENCIA, COMO:

1. Las remuneraciones percibidas por trabajos realizados en el Ecuador por ecuatorianos o extranjeros residentes, pagados por instituciones nacionales de derecho público o por instituciones de derecho privado, con finalidad social o pública, o por personas naturales o jurídicas de derecho privado, nacionales o extranjeras, que tengan actividades económicas en el Ecuador.

2. Las remuneraciones de ecuatorianos o extranjeros residentes en el Ecuador al servicio de organismos internacionales o de organismos y gobiernos extranjeros.

3. Las remuneraciones percibidas por ecuatorianos o extranjeros que se hallen en el exterior, al servicio permanente del Gobierno o de organismos o empresas nacionales o de empresas extranjeras con domicilio en el Ecuador;

4. Las remuneraciones percibidas por ecuatorianos o extranjeros por trabajos ocasionales, realizados en el exterior y pagados por organismos públicos nacionales, o por empresas con domicilio en el Ecuador;

5. Las remuneraciones percibidas por extranjeros que se encontraren ocasionalmente en el Ecuador al servicio de empresas extranjeras, cuando permanezcan más de seis meses en el país.

b) DEL TRABAJO O DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL SIN RELACION DE DEPENDENCIA, COMO:

1. Los honorarios y remuneraciones pagados a profesionales ecuatorianos por cuerpos, nacionales o extranjeros, o por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país;

2. Las remuneraciones de profesionales nacionales o extranjeros y de empresas, por servicios a instituciones nacionales de derecho público o a instituciones de derecho privado con finalidad social o pública, empresas nacionales y establecimientos permanentes de empresas extranjeras, se sujetarán a las siguientes normas:

Primera.— Si los servicios hubieren sido prestados en el Ecuador por personas nacionales se considerará de fuente ecuatoriana el total de la cantidad pagada o acreditada, y si lo hubieren sido por extranjeros se considerará renta neta, y se computará el impuesto sobre el sesenta por ciento de la cantidad total pagada o acreditada si la permanencia en el país fuera inferior a un año. Cuando el tiempo de permanencia fuera de un año o más se computará el impuesto sobre el ciento por ciento de la renta.

Segunda.— Si los servicios profesionales hubieran sido prestados por personas naturales o jurídicas, en el exterior, se considerará renta neta el ochenta por ciento de la remuneración percibida.

c) DEL TRABAJO CON EL CONCURSO DEL CAPITAL, relativas a negocios de carácter comercial, industrial, agrícola o minero, realizadas en territorio ecuatoriano.

d) DEL CAPITAL PURO SIN EL CONCURSO DEL TRABAJO, comprendiéndose en este grupo las de capitales, bienes o derechos situados, colocados o utilizados en el Ecuador, como:

1. Las inversiones de dinero en el país, mediante préstamos, hipotecarios o no, emisión de bonos o cédulas hipotecarias, siempre que las mismas se hayan efectuado en el Ecuador, prescindiendo del lugar de emisión de los títulos o de la situación de la empresa emisora y de la ubicación de los inmuebles a los que afectan las garantías reales dadas en esos préstamos o en la emisión de los títulos fiduciarios;

2. Las utilidades de sociedades nacionales de capital prescindiendo del domicilio y nacionalidad de los accionistas. Esta misma norma se aplicará a las compañías extranjeras que operen en el país; y

3. Las utilidades que obtengan establecimientos de dependencia extranjera que operen en el país.

e) Las utilidades no distribuidas de las empresas de capital producidas en el país.

Art. 11.— Establecimientos permanentes de empresas extranjeras.— Igualmente, serán rentas de fuente ecuatoriana las que obtengan establecimientos permanentes de empresas extranjeras situadas en el país, por sus operaciones y actividades en el Ecuador.

Para los efectos tributarios, se considerarán estos establecimientos permanentes: casas matrices, sucursales, agencias, oficinas, almacenes de depósito, minas y pozos de petróleo, plantaciones, bosques, fábricas, talleres, estudios, consultorios y otros locales de carácter productivo permanente, en los que se realicen negocios por cuenta de la empresa extranjera.

En el Reglamento se determinará la condición del establecimiento permanente, o su inexistencia en los casos especiales y conforme a las normas que se hubieren aprobado en las reuniones internacionales. En las que se hubiere tratado de esta materia, y de acuerdo con el criterio de la fuente señalada en esta Ley.

Art. 12.— Empresas de transporte o comunicaciones.— También se considerarán rentas de fuente ecuatoriana las que obtengan empresas de transporte o comunicaciones establecidas en el país, o establecimientos permanentes de empresas extranjeras, conforme a la definición que consta en el artículo precedente.

Cuando no se pudiere establecer la utilidad realizada en el país por los métodos normales contables, la Dirección General de Rentas celebrará acuerdos de vigencia temporal, para establecer la renta de fuente ecuatoriana, mediante cualquiera de los sistemas que se puedan emplear para este objeto; y, de no haberse celebrado el acuerdo, la Dirección determi-

nará la renta de fuente ecuatoriana conforme a las reglas técnicas aplicables.

Art. 13.— Exportación de productos naturales.— Igualmente se considerarán rentas de fuente ecuatoriana las que provengan de la exportación de productos naturales ecuatorianos, que efectúen las empresas extranjeras por medio de agentes especiales, comisionistas, sucursales, filiales y otros establecimientos permanentes.

Se tendrá como renta de fuente ecuatoriana la diferencia entre el precio efectivo de colocación al por mayor vigente en el mercado de destino, y el de compra de los productos en el país, más los gastos que motiva la exportación, transporte y colocación de los productos; y, en general, los gastos necesarios para obtener la renta.

Cuando la operación de la compra en el país se efectúe por medio de un establecimiento permanente de la empresa extranjera, la persona o personas bajo cuya dirección se encuentre dicho establecimiento, deberán llevar en el país la contabilidad de los costos de la operación, inclusive hasta la venta al por mayor en el mercado de destino, y de los ingresos brutos de tales ventas. Las declaraciones se presentarán de conformidad con lo que dispone la presente Ley para las empresas radicadas en el

Cuando se opere por medio de intermediarios, cuya gestión termina en el embarque, éstos deberán llevar la contabilidad que establezca los costos de operación en el Ecuador hasta el embarque y la propia de su negocio, por separado.

Las personas y los intermediarios que se mencionan en los dos incisos anteriores deberán obtener de la respectiva empresa extranjera, los datos necesarios para determinar los ingresos por ventas de los productos importados del Ecuador y de los gastos imputables a ellas, y serán tenidos como sus representantes para todos los efectos tributarios, con responsabilidad personal y solidaria.

Cuando no sea posible establecer la renta de fuente ecuatoriana por información contable, según lo dispuesto en este artículo, o hubiere, a juicio de la Dirección General de Rentas, presunciones de no corresponder a la realidad del negocio en cualquiera de sus aspectos, se tendrá como utilidad el cincuenta por ciento de la diferencia entre el precio CIF efectivo de los productos exportados y el precio de venta al por mayor en los mercados de destino, y como renta imponible de fuente ecuatoriana, el sesenta por ciento de dicha utilidad.

Cuando se trata de exportaciones a países que no concedan crédito tributario por el impuesto pagado en el Ecuador, probada esta circunstancia, el Director General de Rentas reducirá el impuesto hasta un cincuenta por ciento, según las condiciones del caso.

Las determinaciones de rentas de fuente ecuatoriana consideradas en este artículo podrán también efectuarse previa consulta o acuerdo con las autoridades tributarias del otro país interesado.

Art. 14.— **Empresas de Seguros y Reaseguros.**— Las empresas de seguros y reaseguros, establecidas o que se establecieren en el país, así como las extranjeras que operen en el Ecuador debidamente autorizadas por la Superintendencia de Bancos, incluyendo las operaciones que se ejecuten por medio de agentes, deberán impuestos sobre las utilidades de fuente ecuatoriana que obtengan de esas operaciones. Cuando no se pudiera establecer las utilidades obtenidas por empresas extranjeras por falta de datos suficientes, la Dirección General de Rentas, tomando en cuenta las condiciones especiales de la actividad desarrollada en el país, así como las utilidades que obtienen las empresas similares cuya utilidad conociera, previo informe de la Superintendencia de Bancos, fijará coeficientes de utilidad neta.

El impuesto que corresponda satisfacer para los casos de cesión o reaseguros contratados con empresas que no tengan establecimientos o representación permanente en el Ecuador, será retenido y pagado por el cedente o reasegurado, sobre la utilidad neta establecida siguiendo igual procedimiento al indicado en la última parte del inciso anterior.

En este último caso el coeficiente de utilidad neta tarifaria no excederá del dos por ciento del importe neto de las primas.

Art. 15.— **Empresas productoras o distribuidoras de cintas cinematográficas.**— Cuando las empresas productoras o distribuidoras de cintas cinematográficas tengan en el país, un establecimiento permanente o agente autorizado, éstos estarán obligados a presentar las declaraciones de renta o retener el impuesto que se cause conforme a esta Ley y a pagarlo en las respectivas Jefaturas Provinciales de Rentas. Los dueños o empresarios de teatros serán responsables, en iguales términos, cuando remeten o acrediten directamente a las casas productoras o distribuidoras la parte del ingreso que les corresponda.

La utilidad de fuente ecuatoriana se computará en la siguiente forma: del ingreso que corresponda a dichas casas se deducirá el treinta y cinco por ciento (35%) por conceptos de costos de producción. Además, se deducirán los gastos que soporten esas casas por publicidad, comisiones, gastos de oficina y demás gastos que no deban los dueños de los teatros a los empresarios. El saldo se considerará utilidad de fuente ecuatoriana y sobre él se pagará el impuesto establecido para sociedades extranjeras de capital.

Cuando los alquileres de películas fueren entregados directamente a las casas productoras, serán responsables del impuesto los propietarios o arrendatarios de teatros, como agentes de retención; y en los casos en que dichos alquileres fueren entregados a los agentes de las casas productoras, éstos estarán obligados a presentar las respectivas declaraciones y a pagar los impuestos correspondientes, tanto por la renta de las casas que representan, como por las comisiones que ellos perciban.

Se presumirá de derecho que la utilidad neta de fuente ecuatoriana no es inferior al quince por ciento (15%) del ingreso bruto cuando tengan estable-

cimiento fijo, y del veinte por ciento (20%) en los casos en que dichas empresas no tengan representantes o agentes en el país.

CAPITULO IV

De la imputación de los ingresos y egresos al año fiscal

Art. 16.— **Disposiciones reglamentarias.**— En el Reglamento se determinará todo lo relativo al cierre de operaciones de un ejercicio; ejercicios que se inicien avanzado el año, sistemas de imputación, conforme a los principios del origen del crédito o de su pago; intereses ganados, devengados o percibidos, y todo lo demás que sea conveniente regular para la correcta aplicación e imputación de los ingresos o las rentas y los gastos respectivos, al ejercicio fiscal.

CAPITULO V

De las rentas de los cónyuges

Art. 17.— **Normas especiales.**— Las rentas de los cónyuges se sujetarán a las siguientes normas:

1. Los cónyuges que perciban rentas provenientes del trabajo, sea o no en relación de dependencia, declararán y pagarán el impuesto separadamente.

2. Las rentas de la mujer, provenientes del capital con el concurso del trabajo y del capital puro, se atribuirán al marido y, por consiguiente, éste las declarará conjuntamente con sus rentas y pagará el impuesto respectivo.

3. Cuando la mujer ejerza la administración exclusiva o copropietaria de los bienes de la sociedad conyugal, tendrán los mismos derechos y obligaciones que corresponden al marido en régimen ordinario; y,

4. En caso de separación conyugal judicialmente autorizada o exclusión de bienes, los contribuyentes declararán y pagarán el impuesto separadamente.

En todos los casos previstos se aceptará la rebaja general de \$ 10.000.00 para cada cónyuge. Las rebajas por cargas de familia se concederán al cónyuge que las soporte. No habrá rebaja por estado civil para ninguno de los cónyuges.

CAPITULO VI

De las sucesiones, cesación de negocios y sociedades en liquidación

Art. 18.— **Bienes sucesorios.**— Las rentas que correspondan a los bienes de una sucesión, excluyendo los gananciales del cónyuge sobreviviente, se computarán y liquidarán sin rebajas, considerando a la sucesión como una unidad económica independiente, hasta que se perfeccione la partición total de los bienes.

Art. 19.— **Terminación de actividades productivas de carácter individual.**— En el caso de terminación de actividades productivas de carácter individual, se presentará una declaración a la Dirección General de Rentas, estableciendo la renta obtenida hasta la fecha de la cesación, con los documentos que conforme a la Ley, deben acompañarse. Esta obligación regirá si el contribuyente hubiere cesado en todas sus actividades; de lo contrario, la declaración susodicha la presentará en la fecha que corresponda a

la de los otros negocios o actividades que ejerza, y en cuanto a la terminada, se limitará a dar aviso, para los efectos del caso.

Art. 20.— Liquidación de Sociedades.— Cuando una sociedad vaya a liquidarse, se comunicará a la Dirección General de Rentas este hecho, a fin de que dé las instrucciones del caso en lo que a la obligación tributaria se refiere; y, mientras se produzca la distribución de los bienes, las sociedades seguirán sujetas a las disposiciones generales de la presente Ley, pudiéndose aplicar lo dispuesto en los artículos anteriores, en lo que fuere del caso, para imputación de la renta.

La facultad que tiene la Dirección General de Rentas para fiscalizar los resultados de los cinco años anteriores, se ejercerá aún para el caso de disolución de sociedades de capital, y si se estableciere que se han ocultado utilidades y que éstas se han distribuido entre los accionistas, éstos serán responsables por el impuesto correspondiente en proporción al valor de las acciones que tenían en la sociedad, aún cuando esta obligación tributaria exceda del valor de dichas acciones.

CAPITULO VII

De las rentas de la propiedad inmobiliaria urbana

Art. 21.— Renta de arrendamiento.— Las rentas provenientes de la propiedad urbana arrendada o su arrendada, se establecerán de conformidad con los respectivos contratos, si fueren escritos, o a base de las autorizaciones otorgadas por la Oficina Municipal de Inquilinato y de otras pruebas satisfactorias que presenten los contribuyentes.

Art. 22.— Renta servicio.— Se presumirá que las casas habitadas por sus propios dueños producen una renta servicio equivalente al cuatro por ciento (4%) del avalúo comercial municipal, previa deducción de Cien mil sucres. Para determinar la renta neta gravable se deducirán los elementos que se consideran en el artículo 43.

CAPITULO VIII

De los dividendos y otras rentas de capitales mobiliarios

Art. 23.— Definiciones de dividendos y dividendos— acciones.— Se entenderá por dividendo, para los efectos de esta Ley, toda ganancia o beneficio pagado, acreditado o distribuido por una sociedad a sus accionistas, ya se realice el pago en dinero o en especie, sea que se tome para ello utilidades sociales del ejercicio respectivo, sea que se distribuyan reservas u otros fondos de utilidades pretéritas, así se hubiere pagado impuesto sobre esas reservas o fondos; pero en este último caso se concederá crédito tributario por los impuestos pagados.

Los dividendos — acciones, esto es, las acciones que se emitan y repartan a los accionistas tomando de reservas que hubieren pagado impuestos en virtud de esta Ley, o de reservas de capital no gravables, no deberán impuestos por concepto de la liquidación, según lo dispuesto en el inciso 1º de este

artículo. Esta exención no beneficiará a las acciones que adquiera la misma empresa.

Con excepción de los dividendos — acciones, todo dividendo es gravado por esta Ley, y no podrán ser beneficiados por los incentivos que confieren las leyes de fomento u otras especiales.

Art. 24.— Contratos de mutuo.— En los documentos que contengan contratos de mutuo, sea cual fuere su nombre, incluyéndose las Letras de Cambio que se giren por operaciones distintas del giro comercial ordinario en los que no se estipule intereses o el pactado sea inferior al máximo convencional permitido de acuerdo con la Ley, se computará este interés, si menos que se justifiquen, ante el Director General de Rentas, razones especiales y extraordinarias, como las de consanguinidad directa, u otras que merezcan ser tomadas en cuenta, a juicio de dicho Director.

El impuesto establecido en esta Ley corresponde pagarlo al acreedor, sin que éste pueda trasladarlo al deudor.

Art. 25.— Inscripciones obligatorias.— Deben inscribirse en las Oficinas de Registro de la Propiedad o en las Jefaturas Provinciales de Recaudaciones todos los contratos o documentos que causen impuestos de timbres o a la renta, como mutuos, depósitos, prenda, Letras de Cambio o Pagarés a la orden.

En el Reglamento respectivo se contemplarán los plazos para efectuar las inscripciones y las multas que se impondrán por falta o tardanza de las mismas, de conformidad con estas normas básicas:

a) Las multas por falta de inscripción o inscripción tardía, se graduarán de conformidad con la mora en la inscripción y el plazo o vencimiento de la obligación.

b) La multa será de un mínimo de dos por ciento (2%) y de un máximo de diez por ciento (10%), según el principio contemplado en la norma que precede; y,

c) La falta de inscripción de documentos que formen parte de bienes sucesorios, dará lugar a una multa de tres por ciento (3%) la misma que se considerará deuda de la sucesión.

Las inscripciones no causarán derechos ni impuestos alguno.

CAPITULO IX

De las rentas del comercio, la industria, la agricultura y otras actividades

Art. 26.— Renta del trabajo con el concurso de capital.— Cuando la actividad profesional u otra actividad lucrativa de trabajo personal se complemente con una explotación comercial, o cuando los profesionales operen con instalaciones de capital, que no sean las que se pueden considerar como normales e indispensables de la respectiva profesión, como sanatorios, clínicas y otros establecimientos análogos, y no se lleve contabilidad separada que determine los ingresos propios de la actividad profesional — personal, el resultado global se considerará como renta del trabajo con el concurso del capital.

Art. 27.— Sociedades de personas.— Las rentas que obtengan las sociedades de personas, y, en gene-

ral, las sociedades que no tengan su capital dividido en acciones, se considerarán como si hubieren distribuido totalmente entre sus miembros; por tanto, se añadirá a la parte de la renta percibida por cada socio la que le corresponda en la porción de la renta social que se haya reservado de conformidad con las obligaciones contractuales y la proporción que en la renta social tenga derecho.

En el Reglamento se determinará la manera de efectuar esa distribución respecto de las utilidades reservadas y de otras remuneraciones y participaciones a las que tengan derecho los socios.

Art. 28.— **Sueldos.**— Los sueldos que se asignen a los propietarios de negocios individuales, comerciales o industriales, así como a sus conyuges o hijos menores, se sumarán a los resultados del negocio. En cuanto a los sueldos que se señalen a socios y gerentes de sociedades de capital o de personas se estará a lo dispuesto por el literal c) de artículo 41.

Art. 29.— **Cómputo de la renta agrícola.**— La renta de quienes ejecuten actividades agrícolas y no lleven contabilidad, se computará en la siguiente forma:

1. Para la determinación de la base imponible se tomará en cuenta exclusivamente el avalúo predial de la tierra del o de los predios de una persona, y de esa cantidad se deducirá lo siguiente:

a) Trescientos mil sucres, como rebaja general;
b) El saldo de los préstamos hipotecarios o prenda-rios invertidos exclusivamente en la compra, mejora o fomento agropecuario de los mismos.

2. Sobre el saldo que resultare, se aplicarán los siguientes coeficientes de utilidad presuntiva:

a) Sobre los primeros Dos millones de sucres el tres por ciento (3%); y,

b) Sobre cada Millón o fracción que exceda de los primeros Dos millones, el coeficiente de estimación presuntivo se elevará en medio por ciento (1/2%) en que el máximo del coeficiente aplicable al respectivo Millón o fracción exceda del seis por ciento (6%).

En los casos de inconformidad con los avalúos catastrales se podrá efectuar nuevos avalúos a criterio de la administración, o a petición de los interesados, exclusivamente para los efectos de esta Ley, los mismos que se harán conocer al respectivo Municipio.

3. Quienes efectúen actividades agrícolas y lleven contabilidad adecuada, podrán determinar su renta a través de los resultados de la misma, pero en ningún caso quienes presentaren en un año su declaración y determinado su renta a través de la contabilidad, podrán en los años siguientes determinarla presuntivamente.

4. Para el caso del arrendador o subarrendador, se tomará como renta la cuantía de los contratos respectivos, pero no se aceptará que el valor del arrendamiento sea inferior al cuatro por ciento (4%) y a tres por ciento (3%) del avalúo predial respectivamente.

5. Las propiedades de empresas agrícolas cuyo avalúo predial sea mayor de Dos millones de sucres, que tengan instalaciones industriales para la transformación de sus propios productos o de materia prima comprada, se sujetarán al siguiente régimen:

a) Cuando el valor de las instalaciones industriales fuere superior al 20% y no excediere del cincuenta por ciento (50%) del avalúo predial, presentarán independientemente los resultados de las actividades agrícolas y de las actividades industriales, y se sumarán las rentas resultantes para la aplicación de impuestos; y,

b) Cuando las instalaciones industriales tengan un valor superior al 50% del avalúo predial, se considerarán estas empresas como si fueren exclusivamente industriales, debiendo computarse los gastos de la explotación agrícola como costos de materias primas, que no serán mayores en ningún caso, a los precios de mercado de la materia en cuestión.

6. El Ministerio de Finanzas, previo informe del Ministerio de la Producción, concederá rebajas en el impuesto a la renta cuando se presenten plagas, enfermedades y otros fenómenos que reduzcan las utilidades normales de la explotación agrícola, pecuaria y/o forestal. Para tal efecto se requerirán estudios de los respectivos funcionarios del Ministerio de la Producción, para evaluar aquellas circunstancias, por zonificación.

7. Cuando una unidad agrícola perteneciere a varias personas que conserven proindiviso, y si hubieren pagado el impuesto a la herencia, cada uno de los condóminos pagará los impuestos prediales o a la renta, por la parte que le corresponda o sea calculado a base de su alicuota, o derechos y acciones que tengan en la propiedad.

Las disposiciones de esta Ley se aplicarán tanto a las personas naturales como a jurídicas que tengan actividades agrícolas, y tanto los unos como los otros podrán acogerse al beneficio de la utilidad presuntiva o a declarar sus utilidades según el resultado de su contabilidad, caso de llevarla.

Art. 30.— **Empresas de construcciones.**— Cuando en las empresas de construcciones no se llevare contabilidad adecuada o la llevada no estuviere de acuerdo con las instrucciones que haya impartido la Dirección General de Rentas, regirán las siguientes normas para establecer la utilidad neta del negocio:

a) Se estimará que la utilidad neta es del ocho por ciento (8%) del valor que haya costado la obra, cuando el contrato es de simple administración;

b) En los contratos por precio global y financiación parcial o total del contratista o empresario, se estimará en el ocho por ciento (8%) la utilidad neta, coeficiente que se fijará sobre el precio por el cual se haya contratado la obra.

Quando se hubiere contratado la obra por un precio y en realidad hubiere alcanzado un costo superior, se aplicará lo dispuesto en el literal que precede, si hubiere mayor utilidad neta.

Art. 31.— **Actividades comerciales o industriales** cuyos resultados no pueden establecerse anualmente. En las actividades comerciales e industriales cuyos resultados no puedan establecerse anualmente por corresponder su producción a un ciclo de realización de utilidades no determinado, como en las obras de construcción, de urbanización y otras semejantes, se tra-

tará el caso considerándolo como utilidades diferidas:

El Director General de Rentas dará autorización para que se presenten declaraciones especiales, así como las demás instrucciones que estimare necesarias, de acuerdo con el Reglamento especial que se formulará para contemplar y resolver esta situación.

Art. 32.— Negocios de ventas a plazos.— En los negocios de ventas a plazos, cuyos pagos deban efectuarse dentro de periodos mayores de un año, la Dirección General de Rentas, previa solicitud en la que se establezca claramente la situación del negocio, facultará que las utilidades liquidadas en un ejercicio se consideren y declaren como utilidades correspondientes al año en que se devenguen o perciban.

CAPITULO X

De las rentas de las profesiones liberales y otras actividades lucrativas

Art. 33.— Trabajadores autónomos.— Los profesionales, comisionistas, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos, determinarán sus rentas de acuerdo con una cuenta de ingresos y egresos aceptada por la Dirección General de Rentas, caso contrario, se estará a lo previsto en el Capítulo XXX de esta Ley.

CAPITULO XI

De las ganancias ocasionales y ganancias de capital

Art. 34.— Ganancias ocasionales.— Las utilidades provenientes de cualquier actividad económica realizada en territorio nacional, en forma ocasional, someterán impuesto de conformidad con las disposiciones generales de esta Ley y las especiales de este Capítulo.

Si el contribuyente no tuviere otra renta de fuente nacional, se considerará, para los efectos impositivos, como renta anual, la obtenida ocasionalmente en el año, sea cual fuere el periodo de duración de la actividad en ese lapso.

Se incluirán entre las ganancias ocasionales las realizadas en territorio nacional por profesionales, artistas, deportistas, empresarios, etc., extranjeros; así como las obtenidas por nacionales o extranjeros en la compra — venta ocasional de efectos de comercio.

Sin perjuicio de la aplicación de las normas generales que se señalan para la depuración del ingreso bruto, en el Reglamento se contemplarán las especiales para la mencionada depuración, en los casos previstos en el inciso precedente.

Art. 35.— Ganancias de capital.— Se considerarán ganancias de capital las que provengan de compra — venta o transferencia ocasional de maquinarias, equipos o instalaciones industriales, valores fiduciarios, colecciones artísticas, muebles y otros bienes.

Art. 36.— Criterios para determinar utilidades.— Como norma general, las utilidades obtenidas por la compra — venta o transferencia de los bienes especificados en el artículo anterior, se determinarán por

la diferencia entre sus precios de costo y el de compra — venta o transferencia.

Las ganancias por compra — venta o transferencia de los activos fijos sujetos al régimen de depreciación de las empresas comerciales, industriales o de servicios, se determinará por la diferencia entre el precio de compra o transferencia y el valor depreciado del activo señalado, y tributarán únicamente sobre el cincuenta por ciento (50%) de esa diferencia.

Art. 37.— Negocios de urbanización.— En los negocios de urbanización se considerará costos del inmueble su valor de mercado a la fecha de iniciación de esa actividad, debiendo tributarse sobre las ganancias de capital. El Ministerio de Finanzas, para la correcta aplicación del impuesto, dictará normas especiales, teniendo en cuenta las reducciones y atenuaciones que han de aceptarse en las diferencias de precios de los activos de capital, en razón de la depreciación de la moneda y las contribuciones especiales pagadas por el beneficio que originen obras públicas municipales o estatales.

CAPITULO XII

De las exenciones

Art. 38.— Estarán exentos del impuesto establecido por esta Ley:

PRIMERO:

a) Las rentas que obtengan el Estado, los Consejos Provinciales, los Municipios y demás Instituciones de Derecho Público, así como las de Derecho Privado con finalidad social o pública, según la Constitución o las Leyes;

b) La parte de la renta que corresponda a los organismos mencionados en el literal anterior, en las empresas constituidas con capitales de ellos y de particulares;

c) Los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados públicos en comisión de servicio. Los gastos de residencia, viajes y representaciones de los trabajadores, empleados y obreros, que los reciben en el ejercicio de su trabajo, siempre que se efectúen necesaria y exclusivamente para obtener la renta;

d) Los gastos de residencia y representación que perciban el Presidente, Vicepresidente de la República, el Presidente de la Cámara de Diputados, los Vicepresidentes de las Cámaras del Senado y Diputados, el Presidente de la Corte Suprema y los Ministros de Estado;

e) Los gastos de residencia y representación de otros funcionarios, así como los de Presidente Administrativo y Gerente General de sociedades de capital o de personas, hasta el treinta por ciento (30%) de su remuneración y no más de treinta mil sucres anuales.

f) Las pensiones alimenticias que se deben por Ley, las indemnizaciones por riesgos del trabajo, el fondo de reserva, los beneficios que concede el Seguro Social, los montepíos, las cesantías, los beneficios que perciban los miembros de la Fuerza Pública por iguales o análogos conceptos, y las jubilaciones;

g) Las cantidades que se asignen presupuestariamente a los funcionarios y empleados públicos por los siguientes beneficios sociales: el pago de los aportes personales o individuales para el Seguro Social; los aguinaldos de Navidad; décimo tercer sueldo y décimo cuarto sueldo; el subsidio familiar; las asignaciones para los gastos de educación hasta el valor de un sueldo mensual; las pensiones civiles y militares que pague el Estado. No se considerarán como beneficios sociales sino como un complemento de la remuneración de dichos funcionarios y empleados, las cantidades que se añadan al sueldo base por cualquier otro concepto que no sean de los que se especifican anteriormente;

h) Las remuneraciones percibidas en el desempeño de sus funciones por los embajadores, ministros y otros agentes diplomáticos y consulares y demás representantes oficiales de países extranjeros, acreditados en el Ecuador, inclusive misiones de asistencia técnica, de acuerdo con los Convenios celebrados;

i) Las remuneraciones percibidas por funcionarios internacionales, calificados como tales, que presten sus servicios en la Organización de las Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos y sus organismos especializados, de acuerdo a los convenios internacionales;

j) Las rentas de inmuebles de propiedad de Estados extranjeros, así como otras rentas que provengan de inversiones o actividades económicas de esos Estados, siempre que se conceda tratamiento recíproco al Estado ecuatoriano en dichos países;

k) Las rentas de las Cámaras de Agricultura, Industrias y Comercio;

l) Los intereses percibidos por depósitos y ahorros bancarios hasta el monto de cinco mil sucres por año fiscal y por persona; los intereses percibidos por depósitos en las asociaciones mutualistas de crédito para la vivienda, así como los dividendos hasta por el valor de cinco mil sucres que recibieren los trabajadores, esto es, empleados y obreros, por acciones nominativas de la empresa en que presten sus servicios;

ll) Los intereses de los bonos emitidos por el Gobierno Nacional, los Consejos Provinciales, los Municipios; las asociaciones o consorcios de Consejos Provinciales o Concejos Cantonales, las Juntas de Asistencia Social, la Junta de Beneficencia de Guayaquil y las instituciones de Derecho Público legalmente autorizadas.

Los intereses de cédulas calificadas;

m) Los intereses y comisiones de los préstamos directos y garantías que otorguen el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y sus filiales, la Agencia para el Desarrollo Internacional, la Corporación Financiera Internacional, y otras instituciones gubernamentales de crédito, en operaciones con entidades oficiales ecuatorianas, así como en préstamos a empresas o asociaciones que tengan como actividad la financiación del desarrollo económico, la industria textil o manufacturera, la explotación agrícola, mine-

ra, el transporte, la producción de energía eléctrica, los servicios de teléfonos, telecomunicaciones, vivienda de interés social, y otras actividades que la Junta Nacional de Planificación y Coordinación considere esenciales para el desarrollo económico, y así lo declare;

n) Los intereses y comisiones de préstamos a plazos no menores de dos años, destinados a financiar maquinarias, equipos o instalaciones, que otorguen organismos a instituciones financieras extranjeras, a las empresas y las actividades mencionadas en el inciso anterior, siempre que el interés que cobren en sus operaciones, no exceda del 7.5% anual. Sobre el exceso se pagará como impuesto definitivo el 40% sin deducción alguna.

Se aplicará la disposición anterior en todos los préstamos, cualquiera que fuere su plazo, que otorguen inversionistas extranjeros a compañías financieras nacionales;

ñ) Las rentas que obtengan las sociedades mutualistas y los beneficios que proporcionen a sus asociados. No estarán comprendidos en esta exención las utilidades que repartan a sus socios en la fracción que exceda de cinco mil sucres anuales;

(o) Las utilidades que obtengan las cooperativas cuyos estatutos hubieron sido aprobados por la Función Ejecutiva, siempre que no se distribuyan a sus miembros, y no excedan del nivel que determinará el Ministerio de Finanzas, atendiendo a su naturaleza y al número de afiliados. El impuesto se causará sobre el exceso;

p) Las rentas que perciban las instituciones religiosas por los servicios o funciones del culto, así como las rentas percibidas por conventos de religiosas encerradas;

q) Las rentas percibidas por instituciones de asistencia o de beneficencia social de carácter particular o de educación pública o privada gratuitas, siempre que fueren personas jurídicas con estatutos aprobados por la Función Ejecutiva. También amparará esta exoneración a las utilidades de instituciones educativas cuando éstas fuesen destinadas al sostenimiento de la educación gratuita. Así mismo, a las instituciones de investigación científica, a las de carácter literario y a las deportivas, siempre que así se declare en los estatutos aprobados por la Función Ejecutiva o estuvieren liberados de impuestos por leyes especiales.

Esta exoneración no se extenderá a las utilidades que obtengan los directores o empresarios de escuelas o colegios particulares o de otras de las instituciones mencionadas en el inciso anterior, ni a las utilidades que se distribuyan a los miembros de sociedades que se hayan constituido para la prestación de estos servicios;

r) Las becas para estudios dentro o fuera del país;

s) Las asignaciones adicionales que perciban los trabajadores en las empresas que, por mandato legal, deban distribuir los patronos como participación de dichos trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta la cantidad de cinco mil sucres anuales.

los; así como el décimo tercer y décimo cuarto sueldo y el subsidio familiar;

t) Gozarán de exoneración total y permanente, para efectos del impuesto a la renta agrícola:

I. El valor de las inversiones en obras que tengan por objeto conservar o incrementar la productividad de las tierras, protegiendo a éstas de la erosión, de las inundaciones o de otros factores adversos, inclusive canales y embalses para riego y drenaje, puentes, caminos, instalaciones sanitarias, etc.

II. Cuando los bosques naturales o artificiales ocupen terrenos de vocación forestal, de acuerdo con la Ley Forestal y la Ley de Bosques Protectores y se hayan explotado con el mínimo de intensidad por unidad de superficie, estará exonerado el valor de los terrenos ocupados por dichos bosques. El Ministerio de la Producción establecerá los términos de identificación de este mínimo de intensidad de explotación de la unidad de superficie, de conformidad con la Ley Forestal y la Ley de Bosques Protectores.

III. La parte del avalúo que corresponde al valor de las tierras puestas en cultivo, dentro de bosques o zonas no colonizadas, que tengan vocación agropecuaria, para lo que se requerirá autorización previa del Ministerio de la Producción.

u) Las rentas de profesionales obtenidas durante el primer año de actividad;

v) Las rentas provenientes exclusivamente de explotación agrícola en las provincias orientales y de Galápagos;

w) Las rentas presuntivas de las casas habitadas por sus dueños cuyo avalúo comercial municipal no exceda de cien mil sucres, así como las provenientes de casas nuevas, por el año en que se termine la construcción y por el siguiente;

x) Las rentas presuntivas de la explotación agrícola que corresponda a sus propietarios en predios rurales cuyo avalúo comercial no exceda de trescientos mil sucres.

Esta exoneración alcanzará también a la explotación avícola y ganadera que se considerarán como explotaciones agrícolas, así como la explotación piscícola. La exención de hasta trescientos mil sucres se referirá a la inversión total, sin considerar el terreno;

y) La utilidad obtenida por las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de exploración y extracción de buques y restos de naufragios, yacentes en el mar territorial previamente declarados rescatables, siempre que la participación del Fisco no sea menor al 50% del rescate;

z) La renta de los ciegos hasta un máximo de cincuenta mil sucres anuales, así como sus capitales en giro y bienes raíces cuyo valor no exceda de cien mil sucres.

SEGUNDO:

a) Las utilidades no distribuidas de las compañías financieras, durante un período de 3 años a partir de la fecha en que inicie sus operaciones;

b) Gozarán de exención temporal para efectos del impuesto a la renta, agrícola;

J. La parte del avalúo que corresponda a nuevas tierras puestas en cultivo, por obras de riego y de drenaje, de saneamiento o de recuperación de tierras erosionadas u otros procedimientos que incorporen a la producción tierras que antes eran improductivas, previo informe del Ministerio de la Producción. La exoneración se considerará siempre que tales trabajos sean ejecutados a expensas del propietario poseedor o del arrendatario. La exoneración en este caso se aplicará por el lapso necesario para cubrir el 50% del valor invertido en dichas obras de riego y de drenaje, saneamiento y mejoras en general, pero en ningún caso será mayor de 5 años.

El propietario podrá comprobar ante la Oficina Nacional de Avalúos y Catastros el valor de las mencionadas inversiones, en base de su contabilidad o de los respectivos comprobantes.

II. La parte del avalúo que corresponda a tierras y edificios destinados a establecimientos de colonias de trabajadores, durante el tiempo necesario para amortizar el valor total de la inversión.

III. La parte del avalúo que corresponda a las tierras ocupadas por plantaciones perennes, cuyo desarrollo hasta lograr el estado de producción comercial, requiere de 4 o más años. Esta exoneración se concederá previa presentación del informe favorable del Ministerio de la Producción. La exoneración se aplicará durante un lapso que equivaiga al tiempo de improductividad comercial más de un año.

IV. Gozarán de exoneración el valor de las tierras destinadas a cultivos calificados por el Ministerio de la Producción como de especial importancia para el país y localizados en zonas determinadas asimismo por dicho Ministerio. La exoneración regirá durante el tiempo que las mencionadas tierras estén ocupadas por los indicados cultivos.

V. Gozarán de exoneración durante 5 años, el valor de las tierras incultas o de productividad decreciente que se empleen en pastizales artificiales económicos permanentes, así como el valor de las instalaciones y equipos que en ella se establezcan para el desarrollo agropecuario.

VI. Gozarán de exoneración de 8 años, las áreas que hayan estado tradicionalmente dedicadas al cultivo de caña de azúcar destinadas para aguardientes, panelas, así como de banano y café en áreas marginales que se dediquen a otros cultivos o explotaciones. Dicha exoneración comenzará desde el año en que se inicien los cultivos sustitutivos proporcionalmente a dicha sustitución, igual tratamiento recibirán las áreas en las que se realicen renovaciones de plantaciones de cacao mejorado.

c) Las personas naturales o jurídicas que inviertan sus utilidades en la compra de acciones de las empresas mixtas de desarrollo agropecuario constituidas por el Ministerio de la Producción con fines de explotación agropecuaria de la Región Oriental;

d) Los ingresos de las universidades y escuelas politécnicas y sus bienes; y,

e) Las participaciones a que tengan derecho los denunciados de evasión de impuestos, así como las

que correspondan a los denunciantes, aprehensores y descubridores de contrabando.

CAPITULO XIII

De las deducciones generales

Art. 39.— Gastos deducibles.— De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de esta Ley y sin perjuicio de las deducciones especiales que en ella se contemplan para determinadas rentas, serán deducibles del ingreso bruto los siguientes gastos:

a) Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro de un negocio, así como los gastos originados por la constitución, renovación o cancelación de las mismas;

b) Las contribuciones que soporte la actividad generadora de la respectiva renta, que no sean las que se contemplen en el literal d) del artículo 41 de esta Ley;

c) Las primas de seguros que se hubieren pagado cuando cubran riesgos sobre bienes que producen rentas;

d) Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos que afecten económicamente a los bienes de la respectiva actividad generadora de la renta, en la parte que no fuere cubierta por indemnización o seguro;

e) Los gastos de viaje, en la parte que sea motivada por necesidades o conveniencia del negocio de acuerdo con las normas que se contemplen en el Reglamento;

f) Las depreciaciones normales, conforme a la naturaleza de los bienes respectivos y la duración normal de su vida útil, de conformidad con las normas que se establezcan en el Reglamento y, en su defecto, de acuerdo con las que acepta la técnica contable, así como las depreciaciones especiales por renovación anticipada y obsolescencia y las que correspondan por amortización acelerada o las que se efectúen conforme a los costos de revalorización, reposición u otras situaciones análogas.

En el Reglamento especial sobre esta materia se determinará todo lo relativo a la aplicación de este literal.

g) La amortización anual de las pérdidas dentro del ejercicio financiero y que se efectúen de conformidad con lo previsto en el artículo 58;

h) Los demás gastos que se deban o puedan ocasionarse de conformidad con lo previsto en el artículo 59;

i) Los gastos que se efectúen necesaria y exclusivamente para obtener la renta; y,

j) Los valores consignados por concepto de la Cédula Orientalista.

Art. 40.— Normas para las deducciones.— Para la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, se tendrá en cuenta las siguientes normas:

a) Para deducir las depreciaciones especiales anticipadas y otras que no estén expresamente consideradas en la Ley, o su Reglamento, se requerirá solicitud previa ante el Director General de Rentas y su autorización o su ratificación, si no se hubiere presentado solicitud;

b) Las multas que se impongan por hechos fraudulentos en materia fiscal, según lo establecido en el artículo 118, no se deducirán como gastos, en tratándose de impuestos que es permitido deducir;

c) Hasta cuando el Ministerio de Finanzas establezca tablas de coeficientes de amortización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, el coeficiente normal de depreciación anual de las inmovilizaciones de activos, excepto inmuebles, no podrá exceder del 10%. La depreciación de los edificios se computará de conformidad con los coeficientes normales que se consideren en la técnica contable, de acuerdo con la naturaleza y función de estos edificios y el tiempo de vida útil que en esta técnica se admitan. Tales coeficientes variarán del 2% al 5%, según la naturaleza de la construcción sin perjuicio de coeficientes que podrán considerarse para construcciones cuya vida útil sea inferior a veinte años.

Los coeficientes se aplicarán únicamente sobre el valor de las construcciones, en tal virtud, tratándose de construcciones corrientes, si no llegare a establecer el valor de los terrenos se aplicará el 75% del respectivo coeficiente sobre el valor total del inmueble.

Las plantaciones agrícolas se amortizarán al 10% anual, según lo que se disponga en el Reglamento.

d) En toda actividad que opere con bienes sujetos a depreciación, es obligatorio efectuar esta depreciación anualmente, conforme se determina en esta Ley y su Reglamento, y la Dirección General de Rentas advertirá esta obligación cuando, con motivo de las fiscalizaciones se notare su falta. De acuerdo con la naturaleza de cada caso notificará para que se la complete, sea dentro del período normal de la depreciación o sea en el complementario que se concederá para este efecto.

Art. 41.— Gastos no deducibles.— No serán deducibles como gastos los siguientes:

a) Las cantidades retiradas por el contribuyente como asignaciones o gastos personales de él o de los miembros de su familia;

b) Los intereses pagados por deudas contraídas para fines extraños, al respectivo negocio. Para que se conceda la deducción de tales intereses se deberá indicar, en el cómputo de la renta global, su causa legal, la cuantía de los intereses pagados y los nombres de las personas a las que se les hubiera hecho el pago. Tampoco serán deducibles los intereses que se paguen o acrediten por cuentas personales o deudas del dueño de la empresa;

c) Las remuneraciones o sueldos que se paguen al cónyuge e hijos menores de los contribuyentes, así como las que se abonen a los hijos mayores y hermanos, en la parte que excede de la que usualmente se pague por servicios similares, atenta la importancia de la empresa y la de los servicios realmente prestados. En este último caso, se considerará renta gravable del trabajador la que se determine o acepte como normal y la diferencia se sumará a la renta del empresario.

En cuanto a los sueldos que se asignen a presidentes, gerentes, administradores y otros funcionarios similares de sociedades de capital, sean o no socios de las mismas, se aceptará su deducción como gasto general, pero la parte que exceda de la que se considere normal, atenta la naturaleza e importancia del respectivo negocio o empresa y los usos del mercado, se tendrá como renta del capital del beneficiario;

d) El impuesto que establece esta Ley, con sus recargos, intereses de mora y multas, tanto al que corresponda al mismo contribuyente o a los socios o accionistas de la empresa, como al de los empleados y funcionarios de la misma; los impuestos, tasas o derechos que se causen para adquirir bienes y derechos, como los de alcabala y herencias, legados y donaciones; los impuestos de plusvalía, los impuestos sobre ganancias ocasionales; y los impuestos especiales que afecten a solares y terrenos no edificados;

e) Las reservas de capital que, conforme a su sentido técnico contable, se destinen a aumento de capital o robustecimiento financiero de la empresa, incluyéndose todas las que no correspondan a la depreciación real, o excedan su nivel o no hayan sido autorizadas por la Dirección General de Rentas, cuando no sean expresamente permitidas por la Ley o el Reglamento;

f) Las pérdidas en bienes que no estén en producción ni se hallen sujetos al impuesto a la renta, como colecciones artísticas, joyas y otros bienes similares, de lujo o de recreo personal; y,

g) Los donativos, asignaciones y otras liberalidades en dinero o en especie, que constituyan exoneración de la renta no exonerados expresamente en esta Ley, o cuya deducción no esté permitida por el artículo 46 de la misma.

CAPITULO XIV

De las deducciones especiales para las rentas de la propiedad inmobiliaria

Art. 42.— **Propiedad Rural.**— En los casos en que se efectúe la determinación de la renta de la propiedad rural a base de la contabilidad que llevaré el causante, se deducirán todos los gastos normales de producción, incluyendo los de conservación y mantenimiento de los edificios. Tales gastos se justificarán con los respectivos comprobantes, y si faltaren o no fueren suficientes, la Dirección General de Rentas establecerá coeficientes normales de deducción por los respectivos gastos, de conformidad con los datos que obtenga y la correlación de los mismos determinada por muestreo.

Se deducirán también los impuestos a la propiedad rural pagados por el respectivo año, incluyéndose los tributos adicionales y las contribuciones especiales.

Art. 43.— **Propiedad Urbana.**— Serán deducibles de los ingresos brutos de la propiedad urbana:

a) Los intereses de deudas contraídas por la adquisición, construcción o conservación de la propiedad de conformidad con las normas que se establezcan en el Reglamento;

b) Las primas de seguros por riesgos que afecten a la propiedad;

c) La amortización que se permita en los Reglamentos de acuerdo con los materiales de construcción y el uso a que se destine el edificio la misma que se computará con los coeficientes en la forma dispuesta en el literal c) del artículo 40;

d) Los gastos de mantenimiento, que se fijan en el uno por ciento del avalúo comercial del respectivo predio. No se podrá aceptar deducciones adicionales sino por gastos extraordinarios de mantenimiento o reparación, motivado por fuerza mayor, accidente u otro hecho extraordinario, siguiendo las normas del artículo 58, de conformidad con su cuantía;

e) Los demás gastos generales de gestión cuando se trate de negocios de arrendamiento como empresa;

f) Los impuestos a la propiedad urbana pagados por el respectivo año, incluyéndose los tributos adicionales y las contribuciones especiales, y las tasas por servicios públicos; y,

g) Por ningún concepto podrá compensarse el saldo negativo de las rentas servicio con la renta de la propiedad urbana arrendada u otras rentas.

CAPITULO XV

De las deducciones especiales para las rentas de capitales mobiliarios

Art. 44.— **Regalías.**— Cuando el beneficiario de regalías por la explotación o aprovechamiento de ciertos bienes mobiliarios o derechos, ha invertido una cantidad de dinero para su adquisición y tales bienes o derechos se deprecien o desaparezcan con el tiempo, podrá deducirse del ingreso que se percibiere por dicha utilización, una cuota equivalente a la depreciación anual, por el tiempo de duración de tales bienes o derechos, o un veinte por ciento (20%) del monto de las regalías, hasta cubrir el mencionado valor. No habrá lugar a dicha deducción si la duración de los bienes o derechos fuere indefinida.

Art. 45.— **Rentas ciertas o vitalicias.**— De las sumas que se perciban como rentas ciertas o vitalicias, contratadas en instituciones de crédito o con personas particulares, se deducirá la cuota que, matemáticamente, corresponda al consumo del capital pagado como precio de tales rentas.

CAPITULO XVI

De las deducciones especiales para las rentas del comercio, la industria, la agricultura y otras actividades

Art. 46.— **Deducciones especiales.**— Además de las deducciones generales contempladas en el artículo 39 de esta Ley, se podrán deducir los siguientes rubros en los negocios comerciales, industriales, agrícolas y otras actividades;

a) Los créditos incobrables, siempre que se acumulen en cuentas especiales de reservas de evaluación, de las que se eliminará definitivamente con débito a la reserva y crédito al activo correspondiente, siempre que hayan figurado en la contabilidad durante dos años, los que no pasen de cinco mil sucres, y durante tres años, los de cuantía

mayor. Para estos efectos, se acompañará una petición con justificaciones al Director General de Rentas, en la que se indicará la razón por la cual no se ha podido hacer efectivo el crédito. En el Reglamento se señalarán las condiciones para la aceptación de esta solicitud, cuando no se acompañe prueba de la incobrabilidad del crédito. No se aceptará la petición si pareciera que el motivo por el que no se hayan cobrado los créditos es la liberalidad del acreedor. Cuando la justificación no sea satisfactoria, el Director podrá exigir la entrega del respectivo documento, endosado al Jefe Provincial de Recaudaciones correspondiente, quien podrá exigir su pago como si se tratara de un crédito fiscal, en beneficio del Fondo de Operación del Tesoro.

Los créditos incobrables que correspondan a los bancos se registrarán por las normas establecidas en la Ley de Bancos y en el Reglamento que sobre el particular expida la Superintendencia de Bancos.

b) Los gastos de organización y de experimentación, de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 59;

c) Las comisiones y otros gastos que se paguen en el exterior, sea por necesidad de la actividad desarrollada en el Ecuador, sea por su extensión en el extranjero, como ocurre con las rentas de exportación, conforme a las regulaciones que contiene esta Ley y las que establezca el Reglamento para su control;

d) Los honorarios por servicios profesionales que deban prestarse en el exterior, atenta la naturaleza del negocio, y en las condiciones que se indican en la regla segunda del literal b) del artículo 100;

e) Los beneficios sociales, las indemnizaciones y otras erogaciones impuestas por el Código del Trabajo u otras leyes de carácter social; las contribuciones en favor de los trabajadores, para finalidades de asistencia médica o sanitaria, ayuda escolar o cultural, entrenamiento profesional, subsidios a asociaciones deportivas o culturales y otros gastos de asistencia o bienestar en favor de los mismos;

f) Las asignaciones, donativos y subvenciones que otorguen las empresas comerciales, industriales, agrícolas y de otras actividades, a instituciones dedicadas exclusivamente a beneficio social o público y legalmente organizadas;

g) Las becas para estudios otorgados en favor de empleados o trabajadores que no fueren hijos o cónyuge del contribuyente; y,

h) Las sumas que las empresas de seguros y otras de análoga función destinen a formar reservas matemáticas u otras dedicadas a cubrir riesgos en curso y otros similares, de conformidad con las normas establecidas por la Superintendencia de Bancos.

Art. 47.— **Exploración-explotación de minas.**— Los gastos de exploración, los costos de adquisición y otras semejantes que se hagan para la explotación de una mina, incluyéndose canteras y otras explotaciones semejantes, se amortizarán en el tiempo que dure la explotación minera, conforme a los métodos usuales en esta materia y de acuerdo con las normas que señale el Reglamento.

Se deducirán, igualmente, las regalías que se pague al Estado sobre la producción bruta.

CAPITULO XVII

De las deducciones especiales para las rentas de funcionarios, empleados, obreros y artesanos

Art. 48.— **Funcionarios, empleados y obreros.**— Los funcionarios, empleados y obreros, públicos y privados, tendrán derecho a deducir del valor bruto de sus remuneraciones las contribuciones personales al Seguro Social.

Art. 49.— **Artesanos.**— Los artesanos, por su parte, y mientras estén excluidos de los beneficios del Seguro Social, tendrán derecho a una rebaja de catorce mil sucres anuales.

CAPITULO XVIII

Deducciones especiales para personas naturales

Art. 50.— **Honorarios pagados a profesionales y arrendamientos.**— Además de las deducciones contempladas en otras disposiciones de esta Ley, las personas naturales tendrán derecho para deducir los honorarios que hubieren pagado a profesionales sujetos al impuesto a la renta en el Ecuador; así como el 50% de los arrendamientos pagados por vivienda, debiéndose en tales casos indicar la fecha y monto de los honorarios pagados y los nombres de los profesionales que los hubieren recibido, así como el nombre y dirección del arrendador.

CAPITULO XIX

De la rebaja general y de las deducciones por cargas de familia

Art. 51.— **Rebaja general.**— Toda persona natural, para el cálculo de la base imponible del impuesto proporcional, gozará de una rebaja general de diez mil sucres, sobre la renta global. Igual rebaja se aplicará por una sola vez, a la renta o sumas de rentas sujetas al impuesto proporcional en la forma establecida en el inciso segundo del ordinal segundo del artículo 56.

Art. 52.— **Deducciones por carga de familia.**— Además de la rebaja general considerada en el artículo anterior, se reconocerán las siguientes deducciones por cargas familiares:

Primera.— Diez mil sucres para el casado que mantenga a su cónyuge. Los viudos y separados sólo tendrán derecho a la rebaja general:

Segunda.— El divorciado o separado de su cónyuge que deba pasarle una pensión tendrá derecho a una rebaja igual a dicha pensión, rebaja que no podrá exceder de diez mil sucres; y,

Tercera.— Dos mil sucres para cada una de las siguientes personas:

- a) Ascendientes por consanguinidad;
- b) Descendientes menores de edad, del contribuyente o de su cónyuge;
- c) Descendientes mayores de edad, incapacitados para el trabajo;
- d) Menores de edad, cuya guarda o mantenimiento está a cargo del contribuyente, por disposición judicial; y,
- e) Desde el quinto hijo habrá una rebaja adicional de un mil sucres.

Las rebajas por personas a cargo contempladas en la deducción tercera, se concederá únicamente cuando dichas personas vivieren a cargo del causante, por no poder subvenir por sí mismas a sus necesidades o estar incapacitadas para el trabajo, cuando no se tratare de menores de edad. Si las personas a cargo del contribuyente tuvieren rentas inferiores a las rebajas correspondientes, se concederá la deducción únicamente por la diferencia.

En la forma establecida en el artículo 56, las deducciones por cargas familiares se aplicará a la renta global, para el cómputo de la base imponible del impuesto progresivo. Estas mismas deducciones se aplicarán a la renta o suma de rentas sujetas al impuesto proporcional.

Art. 53.— **De las deducciones para los miembros del servicio diplomático y consular.**— La rebaja para los miembros del Servicio Diplomático y Consular, que se hallaren ejerciendo en el exterior, se computará en sucres según lo dispuesto en este y en el anterior artículo. La deducción será de 10 veces la suma que resultare de dicho cómputo para las rentas del trabajo, sin llegar en ningún caso a sobrepasar las rentas percibidas por sus servicios diplomáticos o consulares. Las demás rentas de capital o de propiedades que los diplomáticos o cónsules, pueden tener estarán sujetos a las normas generales.

Art. 54.— **Deducción para extranjeros no residentes.**— Los extranjeros no residentes tendrán derecho a deducir el remanente de las rebajas general y familiares no consideradas en su país cuando demuestren que conforme a sus leyes, gozan de rebajas similares en igualdad de condición tributaria, a menos que no debieron impuestos en su país por la renta gravable en el Ecuador.

Art. 55.— **Deducción para rentas del trabajo en relación de dependencia.**— Las personas naturales contempladas en el artículo 5º, que perciban ingresos totales anuales hasta treinta y seis mil sucres, gozarán de una rebaja adicional del 15% sobre la renta bruta, para el cómputo del impuesto.

CAPÍTULO XX De la renta imponible

Art. 56.— Para determinar la renta imponible con el IMPUESTO PROGRESIVO se procederá como sigue:

1. Se considerará como ingreso neto de la persona, la renta o suma de las rentas de cada grupo, previas las deducciones generales y especiales correspondientes; y,

2. De la renta neta personal así establecida, se deducirá la renta general de diez mil sucres y las rebajas por cargas familiares. La diferencia será la renta imponible.

Para determinar la renta imponible sujeta al IMPUESTO PROPORCIONAL, previas las deducciones generales y especiales previstas en esta Ley, se procederá como a continuación se indica:

a) Cuando se tratare de una sola renta sujeta al impuesto proporcional, se aplicarán a ella las deducciones especiales por honorarios profesionales y arrendamientos; y las rebajas general y las por cargas de familia;

b) Cuando concurrieren dos o más grupos de rentas sujetas al impuesto proporcional, las deducciones especiales por honorarios profesionales y arrendamientos; y las rebajas general y por cargas familiares se aplicarán porcentualmente a las rentas de cada uno. Las diferencias parciales constituirán la renta imponible de cada grupo;

c) Las rentas del trabajo en relación de dependencia y/o del ejercicio profesional pagarán el impuesto sobre el exceso de \$ 120.000. Para determinar la base imponible sujeta al impuesto proporcional se aplicará lo dispuesto en los literales anteriores, previa la deducción de \$ 120.000.

Art. 57.— **De los gastos.**— Los gastos cuya deducción permite esta Ley serán, en general, los que se efectúen para obtener, mantener y conservar las rentas gravadas por ella.

Los egresos que no constituyeren ni significaren un costo de producción o mantenimiento de la renta, esto es, que no se hubieren efectuado para esta finalidad, sino que constituyeren un empleo del ingreso, no serán deducibles sino en los casos y en la medida que permita esta Ley.

Cuando los gastos se realizaren para obtener las rentas gravadas por esta Ley, así como para la obtención de las rentas que están libres de impuesto, la deducción de los gastos del ingreso que da lugar al impuesto se hará en proporción aritmética a los correspondientes ingresos, si no se justificare otra forma de cómputo.

Art. 58.— **Pérdidas.**— Los contribuyentes, sean personas naturales o jurídicas, que tuvieren una sola actividad y que hayan sufrido pérdidas en un ejercicio financiero, podrán arrastrarla a los ejercicios siguientes y amortizarla en cinco años, a razón de veinte por ciento (20%) anual, siempre que no se destinaren para ello más del cincuenta por ciento (50%) de las utilidades que se obtuvieren en el año respectivo; pero podrán hacerle en tiempo inferior, asignando para ello no más del veinte y cinco por ciento (25%) de la utilidad anual. El derecho de amortizar las pérdidas de años anteriores, en las condiciones autorizadas en el presente artículo se limitará a las pérdidas sufridas en los últimos tres años anteriores a aquel en el que se va a realizar la amortización.

El mismo sistema se seguirá respecto de actividades de personas naturales o de sociedades que no sean de capital, cuando tengan pérdidas en una actividad y obtengan utilidades en actividades de otro grupo diverso según la clasificación del artículo 4º. Las sociedades de capital que tuvieren varias actividades o diversos establecimientos de una misma actividad, podrán efectuar la compensación de las pérdidas que sufran en una actividad o establecimiento en un balance consolidado de resultados, y, en este caso, no podrán efectuar en los años futuros ninguna deducción por concepto de arrastres de la pérdida ya compensada.

Los contribuyentes que sufrieren pérdidas en una actividad de un grupo y obtuvieren utilidad en otras actividades del mismo grupo podrán solicitar a la Di-

rección General de Rentas que se les permita efectuar la compensación que se considera en el inciso anterior cuando en la actividad que ha aparecido la pérdida no se esperen utilidades suficientes en el ejercicio o ejercicios siguientes. En tal caso, realizada la compensación, no habrá lugar a arrastres de pérdidas en la actividad que las soportó.

Art. 59.— **Otras amortizaciones.**— Respecto de los bienes que produjeren rentas las pérdidas motivadas por casos fortuitos o de fuerza mayor, como tempestades, incendios, terremotos, naufragios y otros accidentes, no cubiertos por un seguro, se amortizarán en las mismas condiciones establecidas en el artículo anterior. En el caso de que hubiere seguro, sólo se podrá amortizar el saldo no pagado por el seguro.

Para establecer el saldo amortizable respecto de inmuebles, se deducirá el valor de los terrenos y respecto de estos bienes, así como de los muebles, se restará las reservas que se hubieren acumulado por depreciaciones.

Los gastos de organización o de experimentación se podrán amortizar, según su importancia y proporción, con el activo de la empresa, en cinco años, a razón del veinte por ciento (20%) anual, o en diez años, a razón del diez por ciento (10%) anual, o, en su caso, en el tiempo que se prevea como duración de la empresa. En el Reglamento se determinará las condiciones para la elección de uno de estos métodos. Las empresas mineras podrán optar por lo que dispone el artículo 47.

Art. 60.— **Bienes sin precio cierto en moneda nacional.**— Cuando los bienes dados en pago o introducidos en el país no tengan precio cierto en moneda ecuatoriana, por no haber sido valorados en el momento de su introducción al país, o por otra razón, se procederá en alguna de las siguientes formas:

a) Si tuvieran cotización conocida en moneda extranjera, se computará su precio en moneda ecuatoriana, de acuerdo con la cotización oficial vigente al tipo de cambio y su costo se establecerá como si los bienes se hubieren importado al Ecuador; y,

b) Si su precio en moneda extranjera fuere incierto, se tomará en cuenta su cotización normal en el mercado ecuatoriano.

Si no fuere aplicable ninguno de estos dos métodos la Dirección General de Rentas determinará el valor estimativo, de acuerdo con la naturaleza y estado de depreciación.

Art. 61.— **Ganancias o pérdidas en la enajenación de bienes.**— Las ganancias o pérdidas en la enajenación o transferencia de bienes se considerarán como renta de utilidad gravable, las primeras, y las segundas, deducibles o compensables en los siguientes casos:

a) Cuando una persona o empresa tuviere como actividad habitual la compra-venta y la venta o enajenación forzosa, incluyéndose el negocio de construcciones; y,

b) Cuando la enajenación de los bienes, muebles o inmuebles, se efectuare por empresas de seguros o de capitalización.

En los demás casos se los tendrá como ganancias ocasionales de capital sujetas a las disposiciones especiales pertinentes.

Las susodichas utilidades se imputarán al año en que se haya efectuado la enajenación y al grupo de rentas al que correspondiere la actividad de que se trata.

Art. 62.— **Utilidad o pérdida en el negocio de inmuebles y otras inmovilizaciones de activos sujetos a depreciación.**— La utilidad o pérdida en el negocio de inmuebles y otras inmovilizaciones de activos sujetos a depreciación, se computará sumando al precio de venta el valor acumulado de las reservas para depreciaciones efectuadas contablemente y restando el precio de adquisición y de las mejoras efectuadas, así como otros elementos deducibles que se contemplen en el Reglamento o se compruebe por los contribuyentes.

CAPITULO XXI

Del impuesto progresivo sobre la renta global

Art. 63.— **Liquidación del impuesto.**— Para liquidar el impuesto progresivo sobre la renta personal global se determinará la base imponible de conformidad con las disposiciones de esta Ley y se aplicará la siguiente tabla:

Fracción básica	Exceso hasta	Imp. sobre frac. básica	Imp. sobre frac. excedte.
\$/ —	\$/ 10.000	\$/ —	10%
\$/ 10.000	20.000	1.000	14%
20.000	50.000	2.400	18%
50.000	100.000	7.800	22%
100.000	150.000	18.800	26%
150.000	200.000	31.800	30%
200.000	500.000	46.800	34%
500.000	1.000.000	148.800	38%
1.000.000	2.000.000	338.800	42%
2.000.000	3.000.000	758.800	46%
\$/ 3.000.000	en adelante	1.218.800	50%

Los intereses de las cédulas hipotecarias y las ganancias de capital provenientes de la compra-venta o transferencia ocasional de valores fiduciarios, no formarán parte de la renta global, quedando sujetos al impuesto único del ocho por ciento (8%) sin rebajas sobre su monto. Para este gravamen no regirán las exenciones que establezca esta Ley. Las instituciones que paguen los intereses de dichas cédulas actuarán como Agentes de Retención. En las declaraciones anuales se harán constar el monto de los intereses y/o ganancias de capital percibidos por este concepto.

Los dividendos de acciones al portador pertenecientes a nacionales o extranjeros residentes en el país se sumarán para el cálculo del impuesto progresivo, y si la suma total de rentas causare una alícuota mayor al de las acciones al portador, se aplicará también esta tasa sobre los dividendos al portador.

CAPITULO XXII

Del impuesto proporcional sobre determinados grupos de rentas

Art. 64.— Además del impuesto progresivo a la renta personal global, las rentas pagarán un impuesto proporcional de acuerdo con las siguientes tarifas:

- Las rentas del trabajo en relación de dependencia y las de libre ejercicio profesional, sobre el exceso de \$ 120.000, el seis por ciento (6%); y,
- Rentas del trabajo con el concurso del capital, el seis por ciento (6%); y,
- Rentas del capital sin el concurso del trabajo, el dieciocho por ciento (18%).

En estos casos se determinará la renta imponible según lo establecido en el artículo 56.

CAPITULO XXIII

De las tarifas para las rentas de sociedades de capital

Art. 65.— Las sociedades de capital constituidas en el Ecuador pagarán el treinta por ciento (30%) de impuesto sobre las utilidades sociales no distribuidas. Las sociedades constituidas en el exterior pagarán sobre las utilidades de fuente ecuatoriana, que obtengan en el país por medio de un establecimiento permanente o por otro medio, la tarifa del cuarenta por ciento (40%) de impuesto a la renta.

Art. 66.— Dividendos de acciones.— Las sociedades anónimas y otras de capital, que distribuyan dividendos a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, residentes o no en el país, retendrán y pagarán provisionalmente el impuesto, de conformidad con las siguientes normas, sin perjuicio de lo que se determina en el artículo 74 de esta Ley y el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Herencias, Legados y Donaciones:

- Sobre dividendos de acciones nominativas, 20%;
- Sobre dividendos de acciones al portador, 35%;
- Sobre dividendos de acciones nominativas acreditados o remitidos a accionistas extranjeros residentes en el exterior, 40%.

Art. 67.— Dividendos de sociedades de capital.— Los dividendos que perciban sociedades de capital

constituidas en el Ecuador, así como los percibidos por establecimientos permanentes de sociedades extranjeras, se incluirán en la determinación de la utilidad neta de fuente ecuatoriana; pero del impuesto que resultare se descontará el que hubiere sido retenido por la sociedad que pagó esos dividendos.

Art. 68.— Utilidades remitidas al exterior.— Las utilidades que obtuvieren en el país sociedades extranjeras de capital y que envíen a sus matrices u oficinas principales, así como las que se remitiesen a países extranjeros, pagarán el impuesto a la renta definitivo del 40%.

Los intereses, regalías y otros beneficios que se envíen al exterior, pagarán sobre la parte que se considere de fuente ecuatoriana, el 40%.

En los casos anteriores las empresas actuarán como agente de retención.

CAPITULO XXIV

De la tributación de las empresas petroleras

Art. 69.— Utilidad de las empresas petroleras.— Para efectos de establecer la utilidad de las empresas petroleras, se considerarán como gastos en el respectivo ejercicio anual, todos los costos de la perforación de pozos que resultaren improductivos, así como los saldos de los costos de "casing" aún no amortizado por improductividad superviniente del pozo.

En aquellos que resultaren productivos serán deducibles en el correspondiente ejercicio anual los costos que, en forma general, se consideran como tales en la presente Ley, para la determinación de las utilidades líquidas en la actividad industrial. Pero los costos referentes a "casing" se acumularán en una cuenta especial, la misma que se amortizará a razón del 10% anual y el saldo de la cuenta se amortizará en forma proporcional durante los últimos tres años de la concesión.

Con el objeto de realizar el debido control sobre la productividad o improductividad de los pozos, las empresas en referencia deberán llevar un inventario completo de los mismos, con las especificaciones que se señalarán en el Reglamento.

CAPITULO XXV

De los impuestos adicionales

Art. 70.— Impuesto para la Comisión de Tránsito del Guayas.— Las rentas originadas en la provincia del Guayas, sean de personas naturales o de sociedades de capital o de personas, para financiamiento de la Comisión de Tránsito del Guayas, pagarán el impuesto adicional del ocho por ciento (8%) sobre el impuesto a la renta que se causare conforme a las disposiciones de la presente Ley.

Art. 71.— Del impuesto para los establecimientos de educación superior.— Los contribuyentes sujetos al pago del impuesto a la renta, salvo los que pagaren menos de \$ 4.200,00 al año, pagarán en toda la República, un impuesto adicional del 11%, calculado sobre el valor del impuesto a la renta que se causare, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.

Este impuesto será depositado quincenalmente por las Jefaturas Provinciales de Recaudaciones, en las oficinas locales del Banco Central del Ecuador, y en los lugares en que no las hubiere, en las del Banco Nacional de Fomento, en dos cuentas especiales; el 10% en la denominada "Impuesto Adicional a la Renta para universidades y escuelas politécnicas oficiales" y el 1% en otra, denominada "Impuesto Adicional a la Renta para universidades particulares".

Art. 72.— Impuesto para el Centro de Rehabilitación de Manabí.— Los contribuyentes sean personas naturales o sociedades de capital o de personas cuyas rentas sean originadas en la provincia de Manabí, pagarán el ocho por ciento (8%) sobre el impuesto a la renta que se causare de acuerdo a las disposiciones de esta Ley, para el Centro de Rehabilitación de dicha provincia.

Art. 73.— Las sociedades anónimas y otras de capital por acciones establecidas en las provincias del Guayas o Manabí, que distribuyan dividendos a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, residentes o no en el país, retendrán y pagarán provisionalmente los impuestos adicionales establecidos en los artículos 70, 71 y 72 sobre dichos dividendos. Los contribuyentes tendrán derecho para que se efectúen las reliquidaciones correspondientes.

CAPITULO XXVI De los créditos tributarios

Art. 74.— De los impuestos que debiere una persona sobre su renta personal se deducirán los créditos que se hayan retenido en la fuente de conformidad con esta Ley.

Para conceder el crédito que se considera en el inciso anterior, respecto de dividendos de acciones al portador, cuando deban satisfacer el cuarenta y cinco por ciento (45%) por retención en la fuente, será preciso que los correspondientes accionistas presenten al Director General de Rentas una solicitud, en la que se indicará los valores que corresponda a acciones al portador, la fecha y el monto de las retenciones.

Art. 75.— En los casos contemplados en el artículo 10, literal a), numerales 2, 3 y 4, se reconocerá como crédito el impuesto pagado en otro país, de acuerdo con los certificados conferidos por la respectiva autoridad tributaria.

Art. 76.— Cuando se trate de utilidades de fuente extranjera que no deban impuestos conforme al principio de la fuente o de rentas exentas de tributos, se concederá el crédito tributario del caso, conforme a las normas que se señalen en el Reglamento.

Art. 77.— Si se tratare de dividendos distribuidos por empresas extranjeras, a sociedades de capital constituidas en el Ecuador, tomándolos de utilidades que no son de fuente nacional, el crédito tributario se efectuará conforme al sistema que en el otro país se aplique para rentas de fuente ecuatoriana que se hallen sujetas a tributación en dicho país, sin que en ningún caso el crédito pueda superar a la cuantía del impuesto que en el Ecuador correspondiere a esos dividendos.

CAPITULO XXVII De la contabilidad

Art. 78.— Como principio general se deberá llevar contabilidad por el sistema de la partida doble, en idioma español y en moneda nacional, para registrar el movimiento económico y determinar los resultados imputables al respectivo año fiscal.

Estarán sujetas a esta obligación las empresas comerciales e industriales que operen con un capital mayor de cincuenta mil sucres o vendan más de doscientos mil sucres anuales. En caso de incumplimiento de lo señalado en este artículo se aplicarán las previsiones del artículo 99.

Art. 79.— Los inventarios se harán al costo, conforme a los principios generales que en esta materia acepta la contabilidad y dentro de las normas que se establezcan en el Reglamento.

Los castigos, aumentos de precio y otras regulaciones conforme a la realidad del mercado o a las necesidades del negocio, no podrán realizarse sino con autorización expresa de la Dirección General de Rentas y previa la demostración o justificación de la necesidad y conveniencia de estas regulaciones. Fuera de estos casos, la constitución de reservas para contingencias o fluctuaciones de precios, se considerarán reservas sujetas al pago del respectivo impuesto.

Art. 80.— La contabilidad de las diferencias de operaciones efectuadas en moneda extranjera deberá realizarse siguiendo un sistema unitario. En la cuenta de resultados se anotará la diferencia de cambio realmente producida; pero si se refiere a inversiones de bienes de capital se imputarán a su respectivo costo.

CAPITULO XXVIII De la declaración de rentas y determinación del impuesto

Art. 81.— Todos los sujetos de obligación, sea propia o ajena, considerados en el Capítulo XXXI, están obligados a presentar, ante la Jefatura Provincial de Recaudaciones de la provincia donde tengan su domicilio y en los plazos correspondientes, una declaración sobre todas y cada una de sus rentas. Las declaraciones deberán hacerse en los formularios respectivos. Los sujetos de obligación propia indicarán en la misma declaración, todos los bienes y deudas que tuvieran, con los datos que prescriba el Reglamento. El Ministerio de Finanzas podrá publicar los nombres de los causantes, los impuestos y las rentas declaradas.

También estarán obligadas a presentar declaraciones las personas responsables o no del impuesto, a las que la Dirección General de Rentas impusiere esta obligación, en la forma en que se establezca en la correspondiente notificación.

Los agentes de retención de sueldos, salarios y demás remuneraciones presentarán también una declaración anual, sobre el monto total de pagos efectuados o impuestos retenidos a cada sujeto de obligación.

Art. 82.— **Responsabilidad del declarante.**— La declaración hará responsable al declarante y, en su caso, al contador y al auditor del negocio o empresa, de la exactitud y veracidad de los datos que contenga y se considerará definitiva si en el plazo de seis meses, contados desde el día siguiente al de su presentación, no se enmendaren esos datos. Los errores de cálculo o de hecho podrán enmendarse en cualquier momento.

Para que las enmiendas formuladas sobre los datos contables que no sean errores de cálculo, liberen de responsabilidad, deberán efectuarse dentro del plazo ya mencionado y antes de que se haya iniciado la fiscalización correspondiente.

Art. 83.— **Administradores de sociedades de personas.**— Los administradores de sociedades de personas, en nombre colectivo o en comandita simple, deberán presentar una declaración acerca de las utilidades sociales que correspondan a cada socio, de conformidad con el contrato, verbal o escrito y las disposiciones de esta Ley, y retendrán los correspondientes impuestos. Estas declaraciones no liberarán a los socios de la obligación de presentar las suyas, dispongan o no de otras rentas gravadas por la presente Ley.

Art. 84.— **Quiénes no están obligados a declarar.**— Están libres de la obligación de declarar su renta los contribuyentes domiciliados en el exterior que no tengan representante en el país, por las rentas que están sujetas a retención.

Los empleados y demás trabajadores en dependencia que perciban una renta anual mayor de \$ 10.000,00 están obligados a presentar la declaración de todas las rentas percibidas, adjuntando el comprobante del agente de retención en el que conste el impuesto retenido durante el año anterior.

Art. 85.— **Datos de la declaración.**— Las declaraciones deberán contener los datos solicitados en los respectivos formularios, de manera que si un declarante no empleare uno de esos formularios, deberá proporcionar todas las informaciones que en ellos se pidan. Para tal efecto, la Dirección General de Rentas deberá proveer a las Jefaturas Provinciales de Recaudaciones de suficientes cantidades de dichos formularios.

Art. 86.— **Plazos de presentación de las declaraciones.**— Las declaraciones anuales que establezcan las utilidades obtenidas en un año deberán presentarse hasta el treinta y uno de marzo del año siguiente, o dentro de los tres meses siguientes al del cierre del ejercicio anual, cuando su fecha sea distinta del treinta y uno de diciembre.

Las declaraciones exclusivamente de sueldos y salarios se presentarán hasta el 15 de marzo de cada año.

Las declaraciones de los agentes de retención de impuestos sobre la renta del trabajo en relación de dependencia, deberán formularse anualmente, sin perjuicio de la declaración mensual provisional de que habla el literal c) del artículo 107. Esta declaración anual deberá presentarse hasta el treinta y uno de enero del año siguiente, y contendrá la reliquidación por todo el año anterior.

Las declaraciones de las sociedades de capital que repartieren dividendos conforme a balances semestrales, deberán presentarse semestralmente, en el mes siguiente al de la orden del reparto, sin perjuicio de la reliquidación anual.

En los demás casos de retención del impuesto, la declaración deberá presentarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se efectuó o debió efectuarse la retención, salvo los casos en los que, conforme al Reglamento, la retención del impuesto se ha de considerar anual sobre la suma de los pagos o imputaciones mensuales de las rentas.

Art. 87.— **Declaraciones especiales.**— Cuando la Dirección General de Rentas lo juzgue necesario podrá exigir declaraciones especiales a los propios contribuyentes y a otros responsables o a terceros, sobre sus respectivas rentas o patrimonios, o en relación con las rentas de otras personas, en cuyas operaciones o transacciones hubieren intervenido. También podrá exigir datos relativos a cuentas y operaciones bancarias.

Art. 88.— **Prórrogas para la presentación de las declaraciones.**— El Director General de Rentas podrá, en casos especiales o por motivos justificados, conceder prórroga de dichos plazos de hasta sesenta días para contribuyentes domiciliados en el Exterior y de hasta noventa días cuando se deba esperar la llegada de documentos del exterior. Para la concesión de tales prórrogas deberá justificarse que se han pagado los anticipos correspondientes al año de declaración, a menos que se invoque pérdida en el ejercicio; pero si después se comprobare que no ha existido la pérdida invocada, se aplicará la sanción correspondiente a esta falta.

Art. 89.— De conformidad con el Reglamento para la ejecución del Plan Nacional de Alfabetización se establece la obligación de las Jefaturas Provinciales de Recaudaciones de exigir, al momento de presentar las declaraciones del impuesto a la renta, a todo profesional de nivel medio o superior, el comprobante de haber cumplido con la obligación de alfabetizar o de exoneración correspondiente; en caso contrario, exigirá el pago del doble del valor que debió pagar por la exoneración del deber como alfabetizadores.

CAPITULO XXIX

De la fiscalización

Art. 90.— Dentro del plazo señalado en el artículo 133 de esta Ley, la Dirección General de Rentas podrá verificar las declaraciones presentadas u ordenar que se efectúen fiscalizaciones a base de la contabilidad y de los documentos de los contribuyentes, responsables y terceros.

Para este efecto, dichos contribuyentes, responsables y terceros, deberán llevar la contabilidad de su negocio en la forma que se establece en esta Ley y en la que se prescriba en el Reglamento. En dicho Reglamento y en instrucciones especiales, se indicarán los documentos, libros y registros que han de llevarse respecto de las operaciones propias y de las que se relacionan con terceros, los comprobantes que

han de respaldar los asientos contables, el tiempo que esa documentación se ha de conservar, y que ha de ser por los plazos que señalan para la caducidad en el mencionado artículo 133.

J. a) f) que merezcan esos asientos estarán en función del valor justificativo de dichos comprobantes, así como de la época en que se hubieren registrado dichos asientos. Cuando los impugne la fiscalización, la impugnación deberá ser razonada y, en tal caso, la justificación corresponderá al contribuyente, responsable o tercero.

Art. 91.— **Atribuciones de la Dirección General de Rentas.**— El Director General de Rentas podrá investigar y verificar en cualquier tiempo y por los medios a su alcance, el cumplimiento de la Ley, de su Reglamento y de las instrucciones, impartidas, así como la situación tributaria de un presunto contribuyente; pero la facultad para establecer la obligación tributaria a base de esa forma no podrá ejercerse sino dentro del plazo que para ello considera esta Ley.

En el desempeño de esta función, la Dirección quedará expresamente facultada para:

a) Notificar al firmante de una declaración de renta, o al presunto contribuyente o responsable, o a terceros, que a su juicio, tengan conocimiento de las negociaciones u operaciones de aquellos, para que comparezcan a la Dirección o a las Oficinas Provinciales que se les indique, dentro del plazo que se fijará en atención al lugar de su domicilio, para que contesten, verbalmente o por escrito, a las preguntas o requerimientos que se les hiciere sobre ingresos, egresos, ventas y, en general, sobre las actividades y hechos que se consideren vinculados o adecuados para el establecimiento de la utilidad, verificación de las declaraciones y formulación de las estimaciones de oficio;

b) Exigir a los deudores directos o a los responsables del impuesto o a terceros la presentación de los comprobantes y documentos justificativos para la determinación de la renta; y,

c) Inspeccionar y analizar libros principales y auxiliares de contabilidad, inventarios, registros, anotaciones, correspondencia, cuentas bancarias y demás documentos pertinentes del contribuyente, de los responsables y terceros y otras entidades públicas o privadas, que puedan servir de prueba o dar ilustración respecto de las negociaciones u operaciones que se consideren relacionadas con los datos que contengan o deban contener las declaraciones.

Art. 92.— **Actas.**— Cuando las personas notificadas respondan verbalmente a los requerimientos previstos en el literal a) del artículo anterior, o cuando se examinen libros, comprobantes y demás documentos que se mencionan en los literales b) y c), se harán constar en actas dichas declaraciones verbales; y también se harán constar en la misma la existencia y contenido de los documentos exhibidos. Estas actas, que extenderán los funcionarios, y empleados que reciban la declaración, servirán tanto para la verificación de las declaraciones y establecimiento de las utilidades realmente obtenidas, como para la de

terminación de oficio de las mismas; sin embargo, el causante podrá impugnar la veracidad o acierto de tales actas, acompañando prueba debidamente actuada.

Art. 93.— **Intervención de la Fuerza Pública.**— El Director General de Rentas o los funcionarios o empleados autorizados al efecto, podrán solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, cuando encontraren inconvenientes o resistencias para el desempeño de sus funciones o el auxilio que fuere necesario para la comparecencia de las personas conminadas a hacerlo. Dicho concurso se prestará obligatoriamente.

Art. 94.— **Notificaciones.**— Los resultados de una fiscalización o de una determinación de oficio, que se haga mediante Acta de Fiscalización o por resolución de la Dirección General de Rentas, deberán notificarse a los interesados, para que puedan hacer los reclamos que contempla esta Ley.

Art. 95.— **Otros derechos de la Dirección General de Rentas.**— El Director General de Rentas, por sí o por medio de funcionarios o empleados, autorizados, podrá exigir a los contribuyentes, responsables o terceros, u otros organismos públicos o privados, en el orden nacional, funcional o seccional, y en la forma que establezca el Reglamento, informes y datos que fueren necesarios para su labor de verificación o localización de contribuyentes, sea respecto de sus rentas o patrimonios propios, sea de los que administran y que, en alguna forma están relacionados con las rentas de los contribuyentes.

El Director General de Rentas podrá pedir a los personeros o funcionarios de los Consejos Provinciales y Concejos Municipales, Jefes y Tenientes Políticos, Tesoreros Municipales, Jueces Cantonales y cualesquiera otros funcionarios, informaciones sobre rentas de personas que residen en sus respectivas jurisdicciones o de bienes situados en las mismas.

Los Notarios y los Registradores de la Propiedad comunicarán a la Dirección General de Rentas los datos contenidos en los documentos que se protocolicen u otorguen ante ellos, o que se presenten para su registro, en los formularios que se les enviará a este propósito y en la forma y fechas que se les indique.

Tales informaciones serán de carácter reservado, y los funcionarios que hicieren conocer a particulares no autorizados serán destituidos de sus cargos, sin perjuicio de las sanciones establecidas en otras leyes.

CAPITULO XXX

De la determinación de oficio

Art. 96.— **Causas para la determinación de oficio.**— El impuesto que no llegare a establecerse a base de las declaraciones, será determinado de oficio, por la Dirección General de Rentas:

a) Cuando habiendo presentado una persona su declaración se negare a presentar las informaciones y los comprobantes que se les pidieren, dentro del plazo que se le señalare y que no será inferior a treinta días;

b) Cuando al realizar la verificación se comprobare que la declaración es inexacta o que contiene

datos que no están respaldados por los comprobantes necesarios, o que los respectivos ingresos o egresos parezcan dudosos;

c) Cuando el declarante no llevare contabilidad adecuada, o la que lleva parezca dudosa por los resultados a que conduzca por debajo del rendimiento normal de la actividad económica respectiva, conforme a los resultados obtenidos por otras actividades de igual naturaleza, ejercidas en igualdad de condiciones, y no se dé una justificación aceptable para explicar esta situación;

d) Cuando una persona no hubiere presentado la declaración dentro de los plazos señalados para ello y, notificada personalmente o por medio de la prensa, para que cumpla esta obligación, bajo prevención de que se procederá a una determinación de oficio, tampoco hubiere presentado la declaración; y,

e) Cuando el acrecimiento patrimonial en un período determinado o nivel de vida que llevare el contribuyente no guardaren relación con las utilidades declaradas por ese período, y no se justificaren aceptablemente las causas o fuentes de los hechos mencionados.

Art. 97.— **Clases de determinación de oficio.**— Las determinaciones expresadas serán de dos clases: directas o presuntivas y se las notificará como se indica en el artículo 94.

Art. 98.— **Determinación de oficio directa.**— La determinación directa se hará en base de la propia contabilidad de la empresa y de los datos, documentos e informes que proporcionen los responsables o las personas, siempre que con esas fuentes de información directa sea posible llegar a conclusiones más o menos exactas sobre las rentas del contribuyente.

Art. 99.— **Determinación de oficio presuntiva.**— Cuando no sea posible proceder a la determinación directa, se realizará la presuntiva, que se fundará en los hechos: indicios, circunstancias y demás elementos de juicio que, por su vinculación normal con las utilidades, permitan presumirlas más o menos directamente, en cada caso particular.

Además de la información directa que se hubiere podido obtener contablemente o en otra forma, se considerarán los siguientes elementos de juicio:

a) El capital invertido en la explotación o actividad económica;

b) El volumen de las transacciones o de las ventas en un año y el coeficiente o coeficientes ponderados de utilidad bruta sobre el costo contable;

c) Las utilidades obtenidas por la propia empresa en años anteriores, así como las que obtengan empresas en igual o análoga situación, por la naturaleza del negocio o la actividad económica, lugar de su ejercicio, capital empleado, etc.;

d) Los gastos generales de la empresa y el personal de trabajadores a sus órdenes;

e) El alquiler de los locales empleados por la empresa;

f) El nivel de vida del contribuyente y sus gastos particulares;

g) El enriquecimiento que haya obtenido en un período de tiempo;

h) Cualesquiera otros elementos de juicio que obtuviera la Dirección General de Rentas relacionados con el nivel probable de rentabilidad del contribuyente;

i) Se presumirá que la renta neta del profesional no es inferior a cuatro veces el valor locativo de la casa de habitación.

El valor locativo se considerará el cuatro por ciento (4%) del avalúo comercial de la casa o departamento habitados por su dueño, o el cincuenta por ciento (50%) del cánón anual de arrendamiento, que hubiere señalado la oficina de Inquilinato para la casa o departamento en que vive.

La previsión anterior no será aplicable al profesional que demuestre satisfactoriamente ante la Dirección General de Rentas, que dispone de otros ingresos que le permitan llevar el nivel de vida que tiene y por los que hubiere pagado impuesto.

Quando el profesional fuere empleado y ejerciere además su profesión libremente, la renta presuntiva se aplicará en proporción al tiempo dedicado a esta última.

Art. 100.— **Modificación de resoluciones.**— Ejecutoriada una resolución que establezca una determinación de oficio sólo podrá modificarse por errores de cálculo, dentro de los respectivos plazos de caducidad o prescripción.

Art. 101.— **Rentas de capital y trabajo y capital puro.**— Cuando la determinación presuntiva de oficio no pueda efectuarse de acuerdo con los criterios mencionados en el artículo 99 y en tratándose de rentas del trabajo o del capital puro, el Director General de Rentas podrá fijar hasta un quince por ciento (15%) del capital propio y ajeno utilizados en el negocio o del monto de ingresos brutos, según el caso, como utilidad neta obtenida por la respectiva empresa en el ejercicio anual.

CAPITULO XXXI

De los responsables del impuesto

Art. 102.— **Deudores por obligación directa.**— Serán deudores del impuesto por obligación propia todas las personas que deban la contribución como causantes directos de la misma por ser titular del derecho o dueños o beneficiarios de la respectiva materia imponible. Las personas a quienes la Ley da esta condición estarán obligados a pagar el impuesto en el lugar y dentro de los plazos señalados por la Ley o el Reglamento, personalmente o por medio de sus representantes, en cuanto se produzcan los hechos generadores de la obligación tributaria, de conformidad con las disposiciones de esta Ley.

Art. 103.— **Contribuyentes.**— Serán contribuyentes, en la medida y en las condiciones que se establecen en la presente Ley:

a) Las personas naturales y las jurídicas;

b) Las compañías anónimas, de responsabilidad limitada, y en comandita por acciones, establecidas en el país, así como las sociedades constituidas en el extranjero, sea cual fuere su constitución o denominación, que tengan en el país un establecimiento permanente u obtengan renta de fuente ecuatoriana;

- c) Las sucesiones indivisas;
- d) Las cooperativas y comunidades que obtengan rentas gravadas por esta Ley, cuando por razones de su constitución, y de acuerdo con sus estatutos, no deban o puedan ser atribuidas a sus comuneros, cofrades o socios; y,
- e) Las personas que ejerzan la patria potestad, por las rentas que provengan del peculio adventicio ordinario o de las que tuvieren derecho en virtud de las disposiciones del Código Civil.

Art. 104.— Responsables solidarios.— Serán solidariamente responsables del pago del impuesto por deuda ajena, en las condiciones que establece esta Ley y las que determina el Reglamento sin perjuicio de las sanciones que correspondan a las infracciones u omisiones cometidas:

- a) Los representantes legales de menores o interdictos;
- b) Los administradores de bienes ajenos y los que actuaron como tales en el período en que se originó la obligación tributaria;
- c) Los administradores de las entidades mencionadas en los literales b) y d) del artículo anterior;
- d) Los síndicos y liquidadores de concursos de acreedores y de quiebras, y los encargados de las sociedades en liquidación;
- e) Los albaceas con tenencia de bienes, o el administrador común de bienes; y, a falta de éstos, el cónyuge sobreviviente y los herederos, con sujeción a lo que dispone el artículo 18 y el inciso final del artículo 105 y los partícipes de cosa singular;
- f) Las personas y los intermediarios que operen en el comercio exterior de productos naturales, minerales, agrícolas, ganaderos, forestales, pesqueros, etc., conforme a lo previsto en el artículo 13; y,
- g) Los agentes de retención, entendiéndose por tales las personas que están obligadas, entre otras cosas, a retener el impuesto por disposiciones de esta Ley, sus reglamentos o por determinación del Director General de Rentas.

Las personas mencionadas en este artículo también deberán cumplir por cuenta de los directamente obligados, los deberes que esta Ley y sus Reglamentos les impongan para la verificación, determinación y pago del impuesto.

Art. 105.— Otros responsables solidarios.— También responderán solidariamente con los deudores directos u otros responsables, por el pago del impuesto que haya causado, las siguientes personas, igualmente sin perjuicio de las sanciones que correspondan a las infracciones u omisiones cometidas:

- a) Los Notarios, Registradores de la Propiedad y demás funcionarios que hayan dejado de cumplir oportunamente las providencias para la determinación o el pago del impuesto a la renta, establecidas por ésta u otras leyes; y,
- b) Los sujetos por obligación real que se mencionan en el artículo siguiente.

En el caso de rentas de bienes sucesorios, la obligación tributaria será solidaria e indivisible y se hará efectiva en los bienes de la sucesión.

Art. 106.— Responsables solidarios por responsabilidad real.— Serán sujetos de obligación por responsabilidad real los adquirentes por cualquier título,

de bienes raíces, de negocios comerciales o industriales, incluyendo las sociedades que sustituyan a otras haciéndose cargo del activo y pasivo, en todo o en parte; así como los asignatarios a título universal.

Los adquirentes de predios rurales o urbanos responderán por los impuestos que afecten a dichas propiedades, correspondientes al año calendario en que hubieren efectuado la adquisición.

Si esos bienes pertenecieran a una sucesión, los adquirentes responderán también por el impuesto que afecte a los mismos, conforme a lo que establece la Ley de Impuesto a las Herencias, Legados y Donaciones.

Los adquirentes de negocios comerciales o industriales serán responsables solidariamente con los dueños anteriores por el pago de los impuestos que afecten a dichos negocios, sólo por el año en el que se efectúe la negociación, sustitución o sucesión en el caso de que se diere aviso de las transferencias de dominio a la Dirección General de Rentas en el plazo de treinta días de haberse realizado el traspaso; de no hacerlo, serán responsables por los impuestos que se adeuden por los tres años inmediatos anteriores.

CAPÍTULO XXXII

Del pago del impuesto

Normas para el pago.— Los contribuyentes responsables del impuesto deberán efectuar el pago de acuerdo con las siguientes normas:

1. Los contribuyentes sujetos al ejercicio financiero por impuestos no sujetos al año natural, se deberá presentar la declaración correspondiente al ejercicio económico anterior de conformidad con las regulaciones contenidas en la Ley vigente, acompañando a esta declaración el saldo adeudado por impuestos, o reclamando la respectiva Nota de Crédito en caso de pago excesivo.

Sobre la base de los resultados que los contribuyentes declaren o de la última declaración, o del acta de fiscalización para contribuyentes que no hubieren declarado, la Dirección General de Rentas emitirá Títulos de Crédito por el ochenta por ciento del impuesto que se cause de conformidad con las disposiciones de la presente Ley, el mismo que se pagará de acuerdo a las siguientes normas:

1. El cincuenta por ciento (50%) del ochenta por ciento (80%), hasta el treinta de junio;
2. El veinte y cinco por ciento (25%) del ochenta por ciento (80%), hasta el 31 de agosto; y,
3. El veinte y cinco por ciento (25%) del ochenta por ciento (80%), hasta el 31 de octubre.

Los contribuyentes no sujetos al año natural pagarán los dividendos primero, segundo y tercero antes de los ciento veinte, ciento ochenta y doscientos cuarenta días posteriores a la fecha del cierre del ejercicio financiero, respectivamente.

b) Cuando de conformidad con los resultados del primer semestre de un ejercicio o por otra razón debidamente comprobada, estimare el contribuyente que los resultados del ejercicio han de ser negativos

o claramente inferiores al del año base, en más de un cincuenta por ciento (50%) podrá solicitar que se le exima del pago de los respectivos dividendos, en todo o en parte, según se presuman los resultados efectivos en el ejercicio. El Director de Rentas resolverá la petición, pudiéndose apelar ante el Ministro de Finanzas contra lo que resolviera el Director, pero de la Resolución del Ministro no habrá recurso alguno.

Cuando un ejercicio se cierre con déficit el pago anticipado por el año siguiente se hará en la misma forma que se establece para empresas que inician sus actividades, sea cual fuere su naturaleza.

e) Los contribuyentes que inician sus actividades con posterioridad a la vigencia de esta Ley, pagarán en el año de su iniciación el ochenta por ciento (80%) de los impuestos correspondientes a la renta estimada para el ejercicio de acuerdo con las regulaciones establecidas en el literal a) de este artículo, debiendo procederse para tal objeto en la siguiente forma:

Cuando se trate de rentas fijas, como intereses, arrendamientos u otras semejantes, el impuesto se computará sobre el monto que corresponda al ejercicio corriente;

Cuando se trate de rentas de actividades cuyos resultados no se pudiere conocer sino al final del ejercicio, dentro de los treinta días siguientes al primer semestre del mismo, se deberá presentar una declaración provisional de resultados por los seis primeros meses y sobre dichos resultados se computarán los impuestos correspondientes al ejercicio completo.

Cuando se produzca un cambio en las actividades de un negocio, el contribuyente podrá solicitar al Director General de Rentas que se le considere en la iniciación de actividades;

d) Los contribuyentes que cesen en sus actividades deberán comunicar este hecho a la Dirección General de Rentas, para que se suspenda la emisión de los títulos de crédito respectivos; y.

e) Los impuestos retenidos por el agente de retención deberán ser entregados por los mismos en las Jefaturas Provinciales de Recaudaciones, en el mes siguiente al de dicha retención, junto con una declaración global y provisional. La regulación definitiva se hará en la declaración del ejercicio económico que debe presentarse conforme a lo dispuesto en esta Ley.

Art. 108.— Emisión de notas de crédito.— Si la cantidad pagada resultare superior a la realmente debida, la Dirección General de Rentas emitirá una Nota de Crédito por el saldo que tuviere a su favor el contribuyente.

Si el contribuyente no debiere impuesto a la renta, previo aviso al Director General de Rentas, podrá endosar la Nota de Crédito a terceros, quienes podrán pagar con ella exclusivamente el impuesto a la renta que adeudaren.

Art. 109.— Compensaciones.— Si se reconociere el pago excesivo y el consiguiente derecho a reintegro, por resolución del Director de Rentas, o del Ministro de Finanzas o por fallo del Tribunal Fiscal, en su

caso y, de otro lado, el contribuyente estuviere adeudando impuestos, se efectuará una compensación entre lo que tuviere derecho a recibir por el reintegro y el impuesto a la renta que adeudare al Fisco.

El Director de Rentas ordenará tal compensación, de oficio o a petición de parte, sin necesidad de emitir Notas de Crédito, debiendo la Dirección General de Rentas, mantener un registro detallado de dichas compensaciones.

Art. 110.— Avisos a la Contraloría General del Estado.— Exclusivamente para efectos de regulación contable, el Director General de Rentas dará aviso al Contralor General de la Nación, de las Resoluciones que se hubieren dictado acerca de Notas de Crédito o Compensaciones, acompañando copia de los mismos y duplicado de las Notas de Crédito que hubiere emitido. En consecuencia, dichas Resoluciones no requerirán de revisión alguna y causarán ejecutoria, una vez cumplidas las prescripciones de esta Ley.

CAPITULO XXXIII

De los intereses moratorios

Art. 111.— La falta de pago del impuesto o de sus dividendos dentro del plazo señalado para ello, causará un interés de mora igual al máximo convencional permitido de acuerdo con la Ley.

Cuando se establezcan diferencias de impuestos, por motivo de verificaciones efectuadas por la Dirección General de Rentas, por errores de hecho, de derecho, se computarán los intereses de mora sobre la diferencia del impuesto que se glosare a partir de la fecha en que se debió pagar.

El título de crédito que se hubiere notificado legalmente y no fuere cancelado dentro de los treinta días posteriores a la fecha de notificación empezará a pagar el interés penal del 2% (dos por ciento) mensual en lugar del máximo legal convencional. Esta multa no podrá exceder del 100% (cien por ciento) del impuesto.

Cuando se trate de diferencia establecida en una fiscalización o verificación por cuestiones de derecho susceptibles de discusión o esclarecimiento, los intereses de mora se computarán desde la fecha en que se debió pagar esa diferencia, si se confirmare en la resolución que ponga término a la controversia.

Cuando en el proceso de una reclamación se dicte resolución que ponga fin a la controversia, después de doce meses contados desde la fecha de presentación de la reclamación, no se causarán intereses por mora por el tiempo que exceda de los susodichos doce meses.

Art. 112.— Los intereses de mora se devengarán sin perjuicio de las sanciones.

CAPITULO XXXIV

De las sanciones para los contribuyentes y responsables del impuesto

2.— Cuando una persona obligada a presentar una declaración de renta no lo hiciere dentro del plazo señalado, sobre el impuesto que se liquide

a base de la declaración tardía o sobre el que resulte contrario a la estimación de oficio, en su caso, se causará la multa del dos por ciento mensual, que se computará desde la fecha en que fue exigible el tributo hasta la presentación de la declaración o de notificación de la estimación de oficio.

El monto de las sanciones no excederá del cien por ciento (100%) del impuesto que se hubiere causado, pero la pena mínima será de cien sucres.

Art. 114.— Cuando no se causare impuesto, la falta de la declaración, obligada por la Ley o requerida por el Director General de Rentas, dará lugar a una multa de cien a dos mil sucres, según la importancia y naturaleza de la actividad de que se trate.

Art. 115.— Omisión de documentos.— Los contribuyentes o demás responsables del impuesto, que hubieren sido requeridos para que acompañen a la declaración los documentos que deben presentarse, según lo que dispone la Ley o sus Reglamentos, y no lo hicieren, serán sancionados con una multa de Cien a Mil sucres; pudiéndose repetir dicho requerimiento periódicamente, treinta días después del vencimiento del plazo señalado para ello, con sanción que irá elevándose en ciento por ciento (100%) sobre la últimamente impuesta.

Art. 116.— Oposición a inspecciones.— La negativa u oposición inmotivada al cumplimiento de las órdenes de inspección que se dicten, se castigará con el doble de las multas que contempla el artículo anterior.

En caso de reincidencia, además de las penas contempladas anteriormente, el Director General de Rentas sancionará con la suspensión de los permisos de importación y cancelación de las matrículas de comercio e industria.

Art. 117.— Actos de defraudación.— Se consideran actos de defraudación toda afirmación, simulación, ocultación u otros procedimientos que se efectúen con el propósito de evadir o facilitar la evasión del impuesto, o respecto de los cuales no se demuestren aceptablemente la falta de intención dolosa. Se considerarán, por lo tanto, y salvo la mencionada prueba o demostración, que se ha incurrido en acto intencional de defraudación, en los siguientes casos:

a) Cuando existiere contradicción entre los libros de contabilidad y otros registros y antecedentes, o con los datos correlativos de la declaración;

b) Cuando se hubiere empleado algún sistema de contabilidad o imputación prohibido por la Ley o los Reglamentos;

c) Cuando en la declaración de la renta se hubiere excluido resultados de otras actividades que constituyen una unidad económica en el respectivo negocio;

d) Cuando se presentaren informaciones inexactas o adulteradas respecto de ventas, compras, existencias o evaluación de inventarios, o cualquier otro factor relacionado con la renta de que se trate; y,

e) Cuando el contribuyente o responsable llevare los libros de contabilidad que prescribe la Ley o los Reglamentos con datos falsos a sabiendas, o en forma tal que induzca a error, de mala fé o con intención dolosa.

Art. 118.— Corrección de errores de las declaraciones.— Cuando el declarante enmendare los errores o inexactitudes que contenga una declaración, dentro del plazo de seis meses señalados en el artículo 82, habrá lugar a una sanción equivalente al uno por ciento (1%) mensual del impuesto que por tales errores se hubiere dejado de pagar, hasta el mes en que se rectificare el error, a menos que se demostrare lo contrario.

Art. 119.— No correcciones de errores de las declaraciones.— Cuando no se hubiere efectuado la corrección de que trata el artículo anterior, las sanciones por mera inexactitud y la que corresponda a un acto de defraudación, se graduarán en la siguiente forma:

a) Si se justificare satisfactoriamente la falta de intención dolosa, se aplicará una multa equivalente al diez por ciento (10%) del impuesto que se habría cobrado de no conocerse esos hechos;

b) La multa será del cien por ciento (100%) del impuesto que se haya tratado de evadir, cuando la justificación de los errores o inexactitudes o de los otros actos que se consideran en el artículo 117 no fuera plena, cuando pudieren aceptarse parcialmente, o cuando existan claras atenuaciones; y,

c) La multa será de trescientos por ciento (300%) del impuesto, cuando no hubiere justificación aceptable.

Art. 120.— Infracciones de los Agentes de Retención.— Los agentes de retención que no realizaren

el pago del impuesto que deben retener en el tiempo establecido en esta Ley, incurrirán en una multa de veinte a cien sucres por cada omisión en dicho pago. La multa será de cien a mil sucres, según la gravedad de la falta, cuando incurran en alguna de las siguientes: demora en el pago de las retenciones mensuales por más de tres meses; pago o entrega de las cantidades retenidas en inferior cuantía de las que realmente se han efectuado; no exigir a sus empleados y obreros, copia de la declaración de impuesto a la renta correspondiente al año anterior; incumplimiento de las otras obligaciones inherentes a su cargo establecidas en esta Ley o en los Reglamentos cuando no se hayan contemplado específicamente en aquella.

En tratándose de sueldos, salarios y otras remuneraciones, la falta de pago del impuesto causará un recargo mensual del dos por ciento (2%) sobre el valor del impuesto que debió pagarse, recargo que se computará desde el mes siguiente a aquel en que debió efectuarse el pago. Este recargo no excederá del ciento por ciento (100%) del impuesto respectivo, y no se aplicará cuando el agente de retención justifique la demora en la provisión de los fondos para el pago de sueldos, salarios y otras remuneraciones.

Art. 121.— Informes y documentos falsos.— Los auditores, contadores y otros profesionales autorizados y, en su caso, los peritos que autoricen inventarios, balances, estado de pérdidas y ganancias, dictámenes, informes u otros documentos de análoga importancia, falsos, serán sancionados por el Director General de Rentas con una multa de cien a mil

sucres y suspensión en el ejercicio profesional por tres meses. La reincidencia dará lugar a la suspensión en el ejercicio profesional por un año y a la inhabilidad para ejercer la profesión en las oficinas públicas. Todo esto sin perjuicio de otras penas que consideren el Código de Comercio, el Código Penal y la Ley de Contadores.

Art. 122.— **Préstamos a mutuo.**— El impuesto a la renta emanada de prestaciones a mutuo y otra causa de endeudamiento cualquiera, pagará el acreedor, y, en ningún caso, el deudor.

El traslado del impuesto a la renta del acreedor a cargo de su deudor, dará lugar a una sanción del doble del impuesto causado.

El quebrantamiento de otras disposiciones de la Ley o de sus Reglamentos no previsto en los artículos anteriores, en cuanto pueda conducir a disminución del impuesto a cobrarse o a dificultar la verificación de las declaraciones o la determinación de oficio, serán sancionados con una multa de cien a mil sucres, según su gravedad.

Art. 123.— **Atribuciones de la Dirección General de Rentas.**— Las sanciones que se consideran en los artículos anteriores serán impuestas por el Director General de Rentas, con motivo de una fiscalización o determinación de oficio, obligatoriamente y de acuerdo con la gravedad de la falta.

CAPITULO XXXV

De las sanciones para las personas o Entidades que tienen la obligación de presentar informes.

Art. 124.— Las personas o entidades a quienes el Director General de Rentas hubiere exigido informe obligatorio de acuerdo con lo previsto en el artículo 95 y que no lo presentaren en la forma y en el plazo que para ello se establezca en el Reglamento o se indique en la comunicación que para tal efecto enviare el Director, incurrirán en una multa de cien a cinco mil sucres, que impondrá el Director de acuerdo con la naturaleza e importancia de la actividad de que se trate. La multa será del doble cuando en los informes se dieran datos falsos, sin perjuicio de las penas que establece el Código Penal, para estas infracciones.

Art. 125.— Los funcionarios que no enviaren los informes previstos en el artículo 95 serán sancionados con una multa de cien a mil sucres, según la importancia de las informaciones que se omitieren y la reincidencia en la falta.

CAPITULO XXXVI

De las sanciones para los funcionarios y empleados públicos

Art. 126.— **Delitos contra la Administración Pública.**— Los funcionarios y empleados de la Dirección General de Rentas que en el desempeño de sus cargos incurrieren en las infracciones consideradas en el Título III del Libro II del Código Penal, serán sancionados con una multa de quinientos a veinte mil sucres, aparte de las penas que establece dicho

Código. Además, los funcionarios y empleados que incurrieren en las susodichas faltas serán cancelados de inmediato.

Sanciones a los Fiscalizadores:

Los fiscalizadores ajustarán sus actuaciones a las Leyes y Reglamentos vigentes, a la Jurisprudencia del Tribunal Fiscal y a las instrucciones de la Administración; estarán obligados a defender ante el Director General de Rentas, Ministro de Finanzas o el Tribunal Fiscal en su caso, los cargos establecidos, presentando las justificaciones pertinentes.

En el ejercicio de sus funciones son responsables personal y pecuniariamente por todo perjuicio que por su acción u omisión dolosa causaren al Fisco, sin perjuicio de la destitución de su cargo y del enjuiciamiento penal respectivo.

La mera inobservancia de las Leyes y Reglamentos, jurisprudencia e instrucciones de la Administración, será sancionada con multa de doscientos a mil sucres y al doble de estas sanciones en caso de reincidencia, que será impuesta por el Director General de Rentas. La persistencia en la misma será causa para la destitución del cargo.

Los funcionarios y empleados de la Dirección General de Rentas y de las Jefaturas de Recaudaciones que no notificaren oportunamente en la forma legal, actas de fiscalización, liquidaciones de impuestos, resoluciones administrativas, títulos de crédito y autos de pago, serán personal y pecuniariamente responsables de los perjuicios que por los retardos u omisiones ocasionen al Fisco. Si por estos motivos caducare el derecho del Fisco para liquidar impuestos o prescribiere la acción para el cobro de las obligaciones tributarias, serán además destituidos de sus cargos por el Ministro de Finanzas.

Art. 127.— **Faltas disciplinarias.**— El incumplimiento o negligencia en el desempeño de las obligaciones que imponen a dichos funcionarios o empleados esta Ley o sus Reglamentos, además de las penas disciplinarias a que haya lugar, serán sancionados con una multa de cien a mil sucres.

Art. 128.— **Procedimientos coactivos.**— Los Jefes Provinciales de Recaudaciones que, transcurridos tres meses a contarse de la fecha de posesión de su cargo, no iniciaren el procedimiento de la coactiva por los créditos pendientes, serán privados de sus sueldos hasta que pongan al día las tramitaciones.

Esta sanción es independiente de las que se consideren anteriormente.

Art. 129.— **Suspensión de las recaudaciones de impuestos.**— Todo funcionario o empleado público, sea civil o militar, que ordenare la suspensión momentánea o indefinida de la recaudación de impuestos o gravámenes establecidos en forma legal, será ipso facto destituido del cargo que estuviere ejerciendo, sin perjuicio de las sanciones económicas o penales a que se hiciere acreedor, según el caso; igual sanción se aplicará al funcionario o empleado que hubiere acaudado una orden que tuviere la finalidad indicada.

Art. 130.— **Atribuciones del Ministro de Finanzas.**— Las sanciones contempladas en este Capítulo serán im-

puestas por el Ministro de Finanzas, de oficio o a petición del Director General de Rentas, de acuerdo con la gravedad de la falta y también en relación con la remuneración que perciban los sancionados.

CAPITULO XXXVII

De las sanciones para los cómplices, encubridores y reincidentes

Art. 131.— Las sanciones para los cómplices y encubridores en las infracciones a la presente Ley o sus Reglamentos, serán graduadas de conformidad con el criterio que señala el Código Penal en el Capítulo I, del Título II, del Libro I, sobre la base de las que correspondan a los autores principales.

Art. 132.— Salvo disposiciones expresas de esta Ley al respecto, las penas económicas para autores, cómplices y encubridores, se elevarán en caso de reincidencia, al doble de la anteriormente impuesta.

CAPITULO XXXVIII

De la caducidad

Art. 133.— Plazos de caducidad.— Caducará en el plazo de cinco años el derecho del Fisco para la fiscalización o verificación de las declaraciones que, respecto del impuesto, formulen los contribuyentes y demás responsables o terceros, así como para la determinación de oficio de las rentas respectivas.

El plazo se extenderá a siete años cuando no se hubiere presentado ninguna declaración de las correspondientes actividades económicas.

El derecho del Fisco para verificar o enmendar una Acta de Fiscalización caducará en el plazo de un año contado desde la fecha de la notificación respectiva.

Para el solo efecto de las responsabilidades de los fiscalizadores podrá el Director General de Rentas o el Ministro de Finanzas disponer una refiscalización de las empresas o negocios respectivos, aún por personas extrañas al cuerpo de fiscalizadores, hasta dentro de dos años a partir de la fecha de notificación de las actas de fiscalización de que se trate.

El derecho para establecer las infracciones a la presente Ley o a sus Reglamentos y sancionarlas, caducará en los mismos plazos que se señalan en los dos primeros incisos de este artículo.

Art. 134.— Cómputo de los plazos.— El cómputo de los plazos que se señalan en los incisos primero y segundo del artículo anterior, se hará desde el primero de abril del año en que debió presentar la declaración; y si el pago del impuesto no debió hacerse mediante declaración, desde la fecha en que fue exigible.

Tratándose de infracciones, el cómputo de los plazos se hará desde la fecha en que se la cometió y, si no fuere posible determinarla, desde el 1º de abril del año correspondiente.

CAPITULO XXXIX

De la prescripción

Art. 135.— Acción para el cobro de créditos fiscales.— La acción para el cobro de los créditos fiscales prescribe en el plazo de diez años contados desde el pri-

mero de enero del año en el que se originó la obligación.

Esta prescripción se interrumpe con la citación del auto de coactiva, o por el reconocimiento, expreso o tácito, de la obligación por parte del obligado.

Art. 136.— Acción de pago indebido.— La reclamación contra el Fisco por pago indebido prescribirá en el plazo de tres años, contados desde la fecha en que se efectuó el pago. El plazo de esta prescripción se interrumpe con las reclamaciones administrativas que se formulen para obtener el respectivo reintegro. La reclamación por pago indebido sólo podrá proponerse con sujeción a lo establecido en el Capítulo siguiente.

CAPITULO XL

De las reclamaciones

Art. 137.— Plazo.— Los contribuyentes y demás responsables de la obligación tributaria, o los terceros, a quienes se les notifique con los resultados de una fiscalización o determinación de oficio, imposición de multas o sanciones, o cualquiera otra providencia que comporte obligación en el orden tributario en el impuesto a la renta, podrán formular una reclamación debidamente razonada, dentro del plazo de treinta días, a contarse desde el día siguiente al de la notificación. Con la reclamación se presentarán las pruebas del caso, o se solicitará expresamente que se abra un plazo para este efecto.

Art. 138.— Competencia.— Los reclamos se presentarán en la Dirección General de Rentas si se tratare de contribuyentes que tuvieran su domicilio en la provincia de Pichincha. Los demás o los que estuvieren residiendo ocasionalmente en otra provincia los presentarán en las Delegaciones de Rentas y a falta de éstas en las Jefaturas Provinciales de Recaudaciones. Cuando se presentaren directamente en la Dirección General de Rentas, en las Delegaciones o en las Jefaturas Provinciales de Recaudaciones, se dará un certificado de recepción del reclamo, sea en formulario especial, sea mediante sello adecuado que se imprimirá en la reclamación y en su copia. Si el reclamo se enviare a la Dirección General de Rentas por correo, se notificará con aviso de recepción al reclamante, aviso que deberá darse dentro de los quince días siguientes al de la recepción en la Dirección General de Rentas.

En las reclamaciones se aplicarán timbres únicamente en los escritos que presente el reclamante; no llevarán timbres los instrumentos informativos o probatorios.

Art. 139.— Resolución del reclamo.— Cuando lo estimare conveniente, el Director de Rentas podrá pedir que se presenten las pruebas pertinentes, para cuyo efecto señalará un plazo prudencial. El Director de Rentas dictará resolución dentro del plazo de noventa días de recibido el reclamo en su Despacho. Al plazo señalado se sumará el que se hubiere concedido para la presentación de pruebas.

La resolución se notificará al reclamante, en la forma que se establece en el Código Fiscal.

Art. 140.— **Reunión conciliatoria.**— El Director de Rentas podrá, en cualquier momento, antes de dictar resolución, disponer la comparecencia del reclamante para una reunión conciliatoria con el fin de aclarar los puntos en discrepancia y llegar en lo posible a un acuerdo con el contribuyente.

En caso de obtener dicho acuerdo se dejará constancia en Acta, la misma que será aprobada por resolución, previo informe de un Abogado de la Dirección General de Rentas. Esta resolución tendrá el carácter de definitiva, de la cual no habrá recurso alguno.

Art. 141.— **Presunciones de legitimidad y ejecutoriedad.**— La resolución del Director de Rentas, salvo lo previsto en el artículo siguiente, pone término al proceso administrativo en los reclamos de los contribuyentes responsables o terceros y goza de las presunciones de legitimidad o ejecutoriedad. El Director General de Rentas procederá a la emisión del respectivo título de crédito, para que se inicie el procedimiento de ejecución, conforme a lo dispuesto en el Título III del Código Fiscal.

Art. 142.— **Consulta.**— Se elevará en consulta al Ministro de Finanzas las resoluciones favorables a los contribuyentes, que representen una rebaja de más de cien mil sucres en el monto de las glosas o estimaciones de oficio.

Si dentro del plazo de treinta días de elevada la consulta el Ministro de Finanzas no dictare resolución, se considerará tácitamente aprobada la resolución consultada y se procederá a dar cumplimiento a lo que en ella se ordenare.

Art. 143.— **Denegación tácita del recurso.**— Si el Director General de Rentas no dictare resolución dentro del plazo señalado para ello, el reclamante podrá considerar el silencio administrativo como denegación tácita de su recurso y proceder de conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Código Fiscal y el siguiente de esta Ley.

Art. 144.— **Demanda contencioso - tributaria.**— Dentro del término de treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación con la Resolución del Director de Rentas, o de la que expida el Ministro de Finanzas, en los casos en los que conforme a esta Ley se debe elevar en consulta la resolución favorable del Director de Rentas, los reclamantes podrán formular demanda contencioso - tributaria ante el Tribunal Fiscal, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Fiscal.

Art. 145.— **Prórrogas.**— El Director General de Rentas y el Ministro de Finanzas podrán celebrar arreglos con los contribuyentes, dentro de los límites señalados en el artículo 20 del Código Fiscal, para la cancelación de las obligaciones tributarias, las cuales tendrán el privilegio de prelación que se contempla en el artículo 90 del citado Código.

Art. 146.— **Rebaja de sanciones.**— Las exoneraciones o reducciones de las sanciones que se hayan impuesto por infracciones a la presente Ley o en su caso, a las disposiciones reglamentarias, se concederán únicamente mediante resolución que dicte el Director General de Rentas.

Las multas no podrán rebajarse en más del 50% ni en términos tales que reduzcan a menos del mínimo establecido, según el caso.

Las exoneraciones o reducciones de las sanciones que establezcan una pena donde se compruebe la intención dolosa, según lo dispuesto en el literal c) del artículo 119, se concederán únicamente mediante sentencia que pronuncie el Tribunal Fiscal.

En ningún caso se podrán exonerar las multas impuestas por denuncias ni las establecidas en los artículos 25 y 122 de esta Ley.

CAPITULO XLI

De la administración del impuesto

Art. 147.— El Ministerio de Finanzas, por intermedio de la Dirección General de Rentas y de las dependencias respectivas, tendrá a su cargo la aplicación de la presente Ley.

Art. 148.— **Atribuciones y deberes de la Dirección General de Rentas.**— El Director General de Rentas tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

a) Planificar, dirigir y vigilar el trabajo de los funcionarios y empleados de la Dirección;

b) Expedir los Títulos de Crédito, una vez cumplido el procedimiento que establece esta Ley;

c) Cuidar especialmente la parte técnico-financiera de los intereses fiscales;

d) Expedir instrucciones para los contribuyentes y responsables del impuesto, así como para los terceros que conforme a esta Ley deban presentar declaraciones e informaciones.

Estas instrucciones versarán especialmente sobre las siguientes materias: índices, coeficientes o porcentajes que sirvan de base para la estimación de oficio de la renta, o de la utilidad imponible, así como para el control y modificación de las declaraciones de los contribuyentes, siempre que no estén fijados expresamente por la Ley.

Registro de los contribuyentes y responsables del pago del impuesto.

Firma de las declaraciones que deban presentarse de acuerdo con esta Ley.

Lugar y forma de pago del impuesto y abonos a cuenta del mismo.

Vigilación de las declaraciones que presentaren los contribuyentes, examen de la contabilidad que llevarán e intervención de los agentes de retención.

Sistemas de contabilidad, libros y anotaciones que deben llevar los contribuyentes y responsables del impuesto, o los terceros, en su caso.

Otros deberes de los contribuyentes, responsables y terceros, en general, y especialmente con motivo de los requerimientos que se les hiciera con el objeto de realizar una verificación o cualquiera otra intervención para el éxito de los procedimientos tendientes a la mejor aplicación del impuesto.

e) Llevar la estadística del impuesto a la renta, especialmente en lo relativo al rendimiento de los impuestos progresivos a la renta global, proporcionales y adicionales; impuestos pagados por sociedades de capital y por las personas naturales y otros contribuyentes; frecuencia de las rentas conforme a una

adecuada y comprensiva clasificación; valor de las rebajas general y por cargas de familia; ingresos brutos y netos, materia imponible y, en general, todo lo que fuere aprovechable para una correcta información sobre la materia;

f) Organizar el trabajo y la información que conduzcan a una clasificación ordenada de las actividades económicas y a la determinación de coeficientes, normales de productividad neta y bruta, en función de capital empleado y del monto bruto de las ventas;

g) Compilar las leyes y reglamentos relativos a este impuesto, así como la jurisprudencia establecida, y llevar todo esto a conocimiento de sus dependencias y de los contribuyentes;

h) Someter a consideración del Ministro de Finanzas recomendaciones para la provisión de los cargos técnicos;

i) Solicitar al Ministro de Finanzas la destitución de empleados, así como la aplicación de sanciones que deban ser impuestas por el Ministro;

j) Sugerir al Ministro de Finanzas las reformas que estime necesarias para la aplicación de la presente Ley, así como las modificaciones a los reglamentos; y,

k) Los demás deberes y atribuciones que le corresponden en virtud de otras disposiciones.

Art. 149.— Atribuciones y deberes de la Dirección General de Recaudaciones.— El Director General de Recaudaciones tendrá los siguientes deberes y atribuciones.

a) Planificar, dirigir y vigilar el trabajo de los funcionarios y empleados de la Dirección a su cargo;

b) Expedir las órdenes de cobro de los títulos de Crédito emitidos por la Dirección General de Rentas;

c) Efectuar las gestiones para el cobro de los mismos;

d) Vigilar la marcha de los procesos coactivos;

e) En general, procurar el oportuno y cabal pago del tributo; y,

f) Los demás que le correspondan en virtud de otras disposiciones.

Art. 150.— Obligaciones de las Jefaturas de Recaudaciones.— Las Jefaturas Provinciales de Recaudaciones recibirán el pago del impuesto en sus respectivas jurisdicciones, y efectuarán las demás diligencias relativas a la recepción y tramitación de las declaraciones determinadas en esta Ley o en el Reglamento, y las especiales que exija la Dirección General de Recaudaciones, debiendo limitar su iniciativa a dar instrucciones y a sugerir las enmiendas que creyere oportunas, pero no rechazarán las declaraciones que reciban, principalmente cuando los contribuyentes asuman la responsabilidad de sus actos y no acepten tales enmiendas.

Art. 151.— Oficina Nacional de Personal.— La Oficina Nacional de Personal formulará un Reglamento que será sometido a la aprobación del Ministro de Finanzas, en el que se harán constar los requisitos mínimos de capacidad para llenar los cargos de fiscalizadores, revisores, liquidadores, contadores y más personal de la Dirección General de Rentas y de la de Recaudaciones.

La Contraloría General de la Nación se abstendrá de inscribir los nombramientos en los que no constare

expresamente haberse cumplido los requisitos indicados en el mencionado Reglamento.

Art. 152.— Información Reservada.— Los Directores Generales de Rentas y Recaudaciones, sus representantes, delegados o agentes, Jefes Provinciales de Recaudaciones y demás funcionarios y empleados de las Direcciones o de sus Dependencias, no podrán divulgar o dar información alguna relativa a la fuente y cuantía de la renta, pérdidas, gastos y cualesquiera otros datos que figuren en las declaraciones, libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de la contabilidad o documentación que hubiere sido examinada oficialmente, salvo lo dispuesto en el artículo 81.

Las prohibiciones y limitaciones precedentes no obstan para que las autoridades judiciales o administrativas competentes examinen las declaraciones de los contribuyentes y toda documentación oficial sobre la materia, en cuanto fuere necesario para la tramitación de las reclamaciones propuestas por los propios contribuyentes, o para el establecimiento de la obligación tributaria de los causantes y responsables del impuesto.

Tales prohibiciones y limitaciones tampoco obstarán para los estudios y publicaciones estadísticas de carácter general, ni para la elaboración de índices y coeficientes de rentabilidad por grupos de actividades a la que se refiere el artículo 148, ni para el cumplimiento de las providencias que dictare el Tribunal Fiscal, pidiendo el envío de los expedientes formados en la sustanciación de las reclamaciones administrativas, los mismos que han de estar cuidadosamente ordenados, con la respectiva numeración en cada foja.

CAPITULO XLII

Disposiciones Especiales

Art. 153.— Denuncias.— Cuando en virtud de denuncia de extraños a la Administración se hubiere cobrado impuestos superiores a los declarados, el denunciante tendrá derecho al cincuenta por ciento (50%) de la diferencia.

El autor de denuncia que la administración fiscal rechace por dolosa, será reprimido con las penas que establece el artículo 494 del Código Penal y con sujeción al procedimiento prescrito en el Código de la materia.

Art. 154.— Exenciones del Impuesto.— En convenios que celebren el Estado, los Municipios y otros organismos libres de impuestos, con los particulares no se podrán considerar otras exenciones del impuesto que las que contempla esta Ley. La Dirección General de Rentas no admitirá las exenciones que estuvieren en contra de este artículo, y exigirá el pago del tributo al sujeto directo de la obligación, a menos que la institución contratante pague el valor del impuesto.

Art. 155.— Doble Imposición Internacional.— Autorízase a la Función Ejecutiva para que, en los convenios generales o especiales que celebre con Gobiernos extranjeros para evitar la doble imposición internacional y la evasión fiscal, reduzca las tarifas

del impuesto que considera esta Ley, o el impuesto que conforme a ella resultare, o bien para llegar a cualquier otro criterio o distribución equitativa de la carga tributaria, en todos los casos en los cuales el principio de la fuente no se base en indiscutible criterio aprobado en las reuniones internacionales que se hayan celebrado para este efecto, como intereses de préstamos de inversionistas extranjeros, rentas de empresas de transporte, de empresas de seguros, de la exploración de productos naturales y de otros negocios análogos.

Autorízase igualmente a la Función Ejecutiva para que, en casos de conveniencia nacional, para el ejercicio de una actividad económica conceda un régimen transitorio a empresas extranjeras domiciliadas en países que no concedan créditos tributarios, total o parcialmente por el impuesto pagado en el país de la fuente de la renta, en el caso de que se otorgue una reducción de hasta el cincuenta por ciento (50%) del impuesto que establece esta Ley. Para obtener esta concesión será indispensable que se presente un certificado auténtico de la correspondiente autoridad tributaria del país del domicilio, en el que conste que la empresa ha pagado el impuesto, total o parcial, por la utilidad de fuente ecuatoriana y que no se otorgue crédito tributario por el impuesto pagado en el Ecuador, o se indique la magnitud del crédito si se lo otorga parcialmente.

Art. 156.— Certificados de no adeudar al fisco.— Se deberá obtener de las respectivas Jefaturas Provinciales de Recaudaciones certificados de haber pagado y no deber impuesto a la renta, en los siguientes casos:

a) Para la concesión de visas de pasaportes para salir del país;

b) Para la concesión de permisos de importación y exportación;

c) Para la celebración de contratos de ejecución de obras o de aprovisionamiento, con el Gobierno o con otras entidades públicas o instituciones de finalidad social o pública;

d) Para la constitución de sociedades;

e) Para la cancelación de garantías dadas en seguridad de préstamos u otras inversiones;

f) Para la protocolización de escrituras, actas o expedientes relativos a la liquidación de sociedades;

g) Para la concesión de matrículas de comercio; y,

h) Para el registro de nombramientos de empleados públicos; pero si el designado debiere impuesto a la renta bastará para que se efectúe el registro, una orden del Contralor General de la Nación al Oficial Pagador respectivo, a pedido del interesado, para que se descuente el valor del impuesto adeudado en doce mensualidades.

Los Notarios y demás funcionarios públicos que deban actuar en los actos y diligencias que se acaban de mencionar, que no cumplieren la obligación de exigir el certificado de que se trata, serán sancionados con multas de cien a cinco mil sucres.

Art. 157.— Partícipes.— El producto del impuesto establecido por la presente Ley ingresará a la cuenta "Impuesto sobre la Renta", que el Banco Central mantendrá para el objeto.

Los impuestos establecidos en los artículos 70, 71 y 72 se depositarán directamente en las siguientes cuentas:

"Comisión de Tránsito del Guayas";

"10% Impuesto Adicional a la Renta para Universidades"; y "Escuelas Politécnicas Oficiales";

"1% Impuesto Adicional a la Renta para Universidades Particulares";

"Centro de Rehabilitación de Manabí".

Desde el 1º de Agosto de 1971, las participaciones y asignaciones se sujetarán a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 983, de Julio 2 de 1971, publicado en el Registro Oficial Nº 260 de Julio 6 de 1971.

Art. 158.— Derogatorias.— Deróganse todas las Leyes y Decretos relacionados con el Impuesto a la Renta expedidos con anterioridad al Decreto 329 de Febrero 20 de 1964 publicado en el Registro Oficial 190 de Febrero 26 de 1964.

Déjase sin efecto la codificación de la Ley de Impuesto a la Renta realizada por el Ministerio de Finanzas el 31 de Agosto de 1966.

Art. 159.— Reglamentación.— El Ministro de Finanzas someterá a consideración del Presidente de la República para su expedición, el Reglamento General y los Especiales relativos a esta Ley.

Disposiciones Transitorias

Primera.— La disposición del literal b), numeral 2º del artículo 10, rige a partir del ejercicio de 1970.

Segunda.— La derogatoria del artículo 14 de la Ley, rige a partir del ejercicio de 1971.

Tercera.— El inciso 3º del artículo 23, rige a partir del ejercicio de 1970.

Cuarta.— El artículo 29 rige a partir del ejercicio de 1970.

Quinta.— La exoneración que consta en el artículo 1º del Decreto 104 publicado en el Registro Oficial 168 de Julio 12 de 1967, se aplica únicamente para las rentas de 1967-1968 y 1969, en vista de lo dispuesto en el Decreto 467 de Marzo 12 de 1970 publicado en el Registro Oficial 429 de la misma fecha.

Sexta.— Las reformas al literal l) del artículo 38 de la Ley, rige a partir del 12 de Julio de 1967.

Séptima.— La reforma del literal n) del artículo 38, rige a partir del 3 de diciembre de 1970.

Octava.— La deducción de las tasas por servicios públicos que consta en el literal 2º del artículo 43, rige para las rentas de 1970 en adelante.

Novena.— La deducción del 50% del valor de arrendamientos pagados por vivienda, que dispone el artículo 50, rige a partir del ejercicio de 1970.

Décima.— La deducción del 15%, establecida en el artículo 55, rige a partir del ejercicio de 1971.

Décima primera.— El párrafo 2º del inciso 1º del artículo 58, rige para las rentas de 1970 en adelante.

Décima segunda.— El inciso final del artículo 63 rige a partir de las rentas de 1970.

Décima tercera.— La reforma del artículo 65 rige para las rentas de 1970 y siguientes.

Décima cuarta.— Las reformas a los artículos 66 y 68, rigen para las rentas de 1970 y siguientes.

Décima quinta.— El 8% que dispone el artículo 70 de la Ley se cobra a partir de abril de 1969.

Décima sexta.— El 11% sobre las rentas que se causen, superiores a \$ 4.200,00 rige a partir de octubre de 1969.

Décima séptima.— El inciso 3º del artículo 111, referente al 2% de interés penal, rige a partir de septiembre 22 de 1970.

Décima octava.— Los intereses de cédulas hipotecarias son consideradas a partir de 1964.

Décima novena.— El impuesto establecido a cargo de los empleados de embajadas, consulados y organismos internacionales, se pagará desde Enero de 1964, de conformidad con las disposiciones de esta Ley, debiéndose considerar la deducción por concepto de aportes, estén o no afiliados, al Seguro Social Ecuatoriano.

Para estos efectos, el Director General de Rentas notificará a los mencionados organismos la necesidad de que se efectúe la retención del tributo y de que se designe a la persona que ha de actuar como

agente de retención del impuesto, debiéndose comunicar este particular al mencionado funcionario.

Vigésima.— La reforma del artículo 20 del Código Fiscal según Decreto 489 de Septiembre 18 de 1970, no rige para las declaraciones del impuesto a la renta.

Vigésima primera.— Las reformas a los artículos 86, inciso 2º, 110 y 146 de la Ley, rigen para las rentas de 1971 en adelante.

Dado en el Palacio Nacional; en Quito, a 24 de Agosto de 1971.

f.) J. M. Velasco Ibarra, Presidente de la República.— f.) Alonso Salgado Guevara, Ministro de Finanzas.

Es copia.— Lo certifico:

1.) Francisco Díaz Garaicoa, Secretario General de la Administración Pública.

CONCORDANCIAS DEL ARTICULADO

Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual
1	1	41	39	77	77	121	122
2	2	42	40	78	78	122	123
3	3	43	41	79	79	123	124
4	4	44	42	80	80	124	125
5	5	45	43	81	81	125	126
6	6	46	44	82	82	126	127
7	7	47	45	83	83	127	128
8	8	48	46	84	84	128	129
9	9	49	47	85	85	129	130
10	10	50 derogado	48	86	86	130	131
11	11	51	49	87	87	131	132
12	12	52	50	88	88	132	133
13	13	53	51	89 nuevo	89	133	134
14 derogado	—	54	52	90	90	134	135
15 derogado	—	55	53	91	91	135	136
16	14	—	54 nuevo	92	92	136	137
17	15	—	55 nuevo	93	93	137	138
18	16	—	56 nuevo	94	94	138	139
19	17	56	56	95	95	139	140
20	18	57	57	96	96	140	141
21	19	58	58	97	97	141	142
22	20	59	59	98	98	142	143
23	21	60	60	99	99	143	144
24	22	61	61	100	100	144	145
25	23	62	62	101	101	145	146
26	24	63	63	102	102	146	147
27	25	64	64	103	103	147	148
28	26	65	65	104	104	148	149
29	27	66	66	105	105	149	150
30	28	67	67	106	106	150	151
31	29	68	68	107	107	151	152
32	30	69 derogado	69	108	108	152	153
33	31	70	70	109	109	153	154
34	32	71	71	110	110	154	155
35	33	—	72 nuevo	111	111	155	156
36	34	72	72	112	112	156	157
37	35	73	73	113	113	—	—
38	36	74	74	114	114	157	Transitoria XVIII
39	37	75	75	115	115	158	Transitoria XIX
40	38	76	76	116	116	159	158
				117	117	160	159
				118	118	—	—
				119	119		
				120	120		
				121	121		

ANEXO

4

los Rectores, de los Co

el Instituto "José Mar

l Grupo Cultural "Ma
culturales que en el fu
e; y,
e la Unión Nacional

del Centro elegirán anual
el Presidente del mismo
nente reelegido y tend
Centro.

entro podrá designar
Secretario pro tiempo

grantes del Centro cre
starán sus servicios g
oración patriótica en b

á una partida presupuest
plimiento de los fines

Ordenanza entrará en r
i publicación en el Reg

teinte y seis días del m
cientos setenta y siete

z, Secretario Municipal
i, Vicepresidente del Co

Secretario Municipal Cer
nanza que crea el Cent
urrollo Cultural de Man
en dos sesiones distin
jo Cantonal de Manta
del presente año, habie
nente en la última de

ez, Secretario Municipal
re de 1977.

o dispuesto en el Art. 1
a Ley de Régimen Muni
resente Ordenanza y or
registro Oficial para los

i Solórzano, Presidente

creto que antecede el
mo, Presidente del Con
ta ciudad el veinte y
cientos setenta y siete.

z, Secretario Municipal

REGISTRO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

EL ECUADOR HA SIDO, ES Y SERA PAIS AMAZONICO

ADMINISTRACION DEL CONSEJO SUPREMO
DE GOBIERNO

AÑO II — QUITO, VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 1977 — NUMERO 443

Director:

VICENTE ANDA MANOSALVAS

Teléfonos: Dirección 212-564
Distribución. (Almacén) 212-766

Impreso en la Editora Nacional:

Tiraje: 6.300 ejemplares.— Valor \$ 2,00
Edición de 12 páginas

Suscripción anual s/ 300,00

SUMARIO

Dcto.	Págs.
-------	-------

DECRETO:

1880	Ley del Impuesto a las Bebidas Gaseosas	1
------	---	---

ACUERDOS:

MINISTERIO DE RECURSOS
NATURALES:

13934	Autorízase a "Minera Austral S.A." la explotación de la mina de cobre denominada "Peggy"	3
-------	--	---

MINISTERIO DE TRABAJO:

1502	Fíjanse las tarifas que deben percibir los trabajadores que laboran en embarque y desembarque de frutas de los buques de alto bordo	3
------	---	---

INTERMINISTERIAL: MINISTERIOS DE
INDUSTRIAS Y DE FINANZAS:

263	Ampliase Acuerdo de importación de maquinaria en favor de "Textiles Nacionales S.A."	7
-----	--	---

275	Ampliase Acuerdo de importación de maquinaria en favor de Electrodomésticos Durex C.A.	8
279	Ampliase Acuerdo de importación de maquinaria en favor de Industrias Metálicas Ecuatorianas C. Ltda.	8
285	Beneficios de la Ley de Fomento de la Pequeña Industria en favor de Construcciones Eléctricas Scherer S.A.	9
291	Ampliase Acuerdo de importación de maquinaria en favor de CONELSA	9

RESOLUCIONES:

MINISTERIO DE FINANZAS:

35	Dispónese que el Fisco entregue Certificados de Abono Tributario por el 15% del valor de las exportaciones de Aceite de Castor por un período de cinco años	10
----	---	----

DIRECCIONES REGIONALES DEL MICEI Y DE FINANZAS EN EL LITORAL:

0289	Cupo anual de importación de materias primas en favor de la empresa INEM	11
0291	Beneficio de nuevas inversiones en favor de ICOSU C. Ltda.	11

DIRECCION REGIONAL DEL MICEI EN EL LITORAL:

0195	Autorízase inversión nacional en la Compañía Transoceánica Cía. Ltda.	12
------	---	----

Nº 1880

EL CONSEJO SUPREMO DE GOBIERNO,

Considerando:

Que con miras a racionalizar el sistema tributario en materia del impuesto a las bebidas gaseosas, con-

sta el 30 de enero de

regados por la Dirección de empresas domiciliadas en la zona, por las Delegaciones de las donde las hubiere, y de Recaudaciones en

esta disposición será con el Código Tributario

empresas productoras de una mayor, suspendiéndose el tiempo mínimo de una municipal este particular, las dentro de las anteriores a la suscripción, al lasso deberán con la fecha de reiniciación

que aquí se dispone, con el Código Tri-

alorem de que trata el nbién de base para el to (4%) a las Transac- umente, para el cálculo la presente Ley, confor-

el campo de afectación as empresas dedicadas niento de jugos de fru- os jugos.

lacionado con la forma to, de las reclamach- tracciones e imposición lo dispuesto en el Co-

zo de noventa (90) días partir de la vigencia de finanzas expedirá el co- le Aplicación de la pr-

del impuesto a las be- l 16 de junio de 1976 y en vigencia la presente a base de lo dispuesto de junio de 1967, p- ial N° 159 de 39 de las juicio de la derogatorie materia en el artículo

as disposiciones legales pusieron a la presente siguientes: Decreto N° publicado en el Regis- de los mismos mes y 434, de 2 de junio de tro Oficial N° 199 de

Disposiciones Transitorias

PRIMERA.— Con el propósito de establecer la base tributaria para el cálculo del impuesto ad- valorem establecido en el presente Decreto, fa- cultase, por esta sola vez, al señor Ministro de Finanzas para que, mediante Acuerdo Ministerial, fije los precios ex fábrica de venta al público de las bebidas gasificadas o gaseosas tomando en cuenta los envases de hasta ocho (8) onzas líqui- das por cajas de veinte y cuatro (24) unidades; por envases entre ocho punto uno (8.1) y veinte y tres (23) onzas líquidas por cajas de veinte y cuatro (24) unidades, y por envases de veinte y tres (23) onzas líquidas o más por cajas de doce (12) unidades.

En el futuro y cuando las necesidades así lo requieran, los precios de venta de las bebidas ga- sificadas o gaseosas se fijarán con arreglo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 1774, de 13 de agosto de 1977, publicado en el Registro Oficial N° 412 de 31 de los mismos mes y año.

SEGUNDA.— Las empresas que no hubieren obtenido la respectiva patente anual de funciona- miento, deberán hacerlo en el plazo de cuarenta y cinco (45) días; y de no hacerlo serán sancio- nados de conformidad con el Código Tributario.

Art. Final.— De la ejecución del presente De- creto que regirá desde su publicación en el Regis- tro Oficial, encárgase al señor Ministro de Fi- nanzas.

Dado, en el Palacio Nacional, en Quito, a 19 de octubre de 1977.

f.) Vicealmirante Alfredo Poveda Burbano, Co- mandante General de la Fuerza Naval, Presidente del Consejo Supremo de Gobierno.— f.) General Guillermo Durán Arcentales, Comandante General de la Fuerza Terrestre, Miembro del Consejo Su- premo de Gobierno.— f.) Brigadier General Luis Leoro Franco, Comandante General de la Fuerza Aérea, Miembro del Consejo Supremo de Gobierno. f.) Econ. Santiago Sevilla Larrea, Ministro de Finanzas y Crédito Público.

Es copia.— Lo certifico.

f.) Víctor H. Garcés Pozo, Contralmirante, Secretario General de la Administración Pública.

N° 13934

EL MINISTRO DE RECURSOS NATURALES Y ENERGETICOS, ENCARGADO,

Considerando:

Que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 1° del Acuerdo Ministerial N° 13726 de 5 de

de mayo de 1977, el señor Chester Sellers Smith fue autorizado para que transfiera a favor de la Compañía, "Minera Austral S.A.", los derechos provenientes del contrato celebrado el 4 de julio de 1975, para la exploración de minerales metá- licos, sobre el área denominada "Peggy", ubicada en la parroquia Cutchil, perteneciente al cantón Sigsig, de la provincia del Azuay;

Que la Compañía "Minera Austral S.A.", ha dado cumplimiento a lo establecido en los Arts. 1° y 8° del Reglamento de Aplicación de la Ley de Fomento Minero;

Que la Dirección General de Geología y Minas ha emitido su informe favorable para la suscrip- ción del contrato de explotación en pequeña mi- nería, sobre el área denominada "Peggy", según consta de los memorándums números: 2800 DGGM- MPM. de 2 de diciembre de 1976; y 767 DM-SEM, de 28 de marzo de 1977;

Que de conformidad con el Art. 1° del Decreto Supremo N° 1448 de 20 de mayo de 1977, publicado en el Registro Oficial N° 348 de 1° de junio de 1977, no se requiere de los informes previstos en el Art. 41 de la Ley de Fomento Minero; y,

En uso de la atribución conferida en el lite- ral b) del Art. 8° de la Ley de Fomento Minero,

Acuerda:

Art. 1°— Autorizar a la Compañía "Minera Austral S.A." la explotación en pequeña minería de cobre y otros minerales metálicos de la mina denominada "Peggy", ubicada en la parroquia Cutchil, del cantón Sigsig, de la provincia del Azuay.

Art. 2°— La Dirección General de Geología y Minas elaborará el correspondiente contrato de ex- plotación en pequeña minería.

Dado en Quito, a 6 de octubre de 1977.

f.) Eduardo Semblantes Polanco, General de Brigada, Ministro de Recursos Naturales y Ener- géticos.

Es copia.— Lo certifico.

f.) Guillermo Pinto Pasquel, Coronel (Rt.), Di- rector del Departamento Administrativo.

N° 1502

EL MINISTRO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL,

Considerando:

Que mediante Acuerdo Ministerial N° 0138, de 3 de febrero del año en curso, se organizó la Comi- sión Sectorial encargada de revisar los salarios mí- nimos que deben percibir los trabajadores protegidos por el Código del Trabajo, que laboran en Embarque y Desembarque de Frutas en Buques de Alto Bordo en los Puertos del Litoral de la República.

ANEXO

5

Nacional en Quito, a 12

(L) Victor H. Garcés Pozo, Contralmirante, Secretario General de la Administración Pública.

En uso de las atribuciones de que se halla investido.

Número 636

s señalados se en-
tento establecido en el
r lo que tales precios no
ncepto del pago de este
las condiciones econó-
te y de acuerdo con los
s en la Ley de Control

o de que las empresas
tipo o marca de cerveza,
apacidad y de los envase-
nente solicitar y obtener
s, Comercio e Integración
ara dichos productos.

precios a nivel de mayoría
midor, en toda la Repú-
on las siguientes normas:
s de venta ex-fábrica se-
esto a las Transacciones
es de transporte;

ocio de venta ex-fábrica,
a las Transacciones Mar-
se reconocerá hasta un
ncepto de costos y utilida-
a; la suma del precio de
sto a las Transacciones de
fletes de transporte, el costo
determinará el precio de
s distribuidores minoristas

ción de los precios de ve-
s precios determinados se-
ral anterior, se reconocerá
s, por concepto de costos
buidores minoristas:

nfe y cinco por ciento (5%)
mercados, micromercados,
rrotes y similares.

hasta el ochenta por cien-
bares, restaurantes, hoteles
y similares, según su cate-

ase el Decreto Supremo N°
1964, publicado en el Re-
19 de los mismos mes y
mo también todas las dis-
oter general o especial, de
ción de lo dispuesto en es-

ejecución del presente De-
ncia a partir del 1° de Ju-
de su publicación en el
ense los Ministros de Fin-
rcio e Integración.

acio Nacional, en Quito,

te Alfredo Poveda Burbano,
de la Fuerza Naval, Presi-
mo de Gobierno.— f.) Ge-
no Durán Arcentales, Com-

General de la Fuerza Terrestre, Miembro del Conse-
Supremo de Gobierno.— Brigadier General Luis
ro, Franco, Comandante General de la Fuerza
Miembro del Consejo Supremo de Gobierno.
Juan Reyna Santacruz, Ministro de Finan-
Credito Público.— f.) Econ. Alberto Kury, Mi-
de Industrias, Comercio e Integración, Encar-

Es copia.— Lo certifico:

(f.) Victor H. Garcés Pozo, Contralmirante, Se-
retario General de la Administración Pública.

N° 2606-A

EL CONSEJO SUPREMO DE GOBIERNO,

Considerando:

Que la producción nacional de aceites crudos ve-
tales, requeridos para la fabricación de manteca
comestible, es insuficiente y por lo tanto debe im-
ponerse el déficit;

Que el precio internacional del aceite crudo de
palma y de coco, materias primas básicas en la fa-
bricación de manteca se ha incrementado sustan-
cialmente;

Que es necesario salvaguardar la economía po-
pular adoptando las medidas que permitan un ade-
cuado abastecimiento de los productos de primera ne-
cesidad y eviten en lo posible su incremento de
precios;

Que la grasa pura de cerdo constituye materia-
prima apta para la elaboración de manteca come-
stible y su precio actual es comparativamente me-
nor al de los aceites crudos de palma y de coco
importados;

Que en ocasiones anteriores se autorizó la im-
portación exonerada de derechos de manteca de cer-
do en bruto, por haberse presentado una situación si-
milar a la que motiva el presente Decreto; y,

En uso de las facultades de que se halla in-
dido,

Decreta:

Art. 1°— Autorízase la importación de grasa cru-
da de cerdo, en bruto, previo el visto bueno del Mi-
nisterio de Industrias, Comercio e Integración, hasta
un máximo de 33.000 toneladas en el curso del pre-
sente año.

Art. 2°— La importación a que hace referencia el
Artículo anterior estará exonerada de la totalidad
de los derechos y recargos arancelarios correspon-
dientes.

Art. 3°— Unicamente las empresas industriales
constantes en el Acuerdo N° 145 de 17 de Febrero
de 1978 expedido por el Ministro de Industrias, Co-
mercio e Integración, podrán realizar las importacio-

nes a que se refiere este Decreto y de conformidad
a lo dispuesto en el Artículo siguiente.

Art. 4°— Para la determinación de las cantida-
des máximas de importación de grasa de cerdo en
bruto, correspondiente a cada empresa, se deducirán
las cantidades de aceite de palma y/o coco que se
hubieren importado de los cupos señalados en el
Acuerdo N° 145. Los saldos así obtenidos podrán ser
utilizados opcionalmente para importaciones de grasa
de cerdo en bruto; y/o para aceites de palma o coco.

Art. 5°— Serán validas las autorizaciones que
conceda el Ministerio de Industrias, Comercio e In-
tegración en base al presente Decreto y cuyo trámi-
te se inicie en el Banco Central hasta el 31 de Di-
ciembre de 1978.

Quedan anuladas todas aquellas autorizaciones
otorgadas hasta el 31 de Diciembre de 1977 por el
Ministerio de Industrias, Comercio e Integración al
amparo del Decreto N° 1526 de 10 de Junio de 1977,
y que no hubieren sido presentados para su trámite
en el Banco Central hasta la fecha de expedición del
presente Decreto.

Art. 6°— Las autoridades de aduanas controlarán
que cada importación de grasa de cerdo en bruto,
venga acompañada de una certificación expedida por
un laboratorio reconocido del país de origen, en la
que se haga constar que dicho producto es GRASA
PURA DE CERDO EN BRUTO O CHOICE WHITE
GREASE PURE HOG.

Art. 7°— En los envases de manteca que se elab-
orará con la grasa a importarse y con aceites vege-
tales deberá hacerse constar que se trata de una
manteca compuesta comestible que contiene grasa
de cerdo y grasa de origen vegetal.

Art. 8°— De la ejecución del presente Decreto,
que entrará en vigencia desde la fecha de su expe-
dición, sin perjuicio de su publicación en el Regis-
tro Oficial, encárguense los Ministros de Industrias,
Comercio e Integración y de Finanzas.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 19 de
Junio de 1978.

f.) Vicealmirante Alfredo Poveda Burbano, Co-
mandante General de la Fuerza Naval, Presidente
del Consejo Supremo de Gobierno.— f.) General
de División Guillermo Durán Arcentales, Comandante
General de la Fuerza Terrestre, Miembro del Conse-
jo Supremo de Gobierno.— Brigadier General Luis
Leoro Franco, Comandante General de la Fuerza
Aérea, Miembro del Consejo Supremo de Gobierno.
f.) Ing. Galo Montaña Pérez, Ministro de Industrias,
Comercio e Integración.— f.) Ldo. Juan Reyna, Mi-
nistro de Finanzas.

Es copia.— Lo certifico:

f.) Victor H. Garcés Pozo, Contralmirante, Se-
cretario General de la Administración Pública.

ANEXO

6

REGISTRO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

EL ECUADOR HA SIDO, ES Y SERA PAIS AMAZONICO

ADMINISTRACION DEL CONSEJO SUPREMO
DE GOBIERNO

AÑO IV — QUITO, LUNES 2 DE ABRIL DE 1979 — NUMERO 804

Director:

VICENTE ANDA MANOSALVAS

Teléfonos: Dirección 212-564
Distribución (Almacén) 212-766
Impreso en Editora Nacional

Tiraje: 6.500 ejemplares.— Valor \$ 2,00
Edición: 12 páginas

AVISO JUDICIAL:

— Cítase a los Hñros. conocidos, presuntos o desconocidos de la sucesión de la extinta señora Amada L. Cabrera vda. de Zurita, con la demanda de expropiación de un inmueble propuesta por el L. Municipio de Tulcán 11

Suscripción anual \$ 400,00

Nº 3338

SUMARIO:

Detos.

DECRETOS:

- 3338 Condecórase a Personal de Tripulación de las Fuerzas Armadas 2
3339 Nómbrase Ministro Juez de la Corte de Justicia Militar, al CPNV, EMS (r) Abogado Angel E. Arias B. 2
3340 Condecórase al CPNV-EM, Sergio Ipyranga Dos Guaranys E. Silva, de la Armada del Brasil 2
3341 Nómbrase Asesor Militar Permanente de la Delegación del Ecuador ante la OEA, al CPNV-EM, Franklin W. Molina S. 3
3344 Condecórase al señor Karl Kayatz, diplomático alemán 3
3373 Ley del sistema impositivo al consumo selectivo de cigarrillos 3

ACUERDO:

MINISTERIO DE EDUCACION:

- 2643 Apruébase el Estatuto del "Club de Oficiales de la Policía Nacional" 21.04.04.00 5

RESOLUCION:

DIRECCION REGIONAL DEL MICEI
EN EL LITORAL:

- 0078 Autorízase inversión nacional al señor Carlos Souyrís 10

EL CONSEJO SUPREMO DE GOBIERNO,

Exerciendo de las facultades de que se halla investido, en virtud de un pedido del señor Ministro de Defensa Nacional,

Decreta:

Art. 1º.— De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo Nº 1495 expedido el 09 de Agosto de 1961, veda la reforma establecida en el Artículo 3ro. del Decreto Nº 1118, del 28 de Noviembre de 1963, Confiéraseles la condecoración "Fuerzas Armadas" de 1ra., 2da. y 3ra. Clase, al siguiente Personal de Tripulación que al 1ro de Marzo de 1979, han acreditado 25, 20 y 15 años de servicio en las Fuerzas Armadas:

PRIMERA CLASE:

09-0257820 SUBS-MC-RM Redín Becerra Ramón

SEGUNDA CLASE:

09-0037441 SUBS-EN Solórzano Falconí Mercedes

TERCERA CLASE:

09-0253025 SUBS-MU Castro Silva, Pedro
09-0080836 SGOP-EL Sarabia Pérez Luis
09-0081060 SGOS-ET Ortiz Grandes Rubén
09-0091089 SGOP-ET Sarabia Rodríguez José
09-0091069 SGOP-ET Hidalgo Matheus Nicolás
09-0038894 SGOP-SV-MY Carrión Wilson Eduardo
13-0066189 SGOP-ET Montalvo Pinto Fausto
09-0316592 SGOS-HI Arroyo Aizaga Colón

Art. 2º— De la ejecución del presente Decreto, encárgase al señor Ministro de Defensa Nacional.

Dado, en el Palacio Nacional, en Quito, a 15 de marzo de 1979.

f.) Almirante Alfredo Poveda Burbano, Comandante General de la Fuerza Naval, Presidente del Consejo Supremo de Gobierno.— f.) General de División Guillermo Durán Arcentales, Comandante General de la Fuerza Terrestre, Miembro del Consejo Supremo de Gobierno.— f.) Teniente General Luis Leoro Franco, Comandante General de la Fuerza Aérea, Miembro del Consejo Supremo de Gobierno.

El Ministro de Defensa Nacional, f.) Andrés Arrata Macías, General de Div.

Es copia.— Lo certifico:

f.) Julio Enrique Dobronski Bohórquez, Coronel E.M.S., Secretario General de la Administración Pública.

Nº 3341

EL CONSEJO SUPREMO DE GOBIERNO,

En uso de las facultades de que se halla investido; y, a pedido del señor Ministro de Defensa Nacional, previo dictamen favorable del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, constante en Oficio Nº 790277-G-1a-1., del 15 de Marzo de 1979.

Decreta:

Art. 1º— Nombrar Asesor Militar Permanente de la Delegación del Ecuador ante la Organización de los Estados Americanos, con funciones en el Colegio Interamericano de Defensa, en Washington D.C. Estados Unidos de Norteamérica, con fecha 01 de Abril del año en curso, a favor del señor 0-17-0021480-0 Capitán de Navío-EM, Molina Serrano Franklin Washington, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas en vigencia.

Art. 2º— Al citado señor Oficial Superior de la Armada, se le asigna los pasajes aéreos, como también la bonificación respectiva para los Gastos de Compensación, Representación y de Residencia Mensual, egresos económicos que serán aplicados con cargo al Presupuesto de Servicios del Ministerio de Defensa Nacional-Sección Marina.

Art. 3º— De la ejecución del presente Decreto, encárgase a los señores Ministros de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores, respectivamente.

Dado, en el Palacio Nacional, en Quito, a 16 de marzo de 1979.

f.) Almirante Alfredo Poveda Burbano, Comandante General de la Fuerza Naval, Presidente del Consejo Supremo de Gobierno.— f.) General de División, Guillermo Durán Arcentales, Comandante Ge-

neral de la Fuerza Terrestre, Miembro del Consejo Supremo de Gobierno.— f.) Teniente General Luis Leoro Franco, Comandante General de la Fuerza Aérea, Miembro del Consejo Supremo de Gobierno.

El Ministro de Defensa Nacional, f.) Andrés Arrata Macías, General de Div.— El Ministro Int. de Relaciones Exteriores, f.) Gustavo Ruales Viel,

Es copia.— Lo certifico.

f.) Julio Enrique Dobronski Bohórquez, Coronel E.M.S., Secretario General de la Administración Pública.

Nº 3344

EL CONSEJO SUPREMO DE GOBIERNO,

Considerando:

Que el señor Karl Kayatz, ha desempeñado por varios años funciones diplomáticas en la Embajada de la República Federal de Alemania, desarrollando una entusiasta labor tendiente al robustecimiento de las cordiales relaciones entre los dos países;

Decreta:

Art. 1º— Confiérase la Condecoración de la Orden Nacional "Al Mérito", en el Grado de Caballero, al Señor Karl Kayatz.

Art. 2º— Encárguese de la ejecución del presente Decreto el Señor Ministro de Relaciones Exteriores.

Dado, en el Palacio Nacional, en Quito, a 19 de marzo de 1979.

f.) Almirante Alfredo Poveda Burbano, Comandante General de la Fuerza Naval, Presidente del Consejo Supremo de Gobierno.— f.) General de División Guillermo Durán Arcentales, Comandante General de la Fuerza Terrestre, Miembro del Consejo Supremo de Gobierno.— f.) Teniente General Luis Leoro Franco, Comandante General de la Fuerza Aérea, Miembro del Consejo Supremo de Gobierno.—

f.) Embajador José Ayala Lasso, Ministro de Relaciones Exteriores.

Es copia.— Lo certifico.

f.) Julio Enrique Dobronski Bohórquez, Coronel E.M.S., Secretario General de la Administración Pública.

Nº 3373

EL CONSEJO SUPREMO DE GOBIERNO,

Considerando:

Que es constante preocupación del Gobierno Nacional continuar con el proceso de reforma tributaria, con el propósito de que el sistema impositivo ecuatoriano se modernice y simplifique, para que

cumpla con su objetivo en beneficio de la comunidad;

Que en concordancia con lo anterior, es necesario revisar el régimen tributario vigente a la producción y venta de cigarrillos producidos en el país, a fin de que este responda en mayor medida a la realidad cambiante que presentan las empresas tabacaleras;

Que según lo determinan la Ley de Control de Precios y Calidad, expedida mediante Decreto Supremo N° 1774 de 25 de agosto de 1977, publicado en el Registro Oficial N° 412 de 31 de los mismos mes y año, dicha revisión se fundamenta en los estudios técnicos de costos y de mercado, realizados por los Organismos Oficiales Competentes;

Que el Frente Económico del Gobierno Nacional, según lo dispone la antes citada Ley de Control de Precios y Calidad, ha emitido su pronunciamiento favorable sobre el particular en sesión celebrada el 13 de marzo del año en curso; y,

En uso de las atribuciones de que se halla investido.

Decreta:

LA SIGUIENTE LEY DEL SISTEMA IMPOSITIVO AL CONSUMO SELECTIVO DE CIGARRILLOS:

CLASES DE CIGARRILLOS

Artículo 1°— SISTEMA IMPOSITIVO Y BASE IMPONIBLE

Créase el sistema impositivo al consumo selectivo de cigarrillos, consistente en una escala de tarifas ad-valorem sobre el precio ex-fábrica de las diferentes clases de cigarrillos que se producen y venden en el país, y que sustituye al establecido mediante Decreto Supremo N° 2181 de 20 de enero de 1978, publicado en el Registro Oficial N° 538 de 3 de marzo del mismo año.

Para efectos de la aplicación del presente Decreto, se entenderá como precio ex-fábrica, al valor de los costos totales de la empresa productora más sus correspondientes utilidades.

Artículo 2°— SUJETOS DEL IMPUESTO

Son sujetos pasivos del impuesto, el consumidor de cigarrillos en su calidad de contribuyente y el fabricante de cigarrillos por su condición de Agente de Percepción del mismo.

El impuesto selectivo al consumo de cigarrillos no incluye el de Transacciones Mercantiles y Servicios, que seguirá cobrándose de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Artículo 3°— SISTEMA DE PRECIOS Y TARIFAS IMPOSITIVAS

El siguiente será el sistema de precios e impuestos para las distintas clases de cigarrillos:

Precio Ex-Fábrica	Impuesto por Cajetilla de 20 Unidades	Precio de Venta al Público
	Al Consumo Selectivo	Transacciones Mercantiles
% Precio Ex-Fáb.	% Precio	% Precio
		Venta al Público

A. ELABORADO CON TABACO RUBIO

1. Hebra con o sin filtro de marca extranjera, producido bajo licencia.	5.95	72	5	12.00
2. Hebra con filtro marca nacional, empaque especial	4.20	55	5	8.00
3. Hebra con filtro marca nacional, en empaque convencional	4.00	45	5	7.00
4. Hebra sin filtro marca nacional en empaque convencional	3.85	40	5	6.50

B. ELABORADO CON TABACO NEGRO

1. Hebra con filtro	3.00	20	5	4.50
2. Hebra sin filtro	2.70	8	5	3.50
3. Hebra fronterizo	2.40		5	2.70
4. Picadura de pipa			5	
5. Cigarrros			5	

Artículo 4°— FORMA DE COBRO DEL IMPUESTO

Las empresas productoras, como Agentes de Percepción del impuesto al consumo selectivo de cigarrillos deberán recaudarlo sobre la producción

que salga de las fábricas, tanto para la venta como para la entrega a bodegas o almacenes de distribución del producto. No se aceptarán deducciones por causas de devolución de la producción, pérdidas o por cualquier otra razón que no haya sido debidamente comprobada y catalogada de fuerza ma-

por la autoridad fiscal. Estarán exentas del impuesto establecido en este decreto, exclusivamente las cajetillas de cigarrillos que, en virtud de los contratos colectivos de trabajo, las empresas están obligadas a entregar en donación a sus trabajadores.

Artículo 5º— FORMA DE PAGO DEL IMPUESTO

El pago del impuesto establecido en el presente Decreto, se efectuará quincenalmente, en las respectivas Jefaturas Provinciales de Recaudaciones dentro de los treinta días siguientes a la quincena, sobre la cual se haga la declaración, la misma que se presentará en los formularios que, para tal efecto, proporcionará la Dirección General de Rentas.

Los representantes y administradores de las empresas productoras de cigarrillos, en conformidad con lo dispuesto en el Código Tributario, serán solidariamente responsables de la liquidación y pago de los impuestos establecidos con el presente Decreto.

Artículo 6º— DESTINO DEL IMPUESTO

El rendimiento del impuesto selectivo al consumo de cigarrillos proveniente de la aplicación de las tarifas impositivas establecidas en el artículo 1º de este Decreto, se acreditará en la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional, y estará destinado en el 60 por ciento al Presupuesto de Gobierno Nacional para el financiamiento de proyectos prioritarios de desarrollo, entre los que estarán incluidos los relacionados con las actividades turística y deportiva del País; y, en el 40 por ciento restante al Fondo Nacional de Participaciones.

Artículo 7º— Derógase el Decreto Supremo Nº 2181, de 20 de enero de 1978, publicado en el Registro Oficial Nº 538 de 3 de marzo del mismo año; así como todas las disposiciones de carácter general o especial que se opongan al presente Decreto.

Artículo 8º— De la ejecución del presente Decreto, que entrará en vigencia a partir de esta fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguense los señores Ministros de Finanzas y Crédito Público y de Industrias, Comercio e Integración.

Dado, en el Palacio Nacional de Gobierno, en Quito, a 20 de Marzo de 1979.

f.) Almirante Alfredo Poveda Burbano, Comandante General de la Fuerza Naval, Presidente del Consejo Supremo de Gobierno.— f.) General de División, Guillermo Durán Arcentalles, Comandante General de la Fuerza Terrestre, Miembro del Consejo

Supremo de Gobierno.— f.) Teniente General Luis Leoro Franco, Comandante General de la Fuerza Aérea, Miembro del Consejo Supremo de Gobierno.

f.) Ldo. Juan Reyna Santacruz, Ministro de Finanzas y Crédito Público.

f.) Ing. Gato Montaña Pérez, Ministro de Industrias, Comercio e Integración.

Es copia.— Lo certifico.

f.) Julio Enrique Dobronski Bobórquez, Coronel E.M.S., Secretario General de la Administración Pública.

Nº 2643

EL MINISTRO DE EDUCACION Y CULTURA

Visto el Estatuto del "Club de Oficiales de la Policía Nacional", con sede en la ciudad de Quito, y siendo favorable el dictamen de Asesoría Jurídica de esta misma Secretaría de Estado según consta en el Memorándum Nº 242-AJ de 20 de Marzo de 1979;

En uso de sus atribuciones:

Acuerda:

Aprobar el presente Estatuto del "Club de Oficiales de la Policía Nacional", por no contrariar a ninguna disposición legal alguna, sin ninguna observación.

Comuníquese.— En Quito, a 20 de Marzo de 1979.

Por el Consejo Supremo de Gobierno., f.) Dr. Eduardo Granja Garcés; Subsecretario de Educación y Cultura.

ESTATUTOS DEL CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL

CAPITULO I

De su Constitución y Domicilio

Art. 1º— Constitúyese el Club de Oficiales de la Policía Nacional, como una organización de carácter social, deportiva y cultural, de conformidad a los presentes estatutos, los que regularán su vida Institucional.

Art. 2º— Su denominación es: "CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL", y su duración indefinida.

Art. 3º— El Club de Oficiales de la Policía Nacional, tiene su domicilio jurídico en la ciudad de Quito, pudiendo realizar las actividades propias de su naturaleza, en diferentes lugares de la República.

ANEXO

7

REGISTRO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

EL ECUADOR HA SIDO, ES Y SERA PAIS AMAZONICO

Administración del Sr. Ing. León Febres Cordero Ribadeneyra,
Presidente Constitucional de la República

AÑO II — QUITO, JUEVES 22 DE AGOSTO DE 1985 — NUMERO 255

DIRECTOR

VICENTE ANDA MANOSALVAS

Teléfonos:

Dirección: 212-564
Distribución (Almacén) 212-766

IMPRESO EN EDITORA NACIONAL

Tiraje: 12.000 ejemplares.— Valor \$ 10,00
Edición: 52 páginas

Descripción anual

SUMARIO:

Págs.

FUNCION EJECUTIVA

DECRETOS LEYES:

06 Ley de Minería	1
07 Ley Reformatoria de la Ley de Desarrollo de Vivienda de Interés Social	18
08 Ley de Compañías Financieras	21
09 Ley Reformatoria de la Ley sobre Cambios Internacionales	26
10 Reformas a la Ley Orgánica de Aduanas ..	29
11 Reformas a la Ley General de Bancos	31
12 Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Mo- netario	42

ACUERDO:

MINISTERIOS DE INDUSTRIAS Y
DE FINANZAS:

282 Concédese a la Empresa "AQUALAB S.A.", beneficios de la Ley de Pesca	51
---	----

RESOLUCIONES:

MINISTERIO DE FINANZAS:

42 Expídese el Manual del Terminalista INGR- 685 encaminado a conducir a los usuarios en el manejo de equipos de entrada de datos co- mo soporte del Sistema "Contabilidad e In- gresos" de la Tesorería General de la Na- ción	52
--	----

DIRECCION NACIONAL DE PERSONAL:

DNP-CIAS-0433 Valorar las clases de puestos de funcionarios de alta jerarquía de la Admi- nistración Pública	52
--	----

Nº 85-1361-DAJ

Quito, a 1º de agosto de 1985

Señor Ingeniero:

RAUL BACA CARBO
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO NACIONAL
En su despacho

Señor Presidente:

En uso de la facultad que me confiere el Art. 65 de la Constitución Política tengo a bien poner a su consideración y por su digno intermedio al H. Congreso Nacional el proyecto de Ley de Minería, con su respectiva exposición de motivos.

Como se trata de un proyecto de Ley en materia económica, cuya inmediata expedición reclama la delicada situación del sector minero ecuatoriano, lo califico como Urgente, por lo que en su tramitación se observará el procedimiento previsto en el inciso cuarto del citado Art. 65 de la Constitución.

Se tomará en cuenta, además, lo dispuesto en el inciso tercero del mismo artículo.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted el testimonio de mi consideración más distinguida.

Muy atentamente.

f.) León Febres-Cordero Ribadeneira, Presidente Constitucional de la República.

Es fiel copia.— Lo certifico.

f.) Ab. Joffre Torbay Dassum, Secretario General de la Administración Pública.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley de Fomento Minero en actual vigencia, dictada con Decreto Nº 101, de 24 de enero de 1974, publicado en el Registro Oficial Nº 484 de 31 de enero del mismo año, a pesar de la buena intención con que fue concebida ha demostrado a lo largo de sus 11 años de vigencia que no ha favorecido a un desarrollo económico del sector, ni propiciado el correcto aprovechamiento de los recursos mineros y ha impedido la adecuada incorporación de sus importantes rubros en el sistema productivo nacional.

El hecho de no contar con un marco legal flexible y dinámico para el fomento de la minería en el Ecuador, hace imperiosa la necesidad de adoptar una nueva legislación minera que a más de racionalizar el tratamiento conceptual de la materia, dinamice el sector minero, otorgue un tratamiento consecuente con la realidad ecuatoriana y que, sin desconocer el derecho exclusivo del Estado sobre sus recursos naturales, favorezca la iniciativa privada a través de procedimientos de contratación ágiles, que a la vez de salvaguardar los intereses nacionales, proporcionen seguridad y confianza a la iniciativa privada.

Si la Constitución considera como un sector básico de la economía nacional a la actividad minera, debe realmente constituirse en tal, para lo cual se requiere, entre otros aspectos, una infraestructura legal y normativa que garantice eficazmente este propósito, atendiendo realisticallyamente nuestros factores naturales, sociales y económicos, regularizando idóneamente las relaciones y actividades que rigen el sector y amparando, en definitiva, el derecho de todos los ecuatorianos de gozar de un correcto aprovechamiento de sus recursos.

En este sentido, la Ley propuesta contiene un marco teórico conceptual que define apropiadamente las varias particularidades de la naturaleza y gestión minera, a la vez que introduce mecanismos legales que tienden a garantizar el uso racional de los recursos mineros de la Nación, propiciando la aplicación de principios y normas conforme al avance tecnológico y científico de la ingeniería y promoviendo la ejecución de prácticas apropiadas para las distintas fases de la actividad minera, conforme a las diversas clases de yacimientos.

Se han previsto, así mismo, formas contractuales expeditas que teniendo presente que se trata de áreas de explotación reservadas al Estado que sólo de modo excepcional puede cederse a la iniciativa privada, estimulan la intervención de particulares con estipulaciones que promueven entendimientos armónicos y recíprocos entre las partes.

Razgo importante es la creación del INEMIN, como organismo autónomo, directamente encargado de la ejecución de la política minera, que sin representar incremento presupuestario ni burocrático alguno pues cuantía con recursos propios y sustituye a la actual Dirección General de Geología y Minas, significa si un Instituto especializado que dada la independencia administrativa e iniciativa propia con que contará, dinamizará eficazmente el crecimiento del sector.

Innovación valiosa constituye la adopción de un procedimiento breve y oportuno para la solución de conflictos derivados de la aplicación de la presente Ley, simplificándose su sustanciación y estableciéndose el sistema oral, conforme al Art. 93 de la Constitución Política.

Concebida de este modo, la presente Ley junto con el Reglamento que se dicte para su correcta aplicación, gracias a las definiciones, principios, actividades, organismos y demás particularidades que introduce en su texto, aspira a favorecer decididamente la óptima utilización de nuestros recursos y al armónico desarrollo de la actividad minera para beneficio de todos los ecuatorianos.

Es fiel copia del original.— Lo certifico.

f.) Ab. Joffre Torbay Dassum, Secretario General de la Administración Pública.

EL CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que es necesario racionalizar y mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales, especialmente de las reservas no renovables que constituyen bienes de dominio imprescriptible e inalienable del Estado; Que corresponde al Estado, como área de su explotación exclusiva, el promover la actividad minera mediante procedimientos y facilidades que garanticen su adecuada producción de manera que contribuya eficazmente al crecimiento socio económico nacional;

Que es indispensable ajustar las necesidades del sector minero con los avances tecnológicos, la realidad económica actual y los requerimientos de la sociedad ecuatoriana, y

En uso de la facultad que le concede el Art. 65 de la Constitución Política.

EXPIDE:

LA SIGUIENTE LEY DE MINERIA:

CAPITULO I

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Art. 1.— DE LOS YACIMIENTOS.— Los yacimientos existentes en el territorio nacional, como recursos naturales no renovables, son de dominio inalienable e imprescriptible del Estado.

Para efectos de la presente Ley, se considera yacimiento a toda concentración natural de elementos y compuestos químicos de minerales en la corteza terrestre.

Exceptuándose del ámbito de aplicación de esta Ley los yacimientos de hidrocarburos y de minerales radioactivos y las aguas minerales.

Los asfaltos serán considerados como minerales no metálicos.

Art. 2.— EXPLOTACION ECONOMICA EXCLUSIVA.— Las fases de la actividad minera a las que se remite la presente Ley, constituyen una área de explotación económica reservada al Estado, el mismo que la ejercerá en forma directa o bien celebrando contratos y otorgando permisos a personas naturales o jurídicas sean nacionales o extranjeras.

Art. 3.— AMBITO DE LA LEY.— Las actividades mineras se sujetarán a las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos.

Art. 4.— DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA.— Declárase de utilidad pública los bienes, derechos y actividades mineros. En consecuencia, procede la expropiación de predios, edificaciones, instalaciones u otros bienes y la imposición de servidumbres generales o especiales que fueren necesarios de conformidad con la Ley.

Art. 5.— ZONAS DE RESERVA MINERA.— El Presidente de la República podrá declarar como zona de reserva minera a aquellas áreas de interés nacional que, por su ubicación o trascendencia económica, sean consideradas de carácter estratégico, respetando derechos legalmente preconstituidos.

CAPITULO II

DE LA FORMULACION Y EJECUCION DE LA POLITICA MINERA

Art. 6.— DIRECCION DE LA POLITICA MINERA.— El Presidente de la República dirige y determina la política minera nacional y su ejecución corresponde al Ministerio, organismos y autoridades que él determine o que se establezcan en el Estatuto Jurídico Administrativo previsto en el Art. 78, literal e), de la Constitución.

Art. 7.— EJECUCION DE LA POLITICA MINERA.— Al Ministro determinado en el Art. 6 le corresponde ejecutar la política minera del país y como tal tiene las siguientes atribuciones:

- Someter a consideración del Presidente de la República los planes y proyectos de la actividad geológica minera nacional;
- Controlar y fiscalizar la actividad minera;
- Presidir por sí o por su delegado, el Directorio del INEMIN, y d) Las demás que le confiere la Ley y sus Reglamentos.

CAPITULO III

DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE MINERIA

Art. 8.— NATURALEZA DEL INEMIN.— Créase adscrito al Ministerio determinado en el Art. 6 de esta Ley, como organismo técnico-administrativo especializado, directamente encargado de la ejecución de la política minera, el Instituto Ecuatoriano de Minería (INEMIN).

El INEMIN será una entidad de derecho público, con autonomía administrativa, regulado por el literal a) del Art. 125 de la Constitución Política, cuyos funcionarios y empleados estarán sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

Art. 9.— FACULTADES DEL INEMIN.— Corresponde al Instituto Ecuatoriano de Minería, INEMIN:

- Planificar el aprovechamiento de los recursos minerales del país;
- Realizar el levantamiento y la investigación geológicos del territorio nacional por sí mismo o a través de convenios o contratos de obras o servicios específicos;
- Atender al desarrollo de los recursos minerales a través de permisos o contratos y constituyendo compañías mineras de economía mixta con personas naturales o jurídicas legalmente establecidas en el país;
- Propender a la satisfacción de la demanda interna en materias primas de origen mineral;
- Prestar asistencia técnica a la actividad minera de conformidad con los reglamentos que contendrán disposiciones especiales en beneficio de la minería;
- Estimular la colaboración directa y eficaz entre el sector público, los organismos seccionales, las instituciones de educación superior y la empresa privada para efectos de desarrollar la actividad minera.

Las demás contempladas en esta Ley y más disposiciones legales.

Art. 10.— ESTRUCTURA DEL INEMIN.— La Dirección y administración del Instituto estarán a cargo del Directorio, la Gerencia General, las Gerencias de área y las Dependencias Técnicas y Administrativas determinadas en el Reglamento Orgánico Funcional aprobado por el Directorio del Instituto.

Art. 11.— DIRECTORIO DEL INEMIN.— El Directorio es el organismo máximo del INEMIN y estará integrado por seis miembros:

- El Ministro determinado en el Art. 6 o su delegado, quien lo presidirá;
- Dos Directores designados por el Presidente de la República;
- Un Oficial General nombrado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas;
- Un delegado del Consejo Nacional de Desarrollo, y
- Un delegado de las Cámaras de Minería del Ecuador, designado de conformidad con el Reglamento.

El quórum será de cuatro miembros. Las resoluciones se tomarán con la aprobación de la mayoría de votos y, en caso de empate, el Presidente tendrá, además, voto dirimente.

El Gerente General, que será el representante legal del INEMIN, participará en las reuniones del Directorio con voz pero sin voto.

Art. 12.— CARACTERISTICA Y PRESUPUESTO DEL INEMIN.— Las gestiones científica, técnica y de investigación del INEMIN se regirán por las modalidades técnicas de organización, operación y adminis-

tración de la actividad minera, de conformidad con el Reglamento respectivo, expedido por el Presidente de la República.

El presupuesto del INEMIN una vez aprobado por el Directorio será autorizado por el Ministerio de Estado a cuyo cargo se encuentre la administración presupuestaria.

Art. 13.— PATRIMONIO DEL INEMIN.— Constituyen bienes y recursos del INEMIN:

a. Los fondos asignados en el Presupuesto General del Estado;

b. Los bienes raíces, instalaciones, maquinarias y otros bienes que estuvieren a cargo del Ministerio determinado en el Art. 6, relacionados directa o indirectamente con la actividad geológica y minera, a la fecha de expedición de la presente Ley;

c. Los ingresos que obtenga de su actividad y los beneficios que resulten de su participación contractual;

d. Los bienes y derechos que adquiera a cualquier título.

Art. 14.— CONTRATOS DEL INEMIN.— Las obras, los servicios, la adquisición de equipos y más bienes, que el Instituto tenga que contratar para el cumplimiento de sus actividades, así como la compra-venta de minerales en el mercado interno o exterior, se normarán por los reglamentos respectivos.

CAPITULO IV

DE LA CLASIFICACION Y DE LAS FASES DE LA ACTIVIDAD MINERA.

Art. 15.— CLASES DE YACIMIENTOS.— Para efectos de esta Ley, los yacimientos se dividen en metálicos, no metálicos, placeres, materiales de construcción, ornamentales y fondos marinos.

Art. 16.— FASES DE LA ACTIVIDAD MINERA.— Constituyen fases de la actividad minera la prospección, la exploración, la explotación, el beneficio o concentración, la fundición, la refinación y la comercialización.

Art. 17.— DE LA PROSPECCION MINERA.— La prospección minera es libre y no se requiere de ninguna autorización para su realización. Sin embargo, cualquier persona puede solicitar un permiso de prospección que le será otorgado por el correspondiente acto administrativo, o pedir que se celebre un contrato de prospección.

Quien descubriera un yacimiento en un área en la cual existan derechos legalmente preestablecidos, no adquirirá derecho alguno, salvo que llegue a un acuerdo o convenio con el titular de los derechos.

Si no se descubrieren indicios de mineralización el contrato o permiso, previa solicitud del interesado calificada por el INEMIN, puede quedar sin efecto antes del vencimiento del plazo, el mismo que será de hasta dos años, pudiendo ser prorrogado por un año adicional con una reducción del 50% del área.

Los permisos podrán otorgarse hasta por superficies de 10.000 hectáreas y los contratos se celebrarán por cualquier extensión hasta por superficies de 50.000 hectáreas.

Art. 18.— DE LA EXPLORACION MINERA.— La exploración comprende un conjunto de trabajos geológico-mineros para determinar reservas y valores de los minerales.

El contrato o permiso que faculta la exploración será suscrito con el INEMIN y tendrá una duración de hasta tres años prorrogables por igual término. El área objeto del contrato de exploración tendrá la superficie máxima de 10.000 hectáreas y del permiso de 2.000 hectáreas, pudiendo ser constituidas por uno o varios cuerpos comprendidos dentro del área acordada para la prospección.

El contrato o permiso de exploración garantizará a su titular el derecho a suscribir un contrato de explotación, si así conviniere a sus intereses.

Art. 19.— DE LA EXPLOTACION MINERA.— La explotación abarca el conjunto de trabajos destinados a la preparación y desarrollo de las minas y a la extracción y transporte de los minerales hasta la cancha mina o planta de beneficio.

Las áreas destinadas a la explotación podrán formar uno o más cuerpos, deberán estar comprendidas dentro del área de exploración y tendrán las siguientes superficies máximas: para minerales metálicos y placeres hasta 5.000 hectáreas y para minerales no metálicos hasta 2.000 hectáreas.

El INEMIN podrá otorgar directamente contratos de explotación sin necesidad de exigir el cumplimiento de la etapa de exploración, cuando las condiciones lo justifiquen, previa la aprobación del correspondiente proyecto de explotación.

Art. 20.— DEL BENEFICIO DE MINERALES.—

La fase de beneficio comprende las operaciones destinadas a elevar la ley o el contenido útil de las sustancias minerales a través de procesos físicos o químicos.

El INEMIN podrá instalar plantas de beneficio regionales para procesar minerales provenientes de diferentes minas cuando la producción de éstas, separadamente, no justifique la instalación de su propia planta. Estas plantas podrán ser instaladas también por las personas naturales o jurídicas que exploten o no las minas, pero que se constituyan para este efecto y que suscriban el contrato correspondiente con el INEMIN.

Art. 21.— DE LA FUNDICION.— La fase de fundición comprende los procesos técnicos destinados a separar los metales de sus correspondientes minerales, a fin de que alcancen un grado avanzado de pureza.

Las empresas de producción mineral están autorizadas para, a voluntad, fundir en sus plantas su producción de metales y las producciones de otras minas legalmente explotadas.

Art. 22.— DE LA REFINACION.— La refinación abarca los procesos destinados a dar a los metales un grado de pureza que permita su industrialización directa.

Las empresas de producción mineral podrán, a voluntad, refinar en sus plantas su producción de metales y las producciones de otras minas legalmente explotadas.

tración de la actividad minera, de conformidad con el Reglamento respectivo, expedido por el Presidente de la República.

El presupuesto del INEMIN una vez aprobado por el Directorio será autorizado por el Ministerio de Estado a cuyo cargo se encuentre la administración presupuestaria.

Art. 13.— PATRIMONIO DEL INEMIN.— Constituyen bienes y recursos del INEMIN:

a. Los fondos asignados en el Presupuesto General del Estado;

b. Los bienes raíces, instalaciones, maquinarias y otros bienes que estuvieren a cargo del Ministerio determinado en el Art. 6, relacionados directa o indirectamente con la actividad geológica y minera, a la fecha de expedición de la presente Ley;

c. Los ingresos que obtenga de su actividad y los beneficios que resulten de su participación contractual;

d. Los bienes y derechos que adquiera a cualquier título.

Art. 14.— CONTRATOS DEL INEMIN.— Las obras, los servicios, la adquisición de equipos y más bienes, que el Instituto tenga que contratar para el cumplimiento de sus actividades, así como la compra-venta de minerales en el mercado interno o exterior, se normarán por los reglamentos respectivos.

CAPITULO IV

DE LA CLASIFICACION Y DE LAS FASES DE LA ACTIVIDAD MINERA.

Art. 15.— CLASES DE YACIMIENTOS.— Para efectos de esta Ley, los yacimientos se dividen en: metálicos, no metálicos, placeres, materiales de construcción, ornamentales y fondos marinos.

Art. 16.— FASES DE LA ACTIVIDAD MINERA.— Constituyen fases de la actividad minera la prospección, la exploración, la explotación, el beneficio o concentración, la fundición, la refinación y la comercialización.

Art. 17.— DE LA PROSPECCION MINERA.— La prospección minera es libre y no se requiere de ninguna autorización para su realización. Sin embargo, cualquier persona puede solicitar un permiso de prospección que le será otorgado por el correspondiente acto administrativo, o pedir que se celebre un contrato de prospección.

Quien descubriera un yacimiento en un área en la cual existan derechos legalmente preestablecidos, no adquirirá derecho alguno, salvo que llegue a un acuerdo o convenio con el titular de los derechos.

Si no se descubrieren indicios de mineralización el contrato o permiso, previa solicitud del interesado calificada por el INEMIN, puede quedar sin efecto antes del vencimiento del plazo, el mismo que será de hasta dos años, pudiendo ser prorrogado por un año adicional con una reducción del 50% del área.

Los permisos podrán otorgarse hasta por superficies de 10.000 hectáreas y los contratos se celebrarán por cualquier extensión hasta por superficies de 50.000 hectáreas.

Art. 18.— DE LA EXPLORACION MINERA.— La exploración comprende un conjunto de trabajos geológico-mineros para determinar reservas y valores de los minerales.

El contrato o permiso que faculta la exploración será suscrito con el INEMIN y tendrá una duración de hasta tres años prorrogables por igual término. El área objeto del contrato de exploración tendrá la superficie máxima de 10.000 hectáreas y del permiso de 2.000 hectáreas, pudiendo ser constituidas por uno o varios cuerpos comprendidos dentro del área acordada para la prospección.

El contrato o permiso de exploración garantizará a su titular el derecho a suscribir un contrato de explotación, si así conviniere a sus intereses.

Art. 19.— DE LA EXPLOTACION MINERA.— La explotación abarca el conjunto de trabajos destinados a la preparación y desarrollo de las minas y a la extracción y transporte de los minerales hasta la cancha mina o planta de beneficio.

Las áreas destinadas a la explotación podrán formar uno o más cuerpos, deberán estar comprendidas dentro del área de exploración y tendrán las siguientes superficies máximas: para minerales metálicos y placeres hasta 5.000 hectáreas y para minerales no metálicos hasta 2.000 hectáreas.

El INEMIN podrá otorgar directamente contratos de explotación sin necesidad de exigir el cumplimiento de la etapa de exploración, cuando las condiciones lo justifiquen y previa la aprobación del correspondiente proyecto de explotación.

Art. 20.— DEL BENEFICIO DE MINERALES.—

La fase de beneficio comprende las operaciones destinadas a elevar la ley o el contenido útil de las sustancias minerales a través de procesos físicos o químicos.

El INEMIN podrá instalar plantas de beneficio regionales para procesar minerales provenientes de diferentes minas cuando la producción de éstas, separadamente, no justifique la instalación de su propia planta. Estas plantas podrán ser instaladas también por las personas naturales o jurídicas que exploten o no las minas, pero que se constituyan para este efecto y que suscriban el contrato correspondiente con el INEMIN.

Art. 21.— DE LA FUNDICION.— La fase de fundición comprende los procesos técnicos destinados a separar los metales de sus correspondientes minerales, a fin de que alcancen un grado avanzado de pureza.

Las empresas de producción mineral están autorizadas para, a voluntad, fundir en sus plantas su producción de metales y las producciones de otras minas legalmente explotadas.

Art. 22.— DE LA REFINACION.— La refinación abarca los procesos destinados a dar a los metales un grado de pureza que permita su industrialización directa.

Las empresas de producción mineral podrán, a voluntad, refinar en sus plantas su producción de metales y las producciones de otras minas legalmente explotadas.

Art. 23.— **DE LA COMERCIALIZACION.**— La comercialización comprende la negociación y venta de los minerales o metales a partir de la explotación. También se podrá comercializar, previa autorización del INEMIN, los minerales que se extraigan en el proceso de la construcción de piques y galerías y de calicatas durante la fase de la exploración.

La comercialización será ejecutada por:

- a) El INEMIN de los productos minerales o metales que produzca;
- b) Las personas naturales o jurídicas titulares de los contratos de explotación; y,
- c) Las personas naturales o jurídicas comercializadoras de minerales, debidamente aprobadas.

Art. 24.— **DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION.**— Se entenderá como materiales de construcción aquellos yacimientos minerales que sirvan para la industria de la construcción de conformidad con la Ley.

Prohíbese la explotación de los materiales de construcción que se encuentren dentro del derecho de vía, de las carreteras y caminos públicos, así como en sectores urbanos y en sectores cercanos a edificios, edificaciones y viviendas.

La explotación de los materiales de construcción dentro del lecho o cauce de los ríos requerirá el informe previo del Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos.

Art. 25.— **FACULTAD DE LOS MUNICIPIOS.**— Los permisos de explotación de los materiales de construcción serán concedidos por los Municipios, por un plazo de hasta cinco años, renovables, previo informe favorable del INEMIN.

Art. 26.— **SUSPENSIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.**— El Directorio del INEMIN podrá suspender en forma temporal o definitiva la explotación de materiales de construcción que se haga sin sujeción a las normas establecidas en los reglamentos de esta Ley.

Art. 27.— **UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION.**— Las entidades de derecho público y de derecho privado con finalidad social o pública, podrán explotar los materiales de construcción necesarios para el mejoramiento, rectificación, mantenimiento o construcción de las vías y otras obras públicas a su cargo, así como para los programas de vivienda de interés social, ejecutadas directamente por las Junta Nacional de la Vivienda, previa autorización del Organismo Seccional correspondiente.

Cuando los materiales de construcción estuvieren ubicados en terrenos de propiedad particular se pagará la indemnización por el daño que se causare y no por el valor de los materiales, sin perjuicio del derecho de expropiarlos si conviniere al interés público.

Art. 28.— **EXCLUSIÓN DE BENEFICIOS.**— El titular del permiso de explotación de materiales de construcción, no gozará de los beneficios concedidos en el Capítulo VII.

Art. 29.— **ZONAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO.**— El Estado, a través del INEMIN, podrá declarar zonas de libre aprovechamiento, a los yacimientos o placeres, ubicados en sitios donde no hubieren derechos mineros específicos previos, para lavadores y mineros independientes, a solicitud de personas naturales que carecen de organización empresarial.

CAPITULO V

DE LOS PERMISOS Y DE LAS FORMAS CONTRACTUALES

Art. 30.— **DE LOS PERMISOS O CONTRATOS DE PROSPECCION Y EXPLORACION.**— El titular de un contrato o permiso de prospección y exploración tendrán el derecho exclusivo de pasar a la fase siguiente de la actividad minera siempre y cuando haya cumplido a satisfacción del INEMIN las obligaciones contraídas y las estipulaciones de la presente Ley y sus Reglamentos.

Art. 31.— **DEL CONTRATO DE CONCESION MINERA.**— Contratos de concesión minera, son aquellos que celebra el Estado, a través del INEMIN, con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para realizar las fases de explotación, beneficio de minerales, fundición y refinación, todas en conjunto o por separado.

Art. 32.— **DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.**— Contratos de prestación de servicios son aquellos en los cuales las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, se comprometen a efectuar por cuenta o encargo de INEMIN, obras o servicios de cualesquiera de las fases de la actividad minera, aportando tecnología, capitales, equipos o maquinarias necesarios para el desarrollo de los trabajos mineros, invirtiendo los capitales y utilizando los conocimientos y la tecnología necesarios para el cumplimiento de los servicios contratados.

Art. 33.— **CONSTITUCION DE COMPANIAS DE ECONOMIA MIXTA.**— El INEMIN, podrá celebrar contratos mineros de prestación de servicios mineros o constituir compañías de economía mixta con personas naturales o jurídicas respecto a las áreas declaradas zonas de reserva minera, por ellas exploradas o devueltas, para la explotación y para las demás fases consiguientes de aprovechamiento económico de los minerales o metales que se obtengan de dichas áreas.

La adjudicación de los contratos a los que se refiere el inciso anterior se realizará mediante un sistema especial de licitación cuya forma, requisitos y procedimientos serán determinados exclusivamente en el Reglamento que para este fin expida el Presidente de la República.

Art. 34.— **DEL CONTRATO DE OBRA O SERVICIOS ESPECIFICOS.**— Contratos de Obras o Servicios Específicos, son aquellos en los que personas naturales o jurídicas, legalmente establecidas en el país, se comprometen a efectuar para INEMIN obras, trabajos o servicios específicos a cambio de una remuneración de dinero, cuya cuantía y forma de pago serán convenidos entre las partes conforme a la Ley.

Art. 35.— **REQUISITOS DE LOS CONTRATOS.**— En los contratos de concesión y de prestación de servicios que serán suscritos por el Gerente General del INEMIN, con la autorización previa del Directorio, se estipulará, cuando menos sobre lo siguiente:

- a) Plazo de duración que será de hasta treinta años prorrogables de acuerdo a los intereses nacionales y a las características de los yacimientos;

- b) Programas mínimos de trabajo y de inversión;
- c) La garantía que debe rendir el contratista para el cumplimiento de sus obligaciones, la misma que no podrá ser inferior al 2% de las inversiones del programa mínimo anual, y que se mantendrá vigente hasta por un máximo de 5 años. La garantía puede ser rendida en cualquiera de las formas establecidas en la Ley de Licitaciones.
- d) La obligación de capacitar y emplear al mayor número posible de personal ecuatoriano;
- e) La presentación obligatoria de informes periódicos por lo menos una vez al año de las actividades ejecutadas, el plan operativo del año siguiente y el estado de las reservas y producción, y
- f) El pago de los tributos establecidos en esta Ley.

Art. 36.— SUSCRIPCION DE LOS CONTRATOS.— Los contratos deberán suscribirse dentro de un plazo que no excederá de ciento ochenta días, contados a partir de la aprobación del informe técnico y final de resultados de la exploración y del proyecto de explotación por parte del INEMIN. En el caso de que no se suscribiera el contrato por culpa comprobada del titular del contrato o permiso, el INEMIN podrá disponer del área otorgada y de la información técnico-científica pertinente.

Art. 37.— DICTAMENES PREVIOS.— La Procuraduría y Contraloría Generales del Estado, remitirán al Directorio del INEMIN los informes previos a la celebración de los contratos mineros, dentro del término de quince días contados a partir de la fecha de envío de la solicitud y del proyecto de contrato por parte del Gerente General del INEMIN.

En el caso de que no se recibieran los informes indicados, en el término señalado, se considerarán tácitamente favorables bajo su responsabilidad.

Art. 38.— CAUSALES DE TERMINACION.— El INEMIN podrá declarar la terminación de un permiso o demandar la terminación de un contrato por las siguientes causas:

- a) No iniciar injustificadamente los trabajos dentro de los 90 días posteriores a la inscripción del contrato o permiso;
- b) Suspender injustificadamente los trabajos en el área correspondiente por más de ciento veinte días;
- c) Reincidir total o parcialmente en el incumplimiento injustificado del programa de trabajo de inversiones, y no remediar el incumplimiento dentro de los 120 días posteriores a su notificación;
- d) Presentar informes falsos;
- e) No rendir la garantía a que se encuentra obligado, en la forma y dentro de los plazos estipulados en el contrato o permiso;
- f) No pagar los impuestos, regalías y más contribuciones previstas en esta Ley, en la forma que determine el contrato o permiso;
- g) Por ceder o transferir a terceros, sin la autorización del INEMIN, alguno de los derechos derivados del contrato o permiso, sin perjuicio de la nulidad a que se refiere el Art. 66;
- h) Por quiebra o disolución;

i) Por renuncia o abandono justificados por el beneficiario o contratista ante el Directorio del INEMIN, conforme al Art. 40;

j) Por las demás causales establecidas en esta Ley y otras disposiciones legales, o en los contratos.

Art. 39.— PLAZO PARA LA CONTESTACION.— Si el beneficiario o contratista incurriere en alguna de las causas por las que se pueda dar por terminado el permiso o demandar la terminación del contrato, el INEMIN le concederá un plazo no mayor a 180 días, contados desde la fecha de RECEPCION de la notificación, para que cumpla las obligaciones no atendidas o para que desvanezca los cargos que se le hagan.

Si no cumpliera las obligaciones o no desvaneciere los cargos, el INEMIN se pronunciará en un plazo de 120 días y declarará terminado el permiso o demandará la terminación del contrato, según el caso.

Art. 40.— TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO O PERMISO.— El beneficiario que sin embargo de cumplir las obligaciones que le impone el contrato o permiso, por causas justificadas ante el Directorio del INEMIN se viere impedido de seguir manteniendo el vínculo con el Estado, podrá solicitar al Instituto se declare la terminación del contrato o permiso, antes de la expiración de su plazo. En este caso la declaratoria de terminación anticipada determinará la inmediata devolución de área y la entrega al Estado de los informes técnico-económicos existentes, así como la devolución de las garantías rendidas por el contratista, sin efecto posterior.

Art. 41.— FACULTAD DEL INEMIN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.— La devolución de áreas del Estado, originada en la terminación del contrato causada por el incumplimiento del contratista, faculta al INEMIN, la ejecución de cuantos actos fueren necesarios a fin de impedir la destrucción del yacimiento y el deterioro o sustracción de los bienes utilizados en la actividad minera.

Art. 42.— MULTAS PECUNIARIAS.— La inobservancia de la presente Ley o de sus reglamentos o el incumplimiento del permiso o del contrato, que no constituya causa para la terminación de los mismos, serán sancionados por el Directorio del INEMIN, con informe previo del Gerente General, con multa que será determinada en el Reglamento respectivo según la gravedad del incumplimiento. Igual sanción se impondrá a las personas naturales o jurídicas que realicen ilegalmente la explotación económica de los recursos mineros.

Las multas señaladas en este artículo ingresarán a la Cuenta Única del Tesoro Nacional.

Art. 43.— EFECTOS DE LA TERMINACION DEL CONTRATO.— La declaratoria de terminación de un contrato o de un permiso originará la devolución al Estado del área otorgada.

A la terminación del período del contrato en las fases de explotación, beneficio, fundición y refinación de sustancias minerales, las instalaciones mineras e industriales, equipos, maquinarias y más bienes del beneficiario podrán ser retirados o en cualquier otra forma ser dispuestos por sus dueños.

Si dentro del período de duración del contrato, el contratista abandonare la actividad minera por razones económicas justificadas, por fuerza mayor o caso fortuito, con calificación previa del INEMIN, tendrá derecho en un plazo de hasta dos años, a retirar los bienes muebles o disponer de ellos libremente.

CAPITULO VI DE LA PARTICIPACION DEL ESTADO

Art. 44.— **DERECHOS SUPERFICARIOS.**— Por concepto de derechos superficarios, el contratista pagará anualmente el 2% de un salario mínimo vital por hectárea para los contratos o permisos de prospección y el 4% para los contratos o permisos de exploración.

Art. 45.— **REGALIAS.**— En los contratos de concesión, el contratista pagará en dinero y anualmente, al final de cada año fiscal, como regalías, los siguientes porcentajes sobre el precio de venta de los productos:

- a) Por metálicos y placeres, lavaderos y piedras preciosas, el uno por ciento, durante los cuatro primeros años del período de explotación y el tres por ciento a partir del quinto año;
- b) Por No metálicos y rocas ornamentales, el uno por ciento anual durante la totalidad del período de explotación.

Las personas que exploten materiales de construcción pagarán el uno por ciento durante el período de duración del permiso.

Art. 46.— **ASIGNACIONES PARA EL INEMIN.**— En el Presupuesto General del Estado se destinarán las asignaciones necesarias para el financiamiento tanto del INEMIN como del Programa de Protección del Medio Ambiente, en la proporción que, con relación a los derechos superficiales del Art. 44 y a las regalías de los literales a) y b) del Art. 45, señalare el Presidente de la República.

Art. 47.— **NORMAS ESPECIALES SOBRE IMPUESTO A LA RENTA EN LA ACTIVIDAD MINERA.**— La actividad minera pagará el impuesto a la renta sobre el 50% de la base imponible por el plazo de 5 años desde la fecha de inicio de producción.

A partir del sexto año la actividad minera tributará de conformidad con las normas legales vigentes.

Reformase en este sentido el artículo 47 de la Ley de Impuesto a la Renta.

Art. 48.— **CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA.**— Las personas naturales que obtengan rentas provenientes de inversiones en actividades mineras efectuadas en el país, no les considerarán para el impuesto progresivo a la renta global, sino que tributarán, sobre las utilidades gravables correspondientes, el impuesto único del cinco por ciento (5%) para las rentas de capital y concurso del trabajo; y el impuesto único del 10% para las rentas de capital puro.

Las personas naturales a las que hace referencia el Art. 29 de esta Ley estarán exentas de todo tributo.

CAPITULO VII DE LAS EXONERACIONES E INCENTIVOS

Art. 49.— **EXONERACION TRIBUTARIA.**— No pagarán ningún tributo fiscal seccional, especial y adicional, excepto los señalados en esta Ley, los siguientes actos, permisos y contratos mineros:

- a) Los de prospección, exploración, explotación, beneficio, fundición, refinación y comercialización interna y externa de minerales;
- b) La constitución y aumento de capital de compañías que tengan por objeto la realización de actividades mineras y el aporte de bienes, inclusive inmuebles, para la integración del capital de esas compañías, la reforma de estatutos sociales, la emisión, canje o fraccionamiento de títulos sociales y la domiciliación de empresas mineras extranjeras;
- c) Los de mutuo, destinados a financiar inversiones mineras o adquisición de maquinarias, equipo y materiales para la actividad minera, de garantía de esos préstamos, de constitución y cancelación de gravámenes reales o de otro tipo de seguridades sobre dichos préstamos;
- d) Los de seguros de bienes, instalaciones y equipos destinados a la actividad minera;
- e) Los de cesión de contratos o derechos mineros; y,
- f) Las reinversiones de capital que se efectúen en el sector minero.

Art. 50.— **EXONERACION TRIBUTARIA ADUANERA.**— Exonérase de los impuestos aduaneros la importación de equipos, maquinarias, repuestos, insumos y otros materiales necesarios para la actividad minera, durante el tiempo de vigencia de los permisos y contratos mineros, siempre que los mismos no se produzcan en la calidad requerida dentro del país.

Los dictámenes de los Ministerios correspondientes deberán ser expendidos en un plazo no mayor de 15 días contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Después de este plazo el silencio administrativo se tomará como informe favorable.

Art. 51.— **TRASPASO DE ARTICULOS LIBERADOS.**— Con el informe favorable del INEMIN, podrá efectuarse el traspaso o enajenación a terceros de artículos importados con liberación de los derechos aduaneros, cuando no fueren por más tiempo utilizados en el trabajo de la empresa interesada, una vez que sean evaluados por el Ministerio de Finanzas y Crédito Público, en cuyo caso se cobrará la parte proporcional de los derechos aduaneros.

Si el traspaso o enajenación se hiciera a otra persona natural o jurídica con derecho a la liberación de impuestos aduaneros y adicionales, sólo se requerirá el informe favorable del INEMIN.

Art. 52.— **ADMISION TEMPORAL.**— La admisión temporal al país de maquinaria o equipos mineros, podrá hacerse con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica de Aduanas.

Art. 53.— **ARRENDAMIENTOS Y PRESTAMOS DE USO.**— Los contratos de arrendamiento y préstamos de uso de maquinaria y equipos importados con exoneraciones arancelarias para fines de actividad minera, requerirán de la autorización del INEMIN, siempre que tales bienes sean destinados a actividades mineras.

Art. 54.— **AMORTIZACION DE INVERSIONES.**— Los organismos competentes mediante el acto administrativo pertinente, podrán dar tratamientos preferenciales para la aplicación de la amortización de las inversiones realizadas en cualquiera de las fases de la actividad minera.

Art. 55.— **DEDUCCIONES AL IMPUESTO A LA RENTA.**— Las personas naturales o jurídicas que invierten en empresa mineras o existentes, mediante aporte para la integración o aumento de capital, podrán deducir del impuesto sobre la renta, el cincuenta por ciento del monto a que asciende la aportación efectuada a la compañía minera respectiva.

CAPITULO VIII

DE LAS EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES

Art. 56.— **EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES.**— Las expropiaciones y servidumbres se registrarán por las disposiciones vigentes en los Códigos Civil y de Procedimiento Civil.

CAPITULO IX

DE LAS CONTROVERSIAS JUDICIALES EN MATERIA MINERA

Art. 57.— **DE LAS LEYES APLICABLES.**— Todas las controversias derivadas de la aplicación de la presente Ley se ventilarán ante los Jueces Competentes conforme a la Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley Orgánica de la Función Judicial y al Código de Procedimiento Civil, con las excepciones en esta Ley previstas.

Si el Estado o el INEMIN intervienen en calidad de demandados y si la controversia se refiere a un contrato entre el INEMIN y una persona natural o jurídica privada se observará lo previsto en el Art. 17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

En los demás casos las controversias serán resueltas en primera instancia por los Jueces de lo Civil y, en segunda, por las Cortes Superiores.

Art. 58.— **DE LA LITIS Y EL PROCEDIMIENTO.**— Presentada la demanda, el juez que la conozca correrá traslado al demandado para que la conteste en el término de veinte días. Al tiempo de contestar la demanda, el demandado podrá reconvenir al actor, en cuyo caso se concederá a éste un término de veinte días para que conteste la reconvenición.

Contestada la demanda o la reconvenición, según el caso, el juez convocará a una audiencia oral durante la cual se presentarán y practicarán todas las pruebas y se escucharán las exposiciones de las partes. Si fuere necesario realizar inspecciones, que antes no se las hubiere practicado, podrá suspenderse la audiencia con tal exclusivo fin, si el juez considera indispensable la inspección.

Terminada la audiencia, el juez dictará sentencia, contra la cual podrá interponerse recurso de apelación.

Art. 59.— **SEGUNDA INSTANCIA.**— En segunda instancia cualquiera de las partes podrá solicitar una audiencia oral para aportar nuevas pruebas.

Art. 60.— **RECURSO DE CASACION.**— De la sentencia que se dicte en segunda instancia únicamente podrá interponerse dentro de 10 días de notificada, recurso de casación por violación, aplicación indebida o interpretación errada de esta Ley o de la Constitución Política del Estado, en la sentencia. El recurso de casación será conocido por la Corte Suprema de Justicia en pleno o por las salas restantes, si la sentencia de segunda instancia fue dictada por una de las Salas de la Corte Suprema de Justicia. Los fallos que dicte la Corte Suprema al resolver sobre los recursos de casación constituirán precedente de aplicación obligatoria de esta Ley.

Art. 61.— **TRAMITACION DEL RECURSO.**— Recibido el proceso en el que conste la sentencia contra la cual se hubiere interpuesto el recurso de casación, el Presidente de la Corte Suprema o el Presidente de la Sala siguiente a aquella que hubiere dictado la sentencia de segunda instancia, dispondrá que el recurrente formalice el recurso en el término de 10 días, expresando concreta y específicamente cuál es la norma de la Constitución o de la Ley que ha sido infringida en la sentencia. La Corte Suprema, de encontrar fundado el recurso, por las razones expuestas por el recurrente, lo aceptará y dictará la sentencia que correspondiere corrigiendo el error de derecho en que se hubiere incurrido en la sentencia impugnada.

Si el recurrente no formalizare el recurso dentro del término conocido, la Corte se limitará a declarar lo cierto.

Si la Corte Suprema estimare que el recurso es infundado lo rechazará, y si estimare que se lo interpuso para retardar la ejecución de la sentencia impondrá al recurrente la multa que estimare adecuada según la naturaleza del asunto controvertido y le condenará al pago de las costas procesales.

Art. 62.— **NORMA SUPLETORIA.**— En todo lo no previsto en este capítulo se aplicará las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, especialmente aquellas referentes al proceso ordinario.

Art. 63.— **CONSULTORIA Y ARBITRAJE.**— En los contratos mineros se puede estipular, con el dictamen previo del Procurador General del Estado, cláusulas de consultoría y arbitraje relacionadas únicamente con controversias de carácter técnico o económico, que se suscitaron entre el INEMIN y los contratistas, en especial en los aspectos referentes a la fijación de las tasas de producción de los yacimientos y al escogimiento de tecnologías apropiadas de exploración minera.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 64.— **DERECHO DEL DENUNCIANTE.**— La denuncia de un yacimiento debidamente comprobada por el INEMIN, dará derecho preferente al denunciante para el otorgamiento de permisos o la suscripción del contrato pertinente.

Igualmente el denunciante, tendrá derecho preferente en caso de requerirlo, para la asistencia técnica.

Art. 65.— **SUJECCION REGLAMENTARIA.**— La prospección, exploración y explotación de yacimientos mineros de los fondos marinos se regulará por las normas establecidas en el Reglamento General de la presente Ley.

Art. 66.— **AUTORIZACION PARA LA CESION DE DERECHOS.**— La cesión o transferencia a terceros de derechos provenientes de un contrato o permiso minero será nula si no procede la correspondiente autorización del Directorio del INEMIN.

Art. 67.— **LIMITE DE CONTRATOS Y PERMISOS.**— Una persona natural o jurídica podrá mantener al mismo tiempo hasta tres permisos y dos contratos para las fases subsiguientes.

Art. 68.— **RELACION LABORAL.**— En todas las fases de la actividad minera, sólo el contratista tendrá el carácter de empleador frente a sus trabajadores.

Art. 69.— **COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS.**— Las personas naturales o jurídicas que exploten, beneficien, fundan o refinan minerales, venderán los productos finales en el mercado interno. Sólo cuando la producción exceda la demanda interna del país, el Directorio del INEMIN podrá autorizar mediante el correspondiente acto administrativo y previo informe favorable del Ministerio competente, la exportación del excedente.

Art. 70.— **MUERTE DEL CONTRATISTA.**— En caso de fallecimiento de una persona natural que mantenga un contrato minero se aplicarán las normas del Código Civil sobre la sucesión testamentaria o intestada.

Sin embargo quienes tuvieren derecho a suceder al causante, deberán manifestar su voluntad de mantener el permiso o el contrato minero, dentro del plazo de 180 días desde el fallecimiento.

Art. 71.— **JURISDICCION Y COMPETENCIA.**— Las personas naturales o jurídicas extranjeras que realicen actividad minera en el país, se registrarán por las leyes ecuatorianas y se someterán a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales del Ecuador.

Art. 72.— **CARTAS GEOLOGICAS.**— Las áreas autorizadas para ejecutar los estudios y trabajos geológicos-mineros de prospección, exploración y explotación, serán definidas en cartas actualizadas, elaboradas por el Instituto Geográfico Militar. Las áreas mineras serán polígonos cuyos lados se orienten paralela y perpendicularmente al meridiano astronómico, con excepción de los lavaderos y placeres que se sujetarán al respectivo reglamento.

Art. 73.— **MAPA CATASTRAL MINERO.**— El INEMIN deberá anualmente publicar el mapa catastral minero indicando las áreas libres que no se encuentran contratadas ni concedidas permiso.

Art. 74.— **RESPONSABILIDAD DEL INEMIN Y DE SUS FUNCIONARIOS.**— El INEMIN estará obligado a indemnizar a los particulares por los perjuicios

que les irroge como consecuencia de los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios o empleados en el desempeño de sus cargos.

El INEMIN, en tal caso, tendrá derecho de repetición y hará efectiva la responsabilidad del funcionario o empleado que, por dolo o culpa grave judicialmente declarada, hubiere causado los perjuicios. La responsabilidad penal de tales funcionarios y empleados será establecida por los Jueces Competentes.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.— Las personas naturales o jurídicas que hubieren obtenido contratos o derechos de acuerdo con la antigua Ley de Fomento Minero, podrán acogerse a las disposiciones de la presente Ley, si así lo manifiestan dentro del plazo que se exprese en el reglamento. De no hacerlo, subsistirán los derechos y obligaciones que adquirieron bajo las normas anteriores.

Las solicitudes en trámite se sujetarán a las normas de esta Ley y sus reglamentos, de conformidad con la Regla 20 del Art. 7 del Código Civil.

SEGUNDA.— El personal de la actual Dirección General de Geología y Minas pasará a formar parte del INEMIN, de acuerdo con los Reglamentos Orgánicos funcionales respectivos.

Durante los tres primeros años, contados a partir de la expedición de la presente Ley, el INEMIN podrá solicitar en comisión de servicios a funcionarios de otras instituciones en caso de necesidad de personal adicional.

TERCERA.— Los procesos judiciales en trámite ante el Juez Especial de Minas continuará sustanciándose en primera instancia ante él de conformidad con las normas procesales vigentes. De la sentencia que dicte el Juez Especial de Minas se podrá interponer los recursos establecidos en esta Ley.

CUARTA.— Para la aplicación de esta Ley, el Presidente de la República dictará los reglamentos que sean necesarios.

DISPOSICION FINAL.— Deréganse las disposiciones legales generales o especiales, Reglamentos o Regulaciones de Minería anteriores a la expedición de la presente Ley y sus Reglamentos, en especial los Decretos Nos. 101 y 102 de 24 de enero de 1974, publicados en el Registro Oficial N° 484, de 31 de enero del mismo año.

La presente Ley por su carácter de especial, prevalece sobre todas las disposiciones legales que se le opongan y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la Sala de Sesiones del H. Congreso Nacional, a

Es fiel copia del original.— Lo certifico:
f.) Ab. Joffre Torbay Dassum, Secretario General de la Administración Pública.

DECRETO LEY Nº 06

CAPITULO II

EL CONGRESO NACIONAL

DE LA FORMULACION Y EJECUCION DE LA POLITICA MINERA

Considerando:

Que es necesario racionalizar y mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales, especialmente de las reservas no renovables que constituyen bienes de dominio imprescriptible e inalienable del Estado;

Que corresponde al Estado, como área de su explotación exclusiva, el promover la actividad minera mediante procedimientos y facilidades que garanticen su adecuada producción de manera que contribuya eficazmente al crecimiento socio económico nacional;

Que es indispensable ajustar las necesidades del sector minero con los avances tecnológicos, la realidad económica actual y los requerimientos de la sociedad ecuatoriana, y

En uso de la facultad que le concede el Art. 66 de la Constitución Política,

EXPIDE:

LA SIGUIENTE LEY DE MINERIA

CAPITULO I

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Art. 1.— DE LOS YACIMIENTOS.— Los yacimientos existentes en el territorio nacional, como recursos naturales o renovables, son de dominio inalienable e imprescriptible del Estado.

Para efectos de la presente Ley, se considera yacimiento a toda concentración natural de elementos y compuestos químicos de minerales en la corteza terrestre.

Exceptúanse del ámbito de aplicación de esta Ley los yacimientos de hidrocarburos y de minerales radioactivos y las aguas minerales.

Los asfaltos serán considerados como minerales no metálicos.

Art. 2.— EXPLOTACION ECONOMICA EXCLUSIVA.— Las fases de la actividad minera a los que se remite la presente Ley, constituyen una área de explotación económica reservada al Estado, el mismo que la ejercerá en forma directa o bien celebrando contratos y otorgando permisos a personas naturales o jurídicas sean nacionales o extranjeras.

Art. 3.— AMBITO DE LA LEY.— Las actividades mineras se sujetarán a las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos.

Art. 4.— DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA.— Declárase de utilidad pública los bienes, derechos y actividades mineros. En consecuencia, procede la expropiación de predios, edificaciones, instalaciones u otros bienes y la imposición de servidumbres generales o especiales que fueren necesarios de conformidad con la Ley.

Art. 5.— ZONAS DE RESERVA MINERA.— El Presidente de la República podrá declarar como zona de reserva minera a aquellas áreas de interés nacional que, por su ubicación o trascendencia económica, sean consideradas de carácter estratégico, respetando derechos legalmente preconstituídos.

CAPITULO III

DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE MINERIA

Art. 6.— NATURALEZA DEL INEMIN.— Créase el Instituto Ecuatoriano de Minería, INEMIN, como organismo técnico-administrativo especializado, directamente encargado de la ejecución de la política minera del país.

El INEMIN será una entidad de derecho público, con autonomía administrativa, regulado por el literal a) del Art. 125 de la Constitución Política, cuyos funcionarios y empleados estarán sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

Art. 9.— FACULTADES DEL INEMIN.— Corresponde al Instituto Ecuatoriano de Minería, INEMIN:

a) Planificar el aprovechamiento de los recursos minerales del país;

b) Realizar el levantamiento y la investigación geológicos del territorio nacional por sí mismo o a través de convenios o contratos de obras o servicios específicos;

c) Atender al desarrollo de los recursos minerales a través de permisos o contratos y constituyendo compañías mineras de economía mixta con personas naturales o jurídicas legalmente establecidas en el país;

d) Propender a la satisfacción de la demanda interna en materias primas de origen mineral;

e) Prestar asistencia técnica a la actividad minera de conformidad con los reglamentos que contendrán disposiciones especiales en beneficio de la minería;

f) Estimular la colaboración directa y eficaz entre el sector público, los organismos seccionales, las instituciones de educación superior y la empresa privada para efectos de desarrollar la actividad minera, y

g) Las demás contempladas en esta Ley y más disposiciones legales.

Art. 10.— ESTRUCTURA DEL INEMIN.— La Dirección y administración del Instituto estarán a cargo del Directorio, la Gerencia General, las Gerencias de área y las Dependencias Técnicas y Administrativas determinadas en el Reglamento Orgánico Funcional aprobado por el Directorio del Instituto.

Art. 11.— DIRECTORIO DEL INEMIN.— El Directorio es el organismo máximo del INEMIN y estará integrado por seis miembros:

- a) El Ministro determinado en el Art. 6 o su delegado, quien lo presidirá;
- b) Dos Directores designados por el Presidente de la República;
- c) Un Oficial General nombrado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas;
- d) Un delegado del Consejo Nacional de Desarrollo, y
- e) Un delegado de las Cámaras de Minería del Ecuador, designado de conformidad con el Reglamento.

El quórum será de cuatro miembros. Las resoluciones se tomarán con la aprobación de la mayoría de votos y, en caso de empate, el Presidente tendrá, además, voto dirimente.

El Gerente General, que será el representante legal del INEMIN, participará en las reuniones del Directorio con voz pero sin voto.

Art. 12.— CARACTERISTICA Y PRESUPUESTO DEL INEMIN.— Las gestiones científica, técnica y de investigación del INEMIN se regirán por las modalidades técnicas de organización, operación y administración de la actividad minera, de conformidad con el Reglamento respectivo, expedido por el Presidente de la República.

El presupuesto del INEMIN una vez aprobado por el Directorio será autorizado por el Ministerio de Estado a cuyo cargo se encuentre la administración presupuestaria.

Art. 13.— PATRIMONIO DEL INEMIN.— Constituyen bienes y recursos del INEMIN:

- a. Los fondos asignados en el Presupuesto General del Estado;
- b. Los bienes raíces, instalaciones, maquinarias y otros bienes que estuvieren a cargo del Ministerio determinado en el Art. 6, relacionados directa o indirectamente con la actividad geológica y minera, a la fecha de expedición de la presente Ley;
- c. Los ingresos que obtenga de su actividad y los beneficios que resulten de su participación contractual;
- d. Los bienes y derechos que adquiera a cualquier título.

Art. 14.— CONTRATO DEL INEMIN.— Las obras, los servicios, la adquisición de equipos y más bienes, que el Instituto tenga que contratar para el cumplimiento de sus actividades, así como la compra-venta de minerales en el mercado interno o exterior, se normará por los reglamentos respectivos.

CAPITULO IV

DE LA CLASIFICACION Y DE LAS FASES DE LA ACTIVIDAD MINERA

Art. 15.— CLASES DE YACIMIENTOS.— Para efectos de esta Ley, los yacimientos se dividen en metálicos, no metálicos, placeres, materiales de construcción, ornamentales y fondos marinos.

Art. 16.— FASES DE LA ACTIVIDAD MINERA.— Constituyen fases de la actividad minera la prospección, la exploración, la explotación, el beneficio o concentración, la fundición, la refinación y la comercialización.

Art. 17.— DE LA PROSPECCION MINERA.— La prospección minera es libre y no se requiere de ninguna autorización para su realización. Sin embargo, cualquier persona puede solicitar un permiso de prospección que le será otorgado por el correspondiente acto administrativo, o pedir que se celebre un contrato de prospección.

Quien descubriere un yacimiento en un área en la cual existan derechos legalmente preestablecidos, no adquirirá derecho alguno, salvo que llegue a un acuerdo o convenio con el titular de los derechos.

Si no se descubrieren indicios de mineralización el contrato o permiso, previa solicitud del interesado cancelada por el INEMIN, puede quedar sin efecto antes del vencimiento del plazo, el mismo que será de hasta dos años, pudiendo ser prorrogado por un año adicional con una reducción del 50% del área.

Los permisos podrán otorgarse hasta por superficies de 10.000 hectáreas y los contratos se celebrarán por cualquier extensión hasta por superficies de 50.000 hectáreas.

Art. 18.— DE LA EXPLORACION MINERA.— La exploración comprende un conjunto de trabajos geológico-mineros para determinar reservas y valores de los minerales.

El contrato o permiso que faculta la exploración será suscrito con el INEMIN y tendrá una duración de hasta tres años prorrogables por igual término. El área objeto del contrato de exploración tendrá la superficie máxima de 10.000 hectáreas y del permiso de 2.000 hectáreas, pudiendo ser constituidas por uno o varios cuerpos comprendidos dentro del área acordada para la prospección.

El contrato o permiso de exploración garantizará a su titular el derecho a suscribir un contrato de explotación, si así conviniere a sus intereses.

Art. 19.— DE LA EXPLOTACION MINERA.— La explotación abarca el conjunto de trabajos destinados a la preparación y desarrollo de las minas y a la extracción y transporte de los minerales hasta la canchama o planta de beneficio.

Las áreas destinadas a la explotación podrán formar uno o más cuerpos, deberán estar comprendidas dentro del área de exploración y tendrán las siguientes superficies máximas: para minerales metálicos y placeres hasta 5.000 hectáreas y para minerales no metálicos hasta 2.000 hectáreas.

El INEMIN podrá otorgar directamente contratos de explotación, sin necesidad de exigir el cumplimiento de la etapa de exploración, cuando las condiciones lo justifiquen y previa la aprobación del correspondiente proyecto de explotación.

Art. 20.— DEL BENEFICIO DE MINERALES.— La fase de beneficio comprende las operaciones destinadas a elevar la ley o el contenido útil de las sustancias minerales a través de procesos físicos o químicos.

El INEMIN podrá instalar plantas de beneficio regionales para procesar minerales provenientes de diferentes minas cuando la producción de éstas, separadamente, no justifique la instalación de su propia planta. Estas plantas podrán ser instaladas también por las personas naturales o jurídicas que exploten o no las minas, pero que se constituyan para este efecto y que suscriban el contrato correspondiente con el INEMIN.

Art. 21.— DE LA FUNDICIÓN.— La fase de fundición comprende los procesos técnicos destinados a separar los metales de sus correspondientes minerales, a fin de que alcancen un grado avanzado de pureza.

Las empresas de producción mineral están autorizadas para, a voluntad, fundir en sus plantas su producción de metales y las producciones de otras minas legalmente explotadas.

Art. 22.— DE LA REFINACIÓN.— La refinación abarca los procesos destinados a dar a los metales un grado de pureza que permita su industrialización directa.

Las empresas de producción mineral podrán, a voluntad, refinar en sus plantas su producción de metales y las producciones de otras minas legalmente explotadas.

Art. 23.— DE LA COMERCIALIZACIÓN.— La comercialización comprende la negociación y venta de los minerales o metales a partir de la explotación. También se podrá comercializar, previa autorización del INEMIN, los minerales que se extraigan en el proceso de la construcción de piques y galerías y de calicatas durante la fase de la exploración.

La comercialización será ejecutada por:

- a) El INEMIN de los productos minerales o metales que produzca;
- b) Las personas naturales o jurídicas titulares de los contratos de explotación; y
- c) Las personas naturales o jurídicas comercializadoras de minerales, debidamente aprobadas.

Art. 24.— DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.— Se entenderá como materiales de construcción aquellos yacimientos minerales que sirvan para la industria de la construcción de conformidad con la Ley.

Prohíbese la explotación de los materiales de construcción aquellos yacimientos minerales que sirvan para la industria de la construcción de conformidad con la Ley.

Prohíbese la explotación de los materiales de construcción que se encuentren dentro del derecho de

vía, de las carreteras y caminos públicos, así como en sectores urbanos y en sectores cercanos a edificios, edificaciones y viviendas.

La explotación de los materiales de construcción dentro del lecho o cauce de los ríos requerirá el informe previo del Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos.

Art. 25.— FACULTAD DE LOS MUNICIPIOS.— Los permisos de explotación de los materiales de construcción serán concedidos por los Municipios, por un plazo de hasta cinco años, renovables, previo informe favorable del INEMIN.

Art. 26.— SUSPENSIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.— El Directorio del INEMIN podrá suspender en forma temporal o definitiva la explotación de materiales de construcción que se haga sin sujeción a las normas establecidas en los reglamentos de esta Ley.

Art. 27.— UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.— Las entidades de derecho público y de derecho privado con finalidad social o pública, podrán explotar los materiales de construcción necesarios para el mejoramiento, rectificación, mantenimiento o construcción de las vías y otras obras públicas a su cargo, así como para los programas de vivienda de interés social, ejecutadas directamente por el Estado Nacional de la Vivienda, previa autorización del organismo Seccional correspondiente.

Cuando los materiales de construcción estuvieren ubicados en terrenos de propiedad particular se pagará la indemnización por el daño que se causare y no por el valor de los materiales, sin perjuicio del derecho de expropiarlos si conviniera al interés público.

Art. 28.— EXCLUSIÓN DE BENEFICIOS.— El titular del permiso de explotación de materiales de construcción, no gozará de los beneficios concedidos en el Capítulo VII.

Art. 29.— ZONAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO.— El Estado, a través del INEMIN, podrá declarar zonas de libre aprovechamiento, a los yacimientos o placeros, ubicados en sitios donde no hubieren derechos mineros específicos previos, para lavadores y mineros independientes, a solicitud de personas naturales que carecen de organización empresarial.

CAPÍTULO V

DE LOS PERMISOS Y DE LAS FORMAS CONTRACTUALES

Art. 30.— DE LOS PERMISOS O CONTRATOS DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN.— El titular de un contrato o permiso de prospección y exploración tendrán el derecho exclusivo de pasar a la fase siguiente de la actividad minera siempre y cuando haya cumplido a satisfacción del INEMIN las obligaciones contraídas y las estipulaciones de la presente Ley y sus Reglamentos.

Art. 31.— DEL CONTRATO DE CONCESION MINERA.— Contratos de concesión minera, son aquellos que celebra el Estado, a través del INEMIN, con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para realizar las fases de explotación, beneficio de minerales, fundición y refinación, todas en conjunto o por separado.

Art. 32.— DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.— Contratos de prestación de servicios son aquellos en los cuales las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, se comprometen a efectuar por cuenta o encargo del INEMIN, obras o servicios de cualesquiera de las fases de la actividad minera, aportando tecnología, capitales, equipos o maquinarias necesarias para el desarrollo de los trabajos contratados, invirtiendo los capitales y utilizando los equipos y la tecnología necesarios para el cumplimiento de los servicios contratados.

Art. 33.— CONSTITUCION DE COMPAÑIAS DE ECONOMIA MIXTA.— El INEMIN, podrá celebrar contratos mineros de prestación de servicios mineros, o constituir compañías de economía mixta con personas naturales o jurídicas respecto a las áreas declaradas zonas de reserva minera, por ellas exploradas o devueltas, para la explotación y para las demás fases consiguientes de aprovechamiento económico de los minerales o metales que se obtengan de dichas áreas.

La adjudicación de los contratos a los que se refiere el inciso anterior se realizará mediante un sistema especial de licitación cuya forma, requisitos, condiciones o procedimientos serán determinados exclusivamente en el Reglamento que para este fin expida el Presidente de la República.

Art. 34.— EL CONTRATO DE OBRA O SERVICIOS ESPECIFICOS.— Contratos de Obras o Servicios Específicos, son aquellos en los que personas naturales o jurídicas, legalmente establecidas en el país, se comprometen a efectuar para INEMIN obras, trabajos o servicios específicos a cambio de una remuneración de dinero, cuya cuantía y forma de pago serán convenidos entre las partes conforme a la Ley.

Art. 35.— REQUISITOS DE LOS CONTRATOS.— En los contratos de concesión y de prestación de servicios que serán suscritos por el Gerente General del INEMIN, con la autorización previa del Directorio, se estipulará cuando menos sobre lo siguiente:

- a) Plazo de duración que será de hasta treinta años prorrogables de acuerdo a los intereses nacionales y a las características de los yacimientos;
- b) Programas mínimos de trabajo y de inversión;
- c) La garantía que debe rendir el contratista para el cumplimiento de sus obligaciones, la misma que no podrá ser inferior al 2% de las inversiones del programa mínimo anual, y que se mantendrá vigente hasta por un máximo de 5 años. La garantía puede ser rendida en cualquiera de las formas establecidas en la Ley de Licitaciones.
- d) La obligación de capacitar y emplear al mayor número posible de personal ecuatoriano;
- e) La presentación obligatoria de informes periódicos por lo menos una vez al año de las activi-

dades ejecutadas, el plan operativo del año siguiente y el estado de las reservas y producción, y

f) El pago de los tributos establecidos en esta Ley.

Art. 36.— SUSCRIPCION DE LOS CONTRATOS.— Los contratos deberán suscribirse dentro de un plazo que no excederá de ciento ochenta días contados a partir de la aprobación del informe técnico y final de resultados de la exploración y del proyecto de exploración por parte del INEMIN. En el caso de que no se suscribiera el contrato por culpa comprobada del titular del contrato o permiso, el INEMIN podrá disponer del área otorgada y de la información técnico-científica pertinente.

Art. 37.— DICTAMENES PREVIOS.— La Procuraduría y Contraloría Generales del Estado, remitirán al Directorio del INEMIN los informes previos a la celebración de los contratos mineros, dentro del término de quince días contados a partir de la fecha del envío de la solicitud y del proyecto de contrato por parte del Gerente General del INEMIN.

En el caso de que no se recibieren los informes indicados, en el término señalado, se considerarán tácitamente favorables bajo su responsabilidad.

Art. 38.— CAUSALES DE TERMINACION.— El INEMIN podrá declarar la terminación de un permiso o demandar la terminación de un contrato por las siguientes causas:

- a) No iniciar injustificadamente los trabajos dentro de los 90 días posteriores a la inscripción del contrato o permiso;
- b) Suspender injustificadamente los trabajos en el área correspondiente por más de ciento veinte días;
- c) Reincidir total o parcialmente en el incumplimiento injustificado del programa de trabajo de inversiones, y no remediar el incumplimiento dentro de los 120 días posteriores a su notificación;
- d) Presentar informes falsos;
- e) No rendir la garantía a que se encuentra obligado, en la forma y dentro de los plazos estipulados en el contrato o permiso;
- f) No pagar los impuestos, regalías y más contribuciones previstas en esta Ley, en la forma que determine el contrato o permiso;
- g) Por ceder o transferir a terceros, sin la autorización del INEMIN, alguno de los derechos derivados del contrato o permiso, sin perjuicio de la nulidad a que se refiere el Art. 66;
- h) Por quiebra o disolución;
- i) Por renuncia o abandono justificados por el beneficiario o contratista ante el Directorio del INEMIN, conforme al Art. 40;
- j) Por las demás causales establecidas en esta Ley y otras disposiciones legales, o en los contratos.

Art. 39.— PLAZO PARA LA CONTESTACION.— Si el beneficiario o contratista incurriere en alguna de las causas por las que se pueda dar por terminado el permiso o demandar la terminación del contrato, el INEMIN le concederá un plazo no mayor a 180 días, contados desde la fecha de Recepción de la notificación, para que cumpla las obligaciones no atendidas o para que desvanezca los cargos que se le hagan.

Si no cumple las obligaciones o no desvanecen los cargos, el INEMIN se pronunciará en un plazo de 120 días y declarará terminado el permiso o demandará la terminación del contrato, según el caso.

Art. 40.— TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO O PERMISO.— El beneficiario que sin embargo de cumplir las obligaciones que le impone el contrato o permiso, por causas justificadas ante el Directorio del INEMIN se viere impedido de seguir manteniendo el vínculo con el Estado, podrá solicitar al Instituto se declare la terminación del contrato o permiso, antes de la expiración de su plazo. En este caso la declaratoria de terminación anticipada determinará la inmediata devolución del área y la entrega al Estado de los informes técnico-económico existentes, así como la devolución de las garantías rendidas por el contratista, cesando cualquier efecto posterior.

Art. 41.— FACULTAD DEL INEMIN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.— La devolución de áreas del Estado, originada en la terminación del contrato causada por el incumplimiento del contratista, faculta al INEMIN, la ejecución de cuantos actos fuere necesarios a fin de impedir la destrucción del yacimiento y el deterioro o sustracción de los bienes utilizados en la actividad minera.

Art. 42.— MULTAS PECUNIARIAS.— La inobservancia de la presente Ley o de sus reglamentos o el incumplimiento del permiso o del contrato, que no constituya causa para la terminación de los mismos, serán sancionados por el Directorio del INEMIN, con informe previo del Gerente General, con multa que será determinada en el Reglamento respectivo según la gravedad del incumplimiento. Igual sanción se impondrá a las personas naturales o jurídicas que realicen ilegalmente la explotación económica de los recursos mineros.

Las multas señaladas en este artículo ingresarán a la Cuenta Única del Tesoro Nacional.

Art. 43.— EFECTOS DE LA TERMINACION DEL CONTRATO.— La declaratoria de terminación de un contrato o de un permiso originará la devolución al Estado del área otorgada.

A la terminación del período del contrato en las fases de explotación, beneficio, fundición y refinación de sustancias minerales, las instalaciones mineras e industriales, equipos, maquinarias y más bienes del beneficiario podrán ser retirados o en cualquier otra forma ser dispuestos por sus dueños.

Si dentro del período de duración del contrato, el contratista abandonare la actividad minera por razones económicas justificadas, por fuerza mayor o caso fortuito, con calificación previa del INEMIN, tendrá derecho en un plazo de hasta dos años, a retirar los bienes muebles o disponer de ellos libremente.

CAPITULO VI

DE LA PARTICIPACION DEL ESTADO

Art. 44.— DERECHOS SUPERFICIARIOS.— Por concepto de derechos superficiares, el contratista pagará anualmente el 2% de un salario mínimo vital

por hectárea para los contratos o permisos de prospección y el 4% para los contratos o permisos de exploración.

Art. 45.— REGALIAS.— En los contratos de concesión, el contratista pagará en dinero y anualmente, al final de cada año fiscal, como regalías, los siguientes porcentajes sobre el precio de venta de los productos:

a) Por metálicos y placeres, lavaderos y piedras preciosas, el uno por ciento, durante los cuatro primeros años del período de exploración y el tres por ciento a partir del quinto año;

b) Por No metálicos y rocas ornamentales, el uno por ciento anual durante la totalidad del período de explotación.

Las personas que exploten materiales de construcción pagarán el uno por ciento durante el período de duración del permiso.

Art. 46.— ASIGNACIONES PARA EL INEMIN.— En el Presupuesto General del Estado se destinarán las asignaciones necesarias para el financiamiento tanto del INEMIN como del Programa de Protección del Medio Ambiente, en la proporción que, con relación a los derechos superficiares del Art. 44 y a las regalías de los literales a) y b) del Art. 45, señale el Presidente de la República.

Art. 47.— NORMAS ESPECIALES SOBRE IMPUESTO A LA RENTA EN LA ACTIVIDAD MINERA.— La actividad minera pagará el impuesto a la renta sobre el 50% de la base imponible por el plazo de 5 años desde la fecha de inicio de producción.

A partir del sexto año la actividad minera tributará de conformidad con las normas legales vigentes.

Reformase en este sentido el artículo 47 de la Ley de Impuesto a la Renta.

Art. 48.— CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA.— Las personas naturales que obtengan rentas provenientes de inversiones en actividades mineras efectuadas en el país, no les considerarán para el impuesto progresivo a la renta global, sino que tributarán, sobre las utilidades gravables correspondientes, el impuesto único del cinco por ciento (5%) para las rentas de capital y concurso del trabajo; y el impuesto único del 10% para las rentas de capital puro.

Las personas naturales a las que hace referencia el Art. 29 de esta Ley estarán exentas de todo tributo.

CAPITULO VII

DE LAS EXONERACIONES E INCENTIVOS

Art. 49.— EXONERACION TRIBUTARIA.— No pagarán ningún tributo fiscal seccional, especial y adicional, excepto los señalados en esta Ley, los siguientes actos, permisos y contratos mineros:

a) Los de prospección, exploración, explotación, beneficio, fundición, refinación y comercialización interna y externa de minerales;

b) La constitución y aumento de capital de compañías que tengan por objeto la realización de actividades mineras y el aporte de bienes, inclusive inmuebles, para la integración del capital de esas compañías, la reforma de estatutos sociales, la emisión, canje o fraccionamiento de títulos sociales y la domiciliación de empresas mineras extranjeras;

c) Los de mutuo, destinados a financiar inversiones mineras o adquisición de maquinarias, equipo y materiales para la actividad minera, de garantía de esos préstamos, de constitución y cancelación de gravámenes reales o de otro tipo de seguridades sobre dichos préstamos;

d) Los seguros de bienes, instalaciones y equipos destinados a la actividad minera;

e) Los de cesión de contratos o derechos mineros, y,

f) Las reinversiones de capital que se efectúen en el sector minero.

Art. 50.— EXONERACION TRIBUTARIA ADUANERA.— Exonérase de los impuestos aduaneros la importación de equipos, maquinarias, repuestos, insumos y otros materiales necesarios para la actividad minera, durante el tiempo de vigencia de los permisos y contratos mineros, siempre que los mismos no se produzcan en la calidad requerida dentro del país.

Los dictámenes de los Ministerios correspondientes deberán ser expedidos en un plazo no mayor de 15 días contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Después de este plazo el silencio administrativo se tomará como informe favorable.

Art. 51.— TRASPASO DE ARTICULOS LIBERADOS.— Con el informe favorable del INEMIN, podrá efectuarse el traspaso o enajenación a terceros de artículos importados con liberación de los derechos aduaneros, cuando no fueren por más tiempo utilizados en el trabajo de la empresa interesada, una vez que sean evaluados por el Ministerio de Finanzas y Crédito Público, en cuyo caso se cobrará la parte proporcional de los derechos aduaneros.

Si el traspaso o enajenación se hiciere a otra persona natural o jurídica con derecho a la liberación de impuestos aduaneros y adicionales, sólo se requerirá el informe favorable del INEMIN.

Art. 52.— ADMISION TEMPORAL.— La admisión temporal al país de maquinaria o equipos mineros, podrá hacerse con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica de Aduanas.

Art. 53.— ARRENDAMIENTOS Y PRESTAMOS DE USO.— Los contratos de arrendamiento y préstamos de uso de maquinaria y equipos importados con exoneraciones arancelarias para fines de actividad minera, requerirán de la autorización del INEMIN, siempre que tales bienes sean destinados a actividades mineras.

Art. 54.— AMORTIZACION DE INVERSIONES.— Los organismos competentes mediante el acto administrativo pertinente, podrán dar tratamientos preferenciales para la aplicación de la amortización de las inversiones realizadas en cualquiera de las fases de la actividad minera.

Art. 55.— DEDUCCIONES AL IMPUESTO A LA RENTA.— Las personas naturales o jurídicas que intervengan en empresas mineras o existentes, mediante aporte para la integración o aumento de capital, podrán deducir del impuesto sobre la renta, el cincuenta por ciento del monto a que asciende la aportación efectuada a la compañía minera respectiva.

CAPITULO VIII

DE LAS EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES

Art. 56.— EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES.— Las expropiaciones y servidumbres se regirán por las disposiciones vigentes en los Códigos Civil y de Procedimiento Civil.

CAPITULO IX

DE LAS CONTROVERSIAS JUDICIALES EN MATERIA MINERA

Art. 57.— DE LAS LEYES APLICABLES.— Todas las controversias derivadas de la aplicación de la presente Ley se ventilarán ante los Jueces Competentes conforme a la Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley Orgánica de la Función Judicial y el Código de Procedimiento Civil, con las excepciones en esta Ley previstas.

El Estado o el INEMIN intervienen en calidad de demandados y si la controversia se refiere a un contrato entre el INEMIN y una persona natural o jurídica privada se observará lo previsto en el Art. 17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

En los demás casos las controversias serán resueltas en primera instancia por los Jueces de lo Civil y, en segunda, por las Cortes Superiores.

Art. 58.— DE LA LITIS Y EL PROCEDIMIENTO.— Presentada la demanda, el juez que la conozca correrá traslado al demandado para que la conteste en el término de veinte días. Al tiempo de contestar la demanda, el demandado podrá reconvenir al actor, en cuyo caso se concederá a éste un término de veinte días para que conteste la reconvenición.

Contestada la demanda o la reconvenición, según el caso, el juez convocará a una audiencia oral durante la cual se presentarán y practicarán todas las pruebas y se escucharán las exposiciones de las partes. Si fuere necesario realizar inspecciones, que antes no se las hubiere practicado, podrá suspenderse la audiencia con tal exclusivo fin, si el juez considera indispensable la inspección.

Terminada la audiencia, el juez dictará sentencia, contra la cual podrá interponerse recursos de apelación.

Art. 59.— SEGUNDA INSTANCIA.— En segunda instancia cualquiera de las partes podrá solicitar una audiencia oral para aportar nuevas pruebas.

Art. 60.— RECURSO DE CASACION.— De la sentencia que se dicte en segunda instancia únicamente podrá interponerse dentro de 10 días o interpreta-

ción errada de esta Ley o de la Constitución Política del Estado, en la sentencia. El recurso de casación será conocido por la Corte Suprema de Justicia en pleno o por las salas restantes, si la sentencia de segunda instancia fue dictada por una de las Salas de la Corte Suprema de Justicia. Los fallos que dicte la Corte Suprema al resolver sobre los recursos de casación constituirán precedente de aplicación obligatoria de esta Ley.

Art. 61.— **TRAMITACION DEL RECURSO.**— Recibido el proceso en el que conste la sentencia contra la cual se hubiere interpuesto el recurso de casación, el Presidente de la Corte Suprema o el Presidente de la Sala siguiente a aquella que hubiere dictado la sentencia de segunda instancia, dispondrá que el recurrente formalice el recurso en el término de 10 días, expresando concreta y específicamente cuál es la norma de la Constitución o de la Ley que ha sido infringida en la sentencia. La Corte Suprema, de encontrar fundado el recurso, por las razones expuestas por el recurrente, lo aceptará y dictará la sentencia que corresponda, corrigiendo el error de derecho en que se hubiere incurrido en la sentencia impugnada.

Si el recurrente no formalizare el recurso dentro del término concedido, la Corte se limitará a declararlo desierto.

Si la Corte Suprema estimare que el recurso es infundado lo rechazará, y si estimare que se lo interpuso para retardar la ejecución de la sentencia impondrá al recurrente la multa que estimare adecuada según la naturaleza del asunto controvertido y lo condenará al pago de las costas procesales.

Art. 62.— **NORMA SUPLETORIA.**— En todo lo no previsto en este capítulo se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, especialmente aquellas referentes al proceso ordinario.

Art. 63.— **CONSULTORIA Y ARBITRAJE.**— En los contratos mineros se puede estipular, con el dictamen previo del Procurador General del Estado, cláusulas de consultoría y arbitraje relacionadas únicamente con controversias de carácter técnico o económico, que se suscitaren entre el INEMIN y los contratistas, en especial en los aspectos referentes a la fijación de las tasas de producción de los yacimientos y al escogimiento de tecnologías apropiadas de explotación minera.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 64.— **DERECHO DEL RENUNCIANTE.**— La denuncia de un yacimiento debidamente comprobada por el INEMIN, dará derecho preferente al denunciante para el otorgamiento de permisos o la suscripción del contrato pertinente.

Igualmente el denunciante, tendrá derecho preferente en caso de requerirle, para la asistencia técnica.

Art. 65.— **SUJECCION REGLAMENTARIA.**— La prospección, exploración y explotación de yacimientos mineros de los fondos marinos se regulará por las normas establecidas en el Reglamento General de la presente Ley.

Art. 66.— **AUTORIZACION PARA LA CESION DE DERECHOS.**— La cesión o transferencia a terceros de derechos provenientes de un contrato o permiso minero será nula, si no procede la correspondiente autorización del Directorio del INEMIN.

Art. 67.— **LÍMITE DE CONTRATOS Y PERMISOS.**— Una persona natural o jurídica podrá mantener al mismo tiempo hasta tres permisos y dos contratos para las fases subsiguientes.

Art. 68.— **RELACION LABORAL.**— En todas las fases de la actividad minera, sólo el contratista tendrá el carácter de empleador frente a sus trabajadores.

Art. 69.— **COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS.**— Las personas naturales o jurídicas que exploten, beneficien, fundan o refinen minerales, venderán los productos finales en el mercado interno. Sólo cuando la producción exceda la demanda interna del país, el Directorio del INEMIN podrá autorizar mediante el correspondiente acto administrativo y previo informe favorable del Ministerio competente, la exportación del excedente.

Art. 70.— **MUERTE DEL CONTRATISTA.**— En caso de fallecimiento de una persona natural que mantenga un contrato minero se aplicarán las normas del Código Civil sobre la sucesión testamentaria o intestada. Sin embargo quienes tuvieren derecho a suceder al causante, deberán manifestar su voluntad de mantener el permiso o el contrato minero, dentro del plazo de 180 días desde el fallecimiento.

Art. 71.— **JURISDICCION Y COMPETENCIA.**— Las personas naturales o jurídicas extranjeras que realicen actividad minera en el país, se registrarán por las leyes ecuatorianas y se someterán a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales del Ecuador.

Art. 72.— **CARTAS GEOLOGICAS.**— Las áreas autorizadas para ejecutar los estudios y trabajos geológicos-mineros de prospección, exploración y explotación, serán definidas en cartas actualizadas, elaboradas por el Instituto Geográfico Militar. Las áreas mineras serán polígonos cuyos lados se orienten paralela y perpendicularmente al meridiano astronómico, con excepción de los lavaderos y placeres que se sujetarán al respectivo reglamento.

Art. 73.— **MAPA CATASTRAL MINERO.**— El INEMIN deberá anualmente publicar el mapa catastral minero indicando las áreas libres que no se encuentren contratadas ni concedidas permiso.

Art. 74.— **RESPONSABILIDAD DEL INEMIN Y DE SUS FUNCIONARIOS.**— El INEMIN estará obligado a indemnizar a los particulares por los perjuicios que les irroque como consecuencia de los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios o empleados en el desempeño de sus cargos.

El INEMIN, en tal caso, tendrá derecho de repetición y hará efectiva la responsabilidad del funcionario o empleado que, por dolo o culpa grave judicialmente declarada, hubiere causado los perjuicios. La responsabilidad penal de tales funcionarios y empleados será establecida por los Jueces Competentes.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.— Las personas naturales o jurídicas que hubieron obtenido contratos o derechos de acuerdo con la antigua Ley de Fomento Mincero, podrán acogerse a las disposiciones de la presente Ley, si así lo manifiestan dentro del plazo que se exprese en el reglamento. De no hacerlo, subsistirán los derechos y obligaciones que adquirieron bajo las normas anteriores.

Las solicitudes en trámite se sujetarán a las normas de esta Ley y sus reglamentos, de conformidad con la Regla 20 del Art. 7 del Código Civil.

SEGUNDA.— El personal de la actual Dirección General de Geología y Minas pasará a formar parte del INEMIN, de acuerdo con los Reglamentos Orgánicos-funcionales respectivos.

Durante los tres primeros años, contados a partir de la expedición de la presente Ley, el INEMIN podrá solicitar en comisión de servicios a funcionarios de otras instituciones en caso de necesidad de personal adicional.

TERCERA.— Los procesos judiciales en trámite ante el Juez Especial de Minas continuarán sustanciándose en primera instancia ante él de conformidad con las normas procesales vigentes. De la sentencia que dicte el Juez Especial de Minas se podrá interponer los recursos establecidos en esta Ley.

CUARTA.— Para la aplicación de esta Ley, el Presidente de la República dictará los reglamentos que sean necesarios.

DISPOSICION FINAL.— Derógase las disposiciones legales generales o especiales, Reglamentos y Regulaciones de Minería anteriores a la expedición de la presente Ley y sus Reglamentos, en especial los Decretos Nos. 101 y 102 de 24 de enero de 1974, publicados en el Registro Oficial N° 484, de 31 de enero del mismo año.

La presente Ley por su carácter de especial, prevalece sobre todas las disposiciones legales que se le opongan y entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la Sala de Sesiones del H. Congreso Nacional, a

Promúlguese en el Registro Oficial como Decreto Ley N° 06 de conformidad con el Art. 65 de la Constitución Política de la República del Ecuador.

Quito, agosto 21 de 1985.

f.) León Febres-Cordero Ribadeneyra, Presidente Constitucional de la República.

Es fiel copia del original.— Lo certifico:

f.) Ab. Joffre Torbay Dassum, Secretario General de la Administración Pública.

CONGRESO NACIONAL

OF. N° 2421-SCN-85

Quito, 9 de agosto de 1985.

Señor Ingeniero

León Febres Cordero Ribadeneyra

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE REPUBLICA

En su Despacho.—

Señor Presidente:

Cúmplenle comunicar a usted que el Plenario de las Comisiones Legislativas, en sesión efectuada el día jueves 8 de agosto del año en curso y siguiendo el trámite constitucional de conformidad con el Art. 95 del Reglamento Interno del Congreso Nacional, NEGO los siguientes proyectos remitidos por usted y calificados de URGENTES en materia económica:

— Ley Modificatoria de la Ley N° 182 reformativa de la Ley de Desarrollo de Vialidad Agropecuaria y de Fomento de Mano de Obra y de Creación del Fondo Nacional de Saneamiento Ambiental, Fondo Nacional de Forestación y Reforestación, en su artículo 7, inciso segundo y tercero.

— Ley que introduciría varias reformas a la Ley General de Bancos.

— Ley que tiene por objeto reformar la Ley de Compañías Financieras

— Ley Reformatoria de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control y de la Ley de Regulación Económica y de Control del Gasto Público.

— Reformas a la Ley de Cambios Internacionales.

— Ley Reformatoria de la Ley de Desarrollo de Vivienda de Interés social.

— Ley que tiene por objeto introducir reformas a la Ley de Régimen Monetario.

— Ley que tiene por objeto reformar la Ley Básica de Electrificación.

— Ley Reformatoria de la Ley de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana.

— Ley Reformatoria de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero.

— Ley Reformatoria a la Ley Estatutaria del Banco de Desarrollo del Ecuador S.A.

— Ley de Minería.

— Ley de Reformas a la Ley Orgánica de Aduanas.

— Ley Tributaria a los Fletes Marítimos.

Con esta ocasión le expreso el testimonio de mi distinguida consideración.

Atentamente,

f.) Francisco Garcés Jaramillo, Secretario General.

Es fiel copia del original.— Lo certifico:

f.) Ab. Joffre Torbay Dassum, Secretario General de la Administración Pública.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Oficio N° 65-1496-DAJ.

Quito, agosto 16 de 1985.

Señor doctor

Averroes Bucaram

PRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL

Presente.—

Señor Presidente:

ANEXO

8

REGISTRO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

EL ECUADOR HA SIDO, ES Y SERA PAIS AMAZONICO

Administración del Sr. Ing. León Febres Cordero Ribadeneyra,
Presidente Constitucional de la República

AÑO II — QUITO, MARTES 27 DE AGOSTO DE 1985 — NUMERO 258

DIRECTOR

Oficio N° 85-1409-DAJ
Quito, agosto 7 de 1985.

VICENTE ANDA MANOSALVAS

Teléfonos:

Dirección: 212-564
Distribución (Almacén) 212-766

Señor Ingeniero
Raúl Baca Carbo
PRESIDENTE DEL II. CONGRESO NACIONAL
En su Despacho.-
Señor Presidente:

IMPRESO EN EDITORA NACIONAL.

Tiraje: 19.000 ejemplares.— Valor \$ 10,00
Edición: 39 páginas

Subscripción anual \$ 1.000,00

SUMARIO:

FUNCION EJECUTIVA

DECRETO LEY:

- 15 Reformas a la Ley de Licitaciones y Concurso de Ofertas 1

DECRETO:

- 1061 Reglamento para la distribución de Bienes Muebles Obsoletos y Fuera de Uso 9

ACUERDOS:

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO:

- 917 Reglamento de Responsabilidades 10
918 Reglamento de Bienes 17
914 Instructivo de Reajuste de Precios 29
915 Reglamento de Registro de Contratos 35
916 Acuerdo que regula la aplicación del cinco por mil para la Procuraduría General ... 39

Con oficio N° 85-1353-DAJ, de 1° de agosto de 1985, en ejercicio de la facultad que me confiere la Constitución Política someti a su consideración y del Congreso Nacional un proyecto de Ley que tiene por objeto reformar la Ley de Licitaciones y Concurso de Ofertas.

Como por algún error no se incluyó una de las páginas que contenía parte de las reformas a dicha ley, someto hoy dicho proyecto de Ley, en materia económica y que lo califico de URGENTE a consideración del Congreso Nacional.

En consecuencia, se dará a dicho proyecto de Ley el trámite previsto en el inciso tercero del artículo 55 de la Constitución Política y se tomará en cuenta lo previsto en el inciso cuarto del mismo artículo.

Le reitero con esta oportunidad los sentimientos de mi distinguida consideración.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD,
f.) León Febres Cordero Ribadeneyra, Presidente Constitucional de la República.

Es copia.— Lo certifico:
f.) Ab. Joffre Torbay Dassum, Secretario General de la Administración Pública.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La aceleración de la inversión pública a base, fundamentalmente, del ahorro nacional y la expansión consecuente de la oferta de empleo, dependen en muy alto grado de las normas jurídicas que regulan la contratación pública.

Existen numerosos problemas que afectan negativamente a la contratación pública y particularmente a la contratación pública para la inversión. El solu-

cionar, sino todos, al menos los más importantes y urgentes problemas que se originan en la legislación, traerá como consecuencia el crecimiento racional de la inversión y la mayor oferta de trabajo.

Algunos de los más importantes problemas de la contratación pública que tienen su raíz en las normas jurídicas vigentes, se refieren a la órbita sobre la que se exigen los requisitos de la licitación o concurso; al régimen de excepción; al financiamiento; a los aspectos formales de la contratación y a la resolución de los contratos.

La expansión del gasto público ha elevado las cifras del presupuesto del Estado, y como consecuencia, ha elevado la cuantía de la licitación y el concurso, que en 1985 para la primera llega a \$ 43'245.566,40; y, para el segundo llega a \$ 21'622.783,20. Estas últimas cifras han marginado indebidamente del requisito de licitar y concursar a numerosos contratos, especialmente de entidades públicas del régimen seccional y de otros niveles de Gobierno que económica y presupuestariamente manejan recursos menores.

Para solucionar este problema se juzga conveniente modificar el coeficiente que consta en el artículo segundo disminuyéndolo a cinco cien milésimas.

El régimen de excepción que está establecido especialmente en los artículos 3 y 5 de la Ley trae normas, imprecisas unas, e inconvenientes otras, que deben ser reformadas. Con este fin el proyecto de reformas favorece al capital y a la tecnología nacionales en los casos que el Presidente de la República autorice exonerar del requisito de la licitación o concurso.

Asimismo, el proyecto de reformas precisa mejor el alcance de la exoneración cuando ésta se fundamenta en convenios con gobiernos extranjeros.

La vigente ley cuando se trata de las garantías para el fiel cumplimiento del contrato y para su debida ejecución y la buena calidad de los materiales, establece tasas fijas de interés que no concuerdan con la realidad de la economía; cuando regula la amortización del anticipo, impone normas que contradicen la realidad de los saldos por pagar del contratista que recibió el anticipo; y, no contempla normas claras sobre la programación física y la presupuestación financiera de las obras. Estas dificultades son resueltas por el proyecto de reformas mediante el establecimiento de tasas de interés reales, la correspondencia proporcional del saldo del anticipo por amortizar con el valor de la garantía y la exigencia de que las obras públicas se sometan necesariamente a un racional programa de avance físico y se sustenten en un efectivo y real financiamiento.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Un comentario especial merece el asunto relativo a los contratos complementarios: éstos en la vigente ley no están debidamente definidos. Las reformas ubican exactamente el problema del contrato complementario y regulan con claridad los casos de su celebración.

En la legislación vigente la recepción provisional y definitiva de las obras, bienes y servicios, la subdivisión de contratos y la terminación de los mismos

son cuestiones que tienen vacíos, imprecisiones y ambigüedades que deben desaparecer.

Con el proyecto de reformas se puntualiza la obligación de la recepción provisional; se clarifica qué ha de entenderse por subdivisión de contratos y se especifican los casos y los pasos necesarios para la terminación unilateral de los convenios o para la terminación por mutuo consentimiento. Finalmente, el proyecto señala la fuente de financiamiento para el Presupuesto del Estado que permitirá incrementar las rentas de la Procuraduría General del Estado.

El contenido y los efectos del proyecto de reformas tienen naturaleza preponderantemente económica y carácter urgente por lo que es indispensable tramitarlo en armonía con lo previsto en el artículo 65 inciso cuarto de la Constitución Política.

Es copia.— Lo certifico:

f.) Ab. Joffre Torbay Dassum, Secretario General de la Administración Pública.

EL H. CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que el proceso de contratación pública en el Ecuador viene atravesando una serie de problemas de orden técnico, administrativo, económico y jurídico, a consecuencia de los cuales numerosas instituciones realizan esfuerzos de diferente naturaleza para superar tales limitaciones, propiciando una exoneración a los procesos de licitaciones o concursos de ofertas y acelerando la toma de decisiones ante la necesidad de realizar obras, prestar servicios y utilizar oportunamente los recursos presupuestarios;

Que la experiencia recogida por las instituciones de control, entidades contratantes y contratistas ha llevado a la conclusión unánime de que es imprescindible modernizar la legislación de contrataciones en el país, a cuyo efecto se han propuesto en el pasado proyectos de ley y reglamentaciones específicas, que no han prosperado hasta la fecha;

Que ante la ineludible necesidad de atender un clamor nacional en tan importante materia, la Contraloría General del Estado ha sistematizado las inquietudes antes citadas, actualizándolas con los requerimientos que demanda la sociedad ecuatoriana representada por las entidades contratantes del sector público y por las más representativas entidades privadas agrupadas en los colegios profesionales de Ingeniería Civil, Cámaras de la Construcción, Federaciones Nacionales de Constructores y demás asociaciones paralelas, incluyendo al sector financiero;

Que es fundamental democratizar la contratación pública en el Ecuador para que accedan a ella cada vez en mayor proporción profesionales y empresas pequeñas y medianas; y a la vez, salvaguardar el derecho primigenio de los constructores ecuatorianos para realizar las obras nacionales aprovechando al máximo los recursos técnicos y humanos del país;

Que por similares razones es preciso perfeccionar la contratación pública jerarquizando el aporte y el riesgo de contratantes, profesionales y constructores,

ceso ejecutivo, para cuyo efecto la entidad contratante devolverá el documento de la garantía bancaria o póliza de seguros con la certificación de la máxima autoridad de la entidad contratante sobre el hecho de haberse pagado su valor e el monto pagado del mismo. La devolución y la certificación se harán constar en el mismo documento, el cual constituirá título ejecutivo".

Art. 11.— A continuación del Art. 51 añádase uno que dirá: "TERMINACION POR MUTUO ACUERDO.— Cuando por circunstancias de orden imprevisto sean técnicas o económicas o causas de fuerza mayor o caso fortuito no fuere posible o conveniente, a juicio de la entidad contratante, continuar con la ejecución del contrato, las partes podrán por mutuo consentimiento extinguir todas o algunas de las obligaciones contractuales en el estado en que se encuentre su ejecución.

El convenio para la terminación del contrato por mutuo consentimiento requerirá el dictamen previo favorable del Procurador General del Estado, quien lo emitirá en el plazo de quince días contados a partir de la fecha de recepción de los documentos. De no hacerlo en este plazo se entenderá que el dictamen es favorable.

La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la entidad contratante o del contratista".

Art. 12.— El texto del Art. 57 reemplácese por el siguiente: "Los contratos, originales o complementarios, a los que se refiere esta Ley y cuya cuantía sea igual o superior a la establecida para el concenso de ofertas estarán sujetos al impuesto de timbres del 5 por mil que será pagado por el contratista, quien además pagará los derechos notariales y, si fuera del caso, los derechos de registro así como de las copias que debe entregar a la entidad contratante. Los contratos cuya cuantía sean inferiores al monto indicado, no estarán sujetos a tal impuesto de timbres.

Las disposiciones de este artículo prevalecerán sobre las contenidas en la Ley de Timbres y la tarifa que se crea en virtud de esta disposición se añade al Art. 41 de la mencionada Ley.

Salvo lo previsto en este artículo la celebración e inscripción de los contratos a que se refiere esta Ley están libres de impuestos".

Art. 13.— Suprímase el Art. 58 y añádase después del Art. 57 lo siguiente:

"Capítulo VIII.— Las controversias judiciales sobre contratos con el Estado e instituciones del sector público"

Art. 58.— Las controversias derivadas de los contratos celebrados por el Estado y las instituciones del sector público se ventilarán ante los jueces competentes conforme a la Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley Orgánica de la Función Jurisdiccional y Código de Procedimiento Civil.

Si el Estado o una entidad del sector público es demandada por una persona natural o jurídica de derecho privado se aplicará lo previsto en el Art. 17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

En los demás casos las controversias serán resueltas en primera instancia por los jueces de lo civil y, en segunda, por las Cortes Superiores.

El procedimiento para las causas previstas en los tres incisos anteriores será el que regula en los artículos siguientes.

Art. 59.— Presentada la demanda, el juez que la conozca correrá traslado al demandado para que la conteste en el término de 20 días. Al tiempo de contestar la demanda, el demandado podrá reconvenir al actor, en cuyo caso se concederá a éste un término de 20 días para que conteste la reconvencción.

Contestada la demanda o la reconvencción, según el caso, el juez convocará a una audiencia oral durante la cual se presentarán y practicarán todas las pruebas y se escucharán las exposiciones de las partes. Si fuere necesario realizar inspecciones, que antes no se las hubiere practicado, podrá suspenderse la audiencia, con tal exclusivo fin, si el juez considera indispensable la inspección.

Terminada la audiencia, el juez dictará sentencia, contra la cual podrá interponerse recurso de apelación.

Art. 60.— En segunda instancia cualquiera de las partes podrá solicitar una audiencia oral para aportar nuevas pruebas.

Art. 61.— De la sentencia que se dicte en segunda instancia únicamente podrá interponerse, dentro de 10 días de notificada, recurso de casación por violación, aplicación indebida o interpretación errada de alguna Ley sustantiva o de la Constitución Política del Estado, en la sentencia. El recurso de casación será conocido por la Corte Suprema de Justicia en pleno, si la sentencia fue dictada por alguna Corte Superior o por las Salas restantes de la Corte Suprema, si la sentencia de segunda instancia fue dictada por una de las Salas de la Corte Suprema. Los fallos que dicte la Corte Suprema al resolver sobre los recursos de casación constituirán precedentes de aplicación obligatoria de la Ley.

Art. 62.— Recibido el proceso en el que consta la sentencia contra la cual se hubiere interpuesto el recurso de casación, el Presidente de la Corte Suprema o el Presidente de la Sala siguiente a aquella que hubiere dictado la sentencia de segunda instancia, dispondrá que el recurrente formalice el recurso en el término de 10 días expresando concreta y específicamente cuál es la norma de la Constitución o la Ley que ha sido infringida en la sentencia. La Corte Suprema, de encontrar fundado el recurso, por las razones expuestas por el recurrente lo aceptará y dictará la sentencia que corresponda, corrigiendo el error de derecho en que se hubiere incurrido en la sentencia impugnada.

Si el recurrente no formalizare el recurso dentro del término concedido, la Corte se limitará a declararlo desierto.

Si la Corte Suprema estimare que el recurso es infundado, lo rechazará, y si estimare que se lo interpuso para retardar la ejecución de la sentencia, impondrá al recurrente la multa que estimare adecuada según la naturaleza del asunto controvertido y le condenará al pago de las costas procesales.

Art. 63.— En lo no previsto en esta Ley se aplicará las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, especialmente aquellas referentes al proceso ordinario.

DISPOSICION TRANSITORIA.— El impuesto de timbres del 5 por mil que se establece en esta Ley ingresará al Presupuesto General del Estado y permitirá por intermedio de éste que se asignen los nuevos recursos que demande el funcionamiento de la Procuraduría General del Estado.

Art. FINAL.— El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en Quito, en el Palacio Legislativo, a Promúlguese en el Registro Oficial como Decreto Ley N° 15 de conformidad con el artículo 65 de la Constitución Política de la República del Ecuador.

Quito, agosto 26 de 1985.

1.) León Febres-Cordero Ribadeneyra, Presidente Constitucional de la República.

Es copia.— Lo certifico.

1.) Jeffre Torbay Dassum, Secretario General de la Administración Pública.

N° 1061

LEON FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA
Presidente Constitucional de la República

Considerando:

Que el 23 de noviembre de 1983 se publicó, en el Registro Oficial N° 625, el Reglamento para la distribución de bienes muebles obsoletos en favor de los Colegios Técnicos del país, para aplicación de la Ley N° 60 promulgada en el Registro Oficial N° 427 del 27 de abril de 1981;

Que tal reglamentación no aclara los procedimientos específicos para la ejecución de la mencionada Ley, y

En ejercicio de las atribuciones concedidas en los literales a) y c) del Art. 71 de la Constitución Política, en el Art. 9 de la Ley de Régimen Administrativo y en la disposición transitoria de la Ley N° 60,

DECRETA:

EL SIGUIENTE REGLAMENTO PARA LA DISTRIBUCION DE BIENES MUEBLES OBSOLETOS O FUERA DE USO, en favor de los Colegios Técnicos del país

Art. 1º.— Para proceder a la transferencia de los bienes muebles obsoletos o fuera de uso, de propiedad del Estado, en favor de los colegios técnicos del país, como lo dispone la Ley N° 60 promulgada en el Registro Oficial N° 427 del 27 de abril de 1981, se verificarán los bienes muebles de las entidades del sector público en la forma establecida en las Normas Técnicas de Control Interno N° 131-05 y N° 133-04, relacionadas con la constatación física, inventarios y

activos fijos y se determinará el grado de depreciación u obsolescencia de dichos bienes de acuerdo a los métodos contables y a los Principios de General Aceptación, referentes al registro de Activos A-1, inciso segundo, A-8 A-14 y A-19 y los que fueren aplicables.

En lo que no esté señalado en este reglamento, se aplicarán las disposiciones del Reglamento de Bienes, en la parte que fuere procedente.

Art. 2º.— Las entidades transferentes serán las que se señalan en el artículo 1º de la Ley N° 60 y los Colegios Técnicos del país serán los fiscales, fisco-misionales, municipales y particulares.

Los bienes muebles obsoletos o fuera de uso, materia de la citada ley y de esta reglamentación, serán exclusivamente los que están considerados en el respectivo código del Clasificador de Gastos (Registro Oficial N° 224 del 15 de enero de 1973), estos son: vehículos, subgrupo 440; máquinas, ítems 421 y 451 al 454; equipos electrónicos y eléctricos, ítems 432 al 436; y, herramientas, ítems 461 al 464.

Art. 3º.— El máximo directivo de las instituciones y dependencias citadas en el artículo 1º de la Ley N° 60 mencionada, dispondrá que la Dirección Financiera o la unidad que haga sus veces, aplique los procedimientos de verificación, alistamiento y determinación del grado de depreciación u obsolescencia a que se refiere el artículo 1º de este Reglamento, a fin de cumplir con el mandato legal de la transferencia anual de los bienes muebles en forma gratuita a los Colegios Técnicos del país.

Art. 4º.— Los procedimientos que dispone el artículo precedente, serán cumplidos anualmente al final de cada ejercicio económico y los respectivos documentos elaborados por la entidad transferente se presentarán al Departamento de Educación Técnica del Ministerio de Educación y Cultura hasta el 30 de enero del siguiente año, dicho departamento dispondrá que una comisión especial analice los datos consignados en la documentación e informe acerca de la distribución que estime conveniente a favor de los colegios técnicos, siguiendo el orden establecido en su clasificación, de acuerdo a las necesidades que consten en la información que al respecto se hubiere obtenido.

Art. 5º.— El informe de la comisión especial será presentado al Subsecretario de Educación, para su aprobación.

Art. 6º.— Sobre la base del informe aprobado, el Departamento de Educación Técnica, dentro del primer trimestre del año elaborará el cuadro de distribución, de acuerdo a la calificación de las necesidades, en el que se señalará los colegios técnicos beneficiarios y los bienes que a cada uno se asignarán.

Art. 7º.— Un ejemplar de la documentación, una vez aprobada, será enviado a la sede de la Contraloría General del Estado, o a su Dirección Regional o Delegación Provincial, según la jurisdicción de la entidad que entregare los bienes.

ANEXO

9

REGISTRO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

EL ECUADOR HA SIDO, ES Y SERA PAIS AMAZONICO

Administración del Sr. Ing. León Febres Cordero Ribadeneyra,
Presidente Constitucional de la República

AÑO II — QUITO, JUEVES 29 DE MAYO DE 1986 — NUMERO 446

Teléfonos:

Of. N° 86-1243-DAJ

Dirección: 212-984
Distribución (Almacén): 212-768

Quito, 13 de mayo 1986

Impreso en Editora Nacional

Tiraje: 23.000 ejemplares.— Valor \$ 10,00
Edición: 16 páginas

Subscripción Anual \$ 1.500,00

SUMARIO:

FUNCION EJECUTIVA:

DECRETOS LEYES:

- | | |
|--|---|
| 24 Reformas a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley Tributaria para la contratación de Prestación de Servicios en la Exploración de Hidrocarburos | 3 |
| 26 Ley de Fomento Artesanal | 9 |

ACUERDOS:

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL:

- | | |
|--|----|
| 263 Declárase terminada la intervención de la Cooperativa de Vivienda "Consejo Provincial del Guayas", domiciliada en la ciudad de Guayaquil | 14 |
|--|----|

MINISTERIO DE TRABAJO:

- | | |
|--|----|
| 127 Refórmase el estatuto del Gremio de Maestros Sastres y Modistas de Catacocha, provincia de Loja | 14 |
| 129 Autorízase el funcionamiento del Centro "Hogar Mercedes de Jesús Molina", domiciliado en esta ciudad | 15 |
| 130 Apruébase el estatuto del Gremio de Maestros Reconstructores de Baterías Guayaquil, de la provincia del Guayas | 15 |

MINISTERIOS DE INDUSTRIAS Y DE SALUD:

- | | |
|--|----|
| DNI-214 Revisanse los precios de venta de varios productos farmacéuticos de la Casa Moeller Martínez C.A. | 15 |
|--|----|

Señor Doctor
AVERROES BUCARAM
PRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL
En su Despacho.

Señor Presidente:

En uso de la facultad que me confiere el Art. 65 de la Constitución Política someto a consideración del Congreso Nacional el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley Tributaria para la Contratación de Prestación de Servicios en la Exploración de Hidrocarburos, con su respectiva exposición de motivos.

Como se trata de un proyecto de Ley en materia económica, cuya inmediata expedición exige el desarrollo del sector petrolero ecuatoriano, lo califico como Urgente, por lo que, para su tramitación, se observará el procedimiento previsto en el inciso cuarto del mencionado Art. 65 de la Constitución Política.

Se tomará en cuenta, además, lo dispuesto en el inciso tercero del mismo artículo.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, el testimonio de mi distinguida consideración.

Muy atentamente,

(s) Ing. León Febres Cordero Ribadeneyra,
Presidente Constitucional de la República.

Es fiel copia.— Lo certifico:

(s) Ab. Joffre Torbay Dassan, Secretario General de la Administración Pública.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para nadie es desconocida la crisis en que se debate el mercado petrolero mundial, la cual debe ser afrontada por los países productores de una manera decisiva y dinámica, adoptando medidas apropiadas y conducentes para la superación de esta gravosa situación.

Una de estas medidas, y muy fundamental, es la reforma legal que permita un mayor y más óptimo aprovechamiento de los recursos petroleros existentes, ya que un marco jurídico idóneo es garantía para su correcta utilización.

En la actualidad nuestro sistema legislativo limita a uno solo el número de contratos que el Estado pueda convenir con una misma empresa de la región amazónica. Este hecho resulta perjudicial para los intereses del Fisco en la medida que impide un beneficio mayor de compañías que hayan demostrado eficiencia y responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

La reforma propuesta a la Ley de Hidrocarburos se orienta a salvar este impedimento, abriendo la posibilidad para una contratación más amplia por parte del Estado y promoviendo, al mismo tiempo, la participación laboriosa de importantes empresas que a través de su seriedad y solvencia, aseguren un óptimo aprovechamiento de nuestra mayor fuente de riqueza económica.

Por otra parte, no se desconoce que esta posibilidad que habilita a una firma particular a la suscripción de varios contratos de exploración y explotación hidrocarburífera, no desvirtúa el concepto de riesgo exploratorio de las inversiones, que corresponde en modo exclusivo al contratista.

Con este criterio se ha introducido una segunda enmienda a la Ley mencionada y se ha hecho extensión, por coherencia, a la Ley Tributaria para la Contratación de Prestación de Servicios en la Exploración de Hidrocarburos.

Hay el pleno convencimiento que a través de la reforma planteada se contribuirá eficazmente al incremento de la actividad exploratoria hidrocarburífera en el país y al hallazgo de nuevas reservas.

Es fiel copia.— Lo certifico:

1.) Ab. Joffre Torbay Dassum, Secretario General de la Administración Pública.

EL H. CONGRESO NACIONAL

EL PLENARIO DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS

Considerando:

Que el Art. 21 de la Ley de Hidrocarburos, reformado mediante Ley N° 101, publicado en el Registro Oficial N° 306, de 13 de agosto de 1982, limita el número de contratos que CEPE puede celebrar con un mismo contratista, así como el número y ubicación geográfica de bloques a ser adjudicados a una misma empresa;

Que esta limitación podría ser perjudicial a los intereses del Estado cuando una empresa demostrando su capacidad técnica y financiera y su respeto a las leyes y reglamentos del país, como contratista de un contrato de exploración y explotación de hidrocarburos, se ve impedida de celebrar otro contrato similar con CEPE;

Que la celebración de más de un contrato para la exploración y explotación de hidrocarburos, no debe

desvirtuar el concepto del riesgo exploratorio de las inversiones, el cual corresponde exclusivamente al contratista;

Que es necesario incrementar la actividad exploratoria y la búsqueda de nuevas reservas hidrocarburíferas del país;

Que mediante Ley N° 102 de 6 de agosto de 1982, publicada en el Registro Oficial N° 306, de 13 de los mismos mes y año, se expidió la Ley Tributaria para la contratación de prestación de servicios en la explotación y explotación de hidrocarburos, y

En ejercicio de la atribución que le concede el Art. 66 de la Constitución Política de la República,

Expide:

LAS SIGUIENTES REFORMAS A LA LEY DE HIDROCARBUROS Y A LA LEY TRIBUTARIA PARA LA CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS EN LA EXPLORACION DE HIDROCARBUROS:

Art. 1.— Los incisos tercero y cuarto del Art. 21 de la Ley de Hidrocarburos, reformado por el Art. 8 de la Ley 101, dirán:

"Si conviniere a los intereses del Estado, el Comité Especial de Licitación, CEL, podrá adjudicar más de un contrato a un mismo contratista".

"En caso de que un mismo contratista suscriba más de un contrato para la exploración y explotación de hidrocarburos, para efectos del pago del impuesto a la renta no podrá consolidar las pérdidas ocasionadas en un contrato con las ganancias originadas en otro".

Art. 2.— El Art. 1 de la Ley Tributaria para la contratación de prestación de servicios en la exploración de hidrocarburos, añádase el siguiente inciso:

"Sin embargo, en caso de que un mismo contratista suscriba más de un contrato para la exploración y explotación de hidrocarburos, para efectos del pago del impuesto a la renta, no podrá consolidar las pérdidas ocasionadas en un contrato con las ganancias originadas en otro".

Art. FINAL.— La presente Ley prevalecerá, en los aspectos tributarios, sobre las disposiciones pertenentes de la Ley de Impuesto a la Renta, y entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

DISPOSICION TRANSITORIA.— La disposición contenida en el Art. 2 de la presente Ley, no será aplicada a las compañías que hubieren celebrado contratos con la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana con anterioridad a la fecha de vigencia de esta Ley, en los resultados económicos de esos contratos.

Dado,

Es fiel copia.— Lo certifico:

1.) Ab. Joffre Torbay Dassum, Secretario General de la Administración Pública.

Recibí de la Presidencia de la República el Oficio N° 86-1243-DAJ del 13 de Mayo de 1986 junto con el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley Tributaria para la Contratación de

Prestación de Servicios en la Exploración de Hidrocarburos que, en Materia Económica y Calificándola de Urgente Somete el Presidente de la República al Congreso Nacional.

Quito, 13 de mayo de 1986

f.) Ab. Enrique Drouet Sánchez, Secretario del Congreso Nacional.

Es fiel copia.— Lo certifico:

f.) Ab. Joffre Torbay Dassum, Secretario General de la Administración Pública.

Certifico que hasta el día de hoy, no se ha recibido del Congreso Nacional Pronunciamiento alguno con respecto al Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley Tributaria para la Contratación de Prestación de Servicios en la Exploración de Hidrocarburos, que fuera sometido por el Presidente de la República con el Carácter de Urgente el día 13 de Mayo, mediante Oficio N° 86-1243-DAJ.

Quito, mayo 29 de 1986

f.) Ab. Joffre Torbay Dassum, Secretario General de la Administración Pública.

Es fiel copia.— Lo certifico:

f.) Ab. Joffre Torbay Dassum, Secretario General de la Administración Pública.

DECRETO LEY N° 24

EL H. CONGRESO NACIONAL

EL PLENARIO DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS

Considerando:

Que el Art. 21 de la Ley de Hidrocarburos, reformado mediante Ley N° 101, publicado en el Registro Oficial N° 306, de 13 de agosto de 1982, limita el número de contratos que CEPE puede celebrar con un mismo contratista, así como el número y ubicación geográfica de bloques a ser adjudicados a una misma empresa;

Que esta limitación podría ser perjudicial a los intereses del Estado cuando una empresa demostrando su capacidad técnica y financiera y su respeto a las leyes y reglamentos del país, como contratista de un contrato de exploración y explotación de hidrocarburos, se ve impedida de celebrar otro contrato similar con CEPE;

Que la celebración de más de un contrato para la exploración y explotación de hidrocarburos, no debe desvirtuar el concepto del riesgo exploratorio de las inversiones, el cual corresponde exclusivamente al contratista;

Que es necesario incrementar la actividad exploratoria y la búsqueda de nuevas reservas hidrocarburiíferas del país;

Que mediante Ley N° 102, de 6 de agosto de 1982, publicada en el Registro Oficial N° 306, de 13 de los mismos mes y año, se expidió la Ley Tributaria para la contratación de prestación de servicios en la exploración y explotación de hidrocarburos, y

En ejercicio de la atribución que le concede el Art. 56 de la Constitución Política de la República,

Expte:

LAS SIGUIENTES REFORMAS A LA LEY DE HIDROCARBUROS Y A LA LEY TRIBUTARIA PARA LA CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS EN LA EXPLORACION DE HIDROCARBUROS:

Art. 1.— Los incisos tercero y cuarto del Art. 21 de la Ley de Hidrocarburos, reformado por el Art. 8 de la Ley 101, dirán:

"Si conviniere a los intereses del Estado, el Comité Especial de Licitación, CEL, podrá adjudicar más de un contrato a un mismo contratista".

"En caso de que un mismo contratista suscriba más de un contrato para la exploración y explotación de hidrocarburos, para efectos del pago del impuesto a la renta, no podrá consolidar las pérdidas ocasionadas en un contrato con las ganancias originadas en otro".

Art. 2.— Al Art. 1 de la Ley Tributaria para la contratación de prestación de servicios en la exploración de hidrocarburos, añádase el siguiente inciso:

"Sin embargo, en caso de que un mismo contratista suscriba más de un contrato para la exploración y explotación de hidrocarburos, para efectos del pago del impuesto a la renta, no podrá consolidar las pérdidas ocasionadas en un contrato con las ganancias originadas en otro".

Art. FINAL.— La presente Ley prevalecerá, en los aspectos tributarios, sobre las disposiciones pertinentes de la Ley de Impuesto a la Renta, y entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

DISPOSICION TRANSITORIA.— La disposición contenida en el Art. 2 de la presente Ley, no será aplicada a las compañías que hubieren celebrado contratos con la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana con anterioridad a la fecha de vigencia de esta Ley, en los resultados económicos de esos contratos.

Dado,

Promúlguese en el Registro Oficial como Decreto Ley N° 24 de Conformidad con el Artículo 65 de la Constitución Política de la República del Ecuador.

Quito, veintinueve de mayo de mil novecientos ochenta y seis,

f.) León Febres Cordero Ribadeneyra, Presidente Constitucional de la República.

Es fiel copia.— Lo certifico.

f.) Ab. Joffre Torbay Dassum, Secretario General de la Administración Pública.

ANEXO

10

a. Artesano Maestro de Taller, a la persona natural que domina la técnica de un arte u oficio, con conocimientos teóricos y prácticos, que ha obtenido el título y calificación correspondientes, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes y dirige personalmente un taller puesto al servicio del público;

b. Artesano Autónomo, aquel que realiza su arte u oficio con o sin inversión alguna de implementos de trabajo, y

c. Asociaciones, gremios, cooperativas y uniones de artesanos, aquellas organizaciones de artesanos, que conformen unidades económicas diferentes de la individual y se encuentren legalmente reconocidas.

Art. 3.— Se tendrá como fecha de iniciación de la producción efectiva del taller artesanal aquella en la cual comience a entregar su producción para la venta, utilizando un mínimo del cincuenta por ciento de la capacidad del taller.

Art. 4.— Los artesanos individualmente considerados, las asociaciones, cooperativas, gremios y uniones de artesanos que tuvieran talleres independientes del establecimiento o almacén en el que se expenden sus productos, serán considerados como una sola unidad para gozar de los beneficios que se otorgan en esta Ley.

TITULO II DE LAS ORGANIZACIONES

CAPITULO I

Del Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal

Art. 5.— Para la aplicación y concesión de beneficios que otorga esta Ley, se establece el Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal, que estará integrado por:

1. El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, o su delegado, quien lo presidirá;
2. El Ministro de Finanzas, o su delegado;
3. Un delegado del Presidente del CONADE;
4. Un delegado del Banco Central del Ecuador, y
5. Un delegado del Banco Nacional de Fomento.

Intervendrán como miembros del Comité, sin voto

Un representante de la Junta Nacional de Defensa del Artesano;

Un representante de las Confederaciones de Artesanos Profesionales del Ecuador, y

Un representante de la Federación Nacional de Cámaras Artesanales.

El Director Nacional de Artesanías del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca será el Secretario del Comité.

Art. 6.— Corresponde al Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal:

a. Conceder los beneficios y exoneraciones a favor de quienes estén en capacidad de acogerse al régimen de esta Ley;

b. Determinar los porcentajes de los beneficios a que tienen derecho los artesanos amparados por esta Ley, y

c. Las demás atribuciones previstas en la Ley y Reglamentos.

CAPITULO II

De las Instituciones Clasistas Artesanales

Art. 7.— Para gozar de los beneficios establecidos en esta Ley, el artesano maestro de taller requiere de la calificación conferida por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, o del carné de agremiación expedido por las diferentes organizaciones o instituciones artesanales clasistas con personería jurídica, en los casos de los artesanos miembros de asociaciones simples o compuestas, gremios, cooperativas, uniones de artesanos, cámaras artesanales u otras que se crearen de conformidad con la Ley.

Las organizaciones o instituciones artesanales, que se acojan a los beneficios de esta Ley, deberán justificar su personería jurídica y la calidad de su representante legal.

Para los artesanos autónomos que soliciten acogerse a los beneficios de esta Ley, el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca elaborará a través de la Dirección Nacional de Artesanías, el correspondiente informe técnico-económico y lo elevará a consideración del Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal.

Art. 8.— El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, aprobará los estatutos de las Cámaras Artesanales, de las Federaciones Nacionales de Cámaras Artesanales, de Uniones y Centros Artesanales.

Las Cámaras Artesanales estarán conformadas, con sede en las capitales de provincia, por los artesanos de la correspondiente jurisdicción provincial.

La Federación Nacional de Cámaras Artesanales se integrará por las Cámaras Artesanales Organizadas en el país.

TITULO III

CAPITULO I

De los Beneficios

Art. 9.— Los artesanos, personas naturales o jurídicas, que se acojan al régimen de la presente Ley, gozarán de los siguientes beneficios:

1. Exoneración de hasta el ciento por ciento de los impuestos arancelarios y adicionales a la

importación de maquinaria, equipos auxiliares, accesorios, herramientas, repuestos nuevos, materias primas y materiales de consumo, que no se produzcan en el país y que fueren necesarios para la instalación, mejoramiento, producción y tecnificación de los talleres artesanales.

Para la importación de maquinarias, equipos auxiliares y herramientas, usados o reconstruidos, se requerirá carta de garantía de funcionamiento de la casa o empresa vendedora y se concederá la importación en las mismas condiciones establecidas en el inciso anterior.

2. Exoneración total de los derechos, timbres, impuestos y adicionales que graven la introducción de materia prima importada dentro de cada ejercicio fiscal, que no se produzca en el país y que fuere empleada en la elaboración de productos que se exportaren, previo dictamen favorable del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca.

Sin embargo, tanto en el numeral 1) como el de este numeral 2), seguirá vigente la reducción del 35% del valor de las exoneraciones a los impuestos a las importaciones, establecida mediante Ley N° 509 de 8 de junio de 1983, en lo que fuere pertinente.

3. Exoneración total de los impuestos y derechos que graven la exportación de artículos y productos de la artesanía.

4. Exoneración total de los impuestos a los capitales en giro.

5. Exoneración de derechos e impuestos fiscales, provinciales y municipales, inclusive los de alcabala y de timbres, a la transferencia de dominio de inmuebles, para fines de instalación, funcionamiento, ampliación o mejoramiento de los talleres, centros y almacenes artesanales, donde desarrollan en forma exclusiva sus actividades.

6. Exoneración de los impuestos que graven las transacciones mercantiles y la prestación de servicios, de conformidad con la Ley.

7. Aprovechamiento del régimen de depreciación acelerada de la maquinaria y equipos auxiliares.

8. Exoneración de impuestos arancelarios adicionales a la importación de envases, materiales de embalaje y, de acuerdo con el Reglamento, similares, cuando las necesidades de los artículos o producción artesanal lo justifiquen, siempre que no se produzcan en el país.

9. Exoneración total de los derechos, timbres e impuestos que graven los actos constitutivos, reformas de estatutos, elevación de capital de asociaciones, gremios, cooperativas, uniones de artesanos u otras personas jurídicas reconocidas legalmente, conforme lo determina la presente Ley.

10. Para la determinación del ingreso gravable, con el impuesto sobre la renta, las personas naturales o jurídicas acogidas al régimen de esta Ley, podrán deducir el sesenta por ciento de las cantidades reinvertidas o de las nuevas inversiones, financiadas mediante crédito o aporte al nuevo capital, destinadas a la adquisición de maqui-

narias, equipos y herramientas nuevas. Este beneficio será concedido únicamente hasta por un período de diez años, contados desde la vigencia del Acuerdo Interministerial de otorgamiento de beneficios.

La deducción en cada año no podrá ser mayor del cincuenta por ciento de la utilidad líquida, pero el saldo deducido se considerará imputable a los ejercicios futuros.

Las reinversiones o nuevas inversiones, para constituir materia deducible del monto gravable con el impuesto a la renta, deberán sujetarse al siguiente trámite:

a) Antes de efectuar las reinversiones o nuevas inversiones o de contraer los compromisos pertinentes los interesados deberán solicitar al Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, la autorización correspondiente para poder deducir del monto gravable con el impuesto a la renta tales reinversiones o inversiones, y

b) Para el trámite de las solicitudes contempladas en el literal anterior, se aplicarán las disposiciones del literal b) del Art. 6 y del Art. 13.

11. Las personas naturales o jurídicas acogidas a esta Ley percibirán hasta el 15% en general como Abono Tributario o sobre el valor FOB de las exportaciones, y, como adicional, por razones de difícil acceso a mercados externos, licencias, permisos previos, competencia en el mercado, costos y fletes y lo que representan los nuevos mercados, hasta el 10% de los porcentajes que se establecieron legalmente.

12. Exoneración de los impuestos, derechos, servicios y demás contribuciones establecidas para la obtención de la patente municipal y permisos de funcionamiento.

Art. 10.— El goce de los beneficios que se otorga en esta Ley se iniciará a partir de la fecha de suscripción del Acuerdo Interministerial emitido por los Ministros de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y de Finanzas y Crédito Público; sin embargo, los plazos de duración de los beneficios se determinarán, en cada caso, contándolos a partir de la fecha de producción efectiva.

Art. 11.— El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, a través de la Subsecretaría de Artesanías, otorgará a los artesanos y personas jurídicas artesanales, la certificación respectiva para la aplicación de los regímenes especiales salariales que se expidieren para el sector de conformidad con la Ley.

Art. 12.— A solicitud del Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal, el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, podrá requerir de la Junta Monetaria o de la institución u organismo competente, de conformidad con la Ley, la prohibición o limitación de importación de artículos similares a los elaborados por la artesanía

nacional, cuando estos últimos ofrezcan condiciones satisfactorias de abastecimiento, calidad y precios.

En la aplicación de este artículo se deberán tener en cuenta los compromisos internacionales contraídos por el Ecuador en la materia.

CAPITULO II Del Procedimiento

Art. 13.— Para el goce de los beneficios establecidos en esta Ley, deberá presentarse la solicitud al Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, el que efectuará los estudios y comprobaciones que juzgare convenientes y someterá a consideración del Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal el informe correspondiente, recomendando:

a) Los beneficios que deben concederse, su proporción y, en los casos pertinentes, el respectivo plazo, y

b) Las condiciones que deberán satisfacer los talleres artesanales.

Aceptada la solicitud, el Ministerio procederá a la elaboración del Acuerdo Interministerial de concesión de beneficios que será expedido por los Ministros de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y de Finanzas y Crédito Público.

Art. 14.— El Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal sesionará por lo menos una vez cada semana.

Art. 15.— El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca notificará la copia certificada del Acuerdo Interministerial al interesado.

TITULO IV Controles y Sanciones

Art. 16.— El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, tendrá las siguientes obligaciones:

a) Exigir el cumplimiento de los compromisos contraídos por los artesanos maestros de taller, artesanos autónomos, asociaciones, gremios, cooperativas, uniones de artesanos y demás personas jurídicas artesanales que gocen de los beneficios concedidos por esta Ley;

b) Llevar un libro de registro de las solicitudes presentadas, de su aceptación o rechazo y de los Acuerdos Interministeriales de concesión de beneficios;

c) Llevar un registro de maquinarias, equipos auxiliares, accesorios, repuestos y materia prima importados con exenciones tributarias, con los datos necesarios para su identificación y verificar su existencia, uso y funcionamiento;

d) Constatar las inversiones y reinversiones en activos fijos;

e) Comprobar el cumplimiento de los plazos y de las condiciones determinadas en dichos Acuerdos Interministeriales;

f) Controlar el monto de la producción artesanal para determinar el valor de la materia prima importada con liberación de derechos e incorporada en los artículos exportados, y

g) Las demás establecidas en la Ley y en los reglamentos.

Para la constancia de los controles y comprobaciones realizadas, se levantarán las actas correspondientes.

Art. 17.— Los beneficiarios que no cumplieren con las obligaciones previstas en esta Ley, en los reglamentos o en los acuerdos, serán sancionados con:

a) Multa;

b) Suspensión temporal de los beneficios de que gocen, y

c) Suspensión definitiva de dichos beneficios.

De acuerdo con la gravedad de la infracción la multa podrá acompañar a las sanciones establecidas en los literales b) y c) de este artículo.

Art. 18.— La falta de cumplimiento en la entrega de las informaciones periódicas u ocasionales solicitadas por el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca será sancionada con multa de hasta diez salarios mínimos vitales generales según la gravedad de la infracción. La reincidencia será sancionada con el doble de la multa impuesta anteriormente.

Los actos de defraudación serán sancionados de conformidad con el Código Tributario, sin perjuicio de la suspensión temporal o definitiva de los beneficios concedidos.

Art. 19.— Serán causas de suspensión temporal del goce de los beneficios:

a) Impedir o dificultar las inspecciones o comprobaciones de los funcionarios de los Ministerios de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y de Finanzas y Crédito Público o recurrir a medios de cualquier clase para inducir a error a las entidades o funcionarios oficiales;

b) Recurrir a procedimientos ilícitos para impedir el establecimiento de talleres competidores o estorbar el funcionamiento de los ya existentes;

c) El préstamo, arriendo, permuta o venta todo o parte de las herramientas, maquinaria, equipos auxiliares, repuestos o materias primas, cuya importación hubiere gozado de exoneraciones en el pago de derechos arancelarios o consulares y otros beneficios que establece la presente Ley, cuando las transferencias de dominio o de uso se hubieren realizado sin la autorización previa del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca;

d) La reincidencia por más de una ocasión en el incumplimiento de las obligaciones penadas con multa, según lo dispuesto en el Art. 18, y

e) El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Interministerial de Concesión de Beneficios.

El período por el cual se suspendan los beneficios no será menor de tres meses ni mayor de doce, según la gravedad de la infracción. Las suspensiones impuestas no interrumpirán el decurso de los plazos de los beneficios temporales concedidos.

Art. 20.— Serán causas de suspensión definitiva del goce de beneficios:

a) Falsedad dolosa comprobada en las informaciones proporcionadas por los beneficiarios que sirvieron de base para la concesión de los beneficios, y

b) Cohecho o intento de cohecho a los funcionarios oficiales con los cuales los beneficiarios tuvieran relaciones de acuerdo con esta Ley, sin perjuicio de las sanciones determinadas en el Código Penal.

Art. 21.— En los casos de suspensión temporal o definitiva, el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, impondrá las sanciones correspondientes, previo el dictamen de Asesoría Jurídica. El beneficiario afectado podrá apelar de esa resolución ante el Comité Interinstitucional, sobre cuyo pronunciamiento no habrá recurso alguno, en la vía administrativa.

El Ministro de Industrias impondrá también las multas a que hubiere lugar.

TÍTULO V DEL SEGURO SOCIAL DEL ARTESANO

Art. 22.— La protección del seguro social artesanal se extenderá a los trabajadores que constituyen el grupo familiar, inclusive el cónyuge del artesano dueño del taller o autónomo, siempre y cuando contribuyan con su trabajo para el funcionamiento de su taller o mantenimiento de la actividad artesanal, gestión que será calificada previamente por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Art. 23.— Para el efecto de la afiliación al Seguro Social Artesanal, el interesado presentará al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, copia certificada del Acuerdo de Concesión de Beneficios previsto en esta Ley o la calificación otorgada por la Junta Nacional de Defensa del Artesano.

Art. 24.— El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) deberá otorgar atención preferente al Seguro Social Artesanal, para lo cual implementará debidamente los departamentos o unidades administrativas correspondientes.

DISPOSICIONES GENERALES.—

Art. 25.— Los artesanos amparados por esta Ley no están sujetos a las obligaciones impuestas a los empleadores por el Código del Trabajo. Sin embargo, estarán sometidos con respecto a sus operarios, a las disposiciones sobre salarios mínimos determinados para el sector artesanal dentro del régimen salarial dictado para el efecto, así como el pago de las indemnizaciones legales por despido intempestivo.

Art. 26.— Aprendiz de artesanía es la persona que ingresa a un taller con el objeto de adquirir conocimientos en una determinada rama artesanal; en el caso de que prestara sus servicios personales, percibirá un salario no inferior al 60% del fijado para el operario artesanal.

El aprendiz debe registrar su nombre en la Junta Nacional o en la Provincial de Defensa del Artesano y recibir de ella su carné.

Para la obtención del certificado de operario, el aprendiz deberá cumplir el tiempo máximo de aprendizaje que será equivalente al 50% del fijado para el curso completo de la respectiva rama artesanal y rendir un examen ante el tribunal establecido, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y en los reglamentos.

Art. 27.— Las instituciones de crédito de fomento otorgarán créditos a los artesanos, uniones de artesanos y personas jurídicas artesanales, en condiciones favorables que se adapten a la situación de un sujeto de crédito con capacidad de garantía limitada. Estas instituciones de crédito de fomento harán constar anualmente en su presupuesto de inversiones un fondo especial, tomando como base los programas de fomento de la producción de la artesanía elaborado por el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo adoptado por el Gobierno.

La Junta Monetaria, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo y a los Planes Operativos del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, establecerá normas preferenciales para créditos artesanales que serán concedidos por las instituciones financieras de fomento.

Art. 28.— Créase el Fondo Nacional de Inversiones Artesanales (FONADIA) que será administrado por el Banco Nacional de Fomento, según reglamento que dictará el Presidente de la República, con los fondos asignados por el Estado, préstamos nacionales e internacionales que se obtuvieren de las instituciones crediticias y demás que se consiguieren para el fomento artesanal en sus diferentes ramas y actividades, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo.

Art. 29.— El Estado, las instituciones del sector público y todas las demás entidades que gocen de algún beneficio estatal, provincial o especial o que participen en fondos públicos, se abastecerán preferentemente con productos de la artesanía nacional.

El jefe y el pagador de la oficina adquiriente serán responsables, personal y pecuniariamente, de la compra de los productos extranjeros similares a los de artesanía nacional sujeta al régimen de la presente Ley.

Art. 30.— El Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal queda facultado para resolver los casos especiales y los no previstos que se suscitaren en la aplicación de esta Ley.

Art. 31.— El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, a través de la Subsecretaría de Artesanías, conducirá y coordinará la gestión administrativa de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, integrando los cuerpos colegiados existentes en el sector artesanal, presidiendo en los que forma parte el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, y, como miembro, en los demás de su competencia. Además planificará, organizará, supervisará y ejecutará las políticas, objetivos, metas y actividades relacionadas con el fomento artesanal, implementando la infraestructura indispensable para la promoción, fomento y desarrollo de la producción artesanal de bienes, servicios y artística.

Art. 32.— El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca será el encargado de administrar la Ley de Fomento Artesanal, sin perjuicio de la atribución del Presidente de la República constante en el Art. 86 de la Constitución y en el Decreto Supremo N° 3732, promulgado en el Registro Oficial N° 5 de 17 de agosto de 1979.

Art. 33.— La Ley de Fomento Artesanal reforma la Ley de Fomento de la Pequeña Industria y Artesanía codificada mediante Decreto Supremo N° 921, publicado en el Registro Oficial N° 372, de 20 de agosto de 1973, que queda únicamente como Ley de Fomento de la Pequeña Industria. En consecuencia, en la Ley de Fomento de la Pequeña Industria y Artesanía suprimase toda mención a la artesanía.

Los artesanos que se hubieren acogido a los beneficios de la Ley de Fomento de la Pequeña Industria y Artesanía, seguirán en goce de ellos sin perjuicio de que puedan gozar de los beneficios establecidos en la Ley de Fomento Artesanal.

Art. 34.— Las normas de la presente Ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

DISPOSICION TRANSITORIA.— Los Ministros de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y de Finanzas y Crédito Público, someterán a consideración del Presidente de la República un proyecto de Reglamento para la correcta aplicación de esta Ley, dentro de noventa días contados desde su vigencia.

Dado, a

Es fiel copia.— Lo certifico:

f.) Ab. Joffre Torbay Dassum, Secretario General de la Administración Pública.

RECIBI DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA EL OFICIO N° 86-1233-DAJ DEL 13 DE MAYO DE 1986 JUNTO CON EL PROYECTO DE LEY DE FOMENTO ARTESANAL QUE, EN MATERIA ECONOMICA Y CALIFICADO COMO URGENTE SOMETE EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA AL CONGRESO NACIONAL.

Quito, 13 de mayo de 1986.

f.) Ab. Enrique Drouet Sánchez, Secretario del Congreso Nacional.

Es fiel copia.— Lo certifico.

f.) Ab. Joffre Torbay Dassum, Secretario General de la Administración Pública.

CERTIFICO QUE HASTA EL DIA DE HOY NO SE HA RECIBIDO DEL CONGRESO NACIONAL PRONUNCIAMIENTO ALGUNO CON RESPECTO AL PROYECTO DE LEY DE FOMENTO ARTESANAL, QUE FUERA SOMETIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL CARACTER DE URGENTE EL DIA 13 DE MAYO DE 1986, MEDIANTE OFICIO N° 86-1233-DAJ.

Quito, mayo 29 de 1986.

Es fiel copia.— Lo certifico.

f.) Ab. Joffre Torbay Dassum, Secretario General de la Administración Pública.

DECRETO LEY N° 26

EL CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que por Decreto Supremo N° 52, de 15 de enero de 1965, se dictó la Ley de Fomento de Artesanía y de la Pequeña Industria, publicada en el Registro Oficial N° 419, de 20 de los mismos mes y año, la cual fue codificada como Ley de Fomento de la Pequeña Industria y Artesanía, mediante Decreto Supremo N° 921, del 2 de agosto de 1973, publicado en el Registro Oficial N° 372, de 20 de los mismos mes y año;

Que dadas las condiciones del país, es necesario que los artesanos cuenten con una Ley propia, a fin de desarrollar y fomentar la artesanía de producción, de servicios y artística;

Que el proceso devaluatorio de los últimos años obliga a ampliar el monto de los activos establecidos a favor del sector artesanal en relación con el incremento de costos producido por la inflación con el objeto de que pueda alcanzar el goce de los beneficios que concede la presente Ley, y

En uso de sus atribuciones constitucionales,

EXPIDE:

LA SIGUIENTE LEY DE FOMENTO ARTESANAL

TITULO I GENERALIDADES

Art. 1.— Esta Ley ampara a los artesanos que se dedican, en forma individual, de asociaciones, cooperativas, gremios o uniones artesanales, a la producción de bienes o servicios o artística y que transforman materia prima con predominio de la labor fundamentalmente manual, con auxilio o no de máquinas, equipos y herramientas, siempre que

no sobrepasen en sus activos fijos, excluyéndose los terrenos y edificios, el monto de trescientos sesenta salarios mínimos vitales generales.

Art. 2.- Para gozar de los beneficios que otorga la presente Ley, se considera:

a. Artesano Maestro de Taller, a la persona natural que domina la técnica de un arte u oficio, con conocimientos teóricos y prácticos, que ha obtenido el título y calificación correspondientes, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes y dirige personalmente un taller puesto al servicio del público;

b. Artesano Autónomo, aquel que realiza su arte u oficio con o sin inversión alguna de implementos de trabajo, y

c. Asociaciones, gremios, cooperativas y uniones de artesanos, aquellas organizaciones de artesanos, que conformen unidades económicas diferentes de la individual y se encuentren legalmente reconocidas.

Art. 3.— Se tendrá como fecha de iniciación de la producción efectiva del taller artesanal aquella en la cual comience a entregar su producción para la venta, utilizando un mínimo del cincuenta por ciento de la capacidad del taller.

Art. 4.— Los artesanos individualmente considerados, las asociaciones, cooperativas, gremios y uniones de artesanos que tuvieren talleres independientes del establecimiento o almacén en el que se expenden sus productos, serán considerados como una sola unidad para gozar de los beneficios que se otorgan en esta Ley.

TITULO II DE LAS ORGANIZACIONES

CAPITULO I

Del Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal

Art. 5.— Para la aplicación y concesión de beneficios que otorga esta ley, se establece el Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal, que estará integrado por:

1. El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, o su delegado, quien lo presidirá;
 2. El Ministro de Finanzas, o su delegado;
 3. Un delegado del Presidente del CONADE;
 4. Un delegado del Banco Central del Ecuador, y
 5. Un delegado del Banco Nacional de Fomento.
- Intervendrán como miembros del Comité sin voto:
- Un representante de la Junta Nacional de Defensa del Artesano;

Un representante de las Confederaciones de Artesanos Profesionales del Ecuador, y

Un representante de la Federación Nacional de Cámaras Artesanales.

El Director Nacional de Artesanías del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca será el Secretario del Comité.

Art. 6.— Corresponde al Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal:

a. Conceder los beneficios y exoneraciones a favor de quienes estén en capacidad de acogerse al régimen de esta Ley;

b. Determinar los porcentajes de los beneficios a que tienen derecho los artesanos amparados por esta Ley, y

c. Las demás atribuciones previstas en la Ley y Reglamentos.

CAPITULO II

De las Instituciones Clasistas Artesanales

Art. 7. Para gozar de los beneficios establecidos en esta Ley, el artesano maestro de taller requiere de la calificación conferida por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, o del carné de agremiación expedido por las diferentes organizaciones o instituciones artesanales clasistas con personería jurídica, en los casos de los artesanos miembros de asociaciones simples o compuestas, gremios, cooperativas, uniones de artesanos, cámaras artesanales u otras que se crearen de conformidad con la Ley.

Las organizaciones o instituciones artesanales, que se acojan a los beneficios de esta Ley, deberán justificar su personería jurídica y la calidad de su representante legal.

Para los artesanos autónomos que soliciten acogerse a los beneficios de esta Ley, el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca elaborará a través de la Dirección Nacional de Artesanías, el correspondiente informe técnico-económico y lo elevará a consideración del Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal.

Art. 8.— El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, aprobará los estatutos de las Cámaras Artesanales, de las Federaciones Nacionales de Cámaras Artesanales, de Uniones y Centros Artesanales.

Las Cámaras Artesanales estarán conformadas, con sede en las capitales de provincia, por los artesanos de la correspondiente jurisdicción provincial.

La Federación Nacional de Cámaras Artesanales se integrará por las Cámaras Artesanales organizadas en el país.

TITULO III

CAPITULO I

De los beneficios

Art. 9.— Los artesanos, personas naturales o jurídicas, que se acojan al régimen de la presente Ley, gozarán de los siguientes beneficios:

1. Exoneración de hasta el ciento por ciento de los impuestos arancelarios y adicionales a la importación de maquinaria, equipos auxiliares, accesorios, herramientas, repuestos nuevos, materias primas y materiales de consumo, que no se produzcan en el país y que fueren necesarios para la instalación, mejoramiento, producción y tecnificación de los talleres artesanales.

Para la importación de maquinarias, equipos auxiliares y herramientas, usados y reconstruidos, se requerirá carta de garantía de funcionamiento de la

casa o empresa vendedora y se concederá la importación en las mismas condiciones establecidas en el inciso anterior.

2. Exoneración total de los derechos, timbres, impuestos y adicionales que graven la introducción de materia prima importada dentro de cada ejercicio fiscal, que no se produzca en el país y que fuere empleada en la elaboración de productos que se exportaren, previo dictamen favorable del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca.

Sin embargo, tanto en el numeral 1) como el de este numeral 2), seguirá vigente la reducción del 35% del valor de las exoneraciones a los impuestos a las importaciones, establecida mediante Ley N° 509 de 8 de junio de 1983, en lo que fuere pertinente.

3. Exoneración total de los impuestos y derechos que graven la exportación de artículos y productos de la artesanía.

4. Exoneración total de los impuestos a los capitales en giro.

5. Exoneración de derechos e impuestos fiscales, provinciales y municipales, inclusive los de alcabala y de timbres, a la transferencia de dominio de inmuebles para fines de instalación, funcionamiento, ampliación o mejoramiento de los talleres, centros y almacenes artesanales, donde desarrollan en forma exclusiva sus actividades.

6. Exoneración de los impuestos que graven las transacciones mercantiles y la prestación de servicios de conformidad con la Ley.

7. Aprovechamiento del régimen de depreciación acelerada de la maquinaria y equipos auxiliares.

8. Exoneración de impuestos arancelarios adicionales a la importación de envases, materiales de embalaje y, de acuerdo con el Reglamento, similares, cuando las necesidades de los artículos o producción artesanal lo justifiquen, siempre que no se produzcan en el país.

9. Exoneración total de los derechos, timbres e impuestos que graven los actos constitutivos, reformas de estatutos, elevación de capital de asociaciones, gremios, cooperativas, uniones de artesanos u otras personas jurídicas reconocidas legalmente, conforme lo determina la presente Ley.

10. Para la determinación del ingreso gravable, con el impuesto sobre la renta, las personas naturales o jurídicas acogidas al régimen de esta Ley, podrán deducir el sesenta por ciento de las cantidades reinvertidas o de las nuevas inversiones, financiadas mediante crédito o aporte al nuevo capital, destinadas a la adquisición de maquinarias, equipos y herramientas nuevas. Este beneficio será concedido únicamente hasta por un período de diez años, contados desde la vigencia del Acuerdo Interministerial de otorgamiento de beneficios.

La deducción en cada año no podrá ser mayor del cincuenta por ciento de la utilidad líquida, pero el saldo deducido se considerará imputable a los ejercicios futuros.

Las reinversiones o nuevas inversiones, para constituir materia deducible del monto gravable con el impuesto a la renta, deberán sujetarse al siguiente trámite:

a) Antes de efectuar las reinversiones o nuevas inversiones o de contraer los compromisos pertinentes

los interesados deberán solicitar al Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, la autorización correspondiente para poder deducir del monto gravable con el impuesto a la renta tales reinversiones o inversiones, y

b) Para el trámite de las solicitudes contempladas en el literal anterior, se aplicarán las disposiciones del literal b) del Art. 6 y del Art. 13.

11. Las personas naturales o jurídicas acogidas a esta Ley percibirán hasta el 15% en general como Abono Tributario o sobre el valor FOB de las exportaciones, y, como adicional, por razones de difícil acceso a mercados externos, licencias, permisos previos, competencia en el mercado, costos y fletes y lo que representan los nuevos mercados, hasta el 10% de los porcentajes que se establecieren legalmente.

12. Exoneración de los impuestos, derechos, servicios y demás contribuciones establecidas para la obtención de la patente municipal y permisos de funcionamiento.

Art. 10.— El goce de los beneficios que se otorga en esta Ley se iniciará a partir de la fecha de suscripción del Acuerdo Interministerial emitido por los Ministros de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y de Finanzas y Crédito Público; sin embargo, los plazos de duración de los beneficios se determinarán, en cada caso, contándolos a partir de la fecha de producción efectiva.

Art. 11.— El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, a través de la Subsecretaría de Artesanías, otorgará a los artesanos y personas jurídicas artesanales, la certificación respectiva para la aplicación de los regímenes especiales salariales que se expidieren para el sector de conformidad con la Ley.

Art. 12.— A solicitud del Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal, el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, podrá requerir de la Junta Monetaria o de la institución u organismo competente, de conformidad con la Ley, la prohibición o limitación de importación de artículos similares a los elaborados por la artesanía nacional, cuando estos últimos ofrezcan condiciones satisfactorias de abastecimiento, calidad y precios.

En la aplicación de este artículo se deberán tener en cuenta los compromisos internacionales contraídos por el Ecuador en la materia.

CAPITULO II Del Procedimiento

Art. 13.— Para el goce de los beneficios establecidos en esta Ley, deberá presentarse la solicitud al Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, el que efectuará los estudios y comprobaciones que juzgare convenientes y someterá a consideración del Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal el informe correspondiente, recomendando:

a) Los beneficios que deben concederse, su proporción y, en los casos pertinentes, el respectivo plazo, y

b) Las condiciones que deberán satisfacer los talleres artesanales.

Aceptada la solicitud, el Ministerio procederá a la elaboración del Acuerdo Interministerial de concesión de beneficios que será expedido por los Ministros de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y de Finanzas y Crédito Público.

Art. 14.— El Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal, sesionará por lo menos una vez cada semana.

Art. 15.— El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca notificará la copia certificada del Acuerdo Interministerial al interesado.

TITULO IV CONTROLES Y SANCIONES

Art. 16.— El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, tendrá las siguientes obligaciones:

a) Exigir el cumplimiento de los compromisos contraídos por los artesanos maestros de taller, artesanos autónomos, asociaciones, gremios, cooperativas, uniones de artesanos y demás personas jurídicas artesanales que gocen de los beneficios concedidos por esta Ley;

b) Llevar un libro de registro de las solicitudes presentadas, de su aceptación o rechazo y de los Acuerdos Interministeriales de concesión de beneficios;

c) Llevar un registro de maquinarias, equipos auxiliares, accesorios, repuestos y materia prima importados con exenciones tributarias, con los datos necesarios para su identificación y verificar su existencia, uso y funcionamiento;

d) Constatar las inversiones y reinversiones en activos fijos;

e) Comprobar el cumplimiento de los plazos y de las condiciones determinadas en dichos Acuerdos Interministeriales;

f) Controlar el monto de la producción artesanal para determinar el valor de la materia prima importada con liberación de derechos e incorporada en los artículos exportados, y

g) Las demás establecidas en la Ley y en los reglamentos.

Para la constancia de los controles y comprobaciones realizadas, se levantarán las actas correspondientes.

Art. 17.— Los beneficiarios que no cumplieren con las obligaciones previstas en esta Ley, en los reglamentos o en los acuerdos, serán sancionados con:

a) Multa;

b) Suspensión temporal de los beneficios de que gocen, y

c) Suspensión definitiva de dichos beneficios.

De acuerdo con la gravedad de infracción la multa podrá acompañar a las sanciones establecidas en los literales b) y c) de este artículo.

Art. 18.— La falta de cumplimiento en la entrega de las informaciones periódicas u ocasionales solicitadas por el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca será sancionada con multa, de hasta

diez salarios mínimos vitales generales según la gravedad de la infracción. La reincidencia será sancionada con el doble de la multa impuesta anteriormente.

Los actos de defraudación serán sancionados de conformidad con el Código Tributario, sin perjuicio de la suspensión temporal o definitiva de los beneficios concedidos.

Art. 19.— Serán causas de suspensión temporal del goce de los beneficios:

a) Impedir o dificultar las inspecciones o comprobaciones de los funcionarios de los Ministerios de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y de Finanzas y Crédito Público o recurrir a medios de cualquier clase para inducir a error a las entidades o funcionarios oficiales;

b) Recurrir a procedimientos ilícitos para impedir el establecimiento de talleres competidores o estorbar el funcionamiento de los ya existentes;

c) El préstamo, arriendo, permuta o venta todo o parte de las herramientas, maquinarias, equipos auxiliares, repuestos o materias primas, cuya importación hubiere gozado de exoneraciones en el pago de derechos arancelarios o consulares y otros beneficios que establece la presente Ley, cuando las transferencias de dominio o de uso se hubieren realizado sin la autorización previa del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca;

d) La reincidencia por más de una ocasión en el incumplimiento de las obligaciones penadas con multa, según lo dispuesto en el Art. 18, y

e) El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Interministerial de Concesión de Beneficios.

El período por el cual se suspendan los beneficios no será menor de tres meses ni mayor de doce, según la gravedad de la infracción. Las suspensiones impuestas no interrumpirán el decurso de los plazos de los beneficios temporales concedidos.

Art. 20.— Serán causas de suspensión definitiva del goce de beneficios:

a) Falsedad dolosa comprobada en las informaciones proporcionadas por los beneficiarios que sirvieron de base para la concesión de los beneficios, y

b) Cohecho o intento de cohecho a los funcionarios oficiales con los cuales los beneficiarios tuvieran relaciones de acuerdo con esta Ley, sin perjuicio de las sanciones determinadas en el Código Penal.

Art. 21.— En los casos de suspensión temporal o definitiva, el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, impondrá las sanciones correspondientes, previo el dictamen de Asesoría Jurídica. El beneficiario afectado podrá apelar de esa resolución ante el Comité Interinstitucional, sobre cuyo pronunciamiento no habrá recurso alguno, en la vía administrativa.

El Ministro de Industrias impondrá también las multas a que hubiere lugar.

TITULO V Del Seguro Social del Artesano

Art. 22.— La protección del seguro social artesanal se extenderá a los trabajadores que constituyen el grupo familiar, inclusive el cónyuge del artesano

dueño del taller o autónomo, siempre y cuando contribuyan con su trabajo para el funcionamiento de su taller o mantenimiento de la actividad artesanal, gestión que será calificada previamente por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Art. 23.— Para el efecto de la afiliación al Seguro Social Artesanal, el interesado presentará al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, copia certificada del Acuerdo de Concesión de Beneficios previsto en esta Ley o la calificación otorgada por la Junta Nacional de Defensa del Artesano.

Art. 24.— El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) deberá otorgar atención preferente al Seguro Social Artesanal, para lo cual implementará debidamente los departamentos o unidades administrativas correspondientes.

Disposiciones Generales

Art. 25.— Los artesanos amparados por esta Ley no están sujetos a las obligaciones impuestas a los empleadores por el Código del Trabajo. Sin embargo, estarán sometidos con respecto a sus operarios, a las disposiciones sobre salarios mínimos determinados para el sector artesanal dentro del régimen salarial dictado para el efecto, así como el pago de las indemnizaciones legales por despido intempestivo.

Art. 26.— Aprendiz de artesanía es la persona que ingresa a un taller con el objeto de adquirir conocimientos en una determinada rama artesanal, en el caso de que prestara sus servicios personales, percibirá un salario no inferior al 60% del fijado para el operario artesanal.

El aprendiz debe registrar su nombre en la Junta Nacional o en la Provincial de Defensa del Artesano y recibir de ella su carné.

Para la obtención del certificado de operario, el aprendiz deberá cumplir el tiempo máximo de aprendizaje que será equivalente al 50% del fijado para el curso completo de la respectiva rama artesanal y rendir un examen ante el tribunal establecido, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y en los reglamentos.

Art. 27.— Las instituciones de crédito de fomento otorgarán créditos a los artesanos, uniones de artesanos y personas jurídicas artesanales, en condiciones favorables que se adapten a la situación de un sujeto de crédito con capacidad de garantía limitada. Estas instituciones de crédito de fomento harán constar anualmente en su presupuesto de inversiones un fondo especial, tomando como base los programas de fomento de la producción de la artesanía elaborados por el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo adoptado por el Gobierno.

La Junta Monetaria, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo y a los Planes Operativos del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, establecerá normas preferenciales para créditos artesanales que serán concedidos por las instituciones financieras de fomento.

Art. 28.— Créase el Fondo Nacional de Inversiones Artesanales (FONADIA) que será administrado

por el Banco Nacional de Fomento, según reglamento que dictará el Presidente de la República, con los fondos asignados por el Estado, préstamos nacionales e internacionales que se obtuvieren de las instituciones crediticias y demás que se consiguieren para el fomento artesanal en sus diferentes ramas y actividades, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo.

Art. 29.— El Estado, las instituciones del sector público y todas las demás entidades que gocen de algún beneficio estatal, provincial o especial o que participen en fondos públicos, se abastecerán preferentemente con productos de la artesanía nacional.

El jefe y el pagador de la oficina adquirente serán responsables, personal y pecuniariamente, de la compra de los productos extranjeros similares a los de artesanía nacional sujeta al régimen de la presente Ley.

Art. 30.— El Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal queda facultado para resolver los casos especiales y los no previstos que se suscitaren en la aplicación de esta Ley.

Art. 31.— El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, a través de la Subsecretaría de Artesanías, conducirá y coordinará la gestión administrativa de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, integrando los cuerpos colegiados existentes en el sector artesanal, presidiendo en los que forma parte el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, y, como miembro, en los demás de su competencia. Además, planificará, organizará, supervisará y ejecutará las políticas, objetivos, metas y actividades relacionadas con el fomento artesanal, implementando la infraestructura indispensable para la promoción, fomento y desarrollo de la producción artesanal de bienes, servicios y artística.

Art. 32.— El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca será el encargado de administrar la Ley de Fomento Artesanal, sin perjuicio de la atribución del Presidente de la República constante en el Art. 86 de la Constitución y en el Decreto Supremo No 3732, promulgado en el Registro Oficial No 5 de 17 de agosto de 1979.

Art. 33.— La Ley de Fomento Artesanal reforma la Ley de Fomento de la Pequeña Industria y Artesanía codificada mediante Decreto Supremo No 921, publicado en el Registro Oficial No 372, de 20 de agosto de 1973, que queda únicamente como Ley de Fomento de la Pequeña Industria. En consecuencia, en la Ley de Fomento de la Pequeña Industria y Artesanía suprimase toda mención a la artesanía.

Los artesanos que se hubieren acogido a los beneficios de la Ley de Fomento de la Pequeña Industria y Artesanía, seguirán en goce de ellos, sin perjuicio de que puedan gozar de los beneficios establecidos en la Ley de Fomento Artesanal.

Art. 34.— Las normas de la presente Ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

DISPOSICION TRANSITORIA.— Los Ministros de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y de Finanzas y Crédito Público, someterán a consideración del Presidente de la República un proyecto de Reglamento para la correcta aplicación de esta Ley, dentro de noventa días contados desde su vigencia.

Dado en Quito, a

Promúlguese en el Registro Oficial como Decreto Ley N° 26 de conformidad con el Artículo 65 de la Constitución Política de la República del Ecuador.

Quito, veintinueve de mayo de mil novecientos ochenta y seis.

f.) León Febres Cordero Ribadeneyra, Presidente Constitucional de la República.

Es fiel copia.— Lo certifico:

f.) Ab. Joffre Torbay Dásmun, Secretario General de la Administración Pública.

N° 263

EL MINISTRO DE BIENESTAR SOCIAL

Considerando:

Que la Cooperativa de Vivienda "Consejo Provincial del Guayas", domiciliada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, ha sido intervenida mediante Acuerdo Ministerial N° 100 de 4 de febrero de 1985.

Que mediante Resolución N° 22 de 14 de mayo de 1985, se nombra en calidad de interventor al Abg. Antonio Arosemena Caamacho en reemplazo del Abg. Oswaldo Menéndez Stevenson;

Que mediante memorando de 24 de febrero de 1986, los delegados de la Dirección Nacional de Cooperativas, presentan un informe relacionado a la fiscalización de la cooperativa en referencia del mismo se desprende que dicho interventor no actuó en calidad de tal, por existir un total desconocimiento de la Ley y su Reglamento General de Cooperativas, por lo que se nulita los actos adoptados por el interventor.

Que los delegados de la Dirección Nacional de Cooperativas en el informe presentado, solicitan se proceda a levantar la intervención de la entidad cooperativa.

Que mediante memorando N° 98, de 18 de marzo de 1986, el Director Nacional de Cooperativas, solicita a los señores Ministro y Subsecretario de Desarrollo Rural y Promoción Popular, la suscripción del presente acuerdo.

En uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento General de Cooperativas.

Acuerda:

Art. Único.— Declarar terminada la intervención de la Cooperativa de vivienda "Consejo Provincial del Guayas", domiciliada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.

Dado en Quito, a 8 de abril de 1986.

Por el Presidente Constitucional de la República, el Ministro de Bienestar Social, f.) Dr. Ernesto Velázquez Baquerizo.

Lo certifico:

f.) Lic. Emmanúel Martínez Palacios, Subsecretario de Desarrollo Rural y Promoción Popular.

Es fiel copia del original.— Lo certifico:

f.) Director Administrativo.

N° 127

EL MINISTRO DE TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS

Considerando:

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento Único para la Aplicación de la Ley de Defensa del Artesano, expedido mediante Decreto Ejecutivo N° 663 de 3 de abril de 1985, y promulgado en el Registro Oficial N° 163 de 11 de abril de 1985, le corresponde a esta Cartera de Estado la aprobación de estatutos y sus reformas de las asociaciones o gremios de artesanos;

Que se ha presentado en este Ministerio la documentación requerida para la aprobación de las reformas al estatuto del Gremio de Maestros Sastres y Modistas de Catacocha, provincia de Loja; Que la Dirección Nacional de Empleo y Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Portafolio, han emitido sus informes favorables, contenidos en el memorándum N° 121 de 2 de abril y Oficio N° 280 AJT de 25 de abril de 1986, respectivamente.

En ejercicio de sus atribuciones:

Acuerda:

Art. 1.— Aprobar las reformas del estatuto del Gremio de Maestros Sastres y Modistas de Catacocha, provincia de Loja, por encontrarse de conformidad con las disposiciones del Reglamento Único para la aplicación de la Ley de Defensa del Artesano.

Art. 2.— Regístrese en la Dirección Nacional de Empleo y Recursos Humanos, las reformas aprobadas del estatuto del Gremio de Maestros Sastres y Modistas de Catacocha, provincia de Loja.

Art. 3.— El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en Quito, a 12 de mayo de 1986.

f.) Dr. Jorge Egas Peña, Ministro de Trabajo y Recursos Humanos.

Certifico: Que es copia del original.

f.) Dr. Ernesto Muñoz Borrero, Director de Personal y Servicios Administrativos.

Quito, 12 de mayo de 1986.

ANEXO

11

Decreto-Ley No. 29

EL CONGRESO NACIONAL

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Ley No. 018, publicado en el Registro Oficial No. 346 de 2 de enero de 1986, se elevaron los sueldos y salarios mínimos vitales de las diferentes categorías ocupacionales, así como se dispuso el aumento general de sueldos y salarios;

Que es deber del Estado adoptar medidas que permitan mantener el poder adquisitivo de las remuneraciones de los trabajadores, manteniendo una política de periódicas revisiones salariales, tomando en consideración la real situación económica del país;

Que debido a la caída vertiginosa de los precios de exportación del petróleo, que ha generado la más grave crisis que registra la historia económica del Ecuador, es indispensable recurrir a medidas tributarias que creen recursos adicionales para el financiamiento del alza salarial de empleados y trabajadores del sector público;

En ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Política del Estado en su Artículo 66,

EXPIDE:

"LA LEY DE FIJACION DE SUELDOS Y SALARIOS MINIMOS VITALES Y ELEVACION DE SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y DE MEDIDAS TRIBUTARIAS PARA SU FINANCIAMIENTO"

I

Elevación de Sueldos y Salarios

ART. 1 A partir del 1 de agosto de 1986, fíjanse las remuneraciones mínimas vitales en las siguientes cantidades:

<u>CATEGORIA</u>	<u>SUELDO O SALARIO</u>
Trabajadores en general del sector privado	s/. 12.000
Trabajadores de la pequeña industria	10.000

Trabajadores agrícolas de la Costa,
Sierra, Región Amazónica y de la Pro-
vincia de Galápagos

9.000

Operarios de artesanía

8.700

Trabajadores del servicio doméstico

5.520

ART. 2 A partir del 1 de agosto de 1986, elévense los sueldos y salarios vigentes al 31 de julio de 1986 de los trabajadores del sector privado, de acuerdo a la siguiente escala:

<u>CATEGORIA</u>	<u>SUELDO O SALARIO</u>	<u>INCREMENTO</u>
Trabajadores en general	Desde 10.000 hasta 21.500	2.000
	Más de 21.500 hasta 23.500	La diferencia- hasta completar 23.500
Trabajadores de la pequeña industria	Desde 8.000 hasta 17.500	2.000
	Más de 17.500 hasta 19.500	La diferencia hasta completar 19.500
Trabajadores agrícolas de la Costa, Sierra, Región Amazónica y Pro- vincia de Galápagos	Desde 7.250 hasta 16.500	1.500
	Más de 16.500 hasta 18.000	La diferencia hasta completar 18.000
Operarios de artesanía	Desde 7.250 hasta 16.000	1.450
	Más de 16.000 hasta 17.450	La diferencia hasta completar 17.450
Trabajadores del ser- vicio doméstico	Desde 4.600 hasta 10.700	920
	Más de 10.700 hasta 11.620	La diferencia hasta completar 11.620

ART. 3 Los incrementos salariales a que se refieren los artículos anteriores benefician también a los trabajadores a destajo. En consecuencia, las tarifas o remuneraciones pactadas por piezas, trozos, medidas de superficie y en general por unidades de obra, se aumentarán en los mismos porcentajes, según

9.000
8.700
5.520
sueldos y sala-
rabajadores del
a:

INCREMENTO

000
diferencia-
sta completar
.500
000
diferencia
sta completar
.500
500
diferencia
sta completar
.000
450
diferencia
sta completar
.450
0
diferencia
sta completar
.620

los artículos
res a destajo.
s pactadas por
eneral por uni-
centajes, según

las distintas categorías de los trabajadores y en ningún caso las remuneraciones serán inferiores al respectivo sueldo o salario mínimo vital.

Para la aplicación del presente artículo, se computarán las remuneraciones percibidas en el período mensual de labor y se pagará el porcentaje de incremento o la diferencia con el sueldo o salario mínimo vital en la primera semana del mes siguiente.

ART. 4

Cuando la modalidad de trabajo considere jornadas parciales diarias, semanales o quincenales, se pagará la proporción correspondiente.

ART. 5

Los aumentos de sueldos y salarios que empezaron a regir desde el 1 de enero de 1986, basados en la obligaciones contraídas mediante contratos colectivos, actas trasaccionales o cualesquiera otra modalidad contractual, serán imputados a la elevación de sueldos y salarios establecida por esta Ley, siempre que no se hubieren imputado al Decreto Ley No. 018 promulgado en el Registro Oficial No. 346 de 2 de enero de 1986. No serán imputables dichos incrementos en los casos en que las partes voluntariamente y expresamente así lo hubieren acordado.

Los aumentos dispuestos mediante Acuerdos Ministeriales originados en las comisiones sectoriales de salarios mínimos que deban aplicarse a partir del 1 de enero de 1987 y aquellos dispuestos por Tribunales de Conciliación y Arbitraje mediante sentencias ejecutoriadas desde el 1 de enero de 1986, serán igualmente imputables.

ART. 6

Sustitúyase el Art. 23 de la Ley del Seguro Social Obligatorio por el siguiente texto:

"Las pensiones de invalidez y vejez y las que se originan en el Seguro de Riesgos del Trabajo, por incapacidad permanente total o gran incapacidad, no podrán ser inferiores al Salario Mínimo Vital General.

El Consejo Superior revisará anualmente la cuantía de las pensiones de jubilación, armonizando con las que otorgue por Ley el Congreso Nacional. Los aumentos que conceda el Congreso, serán imputables a los que otorgue el IESS.

Los trabajadores que obtuvieren el beneficio de dos o jubilaciones, comprendidas dentro de estas las patronales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en ningún caso percibirán por concepto de las jubilaciones patronales una cantidad inferior al cincuenta por ciento del salario mínimo vital general fijado."

- ART. 7 Los trabajadores amparados por el Código del Trabajo, salvo el caso de los contratados a tiempo fijo y las excepciones previstas en el artículo 14 del Código de Trabajo, gozarán de estabilidad hasta el 31 de diciembre de 1987, desde la vigencia de esta Ley. Por consiguiente, los contratos individuales de trabajo no podrán terminar por voluntad unilateral del empleador, sino previo visto bueno y por las causales contenidas en el artículo 171 del mencionado Código.

El empleador, que violando esta disposición diere por terminada unilateralmente la relación laboral pagará al trabajador una indemnización equivalente al sueldo o salario de un año sin perjuicio de las demás que le corresponda con arreglo a las disposiciones del citado Código o a las del Contrato Colectivo o acta transaccional si los hubiere.

- ART. 8 A partir del 1 de octubre de 1986, fíjase en doce mil sucres mensuales el sueldo o salario mínimo vital de los servidores públicos y el sueldo básico del Magisterio Nacional. Los incrementos establecidos para los "trabajadores en general" en el Art. 2 se aplicarán a los servidores públicos desde el 1 de octubre de 1986.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

- Primera. Para la determinación y cálculo del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio de 1987, se considerará el salario mínimo vital de diez mil sucres, salvo lo dispuesto en la Ley No. 07 publicada en el Registro Oficial No. 277 de 23 de septiembre de 1985.
- Segunda. Derógase el Art. 7° del Decreto Ley 018, publicado en el Registro Oficial No. 346 de 2 de enero de 1986.

II

Reducción y Supresión de Exoneraciones Tributarias

ART. 1

Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 3° de la Ley que crea el Fondo de Emergencias Nacionales, redúcese en el 10 por ciento las exoneraciones de derechos arancelarios e impuestos adicionales que gravan las importaciones establecidas por leyes generales o especiales. Se exceptúan de esta disposición las importaciones que se efectúen de conformidad con la Ley de Hidrocarburos, las importaciones que realice el Sector Público y las que se efectúen de conformidad con la Ley de Inmunidades y Privilegios Diplomáticos.

ART. 2

Suprímase el inciso segundo del artículo séptimo de la Ley 166 de 7 de junio de 1984, publicada en el Registro Oficial No. 764 de 13 de los mismos mes y año.

ART. 3

El producto que resulte de la reducción y supresión de exoneraciones tributarias de conformidad con lo dispuesto en los dos artículos anteriores se depositará en su totalidad en la Cuenta Corriente Unica del Tesoro Nacional para financiamiento de Presupuesto del Estado.

III

Reformas a la Ley de Impuesto a las Bebidas Gaseosas

ART. 1

El Artículo primero de la Ley de Impuesto a las Bebidas Gaseosas, reformado por la Ley No. 153, publicada en el Registro Oficial No. 662 de enero 16 de 1984, dirá: "Grávase con el impuesto único del 20 por ciento sobre el precio ex-fábrica de cada botella de bebidas gaseosas que se venda en el país."

ART. 2

El Artículo 6° a la Ley de impuesto a las bebidas gaseosas, dictada mediante Decreto Supremo No. 1880 publicado en Registro Oficial No. 448 del 21 de octubre de 1977, dirá: "El precio ex-fábrica servirá de base para el cálculo del Impuesto a las Transacciones Mercantiles."

IV

Impuesto sobre Viajes al Exterior

ART. 1

Establécese el impuesto de 15 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el mismo que será pagado por toda persona que

salga del país por vía aérea. Este impuesto será recaudado por la Dirección General de Aviación Civil, de la misma manera que cobra la tasa por servicios de aeropuerto.

- ART. 2 La Dirección General de Aviación Civil depositará semanalmente el producto de la recaudación de este impuesto en la Cuenta Corriente Unica del Tesoro Nacional, para financiamiento del Presupuesto del Estado.

V

Reformas a la Ley de Régimen Municipal

- ART. 1 Sustitúyense las tarifas establecidas en el Artículo 369 de la Ley de Régimen Municipal, por las siguientes:

ACTOS O CONTRATOS	NATURALEZA DEL CONTRATO	IMPUESTO FIJO PORCENTUAL
<u>I Ventas</u>		
Tarifa 1	1) Compra-Venta de inmuebles:	
	.Hasta por S/. 500.000	4.00
	.De más de S/. 500.000 a S/. 2.000.000:	
	-Por los primeros S/.500.000	4.00
	-Por el exceso hasta S/.2.000.000	5.00
	.De más de S/.2.000.000 hasta S/.5.000.000:	
	-Por los primeros S/.2.000.000	4.75
	-Por el exceso hasta S/.5.000.000	6.00
	.De S/.5.000.000 a 10.000.000:	
	-Por los primeros S/.5.000.000	5.50
	-Por el exceso hasta de S/. 10.000.000	7.00
	.De más de S/.10.000.000	
	-Por los primeros S/.10.000.000	6.25
	-Por el exceso	8.00
	2) Compra de buques y otras embarca-	

sto será recaudado de la misma manera o.

itará semanalmente esto en la Cuenta de financiamiento del

Artículo 369 de la :

0.000

00 0.000

:

00

000

cca-

ciones:

- Por el primer millón de sucres 2.50
- Por el exceso 3.50

Derechos Reales

- 3) Constitución, cesión o subrogación de derechos reales. Tarifa 1

Adjudicaciones

- 4) Refundiciones entre socios, coherederos y copropietarios. Tarifa 1

Aportes a Socios

- 5) Aportes de instalaciones industriales Exento
- 6) Aportes de inmuebles Tarifa 1

Otros actos o contratos

- 7) Cualquier otro acto o contrato traslativo de dominio no especificado anteriormente que esté sujeto al pago de este impuesto. Tarifa 1

ART. 2 En el Artículo 373 en lugar de la palabra "semestral" escribíbase "anual".

ART. 3 Reemplácese los límites mínimos y máximos establecidos por el Artículo 374 por los siguientes:

TARIFA	
Porcentaje del Salario Mínimo Vital	
Mínimo	Máximo

- 1. Camiones, camionetas y otros vehículos destinados al transporte de carga y pasajeros, o solamente carga:
 - a) De más de quince toneladas de carga útil
 - Por las quince primeras toneladas 50
 - Por cada tonelada adicional 5
 - b) De diez a quince toneladas de carga

	útil	40	50
c)	De siete a diez toneladas de carga útil	30	40
d)	De cinco a siete toneladas de carga útil	20	30
e)	De dos a cinco toneladas de carga útil	10	20
f)	De una a dos toneladas de carga útil	5	10
g)	De menos de una tonelada de carga útil	2.5	5
2.	Autobuses, microbuses y vehículos semejantes para el transporte colectivo de pasajeros	30	40
3.	Autobuses, microbuses y vehículos semejantes para el transporte colectivo, destinados a establecimientos educacionales, pagarán el 50 por ciento de las tarifas del numeral 1, según el tonelaje.		
4.	Automóviles, Station Wagon, Utilitys y similares	5	10
5.	Autocarrozadas funerarias, pagarán el 70 por ciento de la tarifa del numeral 4.		
6.	Motocicletas.	3	5

VI

Reformas a la Ley de Timbres y Tasas Postales y Telegráficas

ART. 1 Al Artículo 2° de la Ley de Timbres y Tasas Postales y Telegráficas vigente, añádase un inciso que dirá:

"El impuesto de timbres se calculará tomando como base el Salario Mínimo Vital, conforme se establece en el Artículo 41 de esta Ley."

ART. 2 El Artículo 41 dirá: "La tarifa del impuesto de timbres se calculará sobre la base del salario mínimo vital y de los derechos graduales. Todos los actos, contratos, instrumentos y documentos que no estén expresamente exonerados en todo o en parte, según lo dispuesto en el Artículo 42 o en leyes especiales, quedan gravados de conformidad con la tarifa siguiente:

DERECHOS

FIJOS

GRADUALES

Por Ciento del
Salario Mínimo
Vital

Por Ciento Por Mil

ACTOS Y CONTRATOS EN GENERAL:

1) De cuantía indeterminada:

En la primera foja 1.00
En las demás 0.20

2) De cuantía determinada:

a) Hasta quinientos sucres 0.50

b) De quinientos a mil:
Por los primeros quinientos 0.50

Por el exceso 2.00

c) De mil a un millón de sucres:

Por el primer mil 0.60

Por el exceso 13.00

d) De más de un millón hasta tres millones de sucres:

Por el primer millón 130.50

Por el exceso 14.00

e) De más de tres millones:

Por los primeros tres millones 410.50

Por el exceso 15.00

NOTA 1.- El pago del impuesto de timbres en los contratos de constitución de sociedades, se regirá por estas estas normas:

a) Las sociedades industriales, así como las agrícolas o mineras,

elegráficas

Postales y Tele-

do como base el
en el Artículo 41

to de timbres se
vital y de los
tos, instrumentos
ados en todo o en
o en leyes espe-
con la tarifa

D E R E C H O S

FIJOS

GRADUALES

Por Ciento del
Salario Mínimo

Por Ciento Por Mil

Vital

pagarán sólo el veinte
por ciento de dicha
tarifa.

b) Las sociedades comer-
ciales, pagarán el se-
senta por ciento de
esta tarifa.

c) Las reformas del con-
trato primitivo, sin
aumento de capital se
considerarán de cuan-
tía indeterminada. Las
reformas con aumento de
capital pagarán el tri-
buto que corresponda a
dicho aumento.

Los derechos se cobra-
rán por la primera foja,
en las demás se pondrán
0.2% del salario mínimo
vital, en timbres.

NOTA 2.- En la Provincia
del Guayas se se-
guirá cobrando, además, el
dos por ciento establecido

por Decreto-Ley de Emergen-
cia No. 44 de 6 de agosto

de 1962, publicado en el
Registro Oficial No. 226 de
7 del mismo mes y año, en
la forma prevista en dicho

Decreto.

Los certificados liberato-
rios conferidos por los

O S

GRADUALES

o Por Mil

FIJOS

Por Ciento del

Salario Mínimo

Vital

D E R E C H O S

GRADUALES

Por Ciento

Por Mil

Procuradores de Sucesiones, se habilitarán con timbres, de la siguiente manera:

En las sucesiones de un valor neto de hasta	
s/. 200.000,00	1,00
De s/. 200.000,00 hasta	
s/. 500.000,00	2,00
De s/. 500.000,00 hasta	
s/. 1.000.000,00	3,00
De s/. 1.000.000,00 hasta	
s/. 2.000.000,00	6,00
De más de s/. 2.000.000,00	12,00

II. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS NO PREVISTAS:
Actuaciones administrativas o documentos expedidos por cualquier funcionario público en favor o a solicitud de parte no considerados en la presente Ley, en cada foja 0,50

III. AVALUOS:
Los avalúos que se practiquen por orden judicial o administrativa, así como los que se efectúen para presentarse en las oficinas administrativas o en los bancos para la realización de operaciones de crédito, en cada foja 0,50

IV. CEDULAS:
1) Las cédulas que se expidieren para establecer la condición de:

	FIJOS	DERECHOS GRADUALES	
		Por Ciento del	Por Ciento Por
	Salario Mínimo		
	Vital		
Agricultor;	2,00		
Comerciante, Industrial, etc.	2,50		
2) Cédulas, libretas o certificados de servicio militar obligatorio			1,00
V. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES POLICIALES:			
Los certificados que extiendan las autoridades de policía acerca de antecedentes policiales, en cada foja.			0,50
VI. COMERCIO MARITIMO:			
1) Documentos de Comercio Internacional:			
a) Solicitudes y órdenes de visitas, de fondeo y salida, otros documentos de navegación marítima (zarpe, sin carga, etc.) por cada uno	0,50		
b) Permisos de carga y descarga	4,50		
c) Manifiestos de importación	4,00		
d) Manifiestos de exportación	4,00		
e) Conocimiento de embarque	1,00		
f) Las facturas consulares y comerciales que sirvan de documento de acompañamiento en el trámite aduanero o postal, por el juego de seis ejemplares	2,00		
g) Patentes de sanidad para vapores extranjeros	10,00		
h) Patentes de sanidad para vapores nacionales	5,00		
i) Pólizas de exportación, en el juego de seis ejemplares	2,00		
j) Declaraciones aduaneras, en cada foja	0,50		
k) Roles de tripulación de buques, en cada uno	1,00		
l) Listas de rancho, medicinas y repuestos del buque, por cada foja	1,50		
m) Listas de pasajeros que se embarquen en el puerto o declaración de que la nave no conduce			

DERECHOS
GRADUALES
Por Ciento Por

DERECHOS

FIJOS
Por Ciento del Salario Mínimo Vital
GRADUALES
Por Ciento Por Mil

pasajeros del puerto 2,00
n) Lista de pasajeros que siguen en tránsito o declaración de que no los conduce 2,00

NOTA 3. Mediante el Reglamento del Ministerio de Finanzas se determinará la aplicación de los derechos que establece esta Ley y la de Derechos Consulares en los documentos del Comercio Internacional.

NOTA 4. En el caso de Convenios Internacionales para las patentes de sanidad, se atenderá a lo dispuesto en los mismos.

2) Documentos de Comercio Marítimo de Cabotaje:

a) Embarcaciones despachadas en lastre 2,00
b) Embarcaciones despachadas con carga o pasajeros 4,00
c) Las embarcaciones despachadas por puertos no habilitados pagarán en el puerto de destino 3,00

NOTA 5. El impuesto se causará únicamente en cada foja del original y será pagado en efectivo en la Jefatura de Recaudaciones de la Administración de Aduanas respectiva.

Las embarcaciones nacionales menores de diez toneladas de registro bruto serán despachadas con solo la presentación del rol y lista de pasajeros, adheridos en cada foja timbres por valor de 0,50

3) Otros documentos del Comercio Marítimo:

a) Patentes de Navegación.- Patentes de navegación que conferirán los capitanes de puer-

		D E R E C H O S		
		FIJOS	GRADUALES	
		Por Ciento del	Por Ciento	Por Mil
		Salario Mínimo		
		Vital		
to por una sola vez, pero que se renovarán cuando las embarcaciones cambien de dueño, de nombre, de aparejo, de capitán o de patrón:				
	1. Por las diez primeras toneladas		5,00	
	2. Por cada una de las toneladas restantes		0,20.	
b)	Pasavantes.- Pasavantes provisionales que otorgarán los capitanes de puesto, válidos por tres meses, mientras que se conserva la patente de navegación, pagarán el 50% de la tarifa anterior, la que no será inferior a			
			5,00	
c)	1. Listas de pasajeros en cada viaje de salida o llegada al puerto fluvial de las cabeceras provinciales, de los vapores, lanchas y demás embarcaciones menores de tráfico fluvial, exceptuándose las canoas en general y las embarcaciones de pasajeros entre Eloy Alfaro y Guayaquil y viceversa.		1,00	
	2. Planillas para el pago de fletes y pasajes		1,00	
	3. Certificados de tasación de las embarcaciones que expedirá la dirección de la Marina Mercante y del Litoral		1,00	
	4. Certificados del estado del mar, vientos, etc. del fondeado expedidos por el capitán del puerto		1,00	
	5. Copia certificada de cualquier documento de los archivos de las capitanías de puertos		1,00	

E C H O S
GRADUALES
Ciento Por Mil

D E R E C H O S

FIJOS

GRADUALES

Por Ciento del
Salario Mínimo
Vital

Por Ciento Por Mil

6. Solicitudes de registro en las capitanías del puerto, de arriendo, fletamento de embarcaciones o cualquier otro contrato similar, según la cuantía del contrato, que se pagará en la respectiva Jefatura Provincial de Recaudaciones. 3,00

7. Certificado de arqueo y medida extendidos por la Dirección de la Marina Mercante y del Litoral:
 - Hasta de 10 toneladas de registro bruto de la nave 2,00
 - Por cada una de las toneladas restantes 0,20
 - Los certificados de clasificación, avalúo, reconocimiento, inspección semestral de franco-bordo y más certificados que expida la Marina Mercante y del Litoral o capitanías de puerto, en cada foja 0,50

8. Solicitudes de clasificación, de reconocimiento, de avalúo, de estudio de planos o dibujos para hacer reparaciones o modificaciones y de estudios de planos y especificaciones de buques por construir o construídos en el extranjero, por cada una de estas actuaciones, por cada nave de:
 - Hasta de veinticinco toneladas 2,00
 - De más de veinticinco a cien toneladas 4,00
 - De más de cien a trescientas toneladas 7,00
 - De más de trescientas a

DERECHOS
GRADUALES
Por Ciento Por Mil

FIJOS

Por Ciento del
Salario Mínimo
Vital

quinientas toneladas 10,00

Además se pagará el 0,05%
del salario mínimo vital,
por cada tonelada que excede
de las quinientas.

9. Las solicitudes de cálculo y fijación de la LINEA DE FRANCO BORDO pagarán el 50% de los impuestos constantes en el numeral 8 de esta tarifa.

10. Cualquier otro documento que se emplee o se requiera en el despacho de importación o exportación en el comercio del cabotaje 0,50

NOTA 6.- Los derechos se cobrarán por la primera foja, en las demás se causará el derecho de 0,2% del salario mínimo vital, en cada una de ellas.

NOTA 7.- La Jefatura de Estadística de Guayaquil de la Dirección Nacional de Tributación Aduanera verificará periódicamente el cumplimiento de la obligaciones establecidas por esta Ley, en lo que se refiere al comercio marítimo de cabotaje.

NOTA 8.- Los Departamentos de Comprobación de Aduanas y de Cabotaje enviarán quincenalmente todos los documentos relacionados con el comercio marítimo y de cabotaje, a la Jefatura de Estadística de Guayaquil de la Dirección Nacional de Tributación Aduanera.

VII CONCESIONES Y ACTUACIONES ADMINIS-

DERECHOS
GRADUALES
Por Ciento Por Mil

DERECHOS
GRADUALES
FIJOS
Por Ciento del Salario Mínimo Vital
Por Ciento Por Mil

TRATATIVAS:

- 1) Concesiones de Hidrocarburos:
 - a) Solicitudes, planos, memorias y demás actuaciones previas a la obtención, traspaso o cesión de concesiones para la explotación de yacimientos petrolíferos, por cada foja 5,00
 - b) Contratos de concesión 30,00
 - c) Contratos de cesión o traspaso 50,00
- 2) Contratos de protección Industrial:
 - a) Solicitudes, memorias descriptivas de la industria y demás documentos que deban presentarse para obtener el contrato, su prórroga o ampliación, por cada foja del original 1,00
 - b) Descripción o anotación de Industrias en el libro de registro de industrias:
 1. Industrias por capital de hasta quinientos mil sucres 2,00
 2. Industrias por capital de más de quinientos sucres hasta dos millones de sucres 5,00
 3. Industrias por capital de más de dos millones de sucres hasta cinco millones de sucres 10,00
 4. Industrias con capital de más de cinco millones de sucres hasta diez millones de sucres 12,00
 5. Industrias con capital de más de diez millones de sucres 16,00

NOTA 9.- Las industrias clasificadas según la Ley de Fomento Industrial o las que obtengan los beneficios de Leyes Especiales y de Protección, se inscribirán obligatoriamente en el Libro de Registro de Industrias que llevará la Dirección General de Desarrollo Industrial.

NOTA 10.-Las tarifas b) y c)

	DERECHOS	
	FIJOS	GRADUALES
	Por Ciento del	Por Ciento Por Mil
	Salario Mínimo	
	Vital	

del numeral 1 y la tarifa b)
del numeral 2 afectan al con-
trato y se pagarán por la pri-
mera foja de los mismos. Las
demás fojas llevarán timbres
por S/. 0,2% del salario míni-
mo vital.

- 3) Marcas de fábrica, marcas de
servicios, nombres comerciales
diseños y dibujos industriales:
- | | |
|--|-------|
| a) Memorias, solicitudes y de-
más actuaciones previas a
la inscripción de su renova-
ción o transferencia, en ca-
da foja | 1,00 |
| b) Inscripción | 50,00 |
| c) Renovación | 30,00 |
| d) Transferencia o cualquier
otro cambio de propietario | 20,00 |
| e) Registro de contratos de
licencias | 20,00 |

NOTA 11. Los derechos estable-
cidos en los numerales 1, 2 y
3 de la Tarifa VII se pagarán
en efectivo en la Jefatura Pro-
vincial de Recaudaciones y su
comprobante de pago se anexará
a la respectiva actuación. Las
actuaciones se habilitarán con
el 0,2% del salario mínimo vi-
tal, en timbres.

NOTA 12. Los derechos estable-
cidos sustituyen a todo otro
previsto en la Ley de Marcas
de Fábrica.

- 4) Terrenos baldíos:
- | | |
|---|------|
| a) Solicitudes, memorias y de-
más actuaciones previas a
la adjudicación, en cada
foja | 0,50 |
| b) Por la adjudicación de te-
rrenos baldíos, previo el
pago del valor de los mis-
mos conforme la Ley respec- | |

CHOS
GRADUALES
Por Ciento Por Mil

DERECHOS

GRADUALES

FIJOS
Por Ciento del
Salario Mínimo
Vital

Por Ciento Por Mil

tiva.

1. Hasta cien mil sucres 5,00

2. De más de cien mil sucres 10,00

NOTA 13. Las tarifas del literal b) se aplicarán en la primera foja. Las demás llevarán timbres por 0,50% del salario mínimo vital.

5) Patentes de exclusiva:
Patentes de exclusiva por inventos:

a) Memorias, solicitudes, representaciones y demás actuaciones previas a la obtención, traspaso o cesión de las patentes, en cada foja se habilitará con timbres de 1,00

b) Patentes de exclusiva que se otorgarán previa la inscripción respectiva, por cada foja 3,00

Además por este mismo concepto el interesado pagará en la Jefatura Provincial de Recaudaciones el equivalente al 20% del salario mínimo vital, y el recibo será adjuntado a la patente.

c) Inscripciones de traspaso o cesión de la patente de exclusiva o de cualquier otro cambio de propietario 10,00

NOTA 14. Estos derechos sustituyen a todo otro establecido en la Ley de Patentes de Exclusiva de Explotación de Inventos.

6) Registro de derechos de autor

a) Memorias, solicitudes y demás actuaciones previas

		DERECHOS		
		FIJOS	GRADUALES	
		Por Ciento del	Por Ciento	Por Mil
		Salario Mínimo		
		Vital		
	a la obtención del registro	0,50		
	b) Registro	2,00		
7)	Trámites Mineros			
	a) Solicitudes, planos, memorias y demás actuaciones previas a la obtención, traspaso o cesión de contratos mineros en cada foja	1,00		
	b) Contratos mineros	25,00		
	NOTA 15. Respecto de las tarifas b) y c) del numeral 5 y b), c) y d) del numeral 7 regirán las mismas reglas establecidas en las notas 10 y 12. Las exoneraciones previstas en la Ley de Minería prevalecerán sobre lo dispuesto en esta Ley.			
8)	Documentos relacionados con las industrias navieras.			
	a) Solicitudes de clasificación y de inspección anual para un astillero o industria naviera, según el tonelaje de registro bruto de las naves que están capacitados a recibir:			
	Hasta cincuenta toneladas	5,00		
	De más de cincuenta a quinientas toneladas	15,00		
	De más de quinientas toneladas:			
	Por las primeras quinientas	15,00		
	Por cada tonelada de exceso	0,10		
	b) Solicitudes para registrar en las capitanías de puerto contratos de construcción, reparaciones o carena, según la cuantía del contrato que se pagará en la Jefatura Provincial de Recaudaciones			
	c) Solicitud de estudio de pla-			

E C H O S
GRADUALES
Ciento Por Mil

D E R E C H O S
GRADUALES
Por Ciento Por Mil

FIJOS
Por Ciento del
Salario Mínimo

Vital

nos y detalle del terreno pa-
ra construir un dique, parri-
lla, varadero, etc., según
el tonelaje de registro bru-
to de las naves que puedan
recibir:

De más de cincuenta a qui-
nientas toneladas 20,00

Por el exceso de quinientas
toneladas cada una 0,10

d) Certificados de inspección
anual, clasificación y ma-
trícula anual, para un as-
tillero o industria navie-
ra, por cada uno 2,00

e) Por ocupación de muelles,
desembarcaderos, zonas de
playa, etc., para el servi-
cio público, se pagará a-
nualmente en la Jefatura
Provincial de Recaudaciones
de la respectiva Adminis-
tración de Aduanas:
Por cada metro cuadrado de
muelle, desembarcadero, zo-
na de playa, etc. 0,50

NOTA 16. El permiso de cons-
trucción para dique, parrilla,
varadero, etc., se habilitará
con 0.50% del salario mínimo
vital, en timbres. Las solici-
tudes para ocupación de zonas
de playa, zonas de bahía, para
construcción o instalación de
edificios, industrias, muelles,
desembarcaderos, boyas, ponto-
nes, postes, etc., se habilita-
rán con 0.50% del salario míni-
mo vital, en timbres. La ins-
cripción de hipotecas, prendas
industriales, contratos y demás
obligaciones que graven una na-
ve o embarcación, se realizará
en la capitanía de puerto de re-
gistro y la solicitud respecti-
va se habilitará con timbres, a

3,00

D E R E C H O S

FIJOS	GRADUALES	
	Por Ciento del	Por Ciento Por Mil
Salario Mínimo Vital		

razón del

3,00

Las tasas y derechos por servicios prestados por la Marina Mercante y del Litoral se cobrarán de acuerdo a las disposiciones reglamentarias correspondientes.

NOTA 17. Los muebles, desembarcaderos, zonas de playa, etc., del servicio privado que no pertenecen a los establecimientos de reparación o contrucción de embarcaciones, pagarán 0,1% del salario mínimo vital, por cada metro cuadrado de ocupación en la respectiva Jefatura de Recaudaciones del Distrito de Aduanas.

- f) Por ocupación de zona de bahía se pagará anualmente en la Jefatura Provincial de recaudaciones del Distrito de Aduana, por cada boya para amarradero de buques:
- | | |
|---|--------|
| Para buques de hasta cien toneladas | 20,00 |
| Para buques de más de cien toneladas hasta quinientas toneladas | 30,00 |
| Para buques de más de quinientas toneladas hasta mil toneladas | 50,00 |
| Para buques de más de mil toneladas | 100,00 |
| Para buques de más de dos mil toneladas | 150,00 |
- g) Por pontones y postes que ocupen la zona de bahía se pagará anualmente en la respectiva Jefatura Provincial de Recaudaciones del Distrito de Aduana:
1. Por cada metro cuadrado de superficie de bahía ocupado por el pontón 0,50
 2. Por cada poste para ama-

H O S
RADUALES
ento Por Mil

3,00

D E R E C H O S
GRADUALES
Por Ciento Por Mil

FIJOS
Por Ciento del
Salario Mínimo
Vital

- rradero o defensa 5,00
- h) Los oleoductos, cañerías para agua potable, cables submarinos y demás materiales que suspendidos o en el fondo de las aguas se instalen dentro del perímetro de jurisdicción marítima, pagarán anualmente en la respectiva Jefatura de Recaudaciones del Distrito de Aduana, los siguientes derechos por ocupación de playa y de zona de bahía:
1. Por cada metro lineal de oleoducto medido desde la línea de la más alta pleamar hacia el mar 0,05
 2. Por cada metro lineal de cañería para agua potable medido desde la línea de más alta pleamar hacia el mar 0,02
 3. Por cada metro lineal de cable medido desde la línea de la más alta marea 0,05
- i) Por ocupación de playa en cualquier otra forma no especificada en esta Tarifa, se pagará anualmente el 0,2% del salario mínimo vital por cada metro cuadrado, en la Jefatura de Recaudaciones del Distrito de Aduana.

NOTA 18. Los certificados de matrículas que se extiendan por los conceptos indicados en los literales e), f), g) y h) del numeral 8 de esta Tarifa, se habilitarán con el 0,5% del salario mínimo vital, en timbres.

NOTA 19. Los oleoductos, cañerías y otras instalaciones pertenecientes a Entidades Públicas o Privadas del servicio público, estarán exentas del pago de estos impuestos.

FIJOS
Por Ciento del
Salario Mínimo
Vital

D E R E C H O S
GRADUALES
Por Ciento Por Mi

tos.

- 9) Matrículas de estibadores, conferidos de conformidad con el Decreto 519-B de 5 de abril de 1971, publicado en el Registro Oficial No. 204 de 16 de los mismos mes y año 2,00
- 10) Otros documentos para el personal de la Marina Mercante Nacional:
 - a) Solicitud para registrar en la capitanía de puerto, contratos por servicios profesionales, se habilitará con 0,50% del salario mínimo vital, en timbres.
 - b) Certificado o matrícula de inscripción en los registros de las capitanías de puerto se habilitará con 0,50% del salario mínimo vital en timbres.
 - c) Exámenes 1,00

VIII. CESIONES DE DOCUMENTOS:

Las cesiones y endosos de documentos por valor recibido deberán el tributo de acuerdo con la siguiente graduación:

En la primera cesión: 80% de los derechos que de acuerdo a la Tarifa I cause el documento;

En la segunda cesión: 60% de los referidos derechos;

En la tercera cesión: 40% de los predichos derechos;

En las demás cesiones: 20% de esos derechos.

IX. DOCUMENTOS TRAMITADOS POR EL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICIA CIVIL NACIONAL:

- 1) Las solicitudes, denuncias y otros escritos análogos que se presenten ante las autoridades

DERECHOS

GRADUALES

Por Ciento Por Mil

DERECHOS

GRADUALES

FIJOS
Por Ciento del
Salario Mínimo
Vital

Por Ciento Por Mil

- de la Fuerza Pública, así como los certificados y más documentos expedidos por éstas, que no estén expresamente exonerados, en cada foja 0,20
- 2) Las solicitudes relacionadas con la Ley de Servicio Militar y Trabajo Obligatorio de las Fuerzas Armadas Nacionales, en cada foja 0,50

I. EDIFICACIONES:

Las licencias que otorguen las autoridades municipales para construcciones, reparaciones o reconstrucción, sobre el valor del presupuesto

1,00

Estas licencias se habilitarán con timbres por

1,00

II. REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION:

- 1) Por inscripciones de:
- a) Reconocimientos 1,00
 - b) Matrimonios 1,50
 - c) Sentencias de divorcio y nulidad de matrimonios 15,00
 - d) Separación conyugal judicialmente autorizada: 10,00
 - e) Adopciones 10,00
 - f) Sentencias de muerte presunta y de otras clases no especificadas 3,00
 - g) Inscripciones de nacimientos, defunciones y defunciones fetales Gratuitas
- 2) Por otorgamiento de partidas:
- a) Certificados simples de nacimientos, matrimonios, defunciones y otros de Registro Civil:
 - 1. Menores de 18 años 0,20
 - 2. Los demás 0,50
 - b) Copias íntegras de partidas de toda clase 0,50
- 3) Por otras actuaciones:

		D E R E C H O S		
		FIJOS	GRADUALES	
		Por Ciento del	Por Ciento	Por Mil
		Salario Mínimo		
		Vital		
a)	Rectificaciones administrativas.	1,50		
b)	Reconstituciones de partidas	1,50		
c)	Celebraciones de matrimonios a domicilio:			
	1. En capitales de provincia	50,00		
	2. En otros lugares	25,00		
	Se exceptúan de estos derechos los matrimonios "in extremis".			
d)	Delegaciones a otros funcionarios para celebraciones de matrimonios	30,00		
4)	Solicitudes, con excepción de las relativas al otorgamiento de copias y certificados	0,20		
5)	Inscripciones de cartas de naturalización en el Registro Civil	10,00		
6)	Obtención de la Cédula de Identidad y de Identidad y Ciudadanía:			
a)	Cédula de Identidad y Ciudadanía	1,00		
b)	Reposición por pérdidas de la Cédula	2,00		
c)	Cédula de Identidad para extranjeros	10,00		
d)	Reposición por pérdida de cédula para extranjeros	20,00		
e)	Obtención de Cédula de Ciudadanía de ecuatorianos residentes en el exterior (US\$)	0,20		
f)	Reposición por pérdida de Cédula de Ciudadanía de ecuatorianos residentes en el exterior (US\$)	0,30		

NOTA 20. Los ecuatorianos residentes en el exterior, para obtener o reponer la Cédula de

C H O S
GRADUALES
Ciento Por Mil

DERECHOS
FIJOS GRADUALES
Por Ciento del Por Ciento Por Mil
Salario Mínimo
Vital

Ciudadanía, podrán efectuar el pago de la tasa pertinente en dólares, o su equivalente en sucres, calculados al tipo de cambio de mercado libre.

- 7) Derechos de cedulação a domicilio, con excepción de los casos de invalidez comprobada 20,00

NOTA 21. El cobro de los derechos establecidos en la tarifa XI, se efectuará mediante el uso de timbres que para este efecto emitirá el Ministerio de Finanzas, los mismos que deberán adherirse en las respectivas actuaciones.

NOTA 21-A Los derechos por celebraciones de matrimonios a domicilio, por delegación a otros funcionarios para la celebración de matrimonios y por cedulação a domicilio, recaudará directamente el Ministerio de Finanzas, mediante formularios especiales.

NOTA 21-B Para el cobro de los derechos por la cedulação de ciudadanía y de identidad, el Ministerio de Finanzas emitirá especies valoradas.

NOTA 21-C Las Cédulas de Identidad y de Identidad y Ciudadanía tendrán validez hasta la muerte de su titular.

III JUICIOS Y ACTUACIONES JUDICIALES

Los juicios y actuaciones judiciales, incluyendo los documentos que constituyen la prueba que debe efectuarse, pagarán los siguientes derechos:

- a) En los juicios penales, que sólo pueden seguirse por acusación particular, en cada foja 0,10

NOTA 22. En los juicios penales que se siguen de oficio, así como los de

DERECHOS
GRADUALES
FIJOS
Por Ciento del Por Ciento Por Mil
Salario Mínimo Vital

policía correccional, se empleará papel común, pero si se dicta sentencia condenatoria, en costas, se computarán los derechos por cada foja útil a razón de 0,1% del salario mínimo vital, cada una.

- | | | |
|----|--|--------|
| b) | Juicios civiles de cuantía indeterminada, en cada foja | 0,10 |
| c) | Juicios civiles de cuantía determinada, en cada foja: | |
| 1. | Si la cuantía no excede de veinte mil sucres | Exento |
| 2. | De más de veinte mil hasta cincuenta mil sucres | 0,20 |
| 3. | De más de cincuenta mil hasta cien mil sucres | 0,25 |
| 4. | De más de cien mil hasta quinientos mil sucres | 0,30 |
| 5. | De más de quinientos mil hasta un millón de sucres | 0,60 |
| 6. | De más de un millón hasta dos millones de sucres | 0,80 |
| 7. | De más de dos millones en adelante | 1,00 |
| d) | Los demás documentos y anexos que se presenten con los escritos de pruebas y alegatos como facturas, documentos comerciales y demás instrumentos de prueba, en cada foja | 0,10 |
- NOTA 23. Esta tarifa grava también a los carteles, certificados y documentos que se presenten en el juicio. Las exoneraciones vigentes por leyes especiales se mantienen.

XIII LEGALIZACIONES:

- | | |
|---|------|
| Legalizaciones que efectuaren los funcionarios ecuatorianos en la República o en el exterior (en divisas) | 2,00 |
| En cada foja del documento | 1,00 |

NOTA 24. Los documentos que desde su origen deban llevar timbres, pagarán únicamente esos derechos, a menos que

E C H O S
GRADUALES
Por Ciento Por Mil

DERECHOS
FIJOS
GRADUALES
Por Ciento del Salario Mínimo Vital Por Ciento Por Mil

fueren inferiores a 1.0% del salario mínimo vital, en cuyo caso llevarán timbres adicionales, hasta completar ese valor. Cuando se presenten documentos como anexos, a un escrito de prueba o de tramitación, que no deben llevar timbres desde su origen, pagarán los derechos de cuantía determinada. En las legalizaciones otorgadas en el exterior se pagará el impuesto en divisas.

NOTA 25. Las legalizaciones solicitadas por el Cuerpo Diplomático o Consular acreditados en el país, se regirán por el principio de reciprocidad.

NOTA 26. Las legalizaciones de los títulos considerados en la tarifa XI, causarán los derechos establecidos en ella.

IV Licencias para Agentes Afianzados de Aduana, que expedirá la Dirección General de Aduanas pagarán anualmente:

a)	En Quito y Guayaquil	300,00
b)	En Cuenca, Manta y Ambato	200,00
c)	En el resto del país	100,00

V Licencia para Agentes de Naves Extranjeras que expedirá la Dirección de la Marina Mercante y del Litoral, anualmente 100,00

VI Licencias para Agentes de Naves Nacionales, que expedirá la Dirección de la Marina Mercante y del Litoral, anualmente:

a)	Para el tráfico exterior	50,00
b)	Para el tráfico de cabotaje o fluvial	20,00

NOTA 27. Las Aduanas no admitirán ninguna diligencia por parte de Agentes Afianzados o no, o de los Agentes de naves extranjeras o nacionales que no hayan cumplido con el pago establecido en esta Ley, el mismo

DERECHOS
GRADUALES
Por Ciento Por
FIJOS
Por Ciento del
Salario Mínimo
Vital

que se lo realizará en la misma Jefatura Provincial de Recaudaciones.

XVII LICENCIAS PARA ESTACIONES DE RADIO Y TELEVISION

Las estaciones de radio pagarán los siguientes derechos, sin perjuicio de las pensiones que estipulen los contratos que celebren con el Gobierno:

- | | | |
|----|---|-------|
| 1) | Estaciones de radio transmisión y recepción de empresas periódicas de exclusivo uso de la empresa, mensualmente por cada estación | 4,00 |
| 2) | Estaciones de radio transmisión y recepción de empresas industriales, comerciales, agrícolas, de transporte, de servicio terrestre, etc., para su exclusivo uso particular, mensualmente. | 10,00 |
| 3) | Estaciones de radio transmisión y recepción de empresas bancarias de uso privado, mensualmente, por la estación principal | 50,00 |
| | por las demás estaciones | 30,00 |
| 4) | Las licencias de estaciones de radio a bordo de las naves o embarcaciones de la marina mercante nacional, se habilitarán con timbres, de acuerdo con la siguiente clasificación: | |
| | De primera categoría | 10,00 |
| | De segunda categoría | 5,00 |
| | De tercera categoría | 3,00 |
| | De cuarta categoría | 2,00 |
| 5) | Radiodifusoras comerciales, mensualmente: | |
| a) | Que funcionen en ciudades de hasta veinte mil habitantes | 2,50 |
| b) | En ciudades de más de veinte mil hasta de cien mil habitantes | 5,00 |
| c) | En ciudades de más de cien mil habitantes | 7,00 |

DERECHOS
GRADUALES
Por Ciento Por

DERECHOS
GRADUALES
FIJOS
Por Ciento del Salario Mínimo Vital
Por Ciento Por Mil

- 6) Estaciones de televisión comercial mensualmente:
- a) Que funcionen en ciudades de hasta veinte mil habitantes 10,00
 - b) En ciudades de más de veinte mil hasta cien mil habitantes 20,00
 - c) En ciudades de más de cien mil habitantes 30,00

NOTA 28. Se considerará y pagará como una sola estación el aparato transmisor y el receptor que funcionen alternativamente para el servicio de la empresa.

XVIII LICENCIAS PROFESIONALES:

- 1) Las licencias para la Marina Mercante se atenderán a lo determinado en el reglamento de trámites de la Dirección de la Marina Mercante y del Litoral y Capitanías de Puerto de la República.
- 2) Para choferes profesionales, sportman, etc., cocheros y otras licencias que deban obtenerse según la respectiva regulación 2,00
- 3) Para conductores y maquinistas de ferrocarriles, operadores y maquinistas de equipo caminero 3,00

NOTA 29. Las licencias profesionales para el manejo de vehículos pagarán el 50 por ciento de las tarifas anteriores.

La renovación de las licencias provisionales se efectuará cada dos años.

NOTA 30. Los choferes profesionales y sportman pagarán por la licencia cada cuatro años.

XIX LICENCIAS, AUTORIZACIONES, ETC.:

Toda licencia, autorización, título o patente no considerados expresamente en esta Ley, siempre que no estuvieren eximidos por ella del impuesto de timbres y que expidieren las autori-

DERECHOS
GRADUALES
Por Ciento Por Mil

FIJOS
Por Ciento del
Salario Mínimo
Vital

dades y funcionarios del Estado, de las municipalidades o cualquier otra institución de derecho público se habilitarán con timbres por el valor de 1,00

XX MATRICULAS ANUALES DE NAVEGACION INCLUYENDO EL IMPUESTO POR TONELAJE DE REGISTRO CREADO POR DECRETO SUPREMO DE JULIO 6 DE 1946:

- 1) Motoveleros, vapores, motonaves:
 - a) Hasta diez toneladas, por cada una 0,50
 - b) De diez a cincuenta toneladas por cada tonelada de registro. 1,00
 - c) De más de cincuenta toneladas a cien:
 1. Por las cincuenta primeras 50,00
 2. Por cada una de las restantes 1,00
 - d) De más de cien toneladas:
 1. Por las primeras cien 100,00
 2. Por cada una de las restantes 1,00
- 2) Veleros y balandras:
 - a) Hasta de diez toneladas, por cada una 0,50
 - b) De más de diez toneladas:
 1. Por las primeras diez 6,00
 2. Por cada una de las restantes 1,00
- 3) Lanchas con motor fijo:
 - a) De hasta diez toneladas, por cada una 1,50
 - b) De más de diez a treinta toneladas:
 1. Por las primeras diez 15,00
 2. Por cada una de las restantes 1,00
 - c) De más de treinta toneladas:
 1. Por las primeras treinta 35,00
 2. Por cada una de las restantes 1,00

DERECHOS
GRADUALES
Por Ciento Por Mil

DERECHOS
GRADUALES
FIJOS
Por Ciento del Salario Mínimo Vital
Por Ciento Por Mil

- 4) Canoas y lanchas sin motor fijo:
 - a) Hasta diez toneladas por cada una 1,00
 - b) De más de diez toneladas hasta veinte y cinco:
 1. Por las primeras diez 10,00
 2. Por cada una de las restantes 1,00
 - c) De más de veinticinco toneladas hasta cincuenta:
 1. Por las primeras veinticinco 25,00
 2. Por cada una de las restantes 1,00
 - d) De más de cincuenta toneladas hasta cien:
 1. Por las primeras cincuenta 50,00
 2. Por cada una de las restantes 1,00
 - e) De más de cien toneladas:
 1. Por las primeras cien 80,00
 2. Por cada una de las restantes 1,00

NOTA 31. Las capitanías de puerto no concederán las matrículas anuales de navegación sin que previamente se hayan satisfecho los impuestos establecidos en esta Ley, en la respectiva Jefatura Provincial de Recaudaciones.

XI. MATRICULAS DE VEHICULOS

- 1) Todo vehículo motorizado 5,00 5,00
- 2) Las motocicletas de hasta quinientos c.c. pagarán cincuenta por ciento de la tarifa del anterior numeral.

Las que excedan dicha capacidad pagarán el cien por ciento.

NOTA 32. La tarifa "por mil", se aplicará de conformidad con el reglamento que expedirá el Presidente de la República para la valuación de los vehículos.

FIJOS	D E R E C H O S GRADUALES
Por Ciento del Salario Mínimo Vital	Por Ciento Por

NOTA 33. Los vehículos que por cualquier motivo no hubieren circulado uno o más años pagarán por esos años, el cincuenta por ciento del impuesto que establece esta Ley y el impuesto total por el año respectivo.

NOTA 34. No pagarán el impuesto establecido por esta tarifa, únicamente los vehículos de propiedad del Gobierno, Municipios, Consejos Provinciales y más entidades de derecho público, así como el Cuerpo Diplomático y Consular y de los Miembros Extranjeros de los Organismos Internacionales.

Exonérase del pago del derecho gradual del cinco por mil, así como también el derecho fijo del cinco por ciento del salario mínimo vital, a las matrículas de todo vehículo de uso público, manejado por su propietario, a razón de un solo vehículo por cada poseedor.

NOTA 35. Los Municipios de la República cobrarán los impuestos a los vehículos, facultados por la Ley de Régimen Municipal.

NOTA 36. Las matrículas provisionales de cualquier clase que fueren, pagarán el 50 por ciento de las tarifas precedentes.

XXII MATRICULAS DE COMERCIANTES:

- 1) Las matrículas que obtengan las personas que no hayan pagado timbres en el contrato de constitución de la empresa, deberán el impuesto que establece la Tarifa I.
- 2) Las que hayan pagado el impuesto de timbres sobre el capital constitutivo, como las sociedades de

DERECHOS
GRADUALES
Por Ciento Por Mil

DERECHOS
GRADUALES
Por Ciento Por Mil

FIJOS
Por Ciento del
Salario Mínimo
Vital

capital o de personas, pagarán el
40% de la Tarifa 1.

XXIII MEMORIALES Y SOLICITUDES:

Toda clase de memoriales, solicitudes
y reclamos ante las Autoridades Admi-
nistrativas mencionadas en el literal

a) del Art.10, excepto los reclamos
tributarios.

0,50

XXIV NATURALIZACIONES:

Las solicitudes para obtener las cartas
de naturalización, en cada foja

1,00

Cartas de Naturalización:

50,00

XXV NOMBRAMIENTOS:

1) Nombramientos de empleados de ins-
tituciones de Derecho Público o
Derecho Privado con finalidad so-
cial o pública, sobre el monto del
sueldo mensual

15,00

2) Cambio de nombramiento con otro
igual o inferior en sueldo

1,00

3) Cambio de nombramiento con otro
de mayor sueldo, sobre el aumento
de sueldo mensual

15,00

4) Los funcionarios o empleados o-
casionales o interinos, sobre
la remuneración total a percibir-
se

2,00

5) Otros nombramientos sobre las ren-
tas recibidas durante el último
mes por el funcionario anterior

15,00

XXVI PASAPORTES DE TODA CLASE Y CERTIFICA- DOS ESPECIALES DE VIAJE:

1) Pasaportes de toda clase y docu-
mentos especiales de viaje

50,00

	DERECHOS	
	FIJOS	GRADUALES
	Por Ciento del	Por Ciento
	Salario Mínimo	Por M
	Vital	

NOTA 38. Los libretines de pasaportes de toda clase tendrán validez indefinida, desde la fecha de concesión del pasaporte, pero deberá pagarse cada dos años los derechos.

- 2) Autorización de salida. El servicio de Migración de la Policía Civil Nacional para el otorgamiento de la autorización de salida del país a ecuatorianos o extranjeros, inmigrantes con domicilio político en el Ecuador, exigirá el comprobante de pago de los siguientes derechos fijos:
- a) Pasaportes o documentos individuales 20,00
 - b) Pasaportes o documentos colectivos:
 - Para dos personas 25,00
 - Para cada persona adicional 2,50

NOTA 39. Los pasaportes o documentos colectivos se extenderán exclusivamente para grupos de una misma familia y para delegaciones o embajadas culturales o deportivas, previo el visto bueno de la Dirección General de Rentas.

NOTA 40. Los derechos pagados con arreglo a esta Tarifa no serán objeto de reintegro por ningún concepto.

NOTA 41. Estarán exentos del pago de estos derechos los ecuatorianos y extranjeros inmigrantes con domicilio político en el Ecuador que se trasladen al exterior en las naves o vehículos de servicio internacional regulares o no, en función de miembros de tripulación.

NOTA 42. Estarán exentos del pago de estos derechos los nacionales comprendidos en pasaportes ecuatorianos diplomáticos, oficiales y

DERECHOS
GRADUALES
Por Ciento Por Mil

DERECHOS
GRADUALES
FIJOS
Por Ciento del Salario Mínimo Vital
Por Ciento Por Mil

especiales y todas las personas que abandonen el país por vía marítima o terrestre.

NOTA 43. Estarán exentos del pago de estos derechos los extranjeros no inmigrantes, así como los ecuatorianos con domicilio político en otro país o que hubieren residido en el país, bajo cualquier condición por nueve meses o más, y que hubieren permanecido en el Ecuador durante un lapso menor de noventa días.

XXVII

INSCRIPCION DE INMIGRANTES:

Todo extranjero inmigrante para obtener la inscripción en el Registro de Extranjeros, deberá pagar 50,00

NOTA 44. Estarán exentos del pago de estos derechos las personas amparadas en convenios internacionales o leyes especiales que expresamente lo excluyen de esta obligación. El pago previsto podrá efectuarse al momento de concederle la visa por el agente diplomático o consular en sucres o en divisas o al momento del registro.

XXVIII

DECLARACIONES ADUANERAS

Las declaraciones aduaneras de importación además de los tributos que recaudan el Banco Central, las Aduanas y los Cónsules, adherirán al cuadruplicado, en timbres 1,00

XXIX

PLANOS:

Los planos que se presenten en juicio o ante autoridades administrativas, por cada foja 0,50

NOTA 45. Los planos complementarios del principal no deberán impuesto.

		DERECHOS		
		FIJOS	GRADUALES.	
		Por Ciento del	Por Ciento	Por Mille
		Salario Mínimo		
		Vital		
XXX	PODERES:			
	1) Poderes generales, en cada foja		1,00	
	2) Poderes especiales, en cada foja		0,50	
	3) Si se presentan en juicio pagarán además los derechos determinados en la Tarifa XIII.			
	NOTA 46. Cuando se exprese cuantía en los poderes que correspondan a actos y contratos, si los derechos son inferiores a las tarifas que contiene este numeral, se causarán los que corresponden a actos y contratos en general.			
XXXI	CONTRATOS DE SEGUROS:			
	A las Compañías de Seguros que operan en el país, se les constituye en agentes de retención de la totalidad del impuesto de timbres que causen los contratos de seguros y como tales, son responsables de la retención que por obligación ajena se les asigna a dichas Compañías. El impuesto antes mencionado se calculará en base de las primas que causen los contratos de seguros, de acuerdo con la siguiente escala:			
	1) Contratos de Seguros de Vida			
	a) Por la prima inicial		15,00	
	b) Por las demás primas		5,00	
	2) En los demás contratos de seguros:			
	Sobre las primas, sean estas iniciales o renovadas.		11,00	
	NOTA 47. Las Compañías de Seguros están obligadas a depositar mensualmente en las Jefaturas Porvinciales de Recaudaciones, los impuestos de timbres recaudados, dentro de los veinte días siguientes al mes termi-			

DERECHOS GRADUALES. Por Ciento Por Mil	DERECHOS GRADUALES	
	FIJOS Por Ciento del Salario Mínimo Vital	Por Ciento Por Mil
	nado. En caso de mora en el depósito de los impuestos retenidos, las Compañías de Seguros satisfarán las multas y recargos contemplados en el Código Tributario.	
XXII	PROPUESTAS DE LICITACIONES: En cada foja	0,50
XXIII	RECONOCIMIENTOS: Los reconocimientos de firmas deberán los derechos establecidos en las actuaciones judiciales según la cuantía.	
XXIV	RECLAMOS TRIBUTARIOS: En las reclamaciones tributarias se aplicarán en cada foja 0,50 En los reclamos y apelaciones sobre asuntos aduaneros, excepto las interpuestas por funcionarios del Estado, se aplicará en cada foja 1,20 NOTA 48. Los timbres se aplicarán únicamente en los escritos que presente el reclamante; por tanto, no llevarán timbres los instrumentos informativos o provatorios. Los escritos que se presenten ante el Tribunal Fiscal, se harán en papel del sello correspondiente, considerándose los juicios como de cuantía indeterminada.	
15,00 5,00	XXV REGISTROS: Los libros de los Registros de la Propiedad se habilitarán en cada foja con timbres de 0,50 Por cada inscripción que se efectúe se apondrá al margen del registro 0,50	
11,00		

	FIJOS	DERECHOS
	Por Ciento del	GRADUALES
	Salario Mínimo	Por Ciento
	Vital	Por Mil

NOTA 49. La tarifa por cada inscripción se causará separadamente desde la segunda que se efectúe en una misma foja. Además se pagarán los impuestos de registro, como el creado en beneficio de las Universidades por Decreto Legislativo de 5 de noviembre de 1962.

XXXVI TESTIMONIOS:

Testimonios, certificados, copias, solicitudes, ampliaciones, permisos, autorizaciones, finiquitos, no expresentamente considerandos en la presente Ley, que sean expedidos por cualquier funcionario o autoridad, corporación o empleados públicos, en favor o solicitud de particulares, traducciones de documentos en idioma extranjero, en cada foja	0,50
--	------

XXXVII TESTAMENTOS:

1) Testamentos y sus copias, en cada foja	0,50
2) Las cubiertas de los testamentos cerrados, se habilitarán con timbres por	2,00

XXXVIII TITULOS DE PENSIONISTAS:

Títulos de pensionistas civiles del Estado, mayores de un mil sucres, con excepción de los ex-telegrafistas, que serán refrendados por el Contralor General de la Nación	1,00
--	------

XXXIX TITULOS:

1) Títulos de educación media y títulos artesanales	5,00
2) Títulos universitarios y de	

DERECHOS
GRADUALES
Por Ciento Por Mil

DERECHOS
FIJOS
GRADUALES
Por Ciento del Salario Mínimo Vital
Por Ciento Por Mil
50,00

enseñanza superior

NOTA 50. El impuesto que causen los títulos profesionales expedidos por los diferentes centros de educación, será pagado aponiendo los timbres fiscales respectivos y son independientes de los que puedan cobrar las Universidades, Escuelas Politécnicas y demás instituciones de educación superior.

De Notarios y Registradores de Propiedad:

- | | |
|---|--------|
| a) Para el ejercicio de esta profesión en Quito o Guayaquil | 500,00 |
| b) Para el ejercicio de esta profesión en Cuenca, Portoviejo, Quedo, Santo Domingo y Ambato | 300,00 |
| c) Para el ejercicio de esta profesión en los demás lugares del país | 100,00 |

Títulos profesionales al personal de la Marina Mercante:

Los títulos, solicitudes para examen, matrícula, solicitudes de registro, contrato, etc., para el personal de la Marina Mercante, se sujetarán a la clasificación y pago de los derechos determinados en el Reglamento de Trámites de la Dirección de la Marina Mercante y del Litoral y Capitanías de Puerto de la República

II VALORES BURSATILES:

- | | |
|---|-------|
| 1) Acciones de sociedades industriales de capital, bonos u obligaciones | 5,00 |
| 2) Acciones de otras sociedades de capital, bonos u obligaciones | 10,00 |

	DERECHOS
FIJOS	GRADUALES
Por Ciento del	Por Ciento
Salario Mínimo	Por Mil
Vital	

3) Cédulas hipotecarias

XLI Los contratos originales y complementarios, a los que se refiere la Ley 15, publicada en el Registro Oficial No. 258 de 27 de agosto de 1985, en su Artículo 12, que reforma a la Ley de Licitaciones y Concurso de Ofertas y cuya cuantía sea igual o superior a la establecida para el concurso de ofertas, estarán sujetos al siguiente impuesto de timbres, que será pagado por el contratista.

Refórmense las tarifas actuales de los timbres de Salud, Judicial y de Regeneración Penitenciaria, por las siguientes:

Timbre de Salud	0,05
Timbre Judicial:	0,05
En cuantía de s/. 200 a s/. 8.000	0,03
En cuantía indeterminada o en cuantía de s/. 8.000 en adelante	0,05
Timbre de Regeneración Penitenciaria	0,05

ART. 3 El rendimiento total de las tarifas establecidas en la Ley de Timbres, incluidas estas reformas, ingresará a la Cuenta Corriente Unica del Tesoro Nacional y el Subsecretario del Tesoro, mediante alícuotas mensuales distribuirá estos ingresos de la siguiente manera:

40% Fondo Nacional de Participaciones.

60% Presupuesto del Estado

Art. 4 .- El Ministerio de Finanzas y

DERECHOS
GRADUALES
Por Ciento Por Mil

DERECHOS
FIJOS GRADUALES
Por Ciento del Por Ciento Por Mil
Salario Mínimo
Vital

12,00

Crédito Público a través de la Subsecretaría de Presupuestos realizará las regulaciones pertinentes para reconocer asignaciones compensatorias con cargo al Presupuesto del Estado a las Instituciones que son partícipes de timbres, cuyo destino se realizará para los fines que fueron creados.

5,00

VII

Ley de Impuesto a las Herencias, Legados y Donaciones

TITULO I DEL IMPUESTO

CAPITULO I DEL OBJETO DE LA IMPOSICION

- ART. 1 Esta Ley establece el impuesto a las herencias, legados, donaciones y, en general, a las adquisiciones a título gratuito.

CAPITULO II DEL HECHO IMPONIBLE

- ART. 2 El impuesto establecido por esta Ley se origina:
- a) Al momento de la delación de la herencia y su aceptación en los casos de herencias, legados y otras asignaciones testamentarias;
 - b) Al celebrarse los actos o contratos que determinen el traspaso a título gratuito, y
 - c) En general al producirse los hechos o circunstancias previstos en esta Ley.

CAPITULO III
DE LOS SUJETOS

- ART. 3 Son sujetos pasivos del impuesto, los herederos, legatarios, donatarios y demás personas que obtengan el acrecimiento patrimonial de que trata el Art. 1°. Son responsables del pago del tributo, en su caso, los albaceas, los herederos, los representantes legales, los tutores o curadores y demás personas a quienes la Ley imponga dicha responsabilidad. Los curadores especiales y ad-litem no tendrán tal responsabilidad.

CAPITULO IV
DE LOS BIENES Y BASE IMPONIBLE

- ART. 4 Son objeto del impuesto establecido por la Ley, los bienes materia de herencias, legados o donaciones, la constitución de título gratuito de los derechos de usufructo, uso o habitación, y, en general; el traspaso de dominio por causa de muerte u otro título gratuito o cuya causa onerosa no se justifique plenamente, en los casos y en la forma determinados en la presente Ley.
- ART. 5 Están sujetos al impuesto establecido todos los bienes muebles e inmuebles que existan en el Ecuador al momento de la apertura de la sucesión, prescindiendo del lugar de la muerte de la persona de cuya sucesión se trate, así como de su nacionalidad. Igualmente están sujetos al impuesto, los derechos reales que trata esta Ley que afecten a inmuebles situados en el país. Sin embargo, el impuesto no afecta a los muebles de uso doméstico ni a los libros ni al ajuar de una casa.

CAPITULO V
DE LA ALICUOTA DEL IMPUESTO

- ART. 6 Los herederos, legatarios o donatarios pagarán sobre el valor líquido imponible de su asignación o donación, establecido en la forma que determina esta Ley, el impuesto que resulte de la aplicación de la tabla que sigue, de conformidad con el grado de parentesco que les ligue con el causante de la sucesión o con el donante.

CUANTIA BASICA SALARIOS MINIMOS VITALES	EXCEDENTE HASTA EN SALARIOS MI- NIMOS VITALES	PORCENTAJE DE IMPUESTO SOBRE LA CUANTIA BA- SICA	IMPUESTO SOBRE EL EXCEDENTE* (POR CIENTO)
eros, legatarios, el acrecimiento onsables del pago s herederos, los es y demás perso- ilidad. Los cura- sponsabilidad.	10	-	6
	20	6	7
	40	7	8
	70	8	10
	100	9	12
	150	10	14
	250	12	17
	500	15	20
	1.000	17	23
Ley, los bienes la constitución uso o habitación	1.500	20	27
causa de muerte y no se justifique inados en la pre-	2.000	23	31
	adelante	25	35

ART. 7 Los padres, los hijos, los cónyuges y, en general, los asignatarios forzosos, incluidos los legitimarios, pagarán el impuesto de conformidad con la escala anterior, luego de las deducciones que considera el Art. 20.

ART. 8 Los demás ascendientes y descendientes, siempre que no fueran legitimarios, los colaterales y extraños, pagarán el impuesto con los siguientes recargos, calculados sobre la base de la escala establecida en el Art. 6, y luego de las deducciones que considera el Art. 20.

Abuelos y nietos	10%
Otros ascendientes y descendientes y colaterales en segundo grado	20%
Colaterales en tercer grado	30%
Colaterales en cuarto grado	40%
Colaterales en quinto o mayor grado, extraños y personas jurídicas no exentas	50%

El impuesto que se liquide de conformidad con la tabla del Art. 6, más los recargos señalados en el inciso anterior, no excederá de los siguientes porcentajes sobre el valor líquido imponible:

Abuelos y nietos	36%
Otros ascendientes, descendientes y colaterales en segundo grado	40%
Colaterales en tercer grado	45%

Colaterales en cuarto grado
Colaterales en quinto o mayor grado, extraños o
personas jurídicas no exentas

50%
60%

cobr
las
pres
admi
admi
dete
años

Los parientes por afinidad pagarán el impuesto correspondiente al respectivo grado de parentesco según las normas precedentes.

CAPITULO VI DE LAS EXENCIONES

ART. 9 A más de las exenciones generales contempladas en el Art. 3 del Código Tributario, están exentos del pago del impuesto establecido por esta Ley:

- a) Las asignaciones o donaciones que tuvieren por objeto la fundación de establecimientos educativos o de beneficencia, así como las que se destinan para estimular las investigaciones científicas, actividades artísticas, literarias y de fomento de la cultura en general;
- b) Las indemnizaciones que, por la muerte del causante, perciban los herederos, así como las pensiones que otorgue el Estado, las que otorgue el Seguro Social y sus prestaciones, y
- c) Los importes de los seguros de vida y de desgravamen hipotecarios.

ART. 10 La determinación del tributo contemplado en esta Ley se efectuará sujetándose a los sistemas previstos en el Código Tributario, con la siguiente prelación y dentro de los requisitos establecidos en este capítulo y los que precise el reglamento:

- a) Determinación del impuesto por el sujeto pasivo;
- b) Determinación mixta, y
- c) Determinación de oficio por el sujeto activo.

ART. 11 El sujeto o sujetos pasivos podrán efectuar, mediante declaración ante el Jefe de Recaudaciones de la respectiva provincia, la determinación del impuesto de que trata la presente Ley, ciñéndose a sus disposiciones. La declaración así efectuada será definitiva y vinculante para el sujeto pasivo. El Jefe de Recaudaciones, sobre la base de tal declaración,

50%

60%

costrará directamente el impuesto. Podrá el mismo contribuyente efectuar las correcciones sobre errores de hecho o de cálculo dentro de un año de presentada la declaración, siempre que con anterioridad la administración no hubiere rectificado y notificado el error. La administración podrá, a través del Procurador de Sucesiones, verificar y determinar la obligación tributaria así declarada, hasta dentro de tres años desde la fecha de presentación de la declaración.

ART. 12 La determinación será mixta cuando así lo solicitare el sujeto pasivo limitándose a formular una denuncia, en la cual constatarán todos los datos necesarios y a la que se acompañarán los documentos que se requieran. Será, así mismo, mixta, cuando la determinación por el sujeto activo tuviere errores y luego de la notificación por la administración, los interesados la rectificaren dentro del término que se les conceda.

ART. 13 El impuesto que no llegare a establecerse sobre la base de la determinación por el sujeto pasivo o por determinación mixta será fijado de oficio, por el Procurador de Sucesiones, en los siguientes casos:

- a) Cuando dentro de los términos correspondientes no se hubieren presentado las declaraciones o denuncias previstas en esta Ley;
- b) Cuando al realizar la verificación se comprobare que la declaración o denuncia es inexacta.

CAPITULO VII DE LAS DECLARACIONES Y DENUNCIAS

ART. 14 Los herederos y legatarios podrán presentar, conjuntamente, ante el Jefe de Recaudaciones del último domicilio del causante, la declaración del impuesto a la herencia que contendrá el inventario practicado por ellos y la determinación y liquidación del impuesto que les corresponde pagar a cada uno. La declaración, el inventario y la determinación del impuesto será suscrito por tales herederos o por sus representantes, mandatarios o albaceas, según lo prescrito en el Art. 3.

Los donatarios y donantes también podrán acogerse a esta facultad y formular las declaraciones y determinaciones del impuesto sobre el bien o bienes donados.

- ART. 15 La declaración debe contener el inventario de los bienes materia del tributo, las operaciones para establecer el cómputo de la masa imponible, la liquidación del impuesto con sujeción a los pasos establecidos en la presente Ley y la información que determine el Reglamento.
- ART. 16 La declaración hará responsable al o a los declarantes de la exactitud y de la veracidad de los datos que contenga.
- ART. 17 Cuando los herederos, legatarios, donatarios y demás personas enumeradas en el Art. 3 de esta Ley no se encuentren en condiciones de formular la declaración en virtud de las condiciones previstas en el Art. 14 o no quisieran acogerse a esa facultad, están en la obligación de formular una denuncia al Procurador de Sucesiones, para darle a conocer el hecho imponible a fin de que conforme a las normas de esta Ley, practique la determinación del tributo.

Los denunciantes podrán presentar el inventario practicado por ellos o solicitar al Procurador que lo practique administrativamente.

- ART. 18 Las declaraciones o las denuncias se presentarán en el término de 90 días de producida la delación de la herencia y, en el caso de donaciones, en el término de treinta días de otorgada la escritura pública correspondiente o de celebrado el contrato.

La inscripción en el Registro de la Propiedad se efectuará sin recargo alguno en el impuesto de registro y adicionales dentro del término de treinta días de emitida la orden de pago directa del tributo o de la emisión del título de crédito.

- ART. 19 El Procurador de Sucesiones podrá, por motivos especiales justificados, conceder prórroga de los términos de que tratan los artículos anteriores, hasta de sesenta días, ampliación que será notificada a los solicitantes.

CAPITULO VIII

DE LA MASA IMPONIBLE

- ART. 20 En el caso de herencias, el impuesto se computará sobre el valor líquido de la asignación. Para establecer el valor de

los bienes mate
acer el cómputo de
to con sujeción
la información que

declarantes de la
contenga.

y demás personas
cuentren en
titud de las
sieran acogerse a
ular una denuncia
conocer el hecho
mas de esta Ley,

cio practicado por
ctique administra-

arán en el término
herencia y, en el
días de otorgada
de celebrado el

l se efectuará sin
adicionales dentro
la orden de pago
lo de crédito.

os especiales jus-
de que tratan los
s, ampliación que

omputará sobre el
acer el valor de

la asignación se seguirán los pasos establecidos en el Código Civil y se deducirán además, los gastos de última enfermedad, de funerales y los de apertura de la sucesión si los hubiere. En el caso de donaciones se computará sobre el monto de las mismas.

ART. 21 El fideicomisario pagará el impuesto sobre el fideicomiso constituido por testamento u otro título gratuito según su grado de parentesco con el causante o constituyente. Si la condición en virtud de lo cual se debe restituir el fideicomiso llega a cumplirse, y siempre que sea a título gratuito, se causará el impuesto como si se tratara de una nueva transferencia o herencia.

ART. 22 En el usufructo por tiempo determinado el usufructuario y el nudo propietario pagarán, cuando sus derechos se originen en título gratuito, sobre el valor que resulte de aplicar la siguiente escala sobre el que corresponda a la propiedad.

Quando el tanto por ciento que corresponda al usufructuario exceda, atenta su edad, al señalado para el usufructo vitalicio, se aplicará la escala correspondiente a este último.

TIEMPO DE DURACION DEL USUFRUCTO	USUFRUTUARIO	NUDO PROPIETARIO
Un año	6%	94%
Ocho años	34%	66%
Nueve años	37%	63%
Diez años	40%	60%
Once años	43%	57%
Doce años	46%	54%
Trece años	49%	51%
Catorce años	52%	48%
Quince años	54%	46%
De dieciseis a veinte años	60%	40%
De veintiuno a veinticinco años	68%	32%
De veintiseis a treinta años	75%	25%
De treinta y uno a treinticinco años	80%	20%
De treintiseis a cuarenta años	85%	15%
De cuarenta y un años en adelante	90%	10%

La base imponible en los usufructos vitalicios se fijará aplicando al valor de los bienes el tanto por ciento que

corresponda, según la edad del usufructuario, de acuerdo con siguiente escala:

EDAD DEL USUFRUCTUARIO	TANTO POR CIENTO USUFRUCTUARIO	NUDO PROPIETARIO
Menos de 10 años	80%	20%
10 años sin llegar a 15	70%	30%
15 años sin llegar a 20	60%	40%
20 años sin llegar a 25	50%	50%
25 años sin llegar a 30	45%	55%
30 años sin llegar a 35	40%	60%
35 años sin llegar a 40	35%	65%
40 años sin llegar a 45	30%	70%
45 años sin llegar a 50	28%	72%
50 años sin llegar a 55	26%	74%
55 años sin llegar a 60	24%	76%
60 años sin llegar a 65	22%	78%
65 años sin llegar a 70	20%	80%
70 años en adelante	15%	85%

Cuando al usufructo temporal o vitalicio se haya añadido una condición verificada la cual se consolide con la nuda propiedad, se determinará el impuesto sin tomar en cuenta la condición. Igual regla se aplicará si el usufructo se establece bajo condición resolutoria que no sea la de la vida del usufructuario.

Cuando la donación se hiciere con reserva de usufructo, se aplicará la escala correspondiente al vitalicio aún cuando se hubiere hecho por tiempo determinado, a menos que corresponda un impuesto más alto a cargo del donatario de la nuda propiedad en la tabla de usufructo temporal, en cuyo caso se aplicará este.

ART. 23 El valor imponible a los derechos de uso y habitación, establecidos en virtud de título gratuito, será el equivalente al 40% del valor de inmueble o inmuebles sobre los cuales se constituya tal derecho, salvo que el habitador o usuario o el propietario o ambos estimaren que el valor de tal derecho fuere menor, en cuyo caso podrán pedir que el Procurador de Sucesiones establezca su valor. Este procedimiento se

le acuerdo con

aplicará incluso en el caso del derecho previsto en el artículo ordenado
agregar luego del 851 del Código Civil por la Ley N° 53 promulgada en el
Registro Oficial N° 361 de 20 de enero de 1981.

NUDO PROPIETARIO

Art. 24

El asignatario de rentas temporales o vitalicias pagará el impuesto aplicando las escalas que se establecen para el usufructo, según los casos. El capital sobre cuyo porcentaje se le ha de gravar, se determinará mediante la capitalización de la renta anual al máximo del interés convencional permitido por la Ley y aplicando luego las escalas establecidas para el usufructo según los casos.

- 20%
- 30%
- 40%
- 50%
- 55%
- 60%
- 65%
- 70%
- 72%
- 74%
- 76%
- 78%
- 80%
- 85%

Art. 25

Cuando la pensión vitalicia afecte la herencia, se deducirá del acervo total para el cómputo del impuesto, el valor imponible que se establece en el inciso anterior. Si afecta a uno o algunos de los herederos, se lo deducirá de la asignación o asignaciones que les hubiere cabido.

Si la asignación es bajo condición suspensiva, el impuesto se liquidará a nombre de los asignatarios condicionales, pero con cargo a los herederos efectivos, al albacea o curador de la herencia yacente, según el caso, quienes serán los sujetos responsables del impuesto.

se haya añadido una
con la nuda prople
en cuenta la condi
fructo se estable
de la vida del usu

Si la condición no llegare a cumplirse, los herederos efectivos pagarán o tendrán derecho a reintegro de la diferencia del tributo ya pagado, si sus grados de parentesco o sus condiciones fueren diferentes de los del asignatario condicional.

a de usufructo, se
alicio aún cuando se
nos que correspond
de la nuda prople
cuyo caso se apli

Los incisos anteriores se refieren a las asignaciones condicionales que no constituyan o establezcan fideicomisos. Cuando los frutos de una asignación condicional correspondan a persona distinta del asignatario, se aplicarán las reglas del artículo 22 para los efectos de distribución de la obligación tributaria que establece esta Ley, entre el asignatario y el usufructuario.

y habitación, estr
á el equivalente a
obre los cuales se
ador o usuario o el
lor de tal derecho
ue el Procurador de
edimiento se

Si la asignación es infructífera por su naturaleza, se cobrará el impuesto en el momento en que se cumpla la condición, sobre el valor que entonces tengan los bienes.

CAPITULO IX
DE LAS REBAJAS

- ART. 26 Para efectos de determinar el impuesto, cada sujeto pasivo gozará de una rebaja general de diez salarios mínimos vitales suma que se restará de la asignación correspondiente
- ART. 27 Establecido el impuesto luego de aplicar la tabla del Art. 6 y los recargos del Art. 8, se harán efectivas las siguientes rebajas con carácter acumulativo:
- a) 10% para sujetos pasivos casados o viudos;
 - b) 10% por cada hijo que tengan los sujetos pasivos, hasta un máximo de cinco, y
 - c) 5% si el sujeto pasivo tiene cincuenta años de edad y 5% adicional por cada lustro cumplido.

La suma de las rebajas establecidas en este artículo no excederá, en ningún caso, del 50% del impuesto.

- ART. 28 Si se produjere una nueva transmisión de dominio sobre los mismos bienes, en todo o en parte, dentro del año siguiente de abierta la anterior sucesión o de efectuada la respectiva donación, no se causará sino un solo impuesto, que será el mayor que corresponda, debiéndose efectuar una liquidación para establecer cuánto debe pagarse, si el tributo ya hubiere sido satisfecho.

Si la nueva transmisión que verse sobre los mismos bienes ocurre dentro de los dos años siguientes, al de la delación de la herencia o de la fecha de donación, los herederos o donatarios gozarán de una deducción del 20% sobre el valor del impuesto que resulte luego de aplicar los recargos del Art. 8 y las rebajas del artículo precedente. En caso de que la nueva transmisión no verse sobre la totalidad de los bienes sino sobre una parte de ellos, la rebaja se aplicará a la parte proporcional que, sobre el total del impuesto, corresponda a los bienes nuevamente transmitidos.

CAPITULO X
RECARGOS DEL IMPUESTO

- ART. 29 Si no se formulare la declaración o no se presentare la denuncia dentro del término fijado en el Art. 18, el impuesto que se causare sufrirá un recargo del dos por ciento, por cada mes íntegro de retardo. Dicho recargo se computará, el

momento del pago del impuesto, sobre el monto del impuesto calculado de acuerdo con las disposiciones de esta Ley; el recargo se calculará desde el día siguiente a aquel en que según el Art. 18 debió presentar la declaración o la denuncia y cesará de calcularse en el mes en que se hubiere cumplido con la obligación de presentar la declaración ante el Jefe de Recaudaciones o la denuncia escrita al Procurador de Sucesiones o la citación a éste de la demanda de inventarios.

ART. 30 El máximo de los recargos establecidos en el artículo anterior no excederá del cincuenta por ciento del impuesto causado. La suma del impuesto y de los recargos respectivos no podrán exceder del cincuenta por ciento del valor de la respectiva asignación o donación.

No se tendrán en cuenta para la aplicación de los porcentajes máximos de recargos, los intereses de mora.

TITULO II

DE LA ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DEL IMPUESTO

CAPITULO I

DE LA ADMINISTRACION

ART. 31 La administración de este impuesto estará a cargo de la Dirección General de Rentas, la que la ejercerá por medio de los Procuradores de Sucesiones, sin perjuicio de la facultad del Presidente de la República determinada en el Art. 86 de la Constitución y en el Decreto Supremo N° 3732 publicado en el Registro Oficial N° 5 del 17 de agosto de 1979.

El Ministro de Finanzas y Crédito Público determinará los lugares en los cuales existirán Procuradores de Sucesiones y su jurisdicción territorial y podrá designar otros funcionarios para que ejerzan las atribuciones que esta Ley confiere a los Procuradores de Sucesiones.

CAPITULO II

DE LOS INVENTARIOS Y AVALUOS

ART. 32 Para establecer el monto del impuesto, los declarantes o denunciante presentará un listado completo, detallado, de los inmuebles, dineros y valores que sean motivo de traspaso de dominio gratuito. De haber pasivo se enunciarán todas las

se presentare la
rt. 18, el impuesto
por ciento, por cada
computará, el

obligaciones o deudas que tenga la sucesión o que pesen sobre los bienes donados.

ART. 33 En el listado se asignará a los bienes inmuebles el avalúo comercial con el que consten en los catastros municipales, al momento de la delación de la asignación o a la fecha de celebración de la escritura pública de donación, para lo cual se acompañará la certificación de la Oficina de Avalúos y Catastros Municipales o de la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros o el comprobante de pago del impuesto predial por el año del fallecimiento del causante o de la celebración de la escritura pública de donación.

ART. 34 El declarante, en el inventario que presente, o el denunciante, por sí o con la intervención del Procurador de Sucesiones al formular el listado, valorará los bienes muebles en la siguiente forma:

- a) A los automotores se les asignará el que les corresponda según la última matrícula de la Jefatura de Tránsito en el año de fallecimiento del causante o del de la donación y, a falta de matrícula, por el valor con el que conste en el documento de compra o en el de importación, menos el coeficiente de depreciación que se señale en el reglamento;
- b) A los valores fiduciarios y todo documento objeto de contratación en la Bolsa de Valores, por el de la cotización a la fecha de producido el hecho imponible;
- c) A la maquinaria e implementos de industria, agricultura y comercio, por los valores que les corresponda a su costo de adquisición, menos el coeficiente de depreciación determinado en el reglamento;
- d) Para determinar el valor de acciones de sociedades que no tengan cotización en el mercado, se tendrá en cuenta el promedio de rentabilidad efectiva repartida o reservada de las mismas en los tres últimos años anteriores al hecho impositivo y un razonable y adecuado criterio de capitalización conforme al rendimiento normal de capital en las inversiones propias de la sociedad;
- e) A los bienes muebles para cuya valoración se requiere conocimiento técnico se les apreciará de conformidad con

El dictamen de una persona experta cuyo avalúo se agregará a la declaración o a la denuncia.

Los otros bienes se valorarán según el precio de mercado.

MT. 35

Sin perjuicio de lo dispuesto en el literal e) del artículo anterior, en el caso de determinación mixta o de oficio, los bienes muebles cuya valoración requiera conocimientos técnicos, tales como obras de arte, colecciones de numismática, filatélicas y joyas y similares, serán avaluados por un perito designado por el Procurador de Sucesiones, quien presentará su informe en un plazo no mayor de treinta días, el cual se pondrá en conocimiento de los interesados concediéndole el plazo de ocho días para que presenten observaciones.

El Procurador de Sucesiones aceptará las observaciones que en su concepto fueren fundadas y, con las modificaciones del caso, aprobará el avalúo y efectuará la determinación. Cuando se invocaren hechos que deben justificarse, concederá seis días para la prueba y resolverá conforme al mérito de las que fueren actuadas.

MT. 36

El proceso judicial de inventario no impedirá la determinación y liquidación del impuesto de conformidad con las disposiciones de esta Ley. Sin embargo, se podrán efectuar determinaciones complementarias una vez aprobado el inventario, si fuese necesario.

MT. 37

En el evento de determinación mixta, cuando la denuncia estuviera suscrita por todos los interesados en una sucesión o donación, la liquidación que practique el Procurador de Sucesiones será notificada a los interesados, para los efectos previstos en el Art. 43.

MT. 38

Cuando la denuncia no hubiese sido presentada por todos los interesados, el Procurador de Sucesiones efectuará el inventario y avalúo de los bienes que lo pondrá en conocimiento de todos los interesados por el término de seis días. Si se hicieren observaciones se convocará a junta de conciliación, señalándose día, lugar y hora, con la advertencia de que lo que acordaren los concurrentes será aprobado como definitivo. Esta junta sólo podrá diferirse por una ocasión, a pedido de quienes representen al menos las dos terceras partes de los derechos en la sucesión o en la donación.

En la resolución decidirá, exclusivamente para efectos tributarios, las observaciones formuladas y practicará liquidación del impuesto para efectos del Art. 43.

CAPITULO III

DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO, NOTIFICACION Y RECLAMOS

- ART. 39 Las liquidaciones serán definitivas, provisionales complementarias.
- ART. 40 Se entenderán como definitivas las liquidaciones practiquen los contribuyentes en sus declaraciones según artículo 11, sin perjuicio de la facultad de la administración de verificarlas, y las de los Procuradores de Sucesiones conforme a lo dispuesto en los Artículos 12 y 13.
- ART. 41 Serán provisionales las liquidaciones que versen únicamente sobre una parte de los bienes sucesorios, por no haber sido posible establecer definitivamente los derechos sobre otros bienes o se deba esperar los resultados de cualquier proceso judicial contencioso u otro antecedente necesario para la determinación definitiva. Estas liquidaciones se harán sobre la base de denuncia que indique la falta de datos.
- ART. 42 Liquidaciones complementarias son las que se efectúan bien para completar las provisionales, bien en el evento de que aprobado judicialmente el inventario se torne necesario efectuarlas de acuerdo con el Art. 36.
- ART. 43 En los casos previstos en los artículos 37 y 38, el Procurador de Sucesiones notificará la liquidación del impuesto a los interesados, quienes podrán presentar observaciones, expresar su aceptación, dentro del término de 20 días a partir de la notificación. Si no lo hicieren en dicho término la liquidación se tendrá por definitiva y se la enviará a la Dirección General de Rentas para la emisión de los títulos de crédito o, si los interesados lo solicitaren, a la Jefatura de Recaudaciones para el pago directo.
- ART. 44 Si existieren observaciones, el Procurador las resolverá por el mérito de lo actuado y de las pruebas que se acompañen a la petición, dentro del término de quince días. De la resolución del Procurador podrá reclamarse ante el Director General de Rentas, dentro del término de veinte días, quien la tramitará de conformidad con lo dispuesto por el Código Tributario. De

nte para efectuar su resolución podrá interponerse recurso de reposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.

ART. 45 La resolución que dicte el Director General de Rentas sobre el reclamo presentado dará término al procedimiento y, por consiguiente, contra ella podrá proponerse demanda de impugnación ante el Tribunal Fiscal, sin perjuicio del recurso de reposición.

Y RECLAMOS provisionales

ART. 46 El Procurador de Sucesiones podrá efectuar la verificación y determinación del impuesto dentro del plazo previsto en el Art. 11, en el caso de determinación directa por parte de los contribuyentes. El acto administrativo de determinación se notificará a los interesados. Los reclamos se presentarán ante el Director General de Rentas de conformidad con el Código Tributario.

versen únicamente por no haber sido derechos sobre otros cualquier proceso necesario para los fines se harán sobre datos.

ART. 47 En el caso de declaración y determinación del impuesto según lo dispuesto por el artículo 14, los interesados lo pagarán al momento de presentar la declaración, salvo que solicitaren facilidades de pago, de conformidad con el Código Tributario.

se efectúan bien el evento de que torne necesario

ART. 48 Cuando la determinación se efectuase en forma mixta o de oficio, una vez liquidado el impuesto de acuerdo con esta Ley, el Procurador de Sucesiones extenderá órdenes directas de pago del impuesto para quienes así lo solicitaren. Contra quienes no pidan el pago directo, se emitirán los títulos de crédito respectivos. El procedimiento para la notificación y cobro de los títulos de crédito será el determinado en el Código Tributario.

y 38, el Procurador el impuesto a las observaciones, de 20 días a partir de dicho término la de la enviará a la de los títulos de a, a la Jefatura de

ART. 49 Las órdenes de pago directas serán canceladas en el término de ocho días desde su notificación.

las resolverá por a se acompañen a la De la resolución Director General de quien la tramitará go Tributario. De

ART. 50 Trascurridos ciento ochenta días desde la fecha en que debió presentarse la declaración o denuncia obligatoria determinada por la presente Ley, sin que se lo hubiere hecho se causarán intereses de mora, en el máximo permitido por la Ley, los mismos que se computarán sobre el valor adeudado como impuesto.

ART. 51 Si en la sucesión no hubiere dinero o bienes de fácil realización, los contribuyentes podrán solicitar al Director

General de Rentas las facilidades de pago previstas en el Código Tributario, sin perjuicio de que lo hagan por las razones constantes en dicho Código.

CAPITULO V
DE LA CADUCIDAD Y DE LA PRESCRIPCION

ART. 52 La caducidad y la prescripción se sujetarán a los plazos normas del Código Tributario.

TITULO III
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I
DE LAS PRESUNCIONES

ART. 53 Se considera que forman parte del haber hereditario, para efectos de liquidación y pago del impuesto, los bienes de toda clase que, habiendo pertenecido al causante hasta seis meses antes del fallecimiento, al ocurrir éste se encuentren en poder de herederos, legatarios, del cónyuge o parientes del causante.

ART. 54 Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son asignaciones gravadas por esta Ley:

- a) Las deudas reconocidas únicamente en el testamento, las cuales se consideran legados, inclusive las reconocidas por servicios de cualquier clase prestados al causante;
- b) Los pagarés a la orden, letras de cambio, contratos de mutuo, valores en depósito, que se hubieren otorgado a favor de los herederos, de los ascendientes o descendientes, cónyuges u otras personas llamadas a la sucesión, que se hubieren otorgado en los doce meses anteriores al fallecimiento del causante, o que, de haberse otorgado antes, no se comprobare plenamente que responden a negocios efectivamente realizados.

ART. 55 Se presumirá que las acciones de sociedades anónimas, cuyas cesiones no se hubieren registrado en el libro de acciones y accionistas por lo menos un año antes del fallecimiento del causante, forman parte de la masa hereditaria, sin que se admita prueba en contrario.

CAPITULO II
OBLIGACIONES DE FUNCIONARIOS Y DE TERCEROS

ART. 56 Cuando el Procurador de Sucesiones haya procedido de mala fe o con temeridad notoria en perjuicio de los contribuyentes será responsable de las costas, daños y perjuicios.

ART. 57 Sin perjuicio de otras obligaciones establecidas por esta Ley, los jueces deberán ordenar que se cuente con los Procuradores de Sucesiones en los juicios de inventario, partición y posesión efectiva de los bienes hereditarios.

ART. 58 Prohíbese a los registradores de la propiedad la inscripción de todo instrumento en que se disponga de bienes hereditarios, mientras no se presente el comprobante de pago del respectivo impuesto o el certificado del Procurador de Sucesiones de que no se debe tributo o la autorización de Procurador de Sucesiones para que se realice la inscripción o el certificado liberatorio conferido por el Procurador de Sucesiones. Igual norma se aplicará a las donaciones.

ART. 59 La Superintendencia de Bancos, la de Compañías, los bancos y las compañías y más personas jurídicas y naturales, que hayan tenido relaciones con el causante están obligados a suministrar al Procurador de Sucesiones o al Director General de Rentas, cualquier dato relativo a acciones, derechos, depósitos y otros bienes que puedan formar parte de la masa hereditaria.

ART. 60 Los Notarios, Registradores de la Propiedad, Procuradores de Sucesiones y demás funcionarios encargados de los trámites establecidos en esta Ley, tendrán la responsabilidad impuesta en el Código Tributario. Además serán responsables del impuesto que hubiere dejado de recaudarse por su negligencia o dolo.

CAPITULO III
DISPOSICIONES VARIAS

ART. 61 Además de los casos contemplados en el Código Tributario será defraudación y se sancionará de conformidad con dicho Código, todo ocultamiento doloso de bienes en la declaración, en la denuncia, en el juicio de inventario o en el inventario extrajudicial, efectuado con el fin de disminuir el monto del impuesto.

- ART. 62 Siempre que el Procurador de Sucesiones, al ejercer las atribuciones que le corresponden, encontrare dudosos los documentos de crédito otorgados en favor de terceros, atenta la cuantía, la situación económica del deudor y del supuesto acreedor, podrán impugnarlos, exclusivamente para los efectos tributarios, mediante demanda que la presentará ante el Tribunal Fiscal, el cual fallará con amplio criterio judicial, de conformidad con el convencimiento a que hubiere llegado según las pruebas que se hubieren presentado. La aceptación de la impugnación tendrá efectos exclusivamente en materia tributaria y el Procurador de Sucesiones, en tal caso, determinará el impuesto a cargo del supuesto acreedor, como si se tratara de una donación o legado. De la sentencia que se dicte en estas impugnaciones no existirá recurso de casación, por referirse exclusivamente a cuestiones de hecho.
- ART. 63 El producto del impuesto establecido por esta Ley se depositará en la Cuenta Corriente Unica del Tesoro Nacional para financiar el Presupuesto del Estado.
- ART. 64 En el evento de sucesiones, asignaciones o donaciones no sujetas a impuesto, se presentará la declaración ante el Jefe de Recaudaciones de conformidad con el Art. 14, quien devolverá una copia de la misma con la indicación de que no se halla sujeta a impuesto, razón que llevará su firma y la fecha de recepción. El Procurador de Sucesiones conservará la facultad para verificar y determinar el impuesto dentro del plazo de caducidad previsto en el Código Tributario. La declaración así presentada será suficiente para los efectos previstos en el artículo 58.
- ART. 65 Derógase la Ley de Impuesto sobre las Herencias, Legados y Donaciones codificada, promulgada en el Registro Oficial N° 137 de 26 de julio de 1976 y sus reformas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

- A. Los juicios de inventario pendientes a la fecha de expedición de esta Ley seguirán tramitándose de conformidad con el Código de Procedimiento Civil. Sin embargo podrá procederse a la determinación y liquidación del impuesto de conformidad con el procedimiento previsto en esta Ley, pero según las normas sustantivas vigentes al momento de la apertura de la sucesión.
- B. La cuantía y cálculo del impuesto a la herencia se sujetan a la Ley vigente el día de la apertura de la sucesión pero el procedimiento

al ejercer la su determinación y liquidación será el previsto en esta Ley si aún
rare dudosos se hubieren calculado.

terceros, atenta
or y del supuesto
para los efectos
presentará ante el
criterio judicial
a hubiere llegado
o. La aceptación
amente en materia
s, en tal caso,
acreedor, como
sentencia que
curso de casación
hecho.

Quienes declaren y paguen el impuesto a las herencias, legados y donaciones dentro del plazo de tres meses contados desde la vigencia de esta Ley no estarán sujetos a intereses de mora ni al recargo establecido en el inciso segundo del Artículo 67 de la Ley que se deroga, ni a ninguna otra sanción.

VIII

del Sistema Impositivo al Consumo Selectivo de Productos Alcohólicos de Fabricación Nacional.

CAPITULO I AMBITO DE LA LEY

or esta Ley
1 Tesoro Nacional

Art. 1 La presente Ley regula la industrialización y comercialización de bebidas alcohólicas, de las fábricas de alcohol y de los centros de destilación de aguardiente de origen nacional, y establece el régimen tributario para estos productos.

o donaciones
ación ante el Jefe
Art. 14, quita
ación de que no se
u firma y la fecha
es conservará la
puesto dentro del
o Tributario. La
para los efectos

La tributación al consumo de la cerveza se regirá por su propia Ley.

CAPITULO II REGIMEN TRIBUTARIO

Art. 2 Créase el impuesto único del 60% al consumo de bebidas alcohólicas de producción nacional y, a la venta de alcohol industrial que se destine a usos distintos de la farmacopea y bebidas alcohólicas.

La tarifa establecida en el inciso anterior podrá disminuir gradualmente, de conformidad con el reglamento que expida el Presidente de la República, a medida que gradualmente aumente la producción de aguardiente rectificado.

Art. 3 El sujeto activo del impuesto es el Estado, y su administración está a cargo del Ministerio de Finanzas y Crédito Público.

Son sujetos pasivos del impuesto, en calidad de agentes de percepción, los fabricantes de alcohol o de bebidas

alcohólicas, sean personas naturales o jurídicas, inclusive si fabrican por cuenta de terceros.

ART. 4 La base imponible para la aplicación del impuesto es el precio ex-fábrica, que comprende la totalidad de materias primas, materiales, todos los costos y gastos de rectificación de producción y financieros, más la utilidad.

No forman parte del precio ex-fábrica los gastos de distribución y otros imputados exclusivamente a la comercialización de los productos.

En el Reglamento se establecerá el mecanismo general para determinar el precio ex-fábrica.

Los fabricantes tienen la obligación de hacer constar en las facturas de venta, por separado, el valor total de las ventas, el impuesto al consumo selectivo establecido en esta Ley y el Impuesto a las Transacciones Mercantiles y Prestación de Servicios.

ART. 5 La suma del precio ex-fábrica y el impuesto que establece esta Ley, multiplicado por dos, es la base imponible para el cálculo del Impuesto a las Transacciones Mercantiles y Prestación de Servicios. Su recaudación se realizará en una sola etapa a nivel de fabricante, de conformidad con la Ley correspondiente.

ART. 6 La declaración y el pago del impuesto al consumo establecido en esta Ley se efectuará quincenalmente en las respectivas Jefaturas Provinciales de Recaudaciones, dentro de los cuatro días siguientes a la quincena sobre la cual se haga la declaración, la misma que se presentará en los formularios que para el efecto proporcionará la Dirección General de Rentas.

El cómputo de este impuesto se efectuará sobre la producción que salga de las plantas industriales, tanto gratuitamente como para la venta y para la entrega a almacenes propios y distribución del producto.

No existe deducción por causas de devolución, consumo interno, pérdida u otras razones que no sean debidamente comprobadas y catalogadas como de fuerza mayor por la Ley del Impuesto a la Renta.

inclusive si fabrica

mpuesto es el pre
e materias primas
de rectificación

os gastos de venta
clusivamente a

anismo general pa

nacer constar en la
total de las venta
ido en esta Ley y
es y Prestación

o que establece es
imponible para
ones Mercantiles
se realizará en
nformidad con la

consumo establec
en las respecti
dentro de los cua
la cual se haga
n los formularios
General de Rentas.

sobre la producc
tanto gratuitam
almacenes propios

ión, consumo inter
lamente comprobadas
Ley del Impuesto a

La modificación de los precios a nivel de mayoristas, tendrá lugar únicamente a partir del primero o quince de cada mes. Los fabricantes tienen plazo para notificar el cambio a la Dirección General de Rentas o a las oficinas provinciales correspondientes, durante los cuatro primeros días laborables de cada quincena.

ART. 7

La totalidad de lo recaudado por este impuesto, ingresará a la Cuenta Corriente Unica del Tesoro Nacional para el financiamiento del Presupuesto del Estado.

ART. 8

Constituyen infracciones a la presente Ley: el contrabando, la defraudación, la contravención y las faltas reglamentarias conforme a lo dispuesto en el Código Tributario.

ART. 9

A más de los actos contemplados en el Art.374 del Código Tributario, es contrabando la venta de aguardiente natural como producto de consumo final, así como de los demás productos alcohólicos que no reúnan los requisitos exigidos por esta Ley.

ART. 10

Además de los casos contemplados en el artículo 381 del Código Tributario, para los efectos de esta Ley, constituyen defraudación:

- a) La falta de emisión o entrega incompleta de facturas, notas o boletas de venta;
- b) El cobro indebido o en exceso de este impuesto.

ART. 11

Constituye caso especial de contravención, para los efectos de esta Ley, además de los contemplados en el Art. 386 del Código Tributario, la falta total o parcial de libros y registros contables.

ART. 12

Corresponde al Director General de Rentas en ejercicio de la jurisdicción penal, el juzgamiento en los actos de defraudación.

Para el juzgamiento de contravenciones y faltas reglamentarias, son además competentes los funcionarios de la Dirección General de Rentas, a quienes el Director General les haya otorgado delegación expresa.

ART. 13

En todo lo que no esté previsto en este capítulo, se estará a lo establecido en el Código Tributario.

CAPITULO III

DE LA PRODUCCION, INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DEL ALCOHOL,
AGUARDIENTE Y BEBIDAS ALCOHOLICAS.

- ART. 14 La siembra, resiembra y cosecha de todo tipo de caña, la elaboración y venta de mieles y panela no están sujetas a cupos y control. La producción de alcohol sobre la base de cualquier otra materia prima que no sea melaza, requiere de autorización previa de los Ministerios de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y de Finanzas y Crédito Público.
- El Estado ejercerá, a través de los Ministerios de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y de Agricultura y Ganadería el control de la utilización y distribución de la melaza determinando los volúmenes totales y las cuotas que cada uno de los ingenios azucareros deberá destinar prioritariamente para uso agropecuario, así como también para alcoholes, otras industrias y el excedente exportable si lo hubiera.
- ART. 15 El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca controlará todo lo referente a marcas de diferentes productos, con el fin de evitar falsificaciones o imitaciones. Cualquier infracción deberá ser puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal General o del Ministerio Fiscal de la respectiva provincia, para el enjuiciamiento penal pertinente.
- ART. 16 El aguardiente obtenido de la destilación directa del jugo de caña deberá ser utilizado únicamente como materia prima para la obtención de alcoholes. El INEN definirá y establecerá las normas técnicas para los productos y subproductos alcohólicos y concederá los certificados de calidad respectivos.
- Las Jefaturas Provinciales de Salud, en ejercicio de las facultades que le concede el Código de Salud y su Reglamento Orgánico-Funcional, extenderán los permisos sanitarios correspondientes.
- ART. 17 Prohíbese la venta para el consumo final de aguardiente sin rectificar y embotellar y de todos los demás productos que no cumplan con las normas sanitarias de calidad, seguridad y registro de marcas. El control del volumen de producción lo realizará el Ministerio de Finanzas mediante el Departamento respectivo.

ION DEL ALCOHOL.

tipo de caña, no están sujetas a la base de la melaza, requiere de Industrias y Crédito Público.

rios de Industrias, Agricultura y Ganadería, y de la melaza, cuotas que cada uno ar prioritariamente para alcoholes, otras hubiera.

ntegración y Pesca, ferentes productos, aciones. Cualquiera ento del Ministerio de la respectiva tinente.

directa del jugo de materia prima para á y establecerá la oductos alcohólicos pectivos.

ejercicio de la lud y su Reglamento, rmisos sanitarios

de aguardiente s, ás productos que m lidad, seguridad y en de producción la nte el Departamento

No podrán venderse para consumo humano los residuos y subproductos resultantes del proceso industrial o artesanal de rectificación o destilación del aguardiente de alcoholes. Se prohíbe también a las fábricas de bebidas alcohólicas contaminar las aguas con los subproductos. En el reglamento se determinará el sistema por el cual se almacenarán y destruirán los residuos y subproductos que no se vayan a vender.

En caso de incumplimiento, el INEN o las Jefaturas de Salud retirarán los permisos de funcionamiento.

ART. 18

En el reglamento se establecerán los porcentajes máximos de mermas y faltantes que se produzcan en la rectificación, transporte, manipuleo, filtración, contracción, evaporación, roturas, etc. que se consideren como pérdidas deducibles para el pago del impuesto a la renta.

ART. 19

Las fábricas de licores o alcoholes gozarán de un abono tributario equivalente al 15 por ciento del precio pagado a los cañicultores y demás productores directos de materia prima.

El porcentaje señalado en el inciso anterior podrá ser aumentado o disminuido por resolución del Ministro de Finanzas y Crédito Público según las condiciones de mercado, con informe del Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca. El abono tributario podrá suprimirse mediante decreto del Presidente de la República.

El Presidente de la República podrá crear un fondo equivalente hasta un tercio del producto del impuesto para la reversión de los cultivos de caña hacia otros cultivos, para lo que señalará un porcentaje de la recaudación del impuesto que se establece en esta Ley, conforme al reglamento que expida para el efecto.

ART. 20

Las Jefaturas de Alcohol y de Salud comisarán el aguardiente y demás productos alcohólicos que no reúnan los requisitos establecidos en esta Ley. El producto alcohólico decomisado será transferido mediante licitación y venta a las fábricas de alcohol o de productos alcohólicos que tengan rectificador. El producto de la venta ingresará a la Cuenta Corriente Unica del Tesoro Nacional. En el Reglamento se establecerán los porcentajes de participación que sobre estas ventas tendrán derecho tanto los denunciantes, como las Jefaturas de

Alcoholes o de Salud respectivas que hagan que el decomiso se haga efectivo.

ART. 21 Ninguna de las disposiciones de esta Ley privan al Presidente de la República de la facultad que le concede el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto Supremo N° 3732 publicado en el Registro Oficial N° 5 de agosto 17 de 1979.

ART. 22 Derógase la Ley de Productos Alcohólicos contenida en el Decreto N° 201 de 8 de febrero de 1971, publicada en el Registro Oficial N° 161 de 11 de los mismos mes y año y todas sus reformas; el Art. 1° del Decreto 762-A de 16 de mayo de 1985 publicado en el Registro Oficial N2 193 de 27 de los mismos mes y año, en lo referente a licores nacionales; la Ley de Organización de la Empresa de Alcoholes del Estado, expedida mediante Decreto N° 2613 de 18 de noviembre de 1965, publicado en el Registro Oficial N° 645 de 13 de diciembre del mismo año; el Art. 13 de la Ley 153 de 5 de enero de 1984, publicado en el Registro Oficial N° 662 de 16 de enero del mismo año, excepto en lo aplicable a las bebidas alcohólicas importadas; los numerales 5,6,7 y 8 del Art. 374 del Código Tributario. Suprímese en el numeral 2 del Art. 389 del Código Tributario las palabras: " las Oficinas de Inspección o Control de Alcoholes"; en el Art. 394 del Código Tributario las palabras: " los Jefes Provinciales y del Director Nacional de Alcoholes en asuntos del ramo" y en el Art. 399 suprímese las palabras : " o defraudación"; así como también todas las demás normas legales que se opongan a las disposiciones de la presente Ley, que por su carácter de especial prevalecerá.

El impuesto establecido en el Art. 2° de esta Ley sustituye a cualquier otro que grave el consumo selectivo a la producción de bebidas alcohólicas de producción nacional.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA El Ministerio de Finanzas y Crédito Público , de conformidad con las facultades que le corresponden, realizará todos los ajustes administrativos y presupuestarios que fueren necesarios para el cumplimiento de esta Ley.

SEGUNDA En el plazo de veinte días a partir de la vigencia de esta Ley, las fábricas de productos alcohólicos están obligadas a declarar ante la Dirección General de Rentas, los precios ex-fábrica de cada uno de sus productos determinados sobre la base de la presente Ley.

TERCERA

CUARTA

QUINTA

SEXTA

decomiso se haga
van al Presidente
e el artículo 86
Supremo N° 3732,
sto 17 de 1979.
contenida en el
publicada en el
mes y año y toda
de 16 de mayo de
193 de 27 de los
nacionales; la Ley
bles del Estado,
noviembre de 1965,
3 de diciembre del
de enero de 1984,
16 de enero del
bidas alcohólicas
t. 374 del Código
rt. 389 del Código
de Inspección o
Código Tributario
Director Nacional
rt. 399 suprímese
también todas las
sposiciones de la
l prevalecerá.
a Ley sustituye a
o a la producción
l.

, de conformidad
alizará todos los
los que fueren
vigencia de esta
están obligadas a
tas, los precios
terminados sobre la

Para los efectos previstos en el Art. 17 de esta Ley se concede un plazo de 12 meses para que las embotelladoras de aguardiente adquieran los equipos necesarios que les permita realizar el proceso de rectificación.

En el plazo de treinta días las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la producción de alcohol, destilación de aguardiente y fabricación de bebidas alcohólicas, registrarán en la Dirección General de Alcoholes los datos correspondientes de inscripción, como requisito legal para su funcionamiento.

Todos los bienes y demás activos que se utilicen en la industrialización del alcohóles de propiedad de la Empresa de Alcoholes del Estado serán transferidos a los trabajadores actuales de la empresa mediante negociación directa. Para este efecto los trabajadores se constituirán en cooperativa o en cualquiera otra forma de asociación productiva dentro del plazo de seis meses contados desde la vigencia de esta Ley

De no efectuarse la enajenación dentro del plazo adicional de seis meses, por no haberse organizado los trabajadores o por no desear adquirir tales bienes, los activos en poder de la Empresa de Alcoholes del Estado se venderán en pública subasta de conformidad con el reglamento de bienes.

El equivalente a la tercera parte del impuesto establecido en el Art. 11 de esta Ley se destina al programa de Medicina Infantil Gratuita, según lo previsto en el Decreto Ejecutivo N° 762-A publicado en el Registro Oficial N° 193 de 27 de mayo de 1985 mientras esté vigente tal decreto. Se tomará en cuenta además lo previsto en la Ley N° 49 promulgada en el Registro Oficial N° 491 de agosto 1° de 1986.

IX

Reformas a la Ley sobre la Cédula de Control Tributario

ART. 1

Sustitúyanse los Arts. 6 y 7 de la vigente Ley sobre la Cédula de Control Tributario por los siguientes:

El Art. 6 dirá: " La Cédula de Control Tributario, tendrá el período de duración de un ejercicio financiero y será obtenida con la presentación de la declaración del Impuesto a la Renta,

según lo establecido en la Ley de Impuesto a la Renta mediante el pago de los siguiente valores:

<u>Renta Líquida</u>	<u>Valor a Pagar: Por Ciento del Salario Mínimo Vital</u>
De S/. 1 a S/. 20.000	1.5
De S/. 20.001 a S/. 50.000	2.0
De S/. 50.001 a S/. 100.000	3.0
De S/. 100.001 a S/. 200.000	4.0
De S/. 200.001 a S/. 500.000	6.0
De S/. 500.001 a S/. 1.000.000	10.0
De S/. 1.000.001 a S/. 2.000.000	15.0
De S/. 2.000.001 en adelante	25.0

El Art. 7 dirá: "Para las personas naturales que declaren rentas exentas, el valor de la Cédula de Control Tributario anual será de uno por ciento del Salario Mínimo Vital; para las empresas que declaren pérdidas el valor será de diez por ciento del Salario Mínimo Vital."

ART. 2 En el Art. 8 sustitúyase el inciso segundo por el siguiente: "El valor de esta nueva Cédula será del dos por ciento del Salario Mínimo Vital para quien declare renta y del uno por ciento del Salario Mínimo Vital para quienes estén exentos."

ART. 3 Las presentes reformas entrarán en vigencia desde su publicación en el Registro Oficial y se aplicarán a partir del 1° de enero de 1987.

X

MEDIDAS PARA FACILITAR LA DECLARACION, EL PAGO Y RECAUDACION DE TRIBUTOS

ART. 1 El Presidente de la República, mediante reglamento, establecerá los mecanismos que fueren necesarios para que los tributos puedan pagarse a través de las instituciones bancarias, que operen en el país, autorizadas por la Superintendencia de Bancos.

Las instituciones bancarias que reciban declaraciones y pagos de impuesto de los sujetos pasivos, deberán remitirlos al sujeto activo en el plazo que se determine en el reglamento

a mediante el pago

pagar:
o del
Mínimo Vital

tales que declare
Control Tributario
Mínimo Vital; para
c será de diez por

por el siguiente:
los por ciento del
enta y del uno por
s estén exentos."

la desde su publi
án a partir del 1º

LDACION DE TRIBUTOS

eglamento, estable
ios para que los
instituciones ban
is por la Superir

claraciones y paga
i remitirlos al su
el reglamento

mentado; la fecha de pago y de presentación de la declaración, si la hubiere, será la de recepción por parte del banco respectivo.

Las instituciones bancarias que reciban las declaraciones y los pagos serán responsables exclusivamente por los pagos y documentos entregados a ellas que deberán remitirse a la correspondiente autoridad tributaria, pero no tendrán responsabilidad alguna con respecto al contenido de la declaración ni con relación a la liquidación efectuada por el sujeto pasivo ni tendrán la calidad de agentes de percepción.

ART. 2

En todos los casos en que para la celebración de un acto o contrato o para su inscripción sea necesario el pago de cualquier clase de tributo, el o los sujetos pasivos o partes contratantes podrán entregar su declaración y pago directamente al funcionario recaudador del sujeto activo respectivo, el cual no podrá negarse a recibir dicho pago. También podrá el o los sujetos pasivos entregar su declaración y el dinero para el pago al Notario Público, quien efectuará la presentación de la declaración y el pago al sujeto activo en la forma señalada. El Notario no tendrá responsabilidad alguna por la declaración del o de los sujetos pasivos o partes contratantes, pero sí por el pago de la cantidad entregada a él por tal o tales sujetos pasivos o partes contratantes.

Si el funcionario recaudador de la respectiva administración tributaria se negare, por cualquier causa, a recibir la declaración y pago en la forma señalada, el acto o contrato o su inscripción o registro podrá efectuarse con el depósito en el Banco Central del Ecuador, a órdenes del sujeto activo o Autoridad Tributaria respectiva, de los tributos correspondientes, sin necesidad de esperar el resultado del juicio de pago por consignación.

Dentro del plazo de caducidad previsto por el Código Tributario, el sujeto activo podrá verificar la determinación realizada por el sujeto pasivo en su declaración.

ART. 3

Las disposiciones del artículo anterior, serán aplicables a todos aquellos tributos que deban pagarse sea porque gravan el acto o contrato, sea porque constituyen un requisito previo para su celebración o inscripción, aunque el objeto del tributo sea distinto. En consecuencia, tales normas serán aplicables a los impuestos de alcabala y sus adicionales, registro y sus adicionales, al impuesto a la utilidad derivada

de la compra-venta de bienes inmuebles, sean urbanos o rústicos, y en general a cualquier otro tributo que grave el acto o contrato o que sea necesario para su celebración.

ART. 4 Ni los Notarios ni los Registradores de la Propiedad Mercantiles podrán exigir documento adicional alguno, distinto de aquellos expresamente señalado por la Ley para la celebración de los actos o contratos o su inscripción. La violación de esta norma será sancionada de conformidad con las leyes notarial y de registro.

Igual prohibición será aplicable a las autoridades administrativas y judiciales que deban aprobar cualquier acto o contrato, de cualquier naturaleza. En caso de violación serán sancionadas de conformidad con las leyes que regulen sus atribuciones.

ART. 5 Para los efectos señalados en el Art. 2 de la Ley No. 18, reformativa de la Ley de Derechos Notariales, promulgada en el Registro Oficial No. 363 del 27 de enero de 1986, los contratos de endeudamiento público se considerarán de cuantía indeterminada.

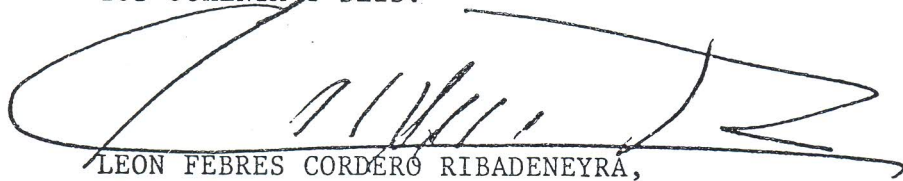
XI

Vigencia de esta Ley

ARTICULO FINAL Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la aplicación de las disposiciones concernientes a Sueldos y Salarios.

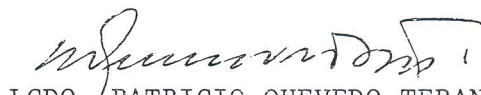
PROMULGUESE EN EL REGISTRO OFICIAL COMO DECRETO-LEY No. 29, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 65 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.

PALACIO NACIONAL, EN QUITO A VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS.



LEON FEBRES CORDERO RIBADENEYRA,
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

ES COPIA.- LO CERTIFICO.- 29 de Septiembre 1986



LCDO. PATRICIO QUEVEDO TERAN,
SECRETARIO GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

ANEXO

12



REGISTRO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

Administración del Sr. Ec. Rafael Correa Delgado
Presidente Constitucional de la República

Año I -- Quito, Martes 27 de Julio del 2010 -- N° 244

LIC. LUIS FERNANDO BADILLO GUERRERO
DIRECTOR ENCARGADO

Quito: Avenida 12 de Octubre N 16-114 y Pasaje Nicolás Jiménez
Dirección: Telf. 2901 - 629 -- Oficinas centrales y ventas: Telf. 2234 - 540
Distribución (Almacén): 2430 - 110 -- Mañosca N° 201 y Av. 10 de Agosto
Sucursal Guayaquil: Malecón N° 1606 y Av. 10 de Agosto - Telf. 2527 - 107
Suscripción anual: US\$ 400 + IVA -- Impreso en Editora Nacional
1.200 ejemplares -- 16 páginas -- Valor US\$ 1.25 + IVA

SUPLEMENTO

SUMARIO:

EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR

Págs.

FUNCION EJECUTIVA

Oficio No. T. 5258-SNJ-10-1151

Quito, julio 26 de 2010

LEY:

Ley Reformativa a la Ley de
Hidrocarburos y a la Ley de Régimen
Tributario Interno

1

Sr. Lic.
Luis Fernando Badillo
DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL (E)
Ciudad

ACUERDO:

De mi consideración:

MINISTERIO DE FINANZAS:

185 Modificase la Normativa del Sistema de
Administración Financiera

8

Según consta del adjunto oficio SAN-2010-526 del 26 de julio de 2010, suscrito por el Secretario General de la Asamblea Nacional, el proyecto de LEY REFORMATIVA A LA LEY DE HIDROCARBUROS Y A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, calificado de urgente en materia económica, y remitido a la Asamblea Nacional el 25 de junio de 2010 con oficio 5258-SNJ-10-985, no fue tratado en segundo debate y por ende no fue aprobado dentro del plazo legal correspondiente.

CODIFICACION:

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL:

PLE-CNE-3-22-7-2010 Expídese la Codifica-
ción del Reglamento para la inscripción
de partidos, movimientos políticos y
registro de directivas

10

En virtud de lo anterior, y de conformidad con el artículo 140 de la Constitución de la República y 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, **promulgo** como Decreto Ley el referido proyecto, y dispongo su publicación en el Registro Oficial.

Adjunto para el efecto, el referido proyecto urgente en materia económica, con la recepción auténtica de la Asamblea Nacional.

Atentamente,

Dios, Patria y Libertad

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

ASAMBLEA NACIONAL

Oficio No. SAN-2010-526

Quito, 26 de julio de 2010.

Señor economista
Rafael Correa Delgado
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR
En su despacho.

Señor Presidente:

La Asamblea Nacional, con fecha 25 de junio de 2010, recibió el Oficio No. 5258-SNJ-985 de 24 de los mismos mes y año, que contiene el Proyecto de **LEY REFORMATORIA A LA LEY DE HIDROCARBUROS Y A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO** calificado como urgente en materia económica.

Por lo expuesto, me permito **CERTIFICAR**:

El Pleno de la Asamblea Nacional, en sesión de 19 de julio de 2010, trató en Primer Debate el proyecto de LEY REFORMATORIA A LA LEY DE HIDROCARBUROS Y A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO; sin embargo, hasta la presente fecha no existe pronunciamiento alguno respecto del referido proyecto de ley.

Lo que me permito comunicar a usted, para que se actúe de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Constitución de la república del Ecuador y artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Atentamente,

f.) Dr. Francisco Vergara O., Secretario General.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.- Secretaría General Jurídica.- Recibido:- Nombre: Ilegible.- Fecha: 26 de julio del 2010.- Hora: 09h26.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Oficio No. 5258-SNJ-10-985

Quito, junio 24 de 2010

Señor Arquitecto
Fernando Cordero Cueva
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL
Ciudad

De mi consideración:

De conformidad con el artículo 140 de la Constitución de la República, envío a la Asamblea Nacional, con la calidad de **urgente en materia económica**, el proyecto de **LEY REFORMATORIA A LA CODIFICACIÓN DE LA LEY DE HIDROCARBUROS**, así como la correspondiente exposición de motivos, para su conocimiento, discusión y aprobación.

Con sentimientos de mi distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Dios, Patria y Libertad

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El sector hidrocarburífero ecuatoriano se encuentra regulado por la Ley de Hidrocarburos N° 1459, publicada en el Registro Oficial N° 322 del 1 de octubre de 1971; y, codificada mediante Decreto Supremo No. 2967 de 6 de noviembre de 1978, publicado en el Registro Oficial No. 711 de 15 de noviembre de 1978, y sus posteriores reformas.

Desde el año 1971 hasta la presente fecha, se han producido cambios sustanciales en la vida social, económica y política del país, a lo que se ha sumado el extraordinario desarrollo científico y tecnológico. En este período, el petróleo como recurso natural agotable, no renovable y estratégico, se ha constituido en la principal fuente de ingresos estatales, cuyo manejo requiere la adopción de un marco jurídico e institucional, que acorde a la nueva Constitución de la República, permita un mayor control y participación del Estado ecuatoriano.

Las reformas previamente realizadas a la Ley de Hidrocarburos han atendido parcialmente las necesidades de cambio que requiere la dinámica del manejo de los hidrocarburos y sustancias asociadas; sin embargo, para atender las circunstancias actuales del sector resulta necesario reformar la Ley de Hidrocarburos, introduciendo disposiciones que permitan impulsar la actividad hidrocarburífera, incrementando los niveles de producción de los campos petroleros, dentro de un esquema contractual de prestación de servicios, que devuelva la titularidad de la totalidad de la producción nacional a favor del Estado, estableciendo únicamente el reconocimiento de una tarifa por barril producido a favor de las Contratistas, que no fluctúe en función del precio del petróleo, del cual se han beneficiado desproporcionadamente las compañías operadoras.

Adicionalmente, resulta indispensable reestructurar el sector hidrocarburífero para que, al amparo de las normas

constitucionales, se establezcan las relaciones entre el Ministerio Sectorial, sus entidades adscritas, las empresas públicas, y la participación de empresas mixtas y públicas, delimitando sus atribuciones y actividades para la correcta ejecución de la política hidrocarburífera, así como de la gestión y administración de los recursos naturales, de las operaciones hidrocarburíferas, y su control y fiscalización.

Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible del Estado. Son de carácter estratégico, y para su explotación se debe garantizar un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad, la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.

LEY No.

REFORMATORIA A LA LEY DE HIDROCARBUROS Y A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO

LA ASAMBLEA NACIONAL

Considerando:

Que la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 el 20 de octubre de 2008, en el numeral 11 del Art. 261 dispone que el Estado central tendrá competencias exclusivas sobre los recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales;

Que el Art. 313 de la Constitución señala que se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas y los recursos naturales no renovables;

Que el Art. 408 de la Constitución establece que son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos. El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota;

Que la modificación del contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos establece únicamente el pago de una tarifa por cada barril producido y hace necesaria una modificación del régimen tributario de esta modalidad contractual, a fin de establecer una tarifa única y mínima del 25% del impuesto a la renta;

Que el Art. 90 de la Ley de Régimen Tributario Interno, establece que las utilidades que obtengan los contratistas de prestación de servicios para la exploración y, explotación de hidrocarburos estarán sujetas al pago del impuesto a la renta de conformidad con la tarifa única del 44.4%;

Que de conformidad con el Art. 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno, las empresas de exploración y explotación de hidrocarburos estarán sujetas al impuesto

mínimo del veinte y cinco por ciento (25%) sobre su base imponible;

Que los hidrocarburos constituyen la principal fuente de ingresos económicos para el Estado ecuatoriano, por lo que se hace necesario establecer normas y procedimientos que permitan un manejo ágil y oportuno, en defensa de la soberanía nacional;

Que es necesario adecuar la normativa tributaria relacionada con los contratos de prestación de servicios de exploración y explotación hidrocarburífera; y,

En ejercicio de las facultades establecidas en el Art. 120 de la Constitución, expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE HIDROCARBUROS Y A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO

Capítulo I – Reformas a la Ley de Hidrocarburos.

Art. 1.- Sustitúyase el primer inciso del artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos por lo siguiente:

“El Estado explorará y explotará los yacimientos señalados en el artículo anterior en forma directa a través de las Empresas Públicas de Hidrocarburos. De manera excepcional podrá delegar el ejercicio de estas actividades a empresas nacionales o extranjeras, de probada experiencia y capacidad técnica y económica, para lo cual la Secretaría de Hidrocarburos podrá celebrar contratos de asociación, de participación, de prestación de servicios para exploración y explotación de hidrocarburos o mediante otras formas contractuales de delegación vigentes en la legislación ecuatoriana. También se podrá constituir compañías de economía mixta con empresas nacionales y extranjeras de reconocida competencia legalmente establecidas en el País”.

Art. 2.- En el primer inciso del artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos sustitúyase la frase “serán realizados por PETROECUADOR según se establece en el segundo inciso de este artículo, o por empresas nacionales o extranjeras de reconocida competencia en esas actividades”, por “serán realizadas directamente por las empresas públicas, o por delegación por empresas nacionales o extranjeras de reconocida competencia en esas actividades”; en el segundo inciso sustitúyase la frase “Cuando PETROECUADOR realice las actividades previstas en el inciso anterior, podrá hacerlas directamente o delegarlas”, por “La Secretaría de Hidrocarburos podrá delegar las actividades de transporte de hidrocarburos por oleoductos, poliductos y gasoductos, su refinación e industrialización”, y en el mismo inciso donde dice “PETROECUADOR” dirá “la Secretaría de Hidrocarburos”; y en el quinto inciso sustitúyase la frase “El Ministerio del ramo”, por “La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero”.

Art. 3.- Sustitúyase el artículo 6 por el siguiente:

“Art. 6.- Corresponde a la Función Ejecutiva la formulación de la política de hidrocarburos. Para el desarrollo de dicha política, su ejecución y la

aplicación de esta Ley, el Estado obrará a través del Ministerio del Ramo y de la Secretaría de Hidrocarburos."

Art. 4.- Sustitúyase el artículo 9 por el siguiente:

Art. 9.- El Ministro Sectorial es el funcionario encargado de formular la política de hidrocarburos aprobados por el Presidente de la República, así como de la aplicación de la presente Ley. Está facultado para organizar en su Ministerio los Departamentos Técnicos y Administrativos que fueren necesarios y proveerlos de los elementos adecuados para desempeñar sus funciones.

La industria petrolera es una actividad altamente especializada, por lo que será normada por la Agencia de Regulación y Control. Esta normatividad comprenderá lo concerniente a la prospección, exploración, explotación, refinación, industrialización, almacenamiento, transporte y comercialización de los hidrocarburos y de sus derivados, en el ámbito de su competencia.

Art. 5.- Sustitúyase el Art. 11 de la Ley de Hidrocarburos por el siguiente:

"Art. 11.- Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH).- Créase la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, ARCH, como organismo técnico-administrativo, encargado de regular, controlar y fiscalizar las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera, que realicen las empresas públicas o privadas, nacionales, extranjeras, empresas mixtas, consorcios, asociaciones, u otras formas contractuales y demás personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que ejecuten actividades hidrocarburíferas en el Ecuador.

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero será una institución de derecho público, adscrita al Ministerio Sectorial con personalidad jurídica, autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio propio.

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero tendrá un Directorio que se conformará y funcionará según lo dispuesto en el Reglamento.

El representante legal de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero será el Director designado por el Directorio.

Atribuciones.- Son atribuciones de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, las siguientes:

- a. Regular, controlar y fiscalizar las operaciones de exploración, explotación, industrialización, refinación, transporte, y comercialización de hidrocarburos;
- b. Controlar la correcta aplicación de la presente Ley, sus reglamentos y demás normativa aplicable en materia hidrocarburífera;

c. Ejercer el control técnico de las actividades hidrocarburíferas;

d. Auditar las actividades hidrocarburíferas, por sí misma o a través de empresas especializadas;

e. Aplicar multas y sanciones por las infracciones en cualquier fase de la industria hidrocarburífera, por los incumplimientos a los contratos y las infracciones a la presente Ley y a sus reglamentos;

f. Conocer y resolver sobre las apelaciones y otros recursos que se interpongan respecto de las resoluciones de sus unidades desconcentradas;

g. Intervenir, directamente o designando interventores, en las operaciones hidrocarburíferas de las empresas públicas, mixtas y privadas para preservar los intereses del Estado;

h. Fijar y recaudar los valores correspondientes a las tasas por los servicios de administración y control;

i. Ejercer la jurisdicción coactiva en todos los casos de su competencia;

j. Solicitar al Ministerio Sectorial, mediante informe motivado, la caducidad de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, o la revocatoria de autorizaciones o licencias emitidas por el Ministerio Sectorial en las demás actividades hidrocarburíferas; y,

k. Las demás que le correspondan conforme a esta Ley y los reglamentos que se expidan para el efecto.

El Reglamento Orgánico Funcional de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, que para el efecto expida el Ministro Sectorial, determinará las demás competencias de la Agencia y sus Regionales que se crearen, en el marco de las atribuciones de la Ley.

Art. 6.- Añádase el siguiente artículo a continuación del Art. 12 de la Ley de Hidrocarburos:

"Art. 6-A.- Secretaría de Hidrocarburos (SH).- Créase la Secretaría de Hidrocarburos, SH, como entidad adscrita al Ministerio Sectorial, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y operativa, que administra la gestión de los recursos naturales no renovables hidrocarburíferos y de las sustancias que los acompañen, encargada de ejecutar las actividades de suscripción, administración y modificación de las áreas y contratos petroleros. Para este efecto definirá las áreas de operación directa de las empresas públicas y las áreas y actividades a ser delegadas a la gestión de empresas de economía mixta y excepcionalmente a las empresas privadas, nacionales e internacionales,

sometidas al régimen jurídico vigente, a la Ley de Hidrocarburos y demás normas que la sustituyan, modifiquen o adicionen.

El representante legal de la Secretaría de Hidrocarburos será el Secretario de Hidrocarburos, designado por el Ministro Sectorial.

Atribuciones.- Son atribuciones de la Secretaría de Hidrocarburos, las siguientes:

- a. Suscribir, a nombre del Estado ecuatoriano, los contratos de exploración y explotación, industrialización y transporte, previa adjudicación por parte del Ministerio Sectorial;
- b. Aprobar planes y programas técnicos y económicos para la correcta ejecución de las actividades y de los contratos de exploración y explotación, industrialización y transporte, de conformidad con la presente Ley;
- c. Diseñar, evaluar y realizar estrategias de promoción de la exploración y explotación, industrialización y transporte de hidrocarburos y divulgarlas con las mejores prácticas internacionales;
- d. Evaluar el potencial hidrocarburífero del país;
- e. Mantener el Registro de Hidrocarburos;
- f. Administrar los contratos que suscriba y controlar su ejecución;
- g. Administrar las áreas hidrocarburíferas del Estado y asignarlas para su exploración y explotación;
- h. Administrar la participación del Estado en los volúmenes de hidrocarburos que le corresponda en los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos;
- i. Apoyar al Ministerio Sectorial en la formulación de la política gubernamental en materia de hidrocarburos;
- j. Administrar la información de las áreas y contratos de exploración y explotación, industrialización y transporte de hidrocarburos y asegurar su preservación, integridad y utilización;
- k. Administrar y disponer de los bienes que por cualquier concepto se reviertan al Estado, por mandato de esta Ley;
- l. Fijar las tasas de producción de petróleo de acuerdo con los contratos y los reglamentos;
- m. Emitir informe previo a la autorización del Ministerio Sectorial para la transferencia o cesión de derechos de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, así como para las autorizaciones inherentes a las

actividades de transporte, almacenamiento, industrialización y comercialización, cuando corresponda;

- n. Solicitar al Ministerio Sectorial, mediante informe motivado, la caducidad de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, o la revocatoria de autorizaciones o licencias emitidas por el Ministerio Sectorial en las demás actividades hidrocarburíferas; y,
- o. Las demás que correspondan de conformidad con esta Ley y el Reglamento.

El Reglamento Orgánico Funcional de la Secretaría de Hidrocarburos, que para el efecto expida el Ministro Sectorial, determinará las demás competencias de la Secretaría y sus Sub Secretarías que se crearen, en el marco de las atribuciones de la Ley.”.

Art. 7.- Sustitúyase el artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos, por el siguiente:

“Art. 16.- Son contratos de prestación de servicios para la exploración y/o explotación de hidrocarburos, aquéllos en que personas jurídicas, previa y debidamente calificadas, nacionales o extranjeras, se obligan a realizar para con la Secretaría de Hidrocarburos, con sus propios recursos económicos, servicios de exploración y/o explotación hidrocarburífera, en las áreas señaladas para el efecto, invirtiendo los capitales y utilizando los equipos, la maquinaria y la tecnología necesarios para el cumplimiento de los servicios contratados.

Cuando existieren o cuando el prestador de servicios hubiere encontrado en el área objeto del contrato hidrocarburos comercialmente explotables, tendrá derecho al pago de una tarifa por barril de petróleo neto producido y entregado al Estado en un punto de fiscalización. Esta tarifa, que constituye el ingreso bruto de la contratista, se fijará contractualmente tomando en cuenta un estimado de la amortización de las inversiones, los costos y gastos, y una utilidad razonable que tome en consideración el riesgo incurrido.

De los ingresos provenientes de la producción correspondiente al área objeto del contrato, el Estado ecuatoriano se reserva el 25% de los ingresos brutos como margen de soberanía. Del valor remanente, se cubrirán los costos de transporte y comercialización en que incurra el Estado. Una vez realizadas estas deducciones, se cubrirá la tarifa por los servicios prestados.

La contratista tendrá opción preferente de compra de la producción del área del contrato, a un precio que en ningún caso será inferior al precio de referencia definido en el artículo 71, no obstante se adjudicará a la empresa que ofertare a un precio en mejores condiciones.

El pago de la tarifa indicada será realizado en dinero, en especie o en forma mixta si conviniere a los intereses del Estado. El pago en especie se podrá efectuar únicamente después de cubrir las necesidades de consumo interno del país.

El precio de hidrocarburos para el caso de pago en especie se fijará de acuerdo con el último precio promedio mensual de ventas externas de hidrocarburos de calidad equivalente, realizadas por PETROECUADOR.

Podrá haber una tarifa adicional para privilegiar producciones provenientes de actividades adicionales comprometidas por la contratista, a fin de impulsar el descubrimiento de nuevas reservas o la implementación de nuevas técnicas para la recuperación mejorada de las reservas existentes.

Las contratistas garantizarán la realización de las inversiones comprometidas en el respectivo plan de desarrollo o plan quinquenal.

La definición de la comercialidad de los yacimientos constará en las bases de contratación.”.

Art. 8.- Sustitúyase el artículo 19 de la Ley de Hidrocarburos por el siguiente:

“Art. 19.- La adjudicación de los contratos a los que se refieren los artículos 1, 2 y 3 de esta Ley la efectuará el Ministerio Sectorial mediante licitación, con excepción de los que se realicen con empresas estatales o subsidiarias de estas, con países que integran la comunidad internacional, con empresas mixtas en las cuales el Estado tenga mayoría accionaria y los de obras o servicios específicos. Para las adjudicaciones, el Ministerio Sectorial conformará un Comité de Licitaciones que se integrará y funcionará de conformidad con el Reglamento.

Las bases, requisitos y procedimientos para las licitaciones serán determinados por el Comité de Licitaciones de conformidad con la Constitución y la Ley. Para las licitaciones el Ministerio Sectorial promoverá la concurrencia del mayor número de ofertas de compañías de probada experiencia y capacidad técnica y económica.

Las resoluciones del Comité de Licitaciones causan ejecutoria.”.

Art. 9.- Sustitúyase el artículo innumerado posterior al artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos por el siguiente:

“Art. 31-A.- Si conviniere a los intereses del Estado, los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos podrán ser modificados por acuerdo de las partes contratantes y previa aprobación del Ministerio Sectorial.”.

Art. 10.- Sustitúyase en el inciso primero del artículo 32 de la Ley de Hidrocarburos la frase: “o de gas natural libre” por la frase: “y/o gas natural, CO₂ o sustancias asociadas”.

Art. 11.- Sustitúyase el quinto inciso del artículo 49 de la Ley de Hidrocarburos por el siguiente:

“En los contratos de prestación de servicios para exploración y explotación de hidrocarburos los contratistas como Operadores, no están sujetos al pago de regalías. La totalidad de la producción del área del contrato es de propiedad del Estado.”.

Art. 12.- Añádase al final del artículo 74 de la Ley de Hidrocarburos el siguiente numeral:

“14. Provocar, por acción u omisión, daños al medio ambiente, calificados por el Ministerio Sectorial; siempre que no los remediare conforme a lo dispuesto por la autoridad competente”.

Art. 13.- Deróguense los artículos 7, 8 y 81.

Art. 14.- Sustitúyase del artículo 77 de la Ley de Hidrocarburos la frase “El incumplimiento de los contratos suscritos por el Estado ecuatoriano para la exploración y/o explotación de hidrocarburos que no produzca efectos de caducidad, ni infracción de la Ley o de los reglamentos, será sancionado” por la frase “El incumplimiento de los contratos suscritos por el Estado ecuatoriano para la exploración y/o explotación de hidrocarburos, y/o la infracción de la Ley y/o de los reglamentos, que no produzcan efectos de caducidad, serán sancionados”.

Art. 15.- Elimínese en el segundo inciso del artículo 79 la frase “y para PETROECUADOR”.

Art. 16.- Añádase el siguiente Art. 94 a la Ley de Hidrocarburos:

“Art. 94.- Participación Laboral: En el caso de los trabajadores vinculados a la actividad hidrocarburífera, éstos recibirán el 3% del porcentaje de utilidades y el 12% restante será pagado al Estado, que lo destinará, única y exclusivamente, a proyectos de inversión social en salud y educación, a través de los Gobiernos Autónomos Descentralizados que se encuentren dentro de las áreas delimitadas por cada contrato, donde se lleven a cabo las actividades hidrocarburíferas, en partes iguales. Dichos proyectos deberán estar armonizados con el Plan Nacional de Desarrollo.

El dinero correspondiente al 12% destinado a proyectos de inversión social será canalizado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados a través del Banco del Estado. Para que el Banco del Estado efectúe los desembolsos correspondientes, los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán contar con proyectos debidamente aprobados por el Ministerio Sectorial correspondiente al área en que se quiera ejecutar el proyecto.”.

Art. 17.- En el segundo inciso del artículo 56, en el tercer y en el último artículo innumerado posterior al artículo 93 de la Ley de Hidrocarburos **sustitúyase la frase “Dirección Nacional de Hidrocarburos” por la frase “Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos”;** y en general, toda referencia a la Dirección Nacional de Hidrocarburos o al Director Nacional de Hidrocarburos se entenderá que se

trata de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero o del Director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero.

Art. 18.- En los incisos segundo y séptimo del artículo 2, en el literal c) del artículo 12, en los incisos primero y tercero del artículo innumerado posterior al artículo 12, en el artículo 13, en el artículo 15, en el primer inciso del artículo innumerado posterior al artículo 17, en el artículo 20, en el artículo 23, en el artículo 24, en el inciso segundo del artículo 26, en el artículo 28, en el artículo 29, en los literales p) y r) del artículo 31, en el artículo 60, numerales tercero y cuarto del artículo 74, en el artículo 75, en el artículo 87, en las tres primeras referencias en el inciso primero del artículo 88 y en el artículo 91, **sustitúyase la palabra "PETROECUADOR" por la frase "la Secretaría de Hidrocarburos"**; y en general, toda referencia a PETROECUADOR como signatario o administrador de contratos y/o áreas se entenderá que se trata de la Secretaría de Hidrocarburos, salvo en el caso de contratos de obras y servicios específicos; y **sustitúyase** en el primer inciso del artículo 12 la referencia a la "Dirección Nacional de Hidrocarburos" **por la "Secretaría de Hidrocarburos"**. En los literales c) y e) del artículo 7, **sustituir la palabra "PETROECUADOR" por "el Comité de Licitaciones"**.

Art. 19.- En el tercer inciso del Artículo 2, en la segunda referencia del tercer inciso del artículo 3, en el artículo 22, en las letras b), c), d), g), i), k), n), y s) del artículo 31, en el artículo 33, en el artículo 34, en el artículo 37, en el segundo inciso del artículo 39, en el artículo 50, en el artículo 51, en el artículo 74.4, en el artículo 82 y en el artículo 85 **donde dice "el Ministerio del Ramo", "el Ministro del Ramo", "del Ministerio del Ramo", "al Ministerio del Ramo" o "el Ministerio", sustitúyase por "la Secretaría de Hidrocarburos", "de la Secretaría de Hidrocarburos", y por "a la Secretaría de Hidrocarburos", según corresponda.** En el artículo 60 **donde dice "PETROECUADOR" sustitúyase por "La Secretaría de Hidrocarburos"**.

Art. 20.- En la primera referencia del tercer inciso del artículo 3, en el cuarto y quinto inciso del artículo 3, en el artículo 30, en las letras f) y m) del artículo 31, en el primer inciso del artículo 56, en el primer inciso del artículo 59, en el artículo 61, en el artículo 65, en el segundo inciso del artículo 68, en el último inciso del artículo 69, en el artículo 70, en el artículo 83 y en el artículo 84, **donde diga "del Ministro del Ramo", "del Ministerio del Ramo", "el Ministerio del Ramo", sustitúyase por "de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero", y por "la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero", según corresponda.** Elimínese el segundo inciso del artículo 59.

Art. 21.- Sustitúyase el artículo 62 por el siguiente:

"Art. 62.- La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero fijará las tarifas que se cobrarán a las empresas usuarias de los sistemas de oleoductos, poliductos y gasoductos, tomando en consideración los costos y gastos y una rentabilidad razonable sobre las inversiones conforme a la práctica petrolera internacional.

En los ductos principales privados, las tarifas serán acordadas entre el usuario, entre los que se podrá incluir a las Empresas Públicas, y la operadora del sistema de transporte.

Las tarifas que pagarán las Empresas Públicas a los operadores de los oleoductos, poliductos y gasoductos serán establecidas en los respectivos contratos que celebren con el operador del sistema correspondiente.

Las tarifas que cobrará PETROECUADOR a las empresas usuarias del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) ampliado las fijará la Agencia de Regulación y Control tomando en consideración los costos y gastos y una rentabilidad razonable sobre las inversiones incluyendo las del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) existente, conforme la práctica petrolera internacional."

Art. 22.- Sustitúyase en toda la Ley al Comité Especial de Licitaciones, CEL o Comité Especial, por el "Comité de Licitaciones".

Art. 23.- Sustitúyase el artículo 35 por el siguiente:

"Art. 35.- El Estado, a través de la Secretaría de Hidrocarburos, en cualesquiera de las formas establecidas en el artículo 2 de esta Ley, podrá celebrar contratos adicionales con sus respectivos contratistas o asociados o nuevos contratos con otros de reconocida capacidad técnica y financiera para utilizar gas proveniente de yacimientos petrolíferos, con fines industriales o de comercialización, y las Empresas Públicas de Hidrocarburos podrán extraer los hidrocarburos licuables del gas que los contratistas o asociados utilicen en los casos indicados en el artículo anterior."

Art. 24.- A continuación del artículo 93, incorpórese el siguiente artículo innumerado:

Art. ...- En las referencias hechas a Petroecuador, como operadora estatal, se entenderá que se refiere a las empresas públicas que se creen para el efecto.

Capítulo II – Reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno.

Art. 25.- Elimínese del inciso cuarto del artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno, lo siguiente: "salvo que por la modalidad contractual estén sujetas a las tarifas superiores previstas en el Título Cuarto de esta Ley."

Art. 26.- En el artículo 10 agréguese un segundo inciso en el numeral innumerado agregado a continuación del numeral 6 (que fue agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, publicada en el Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de diciembre de 2009), con lo siguiente:

"En contratos de exploración, explotación y transporte de recursos naturales no renovables, en los gastos indirectos asignados desde el exterior a sociedades domiciliadas en el Ecuador por sus partes relacionadas se considerarán también a los servicios técnicos y administrativo."

Art. 27.- Sustitúyase el artículo 90 de la Ley de Régimen Tributario Interno por el siguiente:

"Art. 90.- Los contratistas que han celebrado contratos de prestación de servicios para la

exploración y explotación de hidrocarburos pagarán el impuesto a la renta de conformidad con esta Ley. La reducción porcentual de la tarifa del pago del impuesto a la renta por efecto de la reinversión no será aplicable. No serán deducibles del impuesto a la renta de la contratista, los costos de financiamiento ni los costos de transporte por oleoducto principal bajo cualquier figura que no corresponda a los barriles efectivamente transportados.

En caso de que una misma contratista suscriba más de un contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos, para efectos del pago de impuesto a la renta no podrá consolidar las pérdidas ocasionadas en un contrato con las ganancias originadas en otro.”.

Art. 28.- Elimínese los artículos 91, 92, 93, 94 y 95 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los contratos de participación y de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos que se encuentren suscritos se modificarán para adoptar el modelo reformado de prestación de servicios para exploración y explotación de hidrocarburos contemplado en el artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos en el plazo de hasta 120 días, y los contratos suscritos bajo otras modalidades contractuales incluidos los contratos de campos marginales y los contratos de prestación de servicios específicos suscritos entre Petroecuador y/o su filial Petroproducción (actual EP PETROECUADOR) con las empresas Sociedad Internacional Petrolera S.A., filial de la Empresa Nacional del Petróleo de Chile, ENAP (campos MDC, Paraíso, Biguno y Huachito), Repsol YPF Ecuador S.A., Overseas Petroleum and Investment Corporation, CRS Resources (Ecuador) LDC y Murphy Ecuador Oil Company (campo Tivacuno) y Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL (campos de la Península de Santa Elena, Gustavo Galindo Velasco), en el plazo de hasta 180 días. Plazos que se contarán a partir de la vigencia de la presente Ley; caso contrario, la Secretaría de Hidrocarburos dará por terminados unilateralmente los contratos y fijará el valor de liquidación de cada contrato y su forma de pago.

SEGUNDA.- Todos los contratos de exploración y explotación vigentes, suscritos con PETROECUADOR y PETROPRODUCCION, que hasta la presente fecha han sido administrados por las Unidades de Administración de Contratos de PETROECUADOR y de PETROPRODUCCION, indistintamente de su modalidad contractual pasarán a ser administrados por la Secretaría de Hidrocarburos hasta la finalización del plazo y hasta que opere la reversión de las respectivas áreas, responsabilidad que se extiende para las áreas y bloques, con respecto a los cuales se haya declarado la caducidad.

Los servidores que vienen prestando sus servicios con nombramiento o contrato en las Unidades antes referidas, podrán pasar a formar parte de la Secretaría de Hidrocarburos, previa evaluación y selección, de acuerdo a los requerimientos de dicha institución.

En caso de existir cargos innecesarios la Secretaría de Hidrocarburos podrá aplicar un proceso de supresión de puestos para lo cual observará las normas contenidas en la

Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, su Reglamento y las Normas Técnicas pertinentes expedidas por el Ministerio de Relaciones Laborales.

TERCERA.- La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero contará con el personal, derechos, obligaciones, los activos y el patrimonio que actualmente pertenecen o están a disposición de la Dirección Nacional de Hidrocarburos. En este caso se aplicará también lo dispuesto en los incisos segundo y tercero de la Disposición precedente.

CUARTA.- Hasta que se expidan los reglamentos para la aplicación de esta Ley, el Ministro Sectorial expedirá las normas temporales que fueran necesarias para el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas en el País.

QUINTA.- La tributación de la compañía AGIP OIL ECUADOR BV que tiene suscrito un contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación del Bloque 10 con el anterior artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos, mientras dicho contrato no sea renegociado de conformidad con la presente Ley Reformativa, seguirá pagando el impuesto mínimo del 44,4% del impuesto a la renta y el gravamen a la actividad petrolera, de conformidad con los anteriores artículos 90, 91, 92, 93, 94 y 95 que constaban en la Ley de Régimen Tributario Interno antes de la presente reforma.

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado, en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, a

No. 185

EL MINISTRO DE FINANZAS

Considerando:

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, corresponde a las ministras y ministros de Estado, expedir acuerdos y resoluciones administrativas que requiera la gestión ministerial;

Que, este Ministerio tiene la atribución de establecer las normas técnicas de presupuesto y los clasificadores en los cuales se fundamentará la gestión presupuestaria, los cuales son obligatorios para el sector público;

Que, el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, faculta al Ministerio de Finanzas expedir los principios y normas del Sistema Específico y Único de Contabilidad Gubernamental y de Información Gerencial, que permita integrar las operaciones financieras, presupuestarias, patrimoniales y de costos;

ANEXO

13



REGISTRO OFICIAL

ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

Administración del Sr. Ec. Rafael Correa Delgado
Presidente Constitucional de la República

SUPLEMENTO

Año III - Nº 583

**Quito, Jueves 24 de
Noviembre del 2011**

Valor: US\$ 1.25 + IVA

**ING. HUGO ENRIQUE DEL POZO
BARREZUETA
DIRECTOR**

Quito: Avenida 12 de Octubre
N 16-114 y Pasaje Nicolás Jiménez

Dirección: Telf. 2901 - 629
Oficinas centrales y ventas:
Telf. 2234 - 540

Distribución (Almacén):
Mañosca Nº 201 y Av. 10 de Agosto
Telf. 2430 - 110

Sucursal Guayaquil:
Malecón Nº 1606 y Av. 10 de Agosto
Telf. 2527 - 107

Suscripción anual: US\$ 400 + IVA
Impreso en Editora Nacional

1.500 ejemplares -- 16 páginas

www.registroficial.gob.ec

**Al servicio del país
desde el 1º de julio de 1895**

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

DECRETO-LEY:

- Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado 1

ORDENANZA MUNICIPAL:

- Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mira: Que reforma al Reglamento para el manejo y reposición de los fondos fijos de caja chica 15

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Oficio No. T.5975-SNJ-11-1449
Quito, 24 de noviembre de 2011

Señor Ingeniero
Hugo Enrique Del Pozo Barrezueta
DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL
En su despacho

De mi consideración:

Según consta del adjunto oficio No. SAN-2011-1168 del 24 de noviembre del 2011, suscrito por el Secretario General de la Asamblea Nacional, doctor Andrés Segovia Salcedo, en el proyecto de *Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado*, calificado de urgente en materia económica, que remitió a la Asamblea Nacional el 24 de octubre del 2011, mediante oficio No. T. 5975-SNJ-11-1347, no se produjeron los correspondientes debates ni mucho menos fue aprobado, modificado o archivado dentro del plazo legal correspondiente determinado en el artículo 140 de la Constitución de la República del Ecuador.

Además, la moción para negar el proyecto de ley no fue aprobada por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, conforme establece el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Con lo expuesto, y de conformidad a lo indicado en el tercer inciso del artículo 140 de la Constitución de la República del Ecuador y sexto inciso del artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, **promulgo** como Decreto-Ley el aludido proyecto, y, por consiguiente, solicito su publicación en el Registro Oficial.

Adjunto para el efecto, el referido proyecto urgente en materia económica, con la recepción auténtica de la Asamblea Nacional.

Atentamente,
Dios, Patria y Libertad

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

ASAMBLEA NACIONAL

Oficio No. SAN-2011-1168

Quito, 24 de noviembre de 2011

Señor doctor
Alexis Mera Giler
SECRETARIO GENERAL JURÍDICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
En su despacho

Señor doctor:

Mediante Oficio T.5975-SNJ-11-1347 de 24 de octubre de 2011, recibido el mismo día, el señor Presidente Constitucional de la República remitió a la Presidencia de la Asamblea Nacional, el proyecto de **LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL ESTADO**, calificado de urgencia en materia económica. Dicho proyecto fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa el 24 de octubre de 2011 y remitido a la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, el mismo día, para el tratamiento constitucional y legal correspondiente.

En atención a su oficio T.5975-SNJ-11-1450 de 24 de noviembre de 2011, me permito CERTIFICAR lo siguiente:

1. Que desde el 24 de octubre de 2011, hasta el 23 de noviembre de 2011, no se ha instalado sesión para tratar, en primer debate ningún informe de mayoría de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado calificado de urgencia en materia económica, ni se ha instalado sesión para tratar, el segundo debate de ningún informe de mayoría de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, calificado de urgencia en materia económica.

2. Tal como se desprende de la certificación del secretario relator de la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su

Regulación y Control, a esta Secretaría, no ha ingresado informe de mayoría, ni para primer debate, ni segundo debate, sobre la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, calificado de urgencia en materia económica.

3. Que de la revisión de los archivos de la Secretaría General se evidencia que el Pleno de la Asamblea Nacional no aprobó, modificó o archivó el proyecto de **LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL ESTADO**, calificado de urgencia en materia económica.

4. Que de la revisión de los archivos de la Secretaría General, no consta que el Pleno de la Asamblea Nacional haya aprobado, con mayoría absoluta de sus integrantes, una moción que niegue el informe de mayoría del proyecto de **LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL ESTADO**, calificado de urgencia en materia económica. Para su conocimiento me permito adjuntar copia certificada de la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, que en sesión 136 de 17 de noviembre de 2011 se pronunció, con 53 votos a favor y 47 en contra, sobre la moción del asambleísta Gutiérrez que dice: "NEGAR EL PROYECTO DE LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL ESTADO ENVIADO POR EL EJECUTIVO CON EL CARÁCTER DE ECONÓMICO URGENTE."

Atentamente,

f.) Dr. Andrés Segovia S., Secretario General.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.- Secretaría General Jurídica.- Recibido: f.) Ilegible.- Fecha: 24-11-11.- Hora: 09h30.

ASAMBLEA NACIONAL

CRET-664-2011

Quito, 24 de noviembre de 2011

Doctor
Andrés Segovia S.
Secretario General de la Asamblea Nacional
En su despacho:

Señor Secretario:

En atención a su memorando No. SAN-2011-2249, de fecha 24 de noviembre de 2011, mediante la presente, una vez revisados los archivos de la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, me permito certificar lo siguiente:

1) Con fecha 24 de octubre de 2011, mediante Memorando No. SAN-2011-1915, el señor Secretario General de la Asamblea Nacional, notifica a la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control con la calificación e inicio del trámite del Proyecto de ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, proyecto calificado como urgente en materia económica para que se inicie su tratamiento de manera inmediata.

2) Que dentro del trámite de aprobación de leyes calificadas de urgencia en materia económica, el proyecto de Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, calificado como urgente en materia económica, el pleno de la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control de la Asamblea Nacional, a la presente fecha, no ha aprobado, ningún informe de mayoría, con la mayoría absoluta de sus integrantes, para primer y segundo debate referente a dicho proyecto de ley para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.

Es lo que puedo certificar revisados los archivos de la Comisión.

Atentamente,

f.) Ab. José Antonio Arauz, Secretario Relator, Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control.

ASAMBLEA NACIONAL.- SECRETARÍA.- Comisión del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control.

ASAMBLEA NACIONAL.- SECRETARÍA GENERAL.- Fecha: 24/XI/11.- Hora: 08h30.- f.) Ilegible.

ASAMBLEA NACIONAL.- CERTIFICO que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Asamblea Nacional.- Quito, 24 de noviembre del 2011.- f.) Dr. Andrés Segovia S., Secretario General.

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

El Pleno de la Asamblea Nacional, en sesión 136 de 17 de noviembre de 2011, dentro del punto del orden del día incorporado por decisión mayoritaria: **"ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN, SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA DEL PROYECTO DE LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL ESTADO"**, se pronunció, con 53 votos afirmativos y 47 negativos, sobre la moción presentada por el asambleísta Gilmar Gutiérrez, al tenor siguiente:

"NEGAR EL PROYECTO DE LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL ESTADO ENVIADO POR EL EJECUTIVO CON EL CARÁCTER DE ECONÓMICO URGENTE."

Dado y suscrito en el Pleno de la Asamblea Nacional, a los 17 días del mes de noviembre de 2011.

f.) Fernando Cordero Cueva, Presidente.

f.) Dr. Andrés Segovia S., Secretario General.

ASAMBLEA NACIONAL.- CERTIFICO que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Asamblea Nacional.- Quito, 24 de noviembre del 2011.- f.) Dr. Andrés Segovia S., Secretario General.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Oficio No. T.5975-SNJ-11-1347

Quito, 24 de octubre de 2011

Arquitecto

Fernando Cordero Cueva

PRESIDENTE ASAMBLEA NACIONAL

En su despacho

De mi consideración:

De conformidad con el artículo 140 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 59 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, envío a la Asamblea Nacional, con la calidad de urgente en materia económica, el proyecto de **LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL ESTADO**, así como la correspondiente exposición de motivos, para su conocimiento, discusión y aprobación.

Con sentimientos de mi distinguida consideración y estima.

Atentamente,

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

Anexo: original de oficio No. MF-CGJ-2011-1199

ASAMBLEA NACIONAL.- REPÚBLICA DEL ECUADOR.- N° Trámite: 83685.- Código validación: HFM4OKXD54.- Tipo de documento: oficio.- Fecha recepción: 24-Oct-2011 11:22.- Numeración documento: t.5975-snj-11-1347.- Fecha oficio: 24-Oct-2011.- Remitente: Correa Rafael.- Razón Social: Presidencia de la República.- Anexa 28 fojas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La sociedad debe avanzar hacia un sistema de producción eficiente que garantice no solo la rentabilidad financiera de las empresas, sino, además, el beneficio social que se concrete en la elevación de la calidad de vida de los ciudadanos. La contaminación ambiental no debe ser una preocupación solamente de los ambientalistas, pues sus consecuencias afectan directamente a la salud de las personas, con el consiguiente efecto en las finanzas personales y en los esfuerzos adicionales que debe hacer el Estado para garantizar la salud de toda la población.

Todo proceso productivo, por elemental que sea, y en general, la actividad humana, tiende a generar impactos negativos al ambiente, que deben ser minimizados o mitigados. Para ello es fundamental adecuar la legislación vigente con el fin de auspiciar cambios en los comportamientos humanos que tiendan a minimizar las presiones de contaminación al ambiente.

En este sentido se debe procurar que la sociedad comprenda que todos los ciudadanos tienen, de una u otra manera, responsabilidad ambiental. Las empresas deben contribuir con procesos de producción más limpios. Y el Código de la Producción vigente plantea incentivos claros para que esto ocurra.

De igual forma, los ciudadanos tienen que contar con las motivaciones necesarias para que sus hábitos de consumo sean más amigables desde el punto de vista ambiental. Los ciudadanos, por libre elección deberían preferir productos que hayan sido elaborados cumpliendo con su responsabilidad ambiental. Pero el círculo sólo se cerrará cuando los ciudadanos comprendan que el ciclo no termina cuando se consume un bien, sino cuando los desechos que de éste se desprendan tengan un fin ambientalmente deseable.

Los incentivos para que esto ocurra devienen de una señal de política pública que premie los procesos que contribuyan al mejoramiento del ambiente y que desincentiven las prácticas más contaminantes.

En el primer caso, se trata de entregar al ciudadano un incentivo para que recicle sus desperdicios, de tal forma que estos recirculen en el propio proceso productivo, sin dejar huellas ambientales de difícil solución. La educación ambiental es fundamental para que esto ocurra. Es necesario que en el imaginario de las personas se posicione la necesidad de reciclar lo reciclable, con la conciencia de que al hacerlo, todos ganan: se crea un esquema de producción más rentable y con beneficios claros al consumidor y al ambiente.

En el segundo caso, para desincentivar las prácticas más contaminantes, hay que partir de un principio básico de la legislación ambiental: quien contamina, paga. Esto, por supuesto, cobra sentido cuando se determina con claridad la existencia de una actividad contaminante. Cuando eso ocurre se deben generar los instrumentos necesarios para desestimular la producción y el consumo de bienes altamente contaminantes y propiciar un cambio en las matrices productivas y de hábitos de consumo.

Cabe mencionar, que uno de los mayores contaminantes que existen por sus compuestos químicos para su fabricación, son las botellas plásticas, ya que para su descomposición toman alrededor de entre 100 a 1.000 años.

En este sentido, resulta procedente, con la finalidad de fomentar, incentivar y obtener un verdadero reciclaje, poner un impuesto a las botellas plásticas no retornables, pero lo novedoso de este caso, es que el valor que se pague por el impuesto, se lo puede recuperar ya que se le pagará una tarifa por el mismo valor del impuesto a quien recolecte, entregue y retorne las botellas.

Por otro lado, resulta importante precisar que las finalidades de los tributos no sólo son de recaudación para ingresos del Estado para la elaboración de carreteras, hospitales, escuelas, entre otras, sino que a su vez deben generar incentivos para lograr que los ecuatorianos y ecuatorianas tengan unas conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.

Es por esto, lo necesario de una reforma tributaria, ya que vamos a poder lograr que los ecuatorianos y ecuatorianas se concienticen sobre la problemática actual que atraviesa el Estado ecuatoriano, en relación no sólo al medio ambiente, sino a los vicios del ser humano como son el alcohol y el tabaco, causas fundamentales de enfermedades, muertes, crímenes, separación de familias, entre otros.

Con esto, se lograrían dos objetivos y principios constitucionales esenciales, por un lado, el Estado frente a la obligación que tiene con sus ciudadanos de reconocerles el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, *sumak kawsay*; y, por otro la responsabilidad y deberes de los ecuatorianos y ecuatorianas frente a promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir, así como también el respeto a la naturaleza y preservar un ambiente sano.

Para el efecto, el Gobierno Nacional propone un impuesto a los carros que más contaminan, que son los de más alto cilindraje. También propone gravar las botellas plásticas, con un impuesto que incentivaría su reutilización. Toda la estructura tributaria propone incentivar la adquisición de vehículos híbridos de bajo cilindraje, que generan menos emisiones nocivas.

El Estado tiene la competencia de establecer las políticas públicas respecto a los recursos minerales e hidrocarbúricos, sin embargo, con las Leyes actuales de Hidrocarburos y Minería, el Estado se encuentra con cierta limitación en ejercer dicha competencia, ya que los Gobiernos Seccionales Autónomos son los que deciden sobre los proyectos de inversión social que se realizarán en virtud del porcentaje que el Estado recibe por las utilidades que generan las actividades hidrocarbúricas y mineras; excluyendo de esta manera a la iniciativa del Estado.

Por otra parte, también resulta necesario que el dinero no sólo se destine a proyectos de educación y salud, sino también al desarrollo territorial.

Ahora bien, es importante acotar que para lograr una excelencia en la administración y control del Servicio de

Rentas Internas, hay que reformar la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, con la finalidad de adecuar ciertos artículos de la mencionada Ley, para obtener el aludido objetivo.

El Impuesto de Salida de Divisas, en virtud de que el país no tiene una moneda propia, es de vital importancia para el Estado, desde el punto de vista, económico, político y social, ya que poniendo un impuesto a la salida de divisas, obtenemos la seguridad de que los grandes empresarios del país o las personas de mayor posición económica, no saquen en grandes cantidades el dinero afuera del país, logrando de esta manera, que el dinero circule en nuestro país, y así no nos quedaríamos sin fluidez monetaria.

Por otro lado, es menester regular el ámbito tributario de los Municipios y del sector de la Transportación Pública, con el propósito de que la devolución del IVA resulte más eficiente, en el sentido de que obtengan beneficios por el pago del aludido impuesto, lo cual va a generar por un lado, que la ciudadanía no se perjudique con el alza repentina por parte de los transportistas de los precios del pasaje; y, por otro, que los Municipios tengan un presupuesto más transparente.

Otro punto evidente que hay que normar, ya que fue pedido de la ciudadanía, es el relativo al impuesto a las Tierras Rurales, con la finalidad de beneficiarlos con exenciones tributarias, siempre y cuando se ajusten a los informes técnicos de las entidades correspondientes.

Por último, como es de conocimiento público, existen ciertas dificultades para cobrar las acreencias que tienen el Estado con aquellos deudores morosos, que fueron, en su mayoría, lo que han desfalcado y ocasionaron la crisis bancaria, ya que con ciertos recursos judiciales logran dilatar los procesos.

Es por esto, que resulta necesario, reformar las normas pertinentes, con la única finalidad, de poder cobrar todas esas acreencias y por consiguiente hacer justicia.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DECRETO – LEY

CONSIDERANDO:

Que el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que se *“reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”*;

Que, asimismo, el mencionado artículo declara como interés público *“la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.”*;

Que el artículo 15 de la Constitución de la República del Ecuador, norma que *“El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto.”*;

Que el artículo 30 del mencionado cuerpo normativo supremo establece que *“las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable”*;

Que el número 3 artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador, regula como deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos el de *“Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.”*;

Que el artículo 261 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el Estado Central tendrá, entre otras cosas, competencia para determinar las políticas económicas, tributarias y fiscal; así como también en los recursos minerales, hidrocarbúricos y la biodiversidad;

Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador, norma que la política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables;

Que, en virtud de las normas enunciadas, con la finalidad de que mediante la aplicación de tributos se pueda lograr una conducta ecológica y concientización de los ecuatorianos y ecuatorianas frente a la problemática actual que atraviesa el país en relación a la contaminación ambiental, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, mediante oficio No. T. 5975-SNJ-11-1347, de 24 de octubre de 2011, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 135 de la Constitución de la República del Ecuador, remite a la Asamblea Nacional el proyecto de *“Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno, a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, al Código Tributario, a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Minería;*

Que mediante Oficio No. MF-CGJ-2011, del 20 de julio del 2011, el Ministerio de Finanzas emite dictamen favorable para el proyecto en mención; y,

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 140 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:

LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL ESTADO

Artículo 1.- Agréguese a continuación del número 17 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, el siguiente número:

“18.- Son deducibles los gastos relacionados con la adquisición, uso o propiedad de vehículos utilizados en el ejercicio de la actividad económica generadora de la renta, tales como:

1) Depreciación o amortización;

2) Canon de arrendamiento mercantil;

3) Intereses pagados en préstamos obtenidos para su adquisición; y,

4) Tributos a la Propiedad de los Vehículos.

Si el avalúo del vehículo a la fecha de adquisición, supera los USD 35.000 de acuerdo a la base de datos del SRI para el cálculo del Impuesto anual a la propiedad de vehículos motorizados de transporte terrestre, no aplicará esta deducibilidad sobre el exceso, a menos que se trate de vehículos blindados y aquellos que tengan derecho a exoneración o rebaja del pago del Impuesto anual a la propiedad de vehículos motorizados, contempladas en los artículos 6 y 7 de la Ley de Reforma Tributaria publicada en el Registro Oficial No. 325 de 14 de mayo de 2001.

Tampoco se aplicará el límite a la deducibilidad, mencionado en el inciso anterior, para aquellos sujetos pasivos que tengan como única actividad económica el alquiler de vehículos motorizados, siempre y cuando se cumplan con los requisitos y condiciones que se dispongan en el Reglamento."

Artículo 2.- Agréguese a continuación del artículo 26 de la Ley de Régimen Tributario Interno, el siguiente artículo:

"Artículo 27.- Impuesto a la renta único para la actividad productiva de banano.- Los ingresos provenientes de la producción y cultivo de banano estarán sujetos al impuesto único a la Renta del dos por ciento (2%). La base imponible para el cálculo de este impuesto lo constituye el total de las ventas brutas, y en ningún caso el precio de los productos transferidos podrá ser inferior a los fijados por el Estado. Este impuesto se aplicará también en aquellos casos en los que el exportador sea, a su vez, productor de los bienes que se exporten.

El impuesto presuntivo establecido en este artículo será declarado y pagado, en la forma, medios y plazos que establezca el Reglamento.

Los agentes de retención efectuarán a estos contribuyentes una retención equivalente a la tarifa señalada en el inciso anterior. Para la liquidación de este impuesto único, esta retención constituirá crédito tributario.

Los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a las actividades señaladas en este artículo estarán exentos de calcular y pagar el anticipo del impuesto a la renta.

En aquellos casos en los que los contribuyentes tengan actividades adicionales a la producción y cultivo de banano, para efectos del cálculo del anticipo de impuesto a la renta, no considerarán los ingresos, costos y gastos, relacionados con la producción y cultivo de los mismos, de conformidad con lo establecido en el Reglamento.

Otros subsectores del sector agropecuario, pesquero o acuacultor podrán acogerse a este impuesto, cuando a petición fundamentada del correspondiente gremio a través del Ministerio del ramo, con informe técnico del mismo y, con informe sobre el impacto fiscal del Director General del Servicio de Rentas Internas, el Presidente de la República, mediante decreto así lo disponga, pero en cualquier caso aplicarán las tarifas vigentes para las actividades mencionadas en este artículo."

Artículo 3.- En el número 14 del artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno, luego de la palabra "híbridos", añádase: "o eléctricos, cuya base imponible sea de hasta USD 35.000. En caso de que exceda este valor, gravarán IVA con tarifa doce por ciento (12%)."

Artículo 4.- Agréguese a continuación del tercer inciso de la letra c), número 2, del artículo 66 de la Ley de Régimen Tributario Interno, lo siguiente:

"No tendrán derecho a crédito tributario por el IVA pagado en la adquisición local e importaciones de bienes y utilización de servicios, las instituciones, entidades y organismos que conforman el Presupuesto General del Estado, entidades y organismos de la Seguridad Social, las entidades financieras públicas, ni los Gobiernos Autónomos Descentralizados."

Artículo 5.- Agréguese a continuación del artículo 66 de la Ley de Régimen Tributario Interno, el siguiente artículo innumerado:

"Art. (...).- Los contribuyentes que tengan como giro de su actividad económica el transporte terrestre público de pasajeros en buses de servicio urbano, sujeto a un precio fijado por las autoridades competentes, conforme lo establece la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, tendrán derecho a crédito tributario por el IVA que hayan pagado en la adquisición local de chasis y carrocerías, que sean utilizados exclusivamente dentro del giro de su negocio y directamente relacionados con el mismo, pudiendo solicitar al Servicio de Rentas Internas la devolución de dicho IVA, de acuerdo a las condiciones previstos en el Reglamento a esta Ley."

Artículo 6.- Elimínese el artículo 71 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Artículo 7.- Sustitúyase el artículo 73 de la Ley de Régimen Tributario Interno por el siguiente:

"Art. 73.- **Compensación presupuestaria del valor equivalente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado.-** El valor equivalente del IVA pagado en la adquisición local o importación de bienes y demanda de servicios la Junta de Beneficencia de Guayaquil, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Fe y Alegría, Sociedad de Lucha Contra el Cáncer -SOLCA-, Cruz Roja Ecuatoriana, Funda-

ción Oswaldo Loor y las universidades y escuelas politécnicas privadas, les será compensado vía transferencia presupuestaria de capital, con cargo al Presupuesto General del Estado, en el plazo, condiciones y forma determinados por el Ministerio de Finanzas y el Servicio de Rentas Internas. El Servicio de Rentas Internas verificará los valores pagados de IVA contra la presentación formal de la declaración y anexos correspondientes e informará al Ministerio de Finanzas, a efectos del inicio del proceso de compensación presupuestaria.

Lo previsto en el inciso anterior se aplicará a las agencias especializadas internacionales, organismos no gubernamentales y las personas jurídicas de derecho privado que hayan sido designadas ejecutoras en convenios internacionales, créditos de gobierno a gobierno o de organismos multilaterales tales como el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, siempre que las importaciones o adquisiciones locales de bienes o servicios se realicen con cargo a los fondos provenientes de tales convenios o créditos para cumplir los propósitos expresados en dichos instrumentos; y, que éstos se encuentren registrados previamente en el Servicio de Rentas Internas.

De detectarse falsedad en la información, se suspenderá el proceso de compensación presupuestaria y el responsable será sancionado con una multa equivalente al doble del valor con el que se pretendió perjudicar al fisco, sin perjuicio de las responsabilidades penales a que hubiere lugar, de conformidad con la Ley.

Los valores a devolverse no serán parte de los ingresos permanentes del Estado Central."

Artículo 8.- Sustitúyase el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 73 de la Ley de Régimen Tributario Interno, por el siguiente:

"Art. (...).- Asignación presupuestaria de valores equivalentes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado por los Gobiernos Autónomos Descentralizados y universidades y escuelas politécnicas públicas.- El valor equivalente al IVA pagado en la adquisición local e importación de bienes y demanda de servicios que efectúen los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las universidades y escuelas politécnicas públicas, le será asignado en el plazo, condiciones y forma determinados por el Ministerio de Finanzas. El Servicio de Rentas Internas verificará los valores pagados de IVA contra la presentación formal de la declaración y anexos correspondientes e informará al Ministerio de Finanzas, a efectos del inicio del proceso de asignación presupuestaria.

Los valores equivalentes al IVA pagado por los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las universidades y escuelas politécnicas públicas serán asignados vía transferencia presupuestaria

de capital, con cargo al Presupuesto General del Estado y el Ministerio de Finanzas los acreditará en la cuenta correspondiente.

Los valores a devolverse no serán parte de los ingresos permanentes del Estado Central."

Artículo 9.- Agréguese a continuación del artículo 75 de la Ley de Régimen Tributario Interno, el siguiente artículo:

"Art. (...).Formas de Imposición.- Para el caso de bienes y servicios gravados con ICE, se podrán aplicar los siguientes tipos de imposición según lo previsto en la Ley:

1 Específica.- Es aquella en la cual se grava con una tarifa fija a cada unidad de bien transferida por el fabricante nacional o cada unidad de bien importada, independientemente de su valor;

2 Ad valorem.- Es aquella en la que se aplica una tarifa porcentual sobre la base imponible determinada de conformidad con las disposiciones de la presente Ley; y,

3 Mixta.- Es aquella que combina los dos tipos de imposición anteriores sobre un mismo bien o servicio."

Artículo 10.- Sustitúyase el inciso sexto del artículo 76 de la Ley de Régimen Tributario Interno, por el siguiente texto:

"De manera específica, la base imponible en los casos de Cigarrillos y Bebidas alcohólicas incluida la cerveza será:

1. Cigarrillos

En este caso la base imponible será igual al número de cigarrillos producidos o importados a la que se aplicará la tarifa específica establecida en el artículo 82 de esta Ley.

2. Bebidas alcohólicas, incluida la cerveza

La base imponible se establecerá en función de:

1. Los litros de alcohol puro que contenga cada bebida alcohólica. Para efectos del cálculo de la cantidad de litros de alcohol puro que contiene una bebida alcohólica, se deberá determinar el volumen real de una bebida expresada en litros y multiplicarla por el grado alcohólico expresado en la escala Gay Lussac o su equivalente, que conste en el registro sanitario otorgado al producto, sin perjuicio de las verificaciones que pudiese efectuar la Administración Tributaria. Sobre cada litro de alcohol puro determinado de conformidad con este artículo, se aplicará la tarifa específica detallada en el artículo 82 de esta Ley; y,

2. En caso de que el precio ex fábrica o ex aduana, según corresponda, supere el valor de

USD 3,6 por litro de bebida alcohólica o su proporcional en presentación distinta a litro, se aplicará, adicionalmente a la tarifa específica, la tarifa ad valorem establecida en artículo 82 de esta Ley, sobre el correspondiente precio ex fábrica o ex aduana. Para dar cumplimiento con lo anterior, en el caso de bebidas alcohólicas importadas, el importador deberá contar con un certificado del fabricante, respecto del valor de la bebida, conforme las condiciones establecidas mediante Resolución del Servicio de Rentas Internas."

Artículo 11.- Elimínese del artículo 77 de la Ley de Régimen Tributario Interno, lo siguiente: "los vehículos híbridos;" y, agréguese al final del artículo el siguiente texto:

"También están exentos de este impuesto, las armas de fuego deportivas y las municiones que en éstas se utilicen, siempre y cuando su importación o adquisición local, se realice por parte de deportistas debidamente inscritos y autorizados por el Ministerio del Deporte o quien haga sus veces, para su utilización exclusiva en actividades deportivas, y cuenten con la autorización del Ministerio de Defensa o el órgano competente, respecto del tipo y cantidad de armas y municiones. Para el efecto, adicionalmente, deberán cumplirse con las condiciones y requisitos que se establezcan en el Reglamento.

Las armas de fuego deportivas son para uso exclusivo del deportista que accedió a este beneficio y por lo tanto, éstos no podrán venderlas o enajenarlas durante cinco años, previa autorización del Ministerio de Deporte y el Ministerio de Defensa, y bajo los requisitos y condiciones fijadas en el Reglamento, caso contrario la autoridad administrativa procederá a liquidar y cobrar inclusive por la vía coactiva la totalidad del impuesto exonerado.

Adicionalmente la venta o enajenación durante los cinco años, a los que se hace referencia en el inciso anterior y sin autorización previa otorgada por las autoridades competentes, por parte del deportista beneficiado de esta exoneración, constituirá un

caso especial de defraudación, sancionado conforme a las normas del Código Tributario."

Artículo 12.- En el artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno, realícense las siguientes reformas:

1. En los títulos de las tablas de los Grupos I, II, III y IV, luego de la palabra "TARIFA" añádase las palabras "AD VALOREM";
2. Del "Grupo I", elimínense los siguientes textos y valores: "Cigarrillos," "Cerveza", "30%", "Alcohol y productos alcohólicos distintos a la cerveza" y "40%";
3. Elimínese el inciso que se encuentra luego de la tabla del "Grupo I";
4. Antes del número 2 del "Grupo II", incorpórese la siguiente tabla y cámbiase el actual numeral "2." por el numeral "3.";

2. Vehículos motorizados híbridos o eléctricos de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas de carga, conforme el siguiente detalle:	
Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea de hasta USD 35.000	0%
Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior a USD 35.000 y de hasta USD 40.000	8%
Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior a USD 40.000 y de hasta USD 50.000	14%
Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior a USD 50.000 y de hasta USD 60.000	20%
Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior a USD 60.000 y de hasta USD 70.000	26%
Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior a USD 70.000	32%

5. A continuación de la tabla del Grupo IV, agréguese la siguiente tabla e incisos:

GRUPO V	TARIFA ESPECÍFICA	TARIFA AD VALOREM
Cigarrillos	0,08 USD por unidad	N/A
Bebidas alcohólicas, incluida la cerveza	6,20 USD por litro de alcohol puro	75%

La tarifa específica de cigarrillos se ajustará semestral y acumulativamente a mayo y a noviembre de cada año, en función de la variación de los últimos seis meses del índice de precios al

consumidor (IPC) para el grupo en el cual se encuentre el bien "tabaco", elaborado por el organismo público competente, descontado el efecto del incremento del propio impuesto. El

nuevo valor deberá ser publicado por el Servicio de Rentas Internas durante los meses de junio y diciembre de cada año, y regirán desde el primer día calendario del mes siguiente.

La tarifa específica de bebidas alcohólicas, incluida la cerveza, se ajustará anual y acumulativamente en función de la variación anual del Índice de precios al consumidor (IPC) para el grupo en el cual se encuentre el bien "bebidas alcohólicas", a noviembre de cada año, elaborado por el organismo público competente, descontado el efecto del incremento del propio impuesto. El nuevo valor deberá ser publicado por el Servicio de Rentas Internas en el mes de diciembre, y regirá desde el primero de enero del año siguiente."

Artículo 13.- Agréguese a continuación del Título Tercero correspondiente a "Impuestos a los Consumos Especiales" de la Ley de Régimen Tributario Interno, el siguiente Título:

"Título (...)

IMPUESTOS AMBIENTALES

CAPÍTULO I

IMPUESTO AMBIENTAL A LA CONTAMINACION VEHICULAR

Art. xxx.- Objeto Imponible.- Créase el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (IACV) que grava la contaminación del ambiente producida por el uso de vehículos motorizados de transporte terrestre.

Art. Xxx.- Hecho generador.- El hecho generador de este impuesto es la contaminación ambiental producida por los vehículos motorizados de transporte terrestre.

Art. xxx.- Sujeto Activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado ecuatoriano. Lo administrará a través del Servicio de Rentas Internas.

Art. xxx.- Sujeto Pasivo.- Son sujetos pasivos del IACV las personas naturales, sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, que sean propietarios de vehículos motorizados de transporte terrestre.

Art. xxx.- Exenciones.- Están exonerados del pago de este impuesto los siguientes vehículos motorizados de transporte terrestre:

1. Los vehículos de propiedad de las entidades del sector público, según la definición del artículo 225 de la Constitución de la República;

2. Los vehículos destinados al transporte público de pasajeros, que cuenten con el permiso para su operación, conforme lo determina la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;
3. Los vehículos de transporte escolar y taxis que cuenten con el permiso de operación comercial, conforme lo determina la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;
4. Los vehículos motorizados de transporte terrestre que estén directamente relacionados con la actividad productiva del contribuyente, conforme lo disponga el correspondiente Reglamento;
5. Las ambulancias y hospitales rodantes;
6. Los vehículos considerados como clásicos, conforme los requisitos y condiciones que se dispongan en el correspondiente Reglamento;
7. Los vehículos eléctricos; y,
8. Los vehículos destinados para el uso y traslado de personas con discapacidad.

Art. xxx.- Base Imponible y tarifa.- La base imponible de este impuesto corresponde al cilindraje que tiene el motor del respectivo vehículo, expresado en centímetros cúbicos, a la que se le multiplicará las tarifas que constan en la siguiente tabla:

No.	Tramo cilindraje – Automóviles y motocicletas	\$ / cc.
1	menor a 1.500 cc	0.00
2	1.501 - 2.000 cc.	0.08
3	2.001 - 2.500 cc.	0.09
4	2.501 - 3.000 cc.	0.11
5	3.001 - 3.500 cc	0.12
6	3.501 - 4.000 cc.	0.24
7	Más de 4.000 cc.	0.35

Art. Xxx.- Factor de Ajuste.- El factor de ajuste es un porcentaje relacionado con el nivel potencial de contaminación ambiental provocado por los vehículos motorizados de transporte terrestre, en relación con los años de antigüedad o la tecnología del motor del respectivo vehículo, conforme el siguiente cuadro:

No.	Tramo de Antigüedad (años) – Automóviles	Factor
1	menor a 5 años	0%
2	de 5 a 10 años	5%
3	de 11 a 15 años	10%
4	de 16 a 20 años	15%
5	mayor a 20 años	20%
6	Híbridos	-20%

Art. xxx.- Cuantía del Impuesto.- La liquidación de este impuesto la realizará el Servicio de Rentas Internas; para tal efecto, se aplicará la siguiente fórmula:

$$IACV = [(b - 1500) t] (1+FA)$$

Donde:

B = base imponible (cilindraje en centímetros cúbicos)

T = valor de imposición específica

FA = Factor de Ajuste

En ningún caso el valor del impuesto a pagar será mayor al valor correspondiente al 40% del avalúo del respectivo vehículo, que conste en la Base de Datos del Servicio de Rentas Internas, en el año al que corresponda el pago del referido impuesto.

Art. Xxx.- Pago.- Los sujetos pasivos de este impuesto pagarán el valor correspondiente, en las instituciones financieras a las que se les autorice recaudar este tributo, en forma previa a la matriculación de los vehículos, conjuntamente con el impuesto anual sobre la propiedad de vehículos motorizados. En el caso de vehículos nuevos, el impuesto será pagado antes de que el distribuidor lo entregue a su propietario.

Cuando un vehículo sea importado directamente por una persona natural o por una sociedad, que no tenga como actividad habitual la importación y comercialización de vehículos, el impuesto será pagado conjuntamente con los derechos arancelarios, antes de su despacho por aduana.

Art. Xxx.- Intereses.- El impuesto que no sea satisfecho en las fechas previstas en el reglamento, causará a favor del sujeto activo el interés por mora previsto en el artículo 21 del Código Tributario.

Art. Xxx.- Responsabilidad solidaria.- Quien adquiera un vehículo cuyo anterior propietario no

hubiere cancelado el impuesto a la contaminación ambiental vehicular por uno o varios años, será responsable por el pago de las obligaciones adeudadas, sin perjuicio de su derecho a repetir el pago del impuesto en contra del anterior propietario.

CAPÍTULO II

IMPUESTO REDIMIBLE A LAS BOTELLAS PLÁSTICAS NO RETORNABLES

Art. Xx.- Objeto del Impuesto.- Con la finalidad de disminuir la contaminación ambiental y estimular el proceso de reciclaje, se establece el Impuesto Ambiental a las Botellas Plásticas no Retornables.

Art. xx.- Hecho generador.- El hecho generador de este impuesto será embotellar bebidas en botellas plásticas no retornables, utilizadas para contener bebidas alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no gaseosas y agua. En el caso de bebidas importadas, el hecho generador será su desaduanización.

Art. Xx.- Tarifa.- Por cada botella plástica gravada con este impuesto, se aplicará la tarifa de hasta dos centavos de dólar de los Estados Unidos de América del Norte (0,02 USD), valor que se devolverá en su totalidad a quien recolecte, entregue y retorne las botellas, para lo cual se establecerán los respectivos mecanismos tanto para el sector privado como público para su recolección, conforme disponga el respectivo reglamento.

El SRI determinará el valor de la tarifa para cada caso concreto.

Art. xx.- Sujeto Activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a través del Servicio de Rentas Internas.

Art.-xx.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos de este impuesto:

1. Los embotelladores de bebidas contenidas en botellas plásticas gravadas con este impuesto; y,
2. Quienes realicen importaciones de bebidas contenidas en botellas plásticas gravadas con este impuesto.

Art. Xx.- Exoneraciones.- Se encuentra exento del pago de este impuesto el embotellamiento de productos lácteos y medicamentos en botellas de plástico no retornables.

Art.-xx.- Declaración y pago del impuesto.- Los sujetos pasivos de este impuesto, declararán las operaciones gravadas con el mismo, dentro del mes subsiguiente al que las efectuó, en la forma y fecha que se establezcan mediante reglamento.

Para la liquidación del impuesto a pagar, el contribuyente multiplicará el número de unidades embotelladas o importadas por la correspondiente tarifa, valor del cual descontará el número de botellas recuperadas, multiplicado por la respectiva tarifa impositiva.

El impuesto liquidado deberá ser pagado en los plazos previstos para la presentación de la declaración.

En el caso de importaciones, la liquidación de este Impuesto se efectuará en la declaración de importación y su pago se realizará previo al despacho de los bienes por parte de la oficina de aduanas correspondiente.

Art. Xx.- No deducibilidad.- *Por la naturaleza de este impuesto, el mismo no será considerado como gasto deducible para la liquidación del impuesto a la renta.*

Art. Xx.- Facultad determinadora.- *La Administración Tributaria ejercerá su facultad determinadora sobre este impuesto cuando corresponda, de conformidad con el Código Tributario y demás normas pertinentes.*

Art. Xx.- Glosario.- *Para efectos de esta ley, se deberá tomar en cuenta los siguientes términos:*

Botellas plásticas: Se entenderá por aquellas a los envases elaborados con polietileno tereftalato, que es un tipo de plástico muy usado en envases de bebidas y textiles. Químicamente el polietileno tereftalato es un polímero que se obtiene mediante una reacción de policondensación entre el ácido tereftálico y el etilenglicol.

Botellas plásticas no retornables: Son aquellas que no pueden volver a ser utilizadas después de haber sido consumido su contenido."

Artículo 14.- *Agréguese a continuación del número 15 del artículo 97.3 de la Ley de Régimen Tributario, el siguiente número:*

"16. De naturaleza agropecuaria, contempladas en el artículo 27 de esta Ley."

Artículo 15.- *Sustitúyase el artículo 118 de la Ley de Régimen Tributario Interno, por el siguiente texto:*

"Art.- 118.- Prohibición.- Prohíbese la tenencia de todo producto gravado con ICE, con el fin de comercializarlos o distribuirlos, cuando sobre ellos no se haya cumplido con la liquidación y pago del ICE en su proceso de fabricación o desaduanización, según corresponda, o cuando no cumplan con las normas requeridas, tales como: sanitarias, calidad, seguridad y registro de marcas.

El Ministerio del Interior dirigirá los operativos de control, para lo que contará con el apoyo de funcionarios de los organismos de control

respectivos, quienes dispondrán, dentro del ámbito de sus competencias, las sanciones administrativas que correspondan."

Artículo 16.- *Agréguese a la Ley de Régimen Tributario Interno, las siguientes Disposiciones Transitorias:*

"DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- *La tarifa específica de ICE por litro de alcohol puro, para el caso de bebidas alcohólicas, contemplada en la reforma al Art. 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno, se aplicará de forma progresiva en los siguientes términos:*

- 1. Durante el ejercicio fiscal 2011, la tarifa específica por litro de alcohol puro será de 5,80 USD.*
- 2. Durante el ejercicio fiscal 2012, la tarifa específica por litro de alcohol puro será de 6,00 USD.*
- 3. A partir del ejercicio fiscal 2013, la tarifa específica por litro de alcohol puro será de 6,20 USD, la cual se ajustará anual y acumulativamente a partir del 2014 en función de la variación anual del Índice de precios al consumidor (IPC) para el grupo en el cual se encuentre el bien "bebidas alcohólicas", a noviembre de cada año, de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno.*

El SRI podrá verificar a noviembre de 2011 y a noviembre de 2012, según corresponda, que las tarifas específicas correspondientes a los años 2012 y 2013 no sean inferiores al valor resultante de incrementar a la tarifa específica correspondiente a los años 2011 y 2012, respectivamente, la variación anual acumulada correspondiente a dichos años, del índice de precios al consumidor (IPC) para el grupo en el cual se encuentre el bien "bebidas alcohólicas".

Si el resultado de dichas operaciones es superior a la tarifa específica del ICE por litro de alcohol puro para el año 2012 y 2013, respectivamente, el Servicio de Rentas Internas, publicará dichos valores que se convertirán en el ICE específico por litro de alcohol puro a aplicarse en dichos años.

SEGUNDA.- *Los vehículos de transporte terrestre de motor mayor a 2500 centímetros cúbicos y, de una antigüedad de más de 5 años, contados desde el respectivo año de fabricación del vehículo, tendrán una rebaja del 80% del valor del correspondiente impuesto a la contaminación vehicular a pagar, durante 3 años contados a partir del ejercicio fiscal en el que se empiece a aplicar este impuesto. Durante los años cuarto y quinto, la rebaja será del 50%."*

TERCERA.- *El gobierno central implementará un programa de chatarrización y renovación vehicular*

generando incentivos para los dueños de vehículos de mayor antigüedad y cilindraje conforme lo determine el respectivo reglamento.

Artículo 17.- Sustitúyanse los incisos tercero y cuarto del artículo 156 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, por los siguientes textos:

“Todo pago efectuado desde el exterior por personas naturales o sociedades ecuatorianas o extranjeras domiciliadas o residentes en el Ecuador, se presume efectuado con recursos que causen el ISD en el Ecuador, aún cuando los pagos no se hagan por remesas o transferencias, sino con recursos financieros en el exterior de la persona natural o la sociedad o de terceros.

También se presumirá haberse efectuado la salida de divisas, causándose el correspondiente impuesto, en el caso de exportaciones de bienes o servicios generados en el Ecuador, efectuadas por personas naturales o sociedades domiciliadas en Ecuador, que realicen actividades económicas de exportación, cuando las divisas correspondientes a los pagos por concepto de dichas exportaciones no ingresen al Ecuador. En este caso, al impuesto causado en las divisas no ingresadas, se podrá descontar el valor del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) generado en pagos efectuados desde el exterior, referidos en el párrafo anterior. El pago del ISD definido en este párrafo, se efectuará de manera anual, en la forma, plazos y demás requisitos que mediante resolución de carácter general establezca el Servicio de Rentas Internas.”

Artículo 18.- Al final del artículo 159 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, agréguese el siguiente inciso:

“De igual manera, están exonerados del pago del Impuesto a la Salida de Divisas, los pagos realizados al exterior, por concepto de dividendos distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en el Ecuador, después del pago del impuesto a la renta, a favor de otras sociedades extranjeras o de personas naturales no residentes en el Ecuador, siempre y cuando, la sociedad o la persona natural –según corresponda– no esté domiciliada en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición. No se aplicará esta exoneración cuando los dividendos se distribuyan a favor de sociedades extranjeras de las cuales, a su vez, sean accionistas las personas naturales o sociedades residentes o domiciliadas en el Ecuador, que son accionistas de la sociedad domiciliada en Ecuador que los distribuye.”

Artículo 19.- En el artículo 162 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, sustitúyase “2%” por “5%”.

Artículo 20.- Agréguese a continuación del artículo 162 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, el siguiente artículo innumerado:

“Art. (...).- Crédito Tributario.- Podrá ser utilizado como crédito tributario, que se aplicará para el pago del impuesto a la renta del propio contribuyente, de los 5 últimos ejercicios fiscales, los pagos realizados por concepto de impuesto a la salida de divisas en la importación de las materias primas, insumos y bienes de capital con la finalidad de que sean incorporados en procesos productivos.

Las materias primas, insumos y bienes de capital a los que hace referencia este artículo, serán los que consten en el listado que para el efecto establezca el Comité de Política Tributaria.”

Artículo 21.- Elimínese el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 168 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador.

Artículo 22.- A continuación del artículo 181 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, agréguese el siguiente artículo:

“Art. (...).- Crédito Tributario.- Podrá ser utilizado como crédito tributario, que se aplicará para el pago del Impuesto a las Tierras Rurales del ejercicio económico corriente, los pagos realizados por concepto de programas de forestación o reforestación en cada uno de sus predios, aprobados por el Ministerio del Ambiente. De verificarse el incumplimiento de estos proyectos, en cuanto a su ejecución o inexactitud en cuanto a su cuantía, el Servicio de Rentas Internas procederá a ejercer su facultad determinadora y al cobro inmediato, por vía coactiva, de los valores correspondientes al tributo, más intereses, multas y un recargo adicional del 20% sobre el valor con el que se pretendió perjudicar al Fisco, sin perjuicio de las acciones penales por defraudación, a que hubiere lugar, de conformidad con la Ley. Los programas de forestación o reforestación deberán ejecutarse hasta la fecha señalada en el Reglamento para la aplicación de este impuesto.”

Artículo 23.- Sustitúyase el título del capítulo II de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, que dice “DEL DIRECTORIO” por “El Comité de Política Tributaria”; así como también el artículo 3 por el siguiente texto:

“Art. 3.- El Comité de Política Tributaria es la máxima instancia interinstitucional encargada de la definición y lineamientos de aspectos de política tributaria. Estará integrado por: el Ministro a cargo de la Política Económica, o su delegado, quien lo presidirá; el Ministro a cargo de las Finanzas, o su delegado, El Ministro a cargo de la Producción, o su delegado y el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, o su delegado; y el Director del Servicio de Rentas Internas, quien concurrirá con voz y sin derecho a voto; y estará a cargo de la secretaría del Comité.”

Artículo 24.- Elimínese en el número 8 del artículo 2 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, lo

siguiente: “, previa autorización del Directorio y con sujeción a la Ley”.

Artículo 25.- Sustitúyase el artículo 4 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, por el siguiente texto:

“Art. 4.- FUNCIONES DEL COMITÉ DE POLÍTICA TRIBUTARIA.- El Comité tendrá las siguientes funciones:

1. *Definir los lineamientos de política tributaria para el Servicio de Rentas Internas, en armonía con las normas constitucionales, legales y políticas de gobierno.*
2. *Conocer los proyectos de ley y reglamentos tributarios que presente el Director General del Servicio de Rentas Internas y disponer los correctivos a que hubiere lugar, en la evaluación de la ejecución de política tributaria.*
3. *Conocer y aprobar la proforma presupuestaria del Servicio de Rentas Internas presentada por el Director General.*
4. *Conocer los informes presentados por el Auditor del Servicio de Rentas Internas.”*

Artículo 26.- Sustitúyanse los números 2, 7, 10, 14, 15 y 17 del artículo 7 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, por los siguientes textos; así como también agréguense los siguientes números:

“2.- Ejecutar la política tributaria definida por el Comité de Política Tributaria”;

7.- Disponer la Elaboración del Reglamento Orgánico Funcional, el Estatuto Especial de Personal y los demás que se requieren para la adecuada marcha de la entidad, así como sus reformas, y aprobarlos de conformidad con la Ley;

10.- Formular la Proforma de Presupuesto del Servicio de Rentas Internas y someterla a la aprobación del Comité de Política Tributaria previo a remitirlo al Ministerio de Finanzas.

14.- Presentar al Comité de Política Tributaria, los informes trimestrales de labores, de ejecución de la política tributaria y de seguimiento de los planes y programas del Servicio de Rentas Internas;

15.- Designar a los Directores del Servicio de Rentas Internas y a los miembros de los comités tributarios internos;

17. Solicitar a la Contraloría General del Estado, la designación del auditor interno para el Servicio de Rentas Internas;

18. Conocer en audiencia los planteamientos, inquietudes, sugerencias o reclamos que planteen los representantes de las Cámaras de la Producción, gremios profesionales, de trabajadores

o de cualquier grupo organizado de contribuyentes y canalizarlos para su debida atención; y,

19. Velar por la ágil atención a los contribuyentes.”

Artículo 27.- Sustitúyase del artículo 9 la palabra “Directorio” por: “Director del Servicio de Rentas Internas”.

DISPOSICIÓN GENERAL

Primera.- En el caso de cigarrillos no se podrá establecer como Precio de Venta al Público sugerido un valor menor a la tarifa específica de Impuesto a los Consumos Especiales detallada en el artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- También podrán acogerse a lo establecido en la Disposición Transitoria Vigésimo Segunda del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, los inmuebles ubicados en otras zonas del país que -de acuerdo a los informes técnicos que para el efecto deberá realizar el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y el Ministerio de Ambiente- se encuentren en similares condiciones geográficas y de productividad que aquellos que se encuentren en la Región Amazónica y que se detallen en el respectivo Decreto Ejecutivo que emita el Presidente de la República. Para la elaboración del informe técnico por parte de la referida Cartera de Estado, se contará con el informe previo de impacto fiscal del Servicio de Rentas Internas. En estos casos, la base desgravada será aplicable desde el correspondiente ejercicio fiscal en el que se expida el mencionado Decreto Ejecutivo.

Segunda.- El impuesto redimible ambiental a las botellas plásticas no retornables, se aplicará a partir del 1 de enero del 2012 y su devolución será conforme a lo que determine el reglamento.

Tercera.- Para los ejercicios fiscales 2010 y 2011, el plazo para la declaración y pago del Impuesto a las Tierras Rurales se amplía hasta el 31 de diciembre de 2011. Los sujetos pasivos que hubieren cancelado intereses y multas por concepto de Impuesto a las Tierras Rurales correspondiente a los ejercicios fiscales 2010 y 2011, hasta la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, tendrán derecho a devolución de estos valores por pago indebido, conforme lo dispuesto en el Código Tributario, sin que proceda el cálculo de intereses sobre los valores devueltos por estos conceptos.

DISPOSICIONES PARA EL COBRO EFICIENTE DE LAS ACREENCIAS DEL ESTADO

Primera: Agréguese en el artículo 457 del Código de Procedimiento Civil, el siguiente inciso:

“En los procesos de remate que se lleven a cabo en la jurisdicción coactiva, los postores deberán ser calificados con 15 días de anticipación a la realización del remate, en base a la solvencia

económica y experiencia en el negocio. Además de que se podrá aceptar posturas en las cuales se fijen a plazos de hasta ocho años para el caso de bienes inmuebles y de tres para los bienes muebles, siempre y cuando se ofrezca el pago de, por lo menos, el interés legal, pagadero por anualidades adelantadas y que el capital se pague anualmente en cuotas iguales durante el plazo.”

Segunda: Sustitúyanse del artículo 458 del Código de Procedimiento Civil, las palabras: “*las catorce horas hasta las dieciocho horas*”, por “*las trece horas hasta las diecisiete horas*”.

Tercera: Agréguese al final del artículo 942 del Código de Procedimiento Civil, el siguiente texto:

“Los servidores o servidoras recaudadores mencionados en este artículo tendrán la calidad de Jueces Especiales, denominándoselos Jueces de Coactiva.”

Cuarta: Sustitúyase el primer y tercer inciso del artículo 968 del Código de Procedimiento Civil, por los siguientes textos:

“Serán admisibles las excepciones que se deduzcan en juicio coactivo.”

“Para que el trámite de las excepciones suspenda la ejecución coactiva, será necesaria la consignación de la cantidad a que asciende la deuda, sus intereses y costas, aún en el caso de que dichas excepciones propuestas versaren sobre falsificación de documentos o sobre prescripción de la acción.”

Quinta: Elimínese el segundo inciso del artículo 969 del Código de Procedimiento Civil.

Sexta: Sustitúyase el artículo 971 del Código de Procedimiento Civil, por el siguiente texto:

“Si el deudor no acompaña a su escrito de excepciones la prueba de consignación, no se suspenderá el procedimiento coactivo y el juicio de excepciones seguirá de esa forma.”

Séptima: Agréguese al final del artículo 976 del Código de Procedimiento Civil, el siguiente texto:

“De no haberse suspendido la ejecución coactiva, la sentencia ordenará la cancelación del procedimiento coactivo, o la reparación integral al actor, de haber concluido aquel.”

Octava: Agréguese al final del artículo 977 del Código de Procedimiento Civil, el siguiente texto:

“La apelación se concederá en el efecto devolutivo.”

Novena: Sustitúyase el artículo 978 del Código de Procedimiento Civil, por el siguiente texto:

“Art. 978.- Si el juicio en que se discuten las excepciones, se suspendiere por treinta días hábiles o el actor no presenta ningún escrito o petición durante este plazo, antes de la sentencia de primera o segunda instancia, de tribunales contenciosos administrativos o de casación, el juicio quedará terminado a favor de la institución acreedora o de quien sus derechos represente.”

Décima: Agréguese al Código de Procedimiento Civil, la siguiente Disposición Transitoria:

“Disposición Transitoria: De conformidad con lo establecido en el Art.968 inciso tercero del Código de Procedimiento Civil, en aquellas demandas o juicios de excepciones presentados con anterioridad a la vigencia de esta reforma, se da un plazo improrrogable e inmediato de 10 días para que los deudores, sus herederos, fiadores o más obligados, cumplan en consignar el dinero que hace referencia el Art. 968 inciso tercero del Código de Procedimiento Civil, sin que en ningún caso, esta disposición sea motivo para declarar nulidad procesal, presentar recurso o acción alguna.

Cumplido el plazo establecido en la disposición transitoria anterior, se les otorga a los Juzgadores o Juzgadoras de primera o segunda instancia, Tribunales Contenciosos Administrativos o de casación, el término de veinticuatro horas improrrogables, para ordenar la conclusión, que se oficie al Juzgado de Coactiva y se disponga el archivo del proceso; y, en el mismo término de veinticuatro horas las Secretarías y Secretarios, para notificar lo resuelto al funcionario competente de la Institución de origen (Juzgado de Coactiva) y archivar el proceso.

Los Juzgadores o Juzgadoras de los distintos niveles, Secretarías y Secretarios, que no cumplan con las obligaciones contenidas en esta disposición serán inmediatamente destituidos de sus funciones por el Consejo Nacional de la Judicatura.

Esta reforma al Código de Procedimiento Civil, será aplicable para todas las leyes que contienen normativa en materia de coactiva e incluso en los procesos que se encuentren en la Corte Nacional de Justicia y que no medie sentencia ejecutoriada.”

DISPOSICIÓN REFORMATORIA PRIMERA

Sustitúyase el artículo 94 de la Ley de Hidrocarburos por el siguiente texto:

“Art. 94.- Participación Laboral.- En el caso de los trabajadores vinculados a la actividad hidrocarburífera, éstos recibirán el 3% del porcentaje de utilidades y el 12% restante será pagado al Estado y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados que lo destinarán a proyectos de inversión social y de desarrollo territorial en las

áreas en donde se lleven a cabo actividades hidrocarburíferas. Dichos proyectos deberán ser armonizados con el Plan Nacional de Desarrollo.

Las inversiones que realicen los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán ser canalizadas a través del Banco del Estado para que efectúe los desembolsos correspondientes."

DISPOSICIÓN REFORMATORIA SEGUNDA

Sustitúyase el artículo 67 de la Ley de Minería por el siguiente texto:

"Art. 67.- Obligaciones Laborales.- Las obligaciones de orden laboral contraídas por los titulares de derechos mineros con sus trabajadores, serán de exclusiva responsabilidad y de ninguna manera se harán extensivas al Estado. En el caso de los trabajadores vinculados a la actividad minera, éstos recibirán el 3% del porcentaje de utilidades y el 12% restante será pagado al Estado y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados que lo destinarán a proyectos de inversión social y de desarrollo territorial en las áreas en donde se lleven a cabo actividades mineras. Dichos proyectos deberán ser armonizados con el Plan Nacional de Desarrollo.

Para el caso de los trabajadores de la pequeña minería será del 10% del porcentaje de utilidades y el 5% restante será pagado al Estado y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados que lo destinarán a proyectos de inversión social y de desarrollo territorial en las áreas en donde se lleven a cabo actividades mineras.

Las inversiones que realicen los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán ser canalizadas a través del Banco del Estado para que efectúe los desembolsos correspondientes."

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial.

Rúbrica.- Ilegible.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MIRA

Considerando:

Que, el Art. 253 de la Constitución de la República del Ecuador, dice: "Cada cantón tendrá un Concejo Cantonal, que estará integrado por la Alcaldesa o Alcalde y las concejales y concejales elegidos por votación popular, entre quienes se elegirá una vicealcaldesa o vicealcalde. La

Alcaldesa o Alcalde será su máxima autoridad administrativa y lo presidirá con voto dirimente. En el Concejo estará representada proporcionalmente a la población cantonal urbana y rural, en los términos que establezca la ley";

Que, el Art. 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD, señala: "Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera";

Que, el Art. 201 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, establece que las entidades y organismos del sector público pueden establecer fondos fijos de caja chica en dinero en efectivo, con la finalidad de atender pagos urgentes de menor cuantía;

Que, la administración de los recursos destinados a esta clase de egreso requiere de una reglamentación especial que recogiendo las normas generales de las disposiciones legales pertinentes, permita una ágil y oportuna atención a las necesidades municipales urgentes; y,

En uso de las facultades conferidas por el Art. 264 de la Constitución de la República y Art. 57, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD,

Expide:

"La reforma al Reglamento para el manejo y reposición de los fondos fijos de caja chica del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mira".

Art. 1.- El empleador encargado del manejo y reposición del fondo fijo de caja chica se regirá por lo dispuesto en el Art. 201 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control; por las normas técnicas de control interno números 121-01 a la 121-03; así como lo presupuestado en el Reglamento de Fondo de Caja Chica, expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 464, publicado en el Registro Oficial No. 13 del 29 de agosto de 1979.

Art. 2.- Se establece el fondo de caja chica por la cantidad de mil dólares (USD 1.000,00). La Secretaria General del Concejo o la persona que delegue la máxima autoridad, administrará los recursos de caja chica con sujeción a las normas del presente reglamento.

Art. 3.- El fondo de caja chica, solo podrá ser utilizado para satisfacer compromisos de gastos y pagos aplicados a las partidas presupuestarias correspondientes a los grupos de servicios, suministros y materiales, de bienes muebles e imprevistos.

Art. 4.- El valor máximo permitido que se puede pagar con cargo al fondo de caja chica es de treinta dólares (USD 30,00) siempre que el gasto sea imperioso y prioritario para quien solicita el egreso; caso contrario, el pago deberá hacerse mediante transferencia interbancaria a nombre del beneficiario.